

La «intergubernamentalidad» neoliberal y la politización de la UE: la transformación de los campos políticos nacionales y los nuevos europeísmos

Neoliberal Intergovernmentality and the Politicization of the EU: The Transformation of National Political Fields and the New Pro-Europeanism

Luis Bouza García y Álvaro Oleart

Palabras clave

COVID-19

- Esfera pública europea
- Europeización
- Integración europea
- Neoliberalismo
- Unión Europea

Key words

COVID-19

- European Public Sphere
- Europeanization
- European Integration
- Neoliberalism
- European Union

Resumen

La década de 2010, iniciada con la crisis financiera, continuada con la de los refugiados y culminada con la del coronavirus en 2020, ha consolidado los enfoques teóricos en torno al campo político europeo como algo más que un entorno diplomático en el que gobiernos nacionales negocian políticas comunes. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha dado lugar a una respuesta más rápida y decisiva que las anteriores, movilizándose una cantidad de recursos sin precedentes y construyendo nuevos consensos a un ritmo no contemplado anteriormente. El artículo plantea desde la sociología política que las recientes crisis europeas revelan una transformación en las formas de ejercicio de la política que llamamos «intergubernamentalidad», un proceso compatible con la transformación de los campos políticos nacionales a través de la politización de la UE.

Abstract

The 2010s, which began with the financial crisis, was followed by the refugee crisis and culminated with the coronavirus pandemic in 2020. These political crises have consolidated theoretical approaches to the European political field, conceived as much more than a mere diplomatic environment in which national governments negotiate common policies. The coronavirus crisis, however, resulted in a faster, more decisive response than the previous two crises, mobilizing an unprecedented number of resources and building new consensus at a previously unforeseen rate. This article uses a political sociology perspective to examine the European response to several recent internal and external crises, revealing a transformation in the way in which politics operates that we conceive as “intergovernmentality”, a process that is compatible with the transformation of national political fields through the politicization of the EU.

Cómo citar

Bouza García, Luis; Oleart, Álvaro (2023). «La “intergubernamentalidad” neoliberal y la politización de la UE: la transformación de los campos políticos nacionales y los nuevos europeísmos». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 3-20. (doi: 10.5477/cis/reis.183.3)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Luis Bouza García: Universidad Autónoma de Madrid | luis.bouza@uam.es

Álvaro Oleart: Université Libre de Bruxelles | alvaro.oleart@ulb.be

INTRODUCCIÓN¹

Si la modernidad liberal tal como la concibe Foucault era un proyecto de construcción de mecanismos de orden y control (Fraser, 2003: 160), la pandemia COVID-19 proporciona un ejemplo nítido de la vulnerabilidad de las sociedades europeas a los riesgos asociados con la nueva modernidad (Beck, 1998; Alemanno, 2012): la destrucción de ecosistemas parece acelerar los procesos de zoonosis, y la interdependencia económica y social transforman un brote local en una crisis de alcance global que señala claramente las nuevas desigualdades en la gestión del riesgo —desigual exposición a la enfermedad, desiguales efectos económicos y desigual acceso a la vacuna—. La crisis de la COVID-19 parece darle la razón a Beck al demostrar los límites de los sistemas de control social de la modernidad clásica, y la UE ha parecido responder desde nuevas formas de gestión compartida del riesgo. Pero la gestión de las vulnerabilidades por parte de la UE, tal y como se ha ejemplificado durante la pandemia, supone menos un proyecto posmoderno de renuncia al control de los riesgos y más bien un proyecto neoliberal de reconstrucción de una particular versión de la «modernidad». Esta reconstrucción se realiza en un contexto de competencia global entre múltiples modernidades caracterizadas por diferentes equilibrios respecto al riesgo, límites entre Estado y mercado, y referencias a distintos valores políticos y sociales (Delanty, 2013). En este sentido, el plan de recuperación y modernización de la economía «Next Generation EU», acordado en julio de 2020, supone no solo una movilización inaudita de recursos presu-

puestarios, sino que seguramente implicará una mayor europeización de la regulación de los sectores de la nueva economía ofreciendo un terreno para nuevas formas de (des)regulación, de gestión de la información y de los procesos nacionales de reformas.

El crecimiento de grandes corporaciones tecnológicas en el mercado europeo, y la creciente discusión regulatoria en Bruselas en torno a ellas, permite anticipar el efecto del debate sobre las nuevas tecnologías para la gobernanza de la UE. Cuestiones como la precariedad laboral de los *riders* de Deliveroo, los efectos de la competencia de Uber en el sector del transporte urbano, o los efectos de las criptomonedas sobre la estabilidad financiera, son interpretadas habitualmente como un ejemplo de la presión de la economía global sobre la regulación estatal. Sin embargo, se enfatiza menos el consenso emergente sobre la capacidad y la necesidad de regular dichos asuntos a escala europea. Dicho consenso puede interpretarse desde el enfoque de la gubernamentalidad (Foucault, 2009); al demostrar su capacidad de regular las nuevas tecnologías y orientar su uso, las instituciones europeas estarían al mismo tiempo fomentando la modernización de las economías europeas para dar respuesta al cambio social y extendiendo su capacidad de intervención en nuevos sectores y mediante nuevas técnicas. Pero, a pesar de este consenso emergente en torno a la regulación europea desde la gubernamentalidad, podemos observar dinámicas contradictorias que operan al mismo tiempo: mientras que algunos actores pretenden tratar temas sensibles en el plano europeo de forma tecnocrática, otros contribuyen a la creciente politización de la UE en el debate político nacional.

El objeto de este artículo es contribuir al debate ontológico sobre los efectos de la pandemia en la naturaleza del proyecto europeo como premisa para entender sus preexistentes transformaciones, e introducir el

¹ Nos gustaría agradecer a los revisores anónimos sus comentarios críticos y constructivos que nos han ayudado a mejorar el artículo. Asimismo, agradecemos el apoyo de la red Jean Monnet «OpenEUdebate: Matching politics with policy» (Jean Monnet—Erasmus REF: 600465-EPP-1-2018-1-ES-EPPJMO-NETWORK), coordinada por Elena García-Gutián desde la Universidad Autónoma de Madrid.

concepto de «intergubernamentalidad». Esto no significa que haya faltado una innovación teórica desde la sociología política en los estudios europeos, pues desde el principio del siglo XXI se han desarrollado propuestas relevantes sobre la UE como imperio poscolonial (Bhambra, 2022), como esfera pública, como proceso de transformación constitucional o espacio de gubernamentalidad neoliberal. Autores como Zielonka (2007) y Aro y Heiskala (2018) han caracterizado este proceso como la emergencia de un imperio neomedieval en el cual la convergencia de una profunda integración socioeconómica, de técnicas de gobierno neoliberal y, al mismo tiempo, la celosa defensa de los Estados de las herramientas de producción del vínculo nacional (seguridad social, educación y comunicación) configuran un modelo complejo de gobernanza cada vez menos explícitamente jerárquica y compartimentalizada. Nos encontraríamos pues ante las contradicciones de un proyecto neoliberal hegemónico en el plano transnacional (Apeldoorn, Drahoukoupil y Horn, 2008; Bickerton, 2012), la compleja pero flexible gobernanza de la interdependencia política entre Estados, y la creciente politización y consiguiente contestación de la UE en el plano nacional (Hooghe y Marks, 2009), sin que por ello se produzca una transformación significativa de las políticas públicas europeas (Trenz, 2016). Esto se puede explicar desde la escisión entre la elaboración transnacional de «políticas sin política» a nivel europeo, y unas políticas públicas nacionales cada vez más limitadas (Schmidt, 2006), con tendencia a concentrarse en la reproducción simbólica de la nación y menos en la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, con frecuencia algunos de estos enfoques se han limitado a conceptualizar el espacio político transnacional e intergubernamental, ignorando algunos de los procesos de transformación a nivel doméstico.

El postulado del artículo es que la respuesta europea a la policrisis de la década de 2010 refleja fundamentalmente una in-

corporación diferenciada de estructuras, procesos y actores nacionales a un campo político —burocrático europeo caracterizado por una política consensual y de reactividad horizontal—, mientras que la política contenciosa —temas europeos incluidos— queda concentrada en la esfera política nacional. No obstante, al mismo tiempo, la crisis de la pandemia o la guerra en Ucrania también reflejan transformaciones emergentes que están teniendo lugar, al conectar de forma más cercana la política contenciosa nacional con la consensual europea y, sin embargo, refuerzan la dinámica intergubernamental de la UE. Estos son procesos preexistentes a la pandemia, pero que se han acelerado a causa de ella, y han desembocado también a nivel externo en una unión más estrecha a la hora de abordar la invasión rusa de Ucrania principalmente mediante acuerdos intergubernamentales.

Tras esta introducción, presentamos un enfoque sobre cómo la pandemia ha acelerado un consenso político inimaginable en anteriores crisis sobre la necesidad de responder desde el nivel europeo (Middelaar, 2018). Desarrollamos tal perspectiva desde tres ejes de la sociología política del proceso de integración europeo: la autonomización de la política europea y la «intergubernamentalidad» neoliberal; la transformación de las esferas públicas europeas y la construcción de una «sociedad civil europea»; y la politización de la UE en la política nacional y las resistencias a Europa. Una vez analizados estos tres ejes, sugerimos cuál será el efecto de la pandemia sobre el futuro de la integración europea y proponemos una serie de escenarios de reconfiguración de los campos políticos nacionales en función de la creciente politización de la UE. Concluimos el artículo dando algunas claves que nos ayudan a entender la transformación de los campos políticos nacionales y la creciente «intergubernamentalidad» transnacional tanto de forma interna como externa.

LA INTEGRACIÓN EUROPEA DESDE LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA: LA «INTERGUBERNAMENTALIDAD»

Una característica central de los enfoques sociológicos es que no sitúan a las instituciones europeas en el centro del mecanismo explicativo, sino que analizan el papel de los actores políticos y sociales definiendo la integración europea como un proceso de «institucionalización de grupos amplios o reducidos mediante confrontaciones políticas que tienen como objetivo definir y reproducir principios legítimos de dominación» (Kauppi, 2018: 51).

En una perspectiva aún más amplia, la integración social europea tiene que ver con los efectos de la reorganización de la estructura social como resultado de las nuevas divisiones del trabajo en Europa (Trenz, 2009: 196). La integración social de Europa sería, pues, un proceso más o menos espontáneo que surge de procesos de reorganización de la división social del trabajo que integran a sociedades bastante diferentes en torno a intereses objetivamente compartidos. Este proceso afecta a las solidaridades mecánicas existentes en el seno de las sociedades europeas y a las solidaridades orgánicas articuladas por los propios Estados (Trenz, 2009) mediante una integración negativa —que consiste habitualmente en la eliminación de barreras y trabas nacionales— al tiempo que genera nuevas solidaridades en forma de integración positiva.

Además de ofrecer una explicación alternativa sobre la naturaleza del proyecto europeo, conectamos la literatura de la sociología política con la literatura sobre la integración europea y la politización de la UE. Una de las contribuciones más significativas de este enfoque es que permite plantear una serie de interrogantes teóricos novedosos sobre la relación entre fenómenos abordados de manera separada: las estrategias de los actores institucionales y la (inter)gubernamentalidad, el funcionamiento de la esfera pública, y la politización de la UE.

La autonomía de la política europea y la «intergubernamentalidad» neoliberal

La autonomía de la política europea y la «intergubernamentalidad» neoliberal

El giro sociológico en los estudios europeos que podríamos agrupar como la escuela de Estrasburgo (Kauppi, 2018: 4) ha permitido problematizar la intuición de que las instituciones de Bruselas funcionan como una burbuja con dinámicas propias. A pesar de que la sociología y la antropología política llevan ocupándose de las dinámicas sociales específicas producidas por la integración europea, no es hasta la década de 2010, fruto seguramente de la policrisis de la UE (Guiraudon, Ruzza y Trenz, 2016), cuando estos trabajos tradicionalmente centrados en las dinámicas de poder en las instituciones europeas empiezan a ofrecer una explicación de mayor alcance sobre la integración social en la UE. La noción de campo social es un elemento central de estos enfoques, en la medida en que su lógica de investigación se centra en explicar la dinámica de la integración europea a partir de procesos de autonomización de actores y relaciones sociales, y a la competencia por recursos específicos movilizándolo capitales que adquieren un valor específico en el plano transnacional. Aunque dicha noción se asocia con la sociología de Pierre Bourdieu, no en vano buena parte de los autores que contribuyen a este giro sociológico son franceses, el concepto de campo también cobra importancia en el neoinstitucionalismo —para Powell y DiMaggio el isomorfismo institucional opera en un campo organizacional— y los estudios de política contenciosa. En este último sentido uno de los intentos más notables de integración de enfoques sociológicos e institucionalistas es fruto del trabajo de Fligstein y McAdam (2012). Siguiendo la creciente ambición teórica de la sociología política de la UE, al tiempo que la mayor atención a las políticas públicas y la protesta social del

enfoque de Fligstein y McAdam, utilizamos el concepto de campo político europeo para describir la creciente interacción entre las dinámicas políticas nacionales y la europea, así como los patrones de cooperación y competición en un contexto más politizado, con especial atención a la relación entre los procesos de europeización, por un lado, y de reforzamiento del rol de los gobiernos nacionales, por el otro.

Como se ha señalado más arriba, uno de los ámbitos de más temprano y fructífero estudio de la UE desde la sociología de los campos es el microcosmos social de las instituciones europeas. En este sentido, el «campo de la Eurocracia» (Georgakakis y Vauchez, 2015; Georgakakis y Rowell, 2013) es un espacio estructurado donde los actores establecen patrones regulares de interacción con otros actores (tanto de competición como de cooperación) para incrementar su influencia en la política (y las políticas) europea. Aunque la mayoría de los autores concuerda en señalar que el desarrollo del campo de las políticas europeas es un proceso de constitución de un centro político-burocrático que, a diferencia de los procesos de constitución estatal, no implica ni mucho menos un intento del monopolio de la violencia legítima (Georgakakis, 2008; Trenz, 2009). Estos actores no han intentado apenas disputar el monopolio de la violencia simbólica de los Estados: estamos más bien ante un proceso de transferencia de poder desde los Estados hacia nuevos centros supranacionales sin que ello implique la aparición de un nuevo poder soberano (Moreno, 2014), pero sí un campo político más transnacional.

Didier Georgakakis (2008: 72-73, 2012) argumenta que el proceso de integración europea ha ido definiendo una serie de líneas de oposición clave —comunitario vs. nacional, política vs. conocimiento técnico, público vs. privado— en las que los actores se posicionan sistemáticamente para acumular capital, y que jerarquizan y rutinizan la competición entre ellos. Las oposiciones más

o menos clásicas entre Estados miembro y Comisión que recoge la literatura tienen un origen sociológico: se trata de una competición rutinizada entre actores nacionales con un fuerte capital político, pero con poca permanencia en el campo transnacional frente a actores institucionales con mayor capital burocrático específicamente europeo pero escaso capital político. Esta estructura de posiciones, disposiciones y relaciones se declina de forma específica en cada sector, dando lugar a campos especializados pero que están fuertemente conectados con el campo político-burocrático europeo.

Esta centralidad del campo político burocrático se constata en la prominencia del derecho comunitario en el campo institucional (Vauchez, 2008). Si las instituciones europeas se han autonomizado parcialmente de los Estados y del orden internacional desde el momento de su creación, es fundamentalmente consecuencia de procesos de autoafirmación de actores como el Tribunal de Justicia (Vauchez, 2008; Cohen, 2010) y de las propias élites nacionales destacadas en Bruselas (Ludlow, 2009) en procesos difíciles de explicar desde las teorías clásicas de la integración europea. La institucionalización de numerosos comités, procedimientos diferenciados y Direcciones Generales con *ethos* específicos no son fruto de un desarrollo lineal y racional, sino de la competencia entre élites nacionales y transnacionales, que tratan de evitar el monopolio de un Estado o grupo de interés sobre el proceso político (Georgakakis, 2018). Siguiendo la sociología de los campos de Bourdieu, esto ha dado lugar a un *habitus* específico caracterizado por la disposición a negociar, la preferencia por el consenso y la despolitización de los asuntos (Georgakakis, 2017).

Este enfoque sirve tanto para explicar los procesos de socialización en cada campo de la integración que generan y sostienen dinámicas diferenciadas —haciendo compatible la pervivencia de políticas tan diferentes como la PAC y la Agenda 2030—

como los procesos de toma de decisión en estos espacios. Esta literatura ha señalado en este sentido que la principal institución política transnacional por naturaleza, el Parlamento Europeo, también se ve implicada en estos procesos de socialización con el resultado de que los eurodiputados más eficaces no son aquellos que poseen un capital político partidista clásico —que se ve afectado por su origen nacional—, sino que son aquellos que acumulan un capital político europeo caracterizado por su capacidad de entender la política como una mezcla de la capacidad técnica con la capacidad de tejer consensos (Beauvallet y Michon, 2012).

Nuestra contribución a esta literatura parte de la premisa de que la progresiva autonomización de un campo político supranacional no es contradictoria con la afirmación del liderazgo político de los Estados ni con la europeización de la política nacional. Por tanto, este campo transnacional está dominado principalmente desde las instituciones ejecutivas (Comisión y Consejo) en detrimento de los Parlamentos, tanto el europeo como los nacionales, donde existen más incentivos para politizar los temas europeos y las élites burocráticas (tanto las europeas de la Comisión como las nacionales del Consejo) tienen menos peso.

Este proceso de autonomización de la política europea y dominación de las élites burocráticas europeas y nacionales es lo que denominamos como «intergubernamentalidad». Si bien el concepto foucauldiano de gubernamentalidad implica una transformación del gobierno jerárquico en una razón gubernamental ejercida a partir del reconocimiento de técnicas e instrumentos (Larner y Walters, 2004; la idea de «gobierno sin gobierno», idea que funciona particularmente bien a nivel europeo: Haahr y Walters, 2004; Mitchell, 2006), la «intergubernamentalidad» enfatiza la creciente complejización de la gobernanza en la UE, donde los Estados miembro y sus élites burocráticas no solo parti-

cipan, sino que en gran medida dominan el campo de la Eurocracia. En este sentido, cuando se argumenta como Schmidt (2006) que la UE sublima la política a través de múltiples comités, redes de expertos e informes técnicos, es erróneo pensar que esto se hace sin el control y la colaboración de los Estados miembro. Es decir, en gran medida la gubernamentalidad neoliberal no solo no es «impuesta» por la UE hacia los Estados miembro, sino que precisamente proviene en gran medida de ellos. La idea de la «intergubernamentalidad», por tanto, relaciona el concepto clásico de Foucault con la reciente literatura sobre el nuevo intergubernamentalismo en la UE (Bickerton, Hodson y Puetter, 2015). El concepto no contradice la idea de gubernamentalidad de los expertos, sino que pone el foco en que los Estados no solo no son ajenos al proceso, sino que es en gran medida construido precisamente por los Estados en conjunción con las élites burocráticas europeas.

La autonomización de la política europea y la «intergubernamentalidad» neoliberal han convergido recientemente en el contexto de las vacunas contra la COVID-19 para ilustrar este proceso, que se ha acelerado a causa de la pandemia (Gerbaudo, 2021). Por un lado, la UE, y la Comisión Europea en particular, se reafirmó (con éxito) como interlocutor frente a las grandes farmacéuticas para negociar un precio común de la vacuna para todos los Estados miembro. Se construyó un consenso por parte de las élites europeas y nacionales de que lo más «eficiente» era gestionar la compra de vacunas desde el nivel europeo. Esta situación ilustra las dinámicas que operan en paralelo dentro de la autonomización de la política europea: la Comisión Europea se concibió a sí misma como a una suerte de «gestor» de los Estados miembro (representados a través del Consejo), evitando asumir un rol más explícitamente político. Aunque este éxito tecnocrático se vio lastrado por el retraso en la distribución de la vacuna por una de las

compañías, AstraZeneca, la «intergubernamentalidad» se vio reforzada.

Este proceso nos ayuda también a concebir el neoliberalismo menos como un proceso de «reducción» del Estado, y más como una lógica de utilización de las instituciones públicas, tanto las nacionales como las europeas. El estatismo y el neoliberalismo no solo son compatibles, sino que se necesitan: son las instituciones públicas las que crean y regulan nuevos mercados, o que bienes públicos dependan de empresas privadas a través de la colaboración «público-privada». Esta «intergubernamentalidad» neoliberal es hegemónica en Bruselas precisamente gracias al creciente peso de la dinámica intergubernamental y ejecutiva, pues el Consejo Europeo se ha anclado no solo como el principal espacio de toma de decisiones de la UE (Bickerton, 2015), sino que los líderes nacionales tienen un papel cada vez más central en la comunicación colectiva de la UE (Oleart y Gheyle, 2022). Asimismo, un caso revelador a nivel de los Estados miembro es Francia, el «Estado público-privado» (Vauchez y France, 2021) que contrató a cuatro consultorías, incluyendo a McKinsey y Accenture, para desarrollar un plan de vacunación contra la COVID-19 que fue de los menos eficientes en la UE (Braun y Momtaz, 2021).

La transformación de las esferas públicas europeas y la construcción de una «sociedad civil europea»

Resulta llamativo que, ante la mayor crisis de la integración europea, el campo político bruselense haya permanecido relativamente estable, respondiendo antes a procesos y evoluciones internas de largo alcance (Georgakakis, 2017) más que a las frecuentes movilizaciones sociales contra las políticas comunitarias o intergubernamentales. En este sentido, Hans-Jörg Trenz (2016: 84-85) sugiere que la teoría posfuncionalista de

Hooghe y Marks (2009) ha pecado de optimista en cuanto a la capacidad de los actores políticos y sociales de constreñir y reorientar el rumbo de la integración europea. El hecho de que la politización de la UE sea compatible con una relativa estabilidad es muestra de la autonomía del campo bruselense *vis-à-vis* de la política nacional. De esta manera, el rechazo a las políticas de austeridad —expresado mediante movilizaciones, encuestas de opinión y voto a partidos críticos con la UE— no ha tenido efectos más que marginales en la toma de decisiones sobre las políticas ni sobre la continuación de la integración y su mayor grado de institucionalización. Esto resulta sorprendente desde el punto de vista de la teoría democrática, que hubiera esperado que las élites políticas y las instituciones habrían reaccionado a esta contestación adaptando las políticas ante la amenaza de la pérdida de apoyos electorales. Esto levanta serias dudas sobre el funcionamiento de la UE como un sistema político abierto y reactivo a las demandas de su entorno (Torreblanca, 2014), actualizando el debate sobre el déficit democrático de la UE.

Una de las innovaciones más interesantes de los nuevos enfoques sobre el déficit democrático de la UE tiene que ver con la consideración de la conexión entre sociedades y actores políticos nacionales y el proceso de integración europea. Son numerosas las contribuciones recientes que desde distintos puntos de vista señalan que la UE no sufre tanto un problema de diseño institucional como una crisis de legitimidad motivada por un déficit de política (Chopin, 2015), debido a la segmentación de los espacios públicos por la debilidad de los actores políticos que tendrían que conectar las demandas sociales con las instituciones (Fossum y Schlesinger, 2007). En una de las primeras formulaciones de esta idea, Vivien Schmidt (2006) ha caracterizado el problema de legitimidad de la UE como una disociación entre «políticas sin política» en las instituciones europeas frente a una «política sin

políticas» a nivel nacional. Esta incapacidad nacional y europea de trasladar demandas sociales a cambios de las políticas públicas está en el origen de la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia y la UE.

La literatura sobre la esfera pública europea ha enfatizado su fragmentación no solo entre distintos públicos nacionales, sino entre públicos generales y especializados (Fossum y Schlesinger, 2007; Oleart, 2021). El enfoque sociológico a través de la gubernamentalidad también aporta claves para entender las dinámicas en las que los actores intervienen en debates más técnicos que políticos. La sociedad civil juega un papel ambiguo. Por un lado, tiene el potencial de volver a incorporar la «política», entendida como un desafío radical de la mercantilización de los procesos sociales y políticos. Por otro lado, la sociedad civil contribuye a la lógica de la gubernamentalidad al hacer «concebible la racionalidad de la gobernanza y gobernar el espacio político global» (Lo Schiavo, 2014: 191). Estos autores critican a los teóricos cosmopolitas señalando que la sociedad civil global o transnacional carece de la espontaneidad y la conexión de base, y que aquellos que afirman hablar a nivel internacional en realidad son los descendientes de las redes y espacios gubernamentales, en lugar de aquellos capaces de oponerse a ellos (Oleart y Bouza, 2018a). Los críticos de la sociedad civil europea argumentan que estas organizaciones contribuyen a reforzar la lógica de la gubernamentalidad al contribuir a la despolitización de la gobernanza, al presentarse como expertos en un tema en lugar de activistas de una causa y al enfatizar su capacidad para trabajar dentro de los espacios institucionalizados (Lipschutz, 2005).

Esta perspectiva puede aplicarse fructíferamente para conceptualizar una corriente común de críticas al papel de la sociedad civil en los mecanismos participativos de la UE (Kohler-Koch y Quittkat, 2013; Kutay, 2021). Varios autores han señalado que la sociedad civil europea está cada vez más profesionali-

zada y concibe su representación en términos de capacidad de defender las causas (Buth, 2011), más que como resultado de su capacidad de canalizar las voces de sus miembros. Como resultado, su principal forma de acción colectiva a nivel de la UE consiste en la participación en foros de gobernanza especializados al contribuir como especialistas capaces de aportar datos y análisis.

Por lo tanto, el enfoque de la «intergubernamentalidad» podría servir para conceptualizar la división entre *insiders* y *outsiders* en la participación de la sociedad civil, en tanto que los *insiders* no podrían cumplir otra función que la de contribuir a la gubernamentalización de la UE, mientras que serán los *outsiders* quienes politicen la UE. A pesar de que hay *insiders* críticos (Oleart y Bouza, 2018b), es poco probable que los grupos críticos con el *statu quo* bruselense puedan lograr esta politización de la UE utilizando las oportunidades participativas existentes, como la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), dada su escasa efectividad a la hora de influenciar las políticas europeas. En cambio, sería en la producción de una esfera pública donde los asuntos de la UE se discutan críticamente en lugar de asumir que la UE ya es una esfera pública donde la sociedad civil podría contribuir a resistir a las lógicas de la gubernamentalidad. En consecuencia, parece que el ámbito nacional es más adecuado para la producción de las funciones de legitimidad esperadas por el enfoque de la gubernamentalidad, ya que la creciente politización de los asuntos de la UE a nivel nacional presenta una estructura de oportunidades más productiva y una esfera pública (Bouza y Oleart, 2018).

Desde este punto de vista, los enfoques de gubernamentalidad verían poco potencial de legitimidad en una sociedad civil más propensa a compromisos o negociaciones centradas en los marcos de debate técnico que proponen las propias instituciones, sino que tienden a equiparar esto con una colonización del poder productivo y constitutivo

de la sociedad civil (Lipschutz, 2004) por las lógicas gubernamentales. La pandemia ha profundizado esta lógica. El campo bruselese, y los actores dominantes en él, como la propia Comisión, no están equipados para abordar un debate político sobre el rol de las grandes farmacéuticas, al tratar muchos de los temas sensibles desde un punto de vista principalmente técnico y burocrático.

La politización de la UE en la política nacional y las resistencias a Europa

Las múltiples crisis que la UE experimenta desde principios de la década de 2010 ha cerrado el periodo del consenso permisivo para todos los Estados miembro, aunque esto no significa que la politización de los temas europeos sea idéntica en todos los sistemas políticos ni simétrica entre fuerzas euroescépticas y proeuropeas. La contestación del proyecto europeo no es pues circunstancial (Haapala y Oleart, 2022). Más bien, para algunos autores (Hooghe y Marks, 2009; Kriesi, 2016), este auge demuestra que, lejos de expresar actitudes sobre un tema impopular pero secundario, la posición hacia la integración europea ha contribuido a consolidar definitivamente la fractura política en torno al eje de preferencias sobre preferencias socioculturales (autoritario-liberal) que se apuntaba desde los años setenta (Kitschelt, 2004), pero no se manifestaba en toda Europa (Vidal, 2018).

Hooghe y Marks proponen (2009) que el nuevo eje opone las preferencias de actores verdes, alternativos y libertarios (GAL) a las de tradicionalistas, autoritarios y nacionalistas (TAN). Si bien su enunciación parece algo radical y limitada a conflictos en torno a valores, otros han completado esta argumentación incorporando a la explicación de la polarización en las actitudes hacia la UE la posición ante la globalización e integración económicas, incorporando nuevos conflictos redistributivos (Kriesi *et al.*, 2006). Esto sugiere que los ejes de competición en torno a valores culturales y redistribución que se habían consolidado a fi-

nales de los años setenta (Kitschelt, 2004) se han transformado, incorporando en cada uno de ellos una dimensión explícita de apertura o cierre cultural y económico en lo que Kriesi y otros han llamado integración-demarcación (Kriesi *et al.*, 2006).

Potencialmente, el nuevo polo TAN podría agrupar a los perdedores de la «européi-globalización» —personas con menor nivel académico y de renta, con empleos más expuestos a la competición internacional y la robotización— mientras que los actores GAL conseguirían atraer a los ganadores (Kriesi *et al.*, 2012). Esta transformación es especialmente importante desde la perspectiva de la sociología política porque los grupos que actúan como *challengers* en el campo político europeo tienden a (re)-movilizar y crear nuevas coaliciones entre grupos sociales afectados por la integración-demarcación y que habían desarrollado una fuerte apatía hacia la integración europea (Kriesi *et al.*, 2012: 4). Sería, por lo tanto, esta capacidad de movilizar a los perdedores de la globalización que habían abandonado las urnas la que explicaría el auge de partidos populistas (Crum y Oleart, 2023) y resultados inesperados como el del Brexit.

La hipótesis de la incorporación de las actitudes hacia la globalización parece abrir la puerta para tratar de entender algunas estrategias de competición de los actores políticos, como ilustra el creciente recurso al *welfare chauvinism* por parte de partidos euroescépticos anteriormente caracterizados por programas neoliberales (Keskinen, Norocel y Jørgensen, 2016) tales como el Reagrupamiento Nacional francés (antiguo Frente Nacional), el PVV holandés o el UKIP en Reino Unido. En este sentido, uno de los impactos más importantes de la europeización de los sistemas políticos europeos puede ser el de asentar nuevas coaliciones de grupos sociales en torno al eje de competición europeo.

La creciente politización de la UE ha suscitado el interés por la integración europea

en corrientes de la ciencia política como el análisis del comportamiento electoral donde hasta hace poco este tema era casi ignorado. Sin embargo, resulta relevante abordar esta transformación desde la sociología política en la medida en que la politización de la UE en la competición política doméstica se conecta con transformaciones profundas (Kriesi, 2016: 36-37) —globalización, postsoberanía, cambios en la estructura de la población activa y cambios en el sistema mediático— y que además son también en buena medida fruto de diferentes configuraciones de la competición entre actores emprendedores y asentados en los campos políticos nacionales. De forma coherente con lo dicho hasta aquí, seguimos los argumentos de un número de especialistas en euroescepticismo al entender que el auge de fuerzas políticas que cuestionan o rechazan el proyecto europeo no tiene una explicación ligada fundamentalmente a la crisis económica, sino que más bien estas fuerzas parecen representar una resistencia más profunda a ciertos elementos de la europeización (Crespy y Verschuere, 2009; Trenz y De Wilde, 2009). El interés de este enfoque desde una perspectiva de sociología política es que explica estas resistencias a partir de lo que podríamos denominar la paradoja imperial de la UE: es el propio éxito de la institucionalización de una gobernanza postsoberana lo que explica en buena medida las resistencias a una europeización que afecta a valores centrales de una ciudadanía no europeizada. En este sentido, es indispensable entender el euroescepticismo como una formación discursiva (Trenz y De Wilde, 2009) que resulta de un conflicto entre la extensión de la integración europea y los marcos dominantes en cada Estado para explicar la pertenencia a la UE (Díez-Medrano, 2003). De este modo, el referéndum del Brexit evidenciaría menos una insatisfacción económica como una insatisfacción por los efectos en la concepción británica de la soberanía de un proyecto que las élites nacionales siempre habían presentado como un mero mercado.

Tanto Hooghe y Marks (2009) como Kriesi (2016) enfatizan que la politización de los posicionamientos hacia la UE no es fruto de la mera importancia objetiva de la integración europea, sino del activismo de actores políticos, pero también de movimientos sociales y grupos de interés, que han actuado como emprendedores de causa de la activación de estas resistencias a Europa en sistemas políticos donde el proyecto europeo se encontraba fuera del debate político. Sin embargo, el protagonismo exclusivo de los actores euroescépticos en la politización de la integración europea está cada vez más cuestionado. Además, se apoya en una definición demasiado restrictiva de la politización que De Wilde, Leupold y Schmidtke (2016: 4) definen cuando convergen un aumento de la primacía del tema en la agenda, un aumento del número de actores y una creciente polarización de las posiciones de los actores. Si bien los tres elementos son evidentemente relevantes, la exigencia de que se manifiesten al mismo tiempo obvia el hecho de que las tres dimensiones se pueden superponer o resultar contradictorias. En este sentido, la definición estándar propuesta por De Wilde, Leupold y Schmidtke difícilmente puede tener en cuenta la reestructuración del sistema de partidos francés después de la elección presidencial de 2017, en la que la polarización y la primacía en la agenda se combinan con una reducción del número de actores expresada en la creciente dualidad entre pro y antieuropeos. Tampoco puede dar cuenta de los efectos politizadores de un gobierno tecnocrático como los que han conocido Italia o Grecia, en los que la reducción de la polarización conduce a un aumento significativo de la visibilidad y del número de actores *a posteriori*. Además, como matiza De Wilde (2019), la creciente politización de la UE está fomentando un «intergubernamentalismo discursivo» en el que los gobiernos nacionales se ven obligados a exponer sus

preferencias en la esfera pública. Aunque esto brinda oportunidades a nuevos emprendedores de causa para ejercer presión en ámbitos políticos en los que la UE tiene competencias, también facilita que el conflicto político se estructure en torno a actores ejecutivos y refuerce los mecanismos políticos intergubernamentales en detrimento de los parlamentarios. De ahí que la «intergubernamentalidad» que hemos descrito anteriormente sea, de hecho, compatible con la creciente politización de la UE.

LOS NUEVOS EUROPEÍSMOS: LA RECONFIGURACIÓN DE LOS CAMPOS POLÍTICOS NACIONALES FRENTE A LA POLITIZACIÓN DE LA UE

A lo largo del artículo hemos desarrollado cómo la pandemia ha acelerado procesos ya existentes. Sin embargo, queda por resolver qué efecto tendrá la pandemia, y los procesos que ha acelerado, sobre el futuro de la integración. Hooghe y Marks tienen razón al argumentar que hay una reorganización del conflicto político en torno a Europa y la globalización, al igual que Kriesi al enfatizar que este conflicto tiene una importante dimensión redistributiva. Sin embargo, nosotros diferimos en tanto en cuanto esta

reestructuración no da pie a un eje binario entre europeístas y euroescépticos, sino a una reorganización más compleja.

La principal limitación de que solamente los actores euroescépticos politizan la integración europea tiene que ver con la creciente reacción de los partidarios de la integración europea al desafío de los euroescépticos a nivel nacional. Una de las aportaciones de los enfoques sociológicos es la perspectiva relacional, que nos ayuda a identificar los efectos que el auge y la transformación del euroescépticismo están teniendo en los campos políticos nacionales. Esta aproximación subraya claramente la profundidad con la que la europeización de los campos políticos nacionales está transformando también a los partidos tradicionalmente proeuropeos. La tabla 1 describe este proceso de transformación sobre la base de los nuevos escenarios que pueden emerger sobre la base de la creciente politización en torno a la UE en los campos políticos nacionales. Podemos concebir dicho efecto según dos ejes claramente diferenciados cuya combinación da lugar a cuatro tipos de impactos. El primer eje afecta directamente al grado de competición en la fractura izquierda / derecha entre partidos, mientras que el segundo tiene que ver con la ecología del número y diversidad de partidos políticos.

TABLA 1. Escenarios de la reconfiguración de los campos políticos nacionales en función de la creciente politización de la UE

	Grado de competición entre partidos europeístas	
	Aumento de la competitividad entre fuerzas proeuropeas	Reducción de la competitividad entre fuerzas proeuropeas
Ecología de partidos políticos europeístas		
Transformación significativa de los actores	1. Aparición de nuevas fuerzas específicamente europeístas	2. Polarización y alternativas tecnocráticas
Mantenimiento del número de actores políticos	3. Reducción de la cooperación entre los partidos europeístas	4. Gran coalición

Fuente: Elaboración propia.

El primer efecto visible del desafío euroescéptico en un cierto número de Estados ha sido una tendencia a reducir la competición entre las fuerzas proeuropeas: a medida que los emprendedores euroescépticos ganan apoyos, resulta más difícil mantener el *statu quo* o la profundización de la UE (escenarios 2 y 4). Una de las posibles estrategias de los partidarios de dichas políticas pasa por anteponer la cooperación a la competición. Es el escenario que conoce Alemania² en las últimas dos décadas, pues entre 2005 y 2021 ha tenido tres gobiernos de gran coalición entre el primer y el segundo partido en las últimas cuatro legislaturas (escenario 4). Sin embargo, la transformación es probablemente más profunda allí donde las estrategias de cooperación dan lugar a la transformación profunda del sistema de partidos con la aparición de un gran bloque europeísta en el que se atenúan las diferencias en el eje redistributivo (escenario 2). Este es el escenario francés con la práctica sustitución orgánica y funcional de los socialistas³, gaullistas y liberales por «En Marche» (Bouza y Oleart, 2022), y más aún el de la cooperación de las fuerzas proeuropeas con *outsiders* tecnócratas como los experimentados en Italia (2011-2013) y Grecia (2011-2012). Este ha vuelto a ser el escenario de Italia desde febrero de 2021, cuando Mario Draghi se convirtió en primer ministro en un gobierno de unidad nacional apoyado por todos los grandes partidos.

La otra reacción al desafío euroescéptico está pasando por un aumento de la competitividad en la que las fuerzas proeuropeas dejan de cooperar entre sí y ade-

más mantienen una competición activa con los grupos euroescépticos (escenario 3). Este escenario es el que parece estarse viviendo en Austria y los Países Bajos donde la coalición saliente de fuerzas proeuropeas de izquierda y derecha sufrió un duro castigo. Dichos partidos reaccionaron disminuyendo su cooperación y atenuando fuertemente su europeísmo. El caso español representa un modelo similar, en el que los años de crisis no solo no han incrementado la cooperación entre las fuerzas proeuropeas tradicionales —con la excepción notable de la abstención del PSOE para la formación de gobierno en 2016—, sino que han aparecido nuevas fuerzas que reivindican el europeísmo como fue el caso de Ciudadanos. Incluso en el caso español, donde la politización de la integración europea no explica por sí misma la aparición de nuevos actores (Vidal, 2018: 273), los nuevos partidos emplean visiblemente la posición ante la integración europea para competir en el escenario electoral, ya sea para movilizar actitudes críticas (Podemos o JxCAT) o para reivindicar un mayor europeísmo como factor diferenciador. La abstención del PSOE en favor de renovar un gobierno del PP en el año 2016 resulta interesante, puesto que confirma los argumentos de Hooghe y Marks (2009) y de Kriesi (2016) sobre la importancia de la agencia política sobre factores estructurales en el tipo de reestructuración de la competición política en torno a la UE. Sin embargo, en el caso español, esta reestructuración es limitada, como demuestra la priorización por parte del PSOE del eje izquierda-derecha a través del cual se constituyó una coalición de izquierdas junto con Unidas Podemos en enero de 2020.

Una última opción es la aparición de nuevos actores específicamente europeístas, pero al mismo tiempo un aumento de la competitividad entre ellos (escenario 1). Durante las elecciones europeas de 2019

² Algo está cambiando, sin embargo, en el escenario alemán, dado que tras las elecciones de septiembre de 2021 se ha constituido un gobierno de coalición de centro-izquierda que excluye a la CDU pos-Merkel.

³ En las elecciones legislativas de junio de 2022 el partido socialista se sumó a la coalición de izquierdas NUPES, pero muchos de sus cuadros, empezando por el mismo Macron, se han integrado el partido En Marche.

se crearon los primeros partidos políticos europeos transnacionales, el Democracy in Europe Movement (DiEM 25), liderado por el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, y Volt, que logró un escaño europeo en Alemania. Asimismo, hemos visto durante la pandemia actores nacionales cooperando con actores de otros países sobre una base que va más allá del europeísmo, entre grupos políticos afines de diferentes países no únicamente sobre una base «proeuropea», sino con propuestas concretas con respecto del tipo de «Europa» que proponen. En medio de la crisis de la pandemia COVID-19, en mayo de 2020, el medio español *La Vanguardia*, el portugués *Público* y el italiano *Il Corriere della Sera* publicaron simultáneamente un artículo de opinión escrito por Ana Mendes Godinho y Nunzia Catalfo, las ministras de Asuntos Sociales de Portugal e Italia respectivamente, y el vicepresidente español, Pablo Iglesias, proponiendo una renta mínima europea para fortalecer el Pilar Social Europeo (Iglesias, Catalfo y Mendes-Godinho, 2020). Este tipo de acción transnacional refuerza la confrontación entre diferentes tipos de europeísmos (en este caso un europeísmo social de izquierdas), en vez de oponer a europeístas y euroescépticos.

CONCLUSIÓN: LA POLICRISIS ACELERA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CAMPOS POLÍTICOS NACIONALES Y REFUERZA LA «INTERGUBERNAMENTALIDAD»

El relativo impacto de la politización sobre el campo de la «Eurocracia» puede concebirse como un proceso de «intergubernamentalidad» neoliberal. Este escenario, si bien tiene argumentos a su favor, no es del todo exacto. El artículo explora la hipótesis de que la respuesta europea a la pan-

demia COVID-19 refleja fundamentalmente una incorporación diferenciada de estructuras, procesos y actores nacionales a un campo político —burocrático europeo caracterizado por una política consensual y de reactividad horizontal—, mientras que la política contenciosa —temas europeos incluidos— queda concentrada en la esfera política nacional. La creciente politización de la UE está fomentando un «intergubernamentalismo discursivo» (De Wilde, 2019), en el que el conflicto político en la esfera pública está dominado por actores ejecutivos (de ahí la pérdida de peso en los asuntos europeos de los Parlamentos, tanto el europeo como los nacionales), pero que sin embargo abre oportunidades a nuevos emprendedores de causa. Este proceso de autonomización de la política europea, combinada con el reforzamiento de las élites burocráticas nacionales incluso en un contexto de politización de la UE, es lo que denominamos como «intergubernamentalidad».

Lejos de frenar la integración europea, la pandemia COVID-19 ha acelerado el proceso ya en marcha de una UE más integrada, y al mismo tiempo más intergubernamental. La admisión de que la pandemia COVID-19 es una crisis europea que requería un enfoque político más allá del Estado-nación fue ilustrado por la cumbre del Consejo Europeo de julio de 2020, en la que los países del sur de Europa operaron (con éxito) como bloque político y lograron que el Consejo Europeo acordara emitir deuda europea común. Esta decisión hizo que la UE cruzara el Rubicón, convirtiéndose potencialmente en un momento «hamiltoniano» (Sandbu, 2020) en tanto en cuanto el campo político europeo se consolida como un terreno de competición política. La creciente interconexión entre la política nacional y la europea parece un terreno fértil para la derecha euroescéptica, pero también abre oportunidades para nuevos «europeísmos» que precisamente no se

definan principalmente por su condición de «europeísmo», sino por un proyecto político transnacional común. En este sentido, el artículo propone cuatro posibles escenarios teniendo en cuenta la creciente politización en torno a la UE en los campos políticos nacionales.

La «intergubernamentalidad» también tiene una dimensión externa, que ha sido visible en el caso de la reciente invasión rusa de Ucrania. Si bien la UE ha respondido de una forma fundamentalmente coherente y unida (a pesar de algún veto relacionado con la importación del gas por parte del gobierno húngaro), la respuesta ha reforzado las pre-existent dinámicas intergubernamentales. La rápida situación de la respuesta europea a la agresión contra Ucrania como un asunto de seguridad y la emergencia de conceptos como la «soberanía europea» o «autonomía estratégica» ilustran la construcción de nuevas formas de gestión compartida del riesgo. En vez de contribuir a la construcción de un espacio político transnacional europeo, hemos visto cómo los gobiernos nacionales han dominado simbólicamente (en los medios de comunicación) y materialmente (en la toma de decisiones) el debate, centrado en, por un lado, apoyar militarmente a Ucrania, y, por el otro, en reducir el impacto económico y la dependencia energética de Rusia. De esta forma, la seguridad proporcionada por los gobiernos prevalece por encima de la política transnacional. El espacio de la política contenciosa sigue anclado en el nivel nacional, en contraposición, salvo en contadas excepciones de episodios de politización europea, con el espacio europeo de consenso dominado por los actores ejecutivos. Es por tanto posible que una política exterior europea emerja como consenso, sin que ello implique una democratización de los procesos de toma de decisiones a través de una mayor inclusión de los Parlamentos (tanto el europeo como los nacionales).

Por tanto, la respuesta europea a las múltiples crisis, internas y externas, ha reflejado

las dinámicas contradictorias que operan en paralelo en la política europea, y que se han acelerado con cada una de las crisis desde 2010. La sociología política de la UE nos da claves importantes para entender este proceso de transformación en el que se encuentra la UE, y nos permite diferenciar diferentes tipos de europeísmos, problematizando el enfoque de una parte de la literatura sobre la politización de la UE, que fundamentalmente distingue entre «euroescépticos» y «proeuropeos» en el «clivaje transnacional» GAL-TAN. La confrontación entre diferentes tipos de europeísmo contribuiría a la normalización de la UE como terreno de conflicto político, y así construir puentes entre la política europea y nacional. Pero, más importante, la sociología política nos ayuda a comprender que la autonomización del campo de la Eurocracia y la «intergubernamentalidad» neoliberal han sido construidos en vistas a crear un espacio político beneficioso para aquellos actores con un alto capital técnico y burocrático, y en detrimento de actores con más capital político de movilización popular. El proyecto europeo no es intrínsecamente neoliberal, y la respuesta de la UE a la COVID-19 nos enseña que lógicas contradictorias pueden coexistir al operar en paralelo. De igual forma que la UE se consolidó en su momento como espacio de consenso entre líderes políticos nacionales, también puede transformarse en un espacio democrático transnacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Alemanno, Alberto (2012). Regulating the European Risk Society. En: A. Alemanno; F. Den Butter; A. Nijssen y J. Torriti (eds.). *Better Business Regulation in a Risk Society*. New York: Springer.
- Aro, Jari y Heiskala, Risto (2018). A Promoter of Values or a Shopkeepers' Empire? Economy and Society in the Europe 2020 Strategy and the Trade Policy of the EU. En: J. Aro y R. Heiskala (eds.). *Policy Design in the European Union: An Empire of Shopkeepers in the Making?* London: Palgrave Macmillan.

- Apeldoorn, Bastiaan van; Drahokoupil, Jan y Horn, Laura (eds.) (2008). *Contradictions and Limits of Neoliberal European Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- Beauvallet, Willy y Michon, Sébastien (2012). Faire carrière au Parlement européen. Activation de dispositions et socialisation institutionnelle. En: D. Georgakakis (ed.). *Le champ de l'Eurocratie: une sociologie politique du personnel de l'UE*. Paris: Economica.
- Beck, Ulrich (1998). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Bhambra, Gurinder K. (2022). «A Decolonial Project for Europe». *Journal of Common Market Studies*, 60(2): 229-244.
- Bickerton, Chris (2012). *European Integration. From Nation-States to Member States*. Oxford: Oxford University Press.
- Bickerton, Chris (2015). A Union of Member States. En: C. Bickerton; D. Hodson y U. Puetter (eds.). *The New Intergovernmentalism: States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era*. Oxford: Oxford University Press.
- Bickerton, Chris; Hodson, Dermot y Puetter, Uwe (2015). «The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era». *Journal of Common Market Studies*, 53(4): 703-722.
- Bourdieu, Pierre (1997). «De la maison du roi à la maison d'État, un modèle de la genèse du champ bureaucratique». *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 118(1): 55-68.
- Bouza García, Luis (2017). «The "New Narrative Project" and the Politicisation of the EU». *Journal of Contemporary European Studies*, 25(3): 340-353.
- Bouza García, Luis y Oleart, Álvaro (2018). «From the 2005 Constitution's "Permissive Consensus" To TTIP's "Empowering Dissensus": The EU as a Playing Field for Spanish Civil Society». *Journal of Contemporary European Research*, 14(2): 87-104.
- Bouza García, Luis y Oleart, Álvaro (2022). Make Europe Great Again: The Politicising Pro-European Narrative of Emmanuel Macron in France. En: T. Haapala and A. Oleart (eds.). *Tracing the Politicisation of the EU*, (pp. 271-293). London: Palgrave Macmillan.
- Braun, Elisa y Momtaz, Rym (2021). «Use of Consultancies for Vaccine Rollout Sparks Controversy in France». *Politico*, 6 de enero. Disponible en: <https://www.politico.eu/article/french-government-defends-mckinsey-coronavirus-vaccine-rollout/>
- Buth, Vanessa (2011). «Professionalization of Group-friend or Foe of Grassroots Representation». *ECPR's 6th General Conference*, Reykjavik, Islandia, 25-27 de agosto de 2011.
- Cohen, Antonin (2010). «Dix personnages majestueux en longue robe amarante». *Revue Française de Science Politique*, 60(2): 227-246.
- Chopin, Thierry (2015). *La fracture politique de l'Europe: Crise de légitimité et déficit politique*. Bruxelles: Éditions Larcier.
- Crespy, Amandine y Verschuere, Nicolas (2009). «From Euroscepticism to Resistance to European Integration: An Interdisciplinary Perspective». *Perspectives on European Politics and Society*, 10(3): 377-393.
- Crum, Ben y Oleart, Álvaro (eds.) (2023). *Populist Parties and Democratic Resilience*. London: Routledge.
- Delanty, Gerard (2013). *Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe*. London: Springer.
- De Wilde, Pieter (2019). «Media Logic and Grand Theories of European Integration». *Journal of European Public Policy*, 26(8): 1193-1212. doi: 10.1080/13501763.2019.1622590
- De Wilde, Pieter; Leupold, Anna y Schmidtke, Henning (2016). «Introduction: The Differentiated Politicisation of European Governance». *West European Politics*, 39(1): 3-22. doi: 10.1080/01402382.2015.1081505
- Diez Medrano, Juan (2003). *Framing Europe: Attitudes to European Integration in Germany, Spain and the United Kingdom*. Princeton: Princeton University Press.
- Fligstein, Neil (2008). *Euroclash: The EU, European Identity, and the Future of Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Fligstein, Neil y McAdam, Doug (2012). *A Theory of Fields*. Oxford: Oxford University Press.
- Fossum, John E. y Schlesinger, Philip (eds.) (2007). *The European Union and the Public Sphere: A Communicative Space in the Making?* London: Routledge.
- Foucault, Michel (2009). *Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France (1978-1979)* (Vol. 283). Madrid: Ediciones Akal.
- Fraser, Nancy (2003). «From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Globalization». *Constellations*, 10(2): 160-171.
- Georgakakis, Didier (1999). Les réalités d'un mythe : figure de l'eurocrate et institutionnalisation de

- l'Europe politique. En: D. Dulong y V. Dubois (eds.). *La question technocratique*. Estrasburgo: Presses Universitaires de Strasbourg.
- Georgakakis, Didier (ed.) (2004). *Les métiers de l'Europe politique. Acteurs et professionnalisations de la construction européenne*. Estrasburgo: Presses Universitaires de Strasbourg.
- Georgakakis, Didier (2008). «La sociologie historique et politique de l'Union européenne: un point de vue d'ensemble et quelques contre points». *Politique Européenne*, 2: 53-85.
- Georgakakis, Didier (dir.) (2012). *Le champ de l'eurocratie: une sociologie politique du personnel de l'UE*. Paris: Economica.
- Georgakakis, Didier (2017). *European Civil Service in (Times of) Crisis A Political Sociology of the Changing Power of Eurocrats*. London: Palgrave Macmillan.
- Georgakakis, Didier (2018). European Integration. En: W. Outwaite y S. Turner (ed.). *The SAGE Handbook of Political Sociology* (pp. 1083-1103). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Georgakakis, Didier y Rowell, Jay (eds.) (2013). *The Field of Eurocracy: Mapping EU Actors and Professionals*. London: Springer.
- Georgakakis, Didier y Vauchez, Antoine (2015). Le concept de champ à l'épreuve de l'Europe. En: *Enquêtes globales en sciences sociales*, (pp. 197-220). Paris: CNRS.
- Gerbaudo, Paolo (2021). *The Great Recoil: Politics after Populism and Pandemic*. London: Verso Books.
- Guiraudon, Virginie; Ruzza, Carlo y Trenz, Hans-Jörg (eds.) (2016). *Europe's Prolonged Crisis: The Making or the Unmaking of a Political Union*. London: Springer.
- Haahr, Jens H. y Walters, William (2004). *Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration*. London: Routledge.
- Haapala, Taru y Oleart, Álvaro (eds.) (2022). *Tracing the Politicisation of the EU*. London: Palgrave Macmillan.
- Hooghe, Liesbet y Marks, Gary (2009). «A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus». *British Journal of Political Science*, 39(01): 1-23.
- Iglesias, Pablo; Catalfo, Nunzia y Mendes Godinho, Ana (2020). «Hacia un ingreso mínimo europeo». *La Vanguardia*, 8 de mayo. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/economia/20200508/481016963163/hacia-un-ingreso-minimo-europeo.html>
- Kauppi, Niilo (2018). *Toward a Reflexive Political Sociology of the European Union*. London: Palgrave Macmillan.
- Keskinen, Suvi; Norocel, Ov C. y Jørgensen, Martin B. (2016). «The Politics and Policies of Welfare Chauvinism under the Economic Crisis». *Critical Social Policy*, 36(3): 321-329.
- Kitschelt, Herbert (2004). «Diversificación y reconfiguración de los sistemas de partidos de las democracias postindustriales». *Revista Española de Ciencia Política*, 10: 9-51.
- Kohler-Koch, Beate y Quittkat, Christine (2013). *De-mystification of Participatory Democracy: EU-governance and Civil Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Kriesi, Hanspeter (2016). «The politicization of European integration», *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 54: 32-47.
- Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Lachat, Romain; Dolezal, Martin; Bornschier, Simon y Frey, Timotheos (2006). «Globalization and the Transformation of the National Political Space: Six European Countries Compared». *European Journal of Political Research*, 45(6): 921-956. doi: 10.1111/j.1475-6765.2006.00644.x
- Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Höglinger, Dominic; Hutter, Swen y Wüest, Bruno (2012). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kutay, Acar (2021). *NGOs, Civil Society and Structural Changes*. Springer Nature.
- Larner, Wendy y Walters, William (eds.) (2004). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. Abington: Routledge.
- Lipschutz, Ronnie (2005). Global Civil Society and Global Governmentality: or, the Search for Politics and the State Amidst the Capillaries of Social Power. En: M. Barnett y R. Duvall (eds.). *Power in global governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lo Schiavo, Lidia (2014). «Governance, Civil Society, Governmentality. The "Foucauldian Moment" in the Globalization Debate: Theoretical Perspectives». *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(13): 181-197.
- Ludlow, Piers (2009). The European Commission and the Rise of Coreper: A Controlled Experiment. En: W. Kaiser; B. Leucht y M. Rasmussen (eds.). *The History of the European Union. Origins of a Trans- and Supranational Polity 1950-72*. London: Routledge.

- Middelaar, Luuk van (2018). *Quand l'Europe improvise. Dix ans de crises politiques*. Editions Gallimard. Paris: Gallimard.
- Mitchell, Katharyne (2006). «Neoliberal Governmentality in the European Union: Education, Training, and Technologies of Citizenship». *Environment and Planning D: Society and Space*, 24(3): 389-407. doi: 10.1068/d1804
- Moreno, Luis (2014). *Europa sin estados: unión política en el (des) orden global*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Oleart, Álvaro (2021). *Framing TTIP in the European Public Spheres*. London: Springer.
- Oleart, Álvaro y Bouza, Luis (2018a). «Democracy at Stake: Multipositional Actors and Politicization in the EU Civil Society Field». *Journal of Common Market Studies*, 56(4): 870-887. doi: 10.1111/jcms.12687
- Oleart, Álvaro y Bouza, Luis (2018b). Overcoming the Taboo: Disputes over European Values Via the European Citizens' Initiative. En: F. Foret y O. Calligaro (eds.). *European Values: Challenges and Opportunities for EU Governance*. New York: Routledge.
- Oleart, Álvaro y Gheyle, Niels (2022). «Executive Gladiators in the European Arena: Discursive Intergovernmentalism in the Politicization of the Covid-19 EU Recovery Plan». *Journal of European Integration*, 44(8): 1095-1111. doi: 10.1080/07036337.2022.2085695
- Outhwaite, William (2008). *European Society*. Cambridge: Polity.
- Sandhu, Martin (2020). «EU Crosses the Rubicon with its Emergency Recovery Fund». *Financial Times*, 22 de julio. Disponible en: <https://www.ft.com/content/bd570dde-3095-4074-bd37-18003f2bd3c2>
- Schmidt, Vivien A. (2006). *Democracy in Europe: The EU and National Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Torreblanca, José I. (2014). *¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía*. Madrid: Catarata y Fundación Alternativas.
- Trenz, Hans-Jörg (2009). Social Theory and European Integration. En: A. Favell y V. Guiraudon. *Sociology of the European Union*. London: Palgrave Macmillan.
- Trenz, Hans-Jörg (2016). *Narrating European Society: Toward a Sociology of European Integration*. London: Palgrave Macmillan.
- Trenz, Hans-Jörg and De Wilde, Pieter (2009). «Denouncing European Integration: Euroscepticism as Reactive Identity Formation». RECON Online Working Paper, no. 10, ARENA, University of Oslo. Disponible en: http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_0910.pdf?fileitem=16662597
- Vauchez, Antoine (2008). «The Force of a Weak Field: Law and Lawyers in the Government of the European Union (for a Renewed Research Agenda)». *International Political Sociology*, 2(2): 128-144. doi: 10.1111/j.1749-5687.2008.00040.x
- Vauchez, Antoine y France, Pierre (2021). *The Neoliberal Republic: Corporate Lawyers, Statecraft, and the Making of Public-Private France*. New York: Cornell University Press.
- Vidal, Guillem (2018). «Challenging Business as Usual? The Rise of New Parties in Spain in Times of Crisis». *West European Politics*, 41(2): 261-286.
- Zielonka, Jan (2007). *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union*. Oxford: Oxford University Press.

RECEPCIÓN: 03/02/2022

REVISIÓN: 14/06/2022

APROBACIÓN: 06/09/2022

Neoliberal Intergovernmentality and the Politicization of the EU: The Transformation of National Political Fields and the New Pro-Europeanisms

La «intergubernamentalidad» neoliberal y la politización de la UE: la transformación de los campos políticos nacionales y los nuevos europeísmos

Luis Bouza García and Álvaro Oleart

Key words

COVID-19

- European Public Sphere
- Europeanization
- European Integration
- Neoliberalism
- European Union

Palabras clave

COVID-19

- Esfera pública europea
- Europeización
- Integración europea
- Neoliberalismo
- Unión Europea

Abstract

The 2010s, which began with the financial crisis, was followed by the refugee crisis and culminated with the coronavirus pandemic in 2020. These political crises have consolidated theoretical approaches to the European political field, conceived as much more than a mere diplomatic environment in which national governments negotiate common policies. The coronavirus crisis, however, resulted in a faster, more decisive response than the previous two crises, mobilizing an unprecedented number of resources and building new consensus at a previously unforeseen rate. This article uses a political sociology perspective to examine the European response to several recent internal and external crises, revealing a transformation in the way in which politics operates that we conceive as “intergovernmentality”, a process that is compatible with the transformation of national political fields through the politicization of the EU.

Resumen

La década de 2010, iniciada con la crisis financiera, continuada con la de los refugiados y culminada con la del coronavirus en 2020, ha consolidado los enfoques teóricos en torno al campo político europeo como algo más que un entorno diplomático en el que gobiernos nacionales negocian políticas comunes. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha dado lugar a una respuesta más rápida y decisiva que las anteriores, movilizandando una cantidad de recursos sin precedentes y construyendo nuevos consensos a un ritmo no contemplado anteriormente. El artículo plantea desde la sociología política que las recientes crisis europeas revelan una transformación en las formas de ejercicio de la política que llamamos «intergubernamentalidad», un proceso compatible con la transformación de los campos políticos nacionales a través de la politización de la UE.

Citation

Bouza García, Luis; Oleart, Álvaro (2023). “Neoliberal Intergovernmentality and the Politicization of the EU: The Transformation of National Political Fields and the New Pro-Europeanisms”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 3-20. (doi: 10.5477/cis/reis.183.3)

Luis Bouza García: Universidad Autónoma de Madrid | luis.bouza@uam.es

Álvaro Oleart: Université Libre de Bruxelles | alvaro.oleart@ulb.be

INTRODUCTION¹

If liberal modernity, as conceived by Foucault, was a project characterized by the construction of mechanisms of order and control (Fraser, 2003: 160), then the COVID-19 pandemic served as a clear example of the vulnerability of European societies when facing the risks from the new modernity (Beck, 1998; Alemanno, 2012): the destruction of ecosystems accelerates the processes of zoonosis and economic and social interdependence, transforming a local outbreak into a global crisis, clearly demonstrating novel inequalities in risk management such as unequal exposure to the pandemic, unequal economic effects and unequal access to vaccines. The COVID-19 crisis has reaffirmed Beck's claims, demonstrating the limits of the social control systems of classic modernity. The EU has responded with distinct forms of shared risk management. But the pandemic also revealed that the EU's risk management strategy is not so much a post-modern means of renouncing risk control, but rather a reconstructed neoliberal project that develops a specific version of "modernity". This reconstruction has been carried out within the context of global competition between multiple modernities, characterized by distinct balances regarding risk, limits between state and the market, and references to different political and social values (Delanty, 2013). Thus, the "Next Generation EU" economic recovery and modernization plan established in July 2020, has led to an unprecedented mobilization of budgetary resources, while

also increasing the Europeanization of the regulation of the new economy sectors, offering new means of (de)regulation, information management and national reform processes.

The growth of large tech corporations in the European market and the increasing regulatory discussion in Brussels regarding Big Tech, suggests an upcoming effect of the debate on the new technologies for EU governance. Issues such as the job insecurity of food delivery "riders", the effects of UBER competition on the urban transport sector and of cryptocurrencies on financial stability, may be interpreted as examples of the pressure of global economics on state regulation. Less emphasis, however, has been placed on the emerging consensus regarding the ability to regulate these issues on a European scale. This consensus may be considered from a governmentality approach (Foucault, 2009). Upon demonstrating its ability to regulate new technologies and guide their use, EU institutions are promoting the modernization of European economies in response to social change, expanding their capacity to intervene in new sectors and through new techniques. But despite this emerging consensus on European regulation from a governmentality perspective, contradictory dynamics and operate simultaneously. While some actors attempt to address sensitive issues in a technocratic way, others contribute to the growing politicization of the EU in national political debates.

This article is a contribution to the ontological debate on the effects of the pandemic on the European project as a premise for understanding its pre-existing transformations, while also introducing the concept of "intergovernmentality". This does not suggest a lack of theoretical innovation from a political sociology perspective, since relevant proposals have been developed that present the EU as a postcolonial empire (Bhambra, 2022), as a public sphere, as a constitutional transformation process or as a space of neoliberal

¹ We wish to thank the anonymous reviewers for their comments and constructive criticism which has helped us to improve the article. We also appreciate the support provided by the Jean Monnet network, "OpenEUdebate: Matching politics with policy" (Jean Monnet-Erasmus REF: 600465-EPP-1-2018-1-ES-EPPJMO-NETWORK), coordinated by Elena García-Gutián of the Universidad Autónoma de Madrid.

governmentality. Authors such as Zielonka (2007) or Aro and Heiskala (2018) have characterized this process as the emergence of a neo-medieval empire with the convergence of profound socio-economic integration, neo-liberal governance techniques and a simultaneous zealous defense by member states of national production tools (social security, education and communication), resulting in a complex governance model that is increasingly less hierarchical and compartmentalized. Thus, contradictions arise regarding a hegemonic neoliberal project operating at the transnational level (Apeldoorn, Drahoukoupil and Horn, 2008; Bickerton, 2012), considering the complex but flexible governance of political interdependence between states and the growing politicization (Hooghe and Marks, 2009), without however resulting in a significant transformation of European public policies (Trenz, 2016). This may be explained by the division between the transnational creation of European “policies without politics” and an increasingly limited capacity of putting forward public policies at the national level (Schmidt, 2006), which tends to focus more on the symbolic reproduction of nation-states and less on the creation of public policies. These approaches, however, are often limited to the conceptualization of a transnational and intergovernmental political space, ignoring some of the domestic transformation processes.

The tenet of this article lies in the idea that the European response to the political crises of the 2010s reflects a differentiated incorporation of national structures, processes and actors in a European politico-bureaucratic field characterized by consensual and horizontally reactive politics, whereas the contentious politics —European topics included— is concentrated in the national political sphere. At the same time, however, the crisis arising from the global pandemic or the Ukraine war also reflects emerging transformations, that connect more closely contentions national pol-

itics with the consensual European ones, and reinforce intergovernmental dynamics in the EU. These processes existed before the pandemic, but they were accelerated by it, and have resulted in a closer external union when responding to the Russian invasion of Ukraine, mainly through intergovernmental bargaining.

Following this introduction, we describe how the pandemic has accelerated a political consensus that was previously unimaginable, regarding the need to respond at a European level (Middelaar, 2018). This perspective has been developed based on three axes of political sociology of the European integration process: the autonomization of European politics and neoliberal intergovernmentality, the transformation of European public spheres and the building of a “European civil society”, and the politicization of the EU in national politics and the different forms of resistance to Europe. Having analyzed these three axes, we anticipate the effect of the pandemic on the future of European integration, and propose a series of reconfiguration scenarios for the national political fields based on the growing politicization of the EU. The article concludes by offering some key points to facilitate the understanding of the transformation of the national political fields and the growing transnational intergovernmentality, both internal and external.

EUROPEAN INTEGRATION ACCORDING TO POLITICAL SOCIOLOGY: INTERGOVERNMENTALITY

A central characteristic of the sociological approaches is that they do not situate European institutions at the center of the explanatory mechanisms, but rather analyze the role of political and social actors, defining European integration as a process of “institutionalization of large or small groups through

political struggles that aim to define and reproduce legitimate principles (ideas and practices) of domination” (Kauppi, 2018: 51).

An even broader perspective of European social integration refers to the effects of the reorganization of the social structure as a result of new divisions of labour in Europe (Trenz, 2009: 196). From this perspective, Europe’s social integration would be a more or less spontaneous process arising from processes of reorganization of the social division of labour that integrate different societies based on shared objective interests. This process affects the way in which the existing solidarity mechanisms of European societies operate, and the organic solidarities established by the nation-states (Trenz, 2009) through forms of negative integration —by removing national barriers and obstacles— while simultaneously creating new solidarities through positive integration.

In addition to offering an alternative explanation of the nature of the European project, we connect the political sociology literature with the literature on European integration and EU politicization. One of the most important contributions of this approach is that it allows us to put forward a series of novel theoretical issues regarding the relationship between phenomena that are often addressed separately: the strategies of institutional actors and (inter)governmentality, the functioning of the public sphere and EU politicization.

The autonomization of European politics and neoliberal intergovernmentality

The sociological turn in European studies, labelled as the Strasbourg school by Kauppi (2018: 4), has problematized the understanding that EU institutions operate as a bubble with their own dynamics. Even though sociology and political anthropology have considered specific social dynamics produced by European integration, it was not until the

2010s that, as a likely result of the multiple EU crises (Guiraudon, Ruzza and Trenz, 2016), the literature that traditionally focused on power dynamics in EU institutions began to offer explanations from a larger scope on EU social integration. The notion of a social field is a central element of these approaches, in that this research logic focuses on explaining the dynamics of European integration based on the autonomization of social actors and relations, and the competition for specific resources through the mobilization of capital that acquires a specific value at the transnational level. Although this notion is associated with the sociology of Pierre Bourdieu, many other French authors have contributed to this sociological turn. The concept of a field is also significant in the new institutional theory of Powell and DiMaggio, with institutional isomorphism operating in an organizational field, as well as in studies of contentious politics. In this sense, one of the most notable attempts to integrate the sociological and institutionalist approaches is that of Fligstein and McAdam (2012). Based on the growing theoretical ambition of EU political sociology, and the increased attention to public policies and social protest based on the approach by Fligstein and McAdam, we refer to the concept of a European political field to describe the growing interaction between national and European political dynamics. We zoom in on the cooperation and competition patterns within a more politicized context, paying special attention to the relationship between the processes of Europeanization, on the one hand, and the reinforcement of national governments, on the other hand.

As mentioned above, one of the earliest and most fruitful areas of EU study from the sociology of fields is the social microcosmos of European institutions. The “field of Eurocracy” (Georgakakis and Vauchez, 2015; Georgakakis and Rowell, 2013) is a structured space in which actors establish regular interaction patterns (both competition and

cooperation) with others, to increase their influence in European politics and policies. However, most authors agree that the development of the field of European politics is a process of creating a bureaucratic-political center which, unlike the nation-state creation processes, is far from an attempt to establish a claim of a monopoly of legitimate violence over the territory of the EU (Georgakakis, 2008; Trenz, 2009). These actors have not attempted to dispute the monopoly of symbolic violence of nation-states; instead, the process consists in a transfer of power from member states towards new supranational centers, which does not create a new sovereign power (Moreno, 2014), but a more transnational political field.

Didier Georgakakis (2008: 72-73, 2012) has argued that European integration is defined by a series of key lines of opposition—European versus national, political versus technical knowledge, public versus private—in which actors systematically position themselves to accumulate capital, and that routinize patterns of competition. The classic opposition between member states and the European Commission, as described in the literature, has sociological origins. It is a routinized competition between national actors with considerable political capital, but with little permanence in the transnational field against institutional actors with a high degree of European bureaucratic capital, but little political capital. This structure of positions, provisions and relations is specifically divided in each sector, resulting in specialized fields that are strongly connected to the European political-bureaucratic field.

This centrality of the bureaucratic political field is reflected in the prominence of European law in the institutional field (Vauchez, 2008). If European institutions have partially autonomized from the states and from the international order since their creation, this tends to be the result of the self-affirmation processes of actors such

as the European Court of Justice (Vauchez, 2008; Cohen, 2010) and the national elites in Brussels (Ludlow, 2009) in processes that are difficult to explain by classic European integration theories. The institutionalization of numerous committees, distinct procedures and general directorates with specific ethos is not the result of a linear and rational development, but rather, of competition between national and transnational elites, who attempt to avoid the monopoly of a state or interest group over the political process (Georgakakis, 2018). According to Bourdieu's concept of fields, this has led to a specific habitus characterized by a willingness to negotiate, preference for consensus and the depoliticization of issues (Georgakakis, 2017).

This approach explains both the socialization processes in each field of integration that create and sustain the differentiated dynamics—establishing compatibility between the continuity of such distinct policies such as the CAP and 2030 Agenda—and the decision-making processes of these spaces. This literature has pointed that the main transnational political institution, the European Parliament, is also involved in these socialization processes, resulting in that the most efficient Members of the European Parliament (MEPs) are not those that have the traditional partisan political capital (influenced by their national political membership), but instead those that have European political capital, characterized by their ability to understand politics as a mixture of technical capacity and the ability to achieve consensus (Beauvallet and Michon, 2012).

Our contribution to the literature is based on the premise that the progressive autonomization of a supranational political field does not contradict the affirmation of political leadership by nation-states, or the Europeanization of national politics. Therefore, this transnational field is mainly dominated by executive institutions (Commission and Council) to the detriment of

parliaments, both European and national, institutions that have more incentives to politicize European issues and where the bureaucratic elites (both the European ones in the Commission and the national ones of the Council) have much less weight.

We refer to this autonomization process of European politics and the domination of the European and national elites as “intergovernmentality”. While Foucault’s concept of governmentality suggested a transformation of the hierarchical government into a governmental rationality based on the recognition of techniques and instruments (Larner and Walters, 2004; the idea of “governance without government” has functioned quite well at a European level, Haahr and Walters, 2004; Mitchell, 2006), “intergovernmentality” emphasizes the growing complexity of governance in the EU, where member states and their bureaucratic elites not only participate, but in large part dominate the field of Eurocracy. Thus, when arguing like Schmidt (2006) that the EU sublimates politics through multiple committees, networks of technical reports and experts, it is mistaken to believe that this is achieved without the control and collaboration of the member states. That is, in large part, not only is neoliberal governmentality not imposed on the member states by the EU, but in fact tends to arise from them. Thus, the idea of “intergovernmentality” is related to Foucault’s classic concept in combination with recent literature on new EU intergovernmentalism (Bickerton, Hodson and Puetter, 2015). This concept does not contradict the idea of governmentality, but rather highlights the idea that not only are states not removed from the process of European integration, but in fact they are largely responsible for its creation, together with the European bureaucratic elite.

The autonomization of European politics and neoliberal intergovernmentality have recently converged within the context of the COVID-19 vaccines, illustrating this pro-

cess, which has been accelerated due to the pandemic (Gerbaudo, 2021). On the one hand, the EU, and the European Commission in particular, were successfully reaffirmed as an intermediary towards the large pharmaceutical companies, to negotiate a common vaccine price for all EU member states. Consensus was reached by the European and national elites that the most “efficient” method was to manage vaccine purchase at the European level. This illustrates the dynamics operating in parallel within the autonomization of European politics: the European Commission conceived of itself as a sort of “manager” of the member states (represented through the Council), without assuming a more explicit political role. Although its technocratic success was hampered by the delay in vaccine distribution by AstraZeneca, intergovernmentality was reinforced.

This process also presents neoliberalism as less of a state “reduction” process and more as a logic with which public institutions, both national and European, operate. Not only are statism and neoliberalism compatible, but in fact, they need each other: public institutions create and regulate new markets, with public assets relying on private companies through “public-private” collaborations. This neoliberal intergovernmentality is hegemonic in Brussels, mainly due to the rising importance of intergovernmental and executive dynamics, since the European Council has established itself as the primary EU decision-maker (Bickerton, 2015), and national leaders have taken on an increasingly central role in collective EU communication (Oleart and Gheyle, 2022). France is a revealing case, at the member state level. This “public-private state” (Vauchez and France, 2021) hired four consultancy agencies, including McKinsey and Accenture, to develop a COVID-19 vaccination plan. Ultimately, it was one of the EU’s least efficient plans (Braun and Momtaz, 2021).

The transformation of the European public spheres and the construction of a "European civil society"

Strikingly, in the face of the largest crisis of European integration, the political field of Brussels has remained relatively stable, responding to long-term internal processes and developments (Georgakakis, 2017) and not to the frequent social mobilizations against European or intergovernmental policies. Hans-Jörg Trenz (2016: 84-85) suggested that the post-functionalist theory of Hooghe and Marks (2009) is too optimistic in terms of the ability of political and social actors to constrain and redirect the course of European integration. The fact that the politicization of the EU is compatible with relative stability demonstrates the autonomy of the European field in relation to national politics. Thus, the rejection of austerity policies —expressed through mobilizations, opinion surveys and votes for EU critical parties— has had little more than marginal effects on decision-making regarding public policies or the continued integration and its higher level of institutionalization. From a democratic theory perspective, this is surprising, since it could have been expected that political elites and institutions would react by adapting public policies at the threat of losing electoral support. This raises some serious doubts about the functioning of the EU as an open political system that is reactive to the demands of its environment (Torreblanca, 2014), once again leading towards a debate on the democratic deficit of the EU.

One of the most interesting innovations of the new approaches to the EU's democratic deficit refers to the connection between national societies and political actors, and the European integration process. Recent contributions suggest that the EU does not suffer so much from an institutional design issue, but from a crisis of legitimacy caused by a political deficit (Chopin, 2015),

resulting from the segmentation of public spaces due to the inability of political actors to connect social demands with institutions (Fossum and Schlesinger, 2007). In one of the first conceptualizations of this idea, Vivien Schmidt (2006) characterized the EU's legitimacy problem as a dissociation between the "policy without politics" of EU institutions in contrast to the "politics without policies" at the national level. This national and European inability to transfer social demands to changes in public policies may lie at the root of citizen dissatisfaction with democracy and the EU.

Literature on the European public sphere has emphasized its fragmentation, not only between different national audiences, but also between general and specialized publics (Fossum and Schlesinger, 2007; Oleart, 2021). The sociological approach through governmentality also provides keys to understanding the dynamics by which actors intervene in debates that are more technical than political. Here, civil society plays an ambiguous role. On the one hand, it has the potential to reintroduce "politics", understood as a radical challenge to the commodification of social and political processes. On the other hand, civil society contributes to the logic of governmentality by making "the rationality of governance 'conceivable' and the 'global' political space being set up 'governable'" (Lo Schiavo, 2014: 191). These authors criticize cosmopolitan theorists by pointing out that global or transnational civil society lacks spontaneity and grassroots connections, and that those claiming to speak internationally are in fact descendants of governmental networks and spaces, as opposed to being those capable of opposing them (Oleart and Bouza, 2018a). Critics of European civil society argue that these organizations contribute to reinforcing the logic of governmentality by encouraging the depoliticization of governance by presenting themselves as experts, as opposed to activists, and by emphasizing

ing their ability to work within institutions (Lipschutz, 2005).

This perspective may be successfully applied for conceptualizing a common line of criticism of the role of civil society in EU participatory mechanisms (Kohler-Koch and Quittkat, 2013; Kutay, 2021). Some authors have suggested that European civil society has become increasingly professionalized, conceiving its representation in terms of ability to defend causes (Buth, 2011), as opposed to the result of its ability to channel its members' voices. Therefore, its main form of collective action at the EU level consists of participation in specialized governance forums, serving as specialists who provide data and "expert" information.

The intergovernmentality approach may serve to conceptualize the division between "insiders and outsiders" in civil society participation, whereby the "insiders" contribute to the governmentalization of the EU, while the "outsiders" are the ones who politicize the EU. Although there are critical "insiders" (Oleart and Bouza, 2018b), it is unlikely that Brussels-groups critical with the status quo can succeed in bringing about EU politicization through the existing participatory opportunities, such as the European Citizens' Initiative (ECI), given their limited effectiveness in terms of influencing European politics. On the other hand, it is in the production of a public sphere where EU issues may be critically debated, as opposed to the idea that the EU is already a public sphere in which civil society contributes to resisting the logic of governmentality. Thus, it appears that the national level is more appropriate in terms of producing the legitimacy functions expected, since the increasing politicization of EU affairs at the national level offers a more productive opportunity structure as well as a public sphere (Bouza and Oleart, 2018).

From this point of view, governmentality approaches see limited potential for legitimacy in a civil society that is prone to compromises or negotiations based on the technical debate frameworks proposed by EU institutions themselves. Instead, these logics tend to be equated with a colonization of productive and constitutive power of civil society (Lipschutz, 2004) based on governmental approaches. The pandemic has strengthened this logic. Brussels and its dominant actors, such as the Commission, are ill-equipped to engage in political debates on the role of Big Pharma, given the numerous sensitive issues that it already handles from a primarily technical and bureaucratic point of view.

The politicization of the EU in national politics and resistances to Europe

The multiple crises that the EU has experienced since the beginning of the 2010s have closed the period of permissive consensus for all member states, although this does not mean that the politicization of European issues is identical in all political systems. The politicization of the European project is therefore not circumstantial (Haapala and Oleart, 2022). Rather, for some authors (Hooghe and Marks, 2009; Kriesi, 2016) this spike shows that far from expressing attitudes on an unpopular but secondary issue, the position towards European integration has contributed to consolidate the political fracture around the axis of preferences on sociocultural issues (authoritarian-liberal) that had been pointed out since the 1970s (Kitschelt, 2004) but was not manifested throughout Europe (Vidal, 2018).

Hooghe and Marks propose (2009) that the new axis opposes the preferences of the green, alternative and libertarian (GAL) actors to those of traditionalists, authoritar-

ians and nationalists (TAN). Although this appears somewhat radical and limited to value-based conflicts, others have complemented this argument by including the position on economic globalization and integration in the explanation of the polarization of attitudes towards the EU, including new redistributive conflicts (Kriesi *et al.*, 2006). This suggests that the axes of competition based on cultural values and redistribution that were consolidated in the late 1970s (Kitschelt, 2004) have been transformed, including an explicit dimension of cultural and economic openness or closure in each of them, referred to by Kriesi and others (2006) as integration-demarcation.

The new TAN group could potentially bring together the losers of “Euro-globalization” —those of a lower educational and income level having jobs that are more subject to international competition and robotization— while GAL actors would manage to attract the “winners” (Kriesi *et al.*, 2012). This transformation is especially relevant from the political sociology perspective, since the groups acting as “challengers” in the European political field tend to (re)-mobilize and create new coalitions between social groups affected by the integration-demarcation cleavage and that developed a strong apathy towards European integration (Kriesi *et al.*, 2012: 4). Thus, this ability to mobilize the globalization losers who had abandoned the polls may explain the rise of populist parties (Crum and Oleart, 2023) and unexpected outcomes such as Brexit.

The hypothesis regarding the inclusion of attitudes on globalization facilitates the understanding of certain competition strategies used by political actors. This may be illustrated by the growing use of the “welfare chauvinism” discourse by so-called *Euroskeptical* parties, which were previously characterized by neoliberal programs (Keskinen *et al.*, 2016). This includes the French National Rally (formerly the National Front), the Dutch PVV or the UKIP in the United King-

dom. Thus, one of the most important effects of the Europeanization of political systems may be the construction of new coalitions of social groups based on the axis of competition on European issues.

The growing politicization of the EU has aroused an interest in European integration in currents of political science such as the analysis of electoral behavior that had so far sidelined it. However, this transformation remains relevant for political sociology perspectives, given that EU politicization in the domestic political competition is connected with deep transformations (Kriesi, 2016: 36-37) —globalization, post-sovereignty, changes in active population structure, changes in the media system— and also, to a large extent, it is the result of the different configurations of competition between political insiders and outsiders of the national political fields. Therefore, we concur with the arguments presented by numerous Euro-skepticism specialists, suggesting that the rise of political forces that question or reject the European project is not fundamentally linked to the economic crisis. Rather, these forces appear to represent a deeper resistance to certain elements of Europeanization (Crespy and Verschueren, 2009; Trenz and De Wilde, 2009). From a political sociology perspective, this approach is interesting because it explains these resistances based on the so-called *imperial paradox* of the EU: the success of the institutionalization of post-sovereign governance in large part explains the resistance to a Europeanization that affects the core values of non-Europeanized citizens. Thus, Euro-skepticism is considered a discursive construction (Trenz and De Wilde, 2009) resulting from a conflict between the extension of European integration and the dominant frameworks of each member state to conceive EU membership (Diez-Medrano, 2003). Brexit results thus not so much from economic dissatisfaction as it does from dissatisfaction with the effects on the British

conception of sovereignty of a project that the national elite had presented as a mere market.

Both Hooghe and Marks (2009) as well as Kriesi (2016) emphasize that the politicization of positions towards the EU is not the result of the mere objective importance of European integration, but of the activism of political actors, social movements and interest groups, which have activated a resistance to Europe in political systems where the European project was external to the political debate. However, the exclusive role of Euro-skeptic actors in the politicization of European integration is increasingly questioned. Furthermore, it relies on an overly restrictive understanding of politicization, defined by De Wilde, Leupold and Schmidtke (2016: 4) as the convergence of an increase in the salience of European issues in the political agenda, in the number of actors and the rising polarization of actors' positions. Although these three elements are obviously relevant, the requirement that they appear simultaneously obviates the fact that they may overlap or be contradictory. Therefore, the standard definition proposed by De Wilde, Leupold and Schmidtke barely considers the restructuring of the French party system after the 2017 presidential election in which polarization and salience are combined on the agenda with a reduction in the number of actors in the growing duality between pro- and anti-Europeans. It also fails to account for the politicizing effects of a technocratic government such as those of Italy or Greece, in which reduced polarization has led to a major increase in visibility and the number of actors. According to De Wilde (2019), the growing politicization of the EU fosters a "discursive intergovernmentalism" in which national governments are forced to expose their preferences in the public sphere. While this provides opportunities for new cause entrepreneurs to lobby in policy areas where the EU has competences,

it also makes it easier for political conflict to be structured around executive actors, reinforcing intergovernmental political mechanisms to the detriment of parliamentarians. Hence, the intergovernmentality described above is, in fact, compatible with the growing politicization of the EU.

THE NEW PRO-EUROPEANISMS: THE RECONFIGURATION OF NATIONAL POLITICAL FIELDS IN THE FACE OF EU POLITICIZATION

Throughout the article, we have developed the way in which the pandemic has accelerated pre-existing processes. But the pandemic's effect on the future of European integration and the processes that it has accelerated remain to be determined. Hooghe and Marks correctly argued that the reorganization of political conflict around Europe and globalization has taken place. And as Kriesi emphasized, this conflict has an important redistributive dimension. However, we differ with respect to the belief that this restructuring results in a binary axis between Europeanists and Euro-skeptics, but rather, creates a more complex reconfiguration.

The main limitation that only Euro-skeptic actors politicize European integration has to do with the growing reaction of supporters of European integration to the challenge of Euro-skeptics at the national level. One of the contributions of sociological approaches is the relational perspective, which helps us to identify the effects that the rise and transformation of Euro-skepticism is having on national political fields. This approach clearly underlines the degree to which the Europeanization of national political fields is also transforming the traditionally pro-European parties. Table 1 presents this transformation process based on the new scenarios emerging due to the increasing politicization of the EU in national

political fields. This effect may be considered based on two clearly differentiated axes, the combination of which gives rise to four types of effects. The first axis directly

affects the degree of competition in the left/right divide between parties, while the second refers to the ecology of the number and diversity of political parties.

TABLE 1. *Scenarios for the reconfiguration of national political fields based on the growing EU politicization*

	Level of competition between pro-European parties	
	Increase in competition between pro-European forces	Decrease in competition between pro-European forces
Ecology of pro-European political parties		
Significant transformation of actors	1. Appearance of new specifically pro-European forces	2. Polarization and technocratic alternatives
Maintenance of number of political actors	3. Decrease in cooperation between pro-European parties	4. Grand Coalition

Source: Own elaboration.

The first visible effect of the Euro-skeptic challenge in numerous countries was the tendency to reduce competition between pro-European forces: as the Euro-skeptic entrepreneurs win support, it becomes more difficult to maintain the status quo or to strengthen the EU (scenarios 2 and 4). One possible strategy employed by supporters of these policies is to prioritize cooperation over competition. This scenario has taken place in Germany² for the past two decades, between 2005 and 2021. During this time, the country has seen three grand coalition governments made up of the first and second parties from the past four legislatures (scenario 4). However, this transformation may be even stronger when cooperation strategies give rise to profound party system transformation, with the appearance of a large pro-European bloc that mitigates the differences in the redistributive axis (scenario 2). This has been the scenario in France with the practical organic

and functional replacement of the socialists³, Gaullists and liberals by “En Marche” (see Bouza and Oleart, 2022) and even more so, with the cooperation of pro-European forces with technocratic outsiders such as those arising in Italy (2011-2013) and Greece (2011-2012). Once again, this occurred in Italy in February 2021, when Mario Draghi became Prime Minister with a national unity government supported by the country’s main parties.

The other reaction to the Euro-skeptic challenge is developing an increase in competition by which pro-European forces have ceased to cooperate with one another and are actively competing with Euro-skeptic groups (scenario 3). This scenario appears to be playing out in Austria and The Netherlands, where the exiting coalition of pro-European left- and right-wing forces have suffered a major blow. These parties have reacted by decreasing their cooperation and strongly attenuating their pro-Eu-

² Changes, however, are taking place in the German scenario, given that following the 2021 elections, a center-left-wing coalition government was formed, excluding the post-Merkel CDU.

³ In the legislative elections of June 2022, the socialist party aligned with the left-wing NUPES coalition, but many of its members, including even Macron, had joined with the centrist pro-European En Marche.

ropeanism. The Spanish case represents a similar model. During the crisis years, not only has cooperation not increased between the traditional pro-European forces —with the notable exception of the abstention of the PSOE for the formation of a right-wing government in 2016— but new forces have appeared, vindicating Europeanism, as occurred with Ciudadanos. Even in Spain, where the politicization of European integration alone does not explain the appearance of new actors (Vidal, 2018: 273), new parties have visibly used their position on European integration to compete on the electoral stage, either by mobilizing critical attitudes (Podemos or JxCAT) or by claiming greater Europeanism as a differentiating factor. The abstention of PSOE in favor of renovating a PP government in 2016 was of special interest, confirming the arguments of Hooghe and Marks (2009) and Kriesi (2016) on the importance of the political agenda over structural factors in the type of restructuring of political competition based around the EU. However, in the case of Spain, this restructuring has been limited, as shown by the PSOE's prioritization of the left-right axis through which it formed a leftist coalition together with Unidas Podemos in January 2020.

A final option is the appearance of new specifically pro-European actors, with a simultaneous increase in competition between them (scenario 1). During the 2019 European elections, the first transnational European political parties were created, the Democracy in Europe Movement (DiEM 25), led by former Greek finance minister, Yanis Varoufakis, and Volt, which won a European Parliament seat in Germany. Likewise, during the pandemic, we have seen national actors cooperating with actors from other countries on grounds extending beyond pro-Europeanism, between like-minded political groups from different countries and not only on a “pro-Europe”

basis, but with specific proposals as to the type of “Europe” that they propose. For instance, amidst the COVID-19 pandemic, in May 2020, Spain's *La Vanguardia*, Portugal's *Público*, and Italy's *Il Corriere della Sera* simultaneously published an opinion piece written by Ana Mendes Godinho and Nunzia Catalfo, the Ministers of Social Affairs of Portugal and Italy, respectively, and by Spanish Vice President, Pablo Iglesias, proposing a European minimum income to strengthen the European Social Pillar (Iglesias, Catalfo and Mendes-Godinho, 2020). This type of transnational action reinforced the confrontation between different types of Europeanism (in this case, a left-wing social Europeanism), instead of opposing Europeanists and Euroskeptics.

CONCLUSION: THE MULTIPLE CRISES HAVE ACCELERATED THE TRANSFORMATION OF NATIONAL POLITICAL FIELDS AND HAVE REINFORCED INTERGOVERNMENTALITY

The relative impact of politicization on the field of “Eurocracy” may be conceived as a process of neoliberal intergovernmentality. This article explores the hypothesis that the European response to the COVID-19 pandemic fundamentally reflects a differentiated incorporation of national structures, processes and actors into a European political-bureaucratic field characterized by political, consensual and horizontal reactivity, while contentious politics —European issues included— concentrates on the national political sphere. The growing politicization of the EU fosters “discursive intergovernmentalism” (De Wilde, 2019), in which political conflict in the public sphere is dominated by executive actors (hence the loss of influence of European parliamentary actors, both European and national), but which, nonethe-

less, offer potential opportunities for new actors. This autonomization of European politics, combined with the strengthening of national bureaucratic elites, even in a context of EU politicization, is what we conceive as “intergovernmentality”.

Far from constraining European integration, the COVID-19 pandemic has accelerated a process that was already underway, creating a more integrated and simultaneously more intergovernmental EU. The acceptance that the COVID-19 pandemic is a European crisis requiring a political approach beyond a national one, was illustrated by the July 2020 European Council summit, in which Southern European countries successfully operated as a political bloc and achieved consensus in the European Council on the issue of common European debt. With this decision, the EU crossed the Rubicon in a potentially “Hamiltonian” moment (Sandbu, 2020) in which the European political field was consolidated as a field of political competition. The growing interconnection between national and European politics is fertile ground for the Euro-skeptic right, but it provides opportunities for new “pro-Europeanisms” that are not defined solely by their “pro-Europeanism”, but also by a common transnational political project. Therefore, this article has proposed four possible scenarios that take into account the growing politicization of the EU in national political fields.

“Intergovernmentality” also has an external dimension, visible in the case of Russia’s recent invasion of Ukraine. While the EU has mainly responded in a coherent and united way (despite vetoes related to gas imports by the Hungarian government), its response has reinforced pre-existing intergovernmental dynamics. The rapid European response to the Russian aggression against Ukraine as a security issue and the emergence of concepts such as “European sovereignty” or “strategic autonomy” illustrate the creation of new forms of shared risk management. Instead of

contributing to the construction of a European transnational political space, national governments have symbolically (via mass media) and materially (via decision-making) dominated the debate, focused on providing military support to Ukraine, on the one hand, while reducing the economic and energy dependency on Russia, on the other. Therefore, the security provided by governments prevails over transnational politics. The space of contentious politics continues to be anchored at the national level, with a few exceptions of European politicization episodes, in contrast to the European consensus-oriented space, which is dominated by executive actors. Therefore, it is possible for European foreign policy to emerge as a consensus, without this suggesting the democratization of decision-making processes through an increased inclusion of parliaments (both European and national ones).

Therefore, the European response to the multiple internal and external crises reflects the contradictory dynamics operating in parallel in European politics, which have accelerated with each of the crises since 2010. Political sociology offers significant keys to understanding this transformation process in which the EU finds itself, allowing us to differentiate between types of Europeanisms, problematizing the focus of some of the literature on the politicization of the EU, which fundamentally distinguishes between “Euro-skeptics” and “pro-Europeans” in the GAL-TAN “transnational cleavage”. The confrontation between different types of pro-Europeanism may contribute to the normalization of the EU as an arena of political conflict, thus building bridges between European and national politics. But, more importantly, political sociology helps us understand that the autonomization of the field of Eurocracy and neoliberal intergovernmentality have been developed to the benefit of those actors holding more technical and bureaucratic capital, and to the detriment of actors having more politi-

cal capital of popular mobilization. The European project is not intrinsically neoliberal, and the EU's response to COVID-19 suggests that contradictory logics may coexist. Just as the EU was once consolidated as a space for consensus among national political leaders, it may also be transformed into a transnational democratic political arena.

BIBLIOGRAPHY

- Alemanno, Alberto (2012). Regulating the European Risk Society. In: A. Alemanno; F. Den Butter; A. Nijssen and J. Torriti (eds.). *Better Business Regulation in a Risk Society*. New York: Springer.
- Aro, Jari and Heiskala, Risto (2018). A Promoter of Values or a Shopkeepers' Empire? Economy and Society in the Europe 2020 Strategy and the Trade Policy of the EU. In: J. Aro and R. Heiskala (eds.). *Policy Design in the European Union: An Empire of Shopkeepers in the Making?* London: Palgrave Macmillan.
- Apeldoorn, Bastiaan van; Drahokoupil, Jan and Horn, Laura (eds.) (2008). *Contradictions and Limits of Neoliberal European Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- Beauvallet, Willy and Michon, Sébastien (2012). Faire carrière au Parlement européen. Activation de dispositions et socialisation institutionnelle. In: D. Georgakakis (ed.). *Le champ de l'Eurocratie: une sociologie politique du personnel de l'UE*. Paris: Economica.
- Beck, Ulrich (1998). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Bhambra, Gurminder K. (2022). "A Decolonial Project for Europe". *Journal of Common Market Studies*, 60(2): 229-244.
- Bickerton, Chris (2012). *European Integration. From Nation-States to Member States*. Oxford: Oxford University Press.
- Bickerton, Chris (2015). A Union of Member States. In: C. Bickerton; D. Hodson and U. Puetter (eds.). *The New Intergovernmentalism: States and Supranational Actors in the Post-Maastricht Era*. Oxford: Oxford University Press.
- Bickerton, Chris; Hodson, Dermot and Puetter, Uwe (2015). "The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era". *Journal of Common Market Studies*, 53(4): 703-722.
- Bourdieu, Pierre (1997). "De la maison du roi à la raison d'État, un modèle de la genèse du champ bureaucratique". *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 118(1): 55-68.
- Bouza García, Luis (2017). "The «New Narrative Project» and the Politicisation of the EU". *Journal of Contemporary European Studies*, 25(3): 340-353.
- Bouza García, Luis and Oleart, Álvaro (2018). "From the 2005 Constitution's 'Permissive Consensus' To TTIP's 'Empowering Dissensus': The EU as a Playing Field for Spanish Civil Society". *Journal of Contemporary European Research*, 14(2): 87-104.
- Bouza García, Luis and Oleart, Álvaro (2022). Make Europe Great Again: The Politicising Pro-European Narrative of Emmanuel Macron in France. In: T. Haapala and A. Oleart (eds.). *Tracing the Politicisation of the EU* (pp. 271-293). London: Palgrave Macmillan.
- Braun, Elisa and Momtaz, Rym (2021). "Use of Consultancies for Vaccine Rollout Sparks Controversy in France". *Politico*, January 6. Available at: <https://www.politico.eu/article/french-government-defends-mckinsey-coronavirus-vaccine-rollout/>
- Buth, Vanessa (2011). "Professionalization of Group-friend or Foe of Grassroots Representation". *ECPR's 6th General Conference*, Reykjavik, Iceland, August 25-27.
- Cohen, Antonin (2010). "Dix personnages majestueux en longue robe amarante". *Revue Française de Science Politique*, 60(2): 227-246.
- Chopin, Thierry (2015). *La fracture politique de l'Europe: Crise de légitimité et déficit politique*. Bruxelles: Éditions Larcier.
- Crespy, Amandine and Verschuere, Nicolas (2009). "From Euroscepticism to Resistance to European Integration: An Interdisciplinary Perspective". *Perspectives on European politics and society*, 10(3): 377-393.
- Delanty, Gerard (2013). *Formations of European Modernity: A Historical and Political Sociology of Europe*. London: Springer.
- De Wilde, Pieter (2019). "Media Logic and Grand Theories of European Integration". *Journal of European Public Policy*, 26(8): 1193-1212. doi: 10.1080/13501763.2019.1622590
- De Wilde, Pieter; Leupold, Anna and Schmidtke, Henning (2016). "Introduction: The Differentiated Politicisation of European Governance". *West European Politics*, 39(1): 3-22.
- Díez Medrano, Juan (2003). *Framing Europe: Attitudes to European Integration in Germany, Spain and the*

- United Kingdom*. Princeton: Princeton University Press.
- Fligstein, Neil (2008). *Euroclash: The EU, European Identity, and the Future of Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Fligstein, Neil and McAdam, Dug (2012). *A theory of fields*. Oxford University Press.
- Fossum, John E. and Schlesinger, Philip (eds.) (2007). *The European Union and the Public Sphere: A Communicative Space in the Making?* London: Routledge.
- Foucault, Michel (2009). *Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France (1978-1979)* (Vol. 283). Madrid: Ediciones Akal.
- Fraser, Nancy (2003). "From Discipline to Flexibilization? Rereading Foucault in the Shadow of Globalization". *Constellations*, 10(2): 160-171.
- Georgakakis, Didier (1999). Les réalités d'un mythe: figure de l'eurocrate et institutionnalisation de l'Europe politique. In: D. Dulong and V. Dubois (eds.). *La question technocratique*. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
- Georgakakis, Didier (ed.) (2004). *Les métiers de l'Europe politique. Acteurs et professionnalisations de la construction européenne*. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
- Georgakakis, Didier (2008). "La sociologie historique et politique de l'Union européenne: un point de vue d'ensemble et quelques contre points". *Politique Européenne*, 2: 53-85.
- Georgakakis, Didier (dir.) (2012). *Le champ de l'eurocratie: une sociologie politique du personnel de l'UE*. Paris: Economica.
- Georgakakis, Didier (2017). *European Civil Service in (Times of) Crisis A Political Sociology of the Changing Power of Eurocrats*. London: Palgrave Macmillan.
- Georgakakis, Didier (2018). European Integration. In: W. Outwaite and S. Turner (eds.). *The SAGE Handbook of Political Sociology* (pp. 1083-1103). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Georgakakis, Didier and Rowell, Jay (eds.) (2013). *The Field of Eurocracy: Mapping EU Actors and Professionals*. London: Springer.
- Georgakakis, Didier and Vauchez, Antoine (2015). "Le concept de champ à l'épreuve de l'Europe". *Enquêtes globales en sciences sociales*, (pp. 197-220). Paris: CNRS.
- Gerbaudo, Paolo (2021). *The Great Recoil: Politics after Populism and Pandemic*. London: Verso Books.
- Guiraudon, Virginie; Ruzza, Carlo and Trenz, Hans-Jörg (eds.) (2016). *Europe's Prolonged Crisis: The Making or the Unmaking of a Political Union*. London: Springer.
- Haahr, Jens H. and Walters, William (2004). *Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration*. London: Routledge.
- Haapala, Taru and Oleart, Álvaro (eds.) (2022). *Tracing the Politicisation of the EU*. London: Palgrave Macmillan.
- Hooghe, Liesbet and Marks, Gary (2009). "A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus". *British Journal of Political Science*, 39(01): 1-23.
- Iglesias, Pablo; Catalfo, Nunzia and Mendes Godinho, Ana (2020). "Hacia un ingreso mínimo europeo". *La Vanguardia*, 8 de mayo. Available at: <https://www.lavanguardia.com/economia/20200508/481016963163/hacia-un-ingreso-minimo-europeo.html>
- Kauppi, Niilo (2018). *Toward a Reflexive Political Sociology of the European Union*. London: Palgrave Macmillan.
- Keskinen, Suvi; Norocel, Ov C. and Jørgensen, Martin B. (2016). "The Politics and Policies of Welfare Chauvinism under The Economic Crisis". *Critical Social Policy*, 36(3): 321-329.
- Kitschelt, Herbert (2004). "Diversificación y reconfiguración de los sistemas de partidos de las democracias postindustriales". *Revista Española de Ciencia Política*, 10: 9-51.
- Kohler-Koch, Beate and Quittkat, Christine (2013). *De-mystification of Participatory Democracy: EU-governance and Civil Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Kriesi, Hanspeter (2016). "The Politicization of European Integration". *Journal of Common Market Studies*, 54: 32.
- Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Lachat, Romain; Dolezal, Martin; Bornschier, Simon and Frey, Timotheos (2006). "Globalization and the Transformation of the National Political Space: Six European Countries Compared". *European Journal of Political Research*, 45(6): 921-956.
- Kriesi, Hanspeter; Grande, Edgar; Dolezal, Martin; Helbling, Marc; Höglinger, Dominic; Hutter, Swen and Wüest, Bruno (2012). *Political Conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kutay, Acar (2021). *NGOs, Civil Society and Structural Changes*. Springer Nature.

- Larner, Wendy and Walters, William (eds.) (2004). *Global Governmentality: Governing International Spaces*. Abington: Routledge.
- Lipschutz, Ronnie (2005). Global Civil Society and Global Governmentality: or, the Search for Politics and the State Amidst the Capillaries of Social Power. In: M. Barnett and R. Duvall (eds.). *Power in global governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lo Schiavo, Lidia (2014). "Governance, Civil Society, Governmentality. The 'Foucauldian Moment' in the Globalization Debate: Theoretical Perspectives." *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(13): 181-197.
- Ludlow, Piers (2009). The European Commission and the Rise of Coreper: A Controlled Experiment. In: W. Kaiser; B. Leucht and M. Rasmussen (eds.). *The History of the European Union. Origins of a Trans- and Supranational Polity 1950-72*. London: Routledge.
- Middelaar, Luuk van (2018). *Quand l'Europe improvise. Dix ans de crises politiques*. Paris: Editions Gallimard.
- Mitchell, Katharyne (2006). "Neoliberal Governmentality in the European Union: Education, Training, and Technologies of Citizenship". *Environment and Planning D: Society and Space*, 24(3): 389-407. doi: 10.1068/d1804
- Moreno, Luis (2014). *Europa sin estados: unión política en el (des) orden global*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Oleart, Álvaro (2021). *Framing TTIP in the European Public Spheres*. London: Springer.
- Oleart, Álvaro and Bouza, Luis (2018a). "Democracy at Stake: Multipositional Actors and Politicization in the EU Civil Society Field". *Journal of Common Market Studies*, 56(4): 870-887. doi: 10.1111/jcms.12687
- Oleart, Álvaro and Bouza, Luis (2018b). Overcoming the Taboo: Disputes over European Values Via the European Citizens' Initiative. In: F. Foret and O. Calligaro (eds.). *European Values: Challenges and Opportunities for EU Governance*. New York: Routledge.
- Oleart, Álvaro and Gheyle, Niels (2022). "Executive Gladiators in the European Arena: Discursive Intergovernmentalism in the Politicization of the Covid-19 EU Recovery Plan". *Journal of European Integration*, 1-17. doi: 10.1080/07036337.2022.2085695
- Outhwaite, William (2008). *European Society*. Cambridge: Polity.
- Sandbu, Martin (2020). "EU Crosses the Rubicon with its Emergency Recovery Fund". *Financial Times*, 22 de julio. Available at: <https://www.ft.com/content/bd570dde-3095-4074-bd37-18003f2bd3c2>
- Schmidt, Vivien A. (2006). *Democracy in Europe: The EU and National Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Torreblanca, José I. (2014). *¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía*. Madrid: Catarata y Fundación Alternativas.
- Trenz, Hans-Jörg (2009). Social Theory and European Integration. In: A. Favell and V. Guiraudon. *Sociology of the European Union*. London: Palgrave Macmillan.
- Trenz, Hans-Jörg (2016). *Narrating European Society: Toward a Sociology of European Integration*. London: Palgrave Macmillan.
- Trenz, Hans-Jörg and De Wilde, Pieter (2009). "Denouncing European Integration: Euroscepticism as Reactive Identity Formation". RECON Online Working Paper 2009, no. 10, ARENA, University of Oslo. Available at: http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_0910.pdf?fileitem=16662597
- Vauchez, Antoine (2008). "The Force of a Weak Field: Law and Lawyers in the Government of the European Union (for a Renewed Research Agenda)". *International Political Sociology*, 2(2): 128-144.
- Vauchez, Antoine and France, Pierre (2021). *The Neoliberal Republic: Corporate Lawyers, Statecraft, and the Making of Public-Private France*. New York: Cornell University Press. doi: 10.1111/j.1749-5687.2008.00040.x
- Vidal, Guillem (2018). "Challenging Business as Usual? The Rise of New Parties in Spain in Times of Crisis". *West European Politics*, 41(2): 261-286.
- Zielonka, Jan (2007). *Europe as Empire: The Nature of the Enlarged European Union*. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1080/01402382.2015.1081505

RECEPTION: February 3, 2022

REVIEW: June 14, 2022

ACCEPTANCE: September 6, 2022

La dimensión espacial de la victimización anti-LGBTI en España

The Spatial Dimension of Anti-LGBTI Victimisation in Spain

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz

Palabras clave

Desigualdad

- España
- LGBTI
- Test de independencia
- Victimización

Key words

Inequality

- Spain
- LGBTI
- Independence Test
- Victimisation

Resumen

Las diferentes experiencias de victimización y las condiciones de vida de las personas LGBTI —lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales—, lejos de ser homogéneas, varían en el plano geográfico. Las desiguales vivencias se relacionan y comparan en distintos países, pero también regiones o municipios, algo que no ha escapado de la atención académica y mediática. A partir de datos para España de una encuesta en la Unión Europea, este artículo explora la relación de dependencia entre las respuestas sobre victimización y condiciones de vida con el lugar de residencia de las personas participantes, sobre el continuo rural-urbano. El test chi-cuadrado de independencia y los residuos estandarizados permiten rechazar la homogeneidad de las vivencias de las personas LGBTI, así como distinguir las problemáticas concretas para cada categoría de participantes.

Abstract

The experiences of victimisation and living conditions of LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) people are not homogeneous and vary by geographical location. There have been comparisons between the heterogeneous experiences of these population groups in different countries, regions and cities, which have attracted both academic and media attention. This article uses data for Spain from a European Union survey to examine how participants' responses to victimisation and living conditions vary according to where they live along the rural-urban continuum. After applying chi-squared tests of independence and standardised residuals, it was found that the experiences of LGBTI people were not homogeneous, and the specific problems faced by each group of participants could be identified.

Cómo citar

Domínguez Ruiz, Ignacio Elpidio (2023). «La dimensión espacial de la victimización anti-LGBTI en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 21-38. (doi: 10.5477/cis/reis.183.21)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz: Universitat de Barcelona | iedominguez@ub.edu

INTRODUCCIÓN¹

Las experiencias de violencia y discriminación sufridas por las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), y particularmente aquellas motivadas por prejuicios contra su orientación sexual o identidad y expresión de género, se caracterizan por consecuencias negativas para la salud física y mental (Walters, 2014). De manera significativa, estas consecuencias de experiencias de victimización pueden agravar situaciones previas de disparidades o desigualdades de salud (Mereish y Taylor, 2021; Rees, Crowe y Harris, 2021). Particularmente, si comparamos estas formas de violencia con otras similares pero sin motivación de prejuicios, la violencia caracterizada como anti-LGBTI puede ser entendida como una con efectos negativos tanto para víctimas² directas como para indirectas. Las experiencias de víctimas directas de incidentes violentos anti-LGBTI pueden incluir un amplio abanico, empezando con daño físico, pero también consecuencias psicológicas a largo plazo como sentimientos de miedo, ansiedad, aislamiento, soledad y depresión (Walters, 2014). Por otro lado, otras personas identificadas como LGBTI pueden experimentar consecuencias negativas como víctimas indirectas de ataques y discriminación, ya que las violencias anti-LGBTI pueden tener efectos colectivos más amplios, incluyendo sentimientos de miedo e inseguridad (Walters, 2019). Las experiencias de victimi-

zación de las personas LGTBI sirven como referente de la complejidad de las agresiones físicas y simbólicas: no son solo incidentes de daño físico inmediato o directo a la persona, sino que pueden afectar a otras personas LGTBI como víctimas indirectas (Walters, 2014). Estas experiencias sirven también para entender la dimensión social y colectiva del trauma, si entendemos como «trauma sistémico» aquel sufrido de manera histórica o continuada por grupos, con efectos en los sentidos de seguridad o protección, pertenencia y dignidad (Haines, 2019).

Según la última encuesta de victimización y condiciones de vida de las personas LGBTI de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2020a), más de un quinto de las personas participantes habían sido discriminadas por su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, mientras que un 11 % había vivido un ataque físico o sexual motivado por el mismo prejuicio en los cinco años anteriores a la encuesta. Los datos de dicha encuesta muestran también la diversidad de experiencias dentro de la aparentemente homogénea categoría de personas LGBTI. Esto se debe al hecho de que los datos muestran cómo diferentes colectivos vivieron experiencias de victimización de forma desigual: si el porcentaje promedio de experiencias de ataque físico o sexual fue del 11 %, este ascendía al 17 % y 22 % para las personas trans e intersexuales, respectivamente. De manera similar, si un 11 % de las personas participantes habían denunciado la experiencia más reciente de discriminación, solo el 9 % de las mujeres bisexuales había hecho lo mismo, comparado con el 17 % de personas intersexuales.

En este contexto, los datos de España, y la visibilidad del activismo y de la legislación específica de temática LGBTI, hacen que este país se muestre como uno de los más avanzados dentro de la Unión Europea. Pese a críticas o posibilidades de mejora, según barómetros de comparación de derechos, como el índice de ILGA Europe

¹ Quiero agradecer su apoyo y sus comentarios a Diego Parejo, Héctor Sánchez y Olga Jubany, así como a las personas que revisaron el artículo para la revista.

² En este artículo usamos la palabra «víctima» siguiendo su uso mayoritario en los materiales y los datos analizados. Esto no obsta para considerar debates contemporáneos que ponen en cuestión o incluso disputan la categoría «víctima» (véanse Chakraborti, 2018; Rothe y Kauzlarich, 2018). Apoyándonos en estas nociones, usamos «víctima directa» para referirnos a las personas directamente afectadas por una acción violenta o discriminatoria, y «víctima indirecta» para aquellas personas que hayan sufrido otros efectos de la acción por su adscripción al grupo objeto de violencia o discriminación.

(2022), la situación en España para las personas LGBTI muestra una evolución favorable. La comparación entre los datos de la segunda encuesta (FRA, 2020a) y los de la primera (FRA, 2013), sin datos de personas intersexuales, muestra una tímida evolución en temas como la visibilidad, el porcentaje de victimización de violencia física y en acoso, aunque este último caso es de difícil comparación entre las dos encuestas (véase tabla 1). La evolución entre 2012 y 2013 muestra prácticamente la misma victimización por orientación sexual, mientras que empeora para las personas trans, y los porcentajes de denuncia de los últimos incidentes de discriminación y de violencia física o sexual muestran un ligero empeoramiento. Por último, la satisfacción con la vida en general es prácticamente igual en

ambos períodos, mostrando una mejora casi imperceptible. Si nos centramos en los datos de 2019 (FRA, 2020a), vemos cómo la victimización de acoso y discriminación por ser LGBTI es prácticamente idéntica, respectivamente 41 y 42 %, mientras que las experiencias de violencia física o sexual en el último año solo llegan al 4 % de respuestas. Si desagregamos estos tres fenómenos por edad, observamos la misma dinámica: una mayor victimización en jóvenes (llegando al 52 % de discriminación en personas entre 18 y 24 años, por ejemplo), con porcentajes que bajan sobre todo desde los 40 años. La visibilidad de las personas participantes también es un factor clave en la victimización, particularmente por el acoso —menos en la gente nunca visible— y en la violencia —menor en la gente muy visible—.

TABLA 1. Comparación de los datos para España de preguntas clave en las encuestas de la FRA de 2012 y 2019

Pregunta	Respuestas	Resultado de 2012 (%)	Resultado de 2019 (%)
Visibilidad como persona LGBT/LGBTI	Muy visible + bastante visible	44,0	53,0
	Poco visible + nunca visible	57,0	47,0
Discriminación por orientación sexual	Sí	38,0	39,5
	No	60,0	60,5
Discriminación por ser trans	Sí	56,0	63,0
	No	39,0	37,0
Denuncia del último caso de discriminación	Sí	10,0	8,0
	No	87,0	91,0
Acoso por cualquier motivo en el último año	Sí	100,0	50,0
	No	0,0	50,0
Acoso recibido por ser LGBT/LGBTI	Sí	78,0	41,0
	No	17,0	59,0
Violencia física o sexual sufrida en los últimos 5 años por ser LGBTI	Sí		8,0
	No		92,0
Violencia física o sexual sufrida en el último año por ser LGBTI	Sí		4,0
	No		96,0
Denuncia del último caso de violencia física o sexual	Sí	18,0	16,0
	No	82,0	84,0
Satisfacción en general con la vida	Media (1-10)	6,9	7,0

Nota: Las preguntas sobre experiencias de acoso en 2012 se referían a cuántas experiencias había tenido la persona en los últimos doce meses, mientras que las preguntas de 2019 se referían a si la persona había experimentado acoso en los últimos doce meses. Para 2012 se han sumado todas las respuestas superiores a 0 como «Sí». Las preguntas sobre experiencias de violencia física o sexual no son comparables porque las de 2012 incluían también amenazas.

Fuente: FRA, 2013, 2020a.

La evolución reciente de la situación para las personas LGBTI en España puede observarse también desde la institucionalización y la visibilidad de sus reclamaciones y quejas. La historia reciente del activismo LGBTI español muestra una trayectoria de encuentros y desencuentros con fuerzas políticas de distinto signo, así como un proceso en el que las organizaciones más reformistas han ido relacionándose de forma cada vez más estrecha con Administraciones Públicas (Martínez, 2017; Mas y Jubany, 2019). Las muestras de apoyo institucional por algunos gobiernos autonómicos y por el estatal, así como los esfuerzos públicos en redacciones de leyes específicas, hablan de un proceso de institucionalización con potenciales efectos en las experiencias de victimización y condiciones de vida de las personas LGBTI como parte de un palimpsesto de legislaciones autonómicas o de una geografía de la diversidad sexual y de género (Domínguez Ruiz, 2018).

Desde este contexto, este artículo busca estudiar la dimensión espacial de las experiencias de victimización de las personas LGBTI en España. A partir de los datos de la mayor encuesta de victimización y de experiencias de personas LGBTI hecha en la Unión Europea, este artículo se centra en un análisis cuantitativo de la intersección entre las diferentes vivencias cotidianas y de victimización, por un lado, y los diferentes lugares de residencia dentro de un continuo rural-urbano. Tras esta introducción, el artículo pasa a exponer un marco teórico sobre cómo la diversidad sexual y de género, y en concreto su victimización asociada, se vincula con lo geográfico. Después el artículo pasa a explicar la metodología utilizada: un estudio de la relación entre las respuestas a un conjunto de preguntas identificadas como clave y la ubicación de las personas participantes dentro de dicho continuo espacial —de gran ciudad a campo, según las categorías utilizadas por la encuesta—. La hipótesis de independencia entre las dos categorías es testada a partir de datos secundarios, producidos por la Agencia

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los resultados del test chi-cuadrado son después pormenorizados con el estudio de los residuos estandarizados de Pearson.

MARCO TEÓRICO

Dentro de esta trayectoria y de la visibilidad de las necesidades y experiencias de las personas LGBTI, no obstante, ha faltado una perspectiva más centrada en la diversidad territorial o geográfica. Esta no es una cuestión específicamente española, sino que podemos relacionarla con inercias académicas y activistas que han priorizado las realidades y las producciones culturales de personas LGBTI en grandes ciudades. Bajo la idea de la «metronormatividad» encontramos visiones o expectativas sobre cómo las personas LGBTI necesitan mudarse a ciudades grandes y a espacios concretos para vivir cómoda y visiblemente (Stone, 2018). Lejos de entenderse como un concepto abstracto, puede verse como una dinámica relacional en la que determinadas ciudades o zonas urbanas actúan de «faros» o de polos atractores, como serían Barcelona y Madrid en España (Langarita, 2020; Langarita, Mas y Jubany, 2019; Langarita, Mas y Albertín, 2021). Esta concentración no sorprende dado el peso histórico, al menos en narrativas históricas de nivel nacional o estatal español, de los movimientos activistas y empresariales gays y LGBTI en estas dos ciudades (Martínez, 2017). Esta metronormatividad también se ha visto en el estudio académico de la dimensión espacial de las experiencias de las personas LGBTI, y, concretamente, desde la sociología y la geografía (Dwyer, Ball y Barker, 2015; Forstie, 2020; Stone, 2018).

La falta de estudios académicos que tomasen en cuenta la diversidad geográfica de las experiencias de personas LGBTI puede verse, por un lado, en los estudios de experiencias y realidades concretas de espacios alejados de las grandes ciudades. Los estu-

dios sociológicos, antropológicos y geográficos más recientes sí que han explorado de manera pormenorizada cómo viven personas LGBTI en espacios rurales, suburbanos y en periferias de grandes espacios o regiones. Podemos observar una gran diversidad de estudios, tratando temas como las masculinidades transrurales (Abelson, 2016), las experiencias de jóvenes LGBTI (Pedro, Lynch y Esqueda, 2018; Hulko y Hovanes, 2018), las motivaciones o expectativas migratorias (Thorsteinsson *et al.*, 2022) o las diferencias en salud en zonas rurales (Fisher, Irwin y Coleman, 2014; Glon *et al.*, 2021; Horvath *et al.*, 2014; Lyons, Leonard y Bariola, 2015). Si nos centramos en el caso de la Unión Europea y de España, podemos encontrar también relevantes estudios sobre la periferia de la Europa occidental, como Eslovenia o Croacia (Butterfield, 2018; Kuhar y Švab, 2014), así como casos de estudio centrados en Cataluña (Jubany, Langarita y Mas, 2021; Langarita, 2020; Langarita, Mas y Jubany, 2019; Langarita, Mas y Albertín, 2021).

Una segunda dimensión relevante de la diversidad espacial o geográfica en el estudio de las realidades de personas LGBTI, más allá de los casos de estudio concretos, es precisamente una mirada más amplia: cómo la espacialidad se cruza en las experiencias, vivencias y necesidades de personas LGBTI. La relevancia de la dimensión espacial de las experiencias de victimización de las personas LGBTI se explica, de manera resumida, por el hecho de que «[l]a opresión y la injusticia siempre tienen lugar en algún sitio, tienen un paradero» (Graham, 2016: 91), y por el hecho de que no solo los espacios céntricos se ven afectados por dinámicas económicas y socioculturales (Bell y Binnie, 2004). Un fenómeno que ha recibido creciente atención académica y activista sobre el papel de las dinámicas espaciales y migratorias en relación con la diversidad sexual y de género ha de ser complejizado por la posibilidad de reproducir de manera simple una dicotomía urbano-rural. El «sexilio» ha sido entendido

habitualmente como una narrativa migratoria de personas LGBTI que huyen de lo rural hacia lo urbano, buscando particularmente algunas dimensiones frecuente e históricamente ligadas a las grandes ciudades: el anonimato, la oferta comercial y laboral, y la posibilidad de huir de las cadenas del parentesco (Jubany, Langarita y Mas, 2021; Langarita, 2020). No obstante, como muestran estudios como el de Jose Antonio Langarita sobre Girona —la cual «exporta sexiliados, pero también recibe personas LGBT de otros territorios» (2020: 1355)—, hemos de cuestionar la división binaria en territorios importadores y exportadores, así como la habitual división tajante entre la ciudad y el campo. La dificultad de establecer una división clara entre lo rural y lo urbano, en términos binarios, ya ha sido puesta de manifiesto por estudios centrados en personas LGBTI (véanse Butterfield, 2018; Jubany, Langarita y Mas, 2021; Kuhar y Švab, 2014). La imprecisión de este binarismo puede explicarse si entendemos la «ruralidad» no como una mera cuestión numérica o de densidad, sino desde los discursos e imágenes que podemos asociar al extremo rural del continuo espacial (Langarita, Mas y Albertín, 2021). El carácter borroso de la barrera entre lo rural y urbano también puede entenderse desde la naturaleza relacional de las escalas geográficas, como ámbitos producidos mediante relaciones políticas, económicas y socioculturales (Carr y Lempert, 2016; González, 2005; Pillet, 2008).

METODOLOGÍA

Como ya se ha indicado, este artículo se basa en los datos de la encuesta FRA LGBTI-II (FRA, 2020a), la segunda edición de una encuesta masiva sobre experiencias de personas LGBTI en la Unión Europea y otros países cercanos. La encuesta de 2019 contó con la participación de 139 799 personas mayores de 15 años identificadas como lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersexual-

les, con resultados de la Unión Europea de los 28 —incluyendo a Reino Unido por el año de la encuesta—, así como de Macedonia del Norte y Serbia (*ibid.*: 9). La encuesta fue suministrada a través de una página web, después de una campaña publicitaria de varios meses que también incluyó la colaboración de oenegés LGBTI de los países participantes. Por su amplitud de intereses y contenidos, esta encuesta no puede resumirse en una de victimización, ya que incluía preguntas sobre las condiciones de vida, opiniones sobre la política en cuanto a derechos y protección de las personas LGBTI, experiencias de victimización, acoso o ataques físicos y sexuales, estado de salud autopercibido, etc. Esta encuesta se enfrentó a varias limitaciones metodológicas análogas a las de cualquier estudio cuantitativo sobre personas LGBTI, como su difícil acceso o «invisibilidad» (Bell, 2017), la dependencia respecto de la autoidentificación de las personas participantes (Doan, 2016) o la importancia de las definiciones (Guyan, 2022).

En este respecto, la encuesta de la FRA se basó en la autoidentificación de la orientación sexual, la cual podemos entender como «identidad sexual» o «cómo una persona entiende su sexualidad y los términos identitarios con los que se identifica» (Guyan, 2022: 76). Esta decisión, frente a alternativas como la «atracción» o el «comportamiento sexual» (*ibid.*), no obstante, limita qué personas se sintieron interpeladas por la encuesta y reduce el tamaño de la población LGBTI posible (OECD, 2019). Esta cuestión está relacionada con cómo consideremos las formas de violencia y prejuicios dirigidas hacia personas por su orientación sexual o identidad y expresión de género, sean reales o percibidas. La encuesta de la FRA utiliza estos términos —referencias a la percepción de la víctima como LGBTI— en lugar de conceptos extendidos como LGBTIfobia o LGBTI-fobia. Más allá de la utilidad de enfoques más amplios que se basen en la percepción, entendemos que hay una crítica al marco patologizante

en las construcciones con el sufijo «-fobia» (véase Herek, 2004), al poder entenderse los prejuicios como un problema individual incontrolable en vez de como un fenómeno social.

A estas limitaciones respondió la FRA, según su informe técnico, con una categorización amplia y con definiciones flexibles para facilitar la autoidentificación de las personas participantes en una de estas seis categorías centrales (2020a: 9). En cuanto al acceso, la FRA dependió de una campaña publicitaria y de contar con la colaboración de las personas participantes para que reenviaran la encuesta a más personas potencialmente interesadas. Esto responde a una recomendación clave en el diseño y producción de encuestas para personas LGBTI, añadiendo así al muestreo estratificado —por categorías centrales— una dimensión de bola de nieve (Michaels *et al.*, 2019). En cuanto a la cuantificación, la FRA llevó a cabo un diseño muestral que contó con un estudio comparativo de encuestas y estudios existentes para aproximarse a la población LGBTI (2020b: 12-14). A partir de este estudio obtuvieron una estimación del porcentaje poblacional de cada categoría central por grupos de edad.

A partir de esta encuesta y de la publicación en abierto de sus datos, por lo tanto, este artículo expone un análisis cuantitativo centrado en la intersección entre las respuestas a preguntas identificadas como clave, por un lado, con la ubicación geográfica de las personas participantes, por el otro. La mayoría de las preguntas contó con resultados para España con tamaños muestrales considerados suficientemente representativos, con algunas salvedades. Las respuestas de personas categorizadas como «intersexuales» son para algunas preguntas escasas, llegando incluso a no estar disponibles en el explorador de datos de la FRA. Particularmente en el caso de las preguntas secundarias, que exigen una respuesta previa a una anterior —por ejemplo, preguntas sobre denuncias de agresiones o acoso después de haber respondido que

sí se han vivido dichas experiencias— también muestran en ocasiones datos insuficientes en algunas categorías espaciales. En este respecto, el filtro espacial o geográfico de los datos nos permite clasificar las respuestas en cinco posibles espacios o lugares de residencia —con una residencia de al menos un año—: gran ciudad, suburbio o afueras de gran ciudad, ciudad pe-

queña o pueblo, aldea, campo. De manera parecida a los límites borrosos de las seis categorías centrales de la encuesta, podemos encontrar una limitación en la falta de definición de los lugares de residencia en la encuesta; dependemos de nuevo de la autoidentificación de las personas participantes, al margen de la población real de un municipio o lugar de residencia.

TABLA 2. *Estimación de población LGBTI por categoría central y grupo de edad, y tamaño muestral óptimo estimado para la encuesta de la FRA y muestra finalmente obtenida, para España*

Categoría central	Grupo de edad	Porcentaje ajustado	Muestra óptima estimada	Muestra obtenida depurada
Mujer lesbiana	15-34	2,29		
	35-54	1,49		
	55+	0,78		
	Total	1,46	1.616	2.458
Hombre gay	15-34	4,01		
	35-54	2,81		
	55+	1,55		
	Total	2,76	2.925	7.339
Mujer bisexual	15-34	3,38		
	35-54	0,96		
	55+	0,64		
	Total	1,62	1.635	6.406
Hombre bisexual	15-34	2,05		
	35-54	0,73		
	55+	0,62		
	Total	1,15	1.130	1.796
Trans	15-34	0,72		
	35-54	0,54		
	55+	0,51		
	Total	0,59	1.284	2.067
Intersexual	Total	0,10	224	114
Total LGBTI	Total	7,68	8.814	20.180

Fuente: FRA, 2020b.

El análisis se ha centrado en el estudio de la independencia entre las variables categóricas —la identidad y la residencia— y los resultados de las preguntas, mediante el uso del test chi-cuadrado como contraste entre las frecuencias de dos variables categóricas en función de un criterio o distri-

bución determinada (Agresti, 2012; Geher y Hall, 2014; Hanneman, Kposowa y Riddle, 2012; Wagner y Gillespie, 2019). La hipótesis nula de independencia entre las categorías ha sido testada para cada pregunta en función de las categorías centrales —buscando por tanto testar la relación entre la

adscripción a una de dichas categorías con las diferentes experiencias de prejuicios o victimización—, pero también en función del lugar de residencia para cada categoría central. Dado que el test chi-cuadrado no es direccional y no indica el sentido de la relación (Geher y Hall, 2014; Kraemer y Blasey, 2016), no informa sobre cómo es la asociación o la fuerza de la dependencia, para lo cual podemos optar por los residuos de Pearson. Por este motivo hemos calculado, además de los estadísticos chi-cuadrado y el p-valor para cada test, los residuos estandarizados de Pearson para aquellos casos en los que hemos podido rechazar la hipótesis nula de intensidad, a fin de poder aproximarnos a la dirección de las relaciones identificadas. Este nivel adicional de análisis sigue perteneciendo al ámbito de la correlación y no al de la causalidad, no obstante.

Una última reflexión metodológica tiene relación con las características de las encuestas de victimización y con sus diferencias respecto a otras fuentes de datos sobre victimización por delitos de odio o por prejuicios como aquellos en los que se centra este artículo. Si consideramos solo las instituciones públicas y privadas españolas que tratan delitos de odio en general o específicamente los motivados por la orientación sexual y la identidad y expresión de género, nos encontramos con un amplio abanico de fuentes con diferentes decisiones metodológicas para el registro. Así, el Ministerio del Interior recoge como «delitos de odio» aquellos hechos conocidos registrados ante comisarías, sumándoles también las infracciones administrativas y otros incidentes similares (Ministerio del Interior, 2020). Diferentes movimientos sociales LGBTI, por otro lado, registran incidentes a partir de testimonios y atenciones con víctimas, llegando por tanto a incluir no solo delitos, sino también incidentes no tipificados como delitos o no denunciados ante policías (FELGTB, 2020; OCH, 2022). Estos informes de ONG, no obstante, tienen una limitación de acceso y de despliegue territorial que no

tienen la Policía Nacional u otras administraciones públicas con mayor capilaridad geográfica, como la red de oficinas de atención de la Generalitat de Catalunya (Departament d'Igualtat i Feminismes, 2022). Esta divergencia hace que sea necesario considerar qué personas participaron en la encuesta de la FRA, y su comparación con los datos registrados por las fuentes anteriores. Mientras que los datos provenientes de registros posteriores a delitos o a incidentes pueden ser más esclarecedores sobre las experiencias directas de victimización, el hecho de que no consideren por definición a las personas que no han sufrido dichas experiencias o que no las han denunciado hace que las encuestas de victimización sean más adecuadas para obtener una imagen completa de la población objeto de estudio. Esto se debe a su consideración de las personas que no han sufrido experiencias de victimización o que, habiéndolas sufrido, no lo han denunciado. A pesar de ello, es necesario considerar el filtro previo que ejerce la autoidentificación en la encuesta, así como las limitaciones que pueda tener al no poder llegar a una población «invisible» (Bell, 2017).

ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este apartado se exponen los resultados del análisis de la hipótesis nula de independencia de las intersecciones entre variables categóricas. El uso del test chi-cuadrado nos lleva a la estimación de p-valores para cada cruce de categorías, y han sido considerados significativos en relación con las probabilidades de rechazar la hipótesis nula con niveles de confianza del 90 %, 95 % y 99 %. Tras el análisis de la significatividad de la posibilidad de rechazo de la hipótesis nula se han calculado los residuos estandarizados de Pearson en aquellos casos en los que se ha podido rechazar la hipótesis nula, y se han considerado como significativos los residuos estandarizados con un valor absoluto mayor de 3.

TABLA 3. Resultados significativos del test chi-cuadrado de la independencia

	Categorías centrales	Mujeres lesbianas	Hombres gais	Mujeres bisexuales	Hombres bisexuales	Trans	Intersexuales
Ámbito: Visibilidad y vida cotidiana							
¿Evitas ir de la mano de pareja del mismo sexo por miedo de vivir acoso, amenazas o un ataque?	(**)			(***)			
¿Evitas algunos lugares concretos por miedo de vivir acoso, amenazas o un ataque por ser LGBTI?	(*)		(**)	(***)	(***)	(***)	(***)
¿En qué lugares evitas la visibilidad por miedo de vivir acoso, amenazas o un ataque?				(***)			
Nivel de satisfacción con la vida				(*)	(***)	(***)	(***)
Percepción del estado de la salud	(***)				(***)	(***)	(***)
¿Has tenido algún sentimiento de depresión o tristeza en las últimas dos semanas?	(***)			(**)	(***)	(***)	(***)
¿Eres visible como persona LGBTI?	(***)		(**)	(***)	(*)	(***)	(***)
¿Participas en una o más organizaciones para personas LGBTI?						(*)	(***)
Ámbito: Discriminación							
¿Has sufrido discriminación en los últimos doce meses en 8 ámbitos de la vida?	(***)			(***)		(***)	
¿Denunciaste o comunicaste el último incidente de discriminación?						(*)	—
¿Por qué no denunciaste o comunicaste el último incidente de discriminación?		—	—	—	—	—	—
Ámbito: Violencia física o sexual							
¿Has sufrido ataques físicos o sexuales por ser LGBTI en los últimos cinco años?	(***)				(***)	(***)	(*)
¿Has sufrido ataques físicos o sexuales por ser LGBTI en los últimos doce meses?	(***)					(**)	
¿Denunciaste o comunicaste el último incidente de ataque físico o sexual motivado por odio?	(**)	(***)	(***)		(**)	(**)	—
¿A quién denunciaste o comunicaste el último incidente de ataque físico o sexual motivado por odio?	(***)	—	—	—	—	—	—
¿Por qué no denunciaste el último incidente de ataque físico o sexual motivado por odio a la Policía?	(***)	—	—	—	—	—	—
¿Qué efectos tuvo el último incidente violento motivado por odio, en la salud y en el bienestar?	(***)	—	—	—	—	—	—

TABLA 3. Resultados significativos del test chi-cuadrado de la independencia (Continuación)

	Categorías centrales	Mujeres lesbianas	Hombres gays	Mujeres bisexuales	Hombres bisexuales	Trans	Intersexuales
Ámbito: Acoso							
¿Has sufrido experiencias de acoso por ser LGBTI en los últimos doce años?	(*)		(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
¿Denunciaste o comunicaste el último incidente de acoso motivado por odio?	(**)	—	—	—	—	—	—
¿A quién denunciaste o comunicaste el último incidente de acoso motivado por odio?		—	—	—	—	—	—
¿Por qué no denunciaste el último incidente de acoso motivado por odio a la Policía?	(**)	—	—	—	—	—	—
Ámbito: Actitudes sociales y respuesta gubernamental							
¿Cómo percibes que ha cambiado el prejuicio e intolerancia contra personas LGBTI en los últimos cinco años?				(**)		(***)	(***)
¿Cómo percibes que ha cambiado la violencia contra personas LGBTI en los últimos cinco años?			(*)	(***)	(***)	(***)	(***)
¿Por qué crees que han aumentado el prejuicio, intolerancia y/o violencia?				(***)		(**)	
¿Por qué crees que han descendido el prejuicio, intolerancia y/o violencia?				(***)			—
¿Cómo ves de efectivo al Gobierno para combatir prejuicio e intolerancia contra las personas LGBTI?	(***)				(***)	(***)	(***)
¿Cómo ves de efectiva la respuesta del Gobierno a las necesidades de seguridad de las personas LGBTI?	(***)				(***)	(***)	(***)

Nota: *** (p < 0,01); ** (p < 0,05); * (p < 0,1); — (datos insuficientes para el test); no significativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta EU-LGBTI II.

Un primer eje de análisis es la consideración de la comparación entre las categorías centrales, como análisis de cómo de homogénea o heterogénea es la victimización o las experiencias entre las categorías centrales —mujeres lesbianas, hombres gays, mujeres bisexuales, hombres bisexuales, per-

sonas trans, personas intersexuales—. Este análisis ha buscado por lo tanto comprobar si podemos hablar en términos estadísticos de una homogeneidad relativa de las experiencias de las personas LGBTI como comunidad, colectivo o minoría. En este sentido, podemos afirmar la relativa heterogeneidad,

al observar diferencias significativas entre las categorías centrales en la mayoría de preguntas, y con niveles de confianza elevados, en temas como la salud, la visibilidad, las experiencias de discriminación y violencia, etc. Como podemos observar en la tabla 4, con

una cuestión como es la visibilidad como persona LGBTI, identificamos diferencias significativas entre las categorías, con una mayor visibilidad comparativa entre mujeres lesbianas y hombres gays y menor entre los hombres bisexuales.

TABLA 4. *Tabla de contingencia de las categorías identitarias centrales con las respuestas de la pregunta sobre visibilidad como persona LGBTI*

	Nunca visible	Poco visible	Bastante visible	Siempre visible
Mujeres lesbianas	12	23	30	35
Hombres gays	12	20	30	38
Mujeres bisexuales	30	30	26	14
Hombres bisexuales	45	25	22	8
Trans	39	24	21	16
Intersexuales	38	27	22	13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta EU-LGBTI II.

Más allá de la cuestión de la visibilidad para mujeres lesbianas y hombres gays, podemos identificar también cómo los datos señalan que el resto de categorías centrales experimentan mayores o más graves instancias de problemas de salud, discriminación y agresiones. Destacan de manera significativa los resultados negativos de experiencias de victimización y de infradenuncia por parte de personas trans e intersexuales. Todo ello lleva a la afirmación de la diferencia significativa entre las categorías centrales, pudiendo por lo tanto asumir una heterogeneidad relativa entre las personas LGBTI. No se puede llegar con estos datos a un análisis similar sobre el lugar de residencia: tomando las respuestas de las personas LGBTI en su conjunto, en función de su lugar de residencia, no hay diferencias significativas por lo que no podemos aceptar que las experiencias de las personas LGBTI sean homogéneas tampoco para un mismo tipo de lugar de residencia.

Centrando el análisis en cada categoría identitaria y en cómo sus respuestas varían en función del lugar de residencia, los

datos muestran diferencias significativas dentro del continuo rural-urbano. Desde las grandes ciudades hasta el campo, los datos muestran heterogeneidad en la mayoría de categorías identitarias, señalando hacia experiencias de victimización y de condiciones de vida significativamente distintas o variadas en función de dónde viven las personas participantes. La categoría central de las mujeres lesbianas es la que menos información ofrece desde el análisis, ya que la única asociación detectada con el lugar de residencia tiene relación con la denuncia o infradenuncia de los ataques físicos o sexuales —con más denuncias en el centro del continuo rural-urbano—. Aunque para algunas preguntas la muestra de mujeres lesbianas participantes desde el campo o desde el extremo rural pueda ser tan reducida que afecte al análisis, sí se puede afirmar una mayor homogeneidad espacial para esta categoría central que para el resto.

En el caso de los hombres gays, encontramos más indicios de diferencias significativas en función del lugar de residencia, aunque siguen siendo pocos en compara-

ción con el resto de categorías centrales. Se pueden identificar muestras significativas de heterogeneidad en función del punto del continuo rural-urbano para cuestiones como la percepción del cambio de la violencia contra personas LGBTI, el evitar o no sitios por miedo a violencia, la visibilidad, la denuncia o infradenuncia del último ataque físico o sexual y las experiencias de acoso en el último año. En casos como en el de estas experiencias —véase tabla 5—, se puede identificar una mejor experiencia en el extremo rural del continuo para los hombres gays, mientras que el extremo urbano del continuo es comparativamente más favorable según los datos para denunciar el último ataque físico o sexual. Estos datos permiten afirmar que para los hombres gays el extremo rural del continuo espacial

es significativamente mejor o más vivible, mientras que el extremo urbano ofrece mejores condiciones para denunciar ataques, probablemente por la visibilidad de organizaciones activistas.

TABLA 5. *Tabla de contingencia de hombres gays respecto del espacio para la pregunta sobre experiencias de acoso*

	Sí	No
Ciudad	40	60
Suburbios	41	59
Pueblo	42	58
Aldea	45	55
Campo	16	84

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta EU-LGBTI II.

TABLA 6. *Tabla de contingencia de mujeres bisexuales respecto del espacio para la pregunta sobre la pregunta de si se evita ser visible en sitios por miedo*

	Siempre	A menudo	Poco	Nunca
Ciudad	8	22	42	29
Suburbios	6	16	43	35
Pueblo	5	20	35	40
Aldea	6	17	40	37
Campo	1	4	41	53

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta EU-LGBTI II.

Las experiencias de victimización y las condiciones de vida para las mujeres y los hombres bisexuales, por otro lado, indican un número mayor de instancias en las que el análisis prueba diferencias significativas en función del lugar de residencia. Algunas de estas diferencias son comunes para ambas categorías, por lo que podemos señalar cómo la bifobia (Domínguez Ruiz, 2017) puede afectar de manera relacionada a hombres y mujeres, en cuestiones como el evitar o no lugares concretos por miedo, la satisfacción general con la vida y la salud, la visibilidad, las experiencias de acoso y

la percepción sobre cambios en la violencia contra las personas LGBTI. Las experiencias pueden ser diferentes, no obstante, como por ejemplo en el hecho de que las mujeres bisexuales eviten menos lugares por miedo en el extremo rural del continuo mientras que los hombres bisexuales hagan lo opuesto. Se observa en general una tendencia según la cual el extremo rural del continuo ofrece unos resultados marcadamente favorables para las mujeres bisexuales y significativamente desfavorables para los hombres, como puede verse en las tablas 6 y 7.

TABLA 7. *Tabla de contingencia de hombres bisexuales respecto del espacio para la pregunta sobre la pregunta de si se evita ser visible en sitios por miedo*

	Siempre	A menudo	Poco	Nunca
Ciudad	9	20	32	38
Suburbios	10	24	28	37
Pueblo	10	18	32	40
Aldea	8	31	35	25
Campo	28	14	41	17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta EU-LGBTI II.

Atendiendo a las asociaciones significativas solamente para las mujeres bisexuales, observamos muestras relevantes de heterogeneidad en función del lugar de residencia para temas como el evitar ir de la mano de una pareja del mismo sexo, qué sitios concretos se evitan, las experiencias de victimización, y preguntas sobre percepciones de cambios sociales. De nuevo los datos señalan una experiencia significativamente favorable para las mujeres bisexuales residentes en el extremo rural del continuo espacial, en cuestiones como experiencias de victimización, pero también de puntos de vista sobre la sociedad o las acciones de gobiernos. Pese a que la muestra de respuestas desde el campo sea más reducida que en otros lugares de residencia, el hecho de contar con un continuo con cinco lugares de residencia nos permite afirmar la coherencia de los datos gracias a los residuos estandarizados. Si atendemos al análisis específico de los datos para hombres bisexuales, por otro lado, encontramos diferencias significativas en función del lugar de residencia para temas como la percepción de la salud, la victimización por ataques físicos o sexuales, la denuncia o no de la última experiencia de ataque, y preguntas sobre la eficacia o el apoyo institucional en cuanto a las necesidades de las personas LGBTI y a la lucha contra los prejuicios. Siguiendo con la dinámica ya mencionada, podemos afirmar que los datos son marcadamente más desfavorables en el extremo rural del continuo, siendo por lo

tanto una situación opuesta a la de las mujeres bisexuales.

Se pueden observar aún más indicios de heterogeneidad relativa al lugar de residencia para las respuestas de personas trans e intersexuales, pero este análisis tiene que verse matizado por las muestras y, sobre todo, para el segundo caso, ya que vimos que la muestra obtenida de personas intersexuales para España fue menor que la buscada. En el caso de las respuestas de personas trans, se pueden identificar diferencias significativas en función del lugar de residencia en temas como la salud, evitar sitios por miedo, la visibilidad, participar o no en el activismo, todos los tipos de experiencias de victimización y denunciarlas o no, y percepciones sobre la sociedad y las acciones gubernamentales. De manera parecida a las mujeres bisexuales, se identifican experiencias marcadamente más favorables para las personas trans en el extremo rural del continuo espacial, salvo por dos cuestiones: la salud en general y las experiencias de acoso. Dicho de otro modo, se encuentran una vivencia ambivalente del extremo rural en la que se observan experiencias más favorables para las personas trans en cuestiones como la violencia física o sexual y la discriminación, pero peor para el acoso. Se puede asumir por tanto un mayor acoso en el extremo rural, sin que vaya acompañado —más bien lo contrario— de una mayor discriminación o violencia física o sexual hacia las personas trans.

Finalmente, atendiendo a las experiencias y condiciones de vida de las personas intersexuales, es necesario matizar la representatividad de las respuestas por la muestra reducida, particularmente en el extremo rural del continuo. Las escasas respuestas señalan hacia diferencias significativas en función del lugar de residencia para temas como la salud, el evitar determinados sitios, la visibilidad, participar o no en el activismo, los ataques en los últimos cinco años, el acoso y algunas percepciones sobre la sociedad y los gobiernos. Se puede identificar, dentro de las limitaciones señaladas, una situación algo más favorable en los extremos del continuo —tanto en grandes ciudades como en el campo—, y peor en torno a los suburbios o afueras de ciudades. El papel significativo de esta ubicación concreta es algo singular para esta categoría central, aunque la muestra reducida limita en gran medida el análisis.

CONCLUSIONES

Al igual que Clare Forstie (2020: 159), no podemos argumentar que haya experiencias homogéneas o unificadas de personas LGBTI, ni siquiera dentro de un lugar de residencia concreto. Los datos provenientes de la encuesta EU-LGBTI-II, a pesar de algunas limitaciones muestrales para algunas combinaciones de categorías identitarias y de lugar de residencia, permiten aproximarse a una visión de la heterogeneidad interna de la comunidad, el colectivo o la población LGBTI. Estos datos también señalan hacia unas experiencias en términos de salud, victimización y visibilidad marcadamente peores para las personas trans e intersexuales, en comparación con las de los hombres gays y las mujeres lesbianas. De manera similar, identificamos cómo las experiencias y condiciones de los hombres y de las mujeres bisexuales son significativamente diferentes. Los datos aquí ex-

puestos apoyan el argumento de Jubany, Langarita y Mas de cuestionar «la presunción habitual de que la gran ciudad es el espacio inherente de la liberación sexual, como fue dicho en los ochenta y noventa» (2021: 15). Si atendemos a cómo las respuestas a las preguntas de la encuesta se cruzan con la dimensión espacial —por el lugar de residencia—, es posible aproximarse con cautela hacia una experiencia más favorable en el extremo rural-urbano para hombres gays y mujeres bisexuales, en temas como la visibilidad, la discriminación y el acoso. Estos datos también señalan hacia una experiencia significativamente desfavorable en el mismo extremo rural para los hombres bisexuales. Estos resultados, no obstante, deben entenderse desde la cautela de las limitaciones metodológicas de la muestra obtenida, y por tanto pueden verse como un paso más, de ninguna manera definitivo, hacia la comprensión cuantitativa de las experiencias de victimización y las condiciones de vida de las personas LGBTI en España. El carácter autoadministrado de la encuesta, su acceso a la población objeto de estudio, así como el posible sesgo de la autoselección de las personas participantes, hacen que sean necesarias más encuestas en esta línea.

Este artículo interpela a las críticas frecuentes al reduccionismo cuantitativo o incluso al uso de metodologías cuantitativas desde los estudios queer, por sospechas contra el positivismo y por trayectorias de opresión (Corkley y Awad, 2013; Grzanka, 2019). Frente a estas críticas, no obstante, se puede argumentar cómo un uso de la estadística centrado en la interacción entre variables, desde «un análisis centrado en las personas» puede ilustrar «patrones cualitativamente distintos de respuestas a múltiples variables» y «cómo de comúnmente —es decir, cuantitativamente— ocurren estos patrones en los datos» (Grzanka, 2019: 95). El uso de los datos de la encuesta de la FRA nos permite también con-

trastar el caso español con estudios sobre la dimensión geográfica de las experiencias de las personas LGBTI, y en concreto de aquellas en espacios alejados de las grandes urbes. Así, si el estudio de Glon *et al.* (2021) sobre la salud en hombres gais y bisexuales en Oklahoma mostraba cómo la ruralidad no tenía una relación significativa con los problemas de salud vinculados a los rechazos o prejuicios sufridos, podemos argumentar que en el caso español sí hemos identificado una situación más desfavorable para los hombres bisexuales en el extremo rural del continuo. Nuestros datos confirman los hallados por Fisher, Irwin y Coleman (2014) para personas bisexuales en las Midlands de Nebraska, aunque en su caso extendieron este análisis también a las mujeres bisexuales. Finalmente, nuestros datos refuerzan la relativa homogeneidad de las experiencias de personas lesbianas y gais en cuanto a la salud al margen de su espacio de residencia, como hallaron para Australia Lyons, Leonard y Bariola (2015).

En líneas generales, podemos afirmar el carácter local o particular de territorios como el Estado español, hecho que nos lleva a defender la complementariedad de investigaciones cualitativas y cuantitativas, o de métodos mixtos, para explorar las especificidades de las vivencias y experiencias de victimización. La necesidad de estudios cualitativos en profundidad en espacios más allá de ciudades como Barcelona y Madrid se explica por la importancia de factores tan diversos como el tamaño y la densidad de una comunidad local, pero también la historia, las costumbres y normas locales, o la cercanía a áreas metropolitanas (Forstie, 2020; Kuhar y Švab, 2014). La importancia de la dimensión cultural y de la heterogeneidad contrastada con los datos de la encuesta del FRA nos lleva a argumentar en contra de estudiar desde una perspectiva unívoca u homogénea a las personas LGBTI, al margen de

su lugar de residencia. Puede ser más productivo privilegiar una mirada que entienda que las experiencias de victimización emanan del mismo sistema de opresión, pero que las diferencias y desigualdades socioculturales, económicas y geográficas llevan a vivencias significativamente distintas. De igual manera, puede ser productiva la aplicación del concepto de Amin Ghaziani de «culturas sexuales» —y de género—, entendidas como «los diversos contextos y tradiciones que dan significado a nuestros cuerpos y a las maneras en que los usamos en nuestra búsqueda de placer» (2017: 16). Aunque esta propuesta conceptual se centra en la orientación sexual, entendemos que una mirada que piense de forma análoga en cómo de locales son las experiencias de la identidad y expresión de género enriquecen el conocimiento y la comprensión de la diversidad sexual y de género.

BIBLIOGRAFÍA

- Abelson, Miriam J. (2016). «'You Aren't from Around Here': Race, Masculinity, and Rural Transgender Men». *Gender, Place & Culture*, 23(11): 1535-1546. doi: 10.1080/0966369X.2016.1219324
- Agresti, Alan (2012). *Categorical Data Analysis*. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Bell, Mark (2017). *Data Collection in Relation to LGBTI People: Analysis and Comparative Review of Equality Data Collection Practices in the European Union*. Brussels: Directorate-General for Justice and Consumers, European Union.
- Bell, David y Binnie, Jon (2004). «Authenticating Queer Space: Citizenship, Urbanism and Governance». *Urban Studies*, 41(9): 1807-1820. doi: 10.1080/0042098042000243165
- Butterfield, Nicole (2018). «Imagined Rural/Regional Spaces: Non-Normative Sexualities in Small Towns and Rural Communities in Croatia». *Journal of Homosexuality*, 65(13): 1709-1733. doi: 10.1080/00918369.2017.1383111
- Carr, E. Summerson y Lempert, Michael (eds.) (2016). *Scale. Discourse and Dimensions of Social Life*. Oakland, California: University of California Press.

- Chakraborti, Neil (2018). Victims of Hate Crime. En: S. Walklate (ed.). *Handbook of Victims and Victimology* (pp. 141-155). London: Routledge.
- Corkley, Kevin y Awad, Germaine H. (2013). «In Defense of Quantitative Methods: Using the 'Master's Tools' to Promote Social Justice». *Journal of Social Action in Counseling and Psychology*, 5(2): 26-41. doi: 10.33043/JSACP.5.2.26-41
- Departament d'Igualtat i Feminismes (2022). *Informe sobre les denúncies i incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya (2021)*. Barcelona: Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
- Doan, Petra L. (2016). «To Count or Not to Count: Queering Measurement and the Transgender Community». *Women's Studies Quarterly*, 44(3/4): 89-110. doi: 10.1353/wsq.2016.0037
- Domínguez Ruiz, Ignacio E. (2017). *Bifobia: etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTB*. Barcelona: Egales.
- Domínguez Ruiz, Ignacio E. (2018). *Cuando muera Chueca: origen, evolución y final(es) de los espacios LGTBI*. Barcelona: Egales.
- Dwyer, Angela; Ball, Matthew y Barker, Emma (2015). «Policing LGBTIQ People in Rural Spaces: Emerging Issues and Future Concerns». *Rural Society*, 24(3): 227-243. doi: 10.1080/10371656.2015.1099264
- FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales) (2020). *Informe 2019 Delitos de Odio*. Madrid: FELGTB.
- Fisher, Christopher M.; Irwin, Jay A. y Coleman, Jason D. (2014). «LGBT Health in the Midlands: A Rural/Urban Comparison of Basic Health Indicators». *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1062-1090. doi: 10.1080/00918369.2014.872487
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2013). *EU LGBT Survey. European Union Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Survey*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2020a). *EU-LGBTI II: A Long Way to Go for LGBTI Equality*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2020b). *EU-LGBTI II: A Long Way to Go for LGBTI Equality. Technical Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Forstie, Clare (2020). «Theory Making from the Middle: Researching LGBTQ Communities in Small Cities». *City & Community*, 19(1): 153-168. doi: 10.1111/cico.12446
- Geher, Glenn y Hall, Sara (2014). *Straightforward Statistics: Understanding the Tools of Research*. Oxford: Oxford University Press.
- Ghaziani, Amin (2017). *Sex Cultures*. Cambridge: Polity Press.
- Glon, Brendon; Giano, Zachary; Hubach, Randolph y Hammer, Tonya (2021). «Rurality, Gay-Related Rejection Sensibility, and Mental Health Outcomes for Gay and Bisexual Men». *Journal of Gay & Lesbian Mental Health*, 25(4): 408-426. doi: 10.1080/19359705.2020.1850595
- González, Sara (2005). «La geografía escalar del capitalismo actual». *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, IX(189).
- Graham, Mark (2016). *Anthropological Explorations in Queer Theory*. New York: Routledge.
- Grzanka, Patrick R. (2019). Queer Survey Research and the Ontological Dimensions of Heterosexism. En: A. Ghaziani y M. Brim (eds.). *Imagining Queer Methods* (pp. 84-102). New York: New York University Press.
- Guyan, Kevin (2022). *Queer Data. Using Gender, Sex and Sexuality Data for Action*. London: Bloomsbury.
- Haines, Staci K. (2019). *The Politics of Trauma: Somatics, Healing, and Social Justice*. Berkeley, California: North Atlantic Books.
- Hanneman, Robert A.; Kposowa, Augustine J. y Riddle, Mark D. (2012). *Basic Statistics for Social Research*. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Herek, Gregory M. (2004). «Beyond "Homophobia": Thinking about Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century». *Sexuality Research & Social Policy*, 1: 6-24. doi: 10.1525/srsp.2004.1.2.6
- Horvath, Keith J.; Iantaffi, Alex; Swinburne-Romine, Rebecca y Bockting, Walter (2014). «A Comparison of Mental Health, Substance Use, and Sexual Risk Behaviors Between Rural and Non-Rural Transgender Persons». *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1117-1130. doi: 10.1080/00918369.2014.872502
- Hulko, Wendy y Hovaness, Jessica (2018). «Intersectionality in the lives of LGBTQ Youth: Identifying as LGBTQ and Finding Community in Small Cities and Rural Towns». *Journal of Homosexuality*, 65(4): 427-455. doi: 10.1080/00918369.2017.1320169
- ILGA Europe (2022). *Rainbow Europe Index 2021*. Brussels: ILGA Europe.

- Jubany, Olga; Langarita Adiego, Jose A. y Mas Grau, Jordi (2021). «“There is LGBTQ Life Beyond the Big City”: Discourses, Representations and Experiences in Two Medium-Sized Spanish Cities». *Journal of Homosexuality*, 69(11): 1908-1927. doi: 10.1080/00918369.2021.1933787
- Kraemer, Helena Ch. y Blasey, Christine (2016). *How Many Subjects?* New York: Sage. doi: 10.4135/9781483398761
- Kuhar, Roman y Švab, Alenka (2014). «The Only Gay in the Village? Everyday Life of Gays and Lesbians in Rural Slovenia». *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1091-1116. doi: 10.1080/00918369.2014.872492
- Langarita Adiego, Jose A. (2020). «Sexual and Gender Diversity in Small Cities: LGBT Experiences in Girona, Spain». *Gender, Place & Culture*, 27(9): 1348-1365. doi: 10.1080/0966369X.2019.1710473
- Langarita Adiego, Jose A.; Mas Grau, Jordi y Jubany, Olga (2019). «Geografías de la diversidad sexogenérica más allá de la gran ciudad: experiencias, discursos y prácticas en dos ciudades medianas de Cataluña». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 65(3): 473-492. doi: 10.5565/rev/dag.572
- Langarita Adiego, Jose A.; Mas Grau, Jordi y Albertín, Pilar (2021). «Local Government Policies on Sexual and Gender Diversity in Spain. Experiences from Alt Empordà». *Local Government Studies*. doi: 10.1080/03003930.2021.1932480
- Lyons, Anthony; Leonard, William y Bariola, Emily (2015). «Mental Health and Resilience among Rural Australian Lesbians and Gay Men». *Rural Society*, 24(3): 244-265. doi: 10.1080/10371656.2015.1099268
- Martínez, Ramón (2017). *Lo nuestro sí que es mundial: una introducción a la historia del movimiento LGTB en España*. Barcelona-Madrid: Egales.
- Mas Grau, Jordi y Jubany, Olga (2019). «De la révolution sexuelle à l'inclusion sociale des expressions LGBT+. Le processus d'obtention des droits LGBT en Espagne». *Drot et Culture*, 77(1): 53-68.
- Mereish, Ethan H. y Taylor, M. Son (2021). Sexual and Gender Minority People's Physical Health and Health Risk Behaviors. En: K. L. Nadal y M. R. Scharón-del Río (eds.). *Queer Psychology* (pp. 81-102). New York: Springer.
- Michaels, Stuart; Pineau, Vicki; Reimer, Becky; Ganesh, Nedarajasundaram y Dennis, J. Michael (2019). «Test of a Hybrid Method of Sampling the LGBT Population: Web Respondent Driven Sampling with Seeds from a Probability Sample». *Journal of Official Statistics*, 35(4): 731-752. doi: 10.1525/srsp.2004.1.2.6
- Ministerio del Interior (2020). *Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España*. Madrid: Ministerio del Interior, Gobierno de España.
- OCH (Observatori contra l'Homofòbia) (2022). *L'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya*. Barcelona: OCH.
- OECD (2019). *Society at a Glance 2019. OECD Social Indicators: A Spotlight on LGBT People*. Paris: OECD Publishing.
- Pedro, Kris T. de; Lynch, R. Jason y Esqueda, Mónica C. (2018). «Understanding Safety, Victimization and School Climate among Rural Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning (LGBTQ) Youth». *Journal of LGBT Youth*, 15(4): 265-279. doi: 10.1080/19361653.2018.1472050
- Pillet Capdepón, Félix (2008). «Las escalas del espacio: desde lo global a lo local». *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XX, 270(5).
- Rajaretnam, T. (2015). *Statistics for Social Sciences*. New York: Sage.
- Rees, Samuel N.; Crowe, Maria y Harris, Shirley (2021). «The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities' Mental Health Care Needs and Experiences of Mental Health Services: An Integrative Review of Qualitative Studies». *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 28(4): 578-589. doi: 10.1111/jpm.12720
- Rothe, Dawn L. y Kauzlarich, David (2018). We Are All Complicit: Victimization and Crimes of the Powerful. En: S. Walklate (ed.). *Handbook of Victims and Victimology* (pp. 348-363). London: Routledge.
- Stone, Amy L. (2018). «The Geography of Research on LGBTQ Life: Why Sociologists Should Study the South, Rural Queers, and Ordinary Cities». *Sociology Compass*, 12(11): e12638. doi: 10/1111/soc4.12638
- Thorsteinsson, Einar B.; Bjardnson, Thoroddur; Loi, Natasha M. y Arnarsson, Arsaell M. (2022). «Sexual Orientation and Migration Intentions among Rural, Exurban and Urban Adolescents in Iceland». *Culture, Health & Sexuality*, 24(1): 31-47. doi: 10.1080/13691058.2020.1813333

- Wagner III, William E. y Gillespie, Brian J. (2019). *Using and Interpreting Statistics in the Social, Behavioral, and Health Sciences*. New York: Sage.
- Walters, Mark A. (2014). *Hate Crime and Restorative Justice: Exploring Causes, Repairing Harm*. Oxford: Oxford University Press.
- Walters, Mark A. (2019). «Repairing the Harms of Hate Crime: Towards a Restorative Justice Ap-

proach». En: *Actas del 171st International Senior Seminar of the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders Criminal justice Response to Crimes Motivated by Intolerance and Discrimination*. Disponible en: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No108/No108_10_VE_Walters.pdf, acceso 15 de marzo de 2023.

RECEPCIÓN: 06/04/2022

REVISIÓN: 21/06/2022

APROBACIÓN: 06/09/2022

The Spatial Dimension of Anti-LGBTI Victimization in Spain

La dimensión espacial de la victimización anti-LGBTI en España

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz

Key words

- Inequality
- Spain
 - LGBTI
 - Independence Test
 - Victimization

Palabras clave

- Desigualdad
- España
 - LGBTI
 - Test de independencia
 - Victimización

Abstract

The experiences of victimisation and living conditions of LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) people are not homogeneous and vary by geographical location. There have been comparisons between the heterogeneous experiences of these population groups in different countries, regions and cities, which have attracted both academic and media attention. This article uses data for Spain from a European Union survey to examine how participants' responses to victimisation and living conditions vary according to where they live along the rural-urban continuum. After applying chi-squared tests of independence and standardised residuals, it was found that the experiences of LGBTI people were not homogeneous, and the specific problems faced by each group of participants could be identified.

Resumen

Las diferentes experiencias de victimización y las condiciones de vida de las personas LGBTI —lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales—, lejos de ser homogéneas, varían en el plano geográfico. Las desiguales vivencias se relacionan y comparan en distintos países, pero también regiones o municipios, algo que no ha escapado de la atención académica y mediática. A partir de datos para España de una encuesta en la Unión Europea, este artículo explora la relación de dependencia entre las respuestas sobre victimización y condiciones de vida con el lugar de residencia de las personas participantes, sobre el continuo rural-urbano. El test chi-cuadrado de independencia y los residuos estandarizados permiten rechazar la homogeneidad de las vivencias de las personas LGBTI, así como distinguir las problemáticas concretas para cada categoría de participantes.

Citation

Domínguez Ruiz, Ignacio Elpidio (2023). "The Spatial Dimension of Anti-LGBTI Victimization in Spain". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 21-38. (doi: 10.5477/cis/reis.183.21)

Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz: Universitat de Barcelona | iedominguez@ub.edu

INTRODUCTION¹

The physical and mental health of people who identify as LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) can be negatively affected by experiences of violence and discrimination, particularly when motivated by prejudice against their sexual orientation or gender identity and expression (Walters, 2014). These experiences can exacerbate existing health differences or inequalities (Mereish and Taylor, 2021; Rees, Crowe and Harris, 2021). Compared to non-prejudicial forms of violence, anti-LGBTI violence has harmful effects on both direct and indirect victims². The experiences of direct victims can have a wide range of consequences, including physical harm and long-term psychological consequences such as fear, anxiety, isolation, loneliness and depression (Walters, 2014). Indirect victims may experience negative outcomes as a result of assault and discrimination, as anti-LGBTI violence can have wider collective effects, including fear and insecurity (Walters, 2019). LGBTI people's experiences of victimisation illustrate the complexity of physical and symbolic aggression, as direct incidents of violence not only affect the individual who suffered them but can also indirectly affect other members of the LGBTI community (Walters, 2014). In addition, these experiences provide insight into the collective dimensions of trauma, with *systemic trauma* being understood as historical or ongoing

trauma experienced by groups, which affects their sense of safety, protection, belonging and dignity (Haines, 2019).

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 2020a) recently conducted a survey on the victimisation and living conditions of LGBTI people, which found that over 20 % of respondents had experienced discrimination at work because of their sexual orientation or gender identity. In addition, 11 % of respondents reported that they had experienced physical or sexual assault within the previous five years because of the same prejudice. The survey results highlighted the diversity of experiences among the LGBTI community, which is often seen as a homogeneous category. For example, while the average percentage of respondents who had experienced physical or sexual assault was 11 %, this percentage increased to 17 % and 22 % among trans and intersex respondents, respectively. Similarly, whereas 11 % of participants had reported their most recent experience of discrimination, only 9 % of bisexual women had done so, in contrast to 17 % of intersex people.

Spain is considered one of the most progressive countries in the European Union in terms of LGBTI rights due to its specific legislation and visible forms of activism. Although there is some room for improvement and criticism, according to barometers that compare rights such as the ILGA-Europe index, Spain has seen positive changes for LGBTI people over time. Comparing data from the second survey (FRA, 2020a) and the first survey (FRA, 2013), which did not include data for intersexual people, there was a slight improvement in issues such as visibility and the percentage of victims of physical violence and harassment in Spain, although harassment is difficult to compare between the two surveys (see Table 1). A comparison of the information available from 2012 and 2013 indicated that there were almost identical percentages of victimisation on grounds of sexual orientation, whereas

¹ I would like to thank Diego Parejo, Héctor Sánchez and Olga Jubany for their support and comments, as well as the people who reviewed the article for the journal.

² The term "victim" is used in this paper according to the most widespread use in the materials and data analysed. This does not preclude considering contemporary debates that question or even dispute the use of "victim" as a category (see Chakraborti, 2018; Rothe and Kauzlarich, 2018). Based on these notions, "direct victim" in this article will refer to people directly affected by a violent or discriminatory action, and "indirect victim" will be applied to those who have suffered other effects of the action because of their affiliation to the group targeted by violence or discrimination.

the situation was worse for trans people, and the latest incidents of discrimination and physical or sexual violence that were reported showed that the situation had worsened slightly. Overall life satisfaction was practically the same in both periods, with an almost imperceptible improvement. Data from 2019 (FRA, 2020a) showed that harassment and discrimination victimisation of LGBTI people were almost identical, at 41 % and 42 % respectively, while experiences of physical or sexual violence in the previous

year were reported in only 4 % of responses. When the data was broken down by age, the same dynamic was found: there were higher rates of victimisation among young people (with discrimination reaching 52 % among 18-24 year olds), which decreased particularly from the age of 40. The visibility of respondents was also a key factor in victimisation, particularly for harassment, with lower rates reported by those who were less visible, and for violence, which decreased among those who were highly visible.

TABLE 1. Comparison of data for Spain in key questions from the 2012 and 2019 FRA surveys

Question	Responses	2012 result (%)	2019 result (%)
Visibility as an LGBT/LGBTI person	Highly visible + fairly visible	44.0	53.0
	Not visible + never visible	57.0	47.0
Discrimination on grounds of sexual orientation	Yes	38.0	39.5
	No	60.0	60.5
Discrimination for being trans	Yes	56.0	63.0
	No	39.0	37.0
Reporting the most recent incident of discrimination	Yes	10.0	8.0
	No	87.0	91.0
Harassment for any reason in the last year	Yes	100.0	50.0
	No	0.0	50.0
Harassment for being LGBT/LGBTI	Yes	78.0	41.0
	No	17.0	59.0
Physical or sexual violence suffered in the last 5 years for being LGBTI	Yes		8.0
	No		92.0
Physical or sexual violence suffered in the past year for being LGBTI	Yes		4.0
	No		96.0
Reporting the most recent incident of physical or sexual violence	Yes	18.0	16.0
	No	82.0	84.0
Overall life satisfaction	Average (1-10)	6.9	7.0

Note: The questions on experiences of harassment in 2012 referred to how many experiences the person had had in the previous 12 months, while the 2019 questions referred to whether the person had experienced harassment in the previous 12 months. For 2012, all responses above 0 have been added up as “Yes”. The questions on experiences of physical or sexual violence are not comparable because the 2012 questions also included threats.

Source: FRA, 2013, 2020a.

The institutionalisation and visibility of the demands and grievances of the LGBTI community in Spain reflects how their situation has evolved in the past few years. The recent history of LGBTI activism in Spain

has revealed points of convergence with and divergence from political forces of different persuasions. It has also involved a process in which the more reformist organisations have increasingly been associated

with public administrations (Martínez, 2017; Mas and Jubany, 2019). Increasing institutional support from some regional and national governments, as well as public efforts to draft specific legislation, point to a process of institutionalisation that may have an impact on the victimisation experiences and living conditions of LGBTI people as part of a palimpsest of regional laws and of a geography of sexual and gender diversity (Domínguez Ruiz, 2018).

The aim of this article is to examine how the spatial dimension affects the victimisation experiences of LGBTI people in Spain. Using data from the largest survey of victimisation and experiences of LGBTI people in the European Union, the paper uses quantitative analysis to explore the intersection of different ordinary and victimisation experiences with the different places of residence along the rural-urban continuum. After the introduction, the theoretical framework outlines how geography relates to sexual and gender diversity, particularly in relation to victimisation. The article then details the methodology used, which involves examining the relationship between responses to a series of key questions and the location of participants along the spatial continuum. The hypothesis of independence between the two categories is tested using secondary data from the European Union Agency for Fundamental Rights, and the results of the chi-square test are then analysed by evaluating Pearson's standardised residuals.

THEORETICAL FRAMEWORK

Despite the increasing visibility of LGBTI needs and experiences, a perspective that prioritises territorial or geographical diversity has been overlooked. This is not unique to Spain, but is linked to an academic and activist inertia that has focused on the situations and cultural productions of LGBTI people in large cities. The concept of “metronormativity” reflects the belief that LGBTI people must move to

large cities and specific spaces in order to live comfortably and visibly (Stone, 2018). Rather than considering it as an abstract concept, it can be seen as a relational dynamic in which specific cities or urban areas, such as Barcelona and Madrid in Spain, act as beacons or attractor poles (Langarita, Mas and Jubany, 2019; Langarita, Mas and Albertín, 2021). This concentration is not surprising given the historical strength of gay and LGBTI activist and business movements in these two cities, at least within Spanish national or state-wide historical narratives (Martínez, 2017). Metro-normativity is also evident in academic research on the spatial dimensions of LGBTI people's experiences, particularly in sociology and geography (Dwyer, Ball and Barker, 2015; Forstie, 2020; Stone, 2018).

The paucity of academic studies that have considered the geographical diversity of LGBTI people's experiences can be seen in research of specific experiences and situations in spaces other than large cities. Recent sociological, anthropological and geographical studies have looked in detail at how LGBTI people live in rural, suburban and peripheral areas of large spaces or regions. A wide variety of studies can be found that address topics such as rural trans masculinities (Abelson, 2016), LGBTI youth experiences (Pedro, Lynch and Esqueda, 2018; Hulko and Hovanec, 2018), migration-related motivations or expectations (Thorsteinsson *et al.*, 2022), and health differences in rural areas (Fisher, Irwin and Coleman, 2014; Glon *et al.*, 2021; Horvath *et al.*, 2014; Lyons, Leonard and Bariola, 2015). Focusing on the European Union and Spain, relevant studies can be found on the periphery of Western Europe, such as Slovenia and Croatia (Butterfield, 2018; Kuhar and Švab, 2014), as well as case studies focusing on Catalonia (Jubany, Langarita and Mas, 2021; Langarita, 2020; Langarita, Mas and Jubany, 2019; Langarita, Mas and Albertín, 2021).

Another important dimension of spatial or geographical diversity in the study of LG-

BTI people's experiences, beyond specific case studies, is the broader view: how spatiality intersects with the life experiences and needs of LGBTI people. The relevance of the spatial dimension of LGBTI people's experiences of victimisation is explained by the fact that "oppression and injustice always take place somewhere, they have a whereabouts" (Graham, 2016: 91), and by the fact that not only centrally located spaces are affected by economic and socio-cultural dynamics (Bell and Binnie, 2004). A phenomenon that has received increasing academic and activist attention on the role of spatial and migration dynamics regarding sexual and gender diversity should have a wider scope than the mere reproduction of an urban-rural dichotomy. The notion of *sexile* has been commonly understood as a migration narrative of LGBTI people fleeing from the rural to the urban, particularly in search of some dimensions often and historically associated with big cities: anonymity, greater commercial and employment choices, and the possibility of being freed from family chains (Jubany, Langarita and Mas, 2021; Langarita, 2020). However, as studies such as Jose Antonio Langarita's on Girona —which "exports sexiles but it is also welcoming of LGBT people from other territories" (2020: 1355)— have shown, the binary division into importing and exporting territories needs to be challenged, as does the usual sharp division between city and countryside. The difficulty of establishing a clear binary division between rural and urban has already been highlighted in research focusing on LGBTI people (see Butterfield, 2018; Jubany, Langarita and Mas, 2021; Kuhar and Švab, 2014). This inaccurate binarism can be explained by understanding rurality not as a mere numerical or population density issue, but considering the discourses and images that can be associated with the rural end of the spatial continuum (Langarita, Mas and Albertín, 2021). The blurring of the boundaries between rural and urban can also be understood from the relational nature of geograph-

ical scales as spheres produced through political, economic and socio-cultural relations (Carr and Lempert, 2016; González, 2005; Pillet, 2008).

METHODOLOGY

This article is based on data from FRA's LGBTI-II survey (FRA, 2020a), the second large-scale survey of LGBTI people's experiences in the European Union and other nearby countries. The 2019 survey had 139,799 participants aged 15+ who identified as lesbian, gay, bisexual, trans or intersex, with results from the EU-28 —including the United Kingdom for the year of the survey— as well as North Macedonia and Serbia (*ibid.*: 9). The survey was conducted online, following a months-long publicity campaign that relied on the collaboration of LGBTI organisations in the participating countries. Due to its breadth of interests and content, this survey cannot be summarised as a victimisation survey, as it included questions on living conditions, views on policy regarding rights and protection of LGBTI people, experiences of victimisation, harassment or physical and sexual assault and self-perceived health status, among others. This survey faced several methodological limitations analogous to those of any quantitative study on LGBTI people, such as difficult access or "invisibility" (Bell, 2017), reliance on self-identification of participants (Doan, 2016), and the importance of definitions (Guyan, 2022).

The FRA's survey was based on self-identification of sexual orientation, which can be understood as *sexual identity*, or "how a person thinks of their sexuality and the identity terms with which they identify" (Guyan, 2022: 76). This decision, compared to alternatives such as *attraction* or *sexual behaviour* (*ibid.*), however, limited the scope of people who felt called upon to participate in the survey and reduced the size of the possible LGBTI population (OECD, 2019). This question relates to how forms of violence and prejudice directed

towards people because of their sexual orientation or gender identity and expression are viewed, whether real or perceived. The FRA's survey used these terms —references to the perception of the victim as LGBTI— instead of widespread concepts such as LGBTIphobia or LGBTI-phobia. Beyond the usefulness of broader perception-based approaches, there is a critique of the pathologising framework in constructs with the suffix -phobia (see Herek, 2004), as prejudice can be understood as an uncontrollable individual problem rather than as a social phenomenon.

To address the limitations of the survey in terms of categorisation and access, the FRA developed a broad categorisation with flexible definitions to allow participants

to self-identify with six core categories, as described in its technical report (2020a: 9). The FRA also relied on a publicity campaign and cooperation from participants to expand the reach of the survey. This was in line with a key recommendation in design and production of surveys for LGBTI people to incorporate a snowballing element into stratified sampling based on core categories (Michaels *et al.*, 2019). For quantification, the FRA implemented a sample design that approached the LGBTI population based on a comparative study of existing surveys and studies. In this way, they estimated the percentage of the population in each core category by age group, as outlined in their report (2020b: 12-14).

TABLE 2. *Estimated LGBTI population by core category and age group, and estimated optimal sample size for the FRA's survey and sample finally obtained, for Spain*

Central category	Age group	Adjusted percentage	Estimated optimal sample	Refined sample
Lesbian woman	15-34	2.29		
	35-54	1.49		
	55+	0.78		
	Total	1.46	1,616	2,458
Gay man	15-34	4.01		
	35-54	2.81		
	55+	1.55		
	Total	2.76	2,925	7,339
Bisexual woman	15-34	3.38		
	35-54	0.96		
	55+	0.64		
	Total	1.62	1,635	6,406
Bisexual male	15-34	2.05		
	35-54	0.73		
	55+	0.62		
	Total	1.15	1,130	1,796
Trans	15-34	0.72		
	35-54	0.54		
	55+	0.51		
	Total	0.59	1,284	2,067
Intersexual	Total	0.10	224	114
Total LGBTI	Total	7.68	8,814	20,180

Source: FRA, 2020b.

This article is based on data from the above survey and presents a quantitative analysis that explores the correlation between participants' responses to key questions and their geographical location. While most questions had sufficiently representative sample sizes, there were some exceptions. The responses from people categorised as intersex were insufficient, and at some points were not even available in the FRA's data explorer. This was also particularly the case for some spatial categories in connection with for secondary questions, which required an answer to a previous question (for example, questions on reported attacks or harassment following a respondent's answer to the effect that they had experienced these forms of violence). In order to categorise responses into five possible places of residence, the data were filtered based on where participants had lived for at least one year: large city, suburb or outskirts of a large city, small city or town, village or countryside. However, the lack of a clear definition of place of residence in the survey was a limitation, and participants' self-identification was relied upon regardless of the actual population of their town or city of residence.

This study was focused on the relationship between two categorical variables —identity and place of residence— and the responses to the questions. The chi-square test was used to compare the frequencies of two categorical variables based on a given distribution or criterion (Agresti, 2012; Geher and Hall, 2014; Hanneman, Kposowa and Riddle, 2012; Wagner and Gillespie, 2019). The null hypothesis of independence between the central categories was tested for each question according to the main categories. This therefore tested the relationship between the different experiences of prejudice or victimisation and their allocation to one of those categories; the test was also applied to the place of residence for each central category. As

the chi-square test is non-directional and does not indicate the direction of the relationship (Geher and Hall, 2014; Kraemer and Blasey, 2016), it does not provide information on the strength of association or dependence; Pearson's residuals were used for this purpose. In addition to the chi-square and p-value statistics for each test, Pearson's standardised residuals were calculated in those cases when it was possible to reject the null hypothesis, in order to assess the direction of the relationships identified. It should be noted that this additional level of analysis does not establish causality, only correlation.

One methodological issue that needs to be considered is the characteristics of victimisation surveys and how they differ from other sources of data on hate crime or prejudice-related victimisation such as those covered in this article. When looking only at Spanish public and private institutions that deal with hate crime in general, or specifically those motivated by sexual orientation and gender identity and expression, a wide range of sources can be found, with different methodological approaches being used to record such incidents. For example, the Spanish Home Office (Ministerio del Interior) defines "hate crimes" as known facts recorded at police stations, including misdemeanours and similar incidents (Ministerio del Interior, 2020). Conversely, LGBTI social movements record incidents based on victims' statements and care, which includes not only crimes but also incidents that are not classified as crimes or not reported to the police (FELGTB, 2020; OCH, 2022). However, these NGO reports have limited access and geographical coverage, unlike the National Police or other public administrations, such as the network of care centres of the Government of Catalonia (Generalitat de Catalunya) (Departament d'Igualtat i Feminismes, 2022). This disparity highlights the need to consider who were the people who participated in the FRA's survey and

compare these data with those collected by previous sources. Although data from post-crime or post-incident records may provide more information about the direct experience of victimisation, it is important to note that by default they do not include people who have not experienced or reported such victimisation incidents. Victimization surveys are therefore better suited to providing a comprehensive picture of the target population, as they include people who have not experienced victimisation or who have experienced victimisation but have not reported it. However, it is essential to consider the filter of self-identification and the limitations it may have in terms of reaching the “invisible” population (Bell, 2017).

ANALYSIS AND RESULTS

This section presents the results of the analysis of the null hypothesis of independence of the intersections between categorical variables. The chi-square test was used to estimate p-values for each crossing of categories, and they were found to be significant in relation to the probabilities of rejecting the null hypothesis at the 90 %, 95 % and 99 % confidence levels. After analysing the significance of the probability of rejecting the null hypothesis, Pearson’s standardised residuals were calculated in cases where the null hypothesis could be rejected, and standardised residuals with an absolute value greater than 3 were considered significant.

TABLE 3. Significant results of the chi-square test for independence

	Core categories	Lesbian women	Gay men	Bisexual women	Bisexual men	Trans	Intersex
Area: Visibility and daily life							
Do you avoid holding hands with a same-sex partner for fear of being assaulted, threatened or harassed?	(**)			(***)			
Do you avoid certain places or locations for fear of being assaulted, threatened or harassed because you are LGBTI?	(*)		(**)	(***)	(***)	(***)	(***)
Where do you avoid visibility for fear of being assaulted, threatened or harassed?				(***)			
Life satisfaction				(*)	(***)	(***)	(***)
Perception of health status	(***)				(***)	(***)	(***)
Have you had any feelings of depression or sadness in the last two weeks?	(***)			(**)	(***)	(***)	(***)
Are you visible as an LGBTI person?	(***)		(**)	(***)	(*)	(***)	(***)
Are you involved in one or more LGBTI organisations?						(*)	(***)
Area: Discrimination							
Have you experienced discrimination in the last twelve months in 8 areas of life?	(***)			(***)		(***)	
Did you report or communicate the last incident of discrimination?						(*)	—
Why did you not report or communicate the last incident of discrimination?		—	—	—	—	—	—
Area: Physical or sexual violence							
Have you been physically or sexually assaulted because you are LGBTI in the last five years?	(***)				(***)	(***)	(*)

TABLE 3. Significant results of the chi-square test for independence (Continuation)

	Core categories	Lesbian women	Gay men	Bisexual women	Bisexual men	Trans	Intersex
Area: Physical or sexual violence							
Have you been physically or sexually assaulted because you are LGBTI in the last twelve months?	(***)					(**)	
Did you report or communicate the last incident of hate-motivated physical or sexual assault?	(**)	(***)	(***)		(**)	(**)	—
To whom did you report or communicate the last incident of hate-motivated physical or sexual assault?	(***)	—	—	—	—	—	—
Why didn't you report the most recent incident of hate-motivated physical or sexual assault to the police?	(***)	—	—	—	—	—	—
What effects did the most recent hate-motivated violent incident have on your health and well-being?	(***)	—	—	—	—	—	—
Area: Harassment							
Have you experienced harassment because you are LGBTI in the last twelve years?	(*)		(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Did you report or communicate the last incident of hate-motivated harassment?	(**)	—	—	—	—	—	—
To whom did you report or communicate the last incident of hate-motivated harassment?		—	—	—	—	—	—
Why didn't you report the last incident of hate-motivated harassment to the police?	(**)	—	—	—	—	—	—
Area: Social attitudes and government response							
Over the past five years, has the prejudice and intolerance against LGBTI people increased, stayed the same or decreased?			(*)	(***)	(***)	(***)	(***)
In your view, what are the main reasons for the increase in prejudice, intolerance and violence?				(***)		(**)	
In your view, what are the main reasons for the decrease in prejudice, intolerance and violence?				(***)			—
Do you think the government combats effectively prejudice and intolerance against LGBTI people?	(***)				(***)	(***)	(***)
Do you think the government responds adequately to the safety needs of LGBTI people?	(***)				(***)	(***)	(***)

Note: *** (p < 0.01); ** (p < 0.05); * (p < 0.1); - (insufficient data for test); not significant.

Source: Developed by the author based on data from the EU-LGBTI II survey.

In order to examine the degree of homogeneity or heterogeneity in victimisation experiences among different sub-groups of the LGBTI community, the first axis of analysis was to compare the core categories (lesbian women, gay men, bisexual women, bisexual men, trans people and intersex people). The aim was to determine whether, statistically, there was relative homogeneity in the experiences within the LGBTI community as a group or a minority. The anal-

ysis indicated that there was relative heterogeneity between the core categories, with significant differences on most questions related to health, visibility, and experiences of discrimination and violence, among other issues. Table 4 shows that there were significant differences between categories on the question of visibility as an LGBTI person, with lesbian women and gay men reporting comparatively higher visibility and bisexual men reporting lower visibility.

TABLE 4. Contingency table of the core identity categories with the responses to the question on visibility as an LGBTI person

	Zero visibility	Low visibility	Quite a lot of visibility	Total visibility
Lesbian women	12	23	30	35
Gay men	12	20	30	38
Bisexual women	30	30	26	14
Bisexual men	45	25	22	8
Trans	39	24	21	16
Intersex	38	27	22	13

Source: Developed by the author based on data from the EU-LGBTI II survey.

The analysis showed that, in addition to the issue of visibility for lesbian women and gay men, all other core categories experienced greater or more severe instances of health problems, discrimination and assault. The data also highlighted the negative impact of victimisation and under-reporting among trans and intersex people. These findings suggest significant differences between the core categories and indicate relative heterogeneity among LGBTI people. These data cannot lead to a similar analysis in relation to place of residence, as the responses of LGBTI people as a whole did not show significant differences based on place of residence. Therefore, it cannot be assumed that the experiences of LGBTI people are homogeneous for the same type of place of residence.

When each identity category and their responses were analysed by place of residence, the data revealed significant differences along the rural-urban continuum. The findings sug-

gest that experiences of victimisation and living conditions varied according to where participants live, with data being heterogeneous across most identity categories from urban to rural areas. However, the core category of lesbian women provided the least information, since the only association found with place of residence was related to reporting or under-reporting physical or sexual assault, with more reporting in the middle of the rural-urban continuum. Although the small sample size of lesbian participants from rural or remote rural areas may have affected the analysis of some questions, it was still possible to observe greater spatial homogeneity for this core category than for the others.

The analysis of gay men's responses indicated that there were more significant differences by place of residence compared to other core categories, although they were still relatively small. Significant evidence was found depending on the location along

the rural-urban continuum regarding perceptions of changes in violence against LGBTI people, avoidance of places due to fear of violence, visibility, reporting or under-reporting of last physical or sexual assault, and experiences of harassment in the last year. Table 5 shows that gay men at the rural end of the continuum had more favourable scores regarding harassment experiences compared to their urban counterparts, while those in urban areas were more likely to report last physical or sexual assault. These findings suggest that the rural end of the spatial continuum provides better living conditions for gay men, while the urban end offers better conditions for report-

ing attacks, likely due to the visibility of activist organisations.

TABLE 5. Contingency table of gay men with respect to location for the question on experiences of harassment

	Yes	No
City	40	60
Suburbs	41	59
Small town	42	58
Village	45	55
Countryside	16	84

Source: Developed by the author based on data from the EU-LGBTI II survey.

TABLE 6. Contingency table of bisexual women with respect to location for the question on whether they avoid being visible in places out of fear

	Always	Often	Seldom	Never
Suburbs	8	22	42	29
Suburbios	6	16	43	35
Small town	5	20	35	40
Village	6	17	40	37
Countryside	1	4	41	53

Source: Developed by the author based on data from the EU-LGBTI II survey.

TABLE 7. Contingency table of bisexual men with respect to location for the question on whether they avoid being visible in places out of fear

	Always	Often	Seldom	Never
City	9	20	32	38
Suburbs	10	24	28	37
Small town	10	18	32	40
Village	8	31	35	25
Countryside	28	14	41	17

Source: Developed by the author based on data from the EU-LGBTI II survey.

The analysis of victimisation experiences and living conditions for bisexual women and men revealed a higher number of cases where significant differences were identified based on place of residence. Certain differences were common to both categories,

suggesting that biphobia may affect both men and women in similar ways. This applied to avoiding certain places out of fear, overall satisfaction with life and health, visibility, experiencing harassment and perceiving changes in violence against LGBTI peo-

ple. However, some experiences differed between genders. For example, bisexual women living in rural areas were less likely to avoid places out of fear, while bisexual men were more likely to do so. Overall, a tendency was observed that indicated that the rural end of the continuum produced significantly more favourable results for bisexual women and significantly less favourable results for men, as can be seen in Tables 6 and 7.

When significant associations were examined only for bisexual women, the data revealed considerable heterogeneity based on place of residence for a number of items, such as avoidance of same-sex hand-holding, specific places to avoid, experiences of victimisation and perceptions of social change. The data showed that bisexual women in the rural end of the spatial continuum had more positive experiences than those living in other areas, particularly in relation to experiences of victimisation and views of society and government action. Although the sample size was smaller in rural areas, having five options for place of residence along the rural-urban continuum provided consistency through standardised residuals. Conversely, when looking at the data specifically for bisexual men, significant differences were found by location on issues such as perceptions of health, victimisation by physical or sexual assault, reporting of assault experiences, and questions about institutional support or effectiveness in addressing the needs of LGBTI people and combating prejudice. As such, the data was significantly more unfavourable at the rural end of the continuum, which was the reverse of the situation for bisexual women.

Further evidence of heterogeneity by place of residence could be observed in the responses of trans and intersex people in the survey. However, this analysis needs to be qualified given the small sample size, especially of intersex respondents for Spain (smaller than the sample sought), significant differences could be identified in the transgender responses by place of residence on

issues such as health, avoidance of places, visibility, involvement or not in activism, experiences of any type of victimisation (and reporting or not reporting them), and perceptions of society and government action. Similarly to bisexual women, trans people at the rural end of the spatial continuum had significantly more positive experiences, except for two issues: general health and experiences of harassment. In other words, they had an ambivalent experience of the rural end, where experiences were more favourable for trans people on issues such as physical or sexual violence and discrimination, but more negative on harassment. It can therefore be assumed that there would be more harassment at the rural end of the continuum, without it being accompanied by more discrimination or physical or sexual violence against transgender people.

In terms of the experiences and living conditions of intersex people, it is important to note that the responses may not be fully representative due to the limited number of participants, particularly at the rural end of the continuum. Despite this, the data showed significant differences based on place of residence for certain issues such as health, avoidance of certain places, visibility, involvement in activism, assault in the previous five years, harassment and some perceptions of society and government. A slightly more positive situation can be observed for intersex people at both ends of the continuum (both large cities and countryside areas), while the situation in the suburbs or outskirts of cities seemed to be less favourable. The significant role of this specific location is somewhat unique to this core category. However, the analysis is severely limited by the small sample size.

CONCLUSIONS

As Clare Forstie noted (2020: 159), it cannot be argued that LGBTI people have homoge-

neous or uniform experiences, even within a specific place of residence. The data from the EU LGBTI II survey, despite sampling-related limitations for some combinations of identity categories and places of residence, provide an insight into the internal heterogeneity of the LGBTI community. They show that trans and intersex people have markedly worse experiences regarding health, victimisation and visibility than gay and lesbian people. Different conditions and experiences were also identified among bisexual men and bisexual women, respectively. These findings support the argument of Jubany *et al.* that challenges “the common assumption that the big city is the inherent space of sexual liberation, as stated in the 1980s and 1990s” (2021: 15). Looking at how the responses are crossed with the survey questions (by place of residence) makes it possible to take a cautious approach to a more favourable experience at the rural-urban end of the continuum for gay men and bisexual women on issues such as visibility, discrimination and harassment. The data also indicate a significantly less favourable experience for bisexual men at the same rural end of the continuum. Nevertheless, these results should be treated with caution due to methodological limitations regarding the sample and should be seen as a further —non-final— step towards understanding the victimisation experiences and living conditions of LGBTI people in Spain. The self-administered nature of the survey and the possible self-selection bias of participants point to the need for more surveys of this type.

This article challenges frequent critiques of quantitative reductionism or even the use of quantitative methodologies from queer studies based on suspicions against positivism and trajectories of oppression (Corkley and Awad, 2013; Grzanka, 2019). In the face of these criticisms, however, it can be argued how a use of statistics focusing on the interaction between variables, taking “a

person-centered analytical approach” can illustrate “qualitatively distinct patterns of responses to multiple variables” and “how commonly (i.e., quantitatively) these patterns occur in the data” (Gzanka, 2019: 95). The FRA’s survey data makes it possible to compare the Spanish case with studies on the geographical dimension of LGBTI people’s experiences, specifically those in areas that are far from large cities. Thus, while the study by Glon *et al.* (2021) on the health of gay and bisexual men in Oklahoma showed how rurality was not significantly related to health problems linked to rejection or prejudice, it can be argued that a more unfavourable situation for bisexual men at the rural end of the continuum was identified in the Spanish case. Our data confirm those found by Fisher, Irwin and Coleman (2014) for bisexual people in the Nebraska Midlands, although they extended this analysis to bisexual women as well. Finally, our data reinforced the relative homogeneity of lesbian and gay people’s experiences in connection with health regardless of their place of residence, as found for Australia by Lyons, Leonard and Bariola (2015).

In general, the specificities of Spain require the use of mixed methods, or a combination of qualitative and quantitative research, to explore the nuances and particular characteristics of victimisation experiences. The need for in-depth qualitative studies not just based on the major cities (Barcelona and Madrid) is explained by various factors, including the size and density of local communities, as well as historical, cultural and normative differences and proximity to metropolitan areas. The importance of the cultural dimension and heterogeneity requires an approach that rejects a univocal or homogeneous perspective on LGBTI people, regardless of where they live. Instead, it may be more productive to acknowledge that experiences of victimisation arise from the same system of oppression, but that socio-cultural, economic and geo-

graphical differences result in significantly different experiences. Equally productive can be the application of Amin Ghaziani's concept of *sexual* —and gender— *cultures*, understood as “the diverse contexts and customs that give meaning to our bodies and the ways we use them in our pursuit of pleasure” (2017: 16). While this concept focuses on sexual orientation, taking a similar approach to how local experiences of gender identity and expression are can enhance the current understanding and knowledge of sexual and gender diversity.

BIBLIOGRAPHY

- Abelson, Miriam J. (2016). “‘You Aren’t from Around Here’: Race, Masculinity, and Rural Transgender Men”. *Gender, Place & Culture*, 23(11): 1535-1546. doi: 10.1080/0966369X.2016.1219324
- Agresti, Alan (2012). *Categorical Data Analysis*. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Bell, Mark (2017). *Data Collection in Relation to LGBTI People: Analysis and Comparative Review of Equality Data Collection Practices in the European Union*. Brussels: Directorate-General for Justice and Consumers, European Union.
- Bell, David and Binnie, Jon (2004). “Authenticating Queer Space: Citizenship, Urbanism and Governance”. *Urban Studies*, 41(9): 1807-1820. doi: 10.1080/0042098042000243165
- Butterfield, Nicole (2018). “Imagined Rural/Regional Spaces: Non-Normative Sexualities in Small Towns and Rural Communities in Croatia”. *Journal of Homosexuality*, 65(13): 1709-1733. doi: 10.1080/00918369.2017.1383111
- Carr, E. Summerson and Lempert, Michael (eds.) (2016). *Scale. Discourse and Dimensions of Social Life*. Oakland, California: University of California Press.
- Chakraborti, Neil (2018). Victims of Hate Crime. In: S. Walklate (ed.). *Handbook of Victims and Victimology*, (pp. 141-155). London: Routledge.
- Corkley, Kevin and Awad, Germine H. (2013). “In Defense of Quantitative Methods: Using the ‘Master’s Tools’ to Promote Social Justice”. *Journal of Social Action in Counseling and Psychology*, 5(2): 26-41. doi: 10.33043/JSACP.5.2.26-41
- Departament d’Igualtat i Feminismes (2022). *Informe sobre les denúncies i incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya (2021)*. Barcelona: Departament d’Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
- Doan, Petra L. (2016). “To Count or Not to Count: Queering Measurement and the Transgender Community”. *Women’s Studies Quarterly*, 44(3/4): 89-110. doi: 10.1353/wsq.2016.0037
- Domínguez Ruiz, Ignacio E. (2017). *Bifobia: etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTB*. Barcelona: Egales.
- Domínguez Ruiz, Ignacio E. (2018). *Cuando muera Chueca: origen, evolución y final(es) de los espacios LGTBI*. Barcelona: Egales.
- Dwyer, Angela; Ball, Matthew and Barker, Emma (2015). “Policing LGBTIQ People in Rural Spaces: Emerging Issues and Future Concerns”. *Rural Society*, 24(3): 227-243. doi: 10.1080/10371656.2015.1099264
- FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales) (2020). *Informe 2019 Delitos de Odio*. Madrid: FELGTB.
- Fisher, Christopher M.; Irwin, Jay A. and Coleman, Jason D. (2014). “LGBT Health in the Midlands: A Rural/Urban Comparison of Basic Health Indicators”. *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1062-1090. doi: 10.1080/00918369.2014.872487
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2013). *EU LGBT Survey. European Union Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Survey*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2020a). *EU-LGBTI II: A Long Way to Go for LGBTI Equality*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FRA-European Union Agency for Fundamental Rights (2020b). *EU-LGBTI II: A Long Way to Go for LGBTI Equality. Technical Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Forstie, Clare (2020). “Theory Making from the Middle: Researching LGBTQ Communities in Small Cities”. *City & Community*, 19(1): 153-168. doi: 10.1111/cico.12446
- Geher, Glenn and Hall, Sara (2014). *Straightforward Statistics: Understanding the Tools of Research*. Oxford: Oxford University Press.
- Ghaziani, Amin (2017). *Sex Cultures*. Cambridge: Polity Press.
- Glon, Brendon; Giano, Zachary; Hubach, Randolph and Hammer, Tonya (2021). “Rurality, Gay-Related Rejection Sensibility, and Mental Health Outcomes

- for Gay and Bisexual Men". *Journal of Gay & Lesbian Mental Health*, 25(4): 408-426. doi: 10.1080/19359705.2020.1850595
- González, Sara (2005). "La geografía escalar del capitalismo actual". *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, IX(189).
- Graham, Mark (2016). *Anthropological Explorations in Queer Theory*. New York: Routledge.
- Grzanka, Patrick R. (2019). Queer Survey Research and the Ontological Dimensions of Heterosexism. In: A. Ghaziani and M. Brim (eds.). *Imagining Queer Methods* (pp. 84-102). New York: New York University Press.
- Guyan, Kevin (2022). *Queer Data. Using Gender, Sex and Sexuality Data for Action*. London: Bloomsbury.
- Haines, Staci K. (2019). *The Politics of Trauma: Somatics, Healing, and Social Justice*. Berkeley, California: North Atlantic Books.
- Hanneman, Robert A.; Kposowa, Augustine J. and Riddle, Mark D. (2012). *Basic Statistics for Social Research*. Hoboken, New Jersey: Wiley.
- Herek, Gregory M. (2004). "Beyond 'Homophobia': Thinking about Sexual Prejudice and Stigma in the Twenty-First Century". *Sexuality Research & Social Policy*, 1: 6-24. doi: 10.1525/srsp.2004.1.2.6
- Horvath, Keith J.; Iantaffi, Alex; Swinburne-Romine, Rebecca and Bockting, Walter (2014). "A Comparison of Mental Health, Substance Use, and Sexual Risk Behaviors Between Rural and Non-Rural Transgender Persons". *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1117-1130. doi: 10.1080/00918369.2014.872502
- Hulko, Wendy and Hovaness, Jessica (2018). "Intersectionality in the Lives of LGBTQ Youth: Identifying as LGBTQ and Finding Community in Small Cities and Rural Towns". *Journal of Homosexuality*, 65(4): 427-455. doi: 10.1080/00918369.2017.1320169
- ILGA Europe (2022). *Rainbow Europe Index 2021*. Brussels: ILGA Europe.
- Jubany, Olga; Langarita Adiego, Jose A. and Mas Grau, Jordi (2021). "'There is LGBTQ Life Beyond the Big City': Discourses, Representations and Experiences in Two Medium-Sized Spanish Cities". *Journal of Homosexuality*, 69(11): 1908-1927. doi: 10.1080/00918369.2021.1933787
- Kraemer, Helena Ch. and Blasey, Christine (2016). *How Many Subjects?* New York: Sage. doi: 10.4135/9781483398761
- Kuhar, Roman and Švab, Alenka (2014). "The Only Gay in the Village? Everyday Life of Gays and Lesbians in Rural Slovenia". *Journal of Homosexuality*, 61(8): 1091-1116. doi: 10.1080/00918369.2014.872492
- Langarita Adiego, Jose A. (2020). "Sexual and Gender Diversity in Small Cities: LGBT Experiences in Girona, Spain". *Gender, Place & Culture*, 27(9): 1348-1365. doi: 10.1080/0966369X.2019.1710473
- Langarita Adiego, Jose A.; Mas Grau, Jordi and Jubany, Olga (2019). "Geografías de la diversidad sexogenérica más allá de la gran ciudad: experiencias, discursos y prácticas en dos ciudades medianas de Cataluña". *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 65(3): 473-492. doi: 10.5565/rev/dag.572
- Langarita, Jose A.; Mas Grau, Jordi and Albertin, Pilar (2021). "Local Government Policies on Sexual and Gender Diversity in Spain. Experiences from Alt Empordà". *Local Government Studies*. doi: 10.1080/03003930.2021.1932480
- Lyons, Anthony; Leonard, William and Bariola, Emily (2015). "Mental Health and Resilience among Rural Australian Lesbians and Gay Men". *Rural Society*, 24(3): 244-265. doi: 10.1080/10371656.2015.1099268
- Martínez, Ramón (2017). *Lo nuestro sí que es mundial: una introducción a la historia del movimiento LGTB en España*. Barcelona-Madrid: Egales.
- Mas Grau, Jordi and Jubany, Olga (2019). "De la révolution sexuelle à l'inclusion sociale des expressions LGBT+. Le processus d'obtention des droits LGBT en Espagne". *Drot et Culture*, 77(1): 53-68.
- Mereish, Ethan H. and Taylor, M. Son (2021). Sexual and Gender Minority People's Physical Health and Health Risk Behaviors. In: K. L. Nadal and M. R. Scharrón-del Río (eds.). *Queer Psychology* (pp. 81-102). New York: Springer.
- Michaels, Stuart; Pineau, Vicki; Reimer, Becky; Ganesh, Nedarajasundaram and Dennis, J. Michael (2019). "Test of a Hybrid Method of Sampling the LGBT Population: Web Respondent Driven Sampling with Seeds from a Probability Sample". *Journal of Official Statistics*, 35(4): 731-752. doi: 10.1525/srsp.2004.1.2.6
- Ministerio del Interior (2020). *Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España*. Madrid: Ministerio del Interior, Gobierno de España.
- OCH (Observatori contra l'Homofòbia) (2022). *L'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya*. Barcelona: OCH.
- OECD (2019). *Society at a Glance 2019. OECD Social Indicators: A Spotlight on LGBT People*. Paris: OECD Publishing.
- Pedro, Kris T. de; Lynch, R. Jason and Esqueda, Mónica C. (2018). "Understanding Safety, Victim-

- ization and School Climate among Rural Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning (LGBTQ) Youth". *Journal of LGBT Youth*, 15(4): 265-279. doi: 10.1080/19361653.2018.1472050
- Pillet Capdepón, Félix (2008). "Las escalas del espacio: desde lo global a lo local". *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XX, 270(5).
- Rajaretnam, T. (2015). *Statistics for Social Sciences*. New York: Sage.
- Rees, Samuel N.; Crowe, Maria and Harris, Shirley (2021). "The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities' Mental Health Care Needs and Experiences of Mental Health Services: An Integrative Review of Qualitative Studies". *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 28(4): 578-589. doi: 10.1111/jpm.12720
- Rothe, Dawn L. and Kauzlarich, David (2018). We Are All Complicit: Victimization and Crimes of the Powerful. In: S. Walklate (ed.). *Handbook of Victims and Victimology* (pp. 348-363). London: Routledge.
- Stone, Amy L. (2018). "The Geography of Research on LGBTQ Life: Why Sociologists Should Study the South, Rural Queers, and Ordinary Cities". *Sociology Compass*, 12(11): e12638. doi: 10/1111/soc4.12638
- Thorsteinsson, Einar B.; Bjardnson, Thoroddur; Loi, Natasha M. and Arnarsson, Arsaell M. (2022). "Sexual Orientation and Migration Intentions among Rural, Exurban and Urban Adolescents in Iceland". *Culture, Health & Sexuality*, 24(1): 31-47. doi: 10.1080/13691058.2020.1813333
- Wagner III, William E. and Gillespie, Brian J. (2019). *Using and Interpreting Statistics in the Social, Behavioral, and Health Sciences*. New York: Sage.
- Walters, Mark A. (2014). *Hate Crime and Restorative Justice: Exploring Causes, Repairing Harm*. Oxford: Oxford University Press.
- Walters, Mark A. (2019). "Repairing the Harms of Hate Crime: Towards a Restorative Justice Approach". In: *Actas del 171st International Senior Seminar of the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders Criminal Justice Response to Crimes Motivated by Intolerance and Discrimination*. Available at: https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No108/No108_10_VE_Walters.pdf, access 15 March, 2023.

RECEPTION: April 6, 2022

REVIEW: June 21, 2022

ACCEPTANCE: September 6, 2022

La segregación escolar a escala local: factores contextuales e institucionales en Cataluña

*School Segregation at the Local Level:
Contextual and Institutional Factors in Catalonia*

Isaac González Balletbò, Ricard Benito y Bernat Albaigés

Palabras clave

Desigualdad educativa

- Equidad
- Política educativa
- Segregación escolar

Key words

Educational Inequality

- Equity
- Education Policy
- School Segregation

Resumen

Este artículo presenta los resultados principales de una investigación que analiza los índices de segregación escolar de los municipios de más de 10 000 habitantes de Cataluña, en infantil y primaria y en secundaria obligatoria, mediante modelos de regresión lineal, aprovechando el potencial de comparar realidades que comparten un mismo marco normativo. Los resultados muestran los principales factores que inciden en la intensidad de la segregación escolar. Más allá de corroborar la relevancia de la segregación residencial y el peso del sector privado, se aportan evidencias del efecto aditivo de estos dos factores, y también del impacto notable de factores adicionales, como la baja implementación de políticas locales de detección y distribución del alumnado especialmente vulnerable, y el nivel de atomización de la oferta educativa municipal en centros de tamaño reducido.

Abstract

This article presents the main results of a study that analysed school segregation indexes in Catalan municipalities with more than 10 000 inhabitants, in pre-school, primary and obligatory secondary education. The study used linear regression models, taking advantage of the analytical potential of comparing schools sharing the same regulatory framework. The results reveal the importance of residential segregation and the private school sector in the intensity of school segregation, as well as the additive effect of these two factors. We also find a notable impact of other factors: the strength of local policies aimed at the detection and distribution of the most acutely vulnerable pupils, and the level of fragmentation of municipal education in small schools.

Cómo citar

González Balletbò, Isaac; Benito, Ricard; Albaigés, Bernat (2023). «La segregación escolar a escala local: factores contextuales e institucionales en Cataluña». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 39-56. (doi: 10.5477/cis/reis.183.39)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Isaac González Balletbò: Universitat Oberta de Catalunya | igonalezbal@uoc.edu

Ricard Benito: Universitat Autònoma de Barcelona | ricard.benito@uab.cat

Bernat Albaigés: Síndic de Greuges de Catalunya | balbaiges@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El último macroinforme de análisis de los resultados PISA¹ reconoce en la segregación escolar, entendida como la desigual proporción de determinados perfiles de alumnos entre los centros educativos de un territorio, un elemento clave para explicar la desigualdad de los resultados educativos, especialmente entre aquellos alumnos en situación de desventaja social (OECD, 2019).

La atención al fenómeno de la segregación escolar surgió en Estados Unidos a partir de que la Corte Suprema declarara ilegal la separación racial de los estudiantes en 1954. Posteriormente, a raíz del informe Coleman (Coleman *et al.*, 1966), que problematizaba la incidencia de la composición social en los resultados académicos, la segregación escolar pasó a ser objeto de estudio a escala internacional. A lo largo de las décadas, la parametrización del fenómeno ha ido añadiendo complejidad. En Estados Unidos, se fue incorporando el estudio de la prevalencia de la segregación de distintos colectivos: según el origen étnico-cultural, el rendimiento académico o el nivel socioeconómico (Wilson, 1987). En Europa, el interés por estudiar la segregación escolar se inició posteriormente, en la década de los años noventa, muy vinculado a la gestión del hecho migratorio y al análisis de la segregación del alumnado inmigrante, y posteriormente, incorporando la atención a la segregación relacionada con el nivel socioeconómico (Dupriez y Vandenberghe, 2004; Gorard, 2009).

En España, el estudio de la segregación escolar también se inicia tímidamente en los noventa, pero toma impulso durante la primera década de los dosmil, coincidiendo con la llegada de importantes flujos migra-

torios. Los primeros trabajos se centran en la acogida del alumnado inmigrante y en la gestión de la diversidad cultural en los centros escolares (Madaria-Escudero y Vila-Lladosa, 2020), y no es hasta la primera década del siglo XXI cuando se pone el foco en los desequilibrios en la composición social de las escuelas, primero por procedencia y después en función de su origen socioeconómico (Fernández-Enguita, 2008; Mancebón-Torrubia y Pérez-Ximénez de Embún, 2009). En la educación secundaria, España ocupa una posición ligeramente superior a la media de los países de la OCDE en segregación escolar del alumnado socioeconómicamente desaventajado (OECD, 2019), pero no así del alumnado de origen inmigrado, donde la incidencia de la segregación es notablemente inferior a la media (Ferrer y Gortázar, 2021). En cambio, si observamos la situación en primaria², la segregación en España es especialmente intensa, sobre todo entre el alumnado socioeconómicamente desaventajado (Ferrer y Gortázar, 2021).

La presente investigación presenta nuevas evidencias en el estudio de las causas de la segregación escolar. Sigue el camino de los trabajos que han incidido en ello como base para la identificación de políticas que contribuyan a combatirla. Para ello, comparamos la segregación escolar de más de cien municipios de Cataluña, que es una de las comunidades autónomas con una mayor intensidad en sus niveles de segregación del alumnado socioeconómicamente desaventajado (Murillo y Martínez-Garrido, 2019), pero de las menos segregadas por procedencia (Ferrer y Gortázar, 2021).

El hecho de que los casos objeto de estudio compartan marco normativo tanto estatal como autonómico impide analizar

¹ Elaborado a partir de las pruebas PISA de 2018, que comparan la adquisición de competencias en distintos ámbitos de conocimiento de estudiantes de 15 años de los países de la OCDE.

² Los autores la analizan valiéndose de los resultados de las pruebas TIMSS, que comparan la adquisición de competencias matemáticas y científicas de los alumnos de 10 años en 64 países.

la incidencia de aquellos factores que son idénticos para todo el universo estudiado. En cambio, permite analizar de forma muy fiable la incidencia de los elementos que difieren entre municipios, como su contexto sociodemográfico, o las particularidades en su programación de la oferta o en la gestión de la asignación del alumnado. Como veremos, a pesar de no disponer de información convenientemente codificada sobre alguno de estos factores, algunos de los más importantes sí han podido ser objeto de contraste y análisis, aportando pistas relevantes para orientar las políticas educativas.

MARCO TEÓRICO

El estudio de las causas de la segregación escolar evidencia que esta tiene un carácter multifactorial, fruto de la incidencia de factores contextuales, institucionales y socio-culturales sobre el sistema educativo, y está muy condicionada por las especificidades de cada país, región o territorio (Bellei, 2013; Madaria-Escudero y Vila-Lladosa, 2020).

Una parte sustantiva de las investigaciones han indagado en las causas subjetivas de la segregación escolar, ahondando en los elementos motivacionales que decantan las preferencias y la elección de centro. Algunas incorporan el análisis de los marcos culturales e ideológicos que inciden en la configuración de las preferencias (Alegre *et al.*, 2010), mientras que otras se focalizan en la concreción de estas preferencias entre los distintos grupos familiares. En esta línea, emerge la importancia otorgada a la proximidad entre los colectivos socialmente menos aventajados, que a su vez disponen de menos y peor información (Gewirtz, Ball y Bowe, 1995; Zanten, 1996; Allen, 2007; Elacqua, Montt y Santos, 2013). Por el contrario, las familias de mayor estatus social muestran mayor predisposición a la movilidad geográfica para acceder a las escuelas consideradas mejores (Bowe, Gewirtz y

Ball, 1994) o a otorgar más importancia al clima escolar y al perfil de los alumnos del centro (Benito, Alegre y González, 2014).

Otro grupo de investigaciones se han focalizado en las causas objetivas que condicionan tales elecciones. Es aquí donde se encuadra la presente aportación. Entre estas investigaciones se ha analizado el impacto de factores vinculados a la morfología urbana, a las características de la programación de la oferta escolar o a los mecanismos de asignación del alumnado. La evidencia más contundente y redundante vincula la segregación residencial con la escolar (Alegre *et al.*, 2010; Córdoba-Canclín, 2011), siendo un factor capital en la explicación de la segregación escolar (Gorard y Smith, 2004), tanto en los países donde la asignación escolar depende exclusiva o principalmente de la residencia (Wilson, 1987) como en aquellos que, como España, tienen un sistema mixto de «elección restringida» que combina asignación por proximidad residencial y elección familiar de centro (Alegre, 2010). En España, todo apunta a que la segregación escolar es más intensa que la residencial (Benito y González, 2007; Síndic de Greuges, 2016), pero esta es el sustrato de diferenciación desde la que se configura la segregación escolar (Bonafant, Zancajo y Scandurra, 2019). Más allá de la correspondencia entre los perfiles de la población residente y escolarizada, que es un elemento incentivador de la segregación residencial de gran relevancia (Bernelius y Vaattovaara, 2016), también explican este vínculo factores como que los barrios con población de mayor estatus tienden a concentrar mejores infraestructuras y más disponibilidad de centros educativos (Córdoba-Canclín, Farri y Rojas-Patuelli, 2017; Rujas, Prieto y Rogero-García, 2020).

La literatura académica ha ahondado profusamente en otro factor relativo a la programación de la oferta: la ordenación del sistema educativo según los parámetros de

casi-mercado escolar, caracterizados, en buena medida, por el peso de las escuelas de titularidad privada y por la articulación de mecanismos de autonomía de centro y de estímulo a la competencia entre escuelas. El grueso de las investigaciones ha identificado tales modelos como potenciadores de la segregación escolar (Zanten, 1996, 2001; Ball, 2003), si bien hay voces que defienden que incorporar dinámicas competitivas puede ser beneficioso para los centros de perfil más bajo (Hoxby, 2003; Chubb y Moe, 2011). Así, según como se concreten algunas políticas educativas controvertidas, como el cheque escolar, se puede beneficiar la elección de centro de las familias socialmente desfavorecidas (Hastings y Weinstein, 2008), disminuyendo de esta forma la segregación escolar (González-González, 2008).

En cualquier caso, existen abundantes evidencias de que cuanto mayor es la presencia del sector privado en un territorio, mayor es la segregación escolar (Fernández-Enguita, 2008; Escardíbul y Villarroya, 2009; Valenzuela, Bellei y Ríos, 2014; Murillo, 2018). Los centros de titularidad privada suelen incorporar barreras económicas de acceso que generan segregación escolar, incluso cuando reciben importantes subvenciones públicas. Pero, más allá de este efecto segregador directo, la presencia del sector privado estimula una mayor autonomía escolar y la proliferación de nichos escolares ajustados a sensibilidades educativas diferenciadas, que a su vez correlacionan con la ocupación de posiciones de mayor estatus social (Alegre, 2010; González Balletbò, 2017).

En definitiva, los modelos de asignación fundamentados en la proximidad estimulan la segregación residencial, mientras que los modelos más cercanos a la libertad de elección relajan algo el peso explicativo de este factor contextual pero activan otros mecanismos segregadores.

A ello cabe añadir otro factor relativo a la programación de la oferta: la duración de

la comprensividad de los modelos educativos. En los países donde la especialización de los itinerarios académicos o profesionalizadores tiene lugar a edades más tempranas, la segregación socioeconómica es mayor, reforzada por un diseño institucional que discrimina a los alumnos en función de talentos y preferencias. Así, los países con modelos de especialización precoz, entre los cuales Alemania es un caso paradigmático, son estructuralmente más segregadores que los sistemas comprensivos con un currículum compartido más allá de los 14 o 15 años (Odendahl, 2017; Entorf y Davoli, 2018). A pesar de ello, algunos autores advierten que los sistemas comprensivos pueden ocultar dinámicas de segregación relevantes, como las agrupaciones por nivel académico a nivel intraescolar que, una vez más, correlacionan con la posición en la estructura social del alumnado (Carrascope Pons *et al.*, 2009).

En relación con los mecanismos de asignación del alumnado, existen dos factores que correlacionan de forma intensa con la segregación escolar. El primero es la selección del alumnado por parte de los centros educativos. Allí donde estos, abierta o encubiertamente, pueden seleccionar a los alumnos, se potencia la segregación escolar (Maroy, 2008; Valenzuela, Bellei y Ríos, 2014). En cambio, cuando se activan mecanismos de distribución equilibrada del alumnado, usando, por ejemplo, políticas de cuotas, disminuye la segregación (Alegre, 2017).

Como veremos a continuación, la investigación contrasta algunos de los factores referenciados con anterioridad e incorpora otros nuevos. Entre ellos destacan la segregación residencial, vinculada a la morfología municipal; el peso del sector privado, vinculado a la programación de la oferta; y la gestión a escala municipal del volumen y distribución del alumnado especialmente vulnerable (alumnado con Necesidades Educativas Específicas; a partir de

ahora, NEE)³, vinculada a los mecanismos de asignación del alumnado.

METODOLOGÍA

La investigación propone un análisis comparativo de todos los municipios catalanes de más de 10 000 habitantes con un mínimo de dos centros educativos en la etapa educativa analizada, excluyendo la ciudad de Barcelona⁴. Son 120 municipios en infantil y primaria, y 110 municipios en ESO. Se contrastan un conjunto de variables clave referidas a la morfología municipal y a las características del contexto escolar, incluyendo factores relativos a la programación de la oferta y a la asignación del alumnado, con el objetivo de identificar cuáles de ellas tienen una mayor incidencia en el diferencial de segregación escolar entre municipios. Tal detección puede contribuir decisivamente en el diseño de las políticas públicas orientadas a la lucha contra tal segregación.

La propuesta pivota sobre el análisis de modelos de regresión lineal múltiple, tomando como variable dependiente el Índice

de Disimilitud (a partir de ahora, ID) correspondiente a la distribución de los alumnos de nacionalidad extranjera entre las escuelas durante el curso 2018-2019⁵. Este análisis se ha realizado mediante tres bases de datos en paralelo:

- a) La primera, referente a la etapa de educación infantil y primaria: alumnos entre P3 (primer curso de educación infantil) y 6.º de primaria. A partir de ahora, BDINFPRI.
- b) La segunda, referente a la etapa de ESO. A partir de ahora, BDESO.
- c) Y, finalmente, la tercera (en adelante, BDINFPRIESO) integra las dos bases de datos anteriores, desdoblado cada municipio en dos casos independientes: uno con las características del municipio en la etapa de infantil y primaria, y otro con las características de ESO. Lógicamente, algunas de las variables son idénticas para los dos casos (las relativas a la morfología municipal), pero otras difieren (las que caracterizan el contexto escolar municipal en cada etapa). El objetivo es dilucidar si existe alguna clave explicativa detectable del diferencial en los niveles de segregación entre las dos bases de datos precedentes (el ID medio de los municipios de la BDINFPRI es de 0,293 y de los municipios de la BDESO de 0,202).

A continuación, se detallan las variables independientes utilizadas en el análisis.

³ La normativa catalana establece una reserva de plazas para los alumnos NEE. Hasta la entrada en funcionamiento del nuevo decreto de admisión de alumnos (Decreto 11/2021, de 16 de febrero), la reserva mínima era de dos plazas por aula, ampliable en caso de acuerdo entre los distintos agentes educativos. El despliegue de esta medida ha sido muy desigual. Numerosos municipios infrutilizan este instrumento, ya sea por una infradetección antes de la preinscripción, porque el dimensionamiento de la reserva de plazas no se ajusta a la detección realizada, o porque los mecanismos de acompañamiento de este alumnado son escasos (Síndic de Greuges, 2016). Tal desigualdad se concentra en los perfiles de alumnos NEE motivados por hándicaps de tipo social (familias con bajo dominio de las lenguas vehiculares, en riesgo de exclusión social, etc.).

⁴ Hemos replicado el análisis incorporando y excluyendo Barcelona, que es seis veces más grande que la segunda ciudad en tamaño. Hemos optado por presentar los resultados sin Barcelona, pues su singularidad neutralizaba la correlación de los niveles de segregación escolar con el tamaño de los municipios.

⁵ Tales índices han sido elaborados por el Síndic de Greuges, en su seguimiento técnico del estado de la segregación escolar en Cataluña. El ID fluctúa entre 0 (máxima desegregación) y 1 (máxima segregación), según la proporción de alumnos del grupo analizado que debieran cambiar de centro escolar para conseguir una proporcionalidad exacta. El ID no es el único índice utilizado en este tipo de análisis, pero sí uno de los más extendidos y de interpretación más intuitiva. Estas características lo hacen especialmente pertinente para un análisis como el que aquí se presenta.

TABLA 1. Listado de variables independientes

	Variables	Descripción
Morfología municipal	<i>Número de habitantes</i>	Número de habitantes del municipio.
	<i>Renta familiar disponible</i>	Renta familiar disponible por habitante (en miles de euros).
	<i>% población desocupada</i>	Porcentaje de población de 15 a 64 años desocupada.
	<i>% población universitaria</i>	Porcentaje de población de 15 años o más con estudios universitarios acabados.
	<i>% población extranjera</i>	Porcentaje de población de nacionalidad extranjera.
	<i>ID residencial población extranjera</i>	Índice de disimilitud de la población de nacionalidad extranjera entre las agrupaciones censales del municipio.
Contexto escolar	<i>Número de alumnos</i>	Número de alumnos escolarizados en los centros educativos del municipio.
	<i>Número de centros</i>	Número de centros educativos del municipio.
	<i>% alumnos extranjeros</i>	Porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera.
	<i>% alumnos en centros privados</i>	Porcentaje de alumnos escolarizados en los centros educativos de titularidad privada.
	<i>Media de líneas por centro</i>	Media de líneas (número de grupos-clase) por curso de los centros educativos.
	<i>% alumnos estudian fuera del municipio</i>	Porcentaje de alumnos residentes en el municipio que estudian en centros educativos de otros municipios.
	<i>% alumnos vienen de fuera del municipio</i>	Porcentaje de alumnos de los centros educativos del municipio que residen en otros municipios.
	<i>% alumnos NEE</i> <i>ID alumnado NEE</i>	Porcentaje de alumnos con NEE. Índice de disimilitud del alumnado con NEE entre los diferentes centros educativos.

Fuente: Elaboración propia.

Morfología municipal

Son aquellas variables clave que permiten parametrizar las características socio-demográficas del municipio. Hacen referencia al año 2019 y han sido tomadas de los datos e índices elaborados por el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), excepto la última, de elaboración propia a partir de datos del Idescat.

El número de habitantes permite explorar en qué medida la dimensión de un municipio incide en sus niveles de segregación escolar, mientras que las variables relativas a la renta familiar disponible, la población desocupada y la población universitaria, pretenden dilucidar si los niveles de capitalización económica y/o cultural de los mu-

nicipios tienen este mismo efecto. La variable referente a la población de nacionalidad extranjera remite al mismo parámetro con el que se construye nuestra variable dependiente, y permite detectar si existe alguna relación entre el volumen de población extranjera y la distribución más o menos segregada del alumnado extranjero. Por último, el índice de segregación residencial muestra la distribución de la población de nacionalidad extranjera entre las distintas agrupaciones censales del municipio⁶.

⁶ La agrupación censal es una unidad poblacional creada por el Idescat, «constituida por un conjunto de secciones censales enteras, territorialmente contiguas y con parecido socioeconómico. Las agrupaciones censales son unidades territoriales equilibradas pobla-

Contexto escolar

Reúne aquellas variables que explican las características del contexto escolar en cada una de las etapas objeto de estudio. Son variables elaboradas a partir de los datos del Departament d'Educació de Catalunya, del sistema de indicadores del Síndic de Greuges (las dos últimas variables) y de datos elaborados por el Idescat (las dos variables precedentes).

El número de alumnos y el número de centros están muy relacionados con el tamaño del municipio. Se han tenido en consideración para valorar cuál de las tres variables es más pertinente incorporar a los modelos de regresión. El porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera remite al peso específico de este perfil de alumnos en el sistema escolar. Es una variable semejante al porcentaje de población de nacionalidad extranjera, pero más ajustada a la población objeto de estudio.

Como ya hemos apuntado, el porcentaje de alumnos en centros de titularidad privada es un factor clave en la explicación de la segregación escolar⁷, de ahí su ineludible inclusión en el análisis. La media de líneas de los centros incorpora al análisis una dimensión que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta. Nuestra hipótesis es que el tamaño medio de los centros escolares repercute de forma significativa en la segregación escolar. Como veremos, su validación es uno de los aspectos más relevantes de nuestro análisis.

cionalmente, de 9000 habitantes de media, con tamaños que oscilan entre los 5000 y los 20 000 habitantes» (www.idescat.cat). Su dimensión y características socioeconómicas la hacen una unidad idónea para medir e interpretar la segregación residencial.

⁷ En nuestras bases de datos, encontramos algunos municipios donde todos los centros son públicos y otros con un 64,3 % (en infantil y primaria) o un 80 % (ESO) de centros privados. Hemos replicado el análisis con esta variable pero, dado que las diferencias en las correlaciones son menores, hemos incorporado solamente el porcentaje de alumnos y no el de centros.

Las dos variables siguientes, el porcentaje de alumnos que estudian fuera del municipio y el porcentaje de alumnos provenientes de otros municipios, permiten contrastar si la intensidad en la movilidad intermunicipal afecta a los niveles de segregación escolar. La hipótesis subyacente es que parte de la segregación escolar municipal puede quedar anulada por tal movilidad, desplazando así la cuestión de la segregación a otra escala territorial (la segregación intermunicipal).

Finalmente, las dos últimas variables incorporan al análisis el impacto de la detección y distribución de los alumnos NEE. El objetivo es contrastar hasta qué punto el volumen y la concentración de estos alumnos incide sobre nuestra variable dependiente. Si entendemos que los alumnos NEE son aquellos que muestran una mayor vulnerabilidad educativa, podemos contrastar con ello si las políticas locales que inciden en una detección extensa y una distribución equilibrada entre las escuelas, contribuyen a una situación menos segregada del alumnado de origen extranjero.

RESULTADOS

Iniciamos el análisis mostrando los resultados de las correlaciones entre nuestra variable dependiente (ID del alumnado de nacionalidad extranjera) y las distintas variables independientes enumeradas. Este procedimiento nos permite descartar aquellas variables que ya en las correlaciones bivariadas no muestran vínculos significativos. En el posterior análisis de regresión lineal múltiple, descartamos solamente aquellas variables que no presentan una correlación estadísticamente significativa en ninguna de las tres bases de datos. El resto de las variables independientes se incorporan a los modelos de regresión de las diferentes etapas educativas, favoreciendo así la comparación entre ellas.

TABLA 2. Correlaciones bivariadas entre las variables independientes y el ID del alumnado extranjero

		Infantil y primaria	ESO	Infantil y primaria + ESO
Morfología municipal	Número de habitantes	0,507***	0,565***	0,483***
	Renta familiar disponible	0,113	0,241**	0,149**
	% población desocupada	0,114	-0,048	0,038
	% población universitaria	-0,030	0,148	0,042
	% población extranjera	-0,090	-0,047	-0,068
	ID residencial población extranjera	0,451***	0,324***	0,352***
Contexto escolar	Número de alumnos	0,528***	0,573***	0,565***
	Número de centros	0,525***	0,570***	0,559***
	% alumnos extranjeros	-0,087	-0,033	0,044
	% alumnos en centros privados	0,339***	0,497***	0,350***
	Media de líneas por centro	-0,082	-0,230**	-0,376***
	% alumnos estudian fuera del municipio	0,015	-0,096	-0,127*
	% alumnos vienen de fuera del municipio	0,015	-0,183*	-0,205***
	% alumnos NEE	-0,243***	-0,104	-0,226***
	ID alumnado NEE	0,627***	0,254***	0,450***

Niveles de significatividad: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia.

Resulta especialmente reveladora la falta de correlación del porcentaje de población extranjera y del porcentaje de alumnos extranjeros con el ID del alumnado extranjero. Esto evidencia que la proporción de población extranjera en los municipios no afecta a la segregación escolar a escala intramunicipal (no sabemos si lo hace a escala intermunicipal). De las variables relativas a la morfología municipal, el porcentaje de población desocupada y el porcentaje de universitarios tampoco presentan correlaciones significativas con nuestra variable dependiente. En cambio, la renta familiar disponible sí que muestra una correlación positiva en ESO y en la base de datos combinada, de modo que es esta la variable relativa al nivel de capitalización que mantenemos en los modelos de regresión.

De las variables relativas al contexto escolar, la que presenta una correlación me-

nos intensa (al margen del porcentaje de alumnos extranjeros) es el porcentaje de estudiantes escolarizados fuera del municipio. Esta variable solo es significativa, y de forma débil, en la base de datos combinada, pero con ello cumple el criterio establecido para ser incorporada a los modelos de regresión.

Hay otro conjunto de variables que sí muestran correlaciones significativas, pero que tienen evidentes efectos de colinealidad entre ellas. Es el caso de las variables referentes al número de habitantes, al número de alumnos y al número de centros que, con distintos matices, referencian el tamaño del municipio. Solo incorporaremos una a los modelos de regresión: el número de habitantes, variable clave en la contextualización de cada urbe.

Así pues, las variables que finalmente se incorporaran a los modelos de regresión son:

a) Morfología municipal:

- *Número de habitantes*. Con unas correlaciones de 0,507 (infantil y primaria), 0,565 (ESO) y 0,483 (combinada), es una de las variables que, *a priori*, puede tener una mayor capacidad explicativa mostrando que, a mayor dimensión del municipio, mayor segregación escolar.
- *Renta familiar disponible*. Con un impacto menor (no significativo en infantil y primaria), muestra una correlación significativa en ESO y en la base de datos combinada: a mayor renta familiar disponible en el municipio, mayor segregación escolar.
- *ID residencial población extranjera*. Se trata de una de las correlaciones más elevadas (especialmente en infantil y primaria) y también tiene un sentido positivo: a mayor segregación residencial, mayor segregación escolar.

b) Contexto escolar:

- *% alumnos en centros privados*. Esta es otra de las variables con niveles de correlación elevados (especialmente en ESO); a mayor peso del sector privado, mayor nivel de segregación escolar.
- *Media de líneas por centro*. Variable significativa en ESO y, con mayor intensidad, en la base de datos combinada, con un sentido negativo: cuanto mayor es el tamaño medio de las escuelas, menos segregación escolar.
- *% alumnos estudian fuera del municipio*. Solo es significativa (y con una intensidad baja) en la base de datos combinada; cuanto mayor es el volumen de alumnos que estudian fuera del municipio, menor es el nivel de segregación escolar.

- *% alumnos vienen de fuera del municipio*. Es significativa en la base de datos combinada y, con menor intensidad, en la base de datos de ESO; a mayor volumen de alumnos procedentes de fuera del municipio, menos intensa es la segregación escolar.
- *% alumnos NEE*. Significativa en infantil y primaria (donde el contraste porcentual entre unos municipios y otros es mayor) y en la base de datos combinada; la segregación escolar es menor cuanto mayor es el volumen de alumnos adscritos a tal categoría de vulnerabilidad.
- *ID alumnado NEE*. Esta es la variable que en infantil y primaria muestra una mayor intensidad (no así en ESO); cuanto mayor es la segregación de los alumnos de este perfil, mayor es la segregación del alumnado de nacionalidad extranjera.

Una vez realizada la selección de variables, hemos elaborado los modelos de regresión lineal múltiple, que nos permiten dilucidar cuáles son las variables independientes que conservan su capacidad explicativa una vez anulados los efectos indirectos del resto de variables. Sobre cada una de las tres bases de datos hemos generado dos modelos de regresión. El primero solo incorpora las variables de morfología municipal, mientras que en el segundo se añaden las variables referentes al contexto escolar. La comparación de los dos modelos nos permite identificar aquellas variables de la morfología municipal cuya significatividad e intensidad explicativa está relacionada con la forma en la que se despliegan distintas variables del contexto escolar. En este sentido, tan importantes son los resultados de cada uno de los modelos para cada una de las bases de datos, como los contrastes de los resultados entre los modelos y las bases de datos.

TABLA 3. Modelos de regresión lineal múltiple

	Infantil y primaria		ESO		Infantil y primaria + ESO	
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 1	Modelo 2
Constante	0,141** (0,061)	0,287*** (0,081)	0,001 (0,053)	0,074 (0,078)	0,081* (0,046)	0,261*** (0,050)
Número de habitantes (en miles)	0,001*** (0,000)	-0,000*** (0,000)	0,001*** (0,000)	-0,001*** (0,000)	0,001*** (0,000)	-0,001*** (0,000)
Renta familiar disponible (en miles de euros)	0,004*** (0,004)	-0,004 (0,004)	0,009*** (0,003)	0,006* (0,004)	0,006** (0,003)	0,001 (0,003)
ID residencial población extranjera	0,388*** (0,112)	0,318*** (0,096)	0,151 (0,094)	0,159* (0,087)	0,254*** (0,083)	0,284*** (0,067)
% alumnos en centros privados		0,002*** (0,001)		0,002*** (0,001)		0,002*** (0,000)
Media de líneas por centro		-0,053* (0,030)		-0,008 (0,015)		-0,051*** (0,009)
% alumnos estudian fuera del municipio		0,001 (0,002)		-0,002 (0,001)		-0,001 (0,001)
% alumnos vienen de fuera del municipio		0,000 (0,001)		-0,002** (0,001)		-0,001** (0,001)
% alumnos NEE		-0,004*** (0,001)		-0,003** (0,001)		-0,004*** (0,001)
ID alumnado NEE		0,498*** (0,090)		0,111 (0,069)		0,273*** (0,057)
Observaciones	120	120	110	110	230	230
R ²	0,33	0,58	0,37	0,54	0,27	0,56

Niveles de significatividad: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

Variable dependiente: Índice de Disimilitud (ID) de los alumnos de infantil y primaria (3-12 años) de nacionalidad extranjera entre las diferentes escuelas de cada municipio.

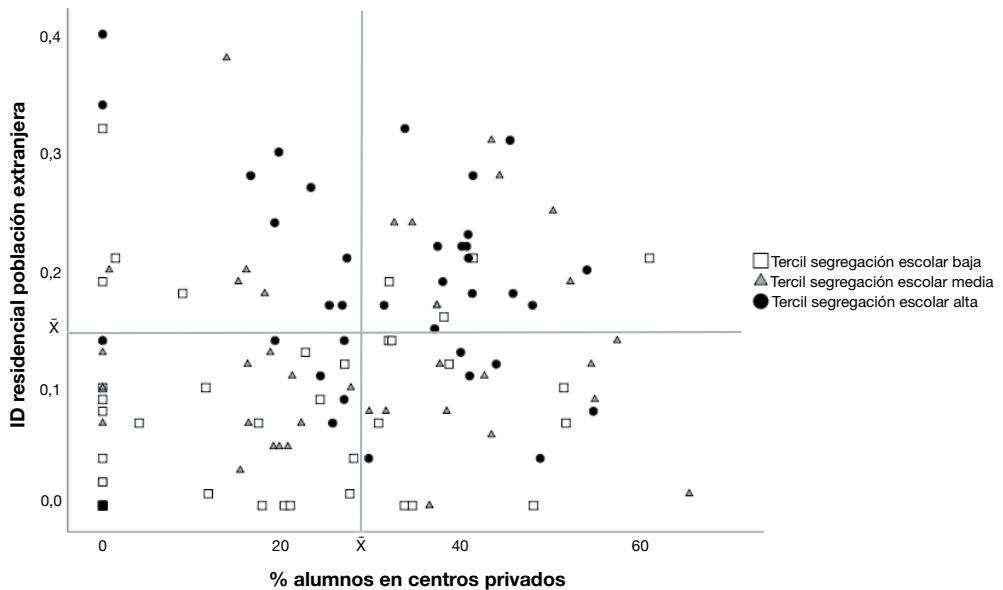
Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, centraremos la atención en la etapa de educación infantil y primaria. El primer modelo muestra que solo dos de las tres variables de morfología municipal tienen capacidad explicativa: el número de habitantes y el ID residencial. Cada incremento de 10 000 habitantes en el tamaño de un municipio incrementa la segregación escolar (el ID del alumnado extranjero) en una centésima, mientras que cada décima de incremento del ID residencial incrementa la segregación escolar en casi cuatro décimas.

En el segundo modelo, se reduce notablemente la capacidad explicativa del tamaño

del municipio, pero la segregación residencial sigue teniendo un impacto explicativo de primer nivel⁸. Con una intensidad semejante emerge un factor vinculado a la programación de la oferta: el peso del sector privado. Cada punto porcentual que crece el volumen de alumnos en escuelas privadas, la segregación escolar se incrementa en dos milésimas.

⁸ Atendiendo a las diferentes unidades de medida de las variables independientes (algunas son porcentajes, otras índices que oscilan entre 0 y 1), a la hora de interpretar su capacidad explicativa, los valores de los coeficientes de regresión (B) han sido contrastados con los coeficientes estandarizados (Beta).

GRÁFICO 1. Relación entre la segregación residencial, el peso del sector privado y la segregación escolar. Infantil y primaria

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 1 ilustra con mayor detalle el vínculo existente entre la segregación residencial, el peso del sector privado y la segregación escolar. Los puntos del gráfico representan cada uno de los municipios, con símbolos que reflejan la intensidad de su segregación escolar⁹. La imagen resultante refleja la fuerza de la correlación entre la segregación residencial y la segregación escolar. También se evidencia que el efecto combinado de una alta segregación escolar y un peso alto o medio del sector privado (cuadrante superior derecho y franja derecha del cuadrante superior izquierdo) dificulta tener niveles bajos de segregación escolar, mucho más prevalentes en el cua-

drante inferior izquierdo. A pesar de ello, existen algunos municipios (pocos) con baja segregación escolar a pesar de tener altos niveles de segregación residencial (si no hay alta proporción de alumnos en centros privados) y, sobre todo, a pesar de tener una alta proporción de centros privados (si no hay segregación residencial). Se trata, por lo tanto, de dos factores condicionantes, pero no totalmente determinantes. De hecho, incluso encontramos un caso con una baja incidencia de la segregación escolar a pesar de tener un ID residencial elevado y ser uno de los municipios con mayor presencia del sector privado.

Si retomamos los resultados de los modelos de regresión, hay otra variable con una intensidad explicativa similar al ID residencial y el peso del sector privado. Se trata del porcentaje de alumnos NEE. Cuanto mayor es su proporción, menor es la segregación escolar de los alumnos ex-

⁹ Presentamos los niveles de segregación escolar de los municipios en terciles, un nivel de agregación que sintetiza los contrastes principales en la representación gráfica. Los municipios del tercil de segregación baja tienen un ID inferior o igual a 0,21; los del tercil de segregación media, entre 0,22 y 0,35; y los del tercil de segregación alta, igual o superior a 0,36.

tranjeros. Además, la variable referente al ID del alumnado NEE aún tiene una mayor incidencia, situándose como la variable con una mayor capacidad explicativa de todo el modelo. Cuanto menos disímil es la distribución de este alumnado, menos lo es la distribución del alumnado extranjero. Así pues, aquellos municipios que diagnostican más alumnos NEE, y que también vehiculan eficientemente las políticas disponibles para favorecer su distribución equitativa, consiguen un impacto muy significativo en la disminución de la segregación escolar más genérica.

Hay una última variable que refleja un vínculo significativo con la variable dependiente: la media de líneas por centro. A pesar de que la intensidad explicativa es menor a la de las variables precedentes, el modelo muestra que aquellos municipios con una media mayor de líneas por escuela tienen niveles de segregación escolar inferiores. Incrementar en una línea la media municipal reduce en media décima la segregación escolar.

En la etapa de ESO encontramos algunas diferencias relevantes. Para contextualizarlas, conviene recordar que aquí los ID son inferiores (ID medio = 0,202) que en infantil y primaria (ID medio = 0,293). En el primer modelo destaca que la ID residencial no tiene un impacto significativo (si bien se sitúa cerca del umbral de la significatividad estadística). En cambio, la renta familiar disponible sí tiene aquí una incidencia significativa: la segregación escolar es mayor cuanto mayor es la renta familiar disponible. El número de habitantes refleja una mayor fuerza explicativa que en infantil y primaria.

En el segundo modelo, hay una variable independiente, el peso de la red privada, que emerge con gran intensidad, siendo la que presenta una mayor capacidad explicativa: a mayor porcentaje de alumnos en escuelas privadas, mucho mayor es la segregación escolar. Existe cierta correlación

entre el peso del sector privado y dos variables de morfología municipal: la renta familiar disponible y el número de habitantes. Por este motivo, al introducir el porcentaje de alumnos en la privada, disminuye la intensidad de estas dos variables (si bien conservan su significatividad estadística). En cambio, el ID residencial, aunque pasa a ser estadísticamente significativo, no experimenta grandes cambios (si en el primer modelo se situaba ligeramente por encima del umbral de la significatividad estadística, en el segundo se sitúa ligeramente por debajo). El ID residencial y la renta familiar disponible presentan una incidencia similar, mientras que el número de habitantes tiene una capacidad explicativa algo superior.

Por otra parte, si bien el porcentaje de alumnos NEE muestra una intensidad explicativa ligeramente inferior a la observada en infantil y primaria, el ID NEE pierde su significatividad. Esto se debe a que en secundaria la disparidad del ID NEE entre municipios es mucho menor, porque la detección de este perfil de alumnos ya se ha completado antes de acceder a esta etapa. No pasa lo mismo en P3: mientras que algunos municipios ya tienen muy avanzada la detección, otros apenas han activado parte de los protocolos (Síndic de Greuges, 2016). En la medida en que tal detección es imprescindible para articular los mecanismos de distribución equitativa, realizarla antes de la incorporación al segundo ciclo de infantil marca la incidencia positiva de esta medida en la lucha contra la segregación. Por lo tanto, cuando los alumnos se incorporan a secundaria, con los cambios de centros educativos de referencia de los alumnos (especialmente en el sector público), se pueden articular procedimientos mucho más eficientes de distribución equilibrada del alumnado NEE en todos los municipios, y no solo en aquellos más sensibilizados con su detección precoz.

Finalmente, hay otra variable que tiene un impacto significativo sobre la segre-

gación escolar: se trata del porcentaje de alumnos no residentes en el municipio que estudian en él. Cuanto mayor es su volumen, menor es la segregación escolar. Esta correlación se debe sobre todo a un fenómeno de «capitalidad». En buena parte del territorio catalán más despoblado, los municipios de más de 10 000 habitantes concentran plazas de secundaria que dan servicio fuera del propio municipio. Esta concentración de alumnado de distintas procedencias municipales en pocos centros escolares tiene un efecto reductor de la segregación escolar.

En cualquier caso, no deja de sorprender la disminución de los índices de segregación en secundaria, cuando en los modelos de regresión se evidencia el peso de un factor explicativo vinculado al estatus socioeconómico como es la relevancia de la renta familiar disponible. No parece desacertado interpretar que en esta etapa priman los mecanismos de diferenciación asociados a las apuestas por trayectorias académicas competitivas y de cierre social y, a pesar de ello, se reduce la segregación escolar. La tercera de las bases de datos (BDINFPRIESO) nos da la clave para explicar este fenómeno paradójico.

La BDINFPRIESO tiene el efecto que podíamos esperar sobre casi todas las variables independientes: su capacidad explicativa se sitúa a medio camino entre la que hemos visto en la BDINFPRI y en la BDESO. Las variables ID residencial e ID de los alumnos NEE tienen menor incidencia que en infantil y primaria, pero más que en ESO; la renta familiar disponible, más intensidad que en infantil y primaria, pero menos que en ESO; etc.

Hay una variable que se escapa a esta lógica y que, a pesar de haber mostrado una significatividad débil o nula en los modelos anteriores, muestra ahora una significatividad más sólida. Nos referimos a la media de líneas por centro. Como ya veía-

mos en infantil y primaria, el incremento de una línea en la media de los centros se traduce en una disminución de media décima en la segregación escolar. En la BDINFPRIESO, se incrementa la capacidad explicativa de esta variable. De hecho, es la variable con una mayor capacidad explicativa de todo el modelo, seguida muy de cerca por el peso del sector privado, el ID NEEE, el porcentaje de alumnos NEE y el ID residencial. Esto significa que en aquellas situaciones locales con tendencia a tener menos centros escolares, pero con un mayor número de líneas, la posibilidad de tener un contexto escolar no segregado es mayor.

Este fenómeno explica que en secundaria el nivel de segregación escolar sea menor que en primaria: el número de líneas por centro tiende a ser notablemente mayor en secundaria, especialmente en los centros públicos. Así pues, el descenso de la segregación en secundaria se debe, sobre todo, a que se reduce mucho el número de centros escolares y ello minimiza el potencial segregador del contexto escolar. De hecho, este mismo fenómeno de concentración y reducción de la oferta escolar explica la disminución de la segregación como efecto de la capitalidad, en secundaria, en aquella parte del territorio con menor densidad poblacional.

CONCLUSIONES

El objetivo último de nuestro análisis era identificar claves explicativas de la morfología municipal, de la programación de la oferta educativa y de los mecanismos de asignación del alumnado, que inciden sobre los niveles de segregación escolar. Para ello, nos hemos valido de la variable ID del alumnado extranjero elaborada por el Síndic de Greuges. Se trata de un indicador sólido y contrastado en el análisis de la segregación escolar estructural de un sistema educativo. A nuestro parecer, los resultados

obtenidos son tan contundentes que merecen ser tenidos en consideración en la articulación de las políticas públicas de lucha contra la segregación escolar.

El análisis ha permitido contrastar que, efectivamente, la segregación residencial es un factor contextual relevante, también en un modelo como el catalán y español, de «elección restringida». En cambio, otras variables de las que pudiera suponerse cierta incidencia, como, por ejemplo, el volumen de residentes (y alumnos) extranjeros, no se han mostrado significativos.

Tan interesante como esto ha sido evidenciar que existen otros factores, asociados a la programación de la oferta y a la asignación del alumnado, que tienen tanta o más incidencia que la segregación residencial. El más relevante es la titularidad de los centros. Cuanto menor es el peso del sector privado, menor es la predisposición a la segregación escolar. Además, mientras que la segregación residencial muestra una capacidad explicativa especialmente elevada en infantil y primaria, la titularidad adquiere una posición explicativa preferente en ESO. Con todo, si bien ambos factores explican la segregación escolar, especialmente cuando en un municipio se aúnan una segregación residencial intensa y una elevada presencia del sector privado, existen casos con una elevada segregación escolar a pesar de no tener un peso elevado de ninguno de estos dos factores. A su vez, también hay algún caso de municipio con baja segregación escolar a pesar de incorporar ambos condicionantes desfavorables. En infantil y primaria, destaca un importante volumen de municipios con bajos niveles de segregación escolar a pesar de tener una incidencia elevada del sector privado. Cabe preguntarse si, en estos casos, la segregación también es baja entre los colectivos socioeconómicamente descapitalizados.

En cuanto a los mecanismos de asignación del alumnado, nuestra investigación

demuestra que cuando se detecta una mayor proporción de alumnado NEE (algo que se debe, sobre todo, a una mayor predisposición política y de los cuerpos administrativos a detectar alumnado vulnerable por cuestiones de índole social) y se consigue distribuirlo de forma más equitativa, la segregación es menor. Así, una alta detección y una distribución equilibrada de alumnado NEE consigue resultados efectivos en la lucha contra la segregación no solo entre estos perfiles, sino también entre los colectivos en situación de desventaja social (como, en el caso aquí estudiado, los estudiantes extranjeros, que representan el 16,2 % de media en infantil y primaria, y el 11,3 % de media en ESO).

A su vez, no solo es determinante una alta sensibilidad a la detección de NEE, sino que, además, el contraste de los resultados entre las diferentes etapas educativas permite deducir que también es clave que la detección sea precoz, avanzándose a las preinscripciones del primer curso de la etapa en cuestión. Solo así los mecanismos de distribución equilibrada del alumnado se pueden desplegar en el momento clave para producir efectos contra la segregación.

Junto con la segregación residencial, la titularidad y el porcentaje y distribución del alumnado más vulnerable, emerge un cuarto factor, vinculado a la dimensión de la programación de la oferta, que tiene una intensidad explicativa análoga a los anteriores, y que no ha sido considerado hasta el momento en la literatura académica. Nos referimos al tamaño de los centros escolares. Este no se revela significativo en ESO y presenta una significatividad débil en infantil y primaria. La razón es que el contraste en el tamaño de los centros entre unos y otros municipios no es lo suficientemente grande. Solo al combinar ambas etapas en una única base de datos, con situaciones lo suficientemente contrastadas entre sí, el tamaño escolar revela todo su potencial explicativo. Cuanto menor es el tamaño de los

centros y, por lo tanto, cuanto más atomizada está la oferta escolar, mayor es la segregación escolar.

Se trata de una evidencia que pone en cuestión algunas de las lógicas preponderantes en el diseño de los mapas educativos. En primer lugar, debiera cuestionarse la tendencia a apostar por la construcción o reformulación de escuelas de una sola línea. Se trata de una dinámica avalada por los postulados ideológicos y pedagógicos que podríamos catalogar como «comunitaristas», favorables a la idea de escuelas pequeñas, que permitan la articulación de dinámicas comunitarias, favorecedoras del estrechamiento de los vínculos y la implicación de los distintos actores educativos. A su vez, en momentos de contracción demográfica, en los que hay un excedente de líneas educativas, los decisores políticos tienden a ser más proclives a cerrar una línea en algunas escuelas que a cerrar escuelas de una línea, dado que ello evita cerrar centros. Más allá de las implicaciones en términos de eficiencia económica y de costes de oportunidad educativa, tales dinámicas potencian la atomización progresiva del mapa educativo, reduciendo el tamaño medio de las escuelas; algo que, como demostramos aquí, favorece la segregación escolar.

En un sentido similar, la creciente apuesta en comunidades como Cataluña por modelos de instituto-escuela que, a semejanza de lo que pasa en el sector privado, aúnan en un mismo centro escolar las etapas de infantil, primaria y secundaria, puede tener el efecto no deseado de dificultar la lucha contra la segregación escolar. Como hemos visto, el paso de primaria a secundaria implica una reducción de la segregación escolar. Eliminar este momento de reducción de la segregación y, a su vez, proyectar a secundaria un mapa escolar que replique el tamaño de las escuelas de primaria (un mapa mucho más atomizado), implica generar un marco de programación de la oferta más proclive a la segregación.

De hecho, la situación en la etapa de secundaria da muchas claves sobre las medidas institucionales que son útiles en la lucha contra la segregación escolar. Como hemos visto, en esta etapa se intuye una segregación más orientada por la diferenciación de estatus: pesan más factores como la titularidad o la renta familiar disponible de los municipios. Pero el hecho de tener ya detectado al alumnado NEE y tener una programación de la oferta más restringida (menos centros por municipio), generan un contexto educativo menos segregado. Por lo tanto, los factores institucionales que afectan favorablemente a la lucha contra la segregación pesan más que unas disposiciones familiares subjetivas entre los sectores capitalizados, más proclives a la activación de mecanismos de elección escolar favorecedores de la segregación.

Así pues, la principal conclusión de este artículo es que, efectivamente, una gestión de la política educativa a escala local orientada a la reducción de la segregación escolar puede ser altamente efectiva. Una investigación como la nuestra no puede saturar todos los factores con potencial transformador en la lucha contra la segregación; solamente aquellos codificables en las bases de datos y con situaciones suficientemente contrastadas como para iluminar acciones consistentes y eficaces. Pero a pesar de estas limitaciones se evidencian los efectos positivos de la activación de tales políticas institucionales. Además, también emerge la importancia de considerar cuestiones relativas al mapa escolar que no suelen ser tenidas en cuenta, como el tamaño de los centros escolares. Podemos suponer, en este sentido, que otros elementos del mapa escolar que no hemos podido contemplar en la investigación, como la ubicación y accesibilidad de los centros de nueva construcción, también pudieran tener un impacto significativo.

En relación con la programación de la oferta, el tamaño de los centros y el peso del

sector privado se revelan como factores explicativos de primera magnitud. Son factores, además, que toman relevancia en la agenda municipal en momentos de transformación de los mapas educativos: etapas de crecimiento o decrecimiento demográfico, años de renovación de los conciertos educativos, etc. En estas situaciones, se requieren apuestas políticas decididas por la gobernanza de la oferta, evitando que la toma de decisiones esté guiada por las presiones de parte que ejercen los distintos actores educativos.

En cuanto a la asignación de centro, el margen de actuación también es considerable. Hemos evidenciado que las Administraciones sensibles a detectar todas las situaciones de vulnerabilidad (algo que se ve reflejado en un incremento de la detección de NEE) y a distribuir equilibradamente este alumnado, obtienen efectos muy significativos en la lucha contra la segregación. Por lo tanto, un ordenamiento normativo que orientara efectivamente hacia una detección más sistemática y precoz en todos los municipios, reforzando el principio de distribución equilibrada, incidiría decisivamente en la disminución de la segregación.

Finalmente, el factor contextual del ID residencial pudiera interpretarse como el escollo estructural insalvable en la lucha contra la segregación. Frente a ello, cabe advertir que los modelos de regresión muestran cómo la segregación escolar no depende solo, ni mucho menos, de la segregación residencial. De hecho, factores como la distribución equilibrada de alumnos NEE pueden minimizar su impacto. Además, es posible imaginar que ciertas actuaciones no contempladas en este artículo puedan reducir el condicionamiento de la segregación residencial. Es el caso del diseño de la zonificación escolar, entendida como la demarcación de las áreas territoriales cuyo alumnado residente tiene prioridad en el acceso a un centro escolar. Un diseño de la zonificación que no eluda la proximidad en la priorización del acceso —que evite los diseños de «zona única»—, y

que, a la vez, no redunde en los contrastes socioeconómicos existentes entre las distintas zonas de los municipios —es decir, que intente generar zonas lo más socialmente heterogéneas posible— también pudiera minimizar el impacto de la segregación escolar (Benito y González, 2007).

BIBLIOGRAFÍA

- Alegre, Miquel Á. (2010). «Casi-mercados, segregación escolar y desigualdad educativa: Una trilogía con final abierto». *Educação y Sociedade*, 31(113): 1157-1178. doi: 10.1590/S0101-7330201000400006
- Alegre, Miquel Á. (2017). *Polítiques de tria i assignació d'escola: Quines efectes tenen sobre la segregació escolar?* Barcelona: Fundació Jaume Bofill-Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.
- Alegre, Miquel Á.; Benito, Ricard; Chela, Xènia y González, Sheila (2010). *Les famílies davant l'elecció escolar. Dilemes i desigualtats en la tria de centre a la ciutat de Barcelona*. Barcelona: Mediterrània. Disponible en: <https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/l/3/4/4/w/u/a/q/9/528.pdf>, acceso 3 de enero de 2018.
- Allen, Rebecca (2007). «Allocating Pupils to Their Nearest Secondary School: The Consequences for Social and Ability Stratification». *Urban Studies*, 44(4): 751-770. doi: 10.1080/00420980601184737
- Ball, Stephen (2003). *Class Strategies and the Education Market. The Middle Class and Social Advantages*. London: Routledge Falmer.
- Bellei, Cristian (2013). «El estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena». *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 39(1): 325-345. doi: 10.4067/S0718-07052013000100019
- Benito, Ricard y González, Isaac (2007). *Processos de segregació escolar a Catalunya*. Barcelona: Mediterrània. Disponible en: <https://fundaciobofill.cat/publicacions/processos-de-segregacio-escolar-catalunya>, acceso 3 de enero de 2018.
- Benito, Ricard; Alegre, Miquel Á. y González, Isaac (2014). «School Educational Project as a Criterion of School Choice: Discourses and Practices in the City of Barcelona». *Journal of Education Policy*, 29(3): 397-420. doi: 10.1080/02680939.2013.844858

- Bernelius, Venla y Vaattovaara, Mari (2016). «Choice and Segregation in the “Most Egalitarian” Schools: Cumulative Decline in Urban Schools and Neighbourhoods of Helsinki, Finland». *Urban Studies*, 53(15): 3155-3171. doi: 10.1177/0042098015621441
- Bonal, Xavier; Zancajo, Adrián y Scandurra, Rosario (2019). «Residential Segregation and School Segregation of Foreign Students in Barcelona». *Urban Studies*, 56(15): 3251-3273. doi: 10.1177/0042098019863662.
- Bowe, Richard; Gewirtz, Sharon y Ball, Stephen J. (1994). «Captured by the Discourse? Issues and Concerns in Researching “Parental Choice”». *British Journal of Sociology of Education*, 15(1): 63-78. doi: 10.1080/0142569940150104
- Carrasco-Pons, Silvia; Pàmies-Rovira, Jordi; Ponferrada-Arteaga, Maribel; Ballestín-González, Beatriz y Bertrán-Tarrés, Marta (2009). «Segregación escolar e inmigración en Cataluña: Aproximaciones etnográficas». *EMIGRA Working Papers*, 126: 25-39.
- Chubb, John E. y Moe, Terry M. (2011). *Politics, Markets, and America's Schools*. Washington: Brookings Institution Press.
- Coleman, James S. (1966). *Equality of Educational Opportunity*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Córdoba-Canclín, Claudia (2011). «La concentración de alumnado extranjero en Enseñanza Primaria: un estudio en dos ciudades andaluzas». *RES. Revista española de Sociología*, 16: 27-46.
- Córdoba-Canclín, Claudia; Farris, Massimiliano y Rojas-Patuelli, Karina (2017). «Discussing School Socioeconomic Segregation in Territorial Terms: The Differentiated Influence of Urban Fragmentation and Daily Mobility». *Investigaciones Geográficas*, 92: 54-76. doi: 10.14350/ig.54766
- Dupriez, Vincent y Vandenberghe, Vincent (2004). «L'école en Communauté française de Belgique: De quelle inégalité parlons-nous?». *Les Cahiers de Recherche en Education et Formation*, 27(1): 3-26.
- Elacqua, Gregory; Montt, Pedro y Santos, Humberto (2013). «Evidencias para eliminar gradualmente el financiamiento compartido». *Claves de Políticas Públicas*, 14: 1-10. Disponible en: <https://sital.iep.unesco.org/investigacion/2521/evidencias-eliminar-gradualmente-financiamiento-compartido>, acceso 25 de abril de 2022.
- Entorf, Horts y Davoli, Maddalena (2018). Socioeconomic Inequality and Student Outcomes in German Schools. En: L. Volante; S. V. Schnepf, J. Jerrim y D. A. Klinger (eds.). *Socioeconomic Inequality and Student Outcomes*. Singapore: Springer.
- Escardíbul, Josep-O. y Villarroya, Anna (2009). «The Inequalities in School Choice in Spain in Accordance to PISA Data». *Journal of Education Policy*, 24(6): 673-696. doi: 10.1080/02680930903131259
- Fernández-Enguita, Mariano (2008). «Escuela pública y privada en España: La segregación rampante». *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 1(2): 42-69.
- Ferrer, Álvaro y Gortázar, Lucas (2021). *Diversidad y libertad. Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro*. Barcelona: EsadeEcPol. Disponible en: <https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/segregacion-escolar-esadeecpol/>, acceso 21 de mayo de 2022.
- Gewirtz, Sharon; Ball, Stephen J. y Bowe, Richard (1995). *Markets, Choice, and Equity in Education*. Open University Press.
- González Balletbò, Isaac (2017). L'autonomia de centre en els horitzons de millora educativa. En: B. Albaigés y F. Pedró (dirs.). *L'estat de l'educació a Catalunya, Anuari 2016*. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Disponible en: https://fundaciobofill.cat/uploads/old-files/06%20cap%208-autonomiadecentre_191017.pdf, acceso 21 de febrero de 2020.
- González-González, María T. (2008). «Diversidad e inclusión educativa: algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escolar». *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6(2): 82-99.
- Gorard, Stephen (2009). «Does the Index of Segregation Matter? The Composition of Secondary Schools in England since 1996». *British Educational Research Journal*, 35(4): 639-652. doi: 10.1080/01411920802642389
- Gorard, Stephen y Smith, Emma (2004). «An International Comparison of Equity in Education Systems». *Comparative Education*, 40(1): 15-28. doi: 10.1080/0305006042000184863
- Hastings, Justine S. y Weinstein, Jeffrey M. (2008). «Information, School Choice, and Academic Achievement: Evidence from Two Experiments». *The Quarterly Journal of Economics*, 123(4): 1373-1414.
- Hoxby, Caroline M. (2003). School Choice and School Productivity. Could School Choice be a Tide that Lifts All Boats? En: *The Economics of School Choice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Madaria-Escudero, Borja de y Vila-Lladosa, Luis E. (2020). «Segregaciones escolares y desigualdad de oportunidades educativas del alum-

- nado extranjero en Valencia». *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 18(4): 269-299. doi: 10.15366/reice2020.18.4.011
- Mancebón-Torrubia, María J. y Pérez-Ximénez de Embún, Domingo (2009): «Segregación escolar en el sistema educativo español. Un análisis a partir de PISA 2006». *Investigaciones de Economía de la Educación*, 4: 63-77.
- Maroy, Christian (2008). «¿Por qué y cómo regular el mercado educativo?». *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12(2): 3-14.
- Murillo, Francisco J. (2018). «Segregación escolar público-privada en España». *Papers: Revista de Sociología*, 103(3): 307-337. doi: 10.5565/rev/papers.2392
- Murillo, Francisco J. y Martínez-Garrido, Cynthia (2019). «Perfiles de segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas». *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 25(1): 1-20. doi: 10.7203/relieve.25.1.12917
- Odendahl, Wolfgang (2017). «'Bildungskrise'-PISA and the German Educational Crisis». *IAFOR Journal of Education*, 5(1): 209-226. doi: 10.22492/ije.5.1.11
- OECD (2019). *PISA 2018 (Volumen II): Results. Where All Students Can Succeed*. Paris: PISA, OECD Publishing. doi: 10.1787/b5fd1b8f-en
- Rujas, Javier; Prieto, Miriam y Rogero-García, Jesús (2020). «Desigualdades socioespaciales en la Educación Secundaria Postobligatoria. El caso de Madrid». *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 18(4): 241-267. doi: 10.15366/reice2020.18.4.010
- Síndic de Greuges (2016). *La segregació escolar a Catalunya (I). La gestió del procés d'admissió d'alumnat*. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Disponible en: https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf, acceso 12 de noviembre de 2020.
- Valenzuela, Juan P.; Bellei, Cristian y Ríos, Danae de los (2014). «Socioeconomic School Segregation in a Market – Oriented Educational System. The Case of Chile». *Journal of Education Policy*, 29(2): 217-241. doi: 10.1080/02680939.2013.806995
- Wilson, William J. (1987). *The Truly Disadvantaged. Inner City, the Underclass and Public Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zanten, Agnès van (1996). Fabrication et effets de la ségrégation scolaire. En: S. Paugam (ed.). *L'exclusion, l'état des savoirs*. Paris: Editons La Découverte.
- Zanten, Agnès van (2001). *L'école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue*. Paris: PUF.

RECEPCIÓN: 14/06/2022

REVISIÓN: 06/09/2022

APROBACIÓN: 09/11/2022

School Segregation at the Local Level: Contextual and Institutional Factors in Catalonia

La segregación escolar a escala local: factores contextuales e institucionales en Cataluña

Isaac González Balletbò, Ricard Benito and Bernat Albaigés

Key words

Educational inequality

- Equity
- Education Policy
- School Segregation

Palabras clave

Desigualdad educativa

- Equidad
- Política educativa
- Segregación escolar

Abstract

This article presents the main results of a study that analysed school segregation indexes in Catalan municipalities with more than 10 000 inhabitants, in pre-school, primary and obligatory secondary education. The study used linear regression models, taking advantage of the analytical potential of comparing schools sharing the same regulatory framework. The results reveal the importance of residential segregation and the private school sector in the intensity of school segregation, as well as the additive effect of these two factors. We also find a notable impact of other factors: the strength of local policies aimed at the detection and distribution of the most acutely vulnerable pupils, and the level of fragmentation of municipal education in small schools.

Resumen

Este artículo presenta los resultados principales de una investigación que analiza los índices de segregación escolar de los municipios de más de 10 000 habitantes de Cataluña, en infantil y primaria y en secundaria obligatoria, mediante modelos de regresión lineal, aprovechando el potencial de comparar realidades que comparten un mismo marco normativo. Los resultados muestran los principales factores que inciden en la intensidad de la segregación escolar. Más allá de corroborar la relevancia de la segregación residencial y el peso del sector privado, se aportan evidencias del efecto aditivo de estos dos factores, y también del impacto notable de factores adicionales, como la baja implementación de políticas locales de detección y distribución del alumnado especialmente vulnerable, y el nivel de atomización de la oferta educativa municipal en centros de tamaño reducido.

Citation

González Balletbò, Isaac; Benito, Ricard; Albaigés, Bernat (2023). "School Segregation at the Local Level: Contextual and Institutional Factors in Catalonia". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 39-56. (doi: 10.5477/cis/reis.183.39)

Isaac González Balletbò: Universitat Oberta de Catalunya | igonzalezbal@uoc.edu

Ricard Benito: Universitat Autònoma de Barcelona | ricard.benito@uab.cat

Bernat Albaigés: Síndic de Greuges de Catalunya | balbaiges@gmail.com

INTRODUCTION

The latest report analysing PISA¹ results recognises that school segregation, understood as the unequal proportion of specific student profiles in schools in a given geographic area, is a key factor in explaining inequality in educational performance, especially among students in socially disadvantaged situations (OECD, 2019).

School segregation was first addressed in the United States when the Supreme Court declared the racial separation of students illegal in 1954. Subsequently, with the 1966 Coleman report (Coleman *et al.*, 1966), which looked at the impact of social composition on academic results, segregation in the schools became an object of study on an international scale, levels of segregation among different populations have been studied: by ethnic-cultural origin, by academic performance and socioeconomic level (Wilson, 1987). In Europe, interest in studying school segregation did not begin until the 1990s, and was closely linked to managing immigration and analysing the segregation of immigrant students. Subsequently, segregation related to socioeconomic level became an object of study (Dupriez and Vandenberghe, 2004; Gorard, 2009).

In Spain, the study of school segregation also began in the 1990s, but really took off during the first decade of this century, coinciding with the arrival of significant migratory flows. Initial studies were focused on the welcoming of immigrant students and managing cultural diversity in schools (Madaria-Escudero and Vila-Lladosa, 2020), and it was not until the first decade of the 21st century when the focus was placed on imbalances in the social composition of schools, first in terms of student origin and subsequently in function of family socioeconomic

status (Fernández-Enguita, 2008; Mancebón-Torrubia and Pérez-Ximénez de Embún, 2009). In secondary education, Spain occupies a position slightly above the average among OECD countries on measurements of school segregation in terms of economically disadvantaged students (OECD, 2019), but not in terms of students of immigrant origin, where Spain is notably below the average (Ferrer and Gortázar, 2021). In contrast, if we look at the primary school level², segregation in Spain is particularly high, above all among economically disadvantaged students (Ferrer and Gortázar, 2021).

This article presents new evidence in the study of the causes of school segregation. It follows similar research that has been done to analyse policies aimed at ending school segregation. In our case, we compare school segregation in more than 100 municipalities in Catalonia, which is one of Spain's autonomous regions with the highest levels of segregation by socioeconomic level (Murillo and Martínez-Garrido, 2019), but among the lowest in terms of segregation by place of origin (Ferrer and Gortázar, 2021).

The fact that the cases under study share the same regulatory framework at both national and regional level prevents us from analysing the impact of those factors, which are identical for the whole of the universe studied. However, it makes it possible to reliably analyse the impact of factors that differ between municipalities, such as their socio-demographic context, the particularities in their programming of available school places and their administration of the assignment of students to schools. As we will see, despite not having easily codified information on some of these factors, we have been able to compare and analyse some of the most important ones, contributing findings that can guide education policies.

¹ Based on the 2018 PISA exams, which compare student performance at 15 years of age in mathematics, science and reading in OECD countries.

² These authors use the results of the TIMSS tests, which compared the acquisition of competencies in mathematics and science of 10-year-old students in 64 countries.

THEORETICAL FRAMEWORK

The study of school segregation reveals that it has multiple causes, a result of the impact of contextual, institutional and socio-cultural factors on the education system. It is also conditioned by the specificities of each country, region or geographic area (Bellei 2013; Madaria-Escudero and Vila-Lladosa, 2020).

Substantive research has examined the subjective causes of school segregation, investigating motivational elements that drive preferences and school choice. Some studies incorporate cultural and ideological factors in the shaping of preferences (Alegre *et al.*, 2010), while others have focused on the realisation of these preferences among different family groups. Proximity emerges as important among socially disadvantaged groups, who also have less and poorer information (Gewirtz, Ball and Bowe, 1995; Zanten, 1996; Allen, 20007; Elacqua, Montt and Santos, 2013). In contrast, families with higher social status have a greater predisposition for geographic mobility to access better schools (Bowe, Gewirtz and Ball, 1994) and give greater importance to school climate and the profile of the student body (Benito, Alegre and González, 2014).

Another area of research has focused on the objective causes that condition such choices. Our contribution fits in this group. Among these studies we find analyses of the impact of factors linked to urban morphology, to the characteristics of the programming of school places and to mechanisms for assigning students to schools. The most compelling and consistent results find that residential segregation (Alegre *et al.*, 2010; Córdoba, 2011) is a key factor in explaining school segregation (Gorard and Smith, 2004), both in countries where school choice depends exclusively or mainly on geographic residence (Wilson, 1987) as well as in those, such as Spain, that have a mixed system of “restricted choice” that combines enrolment based on residential proximity and family choice of the

school (Alegre, 2010). In Spain, indications are that school segregation is more intense than residential segregation (Benito and González, 2007; Síndic de Greuges, 2016), but this is the basis of the differentiation from which school segregation is shaped (Bonaf, Zancajo and Scandurra, 2019). Beyond the correspondence between the profiles of the resident and school populations, which is an important factor that fosters residential segregation (Bernelius and Vaattovaara, 2016), this connection is also explained by factors such as that neighbourhoods with higher status populations tend to have better infrastructures and more school choices available (Córdoba-Cañclín, Farri and Rojas-Patuelli, 2017; Rujas, Prieto and Rogero-García, 2020).

The academic literature has closely examined another factor related to the programming of school places: the organisation of the education system according to quasi-market parameters, characterised, to a great extent, by the weight of private schools and by the establishment of mechanisms for school autonomy and to stimulate competition between schools. Many studies have identified such models as strengthening school segregation (Zanten, 1996, 2001; Ball, 2003), although there are others that argue that incorporating competitive dynamics can be beneficial for schools with lower profiles (Hoxby, 2003; Chubb and Moe, 2011). Thus, according to how certain controversial educational policies are carried out, such as the provision of *school vouchers*, school choice can benefit socially disadvantaged families (Hastings and Weinstein, 2008) and reduce school segregation (González-González, 2008).

In any case, there is a lot of evidence that the greater the presence of the private sector, the greater is school segregation (Fernández-Enguita, 2008; Escardíbul and Villarroya, 2009; Valenzuela, Bellei and Ríos, 2014; Murillo, 2018). Private schools tend to incorporate economic barriers to access that generate segregation, even when they receive significant public subsidies. But be-

yond this direct effect on segregation, the presence of the private sector stimulates greater school autonomy and the proliferation of niche schools to meet differentiated educational sensibilities, which in turn are correlated with students from families with higher social status (Alegre, 2010; González Balletbò, 2017).

In short, models that allocate school placement based on geographic proximity stimulate residential segregation, while those that are closer to freedom of school choice reduce some of the explanatory weight this contextual factor has, but activate other segregating mechanisms.

Another factor that must also be considered is related to the programming of school places; this is the duration of the comprehensive phase of the educational model. In countries where separation into academic or vocational itineraries takes place at earlier ages, socioeconomic segregation is greater, reinforced by an institutional design that discriminates students based on talents and preferences. Thus, countries with early specialisation (with Germany as a paradigmatic case) are structurally more segregated than comprehensive systems with a shared curriculum that continues beyond 14 or 15 years of age (Odendahl, 2017; Entorf and Davoli, 2018). Despite this, some authors warn that comprehensive systems can hide segregating dynamics, such as grouping by academic performance within schools, which correlates with the position of students' families in the social structure (Carrasco-Pons *et al.*, 2009).

Regarding mechanisms used to assign students to schools, there are two factors that closely correlate with school segregation. The first is selection of the student body by the schools; where they can, openly or covertly, choose students, this strengthens school segregation (Maroy, 2008; Valenzuela, Bellei and Ríos, 2014). In contrast, when more balanced methods for distributing students are used, for example, quota systems, segregation declines (Alegre, 2017).

As we will see, this study compares some of these factors and incorporates new ones. Among these, the most important are residential segregation, linked to municipal structure; the weight of the private sector, linked to the programming of places; and management at the municipal level of the volume and distribution of especially vulnerable students (those with Specific Educational Needs; referred to here as SEN)³, connected to mechanisms for the placement of students.

METHODOLOGY

This study is based on a comparative analysis of all Catalan municipalities of more than 10 000 inhabitants with a minimum of two schools in the education stage being analysed, excluding the city of Barcelona⁴. In total, there are 120 municipalities considered for pre-school and primary education, and 110 for obligatory secondary education (in Spain referred to as ESO). We look at a series of key variables related to municipal morphology and the characteristics of the school, including factors regarding the programming of places and the allocation of students. The aim is to identify which of these factors have a greater impact on differences in school segregation between municipalities. Our find-

³ Catalan regulations establish the reservation of places for SEN students. Until a new decree regarding the admission of students was established (Decree 11/2021, 16 February), the minimum reserved for such students was two places per classroom, expandable in the case of agreement among different educational agents. This measure was unequally implemented. Many municipalities underutilised this instrument, whether due to under-detection before enrolment, as the number of reserved places did not fit the needed cases, or because assistance available to these students was lacking (Síndic de Greuges, 2016). This inequality was concentrated among SEN students considered to be so for handicaps of a social nature (families with low levels of language proficiency, at risk of social exclusion, etc.).

⁴ We have replicated the analysis incorporating Barcelona, which is six times larger than the second largest city in Catalonia. We have chosen to present the results without including Barcelona, as its singularity neutralises the correlation of school segregation with the size of municipalities.

TABLE 1. *List of independent variables*

	Variables	Description
Municipal morphology	<i>Population</i>	Municipal population.
	<i>Disposable family income</i>	Disposable family income by inhabitant (in thousands of euros).
	<i>% population unemployed</i>	Percentage of population from 15 to 64 years of age unemployed.
	<i>% population w. university education</i>	Percentage of population 15 years and up with university degree.
	<i>% foreign population</i>	Percentage of population of foreign nationality.
	<i>D for resident foreign population</i>	Dissimilarity index for population of foreign nationality among municipal census clusters.
School context	<i>Number of students</i>	Number of students enrolled in municipal schools.
	<i>Number of schools</i>	Number of schools in municipality.
	<i>% foreign students</i>	Percentage of students of foreign nationality.
	<i>% students in private schools</i>	Percentage of students enrolled in private schools.
	<i>Avg. no. of sections per school</i>	Average number of sections (classes per level) per school.
	<i>% students attending schools outside municipality</i>	Percentage of students residing in municipality that go to schools in other municipalities.
	<i>% students from outside municipality</i>	Percentage of students in schools in municipality that reside in other municipalities.
	<i>% SEN students</i>	Percentage of students with Specific Educational Needs.
	<i>D for SEN students</i>	Dissimilarity index for SEN students among the different schools.

Source: By authors.

ings can contribute to the design of public policies aimed at eliminating segregation.

The approach hinges on the analysis of multiple linear regression models, with the dependent variable being a Dissimilarity Index (D) measuring the distribution of students of foreign nationality among the schools during the 2018/2019 school year⁵. The analysis was carried out using the following three databases:

a) The first database, BDINFPRI, refers to students in pre-school and primary: students between level P3 (the first year of

pre-school education) and 6th grade of primary school.

b) The second, BDESO, refers to obligatory secondary education.

c) The third, BDINFRIESO, integrates the two previous databases, splitting each municipality into two independent cases: one with the characteristics of the pre-school and primary stage, and the other with the characteristics of obligatory secondary education. Logically, some of the variables are identical in both cases (those related to municipal morphology), but others differ (those that characterise the municipal school context in each stage). The objective is to identify whether there is any detectable explanatory key to the differential in segregation levels between the two preceding databases (the average D of the municipalities for BDINFRPI is 0.293, and for BDESO it is 0.202).

In Table 1 we specify the independent variables used in the analysis.

⁵ These indexes have been developed by the Sindic de Greuges, in its technical monitoring of the state of school segregation in Catalonia. The D ranges from 0 (maximum desegregation) to 1 (maximum segregation), according to the proportion of students in the group analysed that would have to change schools to achieve an exact proportionality. The D is not the only index used in these types of analyses, but it is one of the most widely used and most intuitive to interpret. These characteristics make it particularly useful for the analysis presented here.

Municipal morphology

These are the key variables that permit us to measure the sociodemographic characteristics of the municipalities. They are from the year 2019 and have been taken from data and indexes developed by the Statistical Institute of Catalonia (Idescat), except for the last variable, which has been developed by the authors based on data from the Idescat.

Municipal population permits us to explore the extent to which the size of a municipality impacts its levels of school segregation. Disposable family income, unemployed population and population with a university education aim to establish whether municipal levels of economic and/or cultural capital also have an impact. The variable for the percent population of foreign nationality refers to the same parameter used to construct our dependent variable, and permits us to see if there exists a relationship between the proportion of the population of foreign origin and the segregated distribution of foreign students. Lastly, the residential segregation index shows the distribution of the population of foreign origin in the different census tract groups of the municipality⁶.

School context

These are variables that provide the characteristics of the school context in both stages of education that are the object of

study. The variables are based on data for the Catalanian Department of Education, as well as indicators from the Síndic de Greuges [Ombudsman] (the last two variables) and from Idescat (the two preceding variables).

The number of students and number of schools are closely related to the size of municipality. These have been taken into consideration to evaluate which of these three variables is most relevant to incorporate into the regression models. The percentage of students of foreign origin provides us with the specific weight of this student profile in the school system. It is similar to the percentage of the population of foreign nationality, but more closely adjusted to the population under study.

As we have pointed out, the percentage of students in private schools is a key factor in explaining school segregation⁷, hence the inclusion of this variable in the analysis. The average for the number of sections for each level in the school incorporates a dimension into the analysis that has not been considered in the literature. Our hypothesis is the average size of schools has a significant impact on school segregation. As we will see, the validation of this hypothesis is one of the most important findings from our analysis.

The two following variables, the percentage of students that attend schools outside of their municipality and the percentage of students in schools that reside in other municipalities, permit us to examine whether the intensity of intermunicipal mobility affects levels of school segregation. The underlying hypothesis is that a part of school

⁶ A census tract group is a population unit created by the Idescat: "Each census tract group is made up of a set of territorially whole contiguous census tracts with similar socioeconomic characteristics. Census tract groups are territorial units with a balanced population of 9000 inhabitants on average, ranging between 5000 and 20 000 inhabitants in size" (www.idescat.cat). Its dimensions and socioeconomic characteristics make it an ideal unit for measuring and analysing residential segregation.

⁷ In our database we find some municipalities in which all the schools are public and others with up to 64.3 % private schools in pre-school and primary stages and 80 % in obligatory secondary school. We have replicated the analysis with this variable, but given that the differences in the correlations are minor, we have only incorporated the percentage of students, not of the schools.

segregation in a specific municipality can be countered by such mobility, shifting the issue to another geographic scale (intermunicipal segregation).

Lastly, the last two variables incorporate the impact of the detection and distribution of SEN students. The objective is to examine up to what point the volume and concentration of these students impacts our dependent variable. If we understand SEN students as having greater educational vulnerabilities, we can see if local policies that aid in the detection of said students and their balanced distribution in the schools contribute to less segregation of students of foreign origin.

RESULTS

We begin our analysis showing the results of the correlations between our dependent variable (D of students of foreign origin) and our independent variables. This approach permits us to discard those variables that reveal no significant connections in bivariate correlations. In our subsequent multiple linear regression analysis, we only discard those variables that do not show a statistically significant correlation in any of the three databases. The rest of the independent variables are incorporated into the regression models for the different educational stages, in this way fostering their comparison.

TABLE 2. Bivariate correlations between the independent variables and the D of foreign students

		Pre-school and primary	ESO	Pre-school and primary+ ESO
Municipal morphology	<i>Population</i>	0.507***	0.565***	0.483***
	<i>Disposable family income</i>	0.113	0.241**	0.149**
	<i>% population unemployed</i>	0.114	-0.048	0.038
	<i>% population w. university education</i>	-0.030	0.148	0.042
	<i>% foreign population</i>	-0.090	-0.047	-0.068
	<i>D for resident foreign population</i>	0.451***	0.324***	0.352***
School context	<i>Number of students</i>	0.528***	0.573***	0.565***
	<i>Number of schools</i>	0.525***	0.570***	0.559***
	<i>% foreign students</i>	-0.087	-0.033	0.044
	<i>% students in private schools</i>	0.339***	0.497***	0.350***
	<i>Avg. no. of sections per school</i>	-0.082	-0.230**	-0.376***
	<i>% students attending schools outside municipality</i>	0.015	-0.096	-0.127*
	<i>% students from outside municipality</i>	0.015	-0.183*	-0.205***
	<i>% SEN students</i>	-0.243***	-0.104	-0.226***
	<i>D for SEN students</i>	0.627***	0.254***	0.450***

Significance levels: * $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

Source: By authors.

The lack of correlation of the percentage of foreign population and the percentage of foreign students with the D of foreign students is particularly revealing. This suggests that the proportion of foreign popula-

tion in municipalities does not affect school segregation at the intra-municipal scale (we do not know if it does at the inter-municipal scale). Regarding the variables related to municipal morphology, the percentage of

unemployed and the percentage with university educations also does not correlate significantly with our dependent variable. In contrast, disposable family income is positively correlated in secondary school and in our combined database, so that it is the variable related to level of capitalisation that we maintain in our regression models.

Regarding the variables related to school context, the lowest correlation (aside from the percentage of foreign students) is the percentage of students in schools outside their municipality of residence. This variable is only significant, and weakly so, in the combined database, but as a result, it meets our established criteria for inclusion in the regression models.

There is another grouping of variables that are significantly correlated, but there are collinearity effects among them. This is the case for the variables referring to population, number of students and number of schools, the latter two also referencing the size of municipality. We only incorporate population into the regression models, a key variable in contextualising each municipality.

Thus, the variables that are ultimately incorporated into the regression models are:

a) Municipal morphology:

- *Population*. With correlations of 0.507 (for pre-school and primary stage), 0.565 (for ESO) and 0.483 (combined), this is one of the variables that, a priori, may have great explanatory capacity, revealing that the larger the municipality the greater is school segregation.
- *Disposable family income*. With a lower impact (not significant in pre-school and primary), it is significantly correlated in ESO and the combined database: the higher the disposable family income is in a municipality, the greater is school segregation.

- *D for resident foreign population*. This is one of the highest correlations (particularly in pre-school and primary stage), and in a positive direction: the greater the residential segregation, the greater is school segregation.

b) School context:

- *% students in private schools*. This is another variable with very high correlation (especially in ESO): the greater the weight of the private school sector, the higher is school segregation.
- *Average number of sections per school*. This variable is significant in ESO and, with greater intensity in the combined database, in a negative direction: the greater the average size of the schools, the lower is school segregation.
- *% students attending schools outside*. This variable is only significant (and with a low correlation) in the combined database: the higher the percentage of students attending schools outside their municipality of residence, the lower is the level of school segregation.
- *% students from outside municipality*. This variable is significant in the combined database and, with lower intensity, in ESO: the greater the percentage of students from outside their municipality of residence, the lower is the level of school segregation.
- *% SEN students*. Significant in pre-school and primary stage (where the percentage differences among municipalities is greater) and in the combined database: school segregation is lower when the number of SEN students is higher.

– *D for SEN students*. This is the variable that has the highest correlation for the pre-school and primary stage: the greater is the segregation of SEN students, the higher is the segregation of students of foreign origin.

Once the variables were selected, we developed the multiple linear regression models that allow us to determine which independent variables retain their explanatory power once the indirect effects of the other variables have been cancelled out. We have generated two regression mod-

els for each of the three databases. The first only incorporates the variables regarding municipal morphology, while the second also includes those related to school context. The comparison of the two models allows us to identify those variables of municipal morphology that have a direct explanatory weight and those that have an indirect explanatory capacity related to aspects of school context. In this sense, the results of each of the models for each of the databases are as important as the comparison of the results between the models and the databases.

TABLE 3. Multiple linear regression models

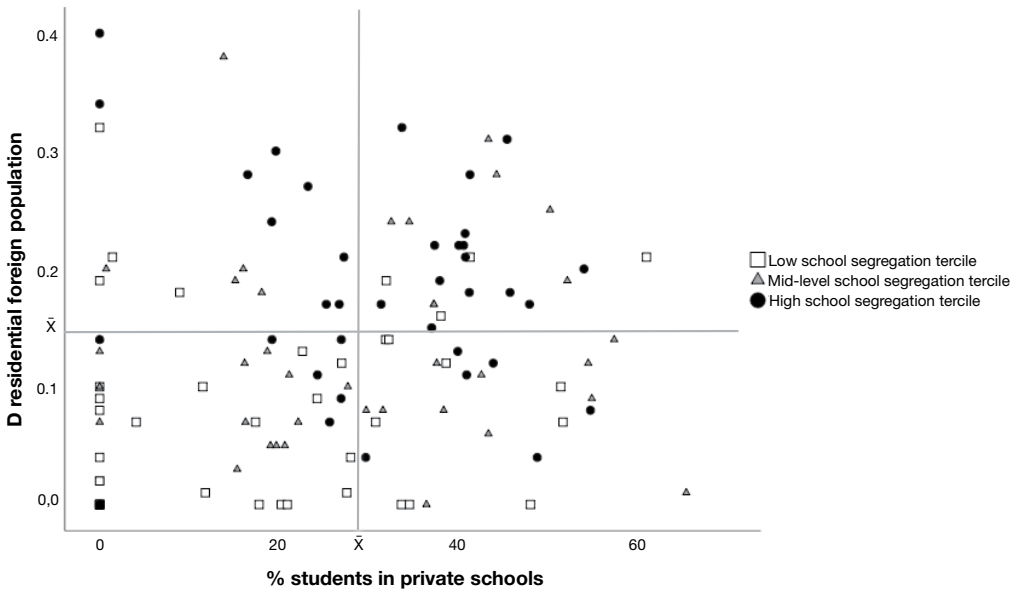
	Pre-school and primary		ESO		Pre-school and primary + ESO	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
<i>Constant</i>	0.141** (0.061)	0.287*** (0.081)	0.001 (0.053)	0.074 (0.078)	0.081* (0.046)	0.261*** (0.050)
<i>Population (in thousands)</i>	0.001*** (0.000)	-0.000*** (0.000)	0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)
<i>Disposable family income (in thousands of euros)</i>	0.004*** (0.004)	-0.004 (0.004)	0.009*** (0.003)	0.006* (0.004)	0.006** (0.003)	0.001 (0.003)
<i>D for resident foreign population</i>	0.388*** (0.112)	0.318*** (0.096)	0.151 (0.094)	0.159* (0.087)	0.254*** (0.083)	0.284*** (0.067)
<i>% students in private schools</i>		0.002*** (0.001)		0.002*** (0.001)		0.002*** (0.000)
<i>Avg. no. of sections per school</i>		-0.053* (0.030)		-0.008 (0.015)		-0.051*** (0.009)
<i>% students attending schools outside municipality</i>		0.001 (0.002)		-0.002 (0.001)		-0.001 (0.001)
<i>% students from outside mu- nicipality</i>		0.000 (0.001)		-0.002** (0.001)		-0.001** (0.001)
<i>% SEN students</i>		-0.004*** (0.001)		-0.003** (0.001)		-0.004*** (0.001)
<i>D for SEN students</i>		0.498*** (0.090)		0.111 (0.069)		0.273*** (0.057)
<i>Observations</i>	120	120	110	110	230	230
<i>R²</i>	0.33	0.58	0.37	0.54	0.27	0.56

Significance levels: * $p < 0.10$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$.

Dependent variable: Dissimilarity Index (D) for pre-school and primary school students (3-12 years of age) of foreign origin between the different schools of each municipality.

Source: By authors.

GRAPH 1. Relationship between residential segregation, the weight of the private sector and school segregation. Pre-school and primary stage



Source: By authors.

First, we will look at the pre-school and primary stage. The first model shows that only two of the three variables regarding municipal morphology have explanatory capacity: population and residential D. Each increment in the size of municipalities by 10 000 inhabitants increases school segregation (the D of students of foreign origin) by one one-hundredth, while an increase in residential D of one-tenth increases school segregation by almost 4 tenths.

In the second model, the explanatory capacity of municipal population is significantly reduced, but residential segregation continues having a very important explanatory impact⁸. Another factor emerges with a similar impact and connected to the pro-

gramming of school places: the weight of the private sector. School segregation increases by two thousandths with every one percent increase in the proportion of students in private schools.

Graph 1 shows in greater detail the existing connection between residential segregation, the weight of the private sector and school segregation. The points on the graph represent the different municipalities, with symbols that reflect the differing intensity of school segregation⁹. The resulting image reflects the strength of the correlation between residential segregation and school segregation. It also reveals that the combined effect of a high level of school

⁸ In terms of the different measurement units for the independent variables (some are percentages, others are indexes that range from 0 to 1), in interpreting their explanatory capacity, the values of the regression coefficients (B) have been compared with standardised (Beta) coefficients.

⁹ We present the levels of school segregation in the different municipalities in tertiles, an aggregation that synthesises the main differences in graphic form. The municipalities of the lowest third in terms of level of segregation have a D below or equal to 0.21; the middle tertile has a D between 0.22 and 0.35, the upper tertile has a D equal to or above 0.36.

segregation and a high or medium weight of the private sector (upper right quadrant and right section of the upper left quadrant) makes it unlikely to have low levels of school segregation, which is much more prevalent in the lower left quadrant. However, there are a (very) few municipalities with low school segregation despite having high levels of residential segregation (if there is not a high proportion of students in private schools) and, above all, despite a high proportion of private schools (if there is no residential segregation). Thus, these are two conditioning but not completely determining factors. In fact, we even find a case of low school segregation in a municipality with a high residential D and high presence of private schools.

Looking at the results of the regression models again, we find another variable with an explanatory capacity similar to residential D and the weight of private schools. This is the percentage of SEN students. The higher this percentage, the lower is the segregation of students of foreign origin. In addition, the variable referring to the D of SEN students is the variable with highest explanatory capacity of all the model. Thus, the more similar is the distribution of these students, the more similar is the distribution of students of foreign origin. As a result, those municipalities that diagnose more SEN students, and that also efficiently carry out policies to foster their equitable distribution, manage to significantly decrease school segregation.

There is another variable that also has significance: the average number of sections per school. Despite the explanatory capacity of this variable being lower than the previously discussed variables, the model shows that those municipalities with a higher average number of sections per school have lower levels of school segregation. An increase in the municipal average of one section reduces school segregation by one-tenth on average.

In the ESO stage we find some important differences. To contextualise them, we need to keep in mind that Ds are lower (average $D = 0.202$) than in the pre-school and primary stage (average $D = 0.293$). That residential D has no significant impact (although it is at the threshold for statistical significance) in the first model stands out. In contrast, disposable family income is statistically significant; school segregation is greater the greater is disposable family income. Population has greater explanatory power in ESO than in the pre-school/primary stage.

In the second model, the weight of the private school network is the variable with the greatest explanatory capacity: the higher the percentage of students in private schools, the greater is school segregation. There is a correlation between this variable and two variables related to municipal morphology: disposable family income and municipal population. For this reason, introducing the percentage of students in private schools decreases the intensity of these two variables (although they remain statistically significant). In contrast, residential D, although it becomes statistically significant, does not undergo large changes (if in the first model it was slightly above the threshold for statistical significance, in the second, it is slightly below). Residential D and disposable family income have similar explanatory value, while population has a somewhat higher explanatory capacity.

In addition, although the percentage of SEN students has a slightly lower explanatory value in ESO than found for pre-school and primary, the SEN D loses its statistical significance. This is because the difference in SEN D between municipalities is much less in secondary, due to the detection of these students taking place before secondary education. This contrasts with pre-school, where we find some municipalities much more advanced in terms of diagnosing special needs, while others barely do so (Sindic de Greuges, 2016). Such detec-

tion is essential to implement mechanisms of equitable distribution; doing so before the incorporation of children into the second cycle of pre-school education reveals the positive impact of this measure in the fight against segregation. As a result, when students change schools on beginning secondary education (especially in the public sector), more effective measures can be taken for the balanced distribution of SEN students in all the municipalities, and not only in those with early detection of students with special needs.

Lastly, there is another variable that has a significant impact on school segregation: this is the percentage of non-resident students studying in a municipality. The higher the percentage, the lower is school segregation. This correlation is a result of a certain centralisation; in the more unpopulated areas of Catalunya, places in secondary school are concentrated in the municipalities with more than 10 000 inhabitants, providing service to the populations from small surrounding municipalities. This concentration of students from different municipalities has the effect of reducing school segregation.

In any case, the decrease in segregation rates in secondary education is surprising, as the regression models show the weight of an explanatory factor linked to socioeconomic status, such as the relevance of disposable family income. It appears that at this stage mechanisms of differentiation associated with competitive academic trajectories and social closure predominate; however, despite this, school segregation is reduced. Our third database (BDINFPRIESO) gives us the key to explaining this seeming paradox.

The BDINFPRIESO has the effect that we would expect on almost all the independent variables: its explanatory capacity is situated between that which we have found for the BDINFPRI and the BDES. The variables, D residential and D for SEN students have greater impact in this case than found

for the pre-school and primary database, but less than in the case of the ESO database. Disposable family income also has greater explanatory capacity than in the case of the pre-school and primary database, but again less in comparison with the ESO database.

There is one variable that escapes this logic and that, despite having shown a weak or even null significance in the previous models, now reveals a more solid significance. This is the number of sections per level in a school. As we saw in pre-school and primary, an increase by one in the number of sections in schools translates into a decline of one-tenth in school segregation. In the BDINFPRIESO, the explanatory capacity of this variable increases. In fact, this is the variable with the highest explanatory capacity of the model, followed closely by the weight of the private sector, SEN D, the percentage of SEN students and residential D. This means that in municipalities with fewer schools but a greater number of sections, the likelihood of non-segregated schools is greater.

This phenomenon explains why school segregation is lower in secondary school than in the primary: the number of sections per school tends to be notably higher in secondary, especially in public schools. Thus, the decline in segregation in secondary is due, above all, to a reduction in the number of schools, which reduces the segregating potential of school context. In fact, this same phenomenon of concentration and reduction in school supply, explains the decline in segregation as an effect of centralisation in secondary in that part of Catalunya with lower population density.

CONCLUSIONS

The aim of our analysis was to identify the impacts of municipal morphology, the programming of school places and mechanisms for allocating students on levels of

school segregation. To do this, we have used the D for students of foreign origin developed by the Síndic de Greuges. This is a robust and proven indicator for analysing structural segregation in the education system. In our opinion, the results we have obtained are so solid that they should be considered in the development of public policies to combat school segregation.

Our analysis has shown that residential segregation is an important contextual factor in an educational model such as the Catalan and Spanish one of “restricted choice”. In contrast, other factors that might be assumed to have impact, such as, for example, the proportion of residents (and students) of foreign origin, have not been shown to be significant.

Our findings also show that other factors, associated with the programming of school places and the allocation of students to schools have as much or even more of an impact as residential segregation. The most important factor is whether schools are public or private. The more limited the private sector is, the lower is the level of school segregation. In addition, while residential segregation has an especially high explanatory capacity in the pre-school and primary stage, school proprietorship (whether public or private) has greater explanatory capacity in the ESO stage. As a result, although both factors explain school segregation, particularly when they exist together in a municipality, there are cases of high levels of school segregation despite the weight of these two factors not being particularly high. In turn, we also find some cases with low levels of school segregation despite high residential segregation and a significant private school sector. In pre-school and primary, the high number of municipalities with low levels of segregation despite a high proportion of private schools stands out. The question arises whether, in these cases, segregation is also low among socioeconomically disadvantaged groups.

Regarding the mechanisms for allocating students to schools, our research shows that when a greater proportion of SEN students are diagnosed (which is, above all, due to greater political and administrative willingness to identify socially vulnerable pupils) and they are distributed in a more equitable manner, segregation is reduced. Thus, detection and balanced distribution of SEN students is effective in fighting segregation, not only of these students, but also among socially disadvantaged groups (such as, in the case studied here, students of foreign origin, who, on average, account for 16.2 % of students in pre-school and primary, and 11.3 % in ESO).

In addition, not only is greater effort detecting students with special needs a determinant, but comparing the results between different educational stages shows that early detection, such as during pre-enrolment in the first year of the stage in question, is key. In this way, mechanisms for the balanced distribution of the student body can be made at a key moment to reduce segregation.

Along with residential segregation, the proprietorship of schools and the percentage and distribution of the most vulnerable students, another factor has emerged, connected to the question of the programming of school places, and which has an explanatory intensity similar to the other factors, although it has not been considered until now in the academic literature. This is the size of schools. This was not found to be significant in ESO and weakly significant in pre-school and primary. The reason for this is that the difference in the size of schools among the municipalities is not large enough. Only by combining both stages in a single database, with sufficiently different situations among them, does the size of the school reveal its explanatory potential. The smaller the schools are and, therefore, more dispersed the available school places are, the greater is the segregation.

This finding places into question some of the prevailing rationales in the design of educational systems. First, we should question the tendency toward the construction or reformulation of schools with only one section or class at each level. This is a dynamic based on ideological and pedagogical assumptions that could be considered as “communitarian”, favouring the idea of small schools, which permit the development of communitarian dynamics, fostering closer connections and involvement of different educational actors. In turn, in moments of demographic contraction, in which there is an excess of classes, policy decision-makers tend to be more likely to eliminate excess sections to avoid closing schools. Beyond the implications in terms of economic efficiency and educational opportunity costs, these dynamics strengthen the progressive atomisation of the educational map, reducing the average size of schools; which, as we have shown here, favours school segregation.

In a similar sense, the growing support in regions such as Catalonia for models of schools housing both primary and secondary stages, similar to what exists in the private sector, can have the undesired effect of making it more difficult to fight against segregation. As we have seen, we find a decline in school segregation in the passage from primary to secondary school. Eliminating this step in which there is this decline and, in turn, projecting onto the secondary school a school map that replicates the size of primary schools (a much more atomised map), implies generating a framework for the programming of school places that will be more prone to segregation.

In fact, the situation in secondary school provides many clues to the institutional measures that are useful in fighting against school segregation. As we have seen, in this stage we find that segregation is based more on a differentiation by status: factors such as the proprietorship of schools

and disposable family income have greater weight. But the fact that SEN students have already been identified and that there is a more restricted supply of places (fewer schools per municipality), generates a less segregated educational context. Therefore, the institutional factors that favourably impact the fight against segregation weigh more than subjective family arrangements among more advantaged sectors, more likely to use mechanisms for school choice that foster segregation.

Thus, the main conclusion of this article is that management at the local level of educational policy aimed at reducing school segregation can be highly effective. A study such as ours cannot include all the factors that are relevant in the fight against segregation, but only those that are codifiable in databases and in situations that are sufficiently verifiable to reveal consistent and effective actions. However, despite these limitations we have found positive effects from certain institutional policies. In addition, the importance of issues related to the school map, which have in general not been considered, have emerged, such as the size of schools. We might also assume that other elements of the school map that we have not included in our study, such as the location and accessibility of newly built schools could also have a significant impact.

Regarding the programming of school places, the size of schools and the weight of the private sector, all have been found to be important explanatory factors. They are also important in municipal agendas at times of transformation in educational maps: periods of population growth or decline, years when educational agreements are negotiated, etc. In these situations, strong political commitment to governing supply is required, avoiding decision-making guided by pressures from stakeholders with their own specific interests.

Regarding the allocation of students to schools, there is significant margin for ac-

tion. We have found that administrations that make greater effort to detect situations of vulnerability (reflected in an increase in the detection of special needs students) and to equitably distribute vulnerable students, have very significant impact on segregation. Therefore, a regulatory framework that is effectively oriented toward the systematic and early detection of vulnerable students in all municipalities, reinforcing the principle of even distribution, will have a decisive impact on reducing segregation.

Lastly, the contextual factor of residential D could be interpreted as an insurmountable structural obstacle in the fight against segregation. However, our regression models show that school segregation is not just an effect of residential segregation. In fact, factors such as the balanced distribution of SEN students can minimise its impact. In addition, one can imagine that certain actions not considered here could reduce the conditions for residential segregation. This is the case for school zoning, understood as the demarcation of geographic areas in which resident students have priority access to a school. A zoning design that does not circumvent proximity in the prioritisation of access—avoiding “single zone” designs— and that, at the same time, does not reinforce the existing socio-economic contrasts between different geographic areas in a municipality—in other words, that generates zones that are as socially heterogeneous as possible— could also minimise the impact of school segregation (Benito and González, 2007).

BIBLIOGRAPHY

- Alegre, Miquel Á. (2010). “Casi-mercados, segregación escolar y desigualdad educativa: Una trilogía con final abierto”. *Educação y Sociedade*, 31(113): 1157-1178. doi: 10.1590/S0101-73302010000400006
- Alegre, Miquel Á. (2017). *Polítiques de tria i assignació d’escola: Quines efectes tenen sobre la segregació escolar?* Barcelona: Fundació Jaume Bofill-Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
- Alegre, Miquel Á.; Benito, Ricard; Chela, Xènia and González, Sheila (2010). *Les famílies davant l’elecció escolar. Dilemes i desigualtats en la tria de centre a la ciutat de Barcelona*. Barcelona: Mediterrània. Available at: <https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/l/3/4/4/w/u/a/q/9/528.pdf>, access January 3, 2018.
- Allen, Rebecca (2007). “Allocating Pupils to Their Nearest Secondary School: The Consequences for Social and Ability Stratification”. *Urban Studies*, 44(4): 751-770. doi: 10.1080/00420980601184737
- Ball, Stephen (2003). *Class Strategies and the Education Market. The Middle Class and Social Advantages*. London: Routledge Falmer.
- Bellei, Cristian (2013). “El estudio de la segregación socioeconómica y académica de la educación chilena”. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 39(1): 325-345. doi: 10.4067/S0718-07052013000100019
- Benito, Ricard and González, Isaac (2007). *Processos de segregació escolar a Catalunya*. Barcelona: Mediterrània. Available at: <https://fundaciobofill.cat/publicacions/processos-de-segregacio-escolar-catalunya>, access January 3, 2018.
- Benito, Ricard; Alegre, Miquel Á. and González, Isaac (2014). “School Educational Project as a Criterion of School Choice: Discourses and Practices in the City of Barcelona”. *Journal of Education Policy*, 29(3): 397-420. doi: 10.1080/02680939.2013.844858
- Bernelius, Venla and Vaattovaara, Mari (2016). “Choice and Segregation in the ‘Most Egalitarian’ Schools: Cumulative Decline in Urban Schools and Neighbourhoods of Helsinki, Finland”. *Urban Studies*, 53(15): 3155-3171. doi: 10.1177/0042098015621441
- Bonal, Xavier; Zancajo, Adrián and Scandurra, Rosario (2019). “Residential Segregation and School Segregation of Foreign Students in Barcelona”. *Urban Studies*, 56(15): 3251-3273. doi: 10.1177/0042098019863662
- Bowe, Richard; Gewirtz, Sharon and Ball, Stephen J. (1994). “Captured by the Discourse? Issues and Concerns in Researching ‘Parental Choice’”. *British Journal of Sociology of Education*, 15(1): 63-78. doi: 10.1080/0142569940150104

- Carrasco-Pons, Silvia; Pàmies-Rovira, Jordi; Ponferrada-Arteaga, Maribel; Ballestín-González, Beatriz and Bertrán-Tarrés, Marta (2009). "Segregación escolar e inmigración en Cataluña: Aproximaciones etnográficas". *EMIGRA Working Papers*, 126: 25-39.
- Chubb, John E. and Moe, Terry M. (2011). *Politics, Markets, and America's Schools*. Washington: Brookings Institution Press.
- Coleman, James S. (1966). *Equality of Educational Opportunity*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Córdoba-Canclín, Claudia (2011). "La concentración de alumnado extranjero en Enseñanza Primaria: un estudio en dos ciudades andaluzas". *RES. Revista española de Sociología*, 16: 27-46.
- Córdoba-Canclín, Claudia; Farris, Massimiliano and Rojas-Patuelli, Karina (2017). "Discussing School Socioeconomic Segregation in Territorial Terms: The Differentiated Influence of Urban Fragmentation and Daily Mobility". *Investigaciones Geográficas*, 92: 54-76. doi: 10.14350/rig.54766
- Dupriez, Vincent and Vandenberghe, Vincent (2004). "L'école en Communauté française de Belgique: De quelle inégalité parlons-nous?". *Les Cahiers de Recherche en Education et Formation*, 27(1): 3-26.
- Elacqua, Gregory; Montt, Pedro and Santos, Humberto (2013). "Evidencias para eliminar gradualmente el financiamiento compartido". *Claves de Políticas Públicas*, 14 (2013): 1-10. Available at: <https://siteal.iiep.unesco.org/investigacion/2521/evidencias-eliminar-gradualmente-financiamiento-compartido>, access April 25, 2022.
- Entorf, Horts and Davoli, Maddalena (2018). Socioeconomic Inequality and Student Outcomes in German Schools. In: L. Volante; S. V. Schnepf, J. Jerrim and D. A. Klinger (eds.). *Socioeconomic Inequality and Student Outcomes*. Singapore: Springer.
- Escardíbul, Josep-O. and Villarroya, Anna (2009). "The Inequalities in School Choice in Spain in Accordance to PISA Data". *Journal of Education Policy*, 24(6): 673-696. doi: 10.1080/02680930903131259
- Fernández-Enguita, Mariano (2008). "Escuela pública y privada en España: La segregación rampante". *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 1(2): 42-69.
- Ferrer, Álvaro y Gortázar, Lucas (2021). *Diversidad y libertad. Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro*. Barcelona: EsadeEcPol. Available at: <https://www.esade.edu/ecpol/es/publicaciones/segregacion-escolar-esadeecpol/>, access May 21, 2022.
- Gewirtz, Shanon; Ball, Stephen J. and Bowe, Richard (1995). *Markets, Choice, and Equity in Education*. Open University Press.
- González Balletbò, Isaac (2017). L'autonomia de centre en els horitzons de millora educativa. In: B. Albaigés and F. Pedró (dirs.). *L'estat de l'educació a Catalunya, Anuari 2016*. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Available at: https://fundaciobofill.cat/uploads/old-files/06%20cap%208-autonomiadecentre_191017.pdf, access February 21, 2020.
- González-González, María T. (2008). "Diversidad e inclusión educativa: algunas reflexiones sobre el liderazgo en el centro escolar". *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6(2): 82-99.
- Gorard, Stephen (2009). "Does the Index of Segregation Matter? The Composition of Secondary Schools in England since 1996". *British Educational Research Journal*, 35(4): 639-652. doi: 10.1080/01411920802642389
- Gorard, Stephen and Smith, Emma (2004). "An International Comparison of Equity in Education Systems". *Comparative Education*, 40(1): 15-28. doi: 10.1080/0305006042000184863
- Hastings, Justine S. and Weinstein, Jeffrey M. (2008). "Information, School Choice, and Academic Achievement: Evidence from Two Experiments". *The Quarterly Journal of Economics*, 123(4): 1373-1414.
- Hoxby, Caroline M. (2003). School Choice and School Productivity. Could School Choice be a Tide that Lifts All Boats? In: *The Economics of School Choice*. Chicago: University of Chicago Press.
- Madaria-Escudero, Borja de and Vila-Lladosa, Luis E. (2020). "Segregaciones escolares y desigualdad de oportunidades educativas del alumnado extranjero en Valencia". *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 18(4): 269-299. doi: 10.15366/reice2020.18.4.011
- Mancebón-Torrubia, María J. and Pérez-Ximénez de Embún, Domingo (2009). "Segregación escolar en el sistema educativo español. Un análisis a partir de PISA 2006". *Investigaciones de Economía de la Educación*, 4: 63-77.

- Maroy, Christian (2008). "¿Por qué y cómo regular el mercado educativo?". *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 12(2): 3-14.
- Murillo, Francisco J. (2018). "Segregación escolar público-privada en España". *Papers: Revista de Sociología*, 103(3): 307-337. doi: 10.5565/rev/papers.2392
- Murillo, Francisco J. and Martínez-Garrido, Cynthia (2019). "Perfiles de segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas". *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 25(1): 1-20. doi: 10.7203/relieve.25.1.12917
- Odendahl, Wolfgang (2017). "'Bildungskrise'-PISA and the German Educational Crisis". *IAFOR Journal of Education*, 5(1): 209-226. doi: 10.22492/ije.5.1.11
- OECD (2019). *PISA 2018 (Volumen II): Results. Where All Students Can Succeed*. Paris: PISA, OECD Publishing. doi: 10.1787/b5fd1b8f-en
- Rujas, Javier; Prieto, Miriam and Rogero-García, Jesús (2020). "Desigualdades socioespaciales en la Educación Secundaria Postobligatoria. El caso de Madrid". *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 18(4): 241-267. doi: 10.15366/reice2020.18.4.010
- Síndic de Greuges (2016). *La segregació escolar a Catalunya (I). La gestió del procés d'admissió d'alumnat*. Barcelona: Síndic de Greuges de Catalunya. Available at: https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf
- Valenzuela, Juan P.; Bellei, Cristian and Ríos, Danae de los (2014). "Socioeconomic School Segregation in a Market-oriented Educational System. The Case of Chile". *Journal of Education Policy*, 29(2): 217-241. doi: 10.1080/02680939.2013.806995
- Wilson, William J. (1987). *The Truly Disadvantaged. Inner City, the Underclass and Public Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Zanten, Agnès van (1996). Fabrication et effets de la ségrégation scolaire. In: S. Paugam (ed.). *L'exclusion, l'état des savoirs*. Paris: Editons La Découverte.
- Zanten, Agnès van (2001). *L'école de la périphérie. Scolarité et ségrégation en banlieue*. Paris: PUF.

RECEPTION: June 14, 2022

REVIEW: September 6, 2022

ACCEPTANCE: November 9, 2022

Divorcio de los padres y logro educativo de los niños a largo plazo en España: heterogeneidad según la educación de los padres

Parental Divorce and Long-Term Educational Attainment of Children in Spain: Heterogeneity Based on Parental Education

Manuel Mejías-Leiva y Almudena Moreno Mínguez

Palabras clave

Divorcio de los padres

- Estratificación social
- Logro educativo
- Momento del divorcio
- Transmisión intergeneracional

Key words

Parental Divorce

- Social Stratification
- Educational Attainment
- Time of Divorce
- Intergenerational Transmission

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar la asociación entre el divorcio de los padres durante la infancia y el logro de estudios universitarios de los hijos para el caso de España, según el estatus socioeconómico de los padres. Para ello, estimamos modelos de probabilidad lineal a partir de los datos de la Encuesta Social General Española de los años 2013, 2015 y 2017. Los resultados evidencian una asociación negativa entre el divorcio de los padres y la probabilidad de que los hijos obtengan un título universitario, siendo esta penalización mayor cuando el divorcio se produce entre los 0-5 y 12-16 años. Además, la penalización del divorcio en la probabilidad de obtener un título universitario es mayor para los hijos de padres de alto estatus socioeconómico.

Abstract

This paper analyses the association between parental divorce during childhood and children's university attainment in Spain, based on parental socioeconomic status. For this, linear probability models were estimated, using data from the Spanish General Social Surveys of 2013, 2015 and 2017. The results suggest a negative association between parental divorce and the probability of children obtaining university degrees, with a higher penalty occurring when the divorce occurs when the child is aged 0-5 or 12-16 years. Moreover, the penalty of divorce on the probability of obtaining a university degree is higher for children of parents having a high socioeconomic status.

Cómo citar

Mejías-Leiva, Manuel; Moreno Mínguez, Almudena (2023). «Divorcio de los padres y logro educativo de los niños a largo plazo en España: heterogeneidad según la educación de los padres». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 57-76. (doi: 10.5477/cis/reis.183.57)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Manuel Mejías-Leiva: Universidad de Valladolid | manuel.mejias@uva.es

Almudena Moreno Mínguez: Universidad de Valladolid | almudena.moreno@uva.es

INTRODUCCIÓN¹

Un gran número de investigaciones empíricas han demostrado que los niños que experimentan el divorcio de sus padres obtienen peores resultados en diferentes medidas de bienestar que los niños que viven en familias intactas (Amato, 2000; Härkönen, Bernardi y Boertien, 2017). Estas consecuencias negativas implican un menor rendimiento educativo a corto plazo (resultados en pruebas de rendimiento durante la infancia y la adolescencia; véase Amato y Anthony, 2014) y a largo plazo (como la probabilidad de obtener un título de educación terciaria; véanse Bernardi y Radl, 2014; Brand *et al.*, 2019), lo que puede llevar a una acumulación de desventajas a lo largo de la vida (McLanahan, 2004; McLanahan y Percheski, 2008). En España contamos con alguna evidencia empírica que muestra que los niños con padres divorciados tienen un peor rendimiento educativo a corto plazo que los niños que se crían en familias intactas (Escapa, 2017). Sin embargo, excepto Bernardi y Comolli (2019) que examinan la relación entre el divorcio y la probabilidad de matricularse en la universidad, los estudios que analizan esta asociación a largo plazo en España son prácticamente inexistentes.

En este artículo, analizamos la asociación entre el divorcio de los padres durante la infancia y el logro de educación universitaria en España, focalizando la atención en la heterogeneidad según el origen socioeconómico de los padres. Para conseguir tal fin, hemos utilizado los datos de la Encuesta Social General Española (en adelante ESGE) del Centro de Investigaciones Sociológicas (en adelante CIS). A este respecto, este artículo incorpora aportaciones de interés a la literatura sobre las consecuencias del divorcio en los hijos. En

primer lugar, analizamos la asociación del divorcio de los padres sobre el logro educativo de los niños según el estatus socioeconómico de los padres. Pocos estudios en España han analizado la heterogeneidad en la penalización del divorcio por origen socioeconómico; por ejemplo, escasos estudios han indagado si los efectos negativos de la ruptura sobre los resultados educativos de los niños son mayores para los niños con menor o mayor estatus socioeconómico (Bernardi y Boertien, 2017; Bernardi y Radl, 2014; Martin, 2012). En segundo lugar, nuestros análisis se interrogan si las consecuencias de la separación de los padres varían según la edad a la que los niños experimentaron el divorcio durante la infancia, ya que no está claro si los niños son más vulnerables a la separación de los padres durante fases específicas de su desarrollo².

El análisis de la relación entre la ruptura de la pareja y las trayectorias educativas a lo largo de la vida de los jóvenes es relevante debido a que las dinámicas familiares están inmersas en un profundo proceso de cambio en Europa. Por una parte, estos cambios son el resultado de los procesos sociodemográficos contextualizados en lo que se denomina la Segunda Transición Demográfica (STD), caracterizada por la individualización y pluralidad de las relaciones y estructuras familiares (Lesthaeghe, 2010). Y, por otra parte, los progresos en las políticas familiares de los estados de bienestar, cómo las modificaciones de la Ley de Divorcio y la custodia compartida están incidiendo en la reconfiguración de las relaciones familiares y de género (Esping-Andersen y Billari, 2015). En concreto, en España se promulgó la Ley de Divorcio en 1981, relativamente más tarde en comparación con otros países occidentales. Tras la aprobación de la Ley de Divor-

¹ Esta investigación se ha realizado dentro de la financiación del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RTI2018-099666-B-I00 «Child wellbeing and material deprivation in the face of new family scenarios of precariousness in Spain»).

² Este estudio es de naturaleza descriptiva y no ofrece ninguna estimación causal sobre los efectos del divorcio. El uso de la terminología causal («efecto», «consecuencias» o «impacto») es por motivos de estilo, ya que nuestros datos solo permiten realizar estimaciones descriptivas sobre la penalización del divorcio.

cio Exprés en 2005, la tasa de divorcios aumentó tan rápidamente que, actualmente, es superior a la media de los países de la Unión Europea (Bernardi y Comolli, 2019). Además, el análisis de la situación española es interesante debido a que los estudios sobre las consecuencias del divorcio sobre el logro educativo de los hijos se han realizado, principalmente, en EE. UU. (Brand *et al.*, 2019) y el norte de Europa (Nilsen *et al.*, 2020), siendo muy limitados en el ámbito español.

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se realiza una revisión de la literatura existente sobre el divorcio de los padres y la transmisión intergeneracional del logro educativo. Seguidamente, se presenta en detalle y se motiva adecuadamente la metodología utilizada. A continuación, se detallan los resultados de los diferentes análisis estadísticos. Finalmente, se presenta un apartado de discusión y conclusiones donde se sintetizan los resultados poniéndolos en relación tanto con las hipótesis iniciales como con los estudios previos sobre el tema.

ANTECEDENTES

Según las evidencias empíricas existentes, los niños y adolescentes con padres divorciados o separados se adaptan con más dificultad a hábitos de salud física y mental saludables, y tienen un menor rendimiento educativo en comparación con los que crecen con padres no divorciados (Amato, 1994; Flaquer, 2014). No obstante, los resultados muestran que el impacto del divorcio es relativamente pequeño en la capacidad cognitiva, mientras que es significativo en el logro educativo (Bernardi y Boertien, 2016; Lee y McLanahan, 2015; McLanahan, Tach y Schneider, 2013). En este sentido, los hijos de padres divorciados obtienen calificaciones escolares más bajas (Grätz, 2015; Mandemakers y Kalmijn, 2014), presentan menor compromiso escolar (Havermans,

Botterman y Matthijs, 2014) y logran un menor nivel educativo al final de sus trayectorias educativas en comparación con sus homólogos que crecen en familias intactas (Bernardi y Radl, 2014). En el caso español, existe evidencia de que los niños que viven en familias divorciadas presentan una mayor desventaja en términos educativos a corto plazo (Escapa, 2017). Sin embargo, excepto el estudio de Bernardi y Comolli (2019), la evidencia sobre las implicaciones que tiene el divorcio de los padres en el logro educativo a largo plazo es casi inexistente.

La literatura ha subrayado los matices que implican estos resultados. Por ejemplo, McLanahan, Tach y Schneider (2013) se han preguntado si estas asociaciones entre divorcio y logro educativo son reflejo de efectos causales o capturan los efectos de otras desventajas socioeconómicas que preceden al divorcio. Así, la relación negativa entre el divorcio de los padres y el rendimiento escolar de los niños podría reflejar simplemente un efecto de selección. En este sentido, Piketty (2003) encontró que no es el divorcio en sí mismo lo que genera menores logros educativos en los niños, sino las desventajas preexistentes de la familia (por ejemplo, mayor conflicto entre los padres) o de los jóvenes (por ejemplo, menor habilidad cognitiva).

De acuerdo con estos estudios, se pueden identificar tres mecanismos explicativos de cómo el divorcio afecta al bienestar de niños y adolescentes. En primer lugar, el divorcio supone una precarización económica porque el hogar queda con un solo sustentador económico. Por ejemplo, los análisis han constatado que las familias divorciadas cuentan con menos recursos económicos que las nucleares para invertir en sus hijos (Mortelmans, 2020). En segundo lugar, el divorcio interrumpe la rutina familiar y reduce el tiempo, recursos y capital social dedicado a los niños, lo cual incide en su bienestar psicológico (Amato, 2010; Härkönen, Bernardi y Boertien, 2017). Por último, el

grado de conflicto entre los padres después de la separación y la ausencia de uno de los padres incide también en la calidad de la crianza y, por tanto, en el estrés del niño y adolescente, así como en su desarrollo y rendimiento escolar (Fomby y Osborne, 2017; Sigle-Rushton y McLanahan, 2004).

Si bien, es posible que la relación entre la separación de los padres y el logro educativo varíe según la edad de los hijos a la que se produce el divorcio. Por una parte, la experiencia de separación de los padres durante la primera infancia puede tener consecuencias negativas, ya que durante este periodo se producen desarrollos emocionales, sociales y personales fundamentales en los niños (Cavanagh y Huston, 2008; Laird, Nielsen y Nielsen, 2020). La privación material durante la primera infancia puede estar relacionada con un bajo desarrollo cognitivo de los niños, debido a la reducción de los ingresos y, por tanto, una menor inversión en tiempo y capital en los niños y adolescentes (Almquist y Brännström, 2018; Duncan *et al.*, 2012; Heckman, 2006). En este sentido, los resultados de Amato (2001) constatan que el divorcio afecta más negativamente al rendimiento académico de los alumnos de primaria que a los alumnos de secundaria. Jeynes (2002) también llegó a la conclusión de que la mayoría de los estudios muestran un efecto más negativo para los niños cuando el divorcio se produce en una etapa temprana de la infancia. En esta línea, otros estudios también sugieren que la inestabilidad familiar durante los primeros años de vida se asocia negativamente con las probabilidades de obtener estudios universitarios en la edad adulta (Cavanagh y Fomby, 2019; Fomby, 2013).

Por otra parte, otros autores sugieren que durante la adolescencia los niños desarrollan competencias sociales críticas, por lo que el divorcio en esta etapa puede tener efectos adversos en el desarrollo de competencias básicas como la sociabilidad (Cavanagh y Huston, 2008; Laird, Nielsen

y Nielsen, 2020). A este respecto, Lansford (2009) postuló que el divorcio puede afectar negativamente a los adolescentes debido a la relevancia que tiene para sus trayectorias vitales y laborales el rendimiento académico durante la adolescencia. Por el contrario, Sigle-Rushton *et al.* (2014) no encontraron ninguna penalización del momento de exposición al divorcio sobre el rendimiento educativo de los niños. En relación con la evidencia disponible, planteamos la siguiente propuesta hipotética:

H1: El divorcio penalizará la consecución de estudios universitarios en la edad adulta en aquellos niños/as que experimentaron la ruptura familiar durante la primera infancia y la adolescencia.

Sin embargo, cada vez son más los estudios que señalan la necesidad de investigar cómo varía la asociación entre el divorcio y los logros académicos a través de los distintos grupos socioeconómicos. En general, la evidencia sobre la incidencia diferencial del divorcio en el logro educativo de los niños según el estatus socioeconómico de los padres es mixta. Mientras que algunos estudios encuentran que las familias con ventajas socioeconómicas logran proteger a sus hijos de las consecuencias negativas de la separación de los padres (Amato y Anthony, 2014; Augustine, 2014; Grätz, 2015), otros evidencian resultados opuestos (Nilsen *et al.*, 2020). No obstante, cuando se analiza el logro educativo, y en particular el logro de educación universitaria, la evidencia disponible apunta a una incidencia negativa mayor en los niños de familias de alto estatus socioeconómico (Bernardi y Boertien, 2017). Existen dos explicaciones principales que tratan de dar respuesta a este fenómeno.

Por un lado, la hipótesis del efecto compensatorio del origen social postula que las madres con un nivel educativo alto tienen mayores recursos económicos, culturales y relacionales para proteger a sus hijos de las

consecuencias negativas de crecer en una familia posdivorcio (Bernardi y Radl, 2014). Por otro lado, la hipótesis del efecto suelo sostiene que los niños de madres con menor nivel educativo son menos vulnerables a los efectos negativos del divorcio, debido a que tienen un menor riesgo de movilidad social descendente, a consecuencia de que parten de una posición más baja en la estructura social (Bernardi y Radl, 2014; Härkönen, Bernardi y Boertien, 2017). Para los niños de origen social bajo, las probabilidades de alcanzar un nivel educativo superior ya son relativamente bajas, por lo que el efecto negativo adicional del divorcio es menor. Sin embargo, los efectos del divorcio de los padres pueden depender del resultado educativo considerado (Bernardi y Comolli, 2019). Por ejemplo, Guetto y Panichella (2019) estudian el riesgo de abandono escolar, y encuentran que la penalización del divorcio es más significativa para los niños de padres con bajo nivel educativo. Por el contrario, al estudiar las posibilidades de ingresar a la carrera académica universitaria, encuentran que los hijos de padres con educación terciaria son los más afectados negativamente. Atendiendo a la evidencia, planteamos la siguiente hipótesis:

H2: La asociación negativa del divorcio de los padres durante la infancia sobre el logro de educación universitaria en la edad adulta es más significativa para los hijos/as de padres con alto nivel educativo.

El contexto español

Los estudios sobre los efectos del divorcio de los padres sobre el rendimiento educativo de los niños se han concentrado, principalmente, en Estados Unidos y en países del norte de Europa. La evidencia sobre este tema en países del sur de Europa es muy escasa (Albertini y Dronkers, 2009; Escapa, 2017). Las diferencias entre estos países son

numerosas en términos de sistema educativo, mercado laboral y políticas familiares (Esping-Andersen y Billari, 2015; Härkönen y Dronkers, 2006). Por ejemplo, en España la primera Ley del Divorcio se aprobó en 1932 durante la II República Española, pero se abolió en 1939 con la llegada de la dictadura franquista. Sin embargo, desde 1981 y especialmente después de 2005, varias reformas legislativas han otorgado derechos a las familias en materia de divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo, paternidad, responsabilidades parentales, custodia y manutención de los hijos, parejas de hecho, adopción y protección de los niños (OECD, 2022).

El aumento del número de divorcios en España ha sido bastante destacable y ha alcanzado recientemente niveles similares a los de países del centro y norte de Europa, pasando de una tasa bruta de divorcios de 0,3 en 1981 a 1,9 en 2019 (Eurostat, 2021a). Además, en relación con el gradiente educativo del divorcio, Bernardi y Martínez-Pastor (2011) encontraron que, entre las primeras cohortes tras la aprobación de la Ley de Divorcio de 1981, había una correlación positiva entre educación y divorcio. Sin embargo, en las siguientes décadas, cuando la disolución matrimonial se hizo social y financieramente menos costosa, la correlación entre educación y divorcio en España pasó a ser nula.

En materia educativa, en España las transformaciones empezaron en la segunda mitad del siglo xx y se cristalizaron en el último cuarto de siglo. En relación con los estudios universitarios, las personas con titulación universitaria pasaron del 5 % en 1981 al 19,2 % en el año 2011 (Gimeno y Callejo, 2014). Actualmente, el 54 % de las mujeres de 25 a 34 años tiene un título de educación superior en 2020, en comparación con el 41 % de los hombres (OECD, 2021). Además, durante la transición española a la democracia, la Ley General de Educación (LGE) y la Ley Orgánica regu-

ladora del Derecho a la Educación (LODE) declararon la educación como servicio público, posibilitando su generalización. Así pues, la educación infantil es pública y gratuita opcional y cubre de 3 a 6 años. La educación primaria comprende 6 años (6-12 años) y la educación secundaria inferior comprende 4 años adicionales después de los cuales finaliza la educación obligatoria. Por su parte, la educación secundaria superior (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio) tiene una duración de dos años y da acceso a la educación terciaria, la cual comprende vías tanto académicas como profesionales (Formación Profesional de Grado Superior, Diplomatura, Licenciatura, Grado, Máster o Doctorado). Entre los que acceden a la educación secundaria superior, la mayor parte accede también a la universidad. Como resultado, España tiene una tasa elevada de personas con educación secundaria inferior, pero también un nivel alto de titulados universitarios, en comparación con otros países de la OCDE (OECD, 2021).

Finalmente, hay que destacar la influencia que tiene el origen social en España en las trayectorias educativas de los niños. A este respecto, la evidencia empírica constata que España es uno de los países con mayor desigualdad de oportunidades de Europa, y donde el nivel educativo de los padres es muy relevante para explicar los logros socioeconómicos de los hijos (Brunori, Hufe y Mahler, 2018). Por tanto, un mayor conocimiento de los vínculos entre el divorcio de los padres, la educación de los padres y el logro de estudios universitarios de los hijos podría proporcionar información útil para adentrarnos en el estudio de la transmisión intergeneracional de las desigualdades educativas.

MÉTODO Y DATOS

El análisis empírico se ha basado en los datos de la ESGE de los años 2013, 2015

y 2017 conducida por el CIS. Hemos utilizado la base de datos de la ESGE debido a que contiene información específica sobre los resultados educativos de los encuestados y sobre las características de los padres (por ejemplo, educación o historial marital). Tras unificar las tres olas de la ESGE, la muestra original incluía 15 700 observaciones aproximadamente³. Hemos restringido la muestra para los encuestados nacidos después de 1965, es decir, aquellos que tenían 16 años o menos en 1981, para limitar el grupo seleccionado de padres que se divorciaron tras la aprobación de la Ley de Divorcio de 1981. Además, restringimos la muestra para aquellos individuos que tienen 25 años o más en el momento de la entrevista. Por último, tras eliminar los valores perdidos de la variable dependiente e independientes, la muestra final de la ESGE cuenta con 6047 encuestados nacidos entre 1965 y 1992 (con edades comprendidas entre los 25 y los 52 años en el momento de la entrevista), entre los cuales 285 experimentaron la separación de sus padres (el 4,7 % de la muestra).

Variables

La variable dependiente seleccionada es el logro de estudios universitarios, el cual es un marcador de las oportunidades socioeconómicas a lo largo del curso de la vida, ya que los beneficios de un mayor nivel educativo se extienden no solo a mayores ingresos y a un empleo más seguro, sino también a un mejor estado de salud y una mayor satisfacción con la vida. Para medir el resultado educativo considerado, usamos

³ La agregación de las tres encuestas tiene como objetivo elevar el número de casos en la muestra para aquellos individuos que experimentaron el divorcio de sus padres durante la infancia. El bajo tamaño muestral ha sido una de las limitaciones que han tenido varios estudios que han analizado la asociación entre el divorcio y el logro educativo de los niños en la edad adulta (véanse Bernardi y Comolli, 2019; Guetto, Bernardi y Zanasi, 2022).

una variable ficticia que tomó el valor de 1 para los encuestados de entre 25 y 52 años que tenían educación universitaria (estudios universitarios finalizados) y 0 para el resto de niveles inferiores de educación. En relación con la variable independiente clave, el divorcio de los padres, se operacionaliza como una variable ficticia que toma valor 1 si los padres se separaron o divorciaron a los 16 años o antes y 0 si no se han divorciado. También creamos una variable categórica donde presentamos los tramos de edad a la que los niños experimentaron el divorcio de sus padres: 0-5 años (infancia temprana), 6-11 años (infancia intermedia) y 12-16 años (infancia tardía o adolescencia).

La variable de origen socioeconómico se ha medido a partir de dos indicadores: el nivel educativo más alto alcanzado por el padre o la madre y la educación de la madre cuando el encuestado tenía 16 años. Para la educación de los padres, creamos una variable categórica que consta de nivel bajo (educación secundaria de 1.ª etapa o inferior), nivel medio (educación secundaria de 2.ª etapa) y nivel alto (educación universitaria). Para la educación de la madre, creamos una variable con los mismos tres niveles. Nuestro análisis se realiza utilizando ambas versiones de antecedentes educativos. El primero nos permite observar la influencia de la educación paterna cuando centramos el foco en familias no intactas creadas a través de la separación de los padres, mientras que el segundo nos permite incluir en el análisis a niños que nunca vivieron con su padre. Las razones por las que se selecciona la educación de los padres como indicador de estatus socioeconómico son fundamentalmente dos. En primer lugar, la educación de los padres es un predictor mucho más fiable de los resultados educativos de los niños que la clase social ocupacional de los padres; y, en segundo lugar, este indicador de estatus socioeconómico tiene mayor comparabilidad entre países, cohortes y estudios que

las clasificaciones ocupacionales (Barone y Ruggera, 2018).

Las variables de control adicionales incluídas en los modelos son características de los estudios sobre educación. En los modelos hemos controlado por una serie de variables sociodemográficas básicas como la edad, ya que el nivel educativo varía a lo largo de las cohortes; el sexo, debido a que el rendimiento escolar suele ser mayor para las niñas que para los niños (DiPrete y Buchmann, 2013); o la nacionalidad, ya que los migrantes tienen una mayor desventaja educativa que los nativos. Además, incluimos como variable de control la presencia de hermanos en el hogar de la infancia porque es uno de los predictores más importantes del logro educativo a largo plazo (Cabrera *et al.*, 2021). Asimismo, controlamos si los padres trabajaban cuando el encuestado tenía 16 años, debido a que la situación laboral de los padres puede estar asociada tanto con el tiempo dedicado a los niños como con los ingresos disponibles en el hogar. También, incluimos una variable para la comunidad autónoma de residencia, debido a que en España las tasas de universitarios varían notablemente entre comunidades (Eurostat, 2021b). Finalmente, controlamos por el año en el que se realiza la encuesta. La distribución de estas variables se presenta en la tabla 1.

Estrategia empírica

El análisis empírico sigue varias fases. La primera consiste en realizar un análisis descriptivo de las variables seleccionadas, donde mostramos la frecuencia del divorcio de los padres y el logro educativo según el origen socioeconómico. La segunda consiste en emplear modelos de probabilidad lineal (en adelante MPL) para explorar la relación entre el divorcio de los padres y el logro educativo de los hijos. Nuestros MPL están estimados con errores estándar robustos, clusterizados por comunidad autó-

noma, para corregir la heterocedasticidad. La tercera fase es especificada como sigue:

$$e.univ = \beta_0 + \beta_1 educpad_i + \beta_2 educpad_i + \beta_3 educpad_i * divpad_i + \beta_4 X_i + e_i \quad (1)$$

En la ecuación (1), para cada individuo i , estimamos la penalización por divorcio en el logro de educación universitaria ($e.univ$) según el nivel educativo de los padres, mediante la inclusión de un término de interacción entre el divorcio de los padres ($divpad$) y la educación de los padres ($educpad$). El modelo tiene un conjunto de variables de control X_i (detalladas anteriormente).

La selección de modelos de probabilidad lineal, en lugar de modelos logit, es tanto por razones prácticas como por teóricas. Entre las consideraciones prácticas, tuvimos en cuenta el hecho de que los coeficientes del modelo de probabilidad lineal están cerca de los efectos marginales del modelo logit. Por otro lado, al usar un modelo de probabilidad lineal, la interpretación de las interacciones es más sencilla y es posible comparar coeficientes entre modelos (Mood, 2010). De este modo, comprobamos si, y cómo, la relación entre el divorcio y el logro educativo está moderada por el estatus socioeconómico de los padres. Por último, los resultados de las interacciones se presentan gráficamente en términos de diferencias en la probabilidad de lograr educación universitaria entre las personas que experimentaron la ruptura de sus padres y las que no.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presenta la distribución de las variables utilizadas en el análisis para familias intactas y divorciadas. Por un lado, para la variable dependiente, encontramos que el logro de estudios universitarios es menor entre los adultos que experimentaron el divorcio de los padres en la infancia

(27 %), en comparación con sus homólogos que crecieron con ambos padres presentes en el hogar (32 %). Por otro lado, para las variables independientes, los padres divorciados tienen un mayor nivel educativo que los padres de familias intactas. Además, las familias divorciadas están compuestas por progenitores sustancialmente más jóvenes (35 años) que los progenitores que crecieron en familias intactas (38 años). También es interesante reseñar que, entre las madres divorciadas, el 81 % se encontraba activa en el mercado de trabajo cuando el encuestado tenía 16 años. Por último, la presencia de hermanos en el hogar de la infancia es significativamente mayor entre los hogares compuestos por ambos progenitores (90 %), en comparación con aquellos hogares conformados por padres divorciados (67 %).

En la tabla 2 mostramos las diferencias en la frecuencia del divorcio de los padres según el nivel educativo más alto de los padres y la educación de la madre. La proporción de divorcios o separaciones en la muestra es más alta entre los padres con un nivel educativo alto. Estos datos muestran que el gradiente educativo de la disolución de la unión en España, para los padres de hijos nacidos entre 1965 y 1992, es positivo. Alrededor del 7,9-10,0 % de los niños con padres con educación universitaria se separaron frente al 3,4-3,6 % de los niños con padres de educación inferior. De la misma manera, el gradiente es positivo en todos los grupos de edad de los encuestados en el momento de la separación o divorcio de los padres. Además, la tabla 2 presenta la distribución del logro educativo de los niños en función del nivel educativo de los padres. La distribución es similar tanto si nos fijamos en la educación de ambos padres como si tenemos en cuenta la educación solo de la madre: el logro de estudios universitarios fue mucho mayor entre los niños de padres con un nivel educativo alto (72,2 %), en comparación con los niños de padres con un nivel educativo bajo (21,3 %).

A continuación, la tabla 3 presenta una visión general de la asociación del divorcio de los padres con la probabilidad de tener un título de educación universitaria. De acuerdo con los resultados del modelo 1 y 3, tras controlar por el resto de las características sociodemográficas, los niños con padres divorciados tienen, de media, 12,5 puntos porcentuales (pp en adelante) menos de probabilidad de obtener un título universitario, en comparación con los que crecieron en una familia intacta. Sin embargo, la penalización del divorcio no se distribuye de la misma manera según la edad de los encuestados en el momento de la separación o divorcio de los padres. La tabla 4 (modelo 1 y 3) muestra que la probabilidad de lograr estudios universitarios para los niños que experimentaron la ruptura matrimonial de sus padres entre los 0-5 años es de 16 pp menor, en comparación con aquellos niños que vivían con ambos padres. Asimismo, los niños que experimentaron el divorcio entre los 12-16 años tuvieron 14 pp menos que sus pares, que crecieron con ambos padres, de obtener un título universitario. Por tanto, observamos que la penalización del divorcio sobre el logro de estudios universitarios de los niños se concentra, sustancialmente, en la primera infancia y la adolescencia.

Desde otra perspectiva, si se alude a la problemática de la desigualdad intergeneracional, encontramos que el impacto del divorcio en el nivel educativo de los hijos es mucho menor que el impacto del origen socioeconómico de los padres. Por ejemplo, como se observa en la tabla 3 (modelo 1), la probabilidad de lograr estudios universitarios para los hijos de padres con alto nivel de estudios es de unos 51 pp mayor que la de los hijos de padres con bajo nivel educativo. Sin embargo, la penalización asociada a la separación de los padres supone una reducción de la probabilidad de lograr estudios universitarios de unos 12 pp. Por tanto, el tamaño de la asociación entre el resul-

tado educativo de los niños y el divorcio es sustancialmente menor si se compara con el que existe entre el resultado educativo de los niños y la educación de los padres⁴.

Para captar hasta qué punto el efecto del divorcio en los resultados educativos está moderado por los antecedentes socioeconómicos de los padres, el gráfico 1 presenta los resultados de la interacción entre el divorcio y la educación de los padres. Como se puede observar, la penalización del divorcio en la probabilidad de logro de estudios universitarios es mayor para los hijos de padres con un alto nivel educativo, aproximadamente de 20 pp menos, comparado con sus homólogos que crecen en familias intactas, para los que el impacto es menor. Los hijos de padres con un nivel educativo medio y bajo también experimentan penalizaciones, aunque son de menor tamaño que la de los hijos de padres con un nivel educativo alto. Considerando el nivel educativo de la madre, la penalización del divorcio en la probabilidad de logro de estudios universitarios sigue una tendencia similar en tamaño y dirección de la asociación. Por tanto, el divorcio introduce una penalización mayor en el logro de estudios universitarios para los niños de padres con alto estatus socioeconómico, independientemente del indicador de origen social considerado.

Por otra parte, atendiendo a las diferencias en las consecuencias del divorcio según la edad a la que los niños experimentaron la ruptura, el gráfico 2 muestra que la sanción asociada a la separación de los padres se concentra principalmente en los hijos de padres con alto nivel educativo que experi-

⁴ Además, los modelos donde se controla por el nivel educativo más alto de padre o madre tienen una mayor capacidad explicativa, en comparación con los modelos donde se incluye solo el nivel educativo de la madre. Esta diferencia puede deberse a la importancia de los recursos del padre en la explicación del logro educativo de los hijos. Aunque existen diferencias en el R^2 y los coeficientes, estas son mínimas.

mentaron el divorcio en la infancia temprana (0-5 años) y en la adolescencia (12-16 años). La brecha fue sustancial en términos relativos: la probabilidad de logro de estudios universitarios es, aproximadamente, 30 pp menor en los hijos de padre con alto nivel educativo que experimentaron el divorcio entre 0-5 años y 12-16 años, en comparación con sus homólogos que se criaron en una familia intacta. Por tanto, la penalización del divorcio se concentra, en mayor medida, en los hijos de padres con alto estatus socioeconómico que experimentaron la ruptura en la primera infancia y la adolescencia.

Pruebas de robustez

Para finalizar, se han llevado a cabo varias pruebas de robustez cuyos resultados completos pueden solicitarse a los autores. En primer lugar, las penalizaciones del divorcio en las probabilidades de lograr la educación universitaria según el nivel educativo de los padres, estimadas a través de modelos de regresión logística, son coherentes con los resultados obtenidos mediante MPL. Es decir, los niños de padres con mayor nivel educativo tienen una mayor penalización por divorcio, especialmente concentrada durante la primera infancia y la adolescencia, que sus homólogos que crecieron con ambos padres presentes en el hogar. En segundo lugar, un 2,7 % de los individuos presenta un valor perdido en alguna de las variables consideradas en el estudio y, por tanto, fue eliminado del análisis principal. Con el objetivo de comprobar que dicha decisión no influye en los resultados obtenidos, se replican los análisis tras aplicar imputación múltiple. Los resultados vuelven a ser sustancialmente similares.

DISCUSIÓN

En la última década se ha producido un crecimiento exponencial de las investigaciones sobre los efectos del divorcio en la infancia

que han evidenciado una clara asociación entre el divorcio y el bienestar de los niños (Garriga y Bernardi, 2019; Härkönen, Bernardi y Boertien, 2017). En cuanto al caso español, un contexto relativamente poco estudiado, este análisis examina la asociación entre el divorcio de los padres y el logro de educación terciaria para la cohorte nacida entre 1965 y 1992, teniendo en cuenta las diferencias según la edad en el momento de exposición al divorcio y el origen socioeconómico de los padres.

Los resultados de nuestro estudio constatan una asociación negativa entre la experiencia del divorcio de los padres y el logro en los estudios universitarios de los hijos. Estos resultados coinciden con la mayoría de estudios que concluyen que el divorcio tiene efectos negativos sobre los resultados educativos (Amato, 1994; Escapa, 2017). Sin embargo, buena parte de esta penalización se concentra en los niños que experimentaron el divorcio de sus padres durante la primera infancia (0-5 años) y la adolescencia (12-16 años). Estos resultados corroboran nuestra hipótesis 1, debido a que encontramos una penalización significativa del divorcio en los resultados educativos durante la primera infancia y la adolescencia. Estas evidencias son similares a las obtenidas en otros contextos nacionales como Dinamarca (Laird, Nielsen y Nielsen, 2020). Por el contrario, la evidencia para el contexto noruego muestra que no existe un efecto del momento en que los padres se divorciaron sobre los resultados educativos de los hijos (Sigle-Rushton *et al.*, 2014), lo cual contrasta con nuestros resultados para España.

Los resultados obtenidos evidencian que el efecto del divorcio en el logro educativo sigue una tendencia en forma de U invertida: los niños que experimentaron el divorcio entre los 0-5 años y 12-16 años tienen una menor probabilidad de obtener un título universitario. Esto puede tener varias interpretaciones. Por un lado, la experiencia de separación de los padres durante la primera in-

fancia puede tener efectos adversos, ya que durante este periodo se producen desarrollos emocionales, sociales y cognitivos fundamentales (Cavanagh y Huston, 2008; Laird, Nielsen y Nielsen, 2020). En esta línea, varios estudios indican que los individuos que durante su infancia crecieron en condiciones adversas (y el divorcio de los padres puede ser un factor potencialmente adverso en el bienestar infantil) tienen más probabilidades de experimentar trayectorias formativas, laborales, económicas y de salud desfavorables en su vida adulta (Almquist y Brännström, 2018; Fomby, 2013; Laird, Nielsen y Nielsen, 2020). Por otro lado, en España la principal brecha en los resultados educativos se da en la transición de la educación obligatoria a la secundaria, la cual posibilita el acceso a la educación terciaria. Este periodo de formación secundaria básica se cursa entre los 12 y 16 años, y es una etapa donde las exigencias educativas aumentan, por lo que un evento disruptivo en la vida de un adolescente, como es el divorcio de los padres, puede ser un factor relevante en la transición de los hijos a la educación posobligatoria.

En relación con la heterogeneidad por origen social en las penalizaciones del divorcio en el logro educativo, los resultados constatan una asociación negativa entre el divorcio de los padres y la probabilidad de lograr estudios universitarios para los niños de padres con alto nivel educativo. Estos resultados difieren de los mostrados en estudios anteriores para el caso de España, los cuales muestran que la penalización del divorcio en la probabilidad de matricularse en la universidad es prácticamente nula en todos los estratos sociales (Bernardi y Comolli, 2019). Sin embargo, nuestras estimaciones sobre el efecto negativo del divorcio en la probabilidad de alcanzar estudios universitarios para los niños de alto estatus socioeconómico son similares a las obtenidas en estudios internacionales anteriores (para el contexto europeo y estadounidense véase a Guetto, Bernardi y Zanasi, 2022).

Estos resultados constatan nuestra hipótesis 2, ya que la separación de los padres no parece representar una fuente adicional de desventaja para grupos sociales ya vulnerables, como los niños de padres con bajo estatus socioeconómico. Al contrario, más bien «igualada hacia abajo», ya que reduce las ventajas educativas de los niños de alto estatus socioeconómico. Esto se explica porque, tras la separación de los padres, los hijos de familias acomodadas pierden algunos de los recursos económicos que contribuyen a sus mejores resultados socioeconómicos (Bernardi y Boertien, 2016). Sin embargo, hay que tener en cuenta que los hijos de padres con alto nivel educativo siguen estando mejor posicionados en comparación con sus homólogos de bajo nivel socioeconómico, incluso en caso de divorcio de los padres. No obstante, existen otros mecanismos que pueden ser relevantes para explicar la mayor penalización por divorcio de los hijos de padres con estudios superiores. Por ejemplo, las madres con alto estatus socioeconómico que se divorcian parecen tener menos probabilidades de transferir sus ventajas educativas a sus hijos que sus homólogas no divorciadas, tal vez debido a una «doble carga» en relación con la presión laboral y las responsabilidades de crianza (Nilsen *et al.*, 2020).

Es preciso señalar algunas de las limitaciones de nuestro análisis. En primer lugar, hemos estudiado a la cohorte de 1965 y 1992, por tanto, nuestros análisis no capturan las tendencias de cambio que se están produciendo en las familias españolas durante las últimas décadas. Varios estudios para el caso español han mostrado que la probabilidad de divorcio, que es la principal fuente de monoparentalidad en el contexto español, es mayor para las madres con un bajo nivel educativo (Garriga y Cortina, 2017). En este sentido, una advertencia adicional es que, en la cohorte considerada en nuestro análisis, el gradiente educativo del divorcio seguía siendo positivo. Así pues, sería necesario replicar estos análisis para cohortes más

recientes, donde la frecuencia del divorcio ha pasado de ser mayor entre las madres con alto nivel educativo a concentrarse en mayor medida entre las mujeres con bajo nivel educativo (Bernardi y Martínez-Pastor, 2011; Garriga y Cortina, 2017). En segundo lugar, aunque hemos utilizado los términos «efectos» o «consecuencias», demostrar que el divorcio tiene un efecto causal en los resultados educativos de los niños es una tarea compleja e imprecisa. Las características familiares no observadas (por ejemplo, el conflicto entre los padres, la pérdida de ingresos asociada a la separación o el grado de estrés) podrían contribuir a explicar tanto la aparición del divorcio como el menor rendimiento educativo de los hijos en situaciones posdivorcio. Debido a que no disponemos de variables que permitan probar estos mecanismos causales, es posible que estemos sobreestimando el efecto negativo del divorcio sobre el logro de estudios universitarios.

En conclusión, el presente estudio ha puesto de manifiesto que experimentar el divorcio de los padres durante la primera infancia o la adolescencia está asociado con un menor logro educativo de los niños en España, pero sobre todo para los niños de padres con alto estatus socioeconómico. Por todo ello, las implicaciones políticas de este estudio son manifiestas, puesto que pone de relieve la necesidad de políticas públicas de infancia y juventud comprometidas con la igualdad de oportunidades, donde se debería tener en cuenta cómo los acuerdos de crianza tras el divorcio, las políticas de conciliación y las medidas de apoyo a los ingresos y al empleo podrían reducir el riesgo de privación socioeconómica asociado al divorcio. En definitiva, este artículo abre posibles líneas de investigación para el contexto de España, donde la literatura sobre familia y reproducción de la desigualdad a lo largo de las trayectorias vitales de niños y jóvenes es muy escasa, debido fundamentalmente a las limitadas fuentes de datos longitudinales disponibles.

BIBLIOGRAFÍA

- Albertini, Marco y Dronkers, Jaap (2009). «Effects of Divorce on Children's Educational Attainment in a Mediterranean and Catholic Society Evidence From Italy». *European Societies*, 11(1): 137-159. doi: 10.1080/14616690802248042
- Almqvist, Ylva B. y Brännström, Lars (2018). «Childhood Adversity and Trajectories of Disadvantage Through Adulthood: Findings from the Stockholm Birth Cohort Study». *Social Indicators Research*, 136(1): 225-245. doi: 10.1007/s11205-016-1528-6
- Amato, Paul R. (1994). «Life-Span Adjustment of Children to Their Parents' Divorce». *The Future of Children*, 4(1): 143-164. doi: 10.2307/1602482
- Amato, Paul R. (2000). «The Consequences of Divorce for Adults and Children». *Journal of Marriage and Family*, 62(4): 1269-1287. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x
- Amato, Paul R. (2001). «Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-analysis». *Journal of Family Psychology*, 15(3): 355-370. doi: 10.1037/0893-3200.15.3.355
- Amato, Paul R. (2010). «Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments». *Journal of Marriage and Family*, 72(3): 650-666. doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x
- Amato, Paul R. y Anthony, Christopher J. (2014). «Estimating the Effects of Parental Divorce and Death With Fixed Effects Models: Parental Divorce and Death». *Journal of Marriage and Family*, 76(2): 370-386. doi: 10.1111/jomf.12100
- Augustine, Jennifer M. (2014). «Maternal Education and the Unequal Significance of Family Structure for Children's Early Achievement». *Social Forces*, 93(2): 687-718. doi: 10.1093/sf/sou072
- Barone, Carlo y Ruggera, Lucia (2018). «Educational Equalization Stalled? Trends in Inequality of Educational Opportunity between 1930 and 1980 across 26 European Nations». *European Societies*, 20(1): 1-25. doi: 10.1080/14616696.2017.1290265
- Bernardi, Fabrizio y Martínez-Pastor, Juan-Ignacio (2011). «Divorce Risk Factors and Their Variation over Time in Spain». *Demographic Research*, 24: 771-800. doi: 10.4054/DemRes.2011.24.31
- Bernardi, Fabrizio y Radl, Jonas (2014). «The Long-term Consequences of Parental Divorce for Children's Educational Attainment». *Demographic Research*, 30: 1653-1680. doi: 10.4054/DemRes.2014.30.61

- Bernardi, Fabrizio y Boertien, Diederik (2016). «Understanding Heterogeneity in the Effects of Parental Separation on Educational Attainment in Britain: Do Children from Lower Educational Backgrounds Have Less to Lose?». *European Sociological Review*, 32(6): 807-819. doi: 10.1093/esr/jcw036
- Bernardi, Fabrizio y Boertien, Diederik (2017). «Non-intact Families and Diverging Educational Destinies: A Decomposition Analysis for Germany, Italy, the United Kingdom and the United States». *Social Science Research*, 63: 181-191. doi: 10.1016/j.ssresearch.2016.09.004
- Bernardi, Fabrizio y Comolli, Chiara L.C. (2019). «Parental Separation and Children's Educational Attainment: Heterogeneity and Rare and Common Educational Outcomes». *Zeitschrift Für Familienforschung*, 31(1): 3-26. doi: 10.3224/zff.v31i1.01
- Brand, Jennie E.; Moore, Ravaris; Song, Xi y Xie, Yu (2019). «Parental Divorce Is Not Uniformly Disruptive to Children's Educational Attainment». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(15): 7266-7271. doi: 10.1073/pnas.1813049116
- Brunori, Paolo; Hufe, Paul y Mahler, Daniel G. (2018). *The Roots of Inequality: Estimating Inequality of Opportunity from Regression Trees* [Documento de trabajo 8349]. World Bank. doi: 10.1596/1813-9450-8349
- Cabrera, Leopoldo; Marrero, Gustavo A.; Rodríguez, Juan G. y Salas-Rojo, Pedro (2021). «Inequality of Opportunity in Spain: New Insights from New Data». *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics*, 237(2): 153-185.
- Cavanagh, Shannon E. y Huston, Aletha C. (2008). «The Timing of Family Instability and Children's Social Development». *Journal of Marriage and Family*, 70(5): 1258-1270. doi: 10.1111/j.1741-3737.2008.00564.x
- Cavanagh, Shannon E. y Fomby, Paula (2019). «Family Instability in the Lives of American Children». *Annual Review of Sociology*, 45(1): 493-513. doi: 10.1146/annurev-soc-073018-022633
- DiPrete, Thomas A. y Buchmann, Claudia (2013). *Rise of Women, The: The Growing Gender Gap in Education and What it Means for American Schools*. New York: Russell Sage Foundation.
- Duncan, Greg J.; Magnuson, Katherine; Kalil, Ariel y Ziol-Guest, Kathleen (2012). «The Importance of Early Childhood Poverty». *Social Indicators Research*, 108(1): 87-98. doi: 10.1007/s11205-011-9867-9
- Escapa, Sandra (2017). «Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento educativo de los hijos / Effects of Post-Divorce Parental Conflict on Children's Educational Achievement». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 158: 41-58. doi: 10.5477/cis/reis.158.41
- Esping-Andersen, Gøsta y Billari, Francesco C. (2015). «Re-theorizing Family Demographics». *Population and Development Review*, 41(1): 1-31. doi: 10.1111/j.1728-4457.2015.00024.x
- Eurostat (2021a). *Divorce Indicators*. Disponible en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_ndivind&lang=en, acceso 1 de febrero de 2022.
- Eurostat (2021b). *Population by Educational Attainment Level, Sex and NUTS 2 Regions (%)*. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/data-browser/view/edat_ifse_04/default/bar?lang=en, acceso 8 de septiembre de 2022.
- Flaquer, Lluís (2014). Family-related Factors Influencing Child Well-being. En: A. Ben-Arieh; F. Casas; I. Frønes y J. E. Korbin (eds.). *Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective* (pp. 2229-2255). Springer. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_87
- Fomby, Paula (2013). «Family Instability and College Enrollment and Completion». *Population Research and Policy Review*, 32(4): 469-494. doi: 10.1007/s11113-013-9284-7
- Fomby, Paula y Osborne, Cynthia (2017). «Family Instability, Multipartner Fertility, and Behavior in Middle Childhood: Instability, Multipartner Fertility, and Behavior». *Journal of Marriage and Family*, 79(1): 75-93. doi: 10.1111/jomf.12349
- Garriga, Anna y Cortina, Clara (2017). «The Change in Single Mothers' Educational Gradient over Time in Spain». *Demographic Research*, 36: 1859-1884. doi: 10.4054/DemRes.2017.36.61
- Garriga, Anna y Bernardi, Laura (2019). «Custody Arrangements and Social Inequalities among Children». *Revue des Politiques Sociales et Familiales*, 131(1): 203-217. doi: 10.3406/caf.2019.3360
- Gimeno, Rubén M. y Callejo, Carlos B. (2014). «La evolución de la importancia del capital escolar en la clase obrera». *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 7(2): 373-394. doi: 10.7203/RASE.7.2.8777
- Grätz, Michael (2015). «When Growing Up Without a Parent Does Not Hurt: Parental Separation and the Compensatory Effect of Social Origin». *European Sociological Review*, 31(5): 546-557. doi: 10.1093/esr/jcv057

- Guetto, Raffaele y Panichella, Nazareno (2019). «Family Arrangements and Children's Educational Outcomes: Heterogeneous Penalties in Upper-secondary School». *Demographic Research*, 40: 1015-1046. doi: 10.4054/Dem-Res.2019.40.35
- Guetto, Raffaele; Bernardi, Fabrizio y Zanasi, Francesca (2022). «Parental Education, Divorce, and Children's Educational Attainment: Evidence from a Comparative Analysis». *Demographic Research*, 46: 65-96. doi: 10.4054/Dem-Res.2022.46.3
- Härkönen, Juho y Dronkers, Jaap (2006). «Stability and Change in the Educational Gradient of Divorce. A Comparison of Seventeen Countries». *European Sociological Review*, 22(5): 501-517.
- Härkönen, Juho; Bernardi, Fabrizio y Boertien, Diederik (2017). «Family Dynamics and Child Outcomes: An Overview of Research and Open Questions». *European Journal of Population*, 33(2): 163-184. doi: 10.1007/s10680-017-9424-6
- Havermans, Nele; Botterman, Sarah y Matthijs, Koen (2014). «Family Resources as Mediators in the Relation between Divorce and Children's School Engagement». *The Social Science Journal*, 51(4): 564-579. doi: 10.1016/j.socij.2014.04.001
- Heckman, James J. (2006). «Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children». *Science*, 312. doi: 10.1126/science.1128898
- Jeynes, William (2002). *Divorce, Family Structure, and the Academic Success of Children*. New York: Routledge.
- Laird, Jessica; Nielsen, Nick F. y Nielsen, Torben H. (2020). *Differential Effects of the Timing of Divorce on Children's Outcomes: Evidence from Denmark* [Documento de trabajo 3567651]. doi: 10.2139/ssrn.3567651
- Lansford, Jennifer E. (2009). «Parental Divorce and Children's Adjustment». *Perspectives on Psychological Science*, 4(2): 140-152. doi: 10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x
- Lee, Dohoon y McLanahan, Sara (2015). «Family Structure Transitions and Child Development: Instability, Selection, and Population Heterogeneity». *American Sociological Review*, 80(4): 738-763. doi: 10.1177/0003122415592129
- Lesthaeghe, Ron (2010). «The Unfolding Story of the Second Demographic Transition». *Population and Development Review*, 36(2): 211-251. doi: 10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x
- Mandemakers, Jornt J. y Kalmijn, Matthijs (2014). «Do Mother's and Father's Education Condition the Impact of Parental Divorce on Child Well-being?». *Social Science Research*, 44: 187-199. doi: 10.1016/j.ssresearch.2013.12.003
- Martin, Molly A. (2012). «Family Structure and the Intergenerational Transmission of Educational Advantage». *Social Science Research*, 41(1): 33-47. doi: 10.1016/j.ssresearch.2011.07.005
- McLanahan, Sara (2004). «Diverging Destinies: How Children Are Faring under the Second Demographic Transition». *Demography*, 41(4): 607-627. doi: 10.1353/dem.2004.0033
- McLanahan, Sara y Percheski, Christine (2008). «Family Structure and the Reproduction of Inequalities». *Annual Review of Sociology*, 34(1): 257-276. doi: 10.1146/annurev.soc.34.040507.134549
- McLanahan, Sara; Tach, Laura y Schneider, Daniel (2013). «The Causal Effects of Father Absence». *Annual Review of Sociology*, 39(1): 399-427. doi: 10.1146/annurev-soc-071312-145704
- Mood, Carina (2010). «Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do About It». *European Sociological Review*, 26(1): 67-82. doi: 10.1093/esr/jcp006
- Mortelmans, Dimitri (2020). Economic Consequences of Divorce: A Review. En: M. Kreyenfeld y H. Trappe (eds.). *Parental Life Courses after Separation and Divorce in Europe* (pp. 23-41). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-44575-1_2
- Nilsen, Sondre A.; Breivik, Kyrre; Wold, Bente; Askeland, Kristin G.; Sivertsen, Børge; Hysing, Mari y Bøe, Tormod (2020). «Divorce and Adolescent Academic Achievement: Heterogeneity in the Associations by Parental Education». *PLOS ONE*, 15(3): e0229183. doi: 10.1371/journal.pone.0229183
- OECD (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing. doi: 10.1787/b35a14e5-en
- OECD (2022). *Evolving Family Models in Spain: A New National Framework for Improved Support and Protection for Families*. OECD Publishing. doi: 10.1787/c27e63ab-en
- Piketty, Thomas (2003). *The Impact of Divorce on School Performance: Evidence from France, 1968-2002*. N.º 4146, CEPR Discussion Papers. Disponible en: <https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/4146.html>

- Sigle-Rushton, Wendy y McLanahan, Sara (2004). Father Absence and Child Wellbeing: A Critical Review. En: D. P. Moynihan; L. Rainwater, y T. Smeeding (eds.). *The Future of the Family* (pp. 116-155). Russell Sage Foundation. Disponible en: <http://www.russellsage.org>
- Sigle-Rushton, Wendy; Lyngstad, Torkild H.; Andersen, Patrick L. y Kravdal, Øystein (2014). «Proceed With Caution? Parents' Union Dissolution and Children's Educational Achievement: Union Dissolution and Children's Achievements». *Journal of Marriage and Family*, 76(1): 161-174. doi: 10.1111/jomf.12075

RECEPCIÓN: 24/03/2022

REVISIÓN: 28/06/2022

APROBACIÓN: 26/10/2022

ANEXOS

TABLA 1. Descriptivos de las variables incluidas en el análisis para la cohorte 1965-1992 (%)

Variables independientes	Familias intactas	Familias divorciadas
Sexo		
Hombre	50,8	45,2
Mujer	49,2	54,8
Edad media de los encuestados	38,7	35,6
Nacionalidad		
Española	89,2	75,4
Otra nacionalidad	10,8	24,6
Nivel educativo de la madre		
Nivel alto	7,2	16,5
Nivel medio	11,3	22,6
Nivel bajo	81,4	60,9
Nivel educativo más alto de padre o madre		
Nivel alto	14,0	24,6
Nivel medio	17,6	26,9
Nivel bajo	68,4	48,6
Situación laboral de la madre cuando el encuestado tenía 16 años		
Inactiva	52,8	18,9
Trabaja	47,2	81,1
Situación laboral del padre cuando el encuestado tenía 16 años		
Inactivo	5,0	7,6
Trabaja	95,0	92,4
Presencia de hermanos cuando el encuestado tenía 16 años		
No tiene hermanos	9,3	32,4
Tiene hermanos	90,7	67,6
Edad de los encuestados en el momento del divorcio de los padres		
0-5 años	—	28,8
6-11 años	—	38,2
12-16 años	—	33,0
Variable dependiente		
Logro de estudios universitarios	32,6	27,0
Total observaciones	5.762	285

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

TABLA 2. *Divorcio de los padres y logro educativo según el nivel educativo de los padres*

	Divorcio de los padres (0-16)		Logro de estudios universitarios			
	N	%	N	%		
Nivel educativo más alto de padre o madre						
Nivel bajo	140	3,4	871	21,3		
Nivel medio	76	7,0	454	42,0		
Nivel alto	69	7,9	630	72,2		
Total	285		1955			
Nivel educativo de la madre						
Nivel bajo	174	3,6	1234	25,2		
Nivel medio	65	9,3	372	53,1		
Nivel alto	46	10,0	349	76,0		
Total	285		1955			
Edad en el momento de la separación/divorcio de los padres						
	0-5 años		6-11 años		12-16 años	
	N	%	N	%	N	%
Nivel educativo más alto de padre o madre						
Nivel bajo	37	0,9	49	1,2	54	1,3
Nivel medio	23	2,1	33	3,1	20	1,9
Nivel alto	22	2,5	27	3,1	20	2,3
Total	82		109		94	
Nivel educativo de la madre						
Nivel bajo	48	1,0	59	1,2	67	1,4
Nivel medio	21	3,0	30	4,3	14	2,0
Nivel alto	13	2,8	20	4,4	13	2,8
Total	82		109		94	

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

TABLA 3. Resultados de los modelos de probabilidad lineal que predicen el logro educativo según el divorcio y la educación de los padres

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Intercepto	0,301*** (0,027)	0,301*** (0,027)	0,258*** (0,027)	0,257*** (0,028)
<i>Divorcio de los padres (Ref. Intacta)</i>				
Divorcio de los padres 0-16 años	-0,124*** (0,023)	-0,111*** (0,018)	-0,127*** (0,022)	-0,122*** (0,018)
<i>Nivel educativo de la madre (Ref. Nivel bajo)</i>				
Nivel alto	0,515*** (0,023)	0,522*** (0,023)		
Nivel medio	0,285*** (0,017)	0,285*** (0,019)		
Nivel alto*Divorcio de los padres		-0,075 (0,059)		
Nivel medio*Divorcio de los padres		-0,004 (0,057)		
<i>Nivel educativo más alto de padre o madre (Ref. Nivel bajo)</i>				
Nivel alto			0,507*** (0,023)	0,515*** (0,023)
Nivel medio			0,204*** (0,026)	0,199*** (0,026)
Nivel alto*Divorcio de los padres				-0,100 (0,075)
Nivel medio*Divorcio de los padres				0,074* (0,038)
Observaciones	6.047	6.047	6.047	6.047
R ²	0,139	0,139	0,180	0,180

Nota: Las variables de control incluyen la nacionalidad, la edad, el género, la comunidad autónoma, el año de la encuesta, si tiene hermanos y si padre/madre trabajaban cuando el encuestado tenía 16 años. Los errores estándar robustos se muestran entre paréntesis. * p < 0,10; ** p < ,05; *** p < 0,01.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

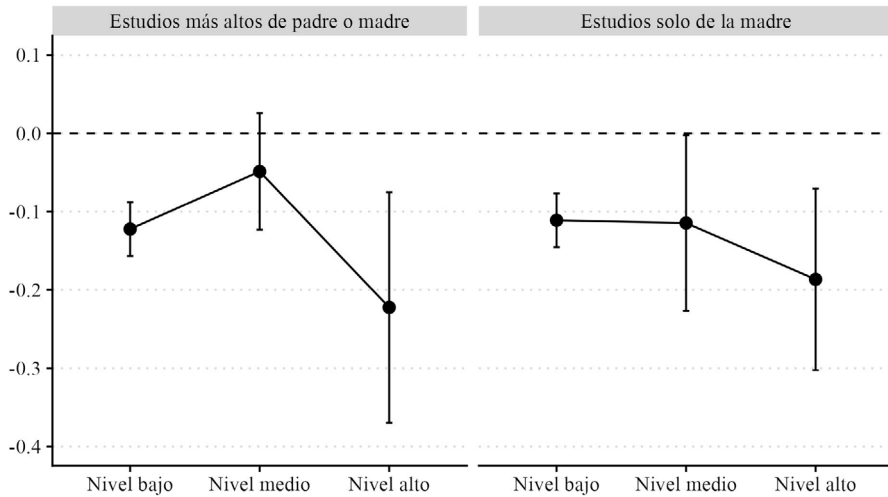
TABLA 4. Resultados de los modelos de probabilidad lineal que predicen el logro educativo según el momento de la separación de los padres y la educación de los padres

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Intercepto	0,301*** (0,027)	0,300*** (0,026)	0,258*** (0,027)	0,257*** (0,027)
<i>Divorcio de los padres (Ref. Intacta)</i>				
Divorcio 0-5 años	-0,165*** (0,042)	-0,106 (0,065)	-0,176*** (0,034)	-0,120** (0,053)
Divorcio 6-11 años	-0,078** (0,037)	-0,088* (0,044)	-0,072* (0,041)	-0,095** (0,040)
Divorcio 12-16 años	-0,143*** (0,032)	-0,135*** (0,035)	-0,151*** (0,031)	-0,148** (0,025)
<i>Nivel educativo de la madre (Ref. Nivel bajo)</i>				
Nivel alto	0,515*** (0,023)	0,523*** (0,023)		
Nivel medio	0,285*** (0,018)	0,285*** (0,019)		
Nivel alto*Divorcio 0-5 años		-0,202 (0,149)		
Nivel medio*Divorcio 0-5 años		-0,103 (0,100)		
Nivel alto*Divorcio 6-11 años		0,023 (0,129)		
Nivel medio*Divorcio 6-11 años		0,019 (0,108)		
Nivel alto*Divorcio 12-16 años		-0,116 (0,140)		
Nivel medio*Divorcio 12-16 años		0,061 (0,151)		
<i>Nivel educativo más alto de padre o madre (Ref. Nivel bajo)</i>				
Nivel alto			0,507*** (0,023)	0,515*** (0,023)
Nivel medio			0,204*** (0,026)	0,199*** (0,026)
Nivel alto*Divorcio 0-5 años				-0,186* (0,096)
Nivel medio*Divorcio 0-5 años				-0,022 (0,126)
Nivel alto*Divorcio 6-11 años				-0,035 (0,132)
Nivel medio*Divorcio 6-11 años				0,100 (0,069)
Nivel alto*Divorcio 12-16 años				-0,113 (0,120)
Nivel medio*Divorcio 12-16 años				0,114 (0,125)
Observaciones	6.047	6.047	6.047	6.047
R ²	0,139	0,139	0,180	0,181

Nota: Las variables de control incluyen la nacionalidad, la edad, el género, la comunidad autónoma, el año de la encuesta, si tiene hermanos y si padre/madre trabajaban cuando el encuestado tenía 16 años. Los errores estándar robustos se muestran entre paréntesis. * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

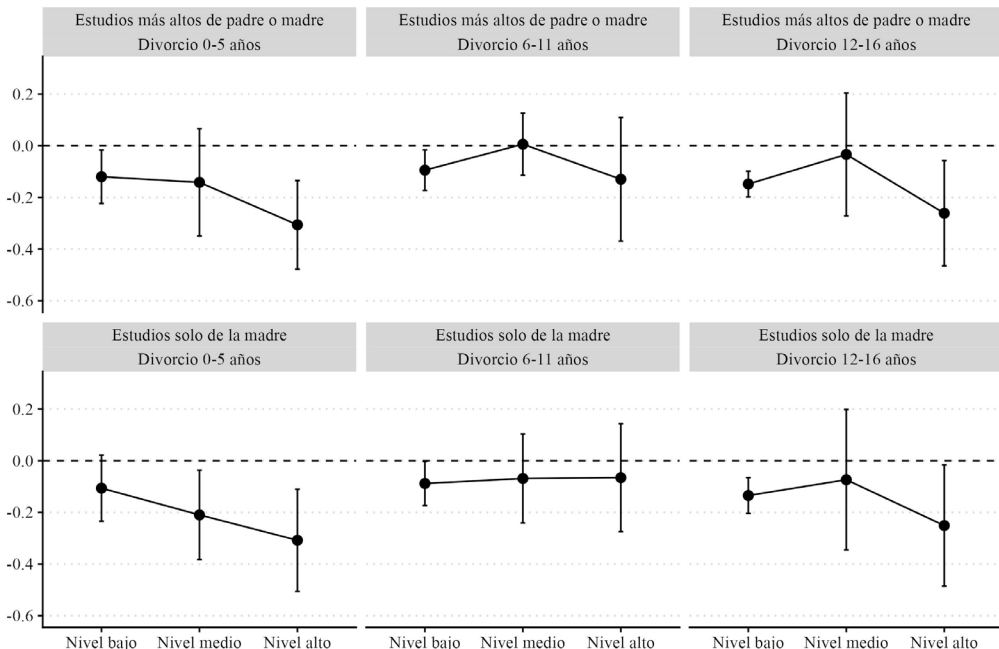
GRÁFICO 1. Penalización del divorcio en la probabilidad de logro de educación universitaria según la educación de los padres



Nota: 95 % IC. Resultados de las interacciones incluidas en los modelos de probabilidad lineal de la tabla 3. Categoría de referencia: Familia intacta.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

GRÁFICO 2. Penalización del momento de la separación de los padres en la probabilidad de logro de educación universitaria según la educación de los padres



Nota: 95 % IC. Resultados de las interacciones incluidas en los modelos de probabilidad lineal de la tabla 4. Categoría de referencia: Familia intacta.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de la ESGE 2013, 2015 y 2017.

Parental Divorce and Long-Term Educational Attainment of Children in Spain: Heterogeneity Based on Parental Education

Divorcio de los padres y logro educativo de los niños a largo plazo en España: heterogeneidad según la educación de los padres

Manuel Mejías-Leiva and Almudena Moreno Mínguez

Key words

- Parental Divorce
- Social Stratification
- Educational Attainment
- Time of Divorce
- Intergenerational Transmission

Palabras clave

- Divorcio de los padres
- Estratificación social
- Logro educativo
- Momento del divorcio
- Transmisión intergeneracional

Abstract

This paper analyses the association between parental divorce during childhood and children's university attainment in Spain, based on parental socioeconomic status. For this, linear probability models were estimated, using data from the Spanish General Social Surveys of 2013, 2015 and 2017. The results suggest a negative association between parental divorce and the probability of children obtaining university degrees, with a higher penalty occurring when the divorce occurs when the child is aged 0-5 or 12-16 years. Moreover, the penalty of divorce on the probability of obtaining a university degree is higher for children of parents having a high socioeconomic status.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo analizar la asociación entre el divorcio de los padres durante la infancia y el logro de estudios universitarios de los hijos para el caso de España, según el estatus socioeconómico de los padres. Para ello, estimamos modelos de probabilidad lineal a partir de los datos de la Encuesta Social General Española de los años 2013, 2015 y 2017. Los resultados evidencian una asociación negativa entre el divorcio de los padres y la probabilidad de que los hijos obtengan un título universitario, siendo esta penalización mayor cuando el divorcio se produce entre los 0-5 y 12-16 años. Además, la penalización del divorcio en la probabilidad de obtener un título universitario es mayor para los hijos de padres de alto estatus socioeconómico.

Citation

Mejías-Leiva, Manuel; Moreno Mínguez, Almudena (2023). "Parental Divorce and Long-Term Educational Attainment of Children in Spain: Heterogeneity Based on Parental Education". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 57-76. (doi: 10.5477/cis/reis.183.57)

Manuel Mejías-Leiva: Universidad de Valladolid | manuel.mejias@uva.es

Almudena Moreno Mínguez: Universidad de Valladolid | almudena@soc.uva.es

INTRODUCTION

Empirical research has shown that children experiencing the divorce of their parents display worse performance on distinct measures of well-being as compared to children from intact families (Amato, 2000; Härkönen, Bernardi, and Boertien, 2017). These negative consequences imply lower educational performance over the short term (achievement test scores during childhood and adolescence; see Amato and Anthony, 2014) and the long term (the probability of obtaining a higher education degree; see Bernardi and Radl, 2014; Brand *et al.*, 2019), possibly resulting in a life-long accumulation of disadvantages (McLanahan, 2004; McLanahan and Percheski, 2008). In Spain, empirical evidence has suggested that children of divorced parents exhibit worse educational performance over the short term as compared to children raised in intact families (Escapa, 2017). However, except for Bernardi and Comolli (2019) who examined the relationship between divorce and the probability of university enrolment, there have been virtually no studies analyzing this long-term association in Spain.

In this article, we analyze the association between parental divorce during childhood and the attainment of a university education in Spain, focusing our attention on heterogeneity, based on parental socioeconomic origin. For this, we used data from the Spanish General Social Survey (hereinafter, ESGE) of the Sociological Research Center (hereinafter, CIS). This work provides some interesting contributions to the literature regarding the consequences of divorce on children. First, we analyzed the association between parental divorce and educational attainment by children, based on parental socioeconomic status. Few studies in Spain have examined the heterogeneity of the penalization of divorce based on socioeconomic origin. And only a few studies have considered whether the negative effects of divorce on children's educa-

tional outcomes are greater for children from a high or low socioeconomic status (Bernardi and Boertien, 2017; Bernardi and Radl, 2014; Martin, 2012). Second, this study examines whether the consequences of parental separation vary depending on the age when the children experienced divorce, since it is unclear if children are more vulnerable to parental separation during specific developmental phases¹.

The analysis of the relationship between parental divorce and educational trajectories during the life of their children are especially relevant, given that family dynamics are currently undergoing profound changes in Europe. These changes are the result, on the one hand of sociodemographic processes contextualized by the so-called Second Demographic Transition (STD). This transition is characterized by the individualization and plurality of family relationships and structures (Lesthaeghe, 2010). On the other hand, progress in family policies of the welfare states, such as modifications of divorce and joint custody laws, is serving to re-shape family and gender relations (Esping-Andersen and Billari, 2015). In Spain, for example, the Divorce Law was promulgated in 1981, considerably later than most other Western countries. After approval of the Express Divorce Law in 2005, divorce rates increased so rapidly that today, they are above the EU average (Bernardi and Comolli, 2019). Furthermore, the analysis of the Spanish situation is of special interest, given that most studies on the consequences of divorce on children's educational achievement have been conducted in the US (Brand *et al.*, 2019) and northern Europe (Nilsen *et al.*, 2020), with very few being carried out in Spain.

¹ This is a descriptive study, and it does not offer any causal estimates regarding the effects of divorce. The use of causal terminology ("effect", "consequences" or "impact") has merely stylistic purposes, given that our data only permits descriptive estimates on the penalization of divorce.

The remainder of the article has been organized as follows: First, a literature review is presented on parental divorce and the intergenerational transmission of educational attainment. Then, there is a detailed description of the methodology used and the rationale behind the same. Next, the results of the different statistical analyzes performed are presented. And finally, the results are summarized in the discussion and conclusions sections, relating them to the initial hypotheses and to previous studies on the subject.

BACKGROUND INFORMATION

According to empirical evidence, children and adolescents whose parents are divorced or separated tend to have more difficulty in acquiring sound physical and mental health habits and tend to display lower educational performance as compared to their peers from intact families (Amato, 1994; Flaquer, 2014). However, the results of past studies suggest that divorce has a relatively small impact on cognitive ability, although it does significantly affect educational achievement (Bernardi and Boertien, 2016; Lee and McLanahan, 2015; McLanahan, Tach, and Schneider, 2013). Therefore, children of divorced parents tend to earn lower grades (Grätz, 2015; Mandemakers and Kalmijn, 2014), display worse levels of school commitment (Havermans, Botterman and Matthijs, 2014) and attain lower educational levels at the end of their educational careers, as compared to their counterparts growing up in intact families (Bernardi and Radl, 2014). In Spain, evidence suggests that children from divorced families are at a greater disadvantage in terms of short-term education (Escapa, 2017). However, except for a study by Bernardi and Comolli (2019), there is virtually no evidence of the implications of divorce on long-term educational achievement.

The literature has highlighted certain nuances of these results. For example, McLanahan, Tach, and Schneider (2013) questioned whether associations between divorce and educational attainment may reflect causal effects or if they reflect the effects of other socioeconomic disadvantages that may have preceded the divorce. Thus, the negative relationship found between parental divorce and children's school performance may be a selection effect. Piketty (2003) found that it is not the divorce itself that leads to lower educational achievement in children, but the pre-existing disadvantages of the family (for example, more conflict between parents) or the children (such as lower cognitive ability).

Based on these studies, three explanatory mechanisms have been identified with respect to how divorce affects the wellbeing of children and adolescents. First, divorce tends to lead to economic precariousness, given that the household is left with only one economic provider. Analyses have shown that divorced families have fewer financial resources to invest in their children than nuclear families (Mortelmans, 2020). Second, divorce interrupts the family routine, reducing the time, resources, and social capital devoted to children and thus affecting their psychological well-being (Amato, 2010; Härkönen, Bernardi, and Boertien, 2017). Finally, the level of conflict between parents after the separation and the absence of one of the same has also been found to affect the quality of parenting and stress experienced by the child or adolescent, in addition to their academic development and performance (Fomby and Osborne, 2017; Sigle-Rushton and McLanahan, 2004).

It is also possible that the relationship between parental breakup and educational achievement will vary depending on the children's age at the time of the divorce. Experiencing parental separation during early childhood may have negative consequences, given that fundamental emo-

tional, social, and personal developments take place during this period (Cavanagh and Huston, 2008; Laird, Nielsen and Nielsen, 2020). Material deprivation during early childhood may relate to poor cognitive development in children, due to a reduced income and less investment of time and capital in children and adolescents (Almqvist and Brännström, 2018; Duncan *et al.*, 2012; Heckman, 2006). Along these lines, Amato (2001) confirmed that divorce may affect the academic performance of primary school students more negatively than secondary school students. Jaynes (2002) also found that most studies reveal a more negative effect on children when the divorce takes place early in childhood. Other studies have suggested that family instability during the early childhood years may be negatively associated with the possibility of obtaining a university education as an adult (Cavanagh and Fomby, 2019; Fomby, 2013).

Other authors have suggested that children develop critical social skills during adolescence. Therefore, parental divorce during this stage may have adverse effects on the development of basic skills such as sociability (Cavanagh and Huston, 2008; Laird, Nielsen and Nielsen, 2020). Lansford (2009) postulated that divorce may negatively affect adolescents given the relevance of academic performance during this life stage, in terms of life and work trajectories. In contrast, Sigle-Rushton *et al.* (2014) found no penalization relating the time of exposure to divorce on children's educational performance. The following hypothesis was proposed, based on the available evidence:

H1: Divorce will penalize the attainment of university studies during adulthood in children experiencing parental breakup during early childhood or adolescence.

An increasing number of studies have suggested the need to examine how the association between divorce and academic attainment varies depending on socioeco-

nomical group. Overall, the evidence on the differential incidence of divorce on children's educational attainment based on parental socioeconomic status has been mixed. Although some studies have found that socioeconomically advantaged families are able to protect their children from the negative consequences of parental separation (Amato and Anthony, 2014; Augustine, 2014; Grätz, 2015), others have shown opposite results (Nilsen *et al.*, 2020). However, when considering educational achievement, specifically the attainment of university education, the evidence suggests a more negative incidence in children from families of high socioeconomic levels (Bernardi and Boertien, 2017). There are two potential explanations for this:

On the one hand, the compensatory class hypothesis postulates that mothers with a high education level have more economic, cultural, and relational resources to protect their children from the negative consequences of growing up in a divorced family (Bernardi and Radl, 2014). On the other hand, the floor effect hypothesis maintains that children of mothers with a lower education level will be less vulnerable to the negative effects of divorce, since they are at lower risk of downward social mobility given that they already begin at a lower social level (Bernardi and Radl, 2014; Härkönen, Bernardi and Boertien, 2017). For children of a low social level, the chances of achieving a higher educational level are already relatively low; therefore, experiencing an additional negative effect from divorce is less likely. The effects of parental divorce may, however, depend on the educational outcomes considered (Bernardi and Comolli, 2019). For example, Guetto and Panichella (2019) examined the risk of school dropout, finding that the divorce penalty is more significant for children of parents with low education levels. On the contrary, when considering the possibilities of attaining university studies, they found that children of parents

with higher education levels tend to be the most negatively affected. Given the available evidence, the following hypothesis has been proposed:

H2: The negative association between parental divorce during childhood and the attainment of university education as an adult is more significant in children of parents with high education levels.

The Spanish context

Studies on the effects of parental divorce on children's educational performance have tended to focus on the US and northern European countries. Evidence on this topic from southern European countries is quite limited (Albertini and Dronkers, 2009; Escapa, 2017). Differences between these countries are numerous in terms of education system, labor market and family policies (Esping-Andersen and Billari, 2015; Härkönen and Dronkers, 2006). For example, in Spain the first Divorce Law was approved in 1932 during the Second Spanish Republic, but was abolished in 1939, with the arrival of the Franco dictatorship. However, since 1981, and especially after 2005, various legislative reforms have granted families rights in the areas of divorce, same-sex marriage, paternity, parental responsibilities, child custody and support, common-law partnerships, adoption, and child protection (OECD, 2022).

Spain has experienced a remarkable increase in number of divorces, recently reaching levels similar to those of central and northern Europe countries. It has seen increases in divorce rate from 0.3 in 1981 to 1.9 in 2019 (Eurostat, 2021a). Regarding the educational gradient of divorce, Bernardi and Martínez-Pastor (2011) found that, for the first cohorts following the approval of the Divorce Law of 1981, a positive correlation existed between education and divorce. During the subsequent decades, however,

when marital dissolution became socially and financially less costly, the correlation between education and divorce in Spain ceased to exist.

Regarding educational matters, transformations in Spain began during the second half of the 20th century, crystallizing over the past quarter of a century. As for higher education studies, individuals holding a university degree increased from 5 % in 1981 to 19.2 % in 2011 (Gimeno and Callejo, 2014). Currently, 54 % of women aged 25-34 had a higher education degree in 2020, as compared to 41 % of men (OECD, 2021). Furthermore, during the Spanish transition to democracy, the General Education Law (LGE) and Organic Law regulating the right to education (LODE) declared education to be a public service, enabling it to be generalized. Thus, early childhood education is a free and public option for children aged 3 to 6. Primary education covers a 6-year period (from 6 to 12 years of age) and lower secondary education spans an additional 4 years, at which point compulsory education ends. Upper secondary education (Baccalaureate or Intermediate Vocational Training) lasts for two years and provides access to tertiary education, which includes both academic and professional pathways (Higher Vocational Training, Diploma, Bachelor's, Master's or Doctorate degrees). Of those accessing upper secondary education, the majority also attend university. Therefore, Spain has a high rate of individuals with lower secondary education, as well as a high level of university graduates, as compared to other OECD countries (OECD, 2021).

Finally, in Spain, the influence of social origin on the educational trajectories of children is of special interest. Empirical evidence has confirmed that Spain is one of the countries with the largest inequality of opportunities in Europe, and in which parental education level is highly relevant in explaining children's socioeconomic achieve-

ments (Brunori, Hufe, and Mahler, 2018). Therefore, an improved understanding of the links between parental divorce, parental education, and the attainment of university studies by their children could offer useful information to the study of intergenerational transmission of educational inequalities.

METHODS AND DATA

The empirical analysis performed in this study was based on ESGE data from 2013, 2015 and 2017, conducted by the CIS. We used the ESGE database given that it provides specific information on educational outcomes and parental characteristics (such as education and marital history). After unifying the three ESGE waves, the original sample contained approximately 15,700 observations². We then restricted the sample to respondents born after 1965, that is, those who were 16 or younger in 1981, to limit the selected group to parents divorcing after the passage of the 1981 Divorce Act. Furthermore, the sample was limited to individuals aged 25 years or older at the time of the interview. Finally, after eliminating missing values of the dependent and independent variables, the final ESGE sample included 6047 respondents born between 1965 and 1992 (aged 25 to 52 at the time of the interview), of which 285 experienced parental breakup (4.7 % of the sample).

Variables

The dependent variable is the attainment of a university education, which serves

as a marker of socioeconomic opportunities throughout life, since the benefits of a higher education level extend not only to a higher income and more secure employment, but also to a better state of health and higher life satisfaction. To measure the education result, a dummy variable was used, granted a value of 1 for respondents aged 25 to 52 with a university education (completed university studies) and 0 for the remaining lower education levels. As for the key independent variable, parental divorce, it was operationalized as a dummy variable, given the value of 1 if the parents separated/divorced at or before the age of 16 and 0 if they did not divorce. We also created a categorical variable where we present the age ranges during which children experienced their parents' divorce: 0-5 years (early childhood), 6-11 years (middle childhood), and 12-16 years (late childhood or adolescence).

The socioeconomic origin variable was measured using two indicators: the highest education level reached by the father or mother and the mother's education when the respondent was 16 years old. For parental education, a categorical variable was created, consisting of low level (1st stage secondary education or lower), medium level (2nd stage secondary education) and high level (university education). For the mother's education, a variable with the same three levels was created. The analysis was performed using both versions of education background information. The former allows us to observe the influence of parental upbringing when focusing on families subject to divorce, while the latter allows us to analyze children who never lived with their father. Parental education was used as an indicator of socioeconomic status for two main reasons. First, because it is a much more reliable predictor of children's educational outcomes than parental occupational social class; and second, because this socioeconomic indicator pro-

² The inclusion of the three surveys served to increase the number of cases in the sample of individuals experiencing the divorce of their parents during childhood. Low sample size is a limitation of various studies analyzing the association between divorce and educational achievement of children when reaching adulthood (see Bernardi and Comolli, 2019; Guetto, Bernardi and Zanasi, 2022).

vides greater comparability between countries, cohorts and studies than occupational indicators (Barone and Ruggera, 2018).

The additional control variables included in the models are characteristic of studies on education. A series of basic socio-demographic variables were controlled for, including age, since educational level varies throughout the cohorts; gender, since school performance tends to be higher for girls than for boys (DiPrete and Buchmann, 2013); and nationality, since immigrants tend to have a larger educational disadvantage than natives. Furthermore, the presence of siblings in the childhood home was also included as a control variable, since it has been found to be one of the most important predictors of long-term educational achievement (Cabrera *et al.*, 2021). We also controlled for parental employment when the respondent was 16 years old, since parental employment status may be associated with both time spent with children and disposable household income. And the Autonomous Community of residence variable was also controlled for, given that in Spain, university attendance rates vary notably between autonomous communities (Eurostat, 2021b). Finally, survey year was also a control variable. The distribution of these variables is presented in Table 1.

Empirical strategy

The empirical analysis was carried out in several phases. The first phase consisted of a descriptive analysis of the selected variables, revealing the frequency of parental divorce and educational attainment based on socioeconomic origin. The second phase used linear probability models (hereinafter LPM) to examine the relationship between parental divorce and children's education attainment. The LPMs were estimated with robust standard errors, and were clustered by Autonomous Community, to correct for

heteroscedasticity. The third phase was specified as follows:

$$e.univ = \beta_0 + \beta_1 educpad_i + \beta_2 divpad_i + \beta_3 educpad_i * divpad_i + \beta_4 X_i + e_i \quad (1)$$

In equation (1), for each individual i , we estimated the penalty for divorce on attainment of university education ($e.univ$) based on parental education level, through the inclusion of an interaction term between parental divorce ($divpad$) and parental education ($educpad$). The model had a set of control variables X_i (previously detailed).

Linear probability models, as opposed to logit models, were used, for practical and theoretical reasons. In practical terms, we considered that the coefficients of linear probability models are close to the marginal effects of the logit model. And when using linear probability models, the interpretation of the interactions is easier and coefficients between models may be compared (Mood, 2010). Thus, we tested whether and how the relationship between divorce and educational attainment is moderated by parental socioeconomic status. Finally, the results of the interactions are presented graphically based on differences in the probability of attaining university education between individuals experiencing the divorce of their parents and those who did not.

RESULTS

Table 1 presents the distribution of the variables used in the analysis of intact and divorced families. For the dependent variable, we found that the attainment of university studies is lower in adults who experienced parental divorce in childhood (27 %), as compared to their counterparts who grew up with both parents in the household (32 %). Regarding the independent variables, divorced parents are found to have a higher educational level than parents from

intact families. Furthermore, divorced families tend to have considerably younger parents (35 years) as compared to parents in the intact families (38 years). It is also interesting to note that, among divorced mothers, 81 % were active in the labor market when the respondent was 16 years old. Finally, the presence of siblings in the childhood home is significantly higher in households containing both parents (90 %), as compared to the divorced families (67 %).

Table 2 reveals the differences in the frequency of parental divorce based on the highest education level achieved by the parents and the mother's education. The proportion of divorces/separations in the sample is higher for parents with a high education level. These data suggest that the educational gradient of divorce in Spain for parents of children born between 1965 and 1992 is positive. Approximately 7.9-10.0 % of children with college-educated parents separated as compared to 3.4-3.6 % of children with lower-educated parents. Similarly, the gradient is positive for all respondent age groups at the time of parental breakup. Furthermore, Table 2 presents the distribution of educational attainment of children based on parental education level. The distribution is similar whether examining the education of both parents or that of only the mother, with college attainment rates being much higher for children of highly educated parents (72.2 %), as compared to those of parents with low education levels (21.3 %).

Table 3 below presents an overall view of the association between parental divorce and the probability of attaining a university education. According to the results of models 1 and 3, after controlling for all other sociodemographic characteristics, children with divorced parents are 12.5 percentage points (pp) less likely to earn a college degree than those growing up in an intact family. However, the divorce penalty is not distributed in the same manner, depending

on the respondent's age at the time of the parental breakup. Table 4 (models 1 and 3) reveals that the probability of attaining university studies for children who experienced their parents' divorce between the ages of 0-5 is 16 pp lower, as compared to children from intact families. Likewise, children who experienced the divorce of their parents between the ages of 12 and 16 were 14 pp less likely to earn a university degree than their peers from intact families. Thus, the penalty of divorce on the attainment of university education tends to be concentrated in the periods of early childhood and adolescence.

When considering the problem of intergenerational inequality, we find that the impact of divorce on the children's educational level is much lower than the impact of parental socioeconomic origin. Table 3 (model 1) shows that the probability of attaining university studies for children of parents with a high education level is approximately 51 pp higher than that of the children of parents with a low education level. However, the penalty associated with the parents' separation leads to a reduction of approximately 12 pp in the probability of attaining a university education. Thus, the association size between children's educational outcome and divorce is considerably smaller than that between children's educational outcome and parental education³.

To determine the extent to which the effect of divorce on educational outcomes is moderated by parental socioeconomic background, Graph 1 shows the results of the interaction between divorce and parental education. It is evident that the penalty of divorce on the probability of attain-

³ Furthermore, models controlling for a higher parental education level have a greater explanatory power, as compared to models that only consider the mother's education level. This difference may be due to the importance of the father's resources in explaining the child's educational achievement. Although differences exist in the R2 and the coefficients, they are minimal.

ing university education is larger for children of parents with a high education level, approximately 20 pp less, as compared to their counterparts from intact families, who experience a smaller impact. Children of parents with an average or low education level also experience penalties, but they are smaller than those of children whose parents have a high education level. As for the mother's education level, the penalty of divorce on the probability of attaining a university education follows a similar trend in terms of association size and direction. Therefore, divorce results in a larger penalty for attaining university studies in children whose parents have a high socioeconomic status, regardless of the social origin indicator considered.

On the other hand, considering the differences in the consequences of divorce depending on the age when the children experienced the breakup, Graph 2 reveals that the penalty associated with parental divorce is mainly concentrated in the children of parents with high education levels who experienced divorce during early childhood (0 to 5 years) or during adolescence (12-16 years). The gap was substantial in relative terms: the probability of attaining a university education is approximately 30 pp lower for children with highly educated fathers who experienced divorce between the ages of 0 to 5 or 12 to 16, as compared to their peers raised in intact families. Therefore, the penalization of divorce is mainly concentrated in the children of parents with a high socioeconomic status who experienced the family breakup during early childhood or adolescence.

Robustness tests

Finally, several robustness tests were performed. The full results of these tests may be requested from the authors. First, the penalties of divorce on the probability of attaining a university education, according to

parental education level, estimated using logistic regression models, are found to be consistent with the results obtained from the LPMs. In other words, children of parents with a higher educational level are penalized more strongly by the divorce, especially when it takes place during early childhood or adolescence, as compared to their counterparts from intact families. Second, 2.7 % of the participants had missing values for any of the variables considered in the study and, therefore, they were eliminated from the main analysis. To verify that this omission did not influence the results obtained, the analyzes were replicated after applying multiple imputation. Again, the results were quite similar.

DISCUSSION

Over the past decade, exponential growth has taken place in the number of studies considering the effects of divorce during childhood, suggesting a clear association between divorce and the well-being of children (Garriga and Bernardi, 2019; Härkönen, Bernardi and Boertien, 2017). This analysis has been conducted in Spain, where few studies have been performed in this area, considering the association between parental divorce and the attainment of higher education for a cohort born between 1965 and 1992. It considers differences based on age at the time of exposure to divorce and parental socioeconomic background.

The results of our study confirm a negative association between divorce of parents and the attainment of a university education by their children. These results coincide with those of numerous studies that have concluded that divorce has negative effects on academic results (Amato, 1994; Escapa, 2017). However, much of this penalty is concentrated in children who experienced their parents' divorce during early childhood (0-5 years) or adolescence (12-

16 years). These results corroborate with our first hypothesis (*H1*), finding a significant penalty for divorce in educational results when the parental separation occurs during early childhood or adolescence. This evidence supports the findings obtained in other countries such as Denmark (Laird, Nielsen and Nielsen, 2020). Studies carried out in Norway, however, have found no effect of the time of the parents' divorce on the educational results of their children (Sigle-Rushton *et al.*, 2014), in contrast with our findings.

Our results suggest that the effect of divorce on educational achievement follows an inverted U-shaped trend: children experiencing the divorce of their parents when aged 0-5 or 12-16 have a lower probability of attaining a university degree. Several interpretations may be made with respect to these results. On the one hand, parental separation during early childhood may have adverse effects, since fundamental emotional, social and cognitive development takes place in this period (Cavanagh and Huston, 2008; Laird, Nielsen and Nielsen, 2020). Along these lines, several studies have indicated that individuals growing up under adverse childhood conditions (and parental divorce is considered an adverse factor for childhood well-being) are more likely to experience unfavorable education, employment, economic and health trajectories during adulthood (Almquist and Brännström, 2018; Fomby, 2013; Laird, Nielsen and Nielsen, 2020). On the other hand, in Spain, the main gap in educational results occurs during the transition from compulsory to secondary education, which enables access to higher education. This period of basic secondary education is completed between the ages of 12 and 16 and it is the period where educational demands increase. Therefore, a disruptive event in the adolescent's life, such as the divorce of their parents, may be a relevant factor in the child's transition to higher education.

Regarding the heterogeneity of social origin on the penalties of divorce on educational achievement, our results confirm a negative association between parental divorce and the probability of attaining university studies for children of parents with a high education level. These results differ from those of past studies in Spain, which have suggested that the penalty of divorce on the probability of enrolling in university is practically non-existent in all social strata (Bernardi and Comolli, 2019). However, our estimates of the negative effect of divorce on the probability of attaining university studies for children of a high socioeconomic status are similar to those obtained in previous international studies (for the European and American context, see Guetto, Bernardi and Zanasi, 2022).

These results confirm our hypothesis 2, since the parents' divorce does not appear to represent an additional source of disadvantage to already vulnerable social groups, as is the case with children of parents with a low socioeconomic status. On the contrary, the divorce penalization is found to "equalizes downward", decreasing the educational advantages of children of high socioeconomic statuses. This is because following the parents' breakup, children from wealthier families lose some of the economic resources that contributed to their better socioeconomic results (Bernardi and Boertien, 2016). However, it should be considered that children of highly educated parents continue to be better positioned as compared to their peers with a lower socioeconomic status, even in the case of parental divorce. Other mechanisms, however, may be relevant in explaining the larger penalty for divorce in children of parents with higher education levels. For example, mothers with high socioeconomic status who divorce appear to be less likely to pass on their educational advantages to their children as compared to their non-divorced counterparts. This may be due to the "double burden" experienced, from

work pressure and parenting responsibilities (Nilsen *et al.*, 2020).

Certain limitations of our study should be mentioned. First, our cohort was from 1965 to 1992; therefore, our analyzes do not consider the current changes taking place in Spanish families over recent decades. Several studies of the Spanish case have shown that the likelihood of divorce, the main source of single parenthood in Spain, is higher for mothers having lower education levels (Garriga and Cortina, 2017). It should also be noted that, for the cohort used in our analysis, the educational gradient of divorce continued to be positive. Thus, these analyzes should be replicated using more recent cohorts, in which the frequency of divorce has evolved from being higher in mothers with high education levels to being more concentrated among women with low education levels (Bernardi and Martínez-Pastor, 2011; Garriga and Cortina, 2017). Second, although we have used the terms “effects” or “consequences”, demonstrating that divorce has a causal effect on the children’s educational outcomes is a complex and imprecise task. Unobserved family characteristics (such as conflict between parents, loss of income associated with separation, or level of stress) may help explain both the occurrence of divorce and the lower educational performance of children in post-breakup situations. Because we do not have variables allowing us to examine these causal mechanisms, we may be overestimating the negative effect of divorce on the attainment of university studies.

In conclusion, this study has revealed that experiencing parental divorce during early childhood or adolescence is associated with lower educational attainment in children in Spain, especially in the case of children of parents with a high socioeconomic status. The political implications of this study are quite evident, highlighting the need for public policies for children and youth that are committed to equal opportunities, and that con-

sider how child-rearing agreements after divorce, work-life balance policies and income and employment support measures may reduce the risk of socio-economic deprivation associated with divorce. In short, this article opens potential lines of research within the Spanish context, where the literature on family and reproduction of inequality throughout the life trajectories of children and adolescents is quite scarce, mainly due to the limited availability of longitudinal data sources.

BIBLIOGRAPHY

- Albertini, Marco and Dronkers, Jaap (2009). “Effects of Divorce on Children’s Educational Attainment in a Mediterranean and Catholic Society Evidence From Italy”. *European Societies*, 11(1): 137-159. doi: 10.1080/14616690802248042
- Almqvist, Ylva B. and Brännström, Lars (2018). “Childhood Adversity and Trajectories of Disadvantage Through Adulthood: Findings from the Stockholm Birth Cohort Study”. *Social Indicators Research*, 136(1): 225-245. doi: 10.1007/s11205-016-1528-6
- Amato, Paul R. (1994). “Life-Span Adjustment of Children to Their Parents’ Divorce”. *The Future of Children*, 4(1): 143-164. doi: 10.2307/1602482
- Amato, Paul R. (2000). “The Consequences of Divorce for Adults and Children”. *Journal of Marriage and Family*, 62(4): 1269-1287. doi: 10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x
- Amato, Paul R. (2001). “Children of Divorce in the 1990s: An Update of the Amato and Keith (1991) Meta-Analysis”. *Journal of Family Psychology*, 15(3): 355-370. doi: 10.1037/0893-3200.15.3.355
- Amato, Paul R. (2010). “Research on Divorce: Continuing Trends and New Developments”. *Journal of Marriage and Family*, 72(3): 650-666. doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x
- Amato, Paul R. and Anthony, Christopher J. (2014). “Estimating the Effects of Parental Divorce and Death With Fixed Effects Models: Parental Divorce and Death”. *Journal of Marriage and Family*, 76(2): 370-386. doi: 10.1111/jomf.12100
- Augustine, Jennifer M. (2014). “Maternal Education and the Unequal Significance of Family Structure for Children’s Early Achievement”. *Social Forces*, 93(2): 687-718. doi: 10.1093/sf/sou072

- Barone, Carlo and Ruggera, Lucia (2018). "Educational Equalization Stalled? Trends in Inequality of Educational Opportunity between 1930 and 1980 across 26 European Nations". *European Societies*, 20(1): 1-25. doi: 10.1080/14616696.2017.1290265
- Bernardi, Fabrizio and Martínez-Pastor, Juan-Ignacio (2011). "Divorce Risk Factors and Their Variation over Time in Spain". *Demographic Research*, 24: 771-800. doi: 10.4054/DemRes.2011.24.31
- Bernardi, Fabrizio and Radl, Jonas (2014). "The Long-term Consequences of Parental Divorce for Children's Educational Attainment". *Demographic Research*, 30: 1653-1680. doi: 10.4054/DemRes.2014.30.61
- Bernardi, Fabrizio and Boertien, Diederik (2016). "Understanding Heterogeneity in the Effects of Parental Separation on Educational Attainment in Britain: Do Children from Lower Educational Backgrounds Have Less to Lose?". *European Sociological Review*, 32(6): 807-819. doi: 10.1093/esr/jcw036
- Bernardi, Fabrizio and Boertien, Diederik (2017). "Non-intact Families and Diverging Educational Destinies: A Decomposition Analysis for Germany, Italy, the United Kingdom and the United States". *Social Science Research*, 63: 181-191. doi: 10.1016/j.ssresearch.2016.09.004
- Bernardi, Fabrizio and Comolli, Chiara L.C. (2019). "Parental Separation and Children's Educational Attainment: Heterogeneity and Rare and Common Educational Outcomes". *Zeitschrift Für Familienforschung*, 31(1): 3-26. doi: 10.3224/zff.v31i1.01
- Brand, Jennie E.; Moore, Ravaris; Song, Xi and Xie, Yu (2019). "Parental Divorce Is Not Uniformly Disruptive to Children's Educational Attainment". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(15): 7266-7271. doi: 10.1073/pnas.1813049116
- Brunori, Paolo; Hufe, Paul and Mahler, Daniel G. (2018). *The Roots of Inequality: Estimating Inequality of Opportunity from Regression Trees* [Working Paper 8349]. World Bank. doi: 10.1596/1813-9450-8349
- Cabrera, Leopoldo; Marrero, Gustavo A.; Rodríguez, Juan G. and Salas-Rojo, Pedro (2021). "Inequality of Opportunity in Spain: New Insights from New Data". *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 237(2): 153-185.
- Cavanagh, Shannon E. and Huston, Aletha C. (2008). "The Timing of Family Instability and Children's Social Development". *Journal of Marriage and Family*, 70(5): 1258-1270. doi: 10.1111/j.1741-3737.2008.00564.x
- Cavanagh, Shannon E. and Fomby, Paula (2019). "Family Instability in the Lives of American Children". *Annual Review of Sociology*, 45(1): 493-513. doi: 10.1146/annurev-soc-073018-022633
- DiPrete, Thomas A. and Buchmann, Claudia (2013). *Rise of Women, The: The Growing Gender Gap in Education and What it Means for American Schools*. New York: Russell Sage Foundation.
- Duncan, Greg J.; Magnuson, Katherine; Kalil, Ariel and Ziol-Guest, Kathleen (2012). "The Importance of Early Childhood Poverty". *Social Indicators Research*, 108(1): 87-98. doi: 10.1007/s11205-011-9867-9
- Escapa, Sandra (2017). "Effects of Post-Divorce Parental Conflict on Children's Educational Achievement"/"Los efectos del conflicto parental después del divorcio sobre el rendimiento educativo de los hijos". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 158: 41-58. doi: 10.5477/cis/reis.158.41
- Esping-Andersen, Gösta and Billari, Francesco C. (2015). "Re-theorizing Family Demographics". *Population and Development Review*, 41(1): 1-31. doi: 10.1111/j.1728-4457.2015.00024.x
- Eurostat (2021a). *Divorce Indicators*. Available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_ndivind&lang=en, access February 1, 2022.
- Eurostat (2021b). *Population by Educational Attainment Level, Sex and NUTS 2 Regions (%)*. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data-browser/view/edat_ifse_04/default/bar?lang=en, access September 8, 2022.
- Flaquer, Lluís (2014). Family-related Factors Influencing Child Well-being. In: A. Ben-Arieh; F. Casas; I. Frønes and J. E. Korbin (eds.). *Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective* (pp. 2229-2255). Springer. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_87
- Fomby, Paula (2013). "Family Instability and College Enrollment and Completion". *Population Research and Policy Review*, 32(4): 469-494. doi: 10.1007/s11113-013-9284-7
- Fomby, Paula and Osborne, Cynthia (2017). "Family Instability, Multipartner Fertility, and Behavior in Middle Childhood: Instability, Multipartner Fertility, and Behavior". *Journal of Marriage and Family*, 79(1): 75-93. doi: 10.1111/jomf.12349
- Garriga, Anna and Cortina, Clara (2017). "The Change in Single Mothers' Educational Gradient over Time in Spain". *Demographic Research*, 36: 1859-1884. doi: 10.4054/DemRes.2017.36.61

- Garriga, Anna and Bernardi, Laura (2019). "Custody Arrangements and Social Inequalities among Children". *Revue des Politiques Sociales et Familiales*, 131(1): 203-217. doi: 10.3406/caf.2019.3360
- Gimeno, Rubén M. and Callejo, Carlos B. (2014). "La evolución de la importancia del capital escolar en la clase obrera". *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 7(2): 373-394. doi: 10.7203/RASE.7.2.8777
- Grätz, Michael (2015). "When Growing Up Without a Parent Does Not Hurt: Parental Separation and the Compensatory Effect of Social Origin". *European Sociological Review*, 31(5): 546-557. doi: 10.1093/esr/jcv057
- Guetto, Raffaele and Panichella, Nazareno (2019). "Family Arrangements and Children's Educational Outcomes: Heterogeneous Penalties in Upper-secondary School". *Demographic Research*, 40: 1015-1046. doi: 10.4054/DemRes.2019.40.35
- Guetto, Raffaele; Bernardi, Fabrizio and Zanasi, Francesca (2022). "Parental Education, Divorce, and Children's Educational Attainment: Evidence from a Comparative Analysis". *Demographic Research*, 46: 65-96. doi: 10.4054/DemRes.2022.46.3
- Härkönen, Juho and Dronkers, Jaap (2006). "Stability and Change in the Educational Gradient of Divorce. A Comparison of Seventeen Countries". *European Sociological Review*, 22(5): 501-517.
- Härkönen, Juho; Bernardi, Fabrizio and Boertien, Diederik (2017). "Family Dynamics and Child Outcomes: An Overview of Research and Open Questions". *European Journal of Population*, 33(2): 163-184. doi: 10.1007/s10680-017-9424-6
- Havermans, Nele; Botterman, Sarah and Matthijs, Koen (2014). "Family Resources as Mediators in the Relation between Divorce and Children's School Engagement". *The Social Science Journal*, 51(4): 564-579. doi: 10.1016/j.soscij.2014.04.001
- Heckman, James J. (2006). "Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children". *Science*, 312. doi: 10.1126/science.1128898
- Jeynes, William (2002). *Divorce, Family Structure, and the Academic Success of Children*. New York: Routledge.
- Laird, Jessica; Nielsen, Nick F. and Nielsen, Torben H. (2020). *Differential Effects of the Timing of Divorce on Children's Outcomes: Evidence from Denmark* [Working Paper 3567651]. doi: 10.2139/ssrn.3567651
- Lansford, Jennifer E. (2009). "Parental Divorce and Children's Adjustment". *Perspectives on Psychological Science*, 4(2): 140-152. doi: 10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x
- Lee, Dohoon and McLanahan, Sara (2015). "Family Structure Transitions and Child Development: Instability, Selection, and Population Heterogeneity". *American Sociological Review*, 80(4): 738-763. doi: 10.1177/0003122415592129
- Lesthaeghe, Ron (2010). "The Unfolding Story of the Second Demographic Transition". *Population and Development Review*, 36(2): 211-251. doi: 10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x
- Mandemakers, Jornt J. and Kalmijn, Matthijs (2014). "Do Mother's and Father's Education Condition the Impact of Parental Divorce on Child Well-being?". *Social Science Research*, 44: 187-199. doi: 10.1016/j.ssresearch.2013.12.003
- Martin, Molly A. (2012). "Family Structure and the Intergenerational Transmission of Educational Advantage". *Social Science Research*, 41(1): 33-47. doi: 10.1016/j.ssresearch.2011.07.005
- McLanahan, Sara (2004). "Diverging Destinies: How Children Are Faring under the Second Demographic Transition". *Demography*, 41(4): 607-627. doi: 10.1353/dem.2004.0033
- McLanahan, Sara and Percheski, Christine (2008). "Family Structure and the Reproduction of Inequalities". *Annual Review of Sociology*, 34(1): 257-276. doi: 10.1146/annurev.soc.34.040507.134549
- McLanahan, Sara; Tach, Laura and Schneider, Daniel (2013). "The Causal Effects of Father Absence". *Annual Review of Sociology*, 39(1): 399-427. doi: 10.1146/annurev-soc-071312-145704
- Mood, Carina (2010). "Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do About It". *European Sociological Review*, 26(1): 67-82. doi: 10.1093/esr/jcp006
- Mortelmans, Dimitri (2020). Economic Consequences of Divorce: A Review. In: M. Kreyenfeld and H. Trappe (eds.). *Parental Life Courses after Separation and Divorce in Europe* (pp. 23-41). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-030-44575-1_2
- Nilsen, Sondre A.; Breivik, Kyrre; Wold, Bente; Askeland, Kristin G.; Sivertsen, Børge; Hysing, Mari and Bøe, Tormod (2020). "Divorce and Adolescent Academic Achievement: Heterogeneity in the Associations by Parental Education". *PLOS ONE*, 15(3): doi: 10.1371/journal.pone.0229183

- OECD (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>
- OECD (2022). *Evolving Family Models in Spain: A New National Framework for Improved Support and Protection for Families*. OECD Publishing. doi: 10.1787/c27e63ab-en
- Piketty, Thomas (2003). *The Impact of Divorce on School Performance: Evidence from France, 1968-2002*. N.º 4146; CEPR Discussion Papers. Available at: <https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/4146.html>
- Sigle-Rushton, Wendy and McLanahan, Sara (2004). Father Absence and Child Wellbeing: A Critical Review. In: D. P. Moynihan; L. Rainwater and T. Smeeding (eds.). *The Future of the Family* (pp. 116-155). Russell Sage Foundation. Available at: <http://www.russellsage.org>
- Sigle-Rushton, Wendy; Lyngstad, Torkild H.; Andersen, Patrick L. and Kravdal, Øystein (2014). "Proceed With Caution? Parents' Union Dissolution and Children's Educational Achievement: Union Dissolution and Children's Achievements". *Journal of Marriage and Family*, 76(1): 161-174. doi: 10.1111/jomf.12075

RECEPTION: March 24, 2022

REVIEW: June 28, 2022

ACCEPTANCE: October 26, 2022

ANNEXES

TABLE 1. Descriptions of the variables included in the analysis for the 1965-1992 cohort (%)

Independent variables	Intact families	Divorced families
Sex		
Male	50.8	45.2
Female	49.2	54.8
Mean age of surveyed	38.7	35.6
Nationality		
Spanish	89.2	75.4
Other nationality	10.8	24.6
Mother's education level		
High level	7.2	16.5
Average level	11.3	22.6
Low level	81.4	60.9
Highest education level of father or mother		
High level	14.0	24.6
Average level	17.6	26.9
Low level	68.4	48.6
Employment situation of mother when surveyed was 16 years old		
Unemployed	52.8	18.9
Employed	47.2	81.1
Employment situation of father when surveyed was 16 years old		
Unemployed	5.0	7.6
Employed	95.0	92.4
Presence of siblings when surveyed was 16 years old		
No siblings	9.3	32.4
Siblings	90.7	67.6
Age of surveyed at time of parents' divorce		
0-5 years old	—	28.8
6-11 years old	—	38.2
12-16 years old	—	33.0
Dependent variable		
Attain university studies	32.6	27.0
Total observations	5,762	285

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

TABLE 2. *Divorce of parents and educational achievement according to parental education level*

	Divorce of parents (0-16)		Attainment of university studies			
	N	%	N	%		
Highest education level of father or mother						
Low level	140	3.4	871	21.3		
Average level	76	7.0	454	42.0		
High level	69	7.9	630	72.2		
Total	285		1955			
Mother's education level						
Low level	174	3.6	1234	25.2		
Average level	65	9.3	372	53.1		
High level alto	46	10.0	349	76.0		
Total	285		1955			
Age at time of separation /divorce of parents						
	0-5 years		6-11 years		12-16 years	
	N	%	N	%	N	%
Highest education level of father or mother						
Low level	37	0.9	49	1.2	54	1.3
Average level	23	2.1	33	3.1	20	1.9
High level	22	2.5	27	3.1	20	2.3
Total	82		109		94	
Mother's education level						
Low level	48	1.0	59	1.2	67	1.4
Average level	21	3.0	30	4.3	14	2.0
High level	13	2.8	20	4.4	13	2.8
Total	82		109		94	

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

TABLE 3. Results of linear probability models that predict educational attainment, based on divorce and parental education

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Intercept	0.301*** (0.027)	0.301*** (0.027)	0.258*** (0.027)	0.257*** (0.028)
<i>Divorce of parents (Ref. Intact)</i>				
Divorce of parents 0-16 years	-0.124*** (0.023)	-0.111*** (0.018)	-0.127*** (0.022)	-0.122*** (0.018)
<i>Mother's education level (Ref. Low level)</i>				
High level	0.515*** (0.023)	0.522*** (0.023)		
Average level	0.285*** (0.017)	0.285*** (0.019)		
High level*Divorce of parents		-0.075 (0.059)		
Average level*Divorce of parents		-0.004 (0.057)		
<i>Highest education level of father or mother (Ref. Low level)</i>				
High level			0.507*** (0.023)	0.515*** (0.023)
Average level			0.204*** (0.026)	0.199*** (0.026)
High level*Divorce of parents				-0.100 (0.075)
Average level*Divorce of parents				0.074* (0.038)
Observations	6,047	6,047	6,047	6,047
R ²	0.139	0.139	0.180	0.180

Note: Control variables include nationality, age, gender, Autonomous Community, survey year, whether they have siblings and whether the father/mother worked when the respondent was 16 years old. Robust standard errors are shown in parentheses. * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

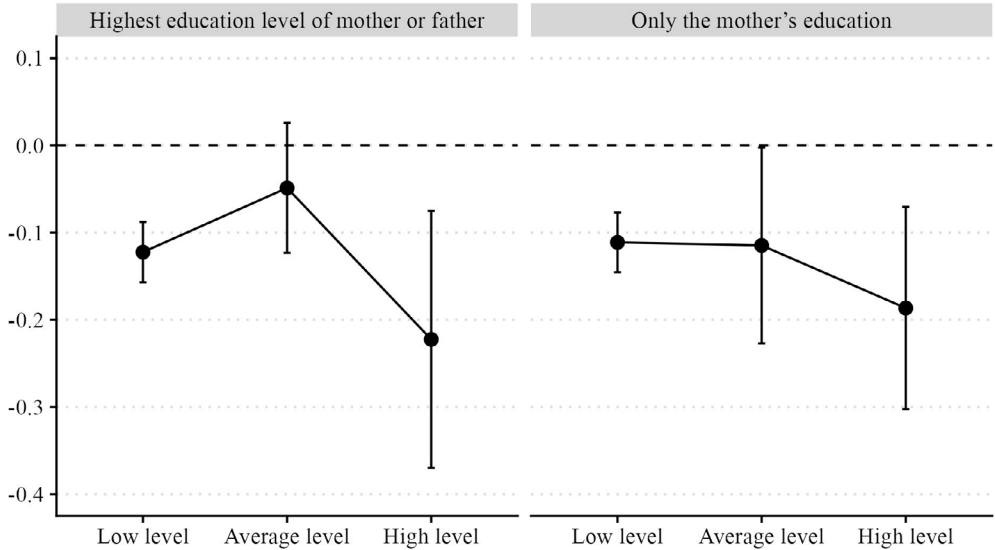
TABLE 4. Results of linear probability models predicting educational attainment, based on time of parental divorce and parental education

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Intercept	0.301*** (0.027)	0.300*** (0.026)	0.258*** (0.027)	0.257*** (0.027)
<i>Parents' divorce (Ref. Intact)</i>				
Divorce 0-5 years of age	-0.165*** (0.042)	-0.106 (0.065)	-0.176*** (0.034)	-0.120** (0.053)
Divorce 6-11 years of age	-0.078** (0.037)	-0.088* (0.044)	-0.072* (0.041)	-0.095** (0.040)
Divorce 12-16 years of age	-0.143*** (0.032)	-0.135*** (0.035)	-0.151*** (0.031)	-0.148** (0.025)
<i>Mother's education level (Ref. Low level)</i>				
High level	0.515*** (0.023)	0.523*** (0.023)		
Average level	0.285*** (0.018)	0.285*** (0.019)		
High level*Divorce 0-5 years		-0.202 (0.149)		
Average level*Divorce 0-5 years		-0.103 (0.100)		
High level*Divorce 6-11 years		0.023 (0.129)		
Average level*Divorce 6-11 years		0.019 (0.108)		
High level*Divorce 12-16 years		-0.116 (0.140)		
Average level*Divorce 12-16 years		0.061 (0.151)		
<i>Highest education level of father or mother (Ref. Low level)</i>				
High level			0.507*** (0.023)	0.515*** (0.023)
Average level			0.204*** (0.026)	0.199*** (0.026)
High level*Divorce 0-5 years				-0.186* (0.096)
Average level*Divorce 0-5 years				-0.022 (0.126)
High level*Divorce 6-11 years				-0.035 (0.132)
Average level*Divorce 6-11 years				0.100 (0.069)
High level*Divorce 12-16 years				-0.113 (0.120)
Average level*Divorce 12-16 years				0.114 (0.125)
Observations	6,047	6,047	6,047	6,047
R ²	0.139	0.139	0.180	0.181

Note: Control variables include nationality, age, gender, Autonomous Community, survey year, whether they have siblings and whether the father/mother worked when the respondent was 16 years old. Robust standard errors are shown in parentheses. * p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

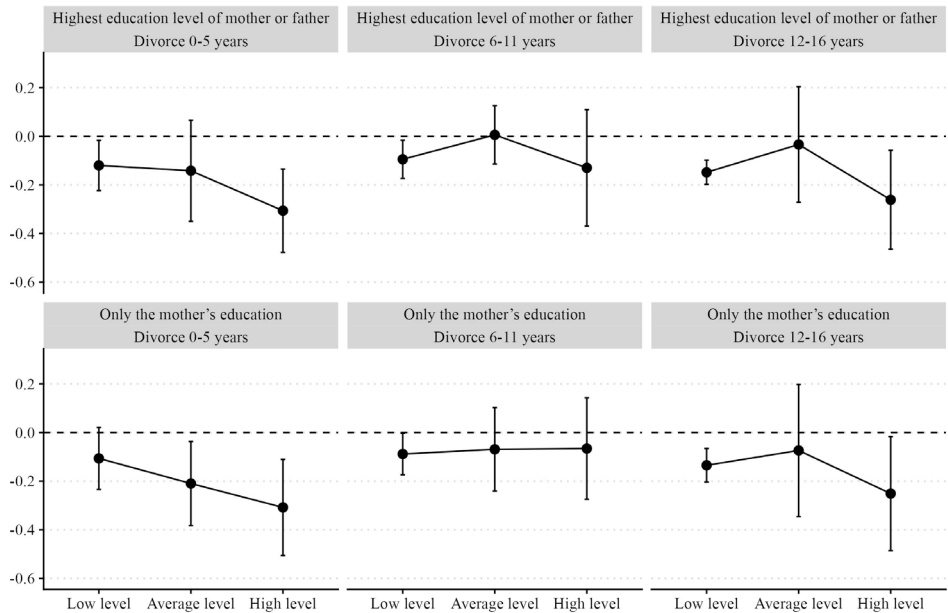
GRAPH 1. Penalization of divorce on the probability of attaining university education, based on parent's education



Note: 95 % CI. Results of the interactions included in the linear probability models from Table 3. Reference category: Intact family.

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

GRAPH 2. Penalty based on time of parents' breakup in terms of probability of attaining a university education, based on parental education level



Note: 95 % CI. Results of interactions included in the linear probability models of Table 4. Reference category: Intact family.

Source: Author's creation based on ESGE 2013, 2015 and 2017.

La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: una aproximación desde la perspectiva de género

*The Experience of Remote Work during Lockdown in Catalonia:
A Gender Perspective*

Sara Moreno-Colom, Vicent Borràs Català, Irene Cruz Gómez y Sergi Porcel López

Palabras clave

- Categoría laboral
- Ciclo vital
 - Corresponsabilidad
 - Género
 - Teletrabajo
 - Trabajo doméstico
 - Uso del tiempo

Key words

- Job Category
- Life Cycle
 - Co-responsibility
 - Gender
 - Telework
 - Domestic Work
 - Use of Time

Resumen

El objetivo de este artículo es contribuir al debate sobre el impacto de género del teletrabajo, tomando como caso de estudio el confinamiento domiciliario de la población catalana durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. En concreto, se analizan las experiencias y valoraciones acerca del trabajo a distancia de hombres y mujeres a partir de la Encuesta sobre Uso del Tiempo y Confinamiento realizada por el Centre Estudis Opinió. Los resultados indican que la experiencia del trabajo a distancia, lejos de favorecer la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, refuerza la brecha de género en el trabajo reproductivo.

Abstract

The aim of this article is to contribute to the debate on the gender impact of telework, using the home lockdown of the Catalanian population during the first months of the COVID-19 pandemic as a case study. Specifically, men's and women's experiences and evaluations of remote work are analysed based on a survey on time-use during the lockdown conducted by the Centre Estudis Opinió. The results indicate that the experience of remote work, far from fostering co-responsibility in domestic and care work, further reinforced the gender gap in reproductive labour.

Cómo citar

Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Cruz Gómez, Irene; Porcel López, Sergi (2023). «La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: una aproximación desde la perspectiva de género». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 77-100. (doi: 10.5477/cis/reis.183.77)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Sara Moreno-Colom: Universitat Autònoma de Barcelona | sara.moreno@uab.cat

Vicent Borràs Català: Universitat Autònoma de Barcelona | vicent.borras@uab.cat

Irene Cruz Gómez: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | irene.cruz@uab.cat

Sergi Porcel López: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | sergio.porcel@uab.cat

INTRODUCCIÓN

La crisis de la COVID-19 plantea un escenario nuevo donde el teletrabajo emerge como una solución obligada en un contexto de confinamiento donde se funde lo laboral y lo doméstico. La novedad reside en el volumen de personas forzadas a realizar el trabajo remunerado en el hogar utilizando las tecnologías de la información de manera simultánea con la atención de la familia y las actividades del hogar. Esta obligación del teletrabajo en una situación de confinamiento aumenta la carga y el volumen del trabajo doméstico y de cuidados con el cierre de los centros educativos y la imposibilidad de recibir servicios de atención a las personas o el hogar. En esta tesitura, la amplia implantación del trabajo a distancia ofrece una oportunidad inédita para evaluar algunos de sus efectos sobre las relaciones sociales entre hombres y mujeres dentro del hogar.

Más allá de lo obvio, cabe preguntarse por el impacto de género del teletrabajo en una situación de confinamiento que acentúa el carácter simultáneo de la cotidianidad. Una cuestión que, desde la perspectiva de género, parte de las desigualdades existentes para analizar las relaciones de poder y las estrategias cotidianas en la organización de los tiempos de trabajo con el fin de responder a la pregunta: ¿el teletrabajo durante el confinamiento domiciliario refuerza los roles tradicionales de género o la corresponsabilidad? Para dar respuesta a dicha cuestión, se analizan las experiencias y la valoración del trabajo a distancia de hombres y mujeres en Cataluña durante los primeros meses de la pandemia coincidiendo con el cierre de las escuelas. La primera hipótesis plantea que, lejos de favorecer la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, el trabajo a distancia durante el confinamiento domiciliario refuerza los roles tradicionales de género. La segunda hipótesis sugiere que la valoración que las personas hacen del teletrabajo no depende tanto de factores estructurales clásicos

(como el género, la fase del ciclo de vida o la clase social), sino de la experiencia vivida en la organización de las modalidades de trabajo entre los miembros del hogar. El análisis presentado utiliza los datos de la Encuesta sobre usos del tiempo y el confinamiento, realizada por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO)¹.

El artículo se estructura en cuatro apartados. En primer lugar, se presenta el estado de la cuestión acerca del potencial transformador del teletrabajo sobre las relaciones de género, así como el conjunto de estudios realizados sobre el impacto de género de esta modalidad de trabajo en el contexto de la COVID-19. En segundo lugar, se detalla la estrategia metodológica llevada a cabo para, en tercer lugar, presentar los principales resultados obtenidos sobre el caso catalán. Finalmente, el artículo concluye retomando la pregunta inicial acerca del potencial transformador del teletrabajo planteando los riesgos y límites del mismo desde la perspectiva de género.

MARCO TEÓRICO

El debate sobre el potencial transformador del teletrabajo surge con la crisis del petróleo de los años setenta como una solución al conjunto de problemas del momento (Madsen, 2011). Dicha modalidad se identifica con la posibilidad, en tiempos de crisis, de mejorar la productividad, reducir costes y crear nuevas oportunidades laborales. Ejemplos más recientes de la idea del teletrabajo como respuesta se dan con la llamada crisis de los cuidados, cuando se considera una medida que puede facilitar la compaginación del empleo con la atención a las personas dependientes.

En cualquier caso, existe un consenso conceptual sobre la definición de teletrabajo según el Acuerdo Marco Europeo (2002): una

¹ Este análisis forma parte del proyecto «Impacto de Género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo obvio (IGETECO)» financiado por el Fondo Supera Covid-19 Banco Santander-CRUE-CSIC.

forma de organización y/o realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo, que también habría podido realizarse en los locales del empresario, se ejecuta habitualmente fuera de esos locales. Belzunegui (2002) incluye como característica de esta modalidad la flexibilidad del tiempo de trabajo.

Más allá de la definición conceptual y en el marco de la discusión sobre el potencial transformador del teletrabajo, desde la perspectiva de género el interés recae en explicar cómo se distribuyen los trabajos y tiempos dentro del hogar (Mirchandani, 2000; Mayo *et al.*, 2011). Se trata de una aproximación que implica analizar la influencia de las normas de género en las estrategias de organización del tiempo de trabajo remunerado; entender cómo la distribución de las responsabilidades en el ámbito doméstico no responde a decisiones racionales basadas en recursos relativos (Pearse y Connell, 2016); cuestionar la neutralidad de género de las preferencias (Brines, 1994); así como partir del enfoque que explica la división sexual del trabajo relacionando las esferas productiva y reproductiva (Benería, 1981). En resumen, un conjunto de aspectos teóricos que subraya el peso de los valores y las normas socioculturales en la distribución de los trabajos entre mujeres y hombres. Si bien, los roles de género no se entienden como mandatos de comportamiento rígidos e inmutables, sino como expectativas dinámicas, resultantes de procesos de socialización y relaciones entre los géneros. Es en este sentido que West y Zimmerman (1987) acuñan el concepto *doing gender* con el fin de poder captar y analizar los cambios y las continuidades en las relaciones entre mujeres y hombres.

En la literatura especializada se identifican tres enfoques para analizar la relación entre el teletrabajo y las relaciones de género (Sullivan y Lewis, 2001; Pérez, 2010; Gálvez, Tirado y Alcaraz, 2020). En primer lugar, el llamado modelo de nuevas oportunidades para la fle-

xibilidad que considera el teletrabajo como un instrumento que favorece la conciliación entre la esfera laboral y familiar incentivando la corresponsabilidad de los hombres dentro del hogar (Huws *et al.*, 1996). En segundo lugar, el modelo de explotación que considera el teletrabajo una forma organizativa que reproduce la división sexual aumentando la carga total de trabajo femenina y reforzando los roles y estereotipos tradicionales de género. Desde esta perspectiva, se apunta que el atractivo inicial de la modalidad, dada la capacidad de autoorganización y autogestión que ofrece, puede resultar una trampa para las mujeres (Haddon y Silverstone, 1993). Bajo la falsa ilusión de la libertad para organizarse, la ausencia de rigidez horaria y la flexibilidad temporal implican más disponibilidad y autoexigencia laboral que, junto con las responsabilidades domésticas y de cuidado, suponen un aumento de la carga total de trabajo. Finalmente, se identifica el modelo de resistencia: a caballo de los dos modelos anteriores, se apunta la posibilidad de que el teletrabajo represente un mecanismo de resistencia de las mujeres al carácter patriarcal de la organización sociolaboral (Gálvez, Tirado y Alcaraz, 2020). Desde esta perspectiva, el foco analítico recae en la experiencia que ellas tienen del trabajo a distancia como una forma de cuestionar la lógica laboral productiva y masculina.

Junto a estas propuestas teóricas, algunos estudios empíricos muestran que tener control sobre dónde y cuándo se trabaja puede aligerar el conflicto trabajo-familia (Kelly *et al.*, 2014) y cómo el teletrabajo puede ayudar a las mujeres a mantener sus carreras después del parto (Chung y Horst, 2018). Sin embargo, también se argumenta que el teletrabajo puede aumentar los conflictos laborales y familiares (Golden, Veiga y Simsek, 2006). Trabajar a distancia dentro del hogar puede contribuir a borrar las fronteras imaginarias entre el empleo y la vida aumentando la responsabilidad doméstica de las mujeres y reforzando los roles tradicionales de género

(Hilbrecht *et al.*, 2008). Distintos estudios advierten de los límites de una visión idílica del potencial transformador del teletrabajo en tiempos de crisis que, a menudo, no tiene en cuenta las desigualdades sociales de partida (Bae y Kim, 2016). Se evidencia cómo el teletrabajo puede acentuar las brechas de género reforzando la división sexual del trabajo en el mercado laboral y dentro del hogar; empeorar las condiciones laborales con jornadas más porosas e intensas en horarios atípicos; y provocar problemas de salud (Beauregard y Basile, 2016; Eurofound, 2017, 2020).

Tomando como referencia estos debates, emerge la preocupación por analizar el impacto de género del trabajo a distancia durante el primer período de la crisis de la COVID-19 (Mooi-Reci y Risman, 2021). En ese contexto, el teletrabajo surge como una modalidad obligatoria que cambia las condiciones que lo caracterizaban hasta el momento. Cabe diferenciar el teletrabajo como forma de organización laboral antes de la pandemia, del trabajo a distancia impulsado como medida de salud pública para frenar la propagación del virus. El primero se caracteriza por representar una modalidad que potencia la autonomía y la flexibilidad, mientras que el segundo se define por su carácter obligatorio. A partir de esta consideración, este artículo se plantea cómo la situación de confinamiento de la población, junto con el cierre de las escuelas y la dificultad o imposibilidad de externalizar parte de las tareas domésticas y de cuidados, influyen en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres. Distintas investigaciones realizadas sobre el impacto de género en el contexto de pandemia se formulan la misma pregunta (Craig y Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank y Steinbach, 2020; Sevilla y Smith, 2020; Seiz, 2021): ¿la crisis de la COVID-19 refuerza los roles tradicionales de género o contribuye a la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados? A partir de esta cuestión, algunos de estos estudios se plantean hasta qué

punto el impacto del confinamiento en los hogares con menores se puede comparar con el efecto de los permisos de paternidad, especialmente positivos cuando la madre está ausente dentro del hogar (Sevilla y Smith, 2020). Farré y González (2019) argumentan que dichos permisos aumentan la implicación del padre en el cuidado de las criaturas en España. Desde esta perspectiva, se argumenta que la situación de confinamiento puede favorecer la implicación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidados.

En cualquier caso, los resultados obtenidos en esta línea de investigación emergente apuntan a la reproducción y el reforzamiento de las desigualdades de género durante los primeros meses de la pandemia con el encierro domiciliario y el cierre de las escuelas (Craig y Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank y Steinbach, 2020; Sevilla y Smith, 2020; Seiz, 2021). En primer lugar, se observa que la situación de confinamiento conlleva un aumento del volumen y la intensidad del trabajo doméstico que recae en mayor medida sobre las mujeres. En segundo lugar, si bien se constata que las tareas domésticas han sido más visibles, se observa que los hombres no asumen más responsabilidad en ellas, pero sí en el cuidado de las criaturas, reduciendo la brecha de género con relación a los usos del tiempo. Finalmente, en tercer lugar, se pone de manifiesto que la situación de confinamiento y la posterior desescalada generan mayores costes para las mujeres en términos físicos, emocionales y laborales siendo las dificultades vinculadas a la gestión de los tiempos de trabajo un factor explicativo.

Por un lado, las investigaciones de corte cuantitativo realizadas a nivel internacional y centradas en el caso de las parejas de doble ingreso ponen de manifiesto las tendencias anteriores en distintos contextos socio-políticos. El estudio de Collins *et al.* (2020), centrado en estudiar el confinamiento en Estados Unidos, señala el aumento del trabajo doméstico y la reducción del trabajo remu-

nerado de las mujeres en comparación con los hombres, especialmente en los hogares con menores de seis años. En esta misma línea, Craig y Churchill (2020) analizan el caso de Australia evidenciando también cómo disminuye el tiempo dedicado al empleo y crece el tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado, sobre todo entre las mujeres. Los resultados ponen de manifiesto el mantenimiento de la brecha de género en la carga total de trabajo no remunerado, aunque se reduce la distancia entre los usos del tiempo de hombres y mujeres. Básicamente, por la mayor implicación de los hombres en las tareas de cuidado sin asumir más responsabilidad en las tareas domésticas: en la medida que el incremento del tiempo que dedican los hombres al cuidado de menores es superior a la situación anterior, se reduce la brecha de género a pesar de que las mujeres siguen haciendo más. Para el caso alemán, Hank y Steinbach (2020) no encuentran cambios fundamentales en la división del trabajo entre hombres y mujeres, pero observan un desplazamiento hacia situaciones extremas: más parejas con patrones tradicionales y más parejas con patrones igualitarios. Además, señalan el caso de parejas con una distribución igualitaria antes de la pandemia donde, con el confinamiento, aumenta la responsabilidad doméstica de las mujeres. Especialmente, entre las personas que teletrabajan: la obligación del trabajo doméstico crece más entre ellas, mientras que la contribución al trabajo de cuidados crece más entre ellos. En este sentido, subrayan que las condiciones laborales influyen en la dedicación masculina al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que no afectan a la dedicación femenina, siendo más adaptativa la responsabilidad de los hombres que de las mujeres. A la luz de estos resultados, concluyen la imposibilidad de señalar tendencias generales y la necesidad de observar respuestas heterogéneas. Sevilla y Smith (2020) analizan la brecha de género con relación al cuidado de las criaturas y señalan cómo las madres asumen la mayor

parte del cuidado infantil adicional a pesar del incremento de la responsabilidad por parte de los padres. Muestran cómo, en el caso del Reino Unido, la cantidad de cuidado infantil adicional proporcionado por hombres y mujeres se correlaciona con su situación laboral, particularmente entre los hombres. Esto significa que las madres realizan más cuidados infantiles que los padres, independientemente de su empleo. Además, las mujeres que trabajan desde casa dedican más tiempo al cuidado de las criaturas en comparación a los hombres que teletrabajan o han perdido el empleo.

Por el otro lado, con relación al caso español, se evidencia el aumento significativo del volumen del trabajo doméstico y de cuidados durante los primeros meses de la pandemia que implica una mayor dedicación de los dos miembros de la pareja, aunque las mujeres continúan soportando la mayor carga de trabajo (Seiz, 2021; Farré *et al.*, 2020). Seiz (2021) concluye que, si bien se observa un ligero aumento de la participación doméstica de los hombres durante el confinamiento, la carga global de trabajo continúa recayendo fundamentalmente en las mujeres. Más allá de la tendencia general, sus resultados también ponen de manifiesto el peso de la situación laboral sobre el reparto de las tareas domésticas y de cuidados dentro del hogar. Detecta una brecha de género menor en las parejas con acceso conjunto al teletrabajo y la flexibilidad, donde los recursos relativos y los valores de género disminuyen su influencia frente a unas condiciones laborales de ambos miembros de la pareja que interactúan. Sin embargo, a pesar de la evolución hacia un modelo de división del trabajo más igualitario en estos casos, los resultados generales indican que las mujeres asumen en mayor medida el impacto de la pandemia en términos de incremento de exigencias domésticas. Seiz (2021) concluye señalando la persistencia de los patrones tradicionales como el principal obstáculo para la corresponsabilidad. También sobre

el caso español, Farré *et al.* (2020) muestran cómo la crisis de la COVID-19 aumenta la especialización del trabajo doméstico dentro de los hogares. En este sentido, muestran cómo la brecha de género es mayor en las actividades de lavandería y limpieza, así como en el cuidado físico de las criaturas, mientras que es negativa en las tareas relacionadas con las reparaciones dentro del hogar y la compra de alimentos. Sin embargo, las mismas autoras reconocen que existe cierta heterogeneidad entre los hogares.

Además, otros estudios describen las dificultades por separar el trabajo remunerado, las responsabilidades familiares y la vida personal entre las mujeres que teletrabajan durante los primeros meses de confinamiento (Ortiz-Lozano, Martínez-Morán y Fernández-Muñoz, 2021; Moreno y Borràs, 2021). Aguado y Benlloch (2020) analizan el impacto del trabajo a distancia sobre la conciliación de la vida familiar y laboral para el caso de las mujeres con menores de doce años; concluyen que las madres experimentan peores condiciones laborales y mayor malestar cotidiano en comparación con los padres. Desde una perspectiva comparativa europea, González y García-de-Diego (2022) muestran que, en general, las personas que teletrabajan reportan dificultades para gestionar el equilibrio entre la vida laboral y personal dentro del hogar, si bien las mujeres son las que se encargan de las tareas domésticas y de cuidado básicas. Aunque no identifican diferencias importantes entre las regiones europeas, en el sur de Europa, donde se da una fuerte división del trabajo doméstico y conflictos de conciliación de la vida laboral y familiar, parece que las mujeres perciben una ligera mayor satisfacción en la situación de confinamiento en comparación a los hombres. Por el contrario, Actis *et al.* (2021) examinan un grupo de países iberoamericanos, entre los que se encuentra España. Sus resultados sugieren que, independientemente de las diferencias socioculturales, en todos los países analizados la introducción masiva del

teletrabajo durante la crisis de la COVID-19 acentúa las desigualdades de género previamente existentes, tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo.

En cualquier caso, el conjunto de estas investigaciones constata que la situación de confinamiento no ha supuesto una mayor corresponsabilidad dentro de los hogares; por el contrario, sugiere que ha reforzado las relaciones de género que existían con anterioridad. Sin embargo, también coinciden en subrayar la heterogeneidad de situaciones vividas, donde la relación laboral de ambos miembros de la pareja resulta un factor explicativo clave. En esta línea, Alon *et al.* (2020) argumentan que las parejas de doble ingreso que teletrabajan son las más igualitarias. Si bien, añaden la importancia de considerar la influencia de la distribución del trabajo doméstico anterior a la pandemia en la medida que buena parte del aumento de la carga recae en la persona que asumía las tareas domésticas y de cuidado antes de la COVID-19.

En términos generales, la mayoría de las investigaciones realizadas analizan la brecha de género con relación al trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso que, con o sin criaturas, realizan teletrabajo en el contexto de la pandemia. Menos atención se ha dedicado a la percepción subjetiva de la situación vivida. En este sentido, Craig y Churchill (2020) apuntan algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, observan cómo las mujeres que trabajan fuera de casa reportan menos estrés en comparación a las mujeres que teletrabajan. Aunque estas últimas perciben una menor presión de los tiempos con la desaparición de los horarios rígidos a pesar del aumento de la carga total de trabajo. En segundo lugar, todas las mujeres entrevistadas manifiestan menor satisfacción con la distribución del trabajo doméstico y de cuidados.

La investigación que se presenta en este artículo adopta esta misma perspec-

tiva para analizar cuáles han sido las experiencias y la valoración del trabajo a distancia de hombres y mujeres en Cataluña, en un contexto marcado por el confinamiento domiciliario y el cierre de las escuelas. En concreto, se formulan dos hipótesis de partida. En primer lugar, se apunta que la experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento domiciliario refuerza los roles tradicionales de género, lejos de favorecer la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. En segundo lugar, se sugiere que la valoración que realizan las personas del trabajo a distancia no depende tanto de factores estructurales clásicos (género, ciclo vital o clase social), sino de la experiencia vivida con la organización de los tiempos de trabajo entre los miembros del hogar.

METODOLOGÍA

Se presenta una estrategia metodológica cuantitativa para dar respuesta a los interrogantes planteados. Los datos utilizados se basan en la Encuesta sobre usos del tiempo y el confinamiento realizada entre el 11 y el 14 de abril de 2020 por el CEO. El cuestionario se pasó *online* con un muestreo no probabilístico sobre el universo de la población residente en Cataluña de dieciséis años y más. La participación fue voluntaria y no estaba motivada por incentivos económicos. La muestra final incluye 3605 casos. A pesar de su naturaleza no probabilística, el conjunto de datos constituye una fuente de información relevante para, al menos, aproximarse a la comprensión de un contexto inédito. Si bien, es necesaria cierta prudencia con la inferencia de los resultados dada la posible infrarrepresentación del empleo presencial. Por esta razón, las conclusiones de este artículo se presentan como una suerte de hipótesis exploratorias, para ser contrastadas con otras fuentes de datos y para dialogar con resultados

complementarios. Dentro de estas limitaciones, también es necesario señalar sus puntos fuertes. En primer lugar, la promotora de la encuesta es una institución pública con larga experiencia y trayectoria en la producción de datos estadísticos oficiales. En segundo lugar, ninguna otra fuente de datos producida en este período excepcional comprende información comparable en términos de tamaño de muestra y extensión de información para el territorio objeto de estudio.

La institución a cargo de la encuesta ha realizado una ponderación posterior a la estratificación de la muestra para corregir la sobre o subrepresentación de los grupos por identidad de género, edad, lengua materna, lugar de nacimiento y nivel de estudios. Los tamaños de muestra razonablemente grandes dentro de los grupos de estratificación aumentan la suposición de propensiones de respuesta homogénea dentro de los grupos para la ponderación (Salganik, 2017). No obstante, la ponderación posterior a la estratificación no puede corregir otras formas posibles de sesgo de muestreo intrínseco al método de muestreo. Se pueden consultar más detalles sobre los datos en la ficha técnica referenciada (CEO, 2020a).

Sobre la muestra original, se ha aplicado un filtro excluyendo a las personas que en la variable identidad de género han respondido «Género no binario» o «Prefiero no responder», debido al reducido número de respuestas en estas categorías (22 casos)². Además, algunos análisis emplean filtros adicionales de submuestras específicas, como «personas encuestadas que han teletrabajado» o «población con cargas de trabajo de cuidados». Estos casos se especifican en cada análisis y se indica en el título de los resultados. La tabla 1 presenta un

² El instrumento de recopilación de datos original pregunta a las personas encuestadas por su identidad de género (no el sexo asignado al nacer).

resumen de los tamaños de las submuestras para las variables clave y las compara con otras estadísticas oficiales extraídas de muestras probabilísticas. La mayor diferencia entre la muestra objeto de estudio y otras probabilísticas radica en la proporción de personas encuestadas que han teletrabajado. No obstante, es preciso considerar

los distintos contextos de recogida de datos: la encuesta del CEO se realizó durante dos semanas del confinamiento estricto, mientras que la EPA se realizó a lo largo del segundo trimestre que comprende el paso del confinamiento a la llamada desescalada, momento en que se empezó a recuperar el trabajo presencial.

TABLA 1. Medidas absolutas y relativas de las submuestras, y contraste con fuentes oficiales alternativas

Submuestra	N	%	Fuente alternativa (Cataluña)	%
Mujeres	1861	51,9	ECV 2020	51,5
Población ocupada	1798	50,1	EPA 2020 Q2	51,1
Población con menores de 13 años a cargo	787	21,9	ECV 2020	24,1
ESeC: profesionales y directivos	986	27,5	ECV 2020	26,3
ESeC: clase trabajadora	850	23,7	ECV 2020	29,4
Teletrabajando (100 %)	1988	43,9	EPA 2020 Q2	18,5
			EPA 2019*	6,4

Nota: * EPA 2019, España.

Fuente: Elaboración propia.

Con relación al tratamiento de los datos, la primera hipótesis (H1: trabajo a distancia durante el confinamiento domiciliario refuerza los roles tradicionales de género) se aborda mediante una serie de análisis bivariados, especificados en la tabla 3. Las pruebas estadísticas de significancia se reportan exclusivamente con fines ilustrativos. Siguiendo un principio de parsimonia, los análisis bivariados se consideran suficientes para extraer conclusiones relevantes con respecto a H1. La segunda hipótesis (H2: la valoración de las personas sobre el trabajo a distancia depende principalmente de la experiencia vivida con la organización de los tiempos de trabajo entre los miembros del hogar) se aborda mediante una regresión logística binomial (*logit*) sobre la variable dependiente que valora si el teletrabajo pudiere ser una forma adecuada de organizar el empleo pasado el estado excepcional de confinamiento (véase tabla 2). El modelo se utiliza para determinar

qué factores tienen un mayor impacto en las expectativas sobre el teletrabajo. Los predictores se aplican en cuatro bloques, entre ellos los relacionados con características estructurales (género, clase social y sector laboral), predictores relacionados con la distribución de la carga de trabajo dentro del hogar (organización del trabajo en el hogar, horas semanales dedicadas al trabajo doméstico y horas semanales dedicadas al trabajo de cuidados), predictores que valoran la experiencia vivida del teletrabajo (se ha podido organizar horarios de trabajo; se ha podido programar descansos; se ha podido desconectar al final de la jornada), y un bloque final que considera interacciones entre predictores.

La operacionalización completa de las variables utilizadas en los análisis se presenta en la tabla 2. Además, puede consultarse el cuestionario (CEO, 2020b) para conocer la redacción exacta de las preguntas y las categorías de respuesta.

TABLA 2. Operacionalización de los conceptos

Concepto	Dimensión	Indicador	Variable	Valores
Carga total de trabajo	Trabajo de cuidados	Existe carga de cuidados	Ciclo vital (grupos)	<i>Sin carga de cuidados, Cuidado de menores, Cuidado de adultos o adultos + menores</i>
		Tiempo dedicado al trabajo de cuidados	Horas semanales trabajo cuidados*	0:168
		Aumento trabajo cuidados confinamiento	Percepción cambio trabajo cuidados*	<i>Menos TC, Mismo TC, Más TC, no aplica, ns/nc</i>
	Trabajo doméstico	Organización trabajo cuidados hogar	Corresponsabilidad (subjetiva) en pareja TC*	<i>Siempre existió, desarrolló en confinamiento, no existe</i>
		Tiempo dedicado al trabajo doméstico	Horas semanales trabajo doméstico*	0:168
		Aumento del trabajo doméstico durante confinamiento	Percepción cambio trabajo doméstico*	<i>Menos TD, Mismo TD, Más TD, no aplica, ns/nc</i>
Trabajo productivo	Organización trabajo doméstico hogar	Corresponsabilidad (subjetiva) en pareja TD*	<i>Siempre existió, desarrolló en confinamiento, no existe</i>	
	Modalidad de empleo	Modalidad de trabajo durante confinamiento (individual)	<i>Teletrabajo 100 %, En persona 100 %, Teletrabajo 50 %</i>	
	Modalidad de empleo	Modalidad de trabajo durante confinamiento (agregado hogar)	<i>Teletrabajo 100%, En persona 100%, Teletrabajo 50%, Mixto 100%</i>	
Expectativas organizar trabajo		Expectativas teletrabajo en futuro	Le gustaría TT en el futuro	<i>Sí, No</i>
			Posibilidad organización tiempos*	0:10
Experiencia teletrabajo		Valoración experiencia teletrabajo	Posibilidad organización pausas*	0:10
			Posibilidad desconexión tras jornada*	0:10
División del trabajo por género	Identidad de género	Identidad de género	Identidad de género	<i>Mujer, Hombre</i>
Estatus social	Clase social	Nivel ocupacional	European Socio-economic Classification (ESeC) (4 grupos)	<i>Directivos y profesionales [1:2], Ocupaciones intermedias [3:6], Clase trabajadora [7:9], No se puede clasificar [10]</i>
	Ocupación	Sector laboral	Sector laboral	<i>Público, Privado, Otros/ns/nc</i>

* Variables que hacen referencia a percepciones o valoraciones subjetivas.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 3. *Análisis en relación con la H1*

Variable dependiente	Variable independiente	Submuestra	Test
Modalidad de empleo	Género	Ocupada	Chi ²
Modalidad de empleo	Género Menores a cargo	Ocupada	Chi ²
Modalidad de empleo	Género ESeC	Ocupada	Chi ²
Percepción cambio trabajo productivo	Género Modalidad	Ocupada	Chi ²
Percepción cambio trabajo doméstico	Género Modalidad	Ocupada	Chi ²
Horas semanales trabajo doméstico	Género Modalidad	Ocupada	Kruskal-Wallis Chi ²
Percepción cambio trabajo cuidados	Género Modalidad	Ocupada con cargas de cuidado	Chi ²
Horas semanales trabajo cuidados	Género Modalidad	Ocupada con cargas de cuidado	Kruskal-Wallis Chi ²
Corresponsabilidad en pareja TD	Género Modalidad	Ocupada en pareja	Chi ²
Corresponsabilidad en pareja TC	Género Modalidad	Ocupada en pareja con menores a cargo	Chi ²

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en dos apartados. En primer lugar, una aproximación descriptiva a la vivencia del trabajo a distancia considerando la población afectada y los efectos experimentados y, en segundo lugar, una aproximación a la valoración de futuro acerca de dicha modalidad.

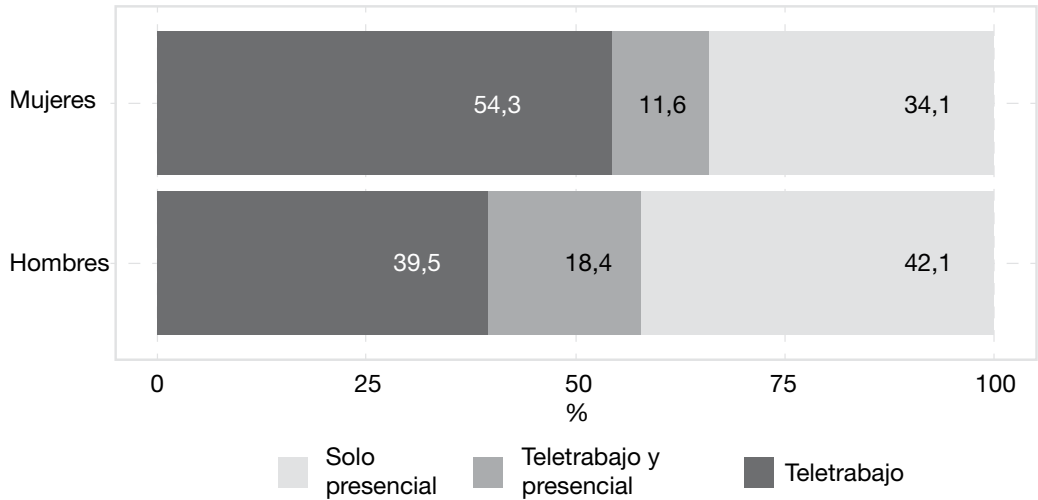
La experiencia del trabajo a distancia en tiempos de pandemia

El 14 de marzo de 2020 entraba en vigor el estado de alarma del gobierno de España con el que se iniciaba el confinamiento general de la población para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Durante este período, que se alargó hasta junio, se suspendieron todas las actividades, excepto las consideradas esenciales³. Además, también se instaba a todas las empresas a facilitar el teletrabajo en la medida que fuera posible. Nunca an-

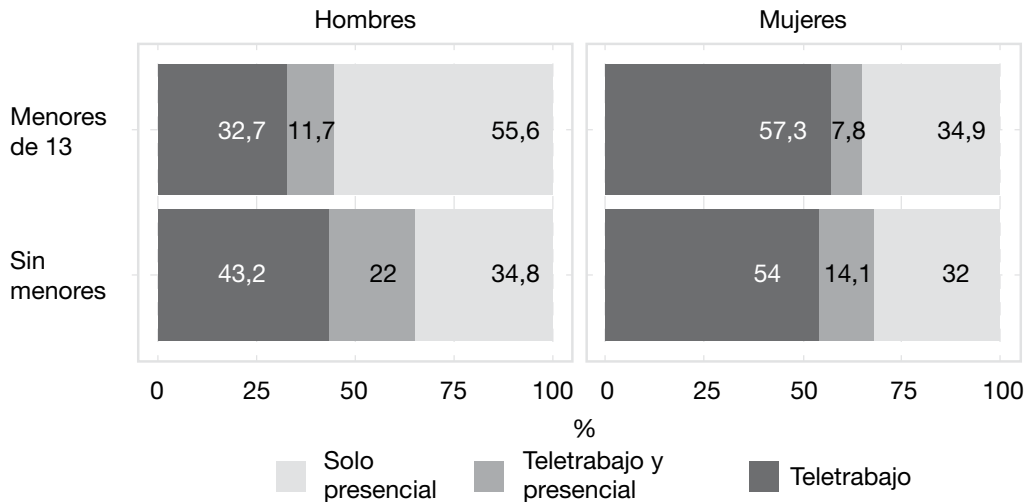
tes en la sociedad catalana se había implantado el teletrabajo de una forma tan masiva, lo que genera una oportunidad inédita para evaluar una modalidad de trabajo que, antes de la pandemia, ya estaba llamada a tener un peso laboral más importante. No obstante, las circunstancias extraordinarias en las cuales se llevó a cabo —de forma precipitada y con la imposibilidad de externalizar el trabajo de cuidados—, obligan a marcar ciertas distancias respecto a lo que es el teletrabajo convencional.

Durante la primera quincena del mes de mayo, más de la mitad (61,7 %) de la población catalana empleada se pudo adaptar de alguna forma a esta modalidad de trabajo. El 46,5 % trabajaba únicamente desde casa y el 15,2 % lo combinaba con la presencialidad en el centro de trabajo, mientras que el 38,3 % restante mantuvo el trabajo presencial. El primer aspecto destacable de la implantación del trabajo a distancia durante la pandemia en Cataluña es que recayó más entre las mujeres que entre los hombres (figura 1) (Chi² = 40,8, DF = 2, p-value = 0,000).

³ Véase Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

FIGURA 1. Modalidad de empleo según género. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (%)

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

FIGURA 2. Modalidad de empleo según género y presencia de menores de 13 años en el hogar. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (%)

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

El segundo aspecto relevante es que la diferencia entre mujeres y hombres se acentúa cuando en los hogares hay presencia de menores de trece años (figura 2) ($\text{Chi}^2 = 93,5$, $\text{DF} = 6$, $p\text{-value} = 0,000$). En estos casos, el porcentaje de los hombres que trabajan a distancia se reduce hasta el 32,7 %, mientras que el de las muje-

res se mantiene en el 57,3 %. Como se puede observar en la figura 2, esta diferencia se reduce considerablemente cuando en el hogar no hay menores de edad. De los cuatro grupos que resultan al combinar género y presencia de criaturas, el que se comporta de forma distinta son los hombres con hijos e hijas. Por lo tanto, los re-

sultados sugieren que mientras para ellos la presencia de menores de trece años en el hogar parece generar más bien un efecto disuasorio del trabajo a distancia, en el caso de las mujeres ocurre exactamente lo contrario. En este sentido, todo indica que el teletrabajo reforzó, durante este período, el papel cuidador de las madres frente a los padres. Un aspecto que señala la importancia de analizar el impacto de género que podría suscitar la implantación general de esta modalidad de trabajo en el futuro.

En tercer lugar, se observa que el trabajo a distancia no se adopta de manera homogénea en el conjunto de la estructura ocupacional, siendo más frecuente entre las categorías ocupacionales cualificadas y

reproduciendo cierto sesgo de clase. Los resultados coinciden con esta premisa: el teletrabajo es más frecuente entre las ocupaciones intermedias (puestos 3 a 6 de la escala ESeC) o los directivos y profesionales (puestos 1 a 2). En cambio, las personas trabajadoras con menor cualificación, aproximadamente el 60 %, continúa realizando trabajo presencial (tabla 4) ($\text{Chi}^2 = 291,7$, $\text{DF} = 14$, $p\text{-valor} = 0,000$). Entre las ocupaciones menos cualificadas, se observan menos diferencias entre hombres y mujeres en la implantación del teletrabajo: es la opción minoritaria en todos los casos. Por el contrario, se observan diferencias de alrededor de 30 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en ocupaciones intermedias y altas.

TABLA 4. Modalidad de empleo según categoría ocupacional y género. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (%)

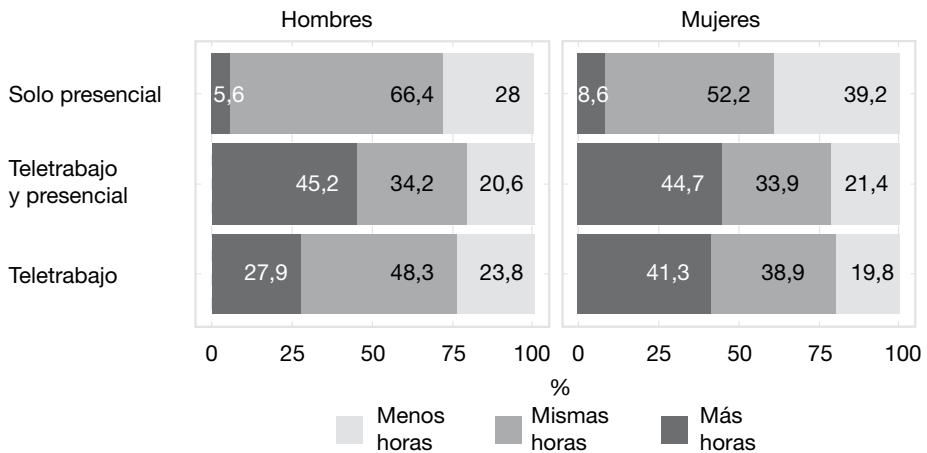
Género	Modalidad	Clase social				Total
		Directiva, profesional	Ocupaciones intermedias	Clase trabajadora	No clasificable	
Hombres	Teletrabajo	37,2	47,5	33,8	29,7	39,5
	Teletrabajo y presencial	31,0	21,3	4,8	37,0	18,4
	Solo presencial	31,8	31,2	61,4	33,2	42,1
Mujeres	Teletrabajo	62,8	67,4	31,1	68,1	54,3
	Teletrabajo y presencial	16,5	11,4	9,6	7,7	11,6
	Solo presencial	20,6	21,2	59,3	24,2	34,1

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Aumento del tiempo destinado al trabajo remunerado

Uno de los principales efectos del trabajo a distancia reflejado en los datos es el incremento de horas trabajadas. El 35,3 % de la población ocupada que adopta esta modalidad durante el confinamiento afirma que trabaja más horas que antes. Como muestra la figura 3 ($\text{Chi}^2 = 25,1$, $\text{DF} = 6$, $p\text{-valor} = 0,000$), este porcentaje es mayor entre

las mujeres (41,3 %) siendo todavía más elevado entre la población que adopta la modalidad mixta (45,2 % hombres y 44,7 % mujeres). En cambio, entre la población que mantiene la presencialidad, solo el 6,8 % aumenta las horas trabajadas. Además, esta población es incluso la que, en mayor proporción, ve reducir la jornada laboral (32,6 %). En el caso del trabajo a distancia, en las dos modalidades, tan solo una de cada cinco personas le dedica menos horas.

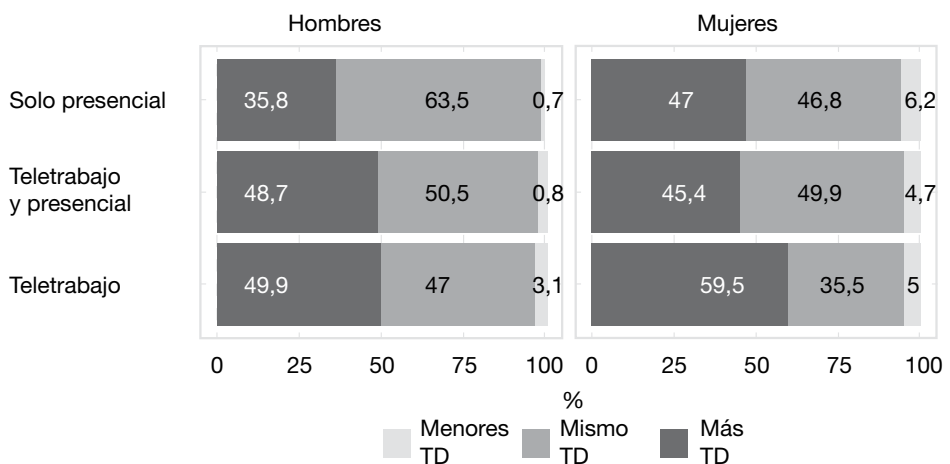
FIGURA 3. Cambios en horas de trabajo productivo según modalidad de trabajo y género. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (%)

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Incremento de las tareas domésticas y de los cuidados

El 40 % del conjunto de la población afirma que desde el inicio del confinamiento han aumentado las tareas domésticas en su hogar. Este incremento es más acusado entre la población que trabaja todo el tiempo desde casa (55,3 %) que entre la que realiza trabajo presencial (40,5 %). Además, la percepción del aumento de la carga es

aproximadamente 10 puntos porcentuales mayor entre las mujeres que teletrabajan (59,5 %) respecto a los hombres (49,9 %); y 11 puntos porcentuales mayor entre las que trabajan presencialmente (47,0 %) respecto a los hombres (35,8 %). En cambio, las mujeres y los hombres con modalidad mixta parecen acercarse más en la valoración (figura 4) ($\chi^2 = 81,3$, $DF = 10$, $p\text{-value} = 0,000$).

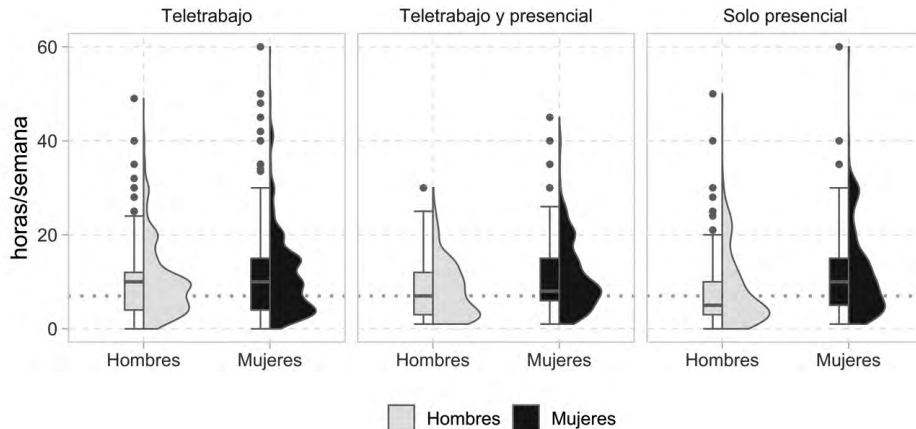
FIGURA 4. Percepción del cambio en el volumen de trabajo doméstico (TD) desde el inicio del confinamiento según modalidad de empleo y género. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (%)

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Además de la percepción, el análisis del tiempo dedicado al trabajo doméstico como horas semanales también muestra pautas diferenciales según género. Como se observa en la figura 5 (K-W $\chi^2 = 33,7$, $DF = 5$, $p\text{-value} = 0,000$), la proporción de personas que dedica menos de una hora a la semana a las tareas domésticas (incluyendo ninguna) es mayor entre los hombres que las mujeres, y entre estos, es más frecuente tanto entre los que trabajan presencialmente como los que combinan trabajo a distancia y presencial. Estos casos se aprecian por el ancho donde empieza el gráfico

de violín sobre el eje de las x. En el extremo opuesto, los casos que dedican más de 20 horas semanales son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres, siendo el umbral de las 30 horas semanales un valor atípico para todos los grupos. La línea de puntos indica la referencia de las 7 horas semanales, lo que sería equivalente a una hora diaria, 7 días por semana. El 50 % o más de las mujeres en todas las modalidades de trabajo se encuentra por encima de esta referencia, mientras que entre los hombres solo los que han hecho trabajo a distancia lo superan.

FIGURA 5. Horas semanales dedicadas a trabajo doméstico durante el confinamiento según modalidad de empleo y género. Submuestra ocupada. Encuesta CEO, 2020 (horas/semana)

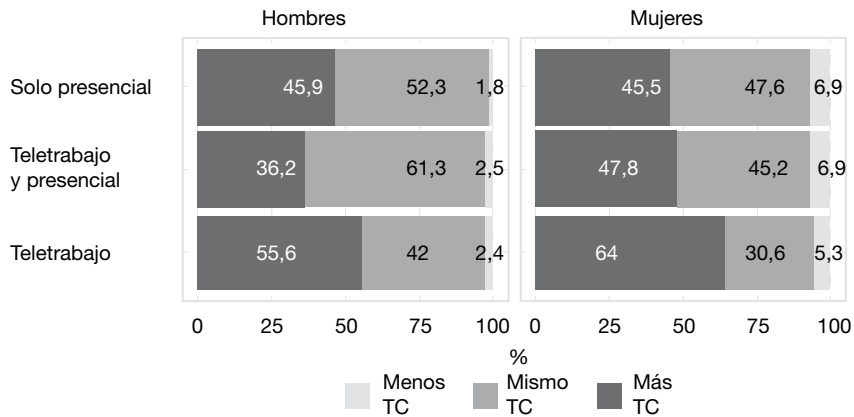


Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Con relación a las tareas de cuidados, un 60,8 % de la población que trabaja a distancia afirma que estas se incrementan, mientras que, en el caso de la presencialidad, este porcentaje se reduce al 45,7 %. De nuevo, esta percepción aparece más marcada entre las mujeres que entre los hombres en todas las modalidades (véase figura 6) ($\chi^2 = 55,5$, $DF = 10$, $p\text{-value} = 0,000$). En el caso del teletrabajo, donde la percepción del aumento es generalizada, se observan ocho puntos porcentuales de diferencia. En la modalidad mixta y en

el trabajo presencial, la mayoría de los hombres considera que el volumen de cuidados se mantiene igual; mientras que las mujeres se distribuyen por igual entre considerar su aumento y su mantenimiento. Además, destaca la modalidad mixta al recoger la menor percepción de más trabajo de cuidados entre los hombres, reforzando la idea del efecto disuasorio comentada anteriormente. En definitiva, el trabajo a distancia durante el confinamiento implica un aumento del trabajo reproductivo que las mujeres perciben con mayor medida que los hombres.

FIGURA 6. Percepción del cambio en el volumen de trabajo de cuidados (TC) desde el inicio del confinamiento según modalidad de empleo y género. Submuestra ocupada con cargas de cuidado. Encuesta CEO, 2020 (%)

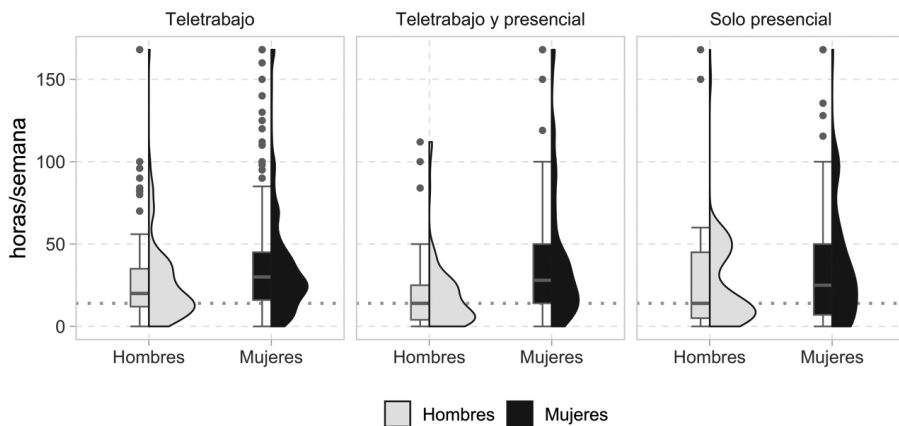


Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Más allá de la percepción, el análisis de las horas dedicadas al trabajo de cuidados muestra las siguientes pautas, según se puede observar en la figura 7 (K-W $\chi^2 = 32,6$, DF = 5, p-value = 0,000). En el extremo inferior, la proporción de personas que dedica menos de una hora semanal al trabajo de cuidados (teniendo dicha carga) es mucho mayor entre hombres que entre mujeres, como se aprecia por el ancho en la base de los violines. En el extremo superior, los valores atípicos de los hombres (en todas las modalidades) aparecen aproximada-

mente alrededor de las 60 horas semanales (8,6 horas diarias), mientras que en las mujeres los valores atípicos empiezan a partir de las 80 horas semanales (11,4 horas diarias). La línea de puntos marca la referencia de las 14 horas semanales (2 horas diarias), límite que excede el 75 % de las mujeres con cargas de cuidados que trabajan a distancia o realizan modalidad mixta, y más del 50 % de las que tienen presencialidad. Entre los hombres, solo en el grupo que ha realizado trabajo a distancia, más del 50 % supera el umbral de las 14 horas semanales.

FIGURA 7. Horas semanales dedicadas a trabajo de cuidados durante el confinamiento según modalidad de empleo y género. Submuestra ocupada con cargas de cuidado. Encuesta CEO, 2020 (horas/semana)

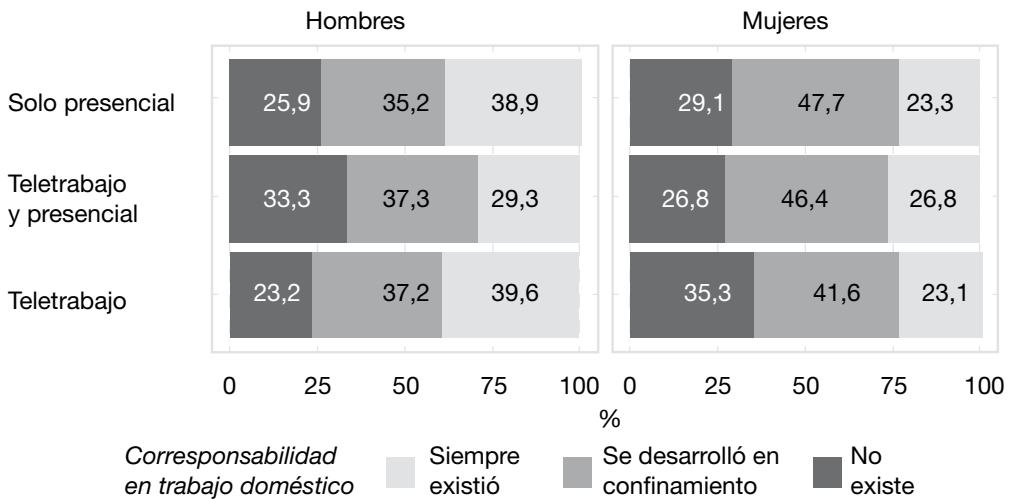


Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Finalmente, el análisis aborda las percepciones de hombres y mujeres sobre la distribución del trabajo reproductivo en la pareja principal del hogar (para hogares donde vive una pareja) como se puede observar en la figura 8 ($\text{Chi}^2 = 25,3$, $\text{DF} = 2$, $p\text{-valor} = 0,000$). En primer lugar, como suele ser habitual, la percepción de hombres y mujeres sobre esta cuestión es diferente, siendo más optimista la de ellos. Así, mientras que el 36,0 % de los hombres afirma que el reparto de las tareas domésticas ya se hacía de manera igualitaria antes del confinamiento, tan solo el 24,4 % de las mujeres lo ve igual. Esta tendencia también se observa con el cuidado de las criaturas. Las cifras genéricas, en sentido contrario, señalan que el 20,3 % de las mujeres niega que exista corresponsabilidad frente al 12,6 % de los hombres.

En segundo lugar, si se analizan dichas percepciones según modalidad de trabajo durante el confinamiento, se observan tendencias relevantes. Las mujeres que teletrabajan son las que más consideran que el trabajo doméstico no se reparte igualitariamente (una de cada tres) y las que menos atribuyen el reparto igualitario al confinamiento. En cambio, las mujeres con modalidad mixta o trabajo presencial perciben más corresponsabilidad en el contexto de confinamiento (entre 5 y 6 puntos porcentuales). Estos datos apuntan a la idea de que la ausencia de la mujer dentro del hogar por motivos laborales favorece el reparto igualitario del trabajo doméstico. Contrariamente, el teletrabajo, en el caso de las mujeres, parece frenar la corresponsabilidad.

FIGURA 8. Percepción de la igualdad en la distribución del trabajo doméstico en el hogar entre miembros de la pareja según género y modalidad de empleo. Submuestra ocupada y en pareja. Encuesta CEO, 2020 (%)

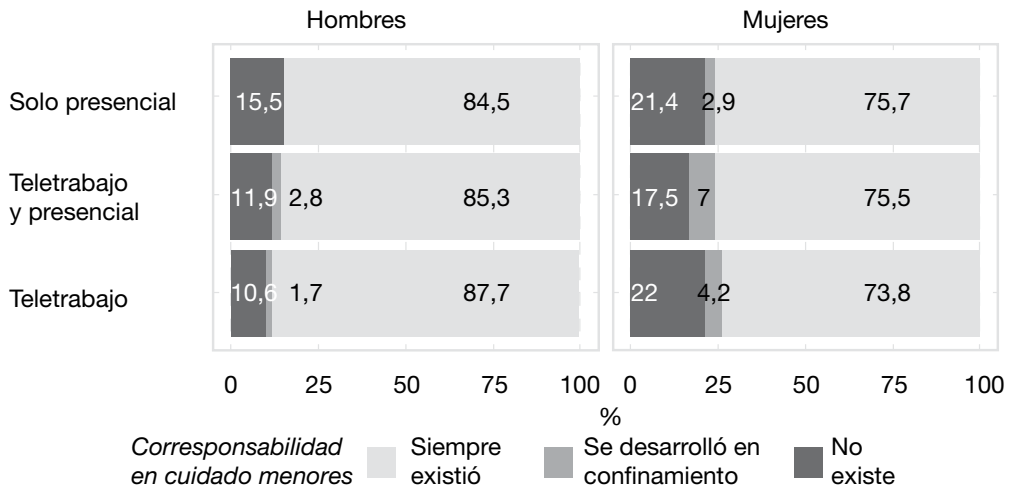


Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

El impacto negativo del trabajo a distancia con relación al reparto del trabajo reproductivo también se observa en los datos sobre la percepción de corresponsabilidad en el cuidado de los menores (véase figura 9) ($\text{Chi}^2 = 33,4$, $\text{DF} = 10$, $p\text{-value} = 0,000$). En

este caso, de nuevo, las mujeres que teletrabajan, en comparación a las que realizan modalidad mixta, son las que más manifiestan la falta de corresponsabilidad (22 % frente al 17,5 %) y las que menos peso dan a la situación de confinamiento (4,2 % frente al 7 %).

FIGURA 9. Percepción de la igualdad en la distribución del trabajo de cuidado de menores en el hogar entre miembros de la pareja según género y modalidad de empleo. Submuestra ocupada, en pareja y con menores a cargo. Encuesta CEO, 2020 (%)



Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

La valoración del trabajo a distancia

Con el fin de profundizar en el análisis sobre la valoración del trabajo a distancia se ha realizado una secuencia de modelos de regresión logística, atendiendo a aspectos estructurales, relacionales y de experiencia. Para ello, se ha tomado como variable dependiente la valoración sobre si se considera que el teletrabajo puede ser una buena forma de organización del propio trabajo en un futuro escenario sin confinamiento. En concreto, se ha considerado como categoría de referencia la respuesta afirmativa. Para captar mejor el efecto de los factores explicativos, estos se han introducido de manera progresiva por bloques. En primer lugar, se han considerado los factores estructurales entre los que se encuentran el género, el ciclo vital (si se tienen cargas de cuidados de menores o de adultos dependientes), la clase social medida según la categoría ocupacional y el sector de actividad. En segundo lugar, se han introducido los aspectos relativos a la carga de trabajo productivo y reproductivo entre los miembros del hogar:

organización del trabajo a distancia entre los miembros del hogar, horas semanales dedicadas a trabajo doméstico y horas semanales dedicadas a trabajo de cuidados⁴. En tercer lugar, se han incorporado variables que permiten evaluar la experiencia del trabajo a distancia: si se ha podido organizar un horario de trabajo, si se han podido planificar pausas y si se ha podido desconectar una vez acabado el horario laboral. Finalmente, se han incorporado dos interacciones por género, para analizar con más detalle las di-

⁴ Es importante formular algunos apuntes en relación con el tratamiento estadístico de dichas variables. En primer lugar, que las variables de horas de dedicación numérica se han recodificado a partir del literal en las respuestas que incluyen tanto cifras concretas como, en ocasiones, expresiones del tipo «no lo sé, muchas horas», «demasiado» o «todas las horas posibles». En cualquier caso, se ha aplicado un criterio consistente, pero con base en la subjetividad del investigador. En segundo lugar, las respuestas no permiten captar las diferencias entre tiempos sincrónicos y asincrónicos, frecuentes en las situaciones de doble presencia. Finalmente, con el fin de mantener a las personas sin carga de cuidados en el modelo, en la variable sobre horas dedicadas a trabajo de cuidados se les ha asignado -1, asumiendo que ello podría introducir algún sesgo.

ferencias entre hombres y mujeres: una con respecto a la categoría ocupacional y otra en relación con la posibilidad de desconectar una vez finalizada la jornada laboral.

Esta secuencia de modelos se ha aplicado sobre la población que ha realizado alguna modalidad de trabajo a distancia. Los resultados apuntan a que la valoración

global del teletrabajo depende, principalmente, de factores estructurales y de cómo ha sido la experiencia. A pesar de la excepcionalidad del momento que invita a considerar el importante peso de los elementos relacionales, se detecta un importante peso de las variables estructurales junto a los factores experienciales.

TABLA 5. Modelos de regresión logística sobre la valoración del teletrabajo. Submuestra que ha realizado teletrabajo. Encuesta CEO, 2020

	M1: Estructural	M2: Distribución cargas	M3: Experiencia TT	M4: Interacciones
Predictores	Odds Ratio	Odds Ratio	Odds Ratio	Odds Ratio
(Constante)	16,560***	23,050***	8,670***	5,970**
Género [Hombres]	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
Género [Mujeres]	0,600*	0,620*	0,680	1,470
Ciclo vital [Sin carga de cuidados]	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
Ciclo vital [Cuidado de adultos]	1,070	1,040	1,010	1,130
Ciclo vital [Cuidado de menores]	1,390	1,470	1,420	1,560
Clase [Dir. y Prof.]	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
Clase [Intermedias]	0,860	0,850	0,660	0,620
Clase [Trabajadora]	0,210***	0,210***	0,150***	0,110***
Clase [no clasificable]	0,690	0,820	1,680	3,310
Sector [Público]	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
Sector [Privado]	1,200	1,180	1,050	0,990
Sector [Otros]	1,280	1,260	1,280	1,230
Horas semanales trabajo doméstico		0,970*	0,970*	0,980
Horas semanales trabajo cuidados		1,000	1,000	1,000
Org. trabajo en hogar [TT 100 %]		Referencia	Referencia	Referencia
Org. trabajo en hogar [TT 50 %]		1,220	1,060	1,010
Org. trabajo en hogar [MX 100 %]		0,830	0,820	0,770
Valoración tiempos			0,990	0,980
Valoración pausas			1,080	1,080
Valoración desconexión			1,170***	1,340***
Mujeres * Clase-intermedias				1,050
Mujeres * Clase- trabajadora				1,490
Mujeres * Clase- no clasificable				0,260
Mujeres * Valoración desconexión				0,800**
N observaciones	1.664	1.664	1.664	1.664
R ² Tjur	0,068	0,069	0,098	0,093
AIC	343.229	342.922	318.822	314.464

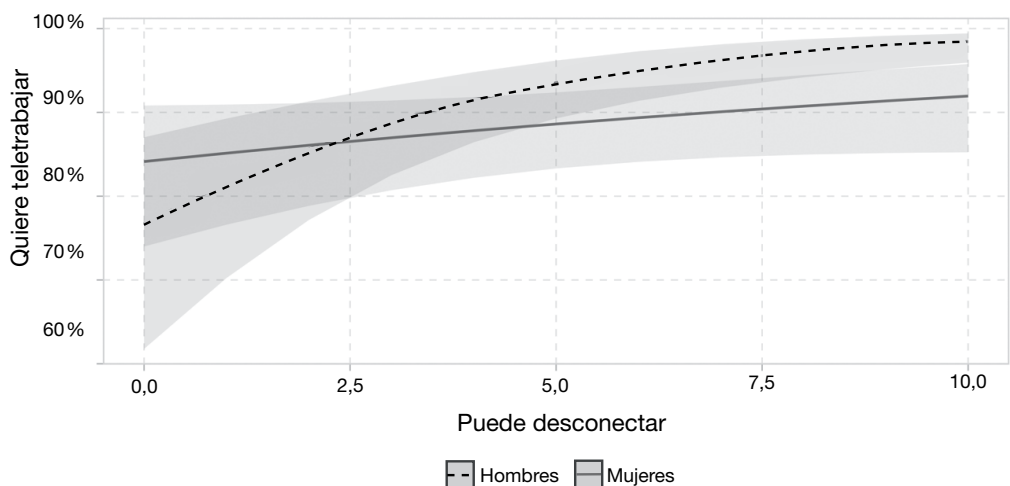
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

Como se puede observar en la tabla 5, cuando se introduce el bloque de factores estructurales (modelo 1), las mujeres registran una probabilidad más reducida que los hombres de valorar positivamente la implantación del teletrabajo una vez acabe el confinamiento. Ocurre lo mismo con las personas de clase trabajadora (categoría ocupacional menos cualificada) respecto a las personas de clase media (profesionales y directivos). Entre los factores de distribución de carga de trabajo (modelo 2), aparece como significativo el relativo a la carga de trabajo doméstico: una mayor dedicación en horas semanales al trabajo do-

méstico se asociaría con un menor deseo por realizar teletrabajo en el futuro. En lo referente a la experiencia vivida del trabajo a distancia (modelo 3) entre las personas que sí que han podido desconectar una vez acabado el horario laboral, las probabilidades de valorar positivamente el teletrabajo son superiores respecto a las que no han podido desconectar. No obstante, se identifican diferencias significativas entre hombres y mujeres como se observa con las interacciones introducidas con el modelo 4. En este caso, la categoría laboral sigue siendo significativa, pero lo dejan de ser las horas dedicadas al trabajo doméstico.

FIGURA 10. Predicción de probabilidades para la valoración de la experiencia del teletrabajo según género, considerando la posibilidad de desconectar del trabajo al acabar la jornada laboral. Encuesta CEO, 2020



Fuente: Elaboración propia, basada en datos de la Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020 (CEO).

El cálculo de las probabilidades predichas de la interacción evidencia que la posibilidad de desconectar del trabajo remunerado durante la experiencia del trabajo a distancia en el confinamiento domiciliario aparece como un factor más relevante en el caso de los hombres en comparación a las mujeres. En este sentido, los resultados de la interacción indican que, cuanto mayor es la puntuación relativa para poder desconectar entre los hombres, la probabilidad de desear

la modalidad del teletrabajo se aproxima al 100 %, indicando que este sería un factor determinante para ellos y no tanto para ellas. La interpretación de estos datos refuerza la idea de que la experiencia del trabajo a distancia ha sido más compleja entre las mujeres para quienes la rutina de confinamiento ha supuesto más responsabilidad dentro del hogar, condicionando su valoración respecto escenarios futuros de teletrabajo. Una de las razones explicativas puede residir en el he-

cho de que, más allá de una mayor corresponsabilidad, ellas han asumido una mayor carga de trabajo doméstico de manera que la desconexión laboral no resulta suficiente para valorar positivamente la modalidad del teletrabajo. En este sentido, la carga total de trabajo, reproductivo y remunerado, superior en el caso de las mujeres, daría cuenta de la pérdida de significatividad de las horas dedicadas a las tareas domésticas cuando se introducen las interacciones en el modelo 4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El artículo pretende contribuir al debate sobre el impacto de género del teletrabajo tomando como estudio de caso el confinamiento domiciliario de la población catalana durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19. Como punto de partida, se plantea si la experiencia del trabajo a distancia refuerza los roles tradicionales de género o la corresponsabilidad dentro de los hogares.

Con relación al debate teórico, los resultados sobre el caso catalán ponen de manifiesto la pertinencia del llamado modelo de explotación, señalando los riesgos que puede implicar, desde la perspectiva de género, la regulación del teletrabajo más allá del contexto de pandemia. Desde esta aproximación, se apunta que el teletrabajo, entendido como una forma de organización laboral, puede reproducir la división sexual aumentando la carga total de trabajo de las mujeres, así como reforzando los roles y estereotipos tradicionales de género (Haddon y Silverstone, 1993).

Con relación a la línea de investigación sobre el impacto de género de la COVID-19, los resultados presentados coinciden con otros estudios que evidencian la reproducción y el reforzamiento de las desigualdades durante los primeros meses de la pandemia. En concreto, se apunta que el aumento del volumen de trabajo domés-

tico recae sobre las mujeres; que la reducción de la brecha de género en los usos del tiempo responde al aumento de los cuidados de menores entre los hombres; y que la situación de confinamiento genera mayores costes para las mujeres. Así se desprende de los análisis realizados a nivel internacional tomando como estudio de caso distintos países (Craig y Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank y Steinbach, 2020; Sevilla y Smith, 2020; Seiz, 2021).

El presente artículo ha pretendido contribuir a dichas discusiones con el análisis de la experiencia y la valoración del trabajo a distancia de hombres y mujeres en Cataluña durante los primeros meses de la pandemia coincidiendo con el cierre de las escuelas. La primera hipótesis apunta que la experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento domiciliario refuerza los roles tradicionales de género lejos de favorecer la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados. En este sentido, los datos analizados evidencian cómo el trabajo a distancia se caracteriza por ser una realidad que afecta más a las mujeres, con una incidencia destacable en las madres de menores de trece años a diferencia de los padres, y a la población con categorías ocupacionales más cualificadas. Con relación al impacto inicial de la experiencia, se observa que las mujeres perciben, con mayor proporción que los hombres, un aumento de la carga total de trabajo. Asimismo, el teletrabajo emerge como la modalidad que menos facilita la corresponsabilidad desde la vivencia femenina. En consecuencia, a pesar de la heterogeneidad de situaciones vividas, siendo la situación laboral un factor explicativo clave, parece posible apuntar que la experiencia del trabajo a distancia es peor entre las mujeres que entre los hombres, reforzando todavía más la brecha de género en el trabajo doméstico y de cuidados e incrementando las horas de trabajo remunerado.

La segunda hipótesis sugiere que la valoración sobre el trabajo a distancia no depende tanto de factores estructurales clásicos (como el género, el ciclo vital o la clase social), sino más bien de la propia experiencia vivida como resultado de la organización de las modalidades de trabajo entre los miembros del hogar. Los resultados del análisis de regresión logística subrayan la interacción de factores estructurales, relacionales y de experiencia para dar cuenta de las expectativas de futuro acerca de la modalidad del teletrabajo. Los distintos modelos apuntan la significatividad de las variables estructurales (género y categoría laboral), relacionales (horas de trabajo doméstico) y experienciales (posibilidad de desconectar laboralmente). Si bien las interacciones ponen de manifiesto que la probabilidad de que los hombres valoren positivamente el teletrabajo cuando han podido desconectar laboralmente es mayor en comparación a las mujeres. Una de las razones explicativas estaría relacionada con la distinta percepción sobre el hecho de desconectar según la carga total de trabajo. El significado de la desconexión cuando no se asumen responsabilidades domésticas y de cuidados estaría marcado por una lógica laboral y diacrónica: los hombres, al finalizar su jornada laboral, desconectan. Por el contrario, la compaginación de responsabilidades laborales, domésticas y de cuidados en un mismo espacio, explicaría por qué las mujeres en régimen de doble presencia tienen más dificultad para vivir la desconexión. La experiencia femenina del confinamiento aparece marcada por una lógica sincrónica permanente donde se suceden las tareas, laborales, domésticas y de cuidados, dificultando la desconexión y condicionando la valoración del teletrabajo.

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de seguir analizando el peso de las distintas experiencias cotidianas vinculadas a las rutinas de confinamiento desde la perspectiva de género, así como considerar los posibles riesgos de regular el teletrabajo sin considerar la persistencia de la

desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres. Descuidar esta realidad puede convertir el trabajo a distancia en una falsa solución para la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres. Por el contrario, los resultados también apuntan la oportunidad que supone el potencial transformador de dicha modalidad cuando afecta a los hombres heterosexuales cuyas parejas realizan trabajo presencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Actis di Pasquale, Eugenia; Iglesias-Onofrio, Marcela; Pérez de Guzmán, Sofía y Viego, Valentina (2021). «Teletrabajo, vida cotidiana y desigualdades de género en Iberoamérica». *Revista Economía Crítica*, 1(31): 44-61.
- Agudo, Empar y Benlloch, Cristina (2020). «Teletrabajo y conciliación: el estrés se ceba con las mujeres». *The Conversation*. Disponible en: <https://theconversation.com/teletrabajo-y-conciliacion-el-estres-se-ceba-con-las-mujeres-137023>, acceso 15 de noviembre de 2021.
- Alon, Titan; Doepke, Matthias; Olmstead-Rumsey, Jane y Tertilt, Michele (2020). «The Impact of COVID-19 on Gender Equality». [Working paper series N.º 26947]. *National Bureau of Economic Research*. doi: 10.3386/w26947
- Bae, Kwang Bin y Kim, Dohyeong (2016). «The Impact of Decoupling of Telework on Job Satisfaction in U.S. Federal Agencies: Does Gender Matter?». *The American Review of Public Administration*, 46(3): 356-371. doi: 10.1177/0275074016637183
- Beauregard, T. Alexandra y Basile, Kelly (2016). «Strategies for Successful Telework: How Effective Employees Manage Work/Home Boundaries». *Strategic HR Review*, 15(3): 106-111. doi: 10.1108/SHR-03-2016-0024
- Belzunegui-Eraso, Ángel (2002). *Teletrabajo: Estrategias de flexibilidad*. Madrid: Consejo Económico y Social.
- Benería Farré, Lourdes (1981). «Reproducción, producción y división sexual del trabajo». *Mientras-tanto*, 6: 47-84.
- Brines, Julie (1994). «Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home». *American Journal of Sociology*, 100(3): 652-688.

- CEO (2020a). *Fitxa Tècnica Enquesta sobre els usos del temps i el confinament*. Barcelona: Centre Estudis Opinió. Disponible en: <https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=7608>, acceso 10 de julio de 2021.
- CEO (2020b). *Qüestionari Enquesta sobre usos del temps i el confinament*. Barcelona: Centre Estudis Opinió. Disponible en: <https://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7608/Cuestionario%20-966.pdf>, acceso 10 de julio de 2021.
- Chung, Heejung y Horst, Mariska van der (2018). «Women's Employment Patterns after Childbirth and the Perceived Access to and Use of Flexitime and Teleworking». *Human Relations*, 71(1): 47-72. doi: 10.1177/0018726717713828
- Collins, Caitlyn; Landivar, Liana C.; Ruppner, Leah y Scarborough, William J. (2020). «COVID-19 and the Gender Gap in Work Hours». *Gender, Work and Organization*, 28(1): 101-112. doi: 10.1111/gwao.12506
- Craig, Lyn y Churchill, Brendan (2020). «Dual-Earner Parent Couples' Work and Care during COVID-19». *Gender, Work and Organization*, 28(1): 66-79. doi: 10.1111/gwao.12497
- Eurofound (2017). *Working Anytime, Anywhere: The Effects on the World of Work*. Geneva: Publications Office of the European Union, Luxembourg and the International Labour Office.
- Eurofound (2020). *Telework and ICT-Based Mobile Work: Flexible Working in the Digital Age, New Forms of Employment Series*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Farré, Lúdia y González, Libertad (2019). «Does Paternity Leave Reduce Fertility?». *Journal of Public Economics*, 172: 52-66. doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.12.002
- Farré, Lidia; Fawaz, Yarine; González, Libertad y Graves, Jennifer (2020). *How the COVID-19 Lockdown Affected Gender Inequality in Paid and Unpaid Work in Spain* (No. 13434). IZA Discussion Papers.
- Gálvez Mozo, Ana M.; Tirado, Francisco y Alcaraz, José M. (2020). «"Oh! Teleworking!" Regimes of Engagement and the Lived Experience of Female Spanish Teleworkers». *Business Ethics: A European Review*, 29(1): 180-192. doi: 10.1111/beer.12240
- Golden, Timothy D.; Veiga, John F. y Simsek, Zeki (2006). «Telecommuting's Differential Impact on Work-family Conflict: Is There No Place like Home?». *Journal of Applied Psychology*, 91(6):1340-1350. doi: 10.1037/0021-9010.91.6.1340
- González Ramos, Ana M. y García-de-Diego, José M. (2022). «Work-Life Balance and Teleworking: Lessons Learned during the Pandemic on Gender Role Transformation and Self-Reported Well-Being». *International Journal Environmental Research Public Health*, 19(14): 8468. doi: 10.3390/ijerph19148468
- Haddon, Leslie y Silverstone, Roger (1993). «Teleworking in the 1990s: A View from the Home». *SPRU/ CICT*, inform n.º 10, Falmer, Sussex: Universidad de Sussex.
- Hank, Karsten y Steinbach, Anja (2020). «The Virus Changed Everything, Didn't It? Couples' Division of Housework and Childcare Before and During the Corona Crisis». *Journal of Family Research*, 33(1): 99-114. doi: 10.20377/jfr-488
- Hilbrecht, Margo; Shaw, Susan M.; Johnson, Laura C. y Andrey, Jean (2008). «I'm Home for the Kids': Contradictory Implications for Work-life Balance of Teleworking Mothers». *Gender, Work and Organization*, 15(5): 454-476. doi: 10.1111/j.1468-0432.2008.00413.x
- Huws, Ursula; Podro, Sarah; Gunnarsson, Ewa; Weijers, Thea; Arvanitaki, Katerina y Trova, Vangelio (1996). *Teleworking and Gender*. Institute for Employment Studies, Report 317.
- Kelly, Erin. L.; Moen, Phyllis; Oakes, J. Michael; Fan, Wen; Okechukwu, Cassandra; Davis, Kelly; Hammer, Leslie; Kossek, Ellen Ernest; King, Rosalind; Hanson, Ginger; Mierzwa, Frank y Casper, Lynne M. (2014). «Changing Work and Work-Family Conflict: Evidence from the Work, Family, and Health Network». *American Sociological Review*, 79(3): 485-516. doi: 0.1177/0003122414531435
- Madsen, Susan R. (2011). «The Benefits, Challenges, and Implication of Teleworking: A Literature Review». *Journal of Culture and Religion*, 1(1): 148-158.
- Mayo, Margarita; Pastor, Juan C.; Cooper, Cary y Sanz-Vergel, Ana I. (2011). «Achieving Work-family Balance Among Spanish Managers and their Spouses: A Demands-control Perspective». *The International Journal of Human Resource Management*, 22(2): 331-350. doi: 10.1080/09585192.2011.540158
- Mirchandani, Kiran (2000). «The Best of Both Worlds' y 'Cutting My Own Throat': Contradictory Images of Home-based Work». *Qualitative Sociology*, 23(2): 159-182. doi: 10.1023/A:1005448415689

- Mooi-Reci, Irma y Risman, Barbara J. (2021). «The Gendered Impacts of COVID-19: Lessons and Reflections». *Gender and Society*, 35(2): 161-167. doi: 10.1177/08912432211001305
- Moreno Colom, Sara y Borràs Català, Vicent (2021). *Que teletrabajen ellos. Aprendizajes de la pandemia más allá de lo obvio*. Barcelona: MRA Ediciones.
- Ortiz-Lozano, José M.; Martínez-Morán, Pedro C. y Fernández-Muñoz, Iván (2021). «Difficulties for Teleworking of Public Employees in the Spanish Public Administration». *Sustainability*, 13: 8931. doi: 10.3390/su13168931
- Pearse, Rebecca y Connell, Raewyn (2016). «Gender Norms and the Economy: Insights From Social Research». *Feminist Economics*, 22(1): 30-53. doi: 10.1080/13545701.2015.1078485
- Pérez Sánchez, Carmen (2010). «El teletrabajo: ¿Más libertad o una nueva forma de esclavitud para los trabajadores?». *Revista de Internet, Derecho y Política*, 11: 24-32. Disponible en: <https://raco.cat/index.php/IDP/article/view/225853>
- Pérez Sánchez, Carmen y Gálvez Mozo, Ana M. (2009). «Teletrabajo y vida cotidiana: ventajas y dificultades para la conciliación de la vida laboral personal y familiar». *Athenea Digital*, 15: 57-79.
- R Core Team (2020). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. Disponible en: <https://www.R-project.org/>, acceso 10 de julio de 2021.
- Salganik, Matthew (2017). *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Open Review Edition.
- Seiz Puyuelo, Marta (2021). «Equality in Confinement: Nonnormative Divisions of Labour in Spanish Dual-Earner Families During the Covid-19 Lockdown». *Feminist Economics*, 27(1-2): 345-361. doi: 10.1080/13545701.2020.1829674
- Sevilla, Almudena y Smith, Sarah (2020). «Baby Steps: The Gender Division of Childcare during the COVID19 Pandemic». *Discussion Paper Series IZA*. doi: 10.1093/oxrep/graa027
- Sullivan, Cath (2003). «What's in a Name? Definitions y Conceptualizations of Teleworking and Work at Home». *New Technology, Work and Employment*, 18(3): 158-165. doi: 10.1111/1468-005X.00118
- Sullivan, Cath y Lewis, Suzan (2001). «Home-based Telework, Gender, and the Synchronization of Work and Family: Perspectives of Teleworkers and their Co-residents». *Gender, Work and Organization*, 8(2): 123-145. doi: 10.1111/1468-0432.00125
- Titan, Alon; Doepke, Matthias; Olmstead-Rumsey, Jane y Tertilt, Michèle (2020). «The Impact of Covid-19 on Gender Equality». *Covid Economics, Vetted and Real-Time Papers, The Centre for Economic Policy Research*, 4: 62-85.
- West, Candace y Zimmerman, Don H. (1987). «Doing Gender». *Gender and Society*, 1(2): 125-151. doi: 10.1177/0891243287001002002

RECEPCIÓN: 10/05/2022

REVISIÓN: 14/07/2022

APROBACIÓN: 23/09/2022

The Experience of Remote Work during Lockdown in Catalonia: A Gender Perspective

La experiencia del trabajo a distancia durante el confinamiento en Cataluña: una aproximación desde la perspectiva de género

Sara Moreno-Colom, Vicent Borràs Català, Irene Cruz Gómez and Sergi Porcel López

Key words

Job Category

- Life Cycle
- Co-responsibility
- Gender
- Telework
- Domestic Work
- Use of Time

Palabras clave

Categoría laboral

- Ciclo vital
- Corresponsabilidad
- Género
- Teletrabajo
- Trabajo doméstico
- Uso del tiempo

Abstract

The aim of this article is to contribute to the debate on the gender impact of telework, using the home lockdown of the Catalanian population during the first months of the COVID-19 pandemic as a case study. Specifically, men's and women's experiences and evaluations of remote work are analysed based on a survey on time-use during the lockdown conducted by the Centre Estudis Opinió. The results indicate that the experience of remote work, far from fostering co-responsibility in domestic and care work, further reinforced the gender gap in reproductive labour.

Resumen

El objetivo de este artículo es contribuir al debate sobre el impacto de género del teletrabajo, tomando como caso de estudio el confinamiento domiciliario de la población catalana durante los primeros meses de la pandemia COVID-19. En concreto, se analizan las experiencias y valoraciones acerca del trabajo a distancia de hombres y mujeres a partir de la Encuesta sobre Uso del Tiempo y Confinamiento realizada por el Centre Estudis Opinió. Los resultados indican que la experiencia del trabajo a distancia, lejos de favorecer la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, refuerza aún más la brecha de género en el trabajo reproductivo.

Citation

Moreno-Colom, Sara; Borràs Català, Vicent; Cruz Gómez, Irene; Porcel López, Sergi (2023). "The Experience of Remote Work during Lockdown in Catalonia: A Gender Perspective". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 77-100. (doi: 10.5477/cis/reis.183.77)

Sara Moreno-Colom: Universitat Autònoma de Barcelona | sara.moreno@uab.cat

Vicent Borràs Català: Universitat Autònoma de Barcelona | vicent.borras@uab.cat

Irene Cruz Gómez: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | irene.cruz@uab.cat

Sergi Porcel López: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | sergio.porcel@uab.cat

INTRODUCTION

The COVID-19 crisis and the lockdown measures presented a new scenario in which telework became obligatory. In this context, workplace and domestic matters merged. The novelty of this situation lies in the high volume of people forced to carry out paid work from home using information technology simultaneously with family and household activities. This obligation to telework in the lockdown, paired with the closure of schools and the impossibility of receiving home or family care services, increased the burden and amount of domestic and care work in households. This complex context offers an unprecedented opportunity to evaluate some of the effects of telework on gender relations within households.

Beyond the obvious consequences, it is worth delving into the gender impacts of telework in a lockdown context, which accentuated the simultaneity of everyday life activities and tasks. From a gender approach, this research proposes an examination of daily patterns in organising paid and unpaid work in order to answer the following question: Did teleworking during home lockdown reinforce traditional gender roles or promote co-responsibility? The answer to this question is based on the experiences and assessments of remote work of men and women in Catalonia during the first months of the pandemic, coinciding with the closure of schools. Our first hypothesis proposes that, far from favouring co-responsibility in domestic and care work, remote work during home lockdown reinforced traditional gender roles. Our second hypothesis is that people's evaluations of remote work do not depend as much on classic structural factors (such as gender, phase of the life cycle or social class) as on their lived experience of the organization of work modalities among household members. The data were obtained from the Survey on time use and the lockdown [Encuesta sobre usos del tiempo y el con-

finamiento] conducted by the Centre Estudis Opinió (CEO)¹.

The article is divided into four sections. First, a literature review on the transformative potential of telework for gender relations is presented, as well as a review of the studies carried out over the last year regarding the gender impact of this work modality in the context of the COVID-19 crisis. Second, the methodological strategy is discussed. Third, the main results obtained in the Catalan case are described. Finally, the article concludes by discussing the initial question regarding the transformative potential of telework and addresses its risks and limits from a gender perspective.

THEORETICAL FRAMEWORK

The debate on the transformative potential of telework arose during the oil crisis of the 1970s, when it was suggested as one solution to the problems of the moment (Madsen, 2011). This modality is identified with the possibility of improving productivity, reducing costs, and creating new job opportunities in times of crisis. More recently, telework has been presented as a solution to the so-called crisis of care, where it is seen as an option that would allow combining paid work with caring for dependent persons. In any case, there is a conceptual consensus regarding the definition of telework according to the European framework agreement (2002) as: a form of organising and/or performing work, using information technology, in the context of an employment contract/relationship, where work that could be performed at the employer's premises is carried out away from

¹ This analysis is part of the Project entitled "Gender impact of remote working and lockdown routines: beyond the obvious (IGETECO)" (*Impacto de Género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo obvio (IGETECO)*), funded by the Overcoming Covid-19 Banco Santander-CRUE-CSIC Fund (*Fondo Supera Covid-19 Banco Santander-CRUE-CSIC*).

those premises on a regular basis. Belzunegui (2002) includes working time flexibility as a characteristic. From a gender approach, this discussion on the transformative potential of telework draws attention, among other aspects, to the division of labour and time use at home (Mirchandani, 2000; Mayo *et al.*, 2011). Using a gender perspective involves analysing the effect of gender norms on working time patterns, assuming that the distribution of paid and unpaid work responsibilities within households does not respond to rational decisions based on relative resources (Pearse and Connell, 2016), questioning the gender neutrality of preferences (Brines, 1994) and understanding that the gender division of labour needs to be explained by the relationship between the productive and the reproductive spheres (Beneria, 1981). This perspective highlights the sociocultural values and norms that define what is desirable behaviour for women and men regarding the distribution of work. Gender roles are conceived not as rigid and immutable behavioural mandates, but as dynamic expectations, resulting from socialisation processes and relations between the genders. In this sense, West and Zimmerman (1987) coined the concept “doing gender”, which aids in analysing the changes and continuities in the relations between women and men. In the specialized literature, three approaches to analysing the relationship between telework and gender relations have been identified (Sullivan and Lewis, 2001; Pérez, 2010; Gálvez, Tirado and Alcaraz, 2020). First, a so-called “new opportunities for flexibility” model considers telework as an instrument that favours the conciliation of work and family spheres, encouraging the co-responsibility of men at home (Huws *et al.*, 1996). Second, an exploitation model sees telework as reproducing the sexual division of labour, increasing the total workload of women and reinforcing traditional gender roles and stereotypes. This perspective emphasises that the initial appeal of the modality — namely, the capacity for self-organization and

self-management that it offers— can become a trap for women (Haddon and Silverstone, 1993). Under the illusion of having leeway to self-organize, the absence of a rigid schedule implies greater availability and self-imposed work demands that, together with domestic and care responsibilities, result in an increase in women’s total workload. Finally, a resistance model shares certain features of the previous two models. It proposes that telework represents a mechanism by which women can resist the patriarchal nature of the domestic and work spheres (Gálvez, Tirado and Alcaraz, 2020). From this perspective, the analytical focus falls on women’s experience of remote work as a way of questioning the productive and male-oriented logic of labour.

Along with these theoretical proposals, some empirical studies show that having control over where and when one works can relieve work-family conflict (Kelly *et al.*, 2014) and that teleworking can help women maintain their careers after childbirth (Chung and Horst, 2018). However, other studies find that telework can increase work and family conflict (Golden, Veiga and Simsek, 2006). The tendency of telework to blur the boundary between work and family may increase domestic responsibility for women and strengthen the traditional division of labour (Hilbrecht *et al.*, 2008). Several studies warn of the limits of an idyllic vision of the transformative potential of telework in times of crisis that often does not take into account the social inequalities that are present at the outset (Bae and Kim, 2016). Telework can accentuate gender gaps by reinforcing the gendered division of labour in the labour market and within the household, worsening working conditions through more porous, intense and atypical work hours and causing health problems (Beauregard and Basile, 2016; Eurofound, 2017-2020).

Taking these debates as a reference, the need to analyse the gender impact of remote work during the first period of the COVID-19 crisis becomes evident (Mooi-Reci

and Risman, 2021). In this context, telework emerged as a mandatory modality, changing the conditions that characterized it before the pandemic. It is important to highlight the differences between telework as a form of organizing work before the pandemic and telework as a public health measure to stop the spread of COVID-19. The former was characterized by autonomy and flexibility, the latter by its compulsory nature. This paper examines how the population lockdown and working from home, combined with the closure of schools and the difficulty or impossibility of outsourcing domestic and care tasks, influenced the distribution of domestic and care work between women and men. Various studies conducted in recent months on the gender impact of the pandemic have asked the same question (Craig and Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank and Steinbach, 2020; Sevilla and Smith, 2020; Seiz, 2021): Did the COVID-19 crisis reinforce traditional gender roles or contribute to co-responsibility in domestic and care work? Some of these studies have examined whether the impact of the lockdown in homes with children can be compared with the impact of paternity leave, which is especially positive when the mother is absent from the home (Sevilla and Smith, 2020). Farré and González (2019) argue that paternity leave increases fathers' involvement in childcare in Spain. From this perspective it is suggested that the lockdown situation could have fostered the involvement of men in domestic and care work.

However, the results obtained in this emerging line of research point to the reproduction and reinforcement of gender inequalities during the first months of the pandemic (April-May), which were marked by home lockdown and the closure of schools (Craig and Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank and Steinbach, 2020; Sevilla and Smith, 2020; Seiz, 2021). First, it is found that lockdown entailed an increase in the volume and intensity of domestic work, which fell to a greater extent on women.

Secondly, although this situation made domestic tasks more visible, men did not take on more responsibility for these tasks; although they did take on more responsibility for the care of children, which reduced the gender gap in terms of time use. Lastly, it is argued that the lockdown and the subsequent de-escalation generated greater physical, emotional and work costs for women, with difficulties linked to the management of work time as an explanatory factor.

On the one hand, quantitative research conducted at the international level and focused on the case of dual-earner couples shows pre-existing trends in different socio-political contexts. The study by Collins *et al.* (2020), which focused on the lockdown in the United States, points to an increase in domestic work and a reduction in paid work among women compared to men, especially in households with children under 6 years of age. In this same vein, Craig and Churchill (2020) analyse the case of Australia and show that the time dedicated to paid work decreased and the time dedicated to domestic and care work increased, especially among women. The results indicate the persistence of the gender gap in the total unpaid workload, although the difference in the use of time for unpaid work between men and women was reduced, basically, due to the increase in men's involvement in care work but not in domestic work. The amount of time that men dedicated to childcare was greater than it was before the lockdown; this reduced the gender gap in time use, although women continued to do more. In the German case, Hank and Steinbach (2020) did not find fundamental changes in the division of labour between men and women, but they observed a shift towards extreme situations, namely, an increase in the number of couples with traditional patterns and the number of couples with equal patterns. In addition, they point to the existence of a remarkable percentage of couples who had an equal distribution of labour before the pandemic but experienced an increase in

the domestic responsibility of women during lockdown. Furthermore, these authors find that especially among people who telework, domestic work obligations increased among women, while the contribution to care work increased among men. In this sense, working conditions influence men's dedication to domestic and care work, but they do not affect women's dedication. In other words, the responsibilities of men are more adaptive than those of women. Considering these results, the authors conclude the impossibility of identifying general trends and the need to observe heterogeneous responses. Sevilla and Smith (2020) analyse the gender gap in relation to childcare and show that mothers took on most of the additional childcare, despite an increase in fathers' involvement. They show how in the UK case that the amount of additional childcare provided by men and women was correlated with their employment status, particularly among men. This means that mothers performed more childcare than fathers, regardless of their job. In addition, women who worked from home spent more time caring for their children than men who teleworked or lost their jobs.

On the other hand, regarding the Spanish case, different studies show a significant increase in the volume of domestic and care work during the first months of the pandemic, which implies greater dedication in both members of the couple, although women continued to bear the greater workload (Seiz, 2021; Farré *et al.*, 2020). Seiz (2020) argues that although there was a slight increase in the domestic participation of men during lockdown, the overall workload continued to fall mainly on women. Her study analyses the renegotiation of paid and unpaid work in heterosexual couples. The results show a smaller gender gap in couples in which both partners had access to telework opportunities and flexibility that improved their time-availability. In these cases, Seiz (2021) explains that the special conditions established by the confinement relaxed job constraints, creat-

ing an unprecedented opportunity for non-traditional divisions of labour. However, despite the evolution towards a more equal division of labour in these couples, the general results indicate that women were more strongly impacted by the pandemic in terms of increased domestic demands. Seiz (2021) concludes by pointing out the resilience and persistence of traditional normative patterns as the main obstacle to co-responsibility. Additionally, in the Spanish case, Farré *et al.* (2020) show that the COVID-19 crisis increased the specialization of domestic work within households. They show an increase in the gender gap in laundry and cleaning activities, as well as in the physical care of children. A decrease is found in the gender gap in tasks related to repairs and grocery shopping. However, the same authors recognize that there is some heterogeneity among households. Moreover, other studies describe the difficulties in separating paid work, family responsibilities and personal life for women who teleworked during the first months of lockdown (Ortiz-Lozano, Martínez-Morán and Fernández-Muñoz, 2021; Moreno and Borràs, 2021). Aguado and Benlloch (2020) analyse the impact of remote work on work-life balance for the case of women with children under 12 years of age and found that mothers experienced a decline in work-life balance in comparison to fathers. From a European comparative perspective, González and García-de-Diego (2022) show that both men and women teleworkers reported difficulties with managing work-life balance at home, despite women handling core care and household tasks. Although the authors do not identify important differences between European regions, surprisingly, in Southern Europe, where all studies emphasise the strong domestic work division and work-life balance conflicts, women's perception of life satisfaction during the lockdown is slightly higher than that of men. By contrast, Actis *et al.* (2021) examine a group of Ibero-American countries, including Spain. Their results suggest that, regardless of sociocultural differ-

ences, in all the countries under study the massive introduction of telework during the COVID-19 crisis tended to accentuate previously existing gender inequalities, both in the productive and reproductive spheres.

Overall, these studies confirm that the lockdown has not led to greater co-responsibility within the home; in contrast, it seems to have reinforced previously existing gender relations. They also highlight the heterogeneity of experienced situations and note that the employment conditions of both members of the couple are a key explanatory factor. Alon *et al.* (2020) argue that dual-earner couples who teleworked had the most equal distribution of labour. However, they note the importance of considering the influence of the distribution of domestic work prior to the pandemic because much of the increase in the burden falls to the person who performed the domestic and care work before COVID-19. In general, the majority of studies analyse the gender gap in relation to domestic and care work in dual-earner couples with or without children who performed telework in the context of the pandemic. Less attention has been devoted to subjective perceptions of the lived situation. In this sense, Craig and Churchill (2020) raise some interesting questions about the Australian case. First, they observe that women who worked outside the home reported less stress than women who teleworked. However, the latter perceived less time pressure with the disappearance of rigid schedules, despite the increase in the total workload. Secondly, all women expressed less satisfaction with the distribution of domestic and care work.

The research presented in this article adopts this perspective to analyse the experiences and evaluation of remote work among men and women in Catalonia in a context marked by home lockdown and the closure of schools. Specifically, two initial hypotheses are formulated. First, we suggest that far from favouring co-responsibility in domestic and care work, the experience

of remote work during home lockdown reinforced traditional gender roles. Secondly, we posit that individuals' evaluation of remote work depends less on classic structural factors such as gender, life cycle factors or social class than on their own lived experience as a result of the organization of work modalities among household members.

METHODOLOGY

A quantitative methodological strategy is adopted to answer the questions posed. The data come from the Survey on time use and the lockdown, which was conducted between May 4th and 15th, 2020, by the CEO. The survey was conducted online with a non-probabilistic sampling of the population aged 16 years and over residing in Catalonia. The recruitment strategy did not involve economic compensation, so participation was not motivated by incentives, but was voluntary. The final sample comprised 3605 cases.

Despite the non-probabilistic nature of the sample, this dataset constitutes a relevant source of information to at least approximate an understanding of a time of historical relevance. Conclusions from the results should be taken with caution, particularly because in-person and non-office occupations are likely under-represented. Therefore, the conclusions from this study would be better understood as exploratory hypotheses, to be tested and contrasted with other data sources and in dialogue with complementary analytical results. Within these limitations, its strengths also need to be pointed out. First, the survey was carried out by a public, well-established, non-partisan institution with a long history of producing reliable social studies. Secondly, no other data source produced in this historically unique emergency period provides comparable information in terms of sample size and geographic extension for the area under study.

The CEO performed a post-stratification weighting of the sample to correct for over or under-representation of groups by gender identity, age, first language, place of birth and education level. Reasonably large sample sizes within stratification groups increase the homogeneous-response-pro-

pensities-within-groups assumption for weighting (Salganik, 2017). Nevertheless, post-stratification weighting cannot correct for other possible forms of sampling bias intrinsic to the sampling method. Further details on the data can be consulted in the referenced technical sheet (CEO, 2020a).

TABLE 1. *Sub-sample absolute and relative sizes, and contrast with alternative official sources*

Sub-sample	n	%	Alternative source (Catalonia)	%
Women	1861	51.9	EU-SILC 2020	51.5
Employed	1798	50.1	LFS 2020 Q2	51.1
Respondents having children under 13	787	21.9	EU-SILC 2020	24.1
ESeC: professional and managerial	986	27.5	EU-SILC 2020	26.3
ESeC: working class	850	23.7	EU-SILC 2020	29.4
Teleworking (100 %)	1988	43.9	LFS 2020 Q2	18.5
			LFS 2019*	6.4

Note: * LFS 2019, Spain.

Source: By authors.

The original sample was filtered to exclude people who responded to the question on their gender identity with “Non-binary gender” or “I prefer not to answer” due to the small number of responses in these categories (a total of 22 cases)². Some analyses are only of interest for specific subsamples, such as “respondents having teleworked”, or “population having care workloads”. In these cases, additional subsample filters are used and are specified in each analysis by the title of the resulting output. Table 1 presents a summary of sub-sample sizes for key variables and compares them to other official statistics drawn from probabilistic samples. The largest difference between the sample under study and other probabilistic samples lies in the proportion of respondents having teleworked. Nevertheless, it should be considered that the survey for this sample lasted two weeks during “hard” confinement (what was known as “Phase 0”), and the data from

the Labour Force Survey (Q2) covered three months, during which time Catalonia shifted to what was referred to as the “new normality”, a period when many people returned to working in-person.

Regarding the analysis of the data, the first hypothesis (H1: remote work during home lockdown reinforced traditional gender roles) is addressed using a series of bivariate analyses, specified in Table 3. Statistical tests of significance are reported exclusively for illustrative purposes. Following a parsimony principle, bivariate analyses were deemed sufficient to extract relevant conclusions regarding H1. The second hypothesis (H2: individuals’ evaluation of remote work depended primarily on the lived experience of the organization of work modalities among household members) is addressed using a binomial logistic regression (*logit*) on the dependent variable regarding the evaluation of telework as an adequate way of organizing one’s work in the future after the lockdown (see Table 2 for operationalization details). The model is used to determine which factors have greater impact on future expectations about teleworking. The predictors are

² The original data collection instrument asked respondents for their gender identity (not their sex assigned at birth).

applied in four blocks: predictors related to structural characteristics (gender, social class and labour sector), predictors related to the distribution of the workload within the household (organization of work in the home, weekly hours dedicated to domestic work and weekly hours dedicated to care work), predictors that evaluate the lived experience of telework (it has been possible to organize work sched-

ules; it has been possible to schedule breaks; it has been possible to disconnect at the end of the day), and a final block that considers interactions among predictors.

The complete operationalization of the variables used in the analyses is presented in Table 2. The questionnaire (CEO, 2020b) can be consulted regarding the exact wording of the survey questions and response categories.

TABLE 2. Operationalization of the concepts

Concept	Dimension	Indicator	Variable	Values
Total workload	Care work	Existence care workload	Life cycle (grouped)	<i>No care workload, Children care workload, Adult/adult + children care workload</i>
		Time care work	Hours week care work*	<i>0:168</i>
		Increased care work lockdown	Perception change care workload*	<i>Less CW, Same CW, More CW, does not apply, does not know/answer</i>
		Organization care work home	Subjective co-responsibility distribution care work couple*	<i>Always existed, Developed during lockdown, No co-responsibility</i>
	Domestic work	Time domestic work	Hours week domestic work*	<i>0:168</i>
		Increase domestic work lockdown	Perception change domestic workload*	<i>Less DW, Same DW, More DW, does not know/answer</i>
		Organization domestic work home	Co-responsibility distribution domestic work home*	<i>Always existed, Developed during lockdown, No co-responsibility</i>
	Productive work	Employment modality	Employment relationship during lockdown (individual)	<i>Telework 100 %, In-person 100 %, Telework 50 %</i>
		Employment modality	Employment relationship lockdown (aggregated per household)	<i>Telework 100 %, In-person 100 %, Telework 50 %, Mixed 100 %</i>
		Increase productive work lockdown	Perception change productive work*	<i>Fewer hours, Same hours, Longer hours, does not apply, does not know/answer</i>
Expectations organization work		Future expectations teleworking	Would like to telework future	<i>Yes, No</i>
			To be able to organize work schedules*	<i>0:10</i>
Experience teleworking		Evaluation telework experience	To be able to plan breaks*	<i>0:10</i>
			To be able to disconnect at the end of the day*	<i>0:10</i>
Gender division of labour	Gender identity	Gender identity	Gender identity	<i>Woman, Man</i>
Social status	Social class	Social class occupational level	European Socio-economic Classification (ESeC) (4 groups)	<i>Managers and professionals [1:2], Intermediate [3:6], Working class [7:9], Cannot be classified [10]</i>
	Labour	Labour sector	Labour sector	<i>Public, Private, Other/does not answer</i>

* Variables referring to subjective perceptions or accounts.

Source: By authors.

TABLE 3. *Analyses related to H1*

Dependent var.	Independent var.	Subsample	Illustrative Test
Employment modality	Gender	Employed	Chi ²
Employment modality	Gender Has children < 13	Employed	Chi ²
Employment modality	Gender ESeC	Employed	Chi ²
Perception change productive work	Gender Modality	Employed	Chi ²
Perception change domestic workload	Gender Modality	Employed	Chi ²
Hours week domestic work	Gender Modality	Employed	Kruskal-Wallis Chi ²
Perception change care workload	Gender Modality	Employed and having care-workload	Chi ²
Hours week care work	Gender Modality	Employed and having care-workload	Kruskal-Wallis Chi ²
Co-responsibility distribution domestic work home	Gender Modality	Employed and in a couple	Chi ²
Subjective co-responsibility distribution care work couple	Gender Modality	Employed, in a couple and with children	Chi ²

Source: By authors.

RESULTS

The results are presented in two sections: the first addresses H1 and presents a descriptive approach to the experience of remote work and its effects. The second section addresses H2 and presents an approach to the future desirability of this work modality.

The experience of remote work during the pandemic

On March 14, 2020, a state of emergency was declared by the government of Spain, which marked the first period of general lockdown of the population to curtail the COVID-19 pandemic. During this period, which lasted until June, all activities were suspended except those considered essential³. In addition, all companies were urged

to facilitate telework as much as possible. Never before in Catalan society had teleworking been implemented in such a massive way, and this implementation provides an unprecedented opportunity to evaluate in detail a work modality that was already being discussed as having a potentially substantial effect on the work sphere before the pandemic. However, the extraordinary circumstances under which this change was implemented —hastily, in the midst of a pandemic and with schools closed— in many cases required workers to perform paid work and care for children at the same time, creating a circumstance that differed from that of conventional telework.

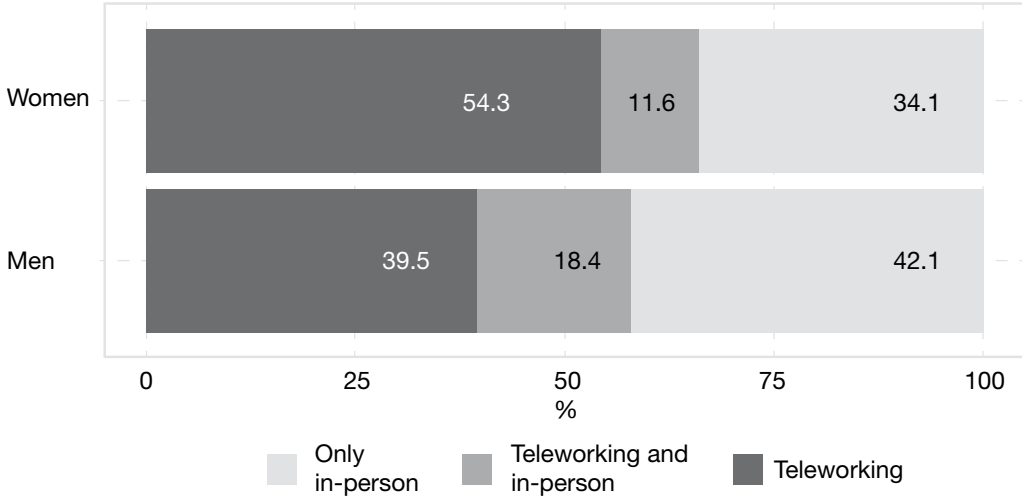
During the first fortnight of May, more than half (61.7 %) of the employed sample was able to adapt in some way to this employment modality. A total of 46.5 % of the sample worked only from home, 15.2 % combined working from home with in-person work, and the remaining 38.3 % maintained in-person work. The first notable as-

³ See Royal Decree 463/2020 of March 14.

pect of the implementation of remote work (teleworking or teleworking and in-person) in the context of the pandemic in Catalonia

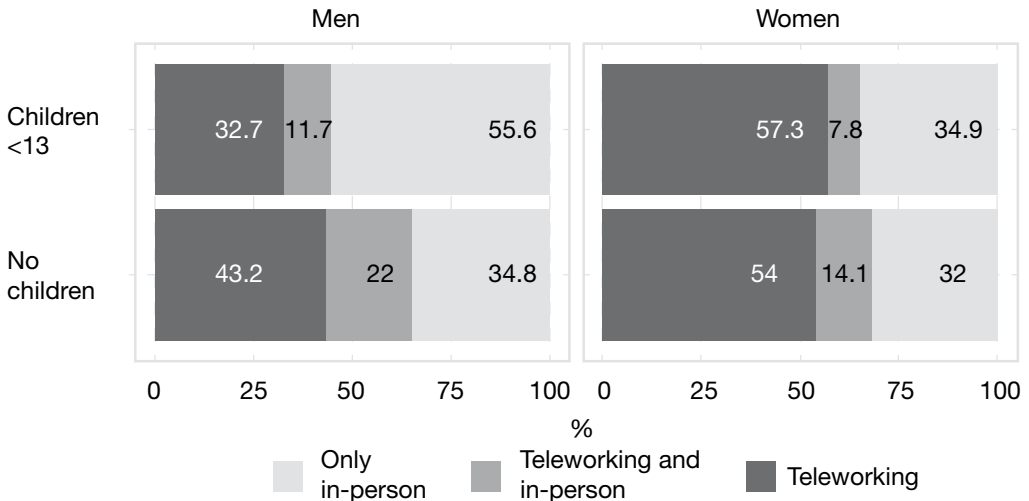
is that it was more common among women than among men (Graph 1) ($\text{Chi}^2 = 40.8$, $\text{DF} = 2$, $\text{p-value} = 0.000$).

GRAPH 1. Employment modality by gender identity. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)



Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

GRAPH 2. Employment modality by gender identity and the presence of children under 13 years of age in the home. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)



Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

The second relevant aspect is that the difference between women and men seems even more pronounced when children under 13 years of age live in the home (Graph 2)

($\text{Chi}^2 = 93.5$, $\text{DF} = 6$, $\text{p-value} = 0.000$). In these cases, the percentage of men who worked remotely decreased to 32.7 %, while that of women increased to 57.3 %. As seen in

Graph 2, this difference is reduced when there are no minors in the household. Out of the four groups that result from combining gender and presence of children, the one that behaves distinctly are men with children. The results suggest that the presence of children under 13 years of age in the home seems to have had a dissuasive effect on telework for men. The opposite could be true for women, for whom remote work was the majority option, regardless of children. Remote work during this period could have reinforced the caregiver role of mothers, but not fathers, an issue that invites a more detailed analysis of the potential impact that the general implementation of this employment modality could have in terms of gender inequality.

Third, it should be noted that not all work activities can be carried out remotely, and

remote workers are likely subject to a class bias. The following results coincide with this premise: telework is more frequent among the higher qualified occupations, such as intermediate occupations (positions 3 through 6 in the ESeC scale) and managers and professionals (positions 1 through 2). In contrast, among workers with lower qualifications, approximately 60 % continued to perform in-person work (Table 2) ($\text{Chi}^2 = 291.7$, $\text{DF} = 14$, $p\text{-value} = 0.000$). Among the less-qualified occupations, there seem to be fewer differences between men and women in the implementation of telework: it is the minority option for everyone. In contrast, there are differences of approximately 30 percentage points in the proportions of men and women in intermediate- and high-level occupations that telework.

TABLE 4. *Employment modality by occupational category and gender identity. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)*

Gender	Work	Social class				Total
		Professional managerial	Intermediate	Working class	Cannot be classified	
Men	Teleworking	37.2	47.5	33.8	29.7	39.5
	Teleworking and in-person	31.0	21.3	4.8	37.0	18.4
	Only in-person	31.8	31.2	61.4	33.2	42.1
Women	Teleworking	62.8	67.4	31.1	68.1	54.3
	Teleworking and in-person	16.5	11.4	9.6	7.7	11.6
	Only in-person	20.6	21.2	59.3	24.2	34.1

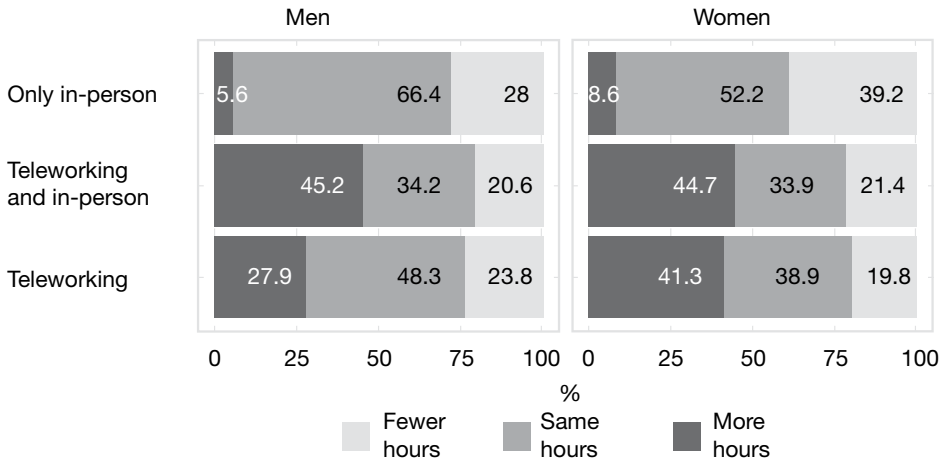
Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

Increased time spent on productive work

One of the main effects of remote work reflected in the sample is the increase in hours worked. A total of 35.3 % of the employed respondents that adopted this modality during lockdown stated that they worked more hours than before. As shown in Graph 3 ($\text{Chi}^2 = 25.1$, $\text{DF} = 6$, $p\text{-value} = 0.000$), this percentage was higher among women (41.3 %) and was

even higher among the individuals that adopted a mixed modality (45.2 % men and 44.7 % women). In contrast, among those who continued to work in person, only 6.8 % increased their work hours. In addition, a greater proportion of this sub-sample experienced a reduction in the number of hours worked per day (32.6 %). In the case of remote workers, only one in five respondents dedicated fewer hours to work.

GRAPH 3. Change in hours worked by employment modality and gender identity. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)



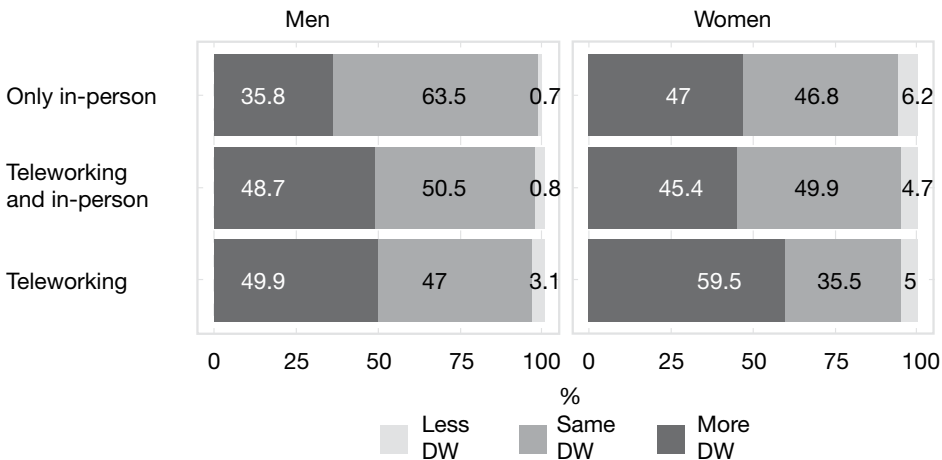
Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

Increase in domestic and care work

40 % of the Catalanian sample affirmed that domestic work has increased in their home since the beginning of lockdown. This increase was more pronounced among those who teleworked (55.3 %) than among those who worked in person (40.5 %). In addition, the perception of an increase in workload was approximately 10 percent-

age points higher among women who teleworked (59.5 %) than among men who did so (49.9 %), and was 11 percentage points higher among women who worked in person (47.0 %) than among men who did so (35.8 %). In contrast, women and men who adopted a mixed modality of work seemed to have more similar evaluations (Graph 4) (Chi² = 81.3, DF = 10, p-value = 0.000).

GRAPH 4. Perception of the change in the volume of domestic work (DW) since the beginning of lockdown by employment modality and gender identity. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)

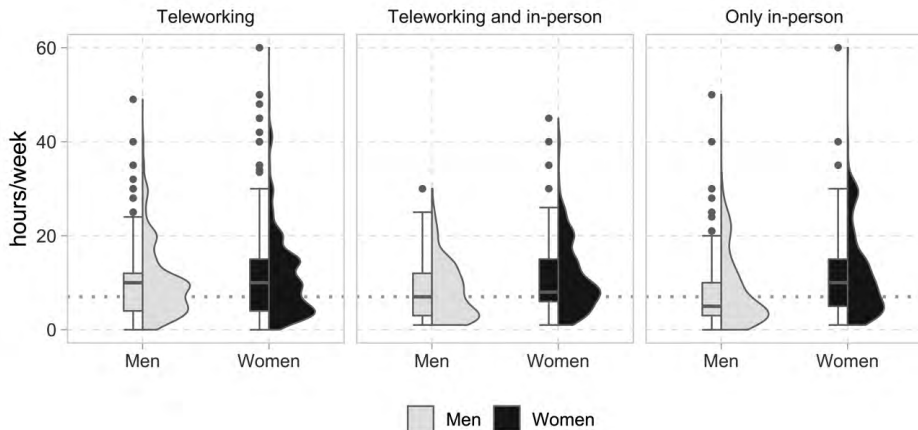


Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

In addition to the perceived volume of domestic work, the time dedicated to domestic work (in weekly hours) also shows different patterns according to gender. As shown in Graph 5 (K-W $\chi^2 = 33.7$, $DF = 5$, $p\text{-value} = 0.000$), the proportion of people who dedicated less than one hour a week to domestic work (including none) was higher among men than women, both among those who worked in person and those who combined remote and in-person work. These cases are represented by the width of the violin plot in Graph 5 at the beginning

of the y-axis (weekly hours). In contrast, the proportion of people who dedicated more than 20 hours per week to domestic work was greater among women than among men, with the threshold of 30 hours per week representing an atypical value for all groups. The dotted line indicates the reference of 7 hours per week, which is equivalent to one hour per day, 7 days per week. Fifty percent or more of women in all the work modalities were above this reference, while among men, only those who worked remotely exceeded this threshold.

GRAPH 5. Weekly hours dedicated to domestic work during lockdown by employment modality and gender identity. Employed respondents. CEO sample, 2020 (%)

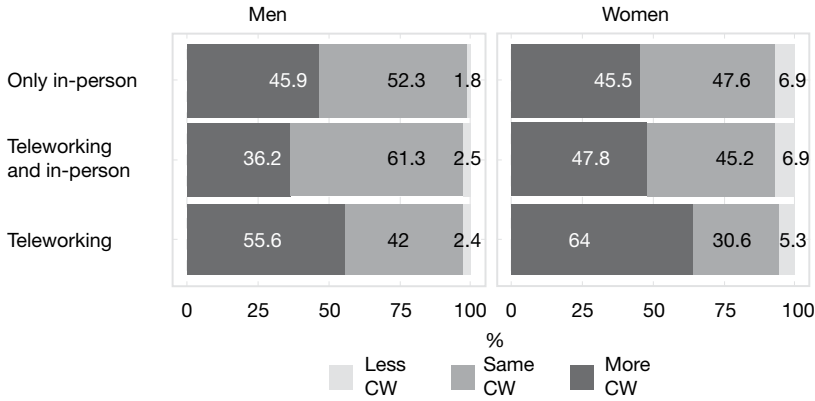


Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

Sixty point eight percent of the sample who worked remotely and 45.7 % of in-person workers stated that care work increased. Again, this perception was more persistent among women than among men in all modalities (Graph 6) ($\chi^2 = 55.5$, $DF = 10$, $p\text{-value} = 0.000$). In the case of teleworkers, there is an 8 percentage-point difference between men and women. Among mixed-modality and in-person workers, most men considered that the volume of care work remained the same, while the proportion of women

who perceived that it increased was similar to the proportion who perceived that it remained the same. In any case, the mixed-modality workers stand out as having the lowest proportion of men who perceived an increase in care work, reinforcing the hypothesis that having children under 13 years of age at home could be a deterrent for men to telework. In short, remote work during lockdown was accompanied by an increase in reproductive labour that was perceived more strongly by women than by men.

GRAPH 6. Perception of the change in the volume of care work (CW) since the beginning of lockdown by employment modality and gender identity. Employed sample with a care workload. CEO sample, 2020 (%)



Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

The number of hours dedicated to care work shows the following patterns, as can be observed in Graph 7 (K-W $\chi^2 = 32.6$, $DF = 5$, $p\text{-value} = 0.000$). At the lower end of the y axis, and among those who had a care workload, the proportion of respondents who dedicated less than one hour per week (including none) to care work was much greater among men than among women, as shown by the width of the base of the violins. At the upper end, atypical values among men (in all work modalities) occur at approximately 60 hours per week

(8.6 hours per day), while among women, the atypical values begin at 80 hours per week (11.4 hours per day). The dotted line marks the reference of 14 hours per week (2 hours per day), a limit that was exceeded by 75 % of women with a care workload who engaged in remote work or mixed modality work and by more than 50 % of women who worked in person. Among men, only in the group that worked remotely did more than 50 % of the respondents exceed the threshold of 14 hours per week.

GRAPH 7. Weekly hours dedicated to care work during lockdown by employment modality and gender identity. Employed respondents with a care workload. CEO sample, 2020 (%)



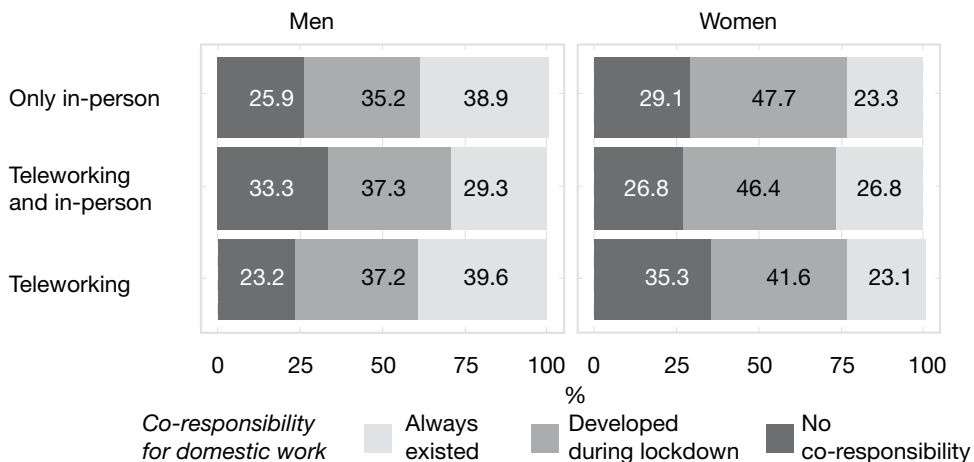
Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

Finally, the analysis addresses the perceptions of men and women about the distribution of reproductive labour in the main couple of the household (for households where a couple lives) as can be observed in Graph 8 ($\text{Chi}^2 = 25.3$, $\text{DF} = 2$, $p\text{-value} = 0.000$).

First, the perceptions of men and women on this issue differ, men being more optimistic. While 36.0 % of men stated that the distribution of domestic work was already equal between the partners before lockdown, only 22.4 % of women saw it the same way. These trends are reproduced almost exactly with respect to co-responsibility in the care of children, although in this case, the discrepancy between men and women is greater. A total of 27.1 % of women and 22 % of men denied that co-responsibility existed in their households.

Second, if these perceptions are analysed according to the work modality during lockdown, different relevant trends can be observed. Women who teleworked were most likely to consider that domestic work was not distributed equally (1 in 3) and least likely to indicate that the distribution of domestic work became equal during the lockdown. On the other hand, women who performed mixed modality work or worked in person perceived to a larger extent that the lockdown contributed to co-responsibility for domestic tasks (between 5 and 6 percentage points above those who teleworked). These results reinforce the hypothesis that the absence of women in the home for work reasons favours the equal distribution of domestic work. In contrast, women teleworking could hinder co-responsibility.

GRAPH 8. Perception of the equal distribution of domestic work between the members of the main couple of the household by gender identity and employment modality among the respondents that were employed and in a couple. CEO sample, 2020 (%)

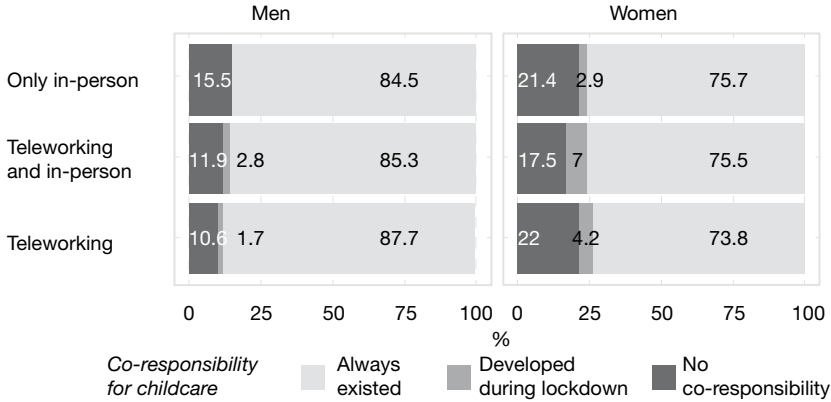


Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

The negative impact of remote work on the distribution of reproductive work is suggested in the data when looking at the perception of co-responsibility for the care of children (Graph 9) ($\text{Chi}^2 = 33.4$, $\text{DF} = 10$, $p\text{-value} = 0.000$). In this case, women who

teleworked exclusively were more likely than those who worked in a mixed modality to state that co-responsibility does not exist (22 % compared to 17.5 %) and were the least likely to state that the lockdown situation improved co-responsibility (4.2 % versus 7 %).

GRAPH 9. Perception of co-responsibility for childcare between the members of the main couple of the household by gender identity and employment modality. Employed respondents with children and in a couple. CEO sample, 2020 (%)



Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

The evaluation of remote work

To extend the analysis on the evaluation of remote work, a sequence of logistic regression models was run with a focus on structural, relational, and experiential factors. The evaluation of whether telework could be a good way to organize one's work in a future non-lockdown scenario was taken as a dependent variable. An affirmative response was considered the reference category. To better capture the effect of the explanatory factors, these were introduced progressively in blocks. First, structural factors, including gender, phase of the life cycle (if child or dependent adult care workloads were present) and social class, measured by occupational category and activity sector, were considered. Second, aspects related to the productive and reproductive workloads of household members were introduced; such factors included engagement in remote work among household members, weekly hours dedicated to domestic work and weekly hours dedicated to care work⁴. Third, variables regarding the evalua-

tion of the experience of remote work were incorporated. These included whether it was possible a) to organize a work schedule, b) to plan breaks and c) to disconnect once working hours ended. Finally, two interactions by gender were incorporated for a more detailed analysis of the differences between men and women: one considered the occupational category, and the other considered the ability to disconnect once work hours were over.

This sequence of models used the subsample of respondents that engaged in some form of remote work. The results suggest that the overall evaluation of telework depended mainly on structural factors and personal experience. The exceptional nature of the period under study, including a lockdown, demanded considering the relational factors. Nevertheless, structural and experiential variables were more relevant.

many hours”, “too many” or “all hours possible”. In any case, a consistent criterion was applied but based on the subjective judgement of the researcher. Second, the answers could not capture the differences between synchronous and asynchronous work, which occurs frequently in dual-presence situations. Finally, to keep people who did not have a care workload in the model, a value of -1 for the variable hours dedicated to care work was assigned to them, with the assumption that this could introduce some bias.

⁴ It is important to provide some notes regarding the statistical treatment of these variables. First, the variable number of hours dedicated to work was recoded from literal answers that included both specific figures and, sometimes, expressions such as “I do not know;

As Table 3 shows, when the block of structural factors is introduced (M1), women have a lower probability than men of positively evaluating the implementation of telework after the lockdown. The same occurs for working-class respondents compared to middle-class respondents (professionals and managers). Among the workload distribution factors (M2), the domestic workload appears to be meaningful: the dedication of more weekly hours to domestic work is associated with a lower desire to telework in

the future. Regarding the lived experience with remote work (M3), respondents who were able to disconnect after working hours had a higher probability of positively evaluating telework than those who were not able to disconnect. However, in relation to this question, significant differences are found between men and women, as observed with the interactions introduced with model 4. In this case, the labour category is still significant, but the hours dedicated to domestic work cease to be.

TABLE 5. Logistic regression model for the evaluation of remote work. Respondents that engaged in remote work. CEO sample, 2020

	M1: Structural	M2: Workload distribution	M3: Experience with RW	M4: Interactions
Predictors	Odds Ratios	Odds Ratios	Odds Ratios	Odds Ratios
(Intercept)	16.560***	23.050***	8.670***	5.970**
Gender [Men]	Reference	Reference	Reference	Reference
Gender [Women]	0.600*	0.620*	0.680	1.470
Life-cycle [No care work]	Reference	Reference	Reference	Reference
Life cycle [Care of adults]	1.070	1.040	1.010	1.130
Life cycle [Care of children]	1.390	1.470	1.420	1.560
Class [Managerial]	Reference	Reference	Reference	Reference
Class [Intermediate]	0.860	0.850	0.660	0.620
Class [Working]	0.210***	0.210***	0.150***	0.110***
Class [can't classify]	0.690	0.820	1.680	3.310
Sector [Public]	Reference	Reference	Reference	Reference
Sector [Private]	1.200	1.180	1.050	0.990
Sector [Other]	1.280	1.260	1.280	1.230
Hours/week Domestic Work		0.970*	0.970*	0.980
Hours/week Care Work		1.000	1.000	1.000
Work org household [TW 100 %]		Reference	Reference	Reference
Work org household [TW 50 %]		1.220	1.060	1.010
Work org household [MX 100 %]		0.830	0.820	0.770
Eval. Time			0.990	0.980
Eval. Pauses			1.080	1.080
Eval. Disconnect			1.170***	1.340***
Women * Middle class				1.050
Women * Lower class				1.490
Women * Can't classify class				0.260
Women * Disconnect				0.800**
Observations	1,664	1,664	1,664	1,664
R ² Tjur	0.068	0.069	0.098	0.093
AIC	343,229	342,922	318,822	314,464

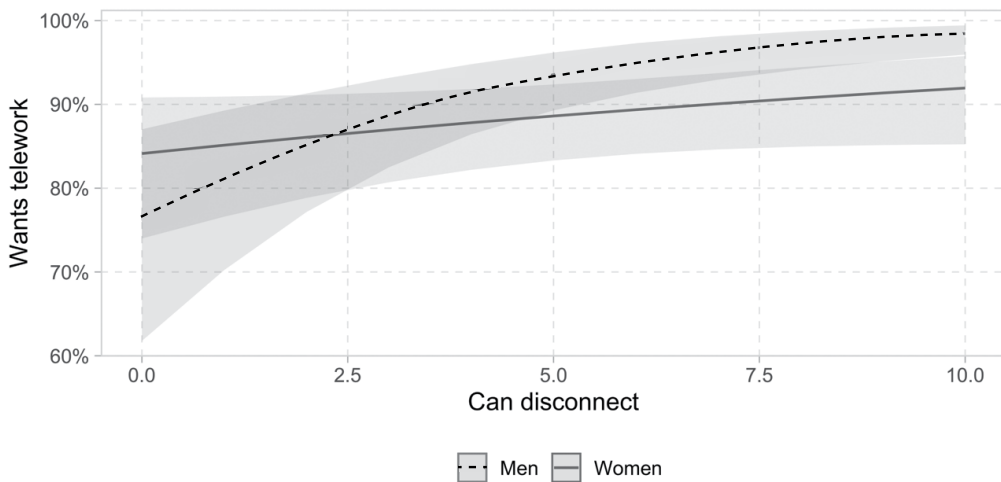
Note: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.

Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

The predicted probabilities of the interaction term suggest that being able to disengage from work (during non-working hours) for teleworkers might be more relevant for men than for women (Graph 10). In other words, when men had a higher relative score for the ability to disconnect, their predicted probability of wanting access to telework is close to 100 %, indicating that this could be a determining factor for men but not for women. The interpretation of these results reinforces the hypothesis that the experience of remote work has been more complex for women, for whom lock-

down has meant more responsibility within the home and has conditioned their evaluation of future telework scenarios. One possible explanation is that, in addition to greater co-responsibility, women have undertaken a greater burden of domestic work, and consequently, disconnection from work is not enough for them to positively evaluate the modality of teleworking. The total load of both reproductive and paid work, which was higher for women, would account for the loss of significance of the hours dedicated to domestic work when the interactions are introduced in model 4.

GRAPH 10. Predicted probabilities of the evaluation of telework by gender identity based on the possibility of disconnecting from work once working hours are over. CEO sample, 2020



Source: By authors based on CEO data, Encuesta sobre los usos del tiempo y el confinamiento, 2020.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

This article contributes to the debate on the gender impact of telework, using the home lockdown of the Catalanian population during the first months of the COVID-19 pandemic as a case study. Specifically, it analyses whether the experience of remote work reinforced traditional gender roles or co-responsibility within households.

Regarding the theoretical debate, the results drawn from this sample are congruent

with the *exploitation model* described in the specialized literature. This highlights the risks associated with the regulation of telework beyond the context of the pandemic from a gender perspective. In other words, telework, understood as a form of labour organization, could reproduce the gender division by increasing the total workload of women and reinforcing traditional gender roles and stereotypes (Haddon and Silverstone, 1993).

Regarding the line of research that emerged recently on the gender impact of

COVID-19, the results presented in this article concur with those of other studies that show the reproduction and reinforcement of gender inequalities during the first months of the pandemic. Specifically, the increase in the volume of domestic work fell largely on women, the narrowing of the gender gap in the use of time corresponds to the increased uptake of childcare among men, and the lockdown generated higher costs for women. This is clear from analyses carried out at the international level in different countries that experienced home lockdown and the closure of schools (Craig and Churchill, 2020; Collins *et al.*, 2020; Farré *et al.*, 2020; Hank and Steinbach, 2020; Sevilla and Smith, 2020; Seiz, 2021).

This article contributes to these discussions with an analysis of the experience and evaluation of remote work by men and women in Catalonia during the first months of the pandemic, which coincided with the closure of schools. The first hypothesis proposes that, far from favouring co-responsibility in domestic and care work, remote work during home lockdown reinforced traditional gender roles. In this sense, the results suggest that remote work could have affected women more strongly than men, particularly among mothers of children under 13 years of age compared to fathers. Additionally, workers in highly qualified occupations would also have been affected to a larger extent. Regarding the initial impact of the experience of remote work, a greater proportion of women than men in the sample perceived an increase in both productive and domestic work, which is revealed by the reported number of hours dedicated to such work. Similarly, teleworking was the modality that least facilitated co-responsibility among women respondents. Despite the heterogeneity of work modalities, the experience of remote work appears to have been worse among women than among men, reinforcing the gender gap in repro-

ductive labour and increasing the number of hours of paid work.

The second hypothesis suggests that people's evaluation of remote work does not depend as much on classic structural factors (such as gender, phase of the life cycle or social class) as on the lived experience of the organization of work modalities among household members. The results of the logistic regression analysis highlight the interaction of structural, relational and experiential factors in shaping future expectations regarding telework. The different models point to the relevance of structural (gender and job category), relational (distribution of domestic work) and experiential factors (the possibility of disconnecting from work). However, the interactions suggest that men are more likely than women to evaluate telework positively when they are able to disconnect from work. One possible explanation is related to different perceptions of what "disconnecting" means, in relation to the total workload. The meaning of disconnection when domestic and caregiving responsibilities are not undertaken follows the logic of the paid workday: for men, finishing their workday means disconnecting. In contrast, the combination of work, domestic and care responsibilities in the same space explains why women in dual-presence environments could have more difficulties feeling that they had disconnected. Alternatively, women's experiences could be marked by a permanent synchronic logic of productive and reproductive labour that prevented disconnection and conditioned the evaluation of telework.

The results suggest the need to continue analysing the weight of the different daily experiences linked to the routines of lockdown from the perspective of gender. Additionally, it is necessary to consider the possible risks if future regulations of telework do not consider the persistence of an unequal distribution of domestic

and care work between men and women. Neglecting this reality can turn remote work into a false solution for reconciling work and family life for women. However, the results point to the transformational potential of this modality when it affects straight men whose partners perform in-person work.

BIBLIOGRAPHY

- Actis di Pasquale, Eugenia; Iglesias-Onofrio, Marcela; Pérez de Guzmán, Sofía and Viego, Valentina (2021). "Teletrabajo, vida cotidiana y desigualdades de género en Iberoamérica". *Revista Economía Crítica*, 1(31): 44-61.
- Aguado, Empar and Benloch, Cristina (2020). "Teletrabajo y conciliación: el estrés se ceba con las mujeres". *The Conversation*. Available at: <https://theconversation.com/teletrabajo-y-conciliacion-el-estres-se-ceba-con-las-mujeres-137023>, access 15 November, 2021.
- Alon, Titan; Doepke, Matthias; Olmstead-Rumsey, Jane and Tertilt, Michele (2020). "The Impact of COVID-19 on Gender Equality". [Working paper series No. 26947]. *National Bureau of Economic Research*. doi: 10.3386/w26947
- Bae, Kwang Bin and Kim, Dohyeong (2016). "The Impact of Decoupling of Telework on Job Satisfaction in U.S. Federal Agencies: Does Gender Matter?". *The American Review of Public Administration*, 46(3): 356-371. doi: 10.1177/0275074016637183
- Beauregard, T. Alexandra and Basile, Kelly (2016). "Strategies for Successful Telework: How Effective Employees Manage Work/Home Boundaries". *Strategic HR Review*, 15(3): 106-111. doi: 10.1108/SHR-03-2016-0024
- Belzunegui-Eraso, Ángel (2002). *Teletrabajo: Estrategias de flexibilidad*. Madrid: Consejo Económico y Social.
- Benería Farré, Lourdes (1981). "Reproducción, producción y división sexual del Trabajo". *Mientrastanto*, 6: 47-84.
- Brines, Julie (1994). "Economic Dependency, Gender, and the Division of Labor at Home". *American Journal of Sociology*, 100(3): 652-688.
- CEO (2020a). *Fitxa Tècnica Enquesta sobre els usos del temps i el confinament*. Barcelona: Centre
- Estudis Opinió. Available at: <https://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/societat/detall/index.html?id=7608>, access 10 July, 2021.
- CEO (2020b). *Qüestionari Enquesta sobre usos del temps i el confinament*. Barcelona: Centre Estudis Opinió. Available at: <https://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7608/Cuestionario%20-966.pdf>, access 10 July, 2021.
- Chung, Heejung and Horst, Mariska van der (2018). "Women's Employment Patterns after Childbirth and The Perceived Access to and Use of Flexitime and Teleworking". *Human Relations*, 71(1): 47-72. doi: 10.1177/0018726717713828
- Collins, Caitlyn; Landivar, Liana C.; Ruppanner, Leah and Scarborough, William. J. (2020). "COVID-19 and the Gender Gap in Work Hours". *Gender, Work and Organization*, 28(1): 101-112. doi: 10.1111/gwao.12506
- Craig, Lyn and Churchill, Brendan (2020). "Dual-Earner Parent Couples' Work and Care during COVID-19". *Gender, Work and Organization*, 28(1): 66-79. doi: 10.1111/gwao.12497
- Eurofound (2017). *Working Anytime, Anywhere: The Effects on the World of Work*. Geneva: Publications Office of the European Union, Luxembourg and the International Labour Office.
- Eurofound (2020). *Telework and ICT-Based Mobile Work: Flexible Working in the Digital Age, New Forms of Employment Series*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Farré, Lidia; Fawaz, Yarine; González, Libertad and Graves, Jennifer (2020). *How the COVID-19 Lockdown Affected Gender Inequality in Paid and Unpaid Work in Spain* (No. 13434). IZA Discussion Papers.
- Farré, Lidia and González, Libertad (2019). "Does Paternity Leave Reduce Fertility?". *Journal of Public Economics*, 172: 52-66. doi: 10.1016/j.jpubeco.2018.12.002
- Gálvez Mozo, Ana M.; Tirado, Francisco and Alcaraz, José M. (2020). "'Oh! Teleworking!' Regimes of Engagement and the Lived Experience of Female Spanish Teleworkers". *Business Ethics: A European Review*, 29(1): 180-192. doi: 10.1111/beer.12240
- Golden Timothy D.; Veiga John F. and Simsek Zeki (2006). "Telecommuting's Differential Impact on Work-family Conflict: Is There No Place like Home?". *Journal of Applied Psychology*, 91(6): 1340-1350. doi: 10.1037/0021-9010.91.6.1340

- González Ramos, Ana M. and García-de-Diego, José M. (2022). "Work-Life Balance and Teleworking: Lessons Learned during the Pandemic on Gender Role Transformation and Self-Reported Well-Being". *International Journal Environmental Research Public Health*, 19(14): 8468. doi: 10.3390/ijerph19148468
- Haddon, Leslie and Silverstone, Roger (1993). "Teleworking in the 1990s: A View from the Home". *SPRU/ CICT, inform n.º 10*, Falmer, Sussex, UK: Universidad de Sussex.
- Hank, Karsten and Steinbach, Anja (2020). "The Virus Changed Everything, Didn't It? Couples' Division of Housework and Childcare Before and During the Corona Crisis". *Journal of Family Research*, 33(1): 99-114. doi: 10.20377/jfr-488.
- Hilbrecht, Margo; Shaw, Susan M.; Johnson, Laura C. and Andrey, Jean (2008). "I'm Home for the Kids': Contradictory Implications for Work-life Balance of Teleworking Mothers". *Gender, Work and Organization*, 15(5): 454-476. doi: 10.1111/j.1468-0432.2008.00413.x
- Huws, Ursula; Podro, Sarah; Gunnarsson, Ewa; Weijers, Thea; Arvanitaki, Katerina and Trova, Vangelio (1996). *Teleworking and Gender*. Institute for Employment Studies, Report 317.
- Kelly, Erin. L; Moen, Phyllis; Oakes, J. Michael; Fan, Wen; Okechukwu, Cassandra; Davis, Kelly; Hammer, Leslie; Kossek, Ellen Ernest; King, Rosalind; Hanson, Ginger; Mierzwa, Frank and Casper, Lynne M. (2014). "Changing Work and Work-Family Conflict: Evidence from the Work, Family, and Health Network". *American Sociological Review*, 79(3): 485-516. doi: 10.1177/0003122414531435
- Madsen, Susan R. (2011). "The Benefits, Challenges, and Implication of Teleworking: A Literature Review". *Journal of Culture and Religion*, 1(1): 148-158.
- Mayo, Margarita; Pastor, Juan C.; Cooper, Cary and Sanz-Vergel, Ana I. (2011). "Achieving Work-family Balance Among Spanish Managers and their Spouses: A Demands-control Perspective". *The International Journal of Human Resource Management*, 22(2): 331-350. doi: 10.1080/09585192.2011.540158
- Mirchandani, Kiran (2000). "The Best of Both Worlds' y 'Cutting My Own Throat': Contradictory Images of Home-based Work". *Qualitative Sociology*, 23(2): 159-182. doi: 10.1023/A:1005448415689
- Mooi-Reci, Irma and Risman, Barbara J. (2021). "The Gendered Impacts of COVID-19: Lessons and Reflections". *Gender and Society*, 35(2): 161-167. doi: 10.1177/08912432211001305
- Moreno Colom, Sara and Borràs Català, Vicent (2021). *Que teletrabajen ellos. Aprendizajes de la pandemia más allá de lo obvio*. Barcelona: MRA Ediciones.
- Ortiz-Lozano, José M.; Martínez-Morán, Pedro C. and Fernández-Muñoz, Iván (2021). "Difficulties for Teleworking of Public Employees in the Spanish Public Administration". *Sustainability*, 13: 8931. doi: 10.3390/su13168931
- Pearse, Rebecca and Connell, Raewyn (2016). "Gender Norms and the Economy: Insights From Social Research". *Feminist Economics*, 22(1): 30-53. doi: 10.1080/13545701.2015.1078485
- Pérez Sánchez, Carmen (2010). "El teletrabajo: ¿Más libertad o una nueva forma de esclavitud para los trabajadores?". *Revista de Internet, Derecho y Política*, 11: 24-32. Available at: <https://raco.cat/index.php/IDP/article/view/225853>
- Pérez Sánchez, Carmen and Gálvez Mozo, Ana M. (2009). "Teletrabajo y vida cotidiana: ventajas y dificultades para la conciliación de la vida laboral personal y familiar". *Athenea Digital*, 15: 57-79.
- R Core Team (2020). *R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing*. Vienna, Austria. Available at: <https://www.R-project.org/>, access 10 July, 2021.
- Salganik, Matthew (2017). *Bit by Bit: Social Research in the Digital Age*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Open Review Edition.
- Seiz Puyuelo, Marta (2021). "Equality in Confinement: Nonnormative Divisions of Labour in Spanish Dual-Earner Families During the Covid-19 Lockdown". *Feminist Economics*, 27(1-2): 345-361. doi: 10.1080/13545701.2020.1829674
- Sevilla, Almudena and Smith, Sarah (2020). "Baby Steps: The Gender Division of Childcare during the COVID19 Pandemic". *Discussion Paper Series IZA*. doi: 10.1093/oxrep/graa027
- Sullivan, Cath (2003). "What's in a Name? Definitions y Conceptualizations of Teleworking and Work at Home". *New Technology, Work and Employment*, 18(3): 158-165. doi: 10.1111/1468-005X.00118
- Sullivan, Cath and Lewis, Suzan (2001). "Home-based Telework, Gender, and the Synchrono-

nization of Work and Family: Perspectives of Teleworkers and their Co-residents". *Gender, Work and Organization*, 8(2): 123-145. doi: 10.1111/1468-0432.00125

Titan, Alon; Doepke, Matthias; Olmstead-Rumsey, Jane and Tertilt, Michèle (2020). "The Impact of

Covid-19 on Gender Equality". *Covid Economics, Vetted and Real-Time Papers, The Centre for Economic Policy Research*, 4: 62-85.

West, Candace and Zimmerman, Don H. (1987). "Doing Gender". *Gender and Society*, 1(2): 125-151. doi: 10.1177/0891243287001002002

RECEPTION: May 10, 2022

REVIEW: July 14, 2022

ACCEPTANCE: September 23, 2022

Ilustración y ascesis climáticas: dos caras de la conciencia sobre el cambio climático en España

*Climate Enlightenment and Asceticism:
Two Sides of Climate Change Consciousness/Conscience in Spain*

Ramón Ramos Torre y Javier Callejo Gallego

Palabras clave

- Ascesis climática
- Cambio climático
- Concienciación climática
- Ilustración climática
- Perspectiva *emic*
- Preocupación climática
- Reuniones de grupo

Key words

- Climate Asceticism
- Climate Change
- Climate Conscientisation (Awareness and Conscience)
- Climate Enlightenment
- Emic Perspective
- Climate Concern
- Focus Groups

Resumen

Las investigaciones sociológicas sobre la preocupación por el cambio climático [CC] suelen mostrar su carácter ambivalente: una preocupación despreocupada, que se afirma y se niega a la vez. De esta ambivalencia parte este trabajo. Centra su atención en el material empírico proporcionado por una reciente investigación cualitativa sobre CC en España. Ese material indica que las ambivalencias de la preocupación se pueden resolver por medio de un complejo proceso de concienciación. Nuestro análisis rastrea los sentidos que adquiere la concienciación en los grupos de discusión realizados. Concluye mostrando el doble sentido (cognitivo y deóntico) de la concienciación: por un lado, como un proceso de ilustración cognitiva; por el otro, como un proceso de ascetismo moral. En ese marco se generan los elementos para administrar la ambivalencia de la preocupación climática.

Abstract

Sociological research on concern about climate change is often ambivalent: an unconcerned concern which is both affirmed and denied at the same time. This article takes this ambivalence as its starting point. It focuses on the empirical material provided by recent qualitative research on CC in Spain. This material indicated that ambivalent concern can be resolved through a complex process of critical consciousness/conscience (CC/C). Our analysis traced the meanings given to conscientisation in the focus groups conducted. The conclusion was that there was a twofold (cognitive and deontic) meaning of conscientisation, namely, as a process of cognitive enlightenment and a process of moral asceticism. This framework provides the elements for managing ambivalence in climate concern.

Cómo citar

Ramos Torre, Ramón; Callejo Gallego, Javier (2023). «Ilustración y ascesis climáticas: dos caras de la conciencia sobre el cambio climático en España». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 101-120. (doi: 10.5477/cis/reis.183.101)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Ramón Ramos Torre: TRANSOC-UCM | rrt@cps.ucm.es

Javier Callejo Gallego: TRANSOC-UNED | mcallejo@poli.uned.es

INTRODUCCIÓN¹

La ingente literatura académica y de divulgación sobre el cambio climático [CC] está dominada por la reiteración de una pregunta: ¿por qué estamos y actuamos tan despreocupados ante algo que, sin embargo, aseguramos que nos preocupa?, ¿por qué esa sorprendente preocupación despreocupada (Ramos y Callejo, 2022)? Para dar razón de la situación, se ha propuesto, entre otras cosas, que se trata de inconsistencias (Lorenzoni, Nicholson-Cole y Whitmarsh, 2007), contradicciones (García, 2008), paradojas (Leiserowitz, 2006), ambivalencias (Carolan, 2010), brechas (Blake, 1999) o realidades dobles (Norgaard, 2011). Y para explicar tal estado de cosas, se ha desatado desde hace más de veinte años una dinámica creciente de investigaciones y publicaciones. Los resultados alcanzados (Dunlap, 1998; Lorenzoni y Pidgeon, 2006; Nisbet, 2011; Reynolds *et al.*, 2010; Roser-Renouf y Nisbet, 2008; Weber, 2016) son sustanciosos, pero no concluyentes; como se trata de programas de investigación todavía en marcha, cabe esperar todavía más.

Este trabajo intenta aportar al debate. En su primer apartado, resume los principales resultados de lo ya investigado; en el segundo, presenta las líneas maestras de una investigación sobre incertidumbre y CC en España realizada recientemente, algunos de cuyos datos se utilizan²; en el tercero, se da cuenta de cómo conciben los sujetos estu-

diados la (des)preocupación por el CC; en el cuarto, se aborda su concepción de la concienciación como proceso de acceso a una preocupación climática plena; en el quinto y último, se presentan las conclusiones.

INVESTIGACIONES SOBRE CONCIENCIACIÓN CLIMÁTICA

El objeto de estudio es lo que llamamos concienciación climática. En la enorme literatura internacional que enfrenta el problema, las denominaciones son muy variadas; raramente, se denomina concienciación³. En unos trabajos, se presenta en los términos de un problema de orden cognitivo que lleva a indagar las condiciones que hacen posible la percepción o la conciencia o el darse cuenta (*awareness, consciousness*) o el aprendizaje tecnocientífico o el interés por saber o la manera de concebir el CC. Otros trabajos hablan más bien de aspectos emocionales y estudian los procesos que generan preocupación (*worry, concern, preoccupation*) climática o el trauma emocional o el temor o la angustia ante el CC. Hay, por último, relevantes trabajos que se interesan por los aspectos prácticos, intentando dar las razones de los procesos que llevan al compromiso, la implicación, el cuidado, el activismo o el paso de la inacción a la acción en los asuntos climáticos. Es evidente que la cognición, las emociones o la acción constituyen temas sustantivos en sí mismos, pero no es menos cierto que pueden tomarse como aspectos o caras del doble problema

¹ Los autores desean agradecer el trabajo llevado a cabo por los evaluadores a los que la *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* remitió el artículo, cuyos comentarios han sido de gran utilidad.

² Proyecto «Incertidumbre y cambio climático», INCER-CLIMA, financiado por el «Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2017» (CSO2017-84007-R). Los autores del artículo desean agradecer la concesión de los recursos para llevar a cabo este proyecto, así como la colaboración encontrada en los otros miembros del equipo: Ernest García, José Manuel Rodríguez y Marina Requena, de la Universidad de Valencia; Emilio Luque y Yolanda

Agudo, de la UNED; y Pablo Luis P. Francescutti, de la Universidad Rey Juan Carlos.

³ En *Sociological Abstracts*, «Climate Change Conscientisation» aparece solo en once ocasiones, como traducción de trabajos de lenguas latinas. Tampoco en francés (*conscientisation*) es usual; en italiano no aparece la voz; tampoco en portugués. Con todo, el término aparece en ocasiones relevantes; por ejemplo, en el discurso de la modernización ecológica (véase Stevenson y Dryzek, 2014: 43).

de fondo que suscita la preocupación despreocupada: ¿por qué nos despreocupamos realmente por lo que decimos que nos preocupa?, ¿qué se puede hacer para superar esa situación y ser coherentes? Un rápido y muy selectivo recorrido por la literatura reciente sobre el tema permitirá dar cuenta de las respuestas disponibles. Atenderemos tan solo a las que consideramos relevantes en razón del objeto de nuestro análisis en páginas posteriores.

Aunque haya que considerarlo un hecho total (Hulme, 2009), pues a todo afecta y en todo se muestra, el CC se nos presenta inmediatamente como un hecho construido por la ciencia (Jasanoff, 2010; Weber y Stern, 2011), extraño en principio a la experiencia legítima y cotidiana del mundo. En consecuencia, el problema de la despreocupación climática se ha visto trasladado al problema general de la socialización científica o, en términos más expresivos, de la alfabetización científica de la población en general. Esta línea epistémica de investigación se formalizó en un influyente trabajo de Bostrom *et al.* (1994) y en el libro de Kempton, Boster y Hartley (1995) sobre los valores medioambientales en EE. UU. Domina la idea de que la despreocupación climática es producto provisional de déficits en la alfabetización científica general. En consecuencia, cuando en el futuro se supere tal carencia, el problema se resolverá.

Sin embargo, no parece que los datos corroboren que los ciudadanos supuestamente más ilustrados y con mayor cultura científica sean especialmente sensibles al problema del CC, ni tampoco parece que dispongan de una idea del asunto más cercana a la de los científicos y más alejada de la cultura medioambiental general (Kahan *et al.*, 2012). En consecuencia, nada indica que el esfuerzo de divulgación de la ciencia del CC haya obtenido sus frutos.

Ante este fracaso, algunos han optado por mantenerse en el marco del paradigma

epistémico, enriqueciéndolo con algunas novedades puntuales. Una novedad consiste en sustituir la imposible alfabetización científica universal por la generalización de la confianza en la ciencia y los científicos (Dunlap, 1998) o en las instituciones que dictan la política climática (Lorenzoni y Pidgeon, 2006). Desde este punto de vista, se supone que, si bien los legos no llegarán a saber más y mejor qué es el CC, es posible que puedan otorgar más confianza a lo que la ciencia o los científicos aseveran. En otros casos, se propone reformar el descarnado y abstracto lenguaje de los científicos del clima para hacerlo más accesible a la gente (Brace y Geoghegan, 2011), de forma que tengan una visión clara de las consecuencias del CC. También hay una variante más radical que propone romper el círculo infernal de una ciencia esotérica y encerrada comunicativamente sobre sí misma, y apuesta por el modelo de la ciencia posnormal, que rompe el abismo entre especialistas y legos (Krauss, Schäfer y Storch, 2012). En algunas corrientes de investigación, incluso se apunta que la clave está en que la gente reconozca en su día a día, en los fenómenos meteorológicos extremos (Koninski, Hughes y Kaylor, 2016; Hughes, Konisky y Potter, 2020) o en las variaciones atípicas de las temperaturas (Zaval *et al.*, 2014), un campo de experiencia del CC que sea base suficiente para disparar una preocupación y conciencia climáticas a la altura de la situación.

Otra línea de investigación enfatiza el papel de las emociones. Se presenta como complemento del modelo epistémico y su pregunta típica (¿por qué no atendemos a la ciencia?), pero introduce un relevante desplazamiento de lo cognitivo a lo emocional. Centrando su atención en las reacciones afectivas que suscitan sus imágenes típicas, indaga directamente cómo y hasta dónde se genera la preocupación climática (Leiserowitz, 2005 y 2006). Los resultados típicos de esta línea de investigación consisten en destacar la existencia de una preocupación climática que no

está suficientemente cargada en términos emocionales como para desplazar a otras más prosaicas. Los ciudadanos se distribuyen en distintas comunidades interpretativo-afectivas, entre las que los despreocupados (cautos, indiferentes o negacionistas) son numerosos. El tema central de atención se convierte entonces en indicar las barreras, individuales y sociales, que explican grados de (des)preocupación tan diversos (Lorenzoni, Nicholson-Cole y Whitmarsh, 2007).

Más allá del paradigma epistémico y sus puntuales reformas y complementos, se sitúa el paradigma cultural. Propone que el problema de la despreocupación climática es cultural. Para hacerlo comprensible y resoluble, bastará entonces con desvelar los sesgos culturales que intervienen. En una de sus variantes, el paradigma cultural se acerca al de la alfabetización científica. En ese sentido se pueden interpretar los influyentes trabajos de Kempton que arrancan de su investigación junto con Boster y Hartley (1995), antes citada. En otros casos, hay una mayor autonomía, como ocurre en las investigaciones que, inspirándose en las propuestas de Mary Douglas, ha desarrollado Dake solo (1991 y 1992) o en colaboración (Wildavsky y Dake, 1990). La propuesta fundamental es que las actitudes y conductas medioambientales han de explicarse atendiendo a los valores y visiones del mundo que generan cuatro matrices culturales fundamentales: individualismo, jerarquía, igualitarismo y fatalismo. A su vez, estas cuatro matrices generan, y se sustentan en, imágenes potentes de la naturaleza (Thompson y Rayner, 1998) que conciben los avatares climáticos de maneras radicalmente diferentes, actuando como filtros por los que ha de pasar la ciencia del clima. En consecuencia, para enfrentar adecuadamente el problema del CC, hay que centrar la atención en las diferencias entre las culturas: cada una lo concibe de forma distinta y genera (des)preocupaciones incommensurables.

Otra variante, algo heterodoxa y ecléctica, del paradigma cultural plantea que a los sesgos propiamente culturales hay que sumar los psicológicos desvelados por el paradigma psicométrico de Slovic (Kahan, Jenkins-Smith y Braman, 2011). En consecuencia, según propone este modelo, que se autodenomina de la cognición cultural, las variaciones de la (des)preocupación climática serían el producto tanto de la diversidad cultural como de los distintos sesgos psíquicos que se activan en situaciones de riesgo. Se comprende así que, observando y valorando las cosas bajo prismas psico-culturales muy disímiles, difieran también las (des)preocupaciones climáticas.

La pregunta obvia es: ¿cómo es posible luchar contra el CC si todo está psicoculturalmente sesgado, lo que preocupa a unos despreocupa a otros y nada es común o compartido? La respuesta dominante puede reconducirse a las siguientes reglas. Regla primera: no ignorar nunca los múltiples sesgos culturales o psicoculturales que deforman el objeto a observar. Regla segunda: reconstruir qué es lo que (des)preocupa desde cada una de las perspectivas. Regla tercera: tender puentes que permitan acuerdos entre las distintas perspectivas; en caso de que no se pueda, traducir el tema climático a todos los lenguajes culturales haciéndolos converger; y si esto no funciona, manipular las distintas cosmovisiones culturales para que sean convergentes y colaboren (Dake, 1992; Kahan, 2010). Más pragmática es la propuesta que aparece en un interesante trabajo firmado, entre otros, por Douglas y Thompson (Verweij *et al.*, 2006), según la cual, ante un problema endiablado (*wicked*) y de muy difícil solución como el del CC, hay que apostar por soluciones chapuceras (*clumsy*), en las que se combinen retazos de los distintos universos culturales climáticos. Así se conseguirá una aceptación sociocultural generalizada.

Hay, además, otras tres líneas relevantes de la investigación sobre la (des)preocupación climática que centran su atención, respectivamente, en los valores, la comunicación y la producción social de la irrelevancia o ignorancia climáticas.

Es obvio que el CC plantea problemas en términos de valores políticos y morales. Una larga línea de investigación muestra cómo, a partir de los años ochenta del siglo anterior, la distinción izquierda/derecha y sus correspondientes valores políticos han sido fundamentales para comprender las actitudes y conductas climáticas en EE. UU. (McCright y Dunlap, 2011) y, en menor medida, en Europa (McCright, Dunlap y Marquart-Pyatt, 2016) y el resto del mundo. ¿Es posible acordar una política del clima de consenso más allá del partidismo político? Parece más bien difícil, aun cuando sea urgente y necesario (Giddens, 2010). En cualquier caso, las (des)preocupaciones climáticas se encuentran siempre teñidas de metavaloraciones de orden político.

Si de los valores políticos nos deslizamos a los morales, nos topamos con aporías similares. Que el CC sea procesado en términos morales (Morito, 2010) y se acabe convirtiendo en un problema de justicia (Gardiner, 2011) es algo normal, pues los conflictos sociales son reconducibles a términos de justicia (Boltanski y Thévenot, 1991). Que, una vez así definida la situación, el juicio moral climático sea fácil de articular es algo ya problemático. En un interesante trabajo, Markowitz y Shariff (2012) han mostrado cómo algunos de los rasgos del CC (por ejemplo: abstracción, complejidad, consecuencias no intencionales, culpabilidad difusa, etc.) plantean serias dificultades para articular juicios morales ampliamente compartidos. Habría que introducir cambios sustantivos para superar esos obstáculos, apostando por la reflexividad en el sentido de Archer (véanse Davidson, 2012 y Davidson y

Stedman, 2018). Otras corrientes de la investigación han destacado la relevancia de lo que han denominado ecoculpabilidad (Ferguson y Branscombe, 2010; Rees y Bamberg, 2014) en los debates climáticos.

Por su parte, las investigaciones sobre la comunicación climática son muy abundantes y prolongan las que desde los años ochenta se fueron desplegando sobre la comunicación del riesgo (véase Farré y Gonzalo, 2011). Dejando a un lado las que se centran en los aspectos lingüísticos⁴ —que, con todo, son relevantes pues ayudan a ordenar el lenguaje climático que utilizan los medios y el público en general— y las que observan las representaciones del fenómeno por parte de los medios, interesan especialmente las que debaten el problema de las reacciones emocionales que suscitan las distintas maneras de presentar las consecuencias del CC. Hay un viejo debate sobre las ventajas, inconvenientes e implicaciones sociales de la alarma y el alarmismo en la comunicación climática; las posiciones resultan inconciliables (véanse Risbey, 2008; Swingedouw, 2010; Hoggett, 2011; Bettini, 2013; Beck, 2015). Más circunscritas, las investigaciones sobre las consecuencias del miedo climático muestran resultados contradictorios: la comunicación que crea miedo sobre las consecuencias del CC, aun cuando dé notoriedad al problema y genere preocupación, puede producir apatía e inacción, justamente lo que pretende evitar (O'Neill y Nicholson-Cole, 2009; O'Neill *et al.*, 2013; Hornsey y Fielding, 2020). En cualquier caso, la relación Miedo-Preocupación-Acción es mucho más compleja de lo que suponen los modelos muy simples que se suelen utilizar (véase Chapman, Lickel y Markowitz, 2017), cosa que no se considera suficientemente en las investigaciones al uso.

⁴ Sobre los más relevantes tropos climáticos, véanse Nerlich (2015) y el trabajo de Ereat y Segnit (2006) sobre lo que denominan *warm words* en los medios de comunicación británicos.

Son de enorme interés las investigaciones enmarcadas en la agnotología o sociología de la ignorancia climática. Plantean que el CC no es tan solo algo que se ignore por la incuria o incompetencia de la gente, sino también algo que se hace ignorar. El trabajo pionero es el del conocido libro de Oreskes y Conway (2018) sobre los «mercaderes de la duda». Siguiendo esta línea de investigación, Lucas y Davison (2018) muestran cómo la despreocupación climática es algo que se construye socialmente como resultado de factores múltiples que conspiran con ese objetivo. Evidentemente, no constituye un destino inevitable, pero, a su entender, toda política de concienciación climática ha de ser consciente del poderoso enemigo al que se opone.

Una variante que también atiende a la producción social de la despreocupación, pero con rasgos peculiares, es la que se autodenomina de la Economía Política de la Relevancia. Aparece insinuada en los trabajos de Ollinaho (2016), en los que, aproximando el tema desde una perspectiva fenomenológica inspirada en Schutz, se asegura que la falta de atención al CC resulta de haber sido puesto por fuera de los marcos cotidianos de relevancia. En razón de esto, resulta algo extraño, que queda empequeñecido y desatendido. En definitiva, preocupar a la gente por el CC solo es factible si se consigue situarlo en el espacio de relevancia de lo cotidiano. Por su parte, combinando la aproximación fenomenológica con la de la escuela crítica y, en concreto, con propuestas *adornianas*, Gunderson, Stuart y Petersen (2018) apuntan que para explicar la irrelevancia cotidiana del CC hay que considerar las fuerzas ideológicas que la producen. No se trata tanto de reorientar la atención del actor hacia la cotidianidad, como de luchar contra los aparatos ideológicos que apartan la atención del clima; son potentes y se estructuran en consonancia con la lógica de reproducción del capitalismo.

Por último, hay que subrayar que en España la investigación social empírica sobre las percepciones sociales del CC empieza a ser abundante. Destaca especialmente —por la proximidad a la problemática de este trabajo— el trabajo de Pardo (2006) que, polemizando con las propuestas de la teoría posmaterialista, sostiene que no hay evidencia empírica sobre una supuesta conciencia ecológica. Conviene, según propone, hacer más y mejor investigación empírica (cuantitativa y cualitativa) sobre el problema de la conciencia ecológica en España. Otros trabajos relevantes abordan aspectos más circunscritos sobre el conocimiento/desconocimiento medioambiental (Oltra *et al.*, 2008), las distancias entre los factores normativos y comportamentales que inciden en su emergencia (Echevarren, 2012), sus bases sociodemográficas (Rodríguez-Priego, Montoro-Ríos y Georgantzis, 2004) y las divergencias entre políticas globales y políticas y acciones regionales o locales en el campo de la lucha por el clima (Moyano, Paniagua y Lafuente, 2009).

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

Los datos disponibles muestran que la preocupación por los problemas medioambientales tiene en la opinión pública española un estatuto contradictorio. En efecto, si se considera su relevancia relativa en las respuestas a los barómetros del CIS desde 1985, se constata que, al apuntar los principales problemas del país, las respuestas que señalan algún asunto medioambiental nunca han alcanzado el 10 % en los 35 años registrados. Es más, en el último barómetro disponible (octubre de 2021, Estudio 3337), tan solo el 1,6 % de los españoles señala los problemas relacionados con el medio ambiente entre los tres principales que existen actualmente en España, y el 2,1 % entre los tres principales

que más le afectan personalmente⁵. El Barómetro de enero de 2021 (Estudio 3271) muestra claramente esta aparente contradicción: mientras el 67,3 % dice seguir con mucho o bastante interés las noticias sobre el CC, solo el 3,4 % lo selecciona entre los tres problemas principales en España y el 2,3 % entre los tres problemas que le afectan personalmente⁶. Por otro lado, un análisis de los Eurobarómetros de marzo/mayo 2008, enero/febrero y junio/julio 2009, junio 2011, noviembre/diciembre 2013, mayo/junio 2015 y marzo 2017 constata una muy baja correlación entre los relativamente altos niveles en la escala de respuesta a la explícita pregunta sobre la percepción del grado de seriedad del problema del cambio climático y, por otro lado, la información recibida sobre el asunto (Callejo, 2021), apuntándose que no se observa una preocupación creciente, sino que esta experimenta fluctuaciones que no siempre son lineales. Es decir, alrededor de la preocupación se encuentran en tensión distintos polos, encuentro que hemos denominado preocupación despreocupada (véase gráfico 1).

¿Cómo saber las razones y justificaciones que sustentan un contraste tan acusado entre la despreocupación medioambiental y la preocupación por el CC? Para aproximarnos a una contestación a este interrogante vamos a indagar en los resultados de la investigación realizada en Madrid y Valencia entre 2019 y 2020, hasta justo días antes de que se declarase el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19⁷. Investigación realizada desde la perspec-

tiva cualitativa, con método grupal, pues la apertura dialógica y enfrentamiento verbal entre participantes permiten introducirse en potenciales contradicciones existentes, superando la mera adscripción normativa a categorías de respuesta.

El diseño del método grupal utilizado tiene particularidades que parcialmente lo diferencian de concepciones canónicas del grupo de discusión (Ibáñez, 1979). Siendo uno de los focos de la investigación la implicación —cognitiva (qué saben, qué no saben, qué saben que no saben, etc.) y comportamental (qué hacen, por qué hacen lo que hacen, por qué no hacen lo que dicen que habría que hacer, etc.)— de los ciudadanos con respecto al CC, se estableció la conveniencia de reducir el número de participantes a cuatro lo que conlleva una mayor implicación en la dinámica grupal y sus discusiones. Por otro lado, tras unos inicios abiertos, la dinámica gana en directividad según avanza. La decisión de realizar grupos que estuvieran compuestos por cuatro miembros buscaba conseguir una aproximación abierta a los temas y alcanzar cierta intensidad en las discusiones y posiciones diferenciales, improbable en grupos con más participantes. Simmel (2016: 181) y Pentland (2015: 28) apuntan la mayor posibilidad de conseguir estos objetivos en grupos pequeños. El perfil de los distintos grupos ha estado marcado por una posición común de clases medias urbanas, estableciendo criterios diferenciales a partir de la estructura social: género, edad, ocupación, nivel de estudios. Se distribuyeron entre Valencia y Madrid, dos localidades que, en función de su distinta proximidad al mar, pudieran sustentar dos posiciones distintas sobre el riesgo climático⁸.

El diseño de los diez grupos realizados fue el siguiente:

⁵ Aunque es metodológicamente cuestionable la comparación con el conjunto de la serie anterior, debido a las modificaciones en la estructura del cuestionario introducida por el CIS, en el Barómetro de abril de 2021 (Estudio 3318).

⁶ Para un rastreo de la evidencia empírica disponible en los estudios del CIS y en otros estudios europeos nos remitimos a Callejo y Agudo (2021) y Ramos y Callejo (2022).

⁷ Véase nota 2.

⁸ Esta percepción diferenciada de, por ejemplo, los grupos valencianos, en función de su mayor proximidad al mar, no apareció en los discursos producidos.

TABLA 1. *Diseño de los grupos*

Madrid		Valencia	
1M	Va/Mu ocupados. Residen área metropolitana. 2 usan transporte público y 2 privado. Entre 40 y 50 años.	1V	Mu 16-18 años, participantes en manifestaciones como <i>Friday for Future</i> , <i>Extinction Rebellion</i> o huelgas climáticas.
2M	Va/Mu estudiantes universitarios. Estudios no relacionados con CC.	2V	Mu, amas de casa. Ingresos hogar > 30.000 euros/año. Con hijos.
3M	Va/Mu Clase media funcionarial. Buscan vivienda. Entre 30 y 40 años.	3V	Va, empresarios con menos de 10 empleados.
4M	Mu paradas. 2 con hijos en E. Secundaria; 2 sin hijos.	4V	Va/Mu estudiantes ciencias e ingenierías, no relacionadas con medio natural.
5M	Va/Mu jubilados, clase media funcionarial, 72-88 años.	5V	Va/Mu representantes de empresarios y miembros movimiento ecologista.

Nota: M: Madrid, V: Valencia; Va: varones, Mu: mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

La estructura de la dinámica estuvo articulada sobre una baja directividad inicial, aumentándola según avanzaba la reunión, temáticamente configurada por las siguientes fases: 1) percepción general sobre el CC; 2) incertidumbres con respecto al CC; 3) medidas conocidas en relación con la lucha contra el CC y percepción de las mismas; 4) implicación con el CC; 5) actores responsables del CC; 6) generación de propuestas de medidas por parte del grupo; 7) comunicaciones sobre el CC; 8) recepción de medidas concretas en los campos de la vivienda, el transporte y la alimentación. A partir de la cuarta fase se acentuaba la directividad, interpelando a los participantes sobre su implicación.

VARIANTES DE LA PREOCUPACIÓN CLIMÁTICA

En los grupos realizados aparecen diferentes concepciones del CC⁹. En cualquier caso, aunque su manera de concebirlo difiera, es recurrente reconocerlo como algo existente:

⁹ Para una presentación detallada sobre los distintos planos de la semántica del CC, véase Ramos y Callejo (2022).

ocurre, está en marcha, se apunta o se hará patente pronto —y además el que quiera saberlo lo puede saber—:

Pero a día de hoy, si no sabes una cosa es porque pasa delante y [...] o sea, no quieres [...] tienes todas las herramientas para poder saberlo y estar informado sobre lo que pasa [...] (Grupo 1V).

Aunque puedan criticar veladamente sus argumentos por no ser más claros y enfáticos, creen que la ciencia reconoce plenamente su existencia, lo que lo convierte en inobjetable:

No me he leído los informes del IPCC, pero sí que he leído análisis sobre los mismos. Y yo confío en esa información, no la pongo en duda (Grupo 4V).

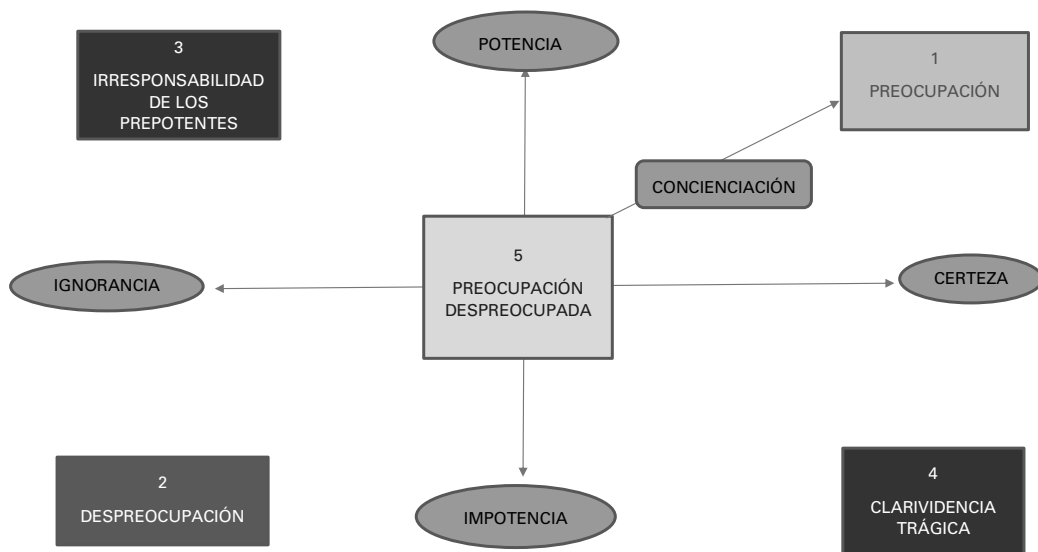
Pero es que, más allá de la ciencia, basta con atender a la experiencia y reconocer que está ocurriendo y es visible o, dicho de forma muy expresiva: «Y está cambiando, es que se ve, no hace falta que te lo diga nadie, ya lo estás viendo tú» (Grupo 5M).

En consecuencia, ya por lo que la ciencia «cuenta», ya por lo que se nos muestra fenoménicamente en la experiencia, el CC existe y es reconocido. Pero no todos lo hacen. Aunque tímida y minoritariamente, también surgen la duda y/o la negación. La argumentación en términos de «unos dicen y otros dicen» (1M), «yo ni me lo creo ni me lo

dejo de creer» (5M), «el señor Trump niega el CC» (1M), «es un fenómeno puramente natural» (3V), etc., aparece en ocasiones, aunque siempre como conjetura menor, que provoca desacuerdo y se bate en retirada; los que di-

cen saber más, lo desprecian como algo sin fundamento (1V). Tiene, pues, el estatuto de rival marginal de la posición claramente hegemónica que cree en la existencia del CC —sea eso lo que signifique—.

GRÁFICO 1. Espacios de la (des)preocupación por el Cambio Climático



Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

El CC que se reconoce provoca preocupaciones y despreocupaciones diferentes¹⁰. Esa variedad de voces se puede ordenar si los discursos emergentes se sitúan en un espacio bidimensional en el que se cruzan dos ejes estructurantes (véase gráfico 1). Uno de ellos ordena las variedades discursivas en el continuo del conocer; el otro, en el continuo del hacer. En el primer eje (horizontal), se suceden las posiciones desde un extremo de certeza hasta otro extremo de incertidumbre-ignorancia. En el segundo eje (vertical), las intervenciones discursivas se ordenan desde un extremo de potencia hasta otro identificado con la impotencia. El

juego de ambos ejes permite distinguir varias situaciones que retratan modalidades de preocupación, despreocupación y preocupación preocupada.

El gráfico 1 visualiza el cruce de los ejes del Conocer y el Hacer delimitando al menos cinco espacios que tienen una lógica diferencial en la configuración de la (des)preocupación. En el ángulo en el que se encuentran la Potencia y la Certeza se sitúa el espacio propio de la Preocupación (área 1). En este caso, los hablantes, que dicen saber con certeza y sentirse capaces, manifiestan una preocupación inequívoca por la situación climática. En el ángulo inverso (área 2), donde se encuentran la Impotencia y la Ignorancia, se delimita el espacio más propio de la Despreocupación. En este caso, se supone que, dada la situación de

¹⁰ En lo que sigue resumimos muy sintéticamente las propuestas argumentadas en Ramos y Callejo (2022) a las que nos remitimos para mayores especificaciones.

ignorancia o extrema incertidumbre y su desvalimiento o impotencia como actores, no tiene sentido preocuparse por el CC, pues queda por fuera de la propia esfera de conocer y hacer: ¿para qué preocuparse por algo que no sabemos y nos desborda? En el espacio superior izquierdo (área 3), se encuentran las posiciones más cercanas a la Potencia y la Ignorancia, dando lugar a lo que los hablantes denuncian como Irresponsabilidad de los Prepotentes. En este caso, se dice que unos pocos, los «de arriba», situados en una posición privilegiada que les permitiría actuar eficazmente, hacen como si nada supieran y, arrastrados por sus intereses a corto plazo, se muestran escépticos; en consecuencia, no se preocupan y nada hacen cuando deberían y podrían hacer. Por su parte, en el espacio inferior derecho, ubicamos el encuentro de la Certeza y la Impotencia (área 4) en lo que denominamos área de la Clarividencia Trágica. En este caso, el CC es reconocido como un hecho cierto, ante el que se debería actuar, pero la propia posición periférica e impotente hace que nada de lo que se quisiera hacer pueda hacerse; al cabo, la despreocupación emerge de la mano de la clarividencia del actor trágico que ve acercarse la desgracia sin poder hacer nada para evitarla.

El espacio más relevante se sitúa en el área 5, donde interseccionan posiciones débiles del Conocer y el Hacer. Se trata del espacio de la Preocupación Despreocupada. Es el territorio más transitado, en el que se sitúan más razones y justificaciones, dado su estatuto demandante y desequilibrado. Puede, consecuentemente, considerarse el espacio hegemónico en el material analizado. En este caso, las intervenciones dicen atisbar o conocer en alguno de sus extremos el CC, y plantean también que, de alguna manera, aunque sea poco y sin gran impacto, algo puede hacerse. La combinación del saber menguado y la potencia disminuida hace que se preocupen y no se

preocupen a la vez: se preocupan porque algo saben y algo pueden; se despreocupan porque es poco su saber y mucha su impotencia. El resultado es una Preocupación Despreocupada.

El espacio del área 5 está, pues, dominado por una paradoja que tiene la virtud de tranquilizarlo y dinamizarlo. En el gráfico 1, se muestra cómo de él surge una flecha que conecta la Preocupación Despreocupada con la Preocupación plena. Esa flecha representa el trayecto de transformaciones que los hablantes denominan Concienciación. Dedicaremos el siguiente apartado a su análisis.

PROCESOS DE CONCIENCIACIÓN CLIMÁTICA

Concienciación, concienciar o concienciarse, tener conciencia, ser consciente, etc., son términos que protagonizan los intercambios de opiniones de nuestros hablantes cuando abordan el problema de la preocupación por el CC. Como todo concepto que se intercambia en la discusión pública —caso de las reuniones de grupo— cumple un papel moralizador (Miller, 1992: 61). Aquí lo abordamos como un concepto *emic* y, en consecuencia, intentaremos fijar y aclarar el sentido que le asignan los actores.

La referencia a la concienciación es frecuente y se extiende por todos los grupos, aunque de manera desigual. En el cuadro 1 se recoge la distribución de esa presencia, así como la de otros términos con los que, como se verá, se relaciona¹¹.

¹¹ En relación al cuadro 1, hay que destacar que: a) en las reuniones, nunca es el moderador el que introduce estos términos; b) se recoge el número de intervenciones, por lo que, en una misma intervención, cabe que se utilice varias veces el término o sus afines; c) no se incluyen las intervenciones del moderador en las que, una vez surgido el término, lo utiliza para preguntar a los participantes sobre su significado.

CUADRO 1. *Número de intervenciones de los participantes en los grupos en los que el término respectivo o sus derivados es protagonista*

Grupo	Concienciación/ser consciente	Educación	Consumo/consumismo/ consumo responsable
1M	25	9	2
2M	54	29	13
3M	22	24	4
4M	20	5	5
5M	3	18	13
1V	9	5	7
2V	11	10	2
3V	10	2	13
4V	7	2	20
5V	14	0	14
TOTAL	175	104	93

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

La concienciación se convierte así en personaje principal del drama climático. Es, por un lado, la tabla de salvación que, se supone, guía hacia un futuro sin negacionismo (2.1 del cuadro 2); por otro lado, permite retratar la situación hacia la que nos dirigimos: un optimista escenario de concienciación creciente que despertará a la gente, llevándola a organizarse y actuar (2.2a y b). Si, por lo primero, la concienciación interviene en la retórica persuasivo-triunfadora de las disputas climáticas, por lo segundo, hace confiar en la victoria final.

La concienciación es tanto proceso dinámico como deseado estado final. El carácter procesual prima. Esto lleva a concebirla como un proceso escalonado, puntuado por etapas de imperfección, que solo una pequeña minoría de «virtuosos» transita hasta el final (2.3). Las concienciaciones reales son siempre parciales y defectuosas (2.4). Nadie puede estar seguro de haber alcanzado el estado final o poder mantenerse en él; siempre es un camino-hacia, que poco a poco desatasca la paradoja de la (des)preocupación, o un horizonte que se aleja según uno se acerca; de ahí que se convierta en un tema sometido a una reflexividad sin tregua.

El sujeto activo de la concienciación puede ser uno mismo, que reflexivamente

se auto-conciencia (2.5), o algún otro, ya sea persona (2.6a y b) o institución (2.7a y b) que conciencia a los demás —o debería hacerlo—. La idea subyacente es que quienes alcanzan la concienciación o tienen responsabilidad pública (el Estado, «los de arriba») deberían emplearse en la concienciación general; de ahí, la responsabilidad que se les demanda, pues es urgente la concienciación del otro generalizado, la gente (2.8).

¿En qué consiste y cuáles son los frutos típicos de esa tarea? Se trata de un concepto complejo que aúna el aprendizaje y la conversión moral: el producto de una tensión entre dos fuerzas diferenciadas. Denominaremos a esas dos fuerzas Ilustración y Ascetismo. Son obvias sus relaciones con las dos caras (cognitiva y moral) de la conciencia y con los dos ejes decisivos de la preocupación climática: el conocer y el hacer en sus variados grados y manifestaciones. La Ilustración, como fuerza de la concienciación, centra sus esfuerzos en el saber como proceso de veridicción; el Ascetismo, en el hacer como moralización. Ambas fuerzas no están supra-sub-ordenadas entre sí, ni se pueden reducir mutuamente. No basta saber lo verdadero para hacer lo debido, ni viceversa; hay que estar al juego de ambos, un juego weberiano, no socrático.

CUADRO 2. *Semántica del CC. Verbatims. Sobre la concienciación*

2.1	«Creo que el negacionismo tiene los días muy contados, porque va a haber una concienciación muy amplia sobre este tema [CC]».	2V
2.2a	«Veo un escenario en el que va a haber una creciente concienciación, porque va a ser muy rápida, y esto va a tener que llevar a formas de organización y a una mayor concienciación de la importancia de actuar».	2V
2.2b	«Que esto va a cambiar, que la gente cada vez se está concienciando más, estamos cuidando más el planeta, estamos [...]».	4V
2.3	«En el grupo de gente con mucha concienciación, se hacen esfuerzos, se participa en la medida de lo posible en diferentes manifestaciones, etc., pero creo que incluso ahí se cae en incoherencias. O sea, creo que la gente que realmente consigue llevar un estilo de vida totalmente aliñado con la concienciación es una minoría muy pequeña».	2V
2.4	Mujer 1: «Yo no estoy concienciada al 100 %» // Mujer 2: «No, yo creo que no». // Mujer 3: «Yo sí estoy concienciada, pero...». // Mujer 4: «Hasta cierto punto, solo lo de reciclar, lo demás...».	4M
2.5	«Nos debemos concienciar nosotros, ¿sabes?, y saber nosotros lo que hay que hacer para mejorar el medio ambiente».	2M
2.6a	«La situación está en concienciar. Yo tengo que hacerle saber a todo el mundo [...], bueno, yo, tenemos que hacerle saber a todo el mundo que nos rodea que están pasando cosas muy malas y que si seguimos en esta situación, vamos a llegar al declive».	5V
2.6b	«Si nosotros conseguimos concienciar, aunque sea a una pequeña parte de la población, quizá el futuro no es tan malo como pensamos. [...] La situación está en concienciar. Yo tengo que hacerle saber a todo el mundo».	6V
2.7a	«Yo creo que los primeros son los Gobiernos, las empresas grandes que tienen que concienciarlos de lo que hay que hacer».	1M
2.7b	«Es que la concienciación tiene que venir un poco desde arriba».	2M
2.8	«A mí me gustaría que realmente, a la gente se le concienciara realmente del cambio climático, no, o sea, que llegara [a] la gente, lo que sea, el cambio climático, la importancia que tiene».	1M

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

La concienciación es concebida, por un lado, como un proceso de Ilustración en el sentido kantiano: una *sapere aude* que permite que aprendamos y nos guiemos en el mundo por lo que racionalmente vamos aprendiendo hasta alcanzar la lucidez¹². Atendiendo a las distintas intervenciones que intentan aclararlo, en ese proceso hay que distinguir al menos tres etapas. La primera es el simple dar a conocer a otros (3.1), o hacerse uno mismo consciente de (3.2), alguna de las manifestaciones del CC. En este caso, la concienciación suele referirse al síndrome

medioambiental (3.3); es decir, a la contaminación (en sus distintas variantes), los plásticos y vidrios abandonados, la porquería campante por tierra y mar, etc.

La segunda etapa va algo más allá, trascendiendo el presente inmediato de la contaminación. Se dice entonces que nos concienciamos porque somos capaces de saber las consecuencias espaciotemporales estratégicas de lo que hacemos (3.4 y 3.5). Se trata de un saber consecuencial que depende de la ciencia. Pero aun entonces, cuando se pasa del ser consciente al saber, no se alcanza todavía el tercer y último estadio de la concienciación ilustrada. Lo denominamos clarividencia o lucidez climáticas, es decir, la asunción honda y de conjunto de la verdad del CC. Estar concienciado supone, entonces, como en el

¹² Dice Kant en un texto tardío de 1784: «La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro [...] ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón: he aquí el tema de la ilustración» (Kant, 1978: 25).

caso de los expertos climáticos, ordenar esa verdad, traducirla y hacerse su vocero (3.6), llamando a la acción. De este modo, el camino de la Ilustración alcanza su meta: la audacia kantiana del saber llama a la urgencia *comtiana* de la acción.

CUADRO 3. *Semántica de la concienciación. Verbatims. Sobre la ilustración*

3.1	«Concienciar es como dar a conocer».	2M
3.2	«Me he dado cuenta y cada vez que compraba, era más consciente de lo que implicaba cada envase que teníamos y que comprábamos».	2M
3.3	«Ir a algún sitio y verlo, verlo, vamos ser más conscientes porque a lo mejor eso lo dices, no, no va, la gente no va a aceptarlo de la misma forma; por ejemplo, al vertedero, que vayan al vertedero».	2M
3.4	«Hacer ver a la gente, que lo que hace, tiene una repercusión, que cuando tú tiras una botella de plástico al mar, si a ti te ponen al lado la isla de mierda que hay en el Pacífico, que no sé qué tamaño tendrá, pero es descomunal, pues igual te lo piensas dos veces. Eso yo creo que es concienciar: ver los resultados de lo que haces».	2M
3.5	Moderador: «¿Qué significa concienciar?» // Mujer: «Hacer ver a la gente». // Hombre 1: «El valor, o lo que perjudica, las consecuencias». // Hombre 2: «En nuestros hijos. Las consecuencias que puede tener en la vida de aquí a [...]».	3M
3.6	«Els experts del Canvi Climàtic ja ho han fet tot. Ho han explicat, ho han [...] de fet, ho han explicat de forma molt senzilla i de manera que el gran públic entén què està passant. Què és [...] jo pense que és un gran repte per a qualsevol camp de la ciència aconseguir que el gran públic entenga què està passant».	1V

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

La otra cara de la concienciación es la deontica: interpela al deber hacer. No se trata tan solo de ver las cosas de otra manera o de vivir convencido del CC, sino de fijar un trayecto o una meta para reconfigurar el marco normativo de la acción. Que venga o no de una convicción intelectual ilustrada es contingente: ocurre a veces, otras no, y, en ocasiones, puede serle contrario o indiferente (4.1).

El trayecto moral comienza en una estación trivial y concluye en una bifurcación. La estación inicial es banal: reivindica la recuperación de la educación como conjunto de valores-normas de puro civismo que conforman adecuadamente la relación entre los humanos, sus entornos y las cosas que hay en ellos. Empuja a hacer lo correcto. Es una reivindicación insistente de civismo (4.2a, b y c) que centra su atención en los aspectos más en superficie del síndrome medioambiental (entre otros: excrementos caninos y laterío campero-playero) (4.3). Más allá, se sitúa una segunda etapa que aúna la reivindicación de un deber de cuidado de una naturaleza ame-

nazada (4.4) con la asunción de un principio de responsabilidad (4.5). Hemos de asumir, al modo *jonasiano* (Jonas, 1995), que, siendo nuestro poder inmenso, debemos utilizarlo responsablemente en bien, tanto de la naturaleza, como de las generaciones futuras.

A partir de ese punto, aparece una bifurcación en el *progressus* moral. No está nítidamente dibujada, pero sus perfiles son reconocibles. Los dos caminos que surgen encarnan variantes del Ascetismo. Denominamos así, atendiendo a la tradición que viene de Durkheim (1982) y Weber (1979), la exigencia de un rechazo/renuncia al gozo inmediato o a la simple adaptación utilitaria al mundo profano, a favor de metas socioculturales trascendentes. Dos son los enemigos del ascetismo que han de ser sacrificados: el individualismo utilitario-egoísta (4.6a y b) y el consumismo (4.7). El primero nos precipita a una acción insolidaria de gratificación inmediata; por su parte, el consumismo convierte el entorno en algo a explotar sin medida o en un gran basurero al que arrojar los desechos

de nuestro apetito insaciable. Al renunciar o rechazarlos, se esbozan las dos variantes del ascetismo. Ninguna es hegemónica en las discusiones, pero ambas se presentan como encarnación más exigente del código de lo bueno y ejemplar.

CUADRO 4. *Semántica de la concienciación. Verbatim. Sobre la acción*

4.1	«Yo estoy concienciado de que el cambio climático es real, lo único que pasa, es que no le veo salida, no [...] ¿Qué podemos hacer, individualmente?, porque colectivamente te obligan hacer unas medidas, y ya está, pero individualmente ¿Qué se puede hacer? Es muy complicado [...]. «Concienciarse, todo el mundo lo sabe, pero [...]».	1M
4.2a	«Entonces, yo creo que sobre todo hay que concienciar. Y empezando por la educación, que creo que desde ahí va a avanzar todo».	5V
4.2b	«Educar a los ciudadanos a ser cívicos, a no tirar [...]».	5M
4.2c	«Todo pasa por la educación. Educación, educación y educacional. Porque es que es la única forma de cambiar la mente de las personas».	3V
4.3	«Sí que veo a la gente un poco más concienciada por ejemplo con la mierda de los perros». VARÓN: «Voy al campo y está lleno de latas de cerveza, eh, ¿sabes? La gente no está concienciada, no estamos concienciados para nada, ir al campo, y ves el campo [que] te da pena». // MUJER: «Eso es tema de educación». // HOMBRE: «Claro, pero eso es lo que dice ella, que también falta un poco, ya no de ecologismo, sino de educación. O sea, vas a un sitio público, pues deja todo recogido, ya sea una playa, un parque, o la casa de un colega [...]».	2M
4.4	«Pues la Tierra hay que cuidarla, la Tierra tiene salud como las personas, nosotros formamos parte de la Tierra y si tú no te cuidas, tú no cuidas tu alimentación, sistema de vida, pues enfermedades y la Tierra la estamos enfermando, contaminándola con vertidos de residuos, con basura, generamos venga basura y venga basura, todo lo tiramos».	5M
4.5	«Hacerse cargo del problema de la situación decir “esto es algo que...” [...] que es responsabilidad mía y no, pero que afecta, pero me afecta y no, pero que afecta a nuestro planeta y que es también una responsabilidad mía. Que el planeta es la casa de todo el mundo, en definitiva, es nuestra casa común».	4M
4.6a	«Más persona. Más persona, más humanizado. Menos individual».	4V
4.6b	«Intentar que ese colapso que va a ser un poco casi que seguro, sea de una manera que lo podamos llevar comunitariamente sostenidamente y no pensando más individualmente».	5V
4.7	«Porque hay unas cantidades de basura en el mundo, que es que eso no sé cómo la gente algún día la basura nos va a echar a nosotros [...] Porque es que si por cada móvil o cada cosa [...] Porque lo peor de los móviles es que cada vez sale uno mejor y la gente va cambiando y tira, y tira, y tira y gasta, gasta, gasta y se genera, genera y genera nuevos electrodomésticos y toda esa basura y todo no sé [...]».	4M
4.8a	«Jo tinc una xicoteta ramaderia en casa. Jo tinc sis gallines en casa. I tot el fem de casa [...] jo no tire res al fem. I jo me menje tots els dies [...] me menje no, perquè és impossible, però tots els dies ens posen sis ous les gallines».	5V
4.8b	«Jo ara no menje carn, però perquè no m'agrada pensar que estic menjant un cadàver. Però, sincerament, no crec que estiga salvant res deixant de menjar carn. [...] Se suposa que com jo no menje carn, no matem els animals que jo me menjaria i aleshores no es gasta l'aigua que es gastaria en alimentar als animals i, en general, els aliments de tal».	6V
4.9	«Has de crear imaginaris. O siga, has de poder comunicar que n'hi ha altres imaginaris possibles i que s'estan donat altres coses, perquè la gent sinó... ».	5V
4.10	«Y la gente necesita poder reconocerse y poder reconocer y motivarse a que otra cosa es posible, porque si no nos motivamos a que otra cosa es posible, pues para eso me quedo en casa, ¿no?».	5V
4.11	«En pla, anem avançant a mesura de que estem còmodes i n'hi ha que acceptar que si vols avançar no vas a estar còmode. Així que fote't, aguanta i tira cap a endavant. Però al final és això. La gent vol estar còmoda i no eixir de la seua zona de confort».	1V

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto INCERCLIMA.

El primero es un ascetismo que renuncia al presente civilizatorio apostando por un regreso sacrificial a un pasado idealizado de huerta y aldea (4.8a). En lo esencial, es una variante de la multisecular *reformatio* cristiana que pretende rescatarnos de un mundo de pecado recuperando la originaria comunidad de fe y caridad. Esa vuelta a lo simple y «natural» puede coaligarse con una ascesis de pureza ritual brahmánica, libre de suciedad y sangre, tal como la argumentan algunos partidarios del vegetarianismo y/o veganismo (4.8b). No es un ascetismo extramundano, pero se le aproxima.

Hay otro ascetismo, más propiamente intramundano: un rechazo que explora el futuro en busca de alternativas y aboga por una refundación de los valores y normas acorde con lo que se llama un nuevo «imaginario» (4.9). En este caso, la vía hacia la perfección moral desemboca en un territorio que contempla el horizonte de lo que algún hablante presenta como otro mundo posible (4.10): la posibilidad de un mundo ético elevado, difícil de alcanzar, pues solo se puede conseguir acumulando renunciaciones y desacomodos (4.11). Frente a la ascesis de regreso a un pasado cierto, se plantea otra ascesis que explora un futuro que nunca existió. Son dos variantes de ascesis: ambas renuncian al «mundo» del individualismo-consumismo, abrazando una meta trascendente; en un caso, «volando» hacia atrás, fuera del mundo presente; en el otro, dando testimonio de un otro civilizatorio posible.

Así pues, no todo es Ilustración que se atreve a saber, sino también Ascetismo que renuncia o rechaza por razones trascendentales. El viaje deóntico de la concienciación, yendo más allá de lo correcto o del educado deber de cuidado y la responsabilidad *jonasiana*, puede llegar a convertirse en una crítica climática de los valores civilizatorios. El ascetismo parece así apuntar hacia un posindividualismo posconsumista eco-

lógico, que se apunta, pero apenas queda esbozado, en los intercambios de razones y sinrazones de los hablantes. La concienciación culmina así en su doble cara cognitiva y práctica. Es un trayecto hacia la perfección y la ejemplaridad que idealmente culmina con la aparición de un improbable Asceta Clarividente.

CONCLUSIONES

En las lenguas latinas, la conciencia tiene una doble semántica: cognitiva y moral (Ferrater, 1979). Esta polisemia retrata cabalmente lo que los hablantes pretenden significar cuando se refieren a la concienciación. Para ellos, es un proceso de orden cognitivo hacia un decir verdadero, pero también un proceso deóntico en el que se han de ir fijando las normas que debería regir una acción amistosa con el clima-naturaleza. Sean lo uno o lo otro, o ambas cosas a la vez, la concienciación es el centro de atención cuando de la preocupación climática se trata. En todo caso, rebosa de connotaciones positivas. No hay sombra de una potencial «falsa conciencia».

La concienciación es un proceso dinámico, en etapas. En el plano cognitivo, va del simple darse cuenta de la proliferación de desechos hasta alcanzar un saber sistémico seguro que permita iluminar eficazmente la acción; en el plano moral, va del simple reconocimiento cívico o del deber de cuidado de la naturaleza hasta alcanzar una ascesis de renuncia o rechazo; en ambos casos, la concienciación es movimiento, no descansa —tal vez porque ha de enfrentarse al diablo lógico y existencial de la paradoja pragmática que despliega la preocupación despreocupada—.

Hemos reconstruido algunos de sus elementos esenciales. Se fija así lo que constituye el objeto central de ese trabajo: reconstruir la caja de herramientas o reper-

torio de sentido a la mano (Ramos y Callejo, 2016) de que se dispone¹³. No encontramos —ni es esperable— un discurso unitario o vertebrado, ni variados discursos claramente diferenciados y plenamente vertebrados (Callejo, 2021). Lo que se muestran son regulares retazos discursivos (Foucault, 1973). La propia apelación por parte de los grupos a la concienciación ha de tomarse como reconocimiento de la inexistencia de discursos o expresiones capaces de coordinar acciones de un número importante de individuos (Stevenson y Dryzek, 2014). Lo que llama la atención es que no difieren de lo que se activa cuando la ciencia social de la preocupación/concienciación climática se pone en marcha. En efecto, los centros de atención son los mismos: el saber experto sobre el clima, los problemas que plantea su abstracción y tecnicismo, la confianza plena o condicional en la ciencia, el reconocimiento de la variedad de puntos de vista, la relevancia de las emociones a la hora de retratar lo que ocurre, la moralización climática, la importancia de la reflexividad en el proceso de búsqueda de asideros normativos, las estrategias de comunicación del CC, el modo en que el CC se presenta en la experiencia del día a día, la batalla contra el negacionismo, la necesidad de ir más allá del medio ambiente para abordar y cambiar las estructuras profundas de la sociedad y civilización actuales. Los legos no resultan ser recipientes pasivos de un saber de especialistas. Aunque no «vean» el CC, saben mucho de él y, sobre todo, intentan aportar luz sobre las razones que hacen que el asunto sea realmente endiablado y las soluciones que se le pueden brindar limitadamente fiables.

¹³ Sobre el concepto de repertorio de sentido a la mano, pariente próximo de la caja de herramientas de Swidler (1986), véanse las propuestas realizadas en Ramos y Callejo (2016) en relación con la semántica social de la crisis.

BIBLIOGRAFÍA

- Beck, Ulrich (2015). «Emancipatory Catastrophism: What Does It Mean to Climate Change and Risk Society?». *Current Sociology*, 63(1): 75-88. doi: 10.1177/0011392114559951
- Bettini, Giovanni (2013). «Climate Barbarians at the Gate? A Critique of Apocalyptic Narratives on “Climate Refugees”». *Geoforum*, 45: 63-72. doi: 10.1016/j.geoforum.2012.09.009
- Blake, James (1999). «Overcoming the “Value-Action Gap” in Environmental Policy: Tensions Between National Policy and Local Experience». *Local Environment*, 4(3): 257-278. doi: 10.1080/13549839908725599
- Boltanski, Luc y Thévenot, Laurent (1991). *De la justification: économies de la grandeur*. Paris: NRF.
- Bostrom, Ann; Morgan, Granger M.; Fischhoff, Baruch y Read, Daniel (1994). «What Do People Know about Climate Change? Part 1: Mental Models». *Risk Analysis*, 14: 959-970. doi: 10.1111/j.1539-6924.1994.tb00065.x
- Brace, Catherine y Geoghegan, Hillary (2011). «Human Geographies of Climate Change: Landscape, Temporality, and Lay Knowledge». *Progress in Human Geography*, 35(3): 284-302. doi: 10.1177/0309132510376259
- Callejo, Javier (2021). «El discurso ausente: el caso del cambio climático». *Papers*, 106(2): 279-301. doi: 10.5565/rev/papers.2802
- Callejo, Javier y Agudo, Yolanda (2021). Información y opinión pública en el marco del cambio climático. En: D. Álvarez Rivas e I. Jiménez Gómez (eds.). *Comunicación y cambio climático* (pp. 11-32). Madrid: Fragua.
- Carolan, Michael (2010). «Sociological Ambivalence and Climate Change». *Local Environment*, 15(4): 309-321. doi: 10.1080/13549831003677662
- Chapman, Daniel A.; Lickel, Brian y Markowitz, Ezra (2017). «Reassessing Emotion in Climate Change Communication». *Nature Climate Change*, 7: 850-852. doi: 10.1038/s41558-017-0021-9
- Dake, Karl (1991). «Orienting Dispositions in the Perception of Risk: An Analysis of Contemporary Worldviews and Cultural Biases». *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 22: 61-82. doi: 10.1177/0022022191221006
- Dake, Karl (1992). «Myths of Nature: Culture and the Social Construction of Risk». *Journal of Social Issues*, 48: 21-37. doi: 10.1111/j.1540-4560.1992.tb01943.x

- Davidson, Debra (2012). «Analyzing Responses to Climate Change through the Lens of Reflexivity». *British Journal Sociology*, 63(4): 616-640. doi: 10.1111/j.1468-4446.2012.01429.x
- Davidson, Debra J. y Stedman, Richard C. (2018). «Calling Forth the Change-makers: Reflexivity Theory and Climate Change Attitudes and Behaviors». *Acta Sociológica*, 61(1): 79-94. doi: 10.1177/0001699317693065
- Dunlap, Riley E. (1998). «Lay Perceptions of Global Risk: Public Views of Global Warming in Cross-national Context». *International Sociology*, 13: 473-498. doi: 10.1177/026858098013004004
- Durkheim, Émile (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Akal.
- Echavarren, José M. (2012). La percepción del cambio climático en España. En: A. Baigorri (ed.). *Transiciones ambientales y participación: estudios de sociología ambiental* (pp. 67-78). Salamanca: Amarú.
- Ereaut, Gill y Segnit, Nat (2006). *Warm Words: How Are We Telling the Climate Story and Can We Tell It Better?* London: IPPR.
- Farré, Jordi y Gonzalo, José L. (2011). *Teoría de la Comunicación de Riesgo*. Barcelona: UOC.
- Ferguson, Mark A. y Branscombe, Nyla R. (2010). «Collective Guilt Mediates the Effect of Beliefs about Global Warming on Willingness to Engage in Mitigation Behavior». *Journal of Environmental Psychology*, 30(2): 135-142. doi: 10.1016/j.jenvp.2009.11.010
- Ferrater, José (1979). *Diccionario de Filosofía*. Madrid: Alianza.
- Foucault, Michel (1973). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- García, Ernest (2008). ¿Por qué andamos siempre a la greña con la naturaleza si nos pasamos la vida jurándole amor eterno? En: J. Riechmann (coord.). *¿En qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo* (pp. 27-52). Barcelona: Icaria.
- Gardiner, Stephen (2011). Climate Justice. En: J. Dryzek; R. Norgaard y D. Schlosberg (eds.). *Oxford Handbook of Climate Change and Society* (pp. 248-258). Oxford: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony (2010). *Política del Cambio Climático*. Madrid: Alianza.
- Gunderson, Ryan; Stuart, Diana y Petersen, Brian (2018). «Ideological Obstacles to Effective Climate Policy: The Greening of Markets, Technology, and Growth». *Capital & Class*, 42(1): 133-160. doi: 10.1177/0309816817692127
- Hoggett, Paul (2011). «Climate Change and the Apocalyptic Imagination». *Psychoanalysis, Culture & Society*, 16(3): 261-275. doi: 10.1057/pcs.2011.1
- Hornsey, Matthew J. y Fielding, Kelly S. (2020). «Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change». *Social Issues & Policy Review*, 14(1): 3-35. doi: 10.1111/sipr.12058
- Hughes, Liewelyn; Konisky, David M. y Potter, Sandra (2020). «Extreme Weather and Climate Opinion: Evidence from Australia». *Climatic Change*, 163(2): 723-743. doi: 10.1007/s10584-020-02900-5
- Hulme, Mike (2009). *Why We Disagree About Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibáñez, Jesús (1979). *Más allá de la sociología*. Madrid: Siglo XXI.
- Jasanoff, Sheila (2010). «A New Climate for Society». *Theory, Culture & Society*, 27(2-3): 233-253. doi: 10.1177/0263276409361497
- Jonas, Hans (1995). *El principio de responsabilidad*. Barcelona: Herder.
- Kahan, Dan (2010). «Fixing the Communications Failure». *Nature*, 463: 296-297. doi: 10.1038/463296a
- Kahan, Dan M.; Jenkins-Smith, Hans y Braman, Donald (2011). «Cultural Cognition of Scientific Consensus». *Journal of Risk Research*, 14(2): 147-174. doi: 10.1080/13669877.2010.511246
- Kahan, Dan; Peters, Ellen; Wittlin, Maggie; Slovic, Paul; Ouellette, Lisa L.; Braman, Donald y Mandel, Gregory (2012). «The Polarizing Impact of Science Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks». *Nature Climate Change*, 2: 732-735. doi: 10.1038/NCLIMATE154
- Kant, Emmanuel (1978). ¿Qué es la Ilustración? En: *Emmanuel Kant Filosofía de la Historia* (pp. 25-37). México: Fondo de Cultura Económica.
- Kempton, Willet; Boster, James, S. y Hartley, Jennifer A. (1995). *Environmental Values in American Culture*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, Cambridge.
- Konisky, David M.; Hughes, Liewelyn y Kaylor, Charles H. (2016). «Extreme Weather Events and Climate Change Concern». *Climate Change*, 134(4): 533-547. doi: 10.1007/s10584-015-1555-3

- Krauss, Werner; Schäfer, Mike y Storch, Hans von (2012). «Introduction: Post-normal Climate Science». *Nature & Culture*, 7(2): 121-132. doi: 10.3167/nc.2012.070201
- Leiserowitz, Anthony (2005). «American Risk Perceptions: Is Climate Change Dangerous?». *Risk Analysis*, 25(6): 1433-1442. doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00690.x
- Leiserowitz, Anthony (2006). «Climate Change Risk Perception and Policy Reference: The Role of Affect, Imagery and Values». *Climate Change*, 77: 45-72. doi: 10.1007/s10584-006-9059-9
- Lorenzoni, Irene y Pidgeon, Nick (2006). «Public Views on Climate Change: European and USA Perspectives». *Climatic Change*, 77(1-2): 73-95. doi: 10.1007/s10584-006-9072-z
- Lorenzoni, Irene; Nicholson-Cole, Sophie y Whitmarsh, Lorreine E. (2007) «Barriers Perceived to Engaging with Climate Change among the UK Public and Their Policy Implications». *Global Environmental Change*, 17(3): 445-459. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004
- Lucas, Chloe H. y Davison, Aidan (2018). «Not “Getting on the Bandwagon”: When climate change is a matter of unconcern». *Environment and Planning E*, 2(1): 129-148. doi: 10.1177/2514848618818763
- Markowitz, Ezra M. y Shariff, Azim F. (2012). «Climate Change and Moral Judgement». *Nature Climate Change*, 2: 243-247. doi: 10.1038/NCLIMATE1378
- McCright, Aaron y Dunlap, Riley E. (2011). «The Politicization of Climate Change and Polarization in the American Public’s Views of Global Warming, 2001-2010». *Sociological Quarterly*, 52(2): 155-194. doi: 10.1111/j.1533-8525.2011.01198.x
- McCright, Aaron; Dunlap, Riley E. y Marquart-Pyatt, Sandra (2016). «Political Ideology and Views about Climate Change in the European Union». *Environmental Politics*, 25(2): 338-358. doi: 10.1080/09644016.2015.1090371
- Miller, David (1992). «Deliberative Democracy and Social Choice». *Political Studies*, 40: 54-67. doi: 10.1111/j.1467-9248.1992.tb01812.x
- Morito, Bruce (2010). «Ethics of Climate Change: Adopting an Empirical Approach to Moral Concern». *Human Ecology Review*, 17(2): 106-116.
- Moyano, Eduardo; Paniagua, Ángel y Lafuente, Regina (2009). «Políticas ambientales, cambio climático y opinión pública en escenarios regionales. El caso de Andalucía». *Revista Internacional de Sociología*, 67(3): 681-699. doi: 10.3989/ris.2008.01.23
- Nerlich, Brigitte (2015). «Metaphors in Science and Society: The Case of Climate Science and Climate Scientists». *Language & Semiotic Studies*, 1(2): 1-15.
- Nisbet, Matthew (2011). Public Opinion and Participation. En: J. Dryzek; R. Norgaard y D. Schlosberg (eds.). *Oxford Handbook of Climate Change and Society* (pp. 283-294). Oxford: Oxford University Press.
- Norgaard, Kari (2011). *Living in Denial: Climate Change, Emotions and Everyday Life*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Ollinaho, Ossi (2016). «Environmental Destruction as (Objectively) Uneventful and (Subjectively) Irrelevant». *Environmental Sociology*, 2(1): 53-63. doi: 10.1080/23251042.2015.1114207
- Oltra, Christian; Sala, Roser; Gamero, Nuria y Solà, Rosario (2008). «Cambio climático y opinión pública en España: percepción del problema y política energética». *Sistema: Revista de Ciencias Sociales*, 20(5): 93-106.
- O’Neill, Saffron y Nicholson-Cole, Sophie (2009). «“Fear Won’t Do It”: Promoting Positive Engagement with Climate Change through Visual and Iconic Representations». *Science Communication*, 30(3): 355-379. doi: 10.1177/1075547008329201
- O’Neill, Saffron; Maxwell Boykoff, Maxwell; Niemeyer, Simon y Day, Sophie A. (2013). «On the Use of Imagery for Climate Change Engagement». *Global Environmental Change*, 23: 413-421. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2012.11.006
- Oreskes, Naomi y Conway, Erik M. (2018). *Mercaderes de la duda*. Madrid: Capitán Swing.
- Pardo, Mercedes (2006). El análisis de la conciencia ecológica en la opinión pública: ¿contradicciones entre valores y comportamiento? En: R. de Castro (coord.). *Persona, Sociedad y Medio Ambiente, Perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad* (pp. 71-82). Sevilla: Junta de Andalucía.
- Pentland, Alex (2015). *Social Physics*. New York: Penguin.
- Ramos, Ramón y Callejo, Javier (2016). Semántica social de la crisis: repertorio de sentido a la mano. En: B. Tejerina y G. Gatti (eds.) *Pensar la agencia en la crisis* (pp. 35-56). Madrid: CIS.
- Ramos, Ramón y Callejo, Javier (2022). «La preocupación social por el cambio climático en España: una aproximación cualitativa». *Política y Sociedad*, 59(3): 74131. doi: 10.5209/poso.74131
- Reynolds, Travis W.; Bostrom, Ann; Read, Daniel y Morgan, M. Granger (2010). «Now What Do Peo-

- ple Know about Global Climate Change? Survey Studies of Educated Lay People». *Risk Analysis*, 30: 1520-1538. doi: 10.1111/j.1539-6924.2010.01448.x
- Rees, Jonas H. y Bamberg, Sebastian (2014). «Climate Protection Needs Societal Change: Determinants of Intention to Participate in Collective Climate Action». *European Journal of Social Psychology*, 44(5): 466-473. doi: 10.1002/ejsp.2032
- Risbey, James S. (2008). «The New Climate Discourse: Alarmist or Alarming?». *Global Environmental Change*, 18(1): 26-37. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2007.06.003
- Rodríguez-Priego, Nuria; Montoro Ríos, Francisco J. y Georgantzís, Nikolaos (2014). «Percepción del riesgo y compromiso por reducir el cambio climático global en España». *Revista Internacional de Sociología*, 72(1): 173-200. doi: 10.3989/ris.2012.08.03
- Roser-Renouf, Connie y Nisbet, Matthew (2008). «The Measure of Key Behavioral Science Constructs in Climate Change Research». *International Journal of Sustainability Communication*, 3: 37-95.
- Simmel, Georg (2016). *Sociología: estudios sobre las formas de socialización*. México: FCE.
- Stevenson, Hayley y Dryzek, John S. (2014). *Democratizing Global Climate Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Swidler, Ann (1986). «Culture in Action». *American Sociological Review*, 51(2): 273-286.
- Swyngedouw, Erik (2010). «Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change». *Theory, Culture & Society*, 27(2-3): 213-232. doi: 10.1177/0263276409358728
- Thompson, Michael y Rayner, Steve (1998) «Risk and Governance Part I: The Discourses of Climate Change». *Government & Opposition*, 33(2): 139-166. doi: 10.1111/j.1477-7053.1998.tb00787.x
- Verweij, Marco; Douglas, Mary; Ellis, Richard; Engel, Christoph; Hendriks, Frank; Lohmann, Susanne; Ney, Steven; Rayner, Steve y Thompson, Michael (2006). «Clumsy Solutions for a Complex World: The Case of Climate Change». *Public Administration*, 84(4): 817-843. doi: 10.1111/j.1540-8159.2005.09566.x-i1
- Weber, Elke (2016). «What Shapes Perceptions of Climate Change? New Research since 2010». *WIREs Climate Change*, 7: 125-134. doi: 10.1002/wcc.377
- Weber, Elke y Stern, Paul (2011). «Public's Understanding of Climate Change in the United States». *American Psychologist*, 66: 315-328. doi: 10.1037/a0023253
- Weber, Max (1979). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Barcelona: Península.
- Wildavsky, Aaron y Dake, Karl (1990). «Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?». *Daedalus*, 119(4): 41-60.
- Zaval, Lisa; Keenan, Elizabeth; Johnson, Eric J. y Weber, Elke U. (2014). «Understanding Local Warming: How Warm Days Lead to Increased Belief in Global Warming». *Nature Climate Change*, 4: 143-147. doi: 10.1038/NCLIMATE2093

RECEPCIÓN: 07/11/2021

REVISIÓN: 22/03/2022

APROBACIÓN: 26/10/2022

Climate Enlightenment and Asceticism: Two Sides of Climate Change Consciousness/Conscience in Spain

Ilustración y ascesis climáticas: dos caras de la conciencia sobre el cambio climático en España

Ramón Ramos Torre and Javier Callejo Gallego

Key words

Climate Asceticism

- Climate Change
- Climate Conscientisation (Awareness and Conscience)
- Climate Enlightenment
- Emic Perspective
- Climate Concern
- Focus Groups

Palabras clave

Ascesis climática

- Cambio climático
- Concienciación climática
- Ilustración climática
- Perspectiva *emic*
- Preocupación climática
- Reuniones de grupo

Abstract

Sociological research on concern about climate change is often ambivalent: an unconcerned concern which is both affirmed and denied at the same time. This article takes this ambivalence as its starting point. It focuses on the empirical material provided by recent qualitative research on CC in Spain. This material indicated that ambivalent concern can be resolved through a complex process of critical consciousness/conscience (CC/C). Our analysis traced the meanings given to conscientisation in the focus groups conducted. The conclusion was that there was a twofold (cognitive and deontic) meaning of conscientisation, namely, as a process of cognitive enlightenment and a process of moral asceticism. This framework provides the elements for managing ambivalence in climate concern.

Resumen

Las investigaciones sociológicas sobre la preocupación por el cambio climático [CC] suelen mostrar su carácter ambivalente: una preocupación despreocupada, que se afirma y se niega a la vez. De esta ambivalencia parte este trabajo. Centra su atención en el material empírico proporcionado por una reciente investigación cualitativa sobre CC en España. Ese material indica que las ambivalencias de la preocupación se pueden resolver por medio de un complejo proceso de concienciación. Nuestro análisis rastrea los sentidos que adquiere la concienciación en los grupos de discusión realizados. Concluye mostrando el doble sentido (cognitivo y deóntico) de la concienciación: por un lado, como un proceso de ilustración cognitiva; por el otro, como un proceso de ascetismo moral. En ese marco se generan los elementos para administrar la ambivalencia de la preocupación climática.

Citation

Ramos Torre, Ramón; Callejo Gallego, Javier (2023). "Climate Enlightenment and Asceticism: Two Sides of Climate Change Consciousness/Conscience in Spain". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 101-120. (doi: 10.5477/cis/reis.183.101)

Ramón Ramos Torre: TRANSOC-UCM | rrt@cps.ucm.es

Javier Callejo Gallego: TRANSOC-UNED | mcallejo@poli.uned.es

INTRODUCTION^{1, 2}

The vast academic and popular literature on Climate Change (CC) has been dominated by a reiterated question: why are we unconcerned, and why do we behave so carelessly about something that we claim to be concerned about? why is there such a surprisingly unconcerned concern? (Ramos and Callejo, 2022). To account for the situation, it has been proposed that these are inconsistencies (Lorenzoni, Nicholson-Cole and Whitmarsh, 2007), contradictions (García, 2008), paradoxes (Leiserowitz, 2006), ambivalences (Carolan, 2010), gaps (Blake, 1999) or double realities (Norgaard, 2011). While a growing collection of research and publications has been produced over more than 20 years to explain this state of affairs. But the results obtained have been substantial, but inconclusive (Dunlap, 1998; Lorenzoni and Pidgeon 2006; Nisbet, 2011; Reynolds *et al.* 2010; Roser-Renouf and Nisbet, 2008; Weber, 2016). As these are ongoing research programmes, further results can be expected.

This paper seeks to contribute to the existing debate on the matter. The first section summarises the main results of the research carried out to date. The second section outlines the main points of a study on uncertainty and CC recently conducted in Spain, the data from which are partly used here³.

¹ Translators' note: Given that the Spanish term "concienciación" includes both a cognitive and a moral semantic dimension, after discussion with the authors, this has been translated throughout the text as "critical consciousness/conscience". For ease of reference, "CC/C" has been used to refer to this concept.

² The authors wish to express their gratitude for the work carried out by the reviewers to whom the *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* referred the article, whose comments have been very useful.

³ Uncertainty and climate change project (*Incertidumbre y cambio climático*), INCERCLIMA, funded by the 2017 Spanish Programme for Research, Development and Innovation Oriented to the Challenges of Society (*Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad*) (CSO2017-84007-R). The authors of the article are grateful for the funding received for

The third section discusses how the subjects in the study conceived unconcern about CC. The fourth section deals with their conception of conscientisation as a process conducive to full climate concern. Finally, the fifth section presents the conclusions.

RESEARCH ON CLIMATE AWARENESS

The object of study is what we have called climate critical consciousness/conscience (CC/C). In the vast international literature dealing with the problem, the designations vary widely; but it is rarely referred to as "conscientisation"⁴. In some studies it is presented in terms of a cognitive problem that leads to an investigation of the conditions that enable perception or consciousness or awareness; or techno-scientific learning, or the interest in knowledge or the way of conceiving CC. Other publications have discussed more emotional aspects and studied the processes that generate climate concern, emotional trauma or fear or distress in the face of CC. There are also significant works that have focused their interest on practical aspects, trying to provide reasons for the processes that lead to commitment, involvement, care, activism or the shift from inaction to action on climate issues. It is clear that cognition, emotions and action are substantive issues in themselves, but it is no less true that they can be taken as aspects or sides of the double underlying problem of

this project and for the collaboration from the other members of the research team: Ernest García, José Manuel Rodríguez and Marina Requena, from the University of Valencia; Emilio Luque and Yolanda Agudo, from the UNED; and Pablo Luis P. Francescutti, from the University Rey Juan Carlos.

⁴ In Sociological Abstracts, "Climate Change Conscientisation" appears only 11 times, as a translation of works produced in Romance languages. It is not usual in French either (conscientisation). The term does not appear in Italian; neither does it appear in Portuguese. Nevertheless, the term can be found in relevant cases, for example, in the discourse of ecological modernisation (see Stevenson and Dryzek, 2014: 43).

unconcerned concern: why are we actually so unconcerned about what we say we are concerned about? what can be done to overcome this situation and be coherent? A rapid and highly selective survey of the recent literature on the subject will provide an overview of the available answers. We will focus only on those that we consider relevant to the subject of analysis in the following pages.

Although it must be considered a total phenomenon (Hulme, 2009) because it affects everything and shows itself in everything, CC is immediately presented to us as a fact constructed by science (Jasanoff, 2010; Weber and Stern, 2011), which in principle is alien to the lay and everyday experience of the world. Consequently, the issue of the lack of concern about the climate has been transferred to the general problem of scientific socialisation or, in more expressive terms, the scientific literacy of the general population. This epistemic line of research was formalised in an influential paper by Bostrom *et al.* (1994) and in the book on environmental values in the USA by Kempton, Boster and Hartley (1995). The prevailing idea is that climate unconcern is a temporary outcome of shortcomings in general scientific literacy. Therefore, the assumption is that when these deficits are overcome in the future, the problem will be solved.

However, the data do not seem to corroborate that the supposedly more enlightened and scientifically literate citizens are particularly sensitive to the CC problem, nor do they seem to have a view of the issue that is closer to that of scientists and further removed from the general environmental culture (Kahan *et al.*, 2012). As a result, there is no indication that the CC science outreach effort has borne fruit.

In the face of this failure, some have opted to remain within the epistemic paradigm, enriching it with a few specific new developments. One of these is to replace the impossible universal scientific literacy with generalised trust in science and scientists

(Dunlap, 1998), or in the institutions that dictate climate policy (Lorenzoni and Pidgeon, 2006). From this point of view, it is assumed that, while laypeople will not eventually have better and greater knowledge of what CC is, they may be able to place more trust in the claims made by science or scientists. In other cases, it is proposed to reform the stark and abstract language of climate scientists in order to make it more accessible to people (Brace and Geoghegan, 2011), so that they can have a clear view of the consequences of CC. There is also a more radical variant that suggests breaking the vicious circle of an esoteric and communicatively self-enclosed science and advocates the model of post-normal science, which breaks the gulf between specialists and laypeople (Krauss, Schäfer and Storch, 2012). Some research has even proposed that the key is for people to recognise extreme weather events (Koninski, Hughes and Kaylor, 2016; Hughes, Konisky and Potter, 2020) or atypical temperature variations (Zaval *et al.*, 2014) as a field of CC experience that is a sufficient basis for triggering climate concern and raising a level of awareness that is commensurate with the situation.

Another avenue of research emphasises the role of emotions. This is presented as complementary to the epistemic model and its typical question “why don't we listen to science?”, but introduces a relevant shift from the cognitive to the emotional. By focusing on the affective reactions to its typical images, this research area directly investigates how and to what extent climate concern is generated (Leiserowitz, 2005 and 2006). The results typically involve highlighting the existence of a concern about the climate that is not sufficiently emotionally charged to displace more prosaic preoccupations. Citizens are distributed in different interpretative-affective communities, among which there are many people who are the unconcerned (cautious, indifferent or denialist). The focus of attention then becomes showing the individual and social

barriers that account for such varying degrees of (dis)engagement (Lorenzoni, Nicholson-Cole and Whitmarsh, 2007).

Beyond the epistemic paradigm and its occasional revisited and complementary aspects is the cultural paradigm. This proposes that the problem of unconcern about the climate is a cultural one. To make it understandable and resolvable, it will then suffice to uncover the cultural biases involved. In one of its variants, the cultural paradigm is close to that of scientific literacy. Kempton's influential work stemming from his research with Boster and Hartley (1995) cited above can be interpreted in this sense. In other cases there is greater autonomy, as in the research that Dake has carried out alone (1991 and 1992) or as a coauthor (Wildavsky and Dake, 1990), inspired by the proposals of Mary Douglas. The fundamental proposition is that environmental attitudes and behaviours are to be explained in terms of the values and worldviews that generate four fundamental cultural matrices: individualism, hierarchy, egalitarianism and fatalism. In turn, these four matrices generate, and are underpinned by, powerful images of nature (Thompson and Rayner, 1998) that conceive of climate events in radically different ways, acting as filters through which climate science must pass. Consequently, in order to adequately address the problem of CC, attention must be focused on the differences between cultures: each one conceives it differently and generates incommensurable (un)concern.

Another somewhat heterodox and eclectic variant of the cultural paradigm posits that in addition to cultural biases, there are psychological biases, as revealed by Slovic's psychometric paradigm (Kahan, Jenkins-Smith and Braman, 2011). Consequently, according to this self-styled model of cultural cognition, the variations in lack of concern about the climate result from both cultural diversity and the different psychological biases that are triggered in risk situations. It is therefore understandable that, observing and evaluating

things through very different psycho-cultural prisms, there are also differences in the types of (un)concern that can be identified.

The obvious question is: how is it possible to fight CC if everything is psychological and culturally biased, and therefore, what worries some is of no concern to others and nothing is common or shared? The prevailing response can be traced back to the following rules. First rule: never ignore the multiple cultural or psychological and cultural biases that distort the object to be observed. Second rule: reconstruct what people are (un)concerned about from each of the perspectives. Rule three: build bridges that allow agreements to be made between different perspectives; if this is not possible, translate the climate issue into all cultural languages and make them converge; and if this does not work, manage the different cultural worldviews so that they can converge and collaborate (Dake, 1992; Kahan, 2010). More pragmatic is the proposal made in an interesting paper by, among others, Douglas and Thompson (Verweij *et al.*, 2006), according to which, faced with a *wicked*, extremely challenging problem such as CC, we must opt for *clumsy* solutions, in which snippets of the different cultural climate universes are combined. This will lead to widespread socio-cultural acceptance.

There are, in addition, three other relevant strands of research on (un)concern about CC that focus on values, communication and the social production of climate irrelevance or ignorance, respectively.

It is obvious that the CC poses problems in terms of political and moral values. A long avenue of research shows how, from the 1980s onwards, the left/right distinction and its corresponding political values have been central to understanding climate attitudes and behaviours in the USA (McCright and Dunlap, 2011) and, to a lesser extent, in Europe (McCright, Dunlap and Marquart-Pyatt, 2016) and the rest of the world. Is it possible to craft a consensus climate policy that goes beyond

political partisanship? It seems rather difficult, albeit urgent and necessary (Giddens, 2010). In any case, (un)concern about CC is always tinged with political meta-valuations.

If we slide from political values to moral values, we run into similar aporias. That CC is processed in moral terms (Morito, 2010) and ultimately becomes a problem of justice (Gardiner, 2011) is normal, as social conflicts can be reframed in terms of justice (Boltanski and Thevénot, 1991). However, once the situation is thus defined, it is problematic to make a moral judgement about CC that is easy to articulate. In an interesting paper, Markowitz and Shariff (2012) have shown how some of the features of CC (e.g. abstractness, complexity, unintentional consequences, diffuse blame, etc.) pose serious difficulties in articulating widely shared moral judgements. Substantive changes would need to be made to overcome these obstacles, with a focus on reflexivity in Archer's sense (see Davidson 2012 and Davidson and Stedman 2018). Other streams of research have highlighted the relevance of what they have termed eco-guilt (Ferguson and Branscombe, 2010; Rees and Bamberg, 2014) in climate debates.

Research on climate communication, for its part, is vast and is an extension of the studies on risk communication carried out since the 1980s (see Farré and Gonzalo, 2011). In addition to those focused on the linguistic aspects⁵ (which are nevertheless relevant because they help to organise the climate language used by the media and the general public) and those that observe the media representations of the phenomenon, those that discuss the emotional reactions to the different ways in which the consequences of CC are presented are of particular interest. There is a long-standing debate on the advantages, disadvantages and social implications

of alarm and alarmism in CC communication; the positions are irreconcilable (see Risbey, 2008; Swingedouw, 2010; Hoggett 2011; Bettini, 2013; Beck, 2015). More constrained, research on the consequences of climate fear shows contradictory results: communication that creates fear about the consequences of CC, even if it raises the profile of the problem and generates concern, can lead to apathy and inaction, precisely what it aims to avoid (O'Neill and Nicholson-Cole, 2009; O'Neill *et al.*, 2013; Hornsey and Fielding, 2020). In any case, the Fear-Concern-Action relationship is much more complex than is assumed by the very simple models that are often used (see Chapman, Lickel and Markowitz, 2017), which is not sufficiently considered in mainstream research.

Research within the framework of agnotology, or the sociology of climate ignorance, is of great interest. They argue that CC is not only ignored due to people's negligence or incompetence, but that there is a deliberate effort to make people ignore it. The pioneering work is the well-known book by Oreskes and Conway (2018) on the "merchants of doubt". Following this avenue of research, Lucas and Davison (2018) showed how unconcern about CC is socially constructed as a result of multiple factors conspiring towards that goal. In their view, it is clearly not an inevitable fate, and, behind any climate CC/C policy there must be awareness of the powerful enemy it opposes.

A variant that is also concerned with the social production of unconcern, but with peculiar features, is the self-styled Political Economy of Relevance. It is hinted at in the work of Ollinaho (2016), in which, approaching the issue from a Schutz-inspired phenomenological perspective, it is claimed that the lack of attention to CC results from its having been placed outside everyday frameworks of relevance. As a result, it is somewhat strange, dwarfed and neglected. In short, it is only feasible to encourage people to be concerned about CC if it is

⁵ On the most relevant climate tropes, see Nerlich (2015) and the work of Ereat and Segnit (2006) on what they call "warm words" in the British media.

placed in the relevant space of everyday life. Gunderson, Stuart and Petersen (2018), combining the phenomenological approach with that of the critical school and, specifically, with Adornian proposals, have pointed out that in order to explain the everyday irrelevance of CC it is necessary to consider the ideological forces that produce it. It is not so much a question of redirecting the actor's attention towards everyday life as of fighting against the ideological apparatuses that draw attention away from CC; they are powerful and are aligned with the logic of capitalist reproduction.

Finally, it should be stressed that empirical social research on social perceptions of CC is becoming increasingly prolific in Spain. In particular, the work by Pardo (2006) is particularly relevant to the issues discussed here. She polemicalises about the tenets of post-materialist theory and argues that there is no empirical evidence of a supposed ecological conscience. Further and better empirical (quantitative and qualitative) research should be done on the problem of ecological CC/C in Spain. Other relevant studies have addressed more constrained aspects of environmental knowledge/unawareness (Oltra *et al.*, 2008), the distances between the normative and behavioural factors that influence its emergence (Echevarren, 2012), its socio-demographic bases (Rodríguez-Priego, Montoro-Ríos and Georgantzis, 2004) and the divergences between global policies and regional or local policies and actions in the field of climate action (Moyano, Paniagua and Lafuente, 2009).

METHODOLOGICAL APPROACH

The available data show contradictory trends among the Spanish public regarding their degree of concern about environmental issues. Indeed, if one considers their relative importance in the responses to the CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) barometers

since 1985, it can be seen that, when referring to the country's main problems, the responses related to environmental issues have never reached 10 % over the 35 years on record. Moreover, in the latest available barometer (October 2021, Survey 3337), only 1.6 % of Spaniards identified environmental problems among the three main current problems in Spain, and 2.1 % among the top three that most affect them personally⁶. The January 2021 Barometer (Survey 3271) clearly showed this apparent contradiction: while 67.3 % stated they were quite or very interested in news about CC, only 3.4 % selected it among the three main problems in Spain, and 2.3 % among the top three problems that affected them personally⁷. Based on the analysis of the Eurobarometers mentioned above, it appears that there has been a very low correlation between people's perceived seriousness of CC and the information they receive on the subject (Callejo, 2021). It is suggested that the public's level of concern about CC is not increasing, but fluctuates over time and fluctuations are not always linear. In other words, different poles are in tension around concern, a situation that we have called unconcerned concern (Figure 1).

How can we know the reasons and justifications for such a sharp contrast between concern and unconcern about CC? In order to answer this question, we will investigate the results of the research carried out in Madrid and Valencia between 2019-2020, until only a few days before the state of emergency that was declared due to the COVID-19 pandemic⁸. This was qualitative research that used a group method, as di-

⁶ Although the comparison with the previous series as a whole is methodologically questionable, due to the changes in the structure of the questionnaire introduced by the CIS in the April 2021 Barometer (Survey 3318).

⁷ To trace back the empirical evidence available in the CIS studies and in other European studies, we refer to Callejo and Agudo (2021) and Ramos and Callejo (2022).

⁸ See note 2.

alogical openness and verbal confrontation between participants reveals any potential contradictions, going beyond the mere normative allocation to response categories.

The design of the group method used has peculiarities that partially differentiate it from the standard conception of discussion groups (Ibáñez, 1979). As one of the focuses of the research was both cognitive engagement (what people know, what they do not know, what they know they do not know, etc.) and behavioural engagement (what people do, why they do what they do, why they do not do what they say they should do, etc.) with CC, it was decided to reduce the number of participants in each group to four, which would lead to greater involvement in group dynamics and discussions. In addition, after an open start, the dynamics became more direct as dis-

cussion progressed. The decision to have groups of four members sought to promote an open approach to the issues and to encourage some intense discussions and differential positions, which would be unlikely in groups with more participants. Simmel (2016: 181) and Pentland (2015: 28) pointed to the greater likelihood of achieving this in small groups. The profile of the different groups was marked by a common position of urban middle classes, establishing differential criteria based on the social structure: gender, age, occupation, level of education. Participants were resident in Valencia and Madrid, respectively; given their different proximity to the sea, it was thought that residents from these two cities might hold two different positions on climate risk⁹.

The design of the ten participant groups was as follows:

TABLE 1. *Group design*

	Madrid		Valencia
1M	Employed Males/Females. Residents in the metropolitan area. 2 used public transport and 2 used private transport. Between 40 and 50 years old.	1V	Females aged 16-18 years old. Participants in demonstrations such as Friday for Future, Extinction Rebellion and Climate Strikes.
2M	Male and Female university students. Degrees unrelated to CC.	2V	Females, housewives. Household income > 30,000 euros/year. With children.
3M	Male and Female civil servant middle class. Looking for housing. Between 30 and 40 years old.	3V	Male employers with less than 10 employees.
4M	Unemployed females. 2 with children in secondary education; 2 without children.	4V	Male and female science and engineering students (degrees unrelated to natural environment).
5M	Retired male and female middle class civil servants. 72-88 years old.	5V	Male and female representatives of employers and members of the environmental movement.

Note: M: Madrid, V: Valencia.

Source: Developed by the authors based on the Incerclima project.

The structure of the dynamics was based on an initial non-directive approach, which became more directive as the meeting progressed. It was thematically organised into the following stages: 1) general views of CC; 2) uncertainties regarding CC; 3) known measures in relation to the fight against CC and views in this regard; 4) involvement with CC; 5) actors responsible for CC; 6) generation of proposals for measures by the group;

7) communications on CC; 8) specific measures received in the areas of housing, transport and food. From the fourth stage onwards, a more directive approach was taken, which entailed questioning the participants about their involvement.

⁹ This differentiated perception of, for example, Valencian groups, depending on their greater proximity to the sea, did not appear in the discourses produced.

VARIANTS OF CONCERN ABOUT CC

Different views of CC¹⁰ came out of the various groups. However, despite the different conceptions, they all recognised it as something that exists: it is happening, it is underway, it is starting to be manifested or it will soon become evident. Furthermore, whoever wants to know about it can obtain information about it:

But nowadays, if you don't know something, it's because it's happening in front of you and [...] well, you don't want to [...] you have all the tools to be able to know and be informed about what's going on [...] (Group 1V).

Although participants made veiled criticisms of scientific arguments for not being clearer and more emphatic, they believed that science fully recognises the existence of CC, which makes it unobjectionable:

I have not read the IPCC reports, but I have read analyses of them. And I trust that information, I don't question it (Group 4V).

In fact, beyond science, it is enough to pay attention to one's experience and recognise that it is happening and is visible. As expressively put by one of the participants: "And it is changing, you can see it, you don't need anyone to tell you, you can see it yourself" (Group 5M).

Consequently, whether based on what science "says", or on phenomenological experience, CC exists and is recognised. But not by all. Although timidly and in the minority, doubt and/or denial was also expressed. Arguments along the lines of "some say and others say" (1M), "I neither believe it nor disbelieve it" (5M), "Mr Trump denies CC" (1M), "it is a purely natural phenomenon" (3V), among others, occasionally appeared. However, they were always minor conjectures, which resulted in disagreement

and was batted away; those who claimed to know better, dismissed it as being unfounded (1V). It thus had the status of a marginal rival to the clearly hegemonic position that held that CC exists (whatever that means).

The CC that was recognised elicited different types of concern and unconcern¹¹. This wide range of views can be organised by placing the emerging discourses along a two-dimensional space intersected by two structuring axes (Figure 1). One of them organises the discursive variants along the continuum of knowing; the other, along the continuum of doing. On the first axis, the positions follow one another from one end of certainty to the opposite end of uncertainty-ignorance. In the second axis, discourse is organised along a continuum where one end is power and the opposite end is powerlessness. The interplay of the two axes makes it possible to distinguish various situations that portray modes of concern, unconcern and engaged concern.

Figure 1 visualises the crossing of the axes of Knowing and Doing, delimiting at least five spaces that have a differential logic in the configuration of (un)concern. At the angle where Power and Certainty meet is the space of Concern (area 1). In this case, the speakers, who claimed to be certain and feel empowered, expressed an unequivocal concern about CC. In the opposite corner (area 2), where Powerlessness and Ignorance meet, is the space more characteristic of Unconcern. Within this position, it is assumed that, given the situation of ignorance or extreme uncertainty and their helplessness or powerlessness as actors, it makes no sense to worry about CC, as it is outside the sphere of knowing and doing: why worry about something that we do not know and is beyond us? The upper left space (area 3) covers the posi-

¹⁰ For a detailed discussion of the different levels of CC semantics, see Ramos and Callejo (2022).

¹¹ The proposals made by Ramos and Callejo (2022) are succinctly outlined below. For further details, we refer to their work.

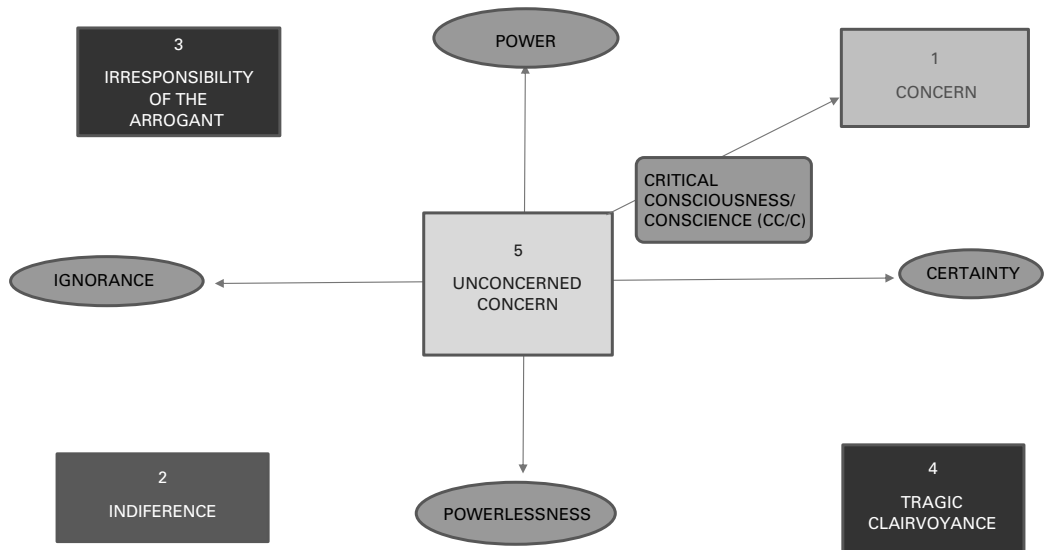
tions closest to Power and Ignorance, giving rise to what the speakers denounced as the Irresponsibility of the Arrogant. In this case, it was said that a few, those “at the top”, who are in a privileged position that would allow them to act effectively, pretend to know nothing and, driven by their short-term interests, remain sceptical; consequently, they are unconcerned and do nothing, even though they could and should do something. The lower right area contains Certainty and Powerlessness (area 4), in what we call the area of Tragic Clairvoyance. CC is recognised as a certain fact which should be acted upon, but one’s peripheral and powerless position means that nothing that one would like to do can be done; in the end, unconcern emerges from the clairvoyance of the tragic actor who sees misfortune approaching without being able to do anything to prevent it.

The most important space is in area 5, where weak positions of Knowing and Doing intersect. This is the space of Unconcerned Concern. It is the most widely travelled road, where most of the reasons and

justifications can be found, given its demanding and unbalanced status. It can consequently be considered the hegemonic space in the material analysed. Participants discourse here claimed to have a glimpse or knowledge of some of the extremes of CC, and also suggested that something can be done, even if it is little and without great impact. The combination of diminished knowledge and weakened power makes them be concerned and unconcerned at the same time: they are concerned because they know something and can do something; they are unconcerned because they have little knowledge and feel greatly powerless. The result is Unconcerned Concern.

The space of area 5 is thus dominated by a paradox that has the virtue of both unsettling and energising it. Figure 1 shows how an arrow connecting Unconcerned Concern with Full Concern emerges from it. This arrow represents the path of transformations that speakers referred to as CC/C. The following section is focused on analysing this process.

FIGURE 1. Spaces of (un)concern about Climate Change



Source: Developed by the authors based on the Incerclima project.

CLIMATE CHANGE CRITICAL CONSCIOUSNESS/CONSCIENCE PROCESSES

CC/C, consciousness or awareness raising, becoming aware, being aware, etc. are terms that were featured in the exchanged views of participants when they addressed the problem of concern about CC. Similarly to any situation where a concept that is the object of public discussion (such as in the case of

group meetings), it plays a moralising role (Miller, 1992: 61). It is approached here as an emic concept and, consequently, this section is intended to establish and clarify the meaning assigned to it by the actors.

There were frequent and pervasive references to CC/C across all groups, albeit unevenly. Table 1 shows the distribution of these allusions, as well as mentions of other terms to which it is related¹².

TABLE 1. Number of participants' remarks in which the respective term or its derivatives prevailed

Group	CC/C-awareness-being aware	Education	Consumption/consumerism/responsible consumption
1M	25	9	2
2M	54	29	13
3M	22	24	4
4M	20	5	5
5M	3	18	13
1V	9	5	7
2V	11	10	2
3V	10	2	13
4V	7	2	20
5V	14	0	14
TOTAL	175	104	93

Source: Developed by the authors.

CC/C was therefore the main character in the CC drama. On the one hand, it was the lifeline that was supposed to lead to a future without denialism (2.1 in Table 2); on the other hand, it provided a picture of the situation we are heading towards: an optimistic scenario of growing CC/C that will awaken people, leading them to become organised and take action (2.2a and b). While CC/C is involved in the persuasive triumphant rhetoric of CC disputes, it gives confidence in the final victory.

CC/C is both a dynamic process and a desired end state. Its procedural character is paramount. This leads to conceiving it as a step-by-step process, punctuated by stages of imperfection, where only a small

minority of *virtuous* people make it through to the end (2.3). Real CC/C is always partial and flawed (2.4). No one can be sure of having reached the final state or of being able to stay there; it is always a road-towards, gradually unblocking the paradox of (un)concern, or a horizon that recedes as one approaches; hence it becomes a subject of relentless reflexivity.

¹² Regarding Table 1, it should be noted that: a) in the meetings, it was never the moderator who introduced these terms; b) the number of remarks was recorded, so either the basic term or its derivatives may have been used several times in one statement; c) the moderator's remarks that contained the term after it had been mentioned by participants (to ask them about its meaning) have been excluded.

The active subject of CC/C can be oneself, who reflexively becomes self-aware (2.5), or someone else, either a person (2.6a and b) or an institution (2.7a and b) that raises awareness of others or should do so. The underlying idea is that those who

achieve conscientisation or have public responsibility (the state, “those at the top”) should be engaged in widespread CC/C; therefore an urgent responsibility is demanded of them for raising the CC/C of the generalised other, the people (2.8).

TABLE 2. *Semantics of CC. Verbatim statements. On awareness*

2.1	“I think the days of denialism are numbered, because there is going to be very widespread awareness of this issue [CC]”.	2V
2.2a	“I see a scenario where there is going to be growing awareness, because it will be very fast, and this will have to lead to forms of organisation and greater awareness of the importance of taking action.”	2V
2.2b	“That this is going to change, that people are becoming more and more aware, we are taking more care of the planet, we are [...]”.	4V
2.3	“The group of people who are strongly aware, make efforts, participate as much as possible in different demonstrations, etc., but I think that even there they fall into inconsistencies. I mean, I think that the people who actually manage to live a lifestyle that is fully aligned with awareness are a very small minority”.	2V
2.4	Woman 1: “I am not 100 % aware” // Woman 2: No, I don't think so. // Woman 3: “I am aware, but...” // Woman 4: “To a certain extent, only the recycling thing, the rest...”	4M
2.5	“Each of us must become aware and know what we have to do to improve the environment”.	2M
2.6a	“The situation is all about raising awareness. I have to let everyone know..., well, I... we have to let everyone around us know that very bad things are happening and that if we continue in this situation, we are going to go into decline”.	5V
2.6b	“If we manage to raise awareness, even of a small part of the population, maybe the future won't be as bad as we think. [...] The situation is all about raising awareness. I have to let everyone know”.	6V
2.7a	“I think the first ones should be governments, big companies that have make us aware of what has to be done.”	1M
2.7b	“Awareness-raising has to come from the top”.	2M
2.8	“I would like people to really, really be made aware of Climate Change, you know? I mean, I'd like it to really reach people, whatever, Climate Change, how important it is”.	1M

Source: Developed by the authors based on the Incerclima project.

What does it involve and what are the typical outcomes of such a task? It is a complex concept that brings together learning and moral conversion: the outcome of a tension between two distinct forces. We will call these two forces Enlightenment and Asceticism. Their relationship with the two sides (cognitive and moral) of awareness/conscience and with the two decisive axes of concern about CC are obvious: knowing and doing, in their various degrees and manifestations. Enlightenment, as a force

used to raise CC/C, focuses its efforts on knowledge as a process of veridiction; Asceticism, on doing as moralisation. Both forces are neither supra-ordinate or subordinate to each other, nor can they reduce each other. It is not enough to know what is true in order to do what is right, nor vice versa; one has to be in the game of both, a Weberian game, not a Socratic one.

CC/C is conceived, on the one hand, as a process of Enlightenment in the Kantian sense: a form of “sapere aude” that allows us

to learn and be guided in the world by what we rationally learn until we reach lucidity¹³. According to the various participants' statements that attempted to clarify it, at least three stages can be identified in this process. The first is simply making others aware of (3.1), or making oneself aware of (3.2), some of the manifestations of CC. In this case, CC/C usually refers to the environmental syndrome (3.3), i.e. pollution (in its different variants), abandoned plastics and glass, littering on land and sea, etc.

The second stage goes somewhat further, beyond the immediate present of contamination. It is then said that we become aware because we are able to know the strategic

spatial and temporal consequences of what we do (3.4 and 3.5). It is consequential knowledge that depends on science. But even then, when one moves from being aware to knowledge, one does not yet reach the third and final stage of enlightened CC/C. We have called this climate clairvoyance or lucidity, i.e. the deep and comprehensive assumption of the truth of CC. Being aware means, then, as in the case of climate experts, structuring this truth, translating it and becoming its spokesperson (3.6), calling for action. In this way, the path of Enlightenment thus reaches its goal: the Kantian audacity to know calls for the Comtian pressing need for action.

TABLE 3. *Semantics of awareness. Verbatim statements. On enlightenment*

3.1	"Raising awareness is like making [it] known".	2M
3.2	"I realised and every time I went shopping, I was more aware of what was involved in every package we had and bought".	2M
3.3	"Going somewhere and seeing it, seeing it, we will be more aware because maybe you say, no, no way, people won't accept it in the same way; for example, to the landfill, let them go to the landfill".	2M
3.4	"Making people see that what they do has a repercussion; that when you throw a plastic bottle into the sea, if you were next to the island of shit in the Pacific (I don't know how big it is, but it's huge), you might think twice. That's what I think raising awareness is: seeing the results of what you do".	2M
3.5	Moderator: "what does it mean to raise awareness?" //Woman: "Making people see". // Man 1: "The value or harm, the consequences". // Man 2: "For our children. The consequences it may have on life between now and [...]".	3M
3.6	"Climate Change experts have done everything. They have explained, they have [...], in fact, they have explained everything very simply, and in a way that most people can understand what's happening. What it is [...]. I think it is a great challenge for any field of science to make the general public understand what is going on".	1V

Source: Developed by the authors based on the Incerclima project.

The other side of CC/C is the deontic side: it calls for a duty to do. It is not just a matter of seeing things differently or living one's life being convinced that CC exists, but of setting a path or a goal to reshape the normative framework for action.

Whether or not it comes from an enlightened intellectual conviction is contingent: sometimes it happens, sometimes it does not, and sometimes it may be contrary or indifferent to it (4.1).

The moral journey begins at a trivial station and ends at a fork in the tracks. The initial station is banal: it reclaims education as a set of values/norms of pure civility that suitably shape the relationship between humans, their environments and the things in them. It pushes people to do

¹³ Kant said in a late text from 1784: "Enlightenment is man's release from his self-incurred tutelage. Tutelage is man's inability to make use of his understanding without direction from another [...] Sapere aude! Have courage to use your own reason: that is the motto of enlightenment" (Kant, 1978: 25).

the right thing. It is an insistent demand for civic-mindedness (4.2. a, b and c) that focuses attention on the most superficial aspects of the environmental syndrome (among others: dog excrement and littering of the countryside and beaches) (4.3). Beyond this, a second stage combines the

claim of a duty of care for a threatened nature (4.4) with the assumption of a principle of responsibility (4.5). We must assume, in the Jonasian way (Jonas, 1995), that, as we have great power, we must use it responsibly for the good of both nature and future generations.

TABLE 4. *The semantics of awareness. Verbatim statements. On action*

4.1	"I am aware that Climate Change is real, the only thing is that I don't see a way out, I don't... What can we do, individually? Because collectively they force you to take some measures, and that's it, but individually, what can we do? It's very complicated [...]". "Becoming aware, everybody knows that, but [...]".	1M
4.2a	"So, I think that above all, we have to raise awareness. And start with education, which I think is where everything will move forward".	5V
4.2b	"To educate citizens to be civic-minded, not to throw things away [...]".	5M
4.2c	"It's all about education. Education, education and the education-related. Because that is the only way to change people's minds".	3V
4.3	"I do see people being a bit more aware of dog shit, for example". Man: "I go to the countryside and it's full of beer cans, you know? People are not aware, we are not aware at all, going to the countryside, and you see the countryside [that] it's just so sad. //Woman: "That is a matter of education". //Man: "Of course, but it's like she says, there is also a lack, not of environmentalism, but of education. I mean, if you go to a public place, leave everything tidy, whether it's a beach, a park, or a friend's house [...]".	2M
4.4	"Well, we have to take care of the Earth, the Earth has health just as people do. We are part of the Earth and if you don't take care of yourself, if you don't take look after your diet, your way of life, you get sick and we are making the Earth sick, polluting it with waste, with rubbish, we generate more and more rubbish, we throw it all away".	5M
4.5	"Taking ownership of the problem of the situation saying 'this is something that'...[...] that is my responsibility and isn't, but that affects, but affects me and doesn't, but that affects our planet and that is also my responsibility. That the planet is everyone's home, in short, it is our shared home".	4M
4.6a	"More people. More human, more humanised. Less individual".	4V
4.6b	"Trying to ensure that this collapse, which is almost certainly going to happen, happens in a way that we can manage it in a sustained collective manner and not by thinking individually".	5V
4.7	"Because there is so much rubbish in the world that I don't know how people are going to throw rubbish at us one day... Because the worst thing about mobiles is that every time a better one comes out, people change and throw it away, throw it away, throw it away and spend, spend and generate, generate and generate new electrical appliances and all that rubbish and I don't know [...]".	4M
4.8a	"I have a small livestock farm at home. I have six chickens at home. And all the compost is home-made... I don't add anything to the compost. And every day I eat... Well, I don't eat them, because it's impossible, but every day the hens lay six eggs".	5V
4.8b	"I don't eat meat now, but because I don't like to think I'm eating a corpse. But, honestly, I don't think I'm saving anything by not eating meat. [...] Supposedly, as I don't eat meat, there's no need to kill the animals that I would eat, and also the water and food that would be used for the animals are not used".	6V
4.9	"You have to create imaginaries. In other words, you have to be able to convey that there are other possible imaginaries and that other things are happening, because otherwise people...".	5V
4.10	"And people need to be able to recognise themselves and to be able to recognise and motivate themselves to believe that another world is possible, because if we don't motivate ourselves to believe that another world is possible, I might as well stay at home, don't you think?".	5V
4.11	"Like, we're moving forward to the extent that we're comfortable and people must accept that if you want to move forward, you're not going to be comfortable. So put up with it, hang in there and move forward. But in the end that's what it is. People want to be comfortable and not get out of their comfort zone".	1V

Source: Developed by the authors based on the Incerclima project.

From that point, a bifurcation appears on the road of moral progress. It is not clearly drawn, but its borders can be recognised. The two paths that emerge embody variants of Asceticism. In the tradition of Durkheim (1982) and Weber (1979), we understand this as the demand for resisting/ renouncing instant gratification or simple utilitarian adaptation to the profane world, in favour of transcendent socio-cultural goals. There are two enemies of Asceticism that have to be sacrificed: utilitarian-egoistic individualism (4.6 a and b) and consumerism (4.7). The former precipitates people into selfless action for instant gratification; consumerism, on the other hand, turns the environment into something to be exploited without measure or into a large rubbish dump into which to throw the debris of our insatiable appetite. The two variants of Asceticism are outlined by resisting or rejecting those two enemies. Neither prevailed in the discussions, but both were presented as the most demanding embodiment of the code of the good and exemplary.

The first is a form of asceticism that renounces the civilisational present in favour of a sacrificial return to an idealised past going back to the orchard and village (4.8 a). Essentially, it is a variant of the multi-secular Christian *Reformatio*, which aimed to rescue us from a world of sin by recovering the original community of faith and charity. Such a return to the simple and 'natural' can be combined with an Asceticism of Brahmanical ritual purity, free of dirt and blood, as argued by some proponents of vegetarianism and/or veganism (4.8 b). It is not an extra-mundane Asceticism, but it is close to it.

There is another, more properly intra-mundane Asceticism: a renouncement that explores the future in search of alternatives and advocates the refounding of values and norms in line with what is called a new "imaginary" (4.9). In this case, the road to moral perfection leads to a terri-

tory that contemplates the horizon of what a participant presented as another possible world (4.10): the possibility of a high ethical world, difficult to reach, because it can only be achieved by accumulating renunciations and discomfort (4.11). In contrast to the Asceticism of a return to a certain past, another Asceticism is proposed that explores a future that never existed. They are two variants of Asceticism: both renounce the "world" of individualism-consumerism, embracing a transcendent goal; in one case, "flying" backwards, out of the present world; in the other, bearing witness to a possible civilisational other.

Thus, not everything is Enlightenment that dares to know; other avenues point to a form of Asceticism that renounces or resists certain options for transcendental reasons. The deontic journey of CC/C, going beyond what is right or the polite duty of care and Jonasian responsibility, can become a CC critique of civilisational values. Asceticism thus seems to point towards an ecological post-consumerist post-individualism, that is barely sketched out in the participants' exchanges of reason and senselessness. CC/C thus culminates in its double cognitive and practical side. It is a journey towards perfection and exemplarity that ideally culminates in the appearance of an unlikely Clairvoyant Ascetic.

CONCLUSIONS

In Romance languages, conciencia, coscienza, conscience [lat. conscientia] have a double meaning: cognitive and moral (Ferrater, 1979). This polysemy is an accurate portrayal of what participants meant when they referred to CC/C. For them, it is a process of cognitive order towards a truth telling, but also a deontic process in which the rules that should govern a climate/nature-friendly action have to be established. Whether it is one or the other, or

both at once, CC/C is the focus of attention when it comes to the concern about CC. In any case, it exudes positive connotations. There is no shadow of a potential “false consciousness”.

CC/C is a dynamic, step-by-step process. At the cognitive level, it goes from simple awareness of the proliferation of waste to a safe systemic knowledge that can effectively illuminate action; at the moral level, it moves from mere civic recognition or duty of care for nature to an Asceticism of renunciation or refusal; in both cases, CC/C is movement, it does not rest; perhaps because it has to face the logical and existential devil in the pragmatic paradox that carefree concern unfolds.

We have reconstructed some of its essential elements. This establishes what constitutes the central object of this work: to rebuild the available toolbox or repertoire of meaning at hand (Ramos and Callejo, 2016)¹⁴. As was to be expected, we did not find a unitary or vertebrate discourse; nor did we identify several clearly differentiated and fully vertebrate discourses (Callejo, 2021). What has been shown are regular discursive snippets (Foucault, 1973). The groups’ own appeal to CC/C should be taken as recognition of the non-existence of discourses or expressions capable of coordinating the actions of a significant number of individuals (Stevenson and Dryzek, 2014). What is striking is that they are no different from what is triggered when the social science of concern/CC/C about CC is in operation. Indeed, attention is focused on the same issues: expert knowledge about CC, problems with its abstractness and technical complexity, full or conditional reliance on science, recognition of the various viewpoints, the relevance of emotions in portray-

ing what is happening, CC moralisation, the importance of reflexivity in the process of finding normative underpinnings, CC communication strategies, the way CC is presented in everyday experience, the battle against denialism, the need to go beyond the environment to address and change the deep structures of today’s society and civilisation. Laypeople are not passive recipients of specialist knowledge. Even if they do not “see” CC, they know a lot about it and, above all, they try to shed light on the reasons that make it a really messy issue and the available solutions only reliable to a limited extent.

BIBLIOGRAPHY

- Beck, Ulrich (2015). “Emancipatory Catastrophism: What Does It Mean to Climate Change and Risk Society?”. *Current Sociology*, 63(1): 75-88. doi: 10.1177/0011392114559951
- Bettini, Giovanni (2013). “Climate Barbarians at the Gate? A Critique of Apocalyptic Narratives on ‘Climate Refugees’”. *Geoforum*, 45: 63-72. doi: 10.1016/j.geoforum.2012.09.009
- Blake, James (1999). “Overcoming the ‘Value-Action Gap’ in Environmental Policy: Tensions Between National Policy and Local Experience”. *Local Environment*, 4(3): 257-278. doi: 10.1080/13549839908725599
- Boltanski, Luc and Thévenot, Laurent (1991). *De la justification: économies de la grandeur*. Paris: NRF.
- Bostrom, Ann; Morgan, Granger M.; Fischhoff, Baruch and Read, Daniel (1994). “What Do People Know about Climate Change? Part 1: Mental Models”. *Risk Analysis*, 14: 959-970. doi: 10.1111/j.1539-6924.1994.tb00065.x
- Brace, Catherine and Geoghegan, Hillary (2011). “Human Geographies of Climate Change: Landscape, Temporality, and Lay Knowledges”. *Progress in Human Geography*, 35(3): 284-302. doi: 10.1177/0309132510376259
- Callejo, Javier (2021). “El discurso ausente: el caso del cambio climático”. *Papers*, 106(2): 279-301. doi: 10.5565/rev/papers.2802
- Callejo, Javier and Agudo, Yolanda (2021). Información y opinión pública en el marco del cam-

¹⁴ On the concept of the repertoire of meaning at hand, a close relative of Swidler’s (1986) toolbox, see the proposals made in Ramos and Callejo (2016) in relation to the social semantics of the crisis.

- bio climático. In: D. Álvarez Rivas and I. Jiménez Gómez (eds.). *Comunicación y cambio climático* (pp. 11-32). Madrid: Fragua.
- Carolan, Michael (2010). "Sociological Ambivalence and Climate Change". *Local Environment*, 15(4): 309-321. doi: 10.1080/13549831003677662
- Chapman, Daniel A.; Lickel, Brian and Markowitz, Ezra (2017). "Reassessing Emotion in Climate Change Communication". *Nature Climate Change*, 7: 850-852. doi: 10.1038/s41558-017-0021-9
- Dake, Karl (1991). "Orienting Dispositions in the Perception of Risk: An Analysis of Contemporary Worldviews and Cultural Biases". *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 22: 61-82. doi: 10.1177/0022022191221006
- Dake, Karl (1992). "Myths of Nature: Culture and the Social Construction of Risk". *Journal of Social Issues*, 48: 21-37. doi: 10.1111/j.1540-4560.1992.tb01943.x
- Davidson, Debra (2012). "Analyzing Responses to Climate Change through the Lens of Reflexivity". *British Journal Sociology*, 63(4): 616-640. doi: 10.1111/j.1468-4446.2012.01429.x
- Davidson, Debra J. and Stedman, Richard C. (2018). "Calling Forth the Change-makers: Reflexivity Theory and Climate Change Attitudes and Behaviors". *Acta Sociológica*, 61(1): 79-94. doi: 10.1177/0001699317693065
- Dunlap, Riley E. (1998). "Lay Perceptions of Global Risk: Public Views of Global Warming in Cross-national Context". *International Sociology*, 13: 473-498. doi: 10.1177/026858098013004004
- Durkheim, Émile (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Akal.
- Echavarren, José M. (2012). La percepción del cambio climático en España. In: A. Baigorri (ed.). *Transiciones ambientales y participación: estudios de sociología ambiental* (pp. 67-78). Salamanca: Amarú.
- Ereaut, Gill and Segnit, Nat (2006). *Warm Words: How Are We Telling the Climate Story and Can We Tell It Better?* London: IPPR.
- Farré, Jordi and Gonzalo, José L. (2011). *Teoría de la Comunicación de Riesgo*. Barcelona: UOC.
- Ferguson, Mark A. and Branscombe, Nyla R. (2010). "Collective Guilt Mediates the Effect of Beliefs about Global Warming on Willingness to Engage in Mitigation Behavior". *Journal of Environmental Psychology*, 30(2): 135-142. doi: 10.1016/j.jenvp.2009.11.010
- Ferrater, José (1979). *Diccionario de Filosofía*. Madrid: Alianza.
- Foucault, Michel (1973). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- García, Ernest (2008). ¿Por qué andamos siempre a la greña con la naturaleza si nos pasamos la vida jurándole amor eterno? In: J. Riechmann (coord.). *¿En qué estamos fallando? Cambio social para ecologizar el mundo* (pp. 27-52). Barcelona: Icaria.
- Gardiner, Stephen (2011). Climate Justice. In: J. Dryzek; R. Norgaard and D. Schlosberg (eds.). *Oxford Handbook of Climate Change and Society* (pp. 248-258). Oxford: Oxford University Press.
- Giddens, Anthony (2010). *Política del Cambio Climático*. Madrid: Alianza.
- Gunderson, Ryan; Stuart, Diana and Petersen, Brian (2018). "Ideological Obstacles to Effective Climate Policy: The Greening of Markets, Technology, and Growth". *Capital & Class*, 42(1): 133-160. doi: 10.1177/0309816817692127
- Hoggett, Paul (2011). "Climate Change and the Apocalyptic Imagination". *Psychoanalysis, Culture & Society*, 16(3): 261-275. doi: 10.1057/pcs.2011.1
- Hornsey, Matthew J. and Fielding, Kelly S. (2020). "Understanding (and Reducing) Inaction on Climate Change". *Social Issues & Policy Review*, 14(1): 3-35. doi: 10.1111/sipr.12058
- Hughes, Liewelyn; Konisky, David M. and Potter, Sandra (2020). "Extreme Weather and Climate Opinion: Evidence from Australia". *Climatic Change*, 163(2): 723-743. doi: 10.1007/s10584-020-02900-5
- Hulme, Mike (2009). *Why We Disagree About Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibáñez, Jesús (1979). *Más allá de la sociología*. Madrid: Siglo XXI.
- Jasanoff, Sheila (2010). "A New Climate for Society". *Theory, Culture & Society*, 27(2-3): 233-253. doi: 10.1177/0263276409361497
- Jonas, Hans (1995). *El principio de responsabilidad*. Barcelona: Herder.
- Kahan, Dan (2010). "Fixing the Communications Failure". *Nature*, 463: 296-297. doi: 10.1038/463296a
- Kahan, Dan M.; Jenkins-Smith, Hans and Braman, Donald (2011). "Cultural Cognition of Scientific Consensus". *Journal of Risk Research*, 14(2): 147-174. doi: 10.1080/13669877.2010.511246

- Kahan, Dan; Peters, Ellen; Wittlin, Maggie; Slovic, Paul; Ouellette, Lisa L.; Braman, Donald and Mandel, Gregory (2012). "The Polarizing Impact of Science Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks". *Nature Climate Change*, 2: 732-735. doi: 10.1038/NCLIMATE154
- Kempton, Willet; Boster, James, S. and Hartley, Jennifer A. (1995). *Environmental Values in American Culture*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Konisky, David M.; Hughes, Liewelyn and Kaylor, Charles H. (2016). "Extreme Weather Events and Climate Change Concern". *Climate Change*, 134(4): 533-547. doi: 10.1007/s10584-015-1555-3
- Krauss, Werner; Schäfer, Mike and Storch, Hans von (2012). "Introduction: Post-normal Climate Science". *Nature & Culture*, 7(2): 121-132. doi: 10.3167/nc.2012.070201
- Leiserowitz, Anthony (2005). "American Risk Perceptions: Is Climate Change Dangerous?". *Risk Analysis*, 25(6): 1433-1442. doi: 10.1111/j.1540-6261.2005.00690.x
- Leiserowitz, Anthony (2006). "Climate Change Risk Perception and Policy Reference: The Role of Affect, Imagery and Values". *Climate Change*, 77: 45-72. doi: 10.1007/s10584-006-9059-9
- Lorenzoni, Irene and Pidgeon, Nick (2006). "Public Views on Climate Change: European and USA Perspectives". *Climatic Change*, 77(1-2): 73-95. doi: 10.1007/s10584-006-9072-z
- Lorenzoni, Irene; Nicholson-Cole, Sophie and Whitmarsh, Lorreine E. (2007). "Barriers Perceived to Engaging with Climate Change among the UK Public and Their Policy Implications". *Global Environmental Change*, 17(3): 445-459. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2007.01.004
- Lucas, Chloe H. and Davison, Aidan (2018). "Not «Getting on the Bandwagon»: When climate change is a matter of unconcern". *Environment and Planning E*, 2(1): 129-148. doi: 10.1177/2514848618818763
- Markowitz, Ezra M. and Shariff, Azim F. (2012). "Climate Change and Moral Judgement". *Nature Climate Change*, 2: 243-247. doi: 10.1038/NCLIMATE1378
- McCright, Aaron and Dunlap, Riley E. (2011). "The Politicization of Climate Change and Polarization in the American Public's Views of Global Warming, 2001-2010". *Sociological Quarterly*, 52(2): 155-194. doi: 10.1111/j.1533-8525.2011.01198.x
- McCright, Aaron, Dunlap, Riley E. and Marquart-Pyatt, Sandra (2016). "Political Ideology and Views about Climate Change in the European Union". *Environmental Politics*, 25(2): 338-358. doi: 10.1080/09644016.2015.1090371
- Miller, David (1992). "Deliberative Democracy and Social Choice". *Political Studies*, 40: 54-67. doi: 10.1111/j.1467-9248.1992.tb01812.x
- Morito, Bruce (2010). "Ethics of Climate Change: Adopting an Empirical Approach to Moral Concern". *Human Ecology Review*, 17(2): 106-116.
- Moyano, Eduardo; Paniagua, Ángel and Lafuente, Regina (2009). "Políticas ambientales, cambio climático y opinión pública en escenarios regionales. El caso de Andalucía". *Revista Internacional de Sociología*, 67(3): 681-699. doi: 10.3989/ris.2008.01.23
- Nerlich, Brigitte (2015). "Metaphors in Science and Society: The Case of Climate Science and Climate Scientists". *Language & Semiotic Studies*, 1(2): 1-15.
- Nisbet, Matthew (2011). Public Opinion and Participation. In: J. Dryzek; R. Norgaard and D. Schlosberg (eds.). *Oxford Handbook of Climate Change and Society* (pp. 283-294). Oxford: Oxford University Press.
- Norgaard, Kari (2011). *Living in Denial: Climate Change, Emotions and Everyday Life*. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
- Ollinaho, Ossi (2016). "Environmental Destruction as (Objectively) Uneventful and (Subjectively) Irrelevant". *Environmental Sociology*, 2(1): 53-63. doi: 10.1080/23251042.2015.1114207
- Oltra, Christian; Sala, Roser; Gamero, Nuria and Solà, Rosario (2008). "Cambio climático y opinión pública en España: percepción del problema y política energética". *Sistema: Revista de Ciencias Sociales*, 205: 93-106.
- O'Neill, Saffron and Nicholson-Cole, Sophie (2009). "«Fear Won't Do It»: Promoting Positive Engagement with Climate Change through Visual and Iconic Representations". *Science Communication*, 30(3): 355-379. doi: 10.1177/1075547008329201
- O'Neill, Saffron; Maxwell Boykoff, Maxwell; Niemeyer, Simon and Day, Sophie A. (2013). "On the Use of Imagery for Climate Change Engagement". *Global Environmental Change*, 23: 413-421. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2012.11.006
- Oreskes, Naomi and Conway, Erik M. (2018). *Mercaderes de la duda*. Madrid: Capitán Swing.
- Pardo, Mercedes (2006). El análisis de la conciencia ecológica en la opinión pública: ¿contradicciones entre valores y comportamiento? In: R. de Cas-

- tro (coord.). *Persona, Sociedad y Medio Ambiente, Perspectivas de la investigación social de la sostenibilidad* (pp. 71-82). Sevilla: Junta de Andalucía.
- Pentland, Alex (2015). *Social Physics*. New York: Penguin.
- Ramos, Ramón and Callejo, Javier (2016). Semántica social de la crisis: repertorio de sentido a la mano. In: B. Tejerina and G. Gatti (eds.). *Pensar la agencia en la crisis* (pp. 35-56). Madrid: CIS.
- Ramos, Ramón and Callejo, Javier (2022). "La preocupación social por el cambio climático en España: una aproximación cualitativa". *Política y Sociedad*, 59(3): 74131. doi: 10.5209/pos.74131
- Reynolds, Travis W.; Bostrom, Ann; Read, Daniel and Morgan, M. Granger (2010). "Now What Do People Know about Global Climate Change? Survey Studies of Educated Lay People". *Risk Analysis*, 30: 1520-1538. doi: 10.1111/j.1539-6924.2010.01448.x
- Rees, Jonas H. and Bamberg, Sebastian (2014). "Climate Protection Needs Societal Change: Determinants of Intention to Participate in Collective Climate Action". *European Journal of Social Psychology*, 44(5): 466-473. doi: 10.1002/ejsp.2032
- Risbey, James S. (2008). "The New Climate Discourse: Alarmist or Alarming?". *Global Environmental Change*, 18(1): 26-37. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2007.06.003
- Rodríguez-Priego, Nuria; Montoro Ríos, Francisco J. and Georgantzis, Nikolaos (2014). "Percepción del riesgo y compromiso por reducir el cambio climático global en España". *Revista Internacional de Sociología*, 72(1): 173-200. doi: 10.3989/ris.2012.08.03
- Roser-Renouf, Connie and Nisbet, Matthew (2008). "The Measure of Key Behavioral Science Constructs in Climate Change Research". *International Journal of Sustainability Communication*, 3: 37-95.
- Simmel, Georg (2016). *Sociología: estudios sobre las formas de socialización*. México: FCE.
- Stevenson, Hayley and Dryzek, John S. (2014). *Democratizing Global Climate Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Swidler, Ann (1986). "Culture in Action". *American Sociological Review*, 51(2): 273-286.
- Swyngedouw, Erik (2010). "Apocalypse Forever? Post-political Populism and the Spectre of Climate Change". *Theory, Culture & Society*, 27(2-3): 213-232. doi: 10.1177/0263276409358728
- Thompson, Michael and Rayner, Steve (1998). "Risk and Governance Part I: The Discourses of Climate Change". *Government & Opposition*, 33(2): 139-166. doi: 10.1111/j.1477-7053.1998.tb00787.x
- Verweij, Marco; Douglas, Mary; Ellis, Richard; Engel, Christoph; Hendriks, Frank; Lohmann, Susanne; Ney, Steven; Rayner, Steve and Thompson, Michael (2006). "Clumsy Solutions for a Complex World: The Case of Climate Change". *Public Administration*, 84(4): 817-843. doi: 10.1111/j.1540-8159.2005.09566.x-i1
- Weber, Elke (2016). "What Shapes Perceptions of Climate Change? New Research since 2010". *WIREs Climate Change*, 7: 125-134. doi: 10.1002/wcc.377
- Weber, Elke and Stern, Paul (2011). "Public's Understanding of Climate Change in the United States". *American Psychologist*, 66: 315-328. doi: 10.1037/a0023253
- Weber, Max (1979). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Barcelona: Península.
- Wildavsky, Aaron and Dake, Karl (1990). "Theories of Risk Perception: Who Fears What and Why?". *Daedalus*, 119(4): 41-60.
- Zaval, Lisa; Keenan, Elizabeth; Johnson, Eric J. and Weber, Elke U. (2014). "Understanding Local Warming: How Warm Days Lead to Increased Belief in Global Warming". *Nature Climate Change*, 4: 143-147. doi: 10.1038/NCLIMATE2093

RECEPTION: November 7, 2021

REVIEW: March 22, 2022

ACCEPTANCE: October 26, 2022

Las trayectorias de liberalización laboral en España: una aproximación empírica a la evolución histórica del cambio institucional

Trajectories of Labour Market Liberalisation in Spain: An Empirical Approach to the Historical Evolution of Institutional Change

Luis Cárdenas

Palabras clave

- Cambio institucional
- Dualismo
- España
- Mercado de trabajo
- Segmentación laboral

Key words

- Institutional Change
- Dualism
- Spain
- Labour Market
- Labour Market Segmentation

Resumen

El objetivo de la nota es analizar desde una perspectiva histórica el cambio institucional en el mercado laboral en España en sus dos principales ámbitos: la regulación del empleo y la negociación colectiva. La tesis principal es que es posible identificar cuatro grandes etapas. Primero, durante el desarrollismo (1960-1975), existió una estructura institucional adversa a los trabajadores que fue superada por la agencia del movimiento obrero. Segundo, el período de transición (1976-1983) se trató de una fase de regulación del mercado laboral. Tercero, un período de dualización del mercado laboral (1984-1996) con base en la aplicación de flexibilidad en el margen ante la existencia de poder de veto. Finalmente, la desregulación (1997-2019) es consecuencia del debilitamiento de los recursos de poder derivado de la segmentación laboral ocurrida previamente.

Abstract

The aim of this paper is to analyse institutional change in the Spanish labour market in from a historical perspective, particularly regarding two main areas: labour regulation and collective bargaining. The main thesis is that it is possible to identify four main stages. Firstly, there was an institutional structure unfavourable to workers, which was overcome by the agency of the labour movement in the period of the so-called *desarrollismo* (1960-1975). Secondly, the years of transition from dictatorship to democracy (1976-1983) were a period of labour market regulation. Thirdly, there was a period of labour market dualism (1984-1996) based on the application of flexibility at the margin in the face of veto power. This was followed by deregulation (1997-2019), which was a consequence of the weakening of power resources resulting from the previous labour market segmentation.

Cómo citar

Cárdenas, Luis (2023). «Las trayectorias de liberalización laboral en España: una aproximación empírica a la evolución histórica del cambio institucional». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 121-132. (doi: 10.5477/cis/reis.183.121)

La versión en inglés de esta nota de investigación puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Luis Cárdenas: Universidad Complutense de Madrid | luiscard@ucm.es

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de esta investigación es analizar el cambio institucional que se ha producido en las últimas décadas en España, desde la perspectiva del institucionalismo histórico, en los dos principales ámbitos del mercado laboral: la regulación del empleo y la negociación colectiva.

Existe una literatura que ha abordado el cambio histórico de las instituciones en el mercado laboral en España. Así, por ejemplo, Malo (2005) y Sola (2014) aplican la idea del *path dependence* a la evolución histórica de la regulación del empleo, mientras que Picot y Tassinari (2017), López-Andreu (2017) y Cárdenas y Villanueva (2021) analizan la liberalización en la última década. Por su parte, Molina (2014), Köhler (2018), García y Rigby (2016, 2019), Tébar (2020) y Sánchez-Mosquera (2021) estudian la evolución institucional del sistema de relaciones laborales.

En base a esta literatura, la pregunta de investigación planteada es: ¿cuál ha sido la trayectoria de liberalización del mercado laboral en España? Para responder a esta pregunta se realiza un análisis descriptivo de una serie de seis indicadores (véase Anexo para las fuentes y la metodología). Primero, en la regulación del empleo, se analizan las indemnizaciones por despido en asuntos judiciales (1954-2019), la tipología de los despidos (1980-2019) y la estructura contractual del empleo (1990-2019). Segundo, en las relaciones laborales, se analizan la estructura de la negociación colectiva (1978-2019), el incremento salarial pactado en términos nominales y reales (1964-2019) y la deriva salarial (1964-2019).

La aportación teórica consiste en cuatro puntos. Primero, exponer por primera vez un análisis histórico de largo recorrido de la trayectoria de la liberalización del mercado laboral en España, desde sus orígenes en los años sesenta hasta la actualidad.

Segundo, combinar en un mismo análisis la evolución del sistema de relaciones laborales y la regulación del mercado de trabajo, ya que ambos elementos están intrínsecamente relacionados. Tercero, aportar a la literatura del institucionalismo histórico y la economía política comparada un estudio de caso adicional, ya que hasta la fecha ha prestado escaso interés a España. Cuarto, una innovación teórica, ya que hasta la fecha la literatura del institucionalismo histórico (Cárdenas y Arribas, 2022) había sostenido que la desregulación en el núcleo o en el margen son excluyentes. Sin embargo, en este trabajo se evidencia que, de hecho, una trayectoria puede conducir a la otra cuando se tienen en cuenta los recursos de poder. Lo que contribuye significativamente al debate al identificar que estas trayectorias no son lineales.

La principal aportación metodológica es que cada uno de los indicadores construidos *ex profeso* cuenta con el mayor número de años, siempre que hubiera cierta homogeneidad en las estadísticas disponibles. Esto permite analizar de manera sistemática su evolución a lo largo de períodos históricos más amplios. Todo ello contribuye a una mejor comprensión de la naturaleza del cambio institucional. Sin embargo, existe la limitación de que las series difieren debido a la falta de disponibilidad de datos suficientes y de que el período analizado finaliza en el año 2019 como consecuencia de la crisis del COVID-19 en 2020 que, por su particularidad, requiere un análisis pormenorizado que excede los límites de este trabajo.

El artículo se estructura como sigue: en el apartado siguiente se estudian los dos ámbitos del mercado laboral durante la etapa de configuración institucional del mercado laboral (desde el franquismo desarrollista hasta la transición política); en el tercer apartado, se estudian los cambios desde los años ochenta hasta mediados de los noventa; a continuación, se analiza

desde esos años hasta 2019; y finalmente, el último apartado se dedica a las conclusiones obtenidas.

DE LAS RELACIONES LABORALES DURANTE EL FRANQUISMO DESARROLLISTA A LA TRANSICIÓN POLÍTICA: LA REGULACIÓN DEL MERCADO LABORAL

El mercado laboral durante el desarrollismo: represión y luchas obreras

Los aspectos centrales del mercado laboral en el período desarrollista se pueden sintetizar de la siguiente forma (Soto, 2006). En primer lugar, en cuanto a las relaciones laborales, el modelo sindical impuesto por el franquismo se basaba en la sindicación obligatoria, aunque con escasa relevancia práctica, a la Organización Sindical Española (OSE), y la represión de las organizaciones obreras. La OSE se constituía como una entidad de derecho público y, por tanto, formaba parte del Estado, pero sin capacidad para realizar presión, puesto que estaban prohibidas las herramientas de reivindicación laboral como las huelgas, las concentraciones o las manifestaciones.

Con la introducción de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958, se conservaba la intervención del Estado, ya que los convenios colectivos sindicales eran negociados internamente por miembros de la OSE y debían ser ratificados por el Ministerio de Trabajo. Este último se reservaba a su vez la potestad de dictar Normas de Obligado Cumplimiento, en caso de falta de acuerdo entre las partes o que este entrara en conflicto con la orientación del Ministerio, y progresivamente fue estableciendo el salario mínimo interprofesional y crecimientos salariales máximos. Como resultado, el ámbito de negociación predominante era

el provincial (un 58,5 % de los trabajadores cubiertos), seguido por el interprovincial (15,2 %), el local (13,4 %) y de empresa (7,2 %) entre 1957 y 1968 (véase Anexo).

El proceso de recuperación de los mecanismos de acción colectiva se desarrolló a pesar de las limitaciones impuestas en la regulación y en las prácticas represivas, como refleja el desarrollo de Comisiones Obreras (Ruiz, 1993). El entramado institucional era evidentemente adverso a los trabajadores, ya que se encontraba esencialmente orientado a la contención de la dinámica salarial. Por tanto, era necesaria una elevada combatividad si los trabajadores querían beneficiarse del crecimiento económico y, en definitiva, si querían mejorar sus condiciones salariales, laborales y de calidad de vida (Molinero e Ysàs, 1998). De esta forma, la política salarial era contradictoria ya que la conflictividad social vinculada a la reconstrucción del movimiento obrero, y a la acción de los grupos antifranquistas, supuso una importante fuente de inestabilidad y erosión del propio régimen franquista. Especialmente cuando, por su propia naturaleza, este consideraba la conflictividad laboral como social y política (Doménech, 2002).

En segundo lugar, sobre la regulación del empleo, del que autores como Sola (2014) o Malo (2005) han realizado un detenido análisis, caben destacar los siguientes rasgos característicos. Los tipos de contratación, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, eran por tiempo indefinido o por tiempo cierto (contrato eventual o temporal de duración determinada); y por obra o servicio (contrato temporal de duración determinada o indeterminada, en función de la naturaleza de la obra o servicio). A lo cual se añade el contrato de aprendizaje, que tenía una regulación específica. La extinción del contrato podía deberse o bien a la finalización del período determinado, o de la obra o servicio, o bien al despido. En ese caso solo se percibía una indemniza-

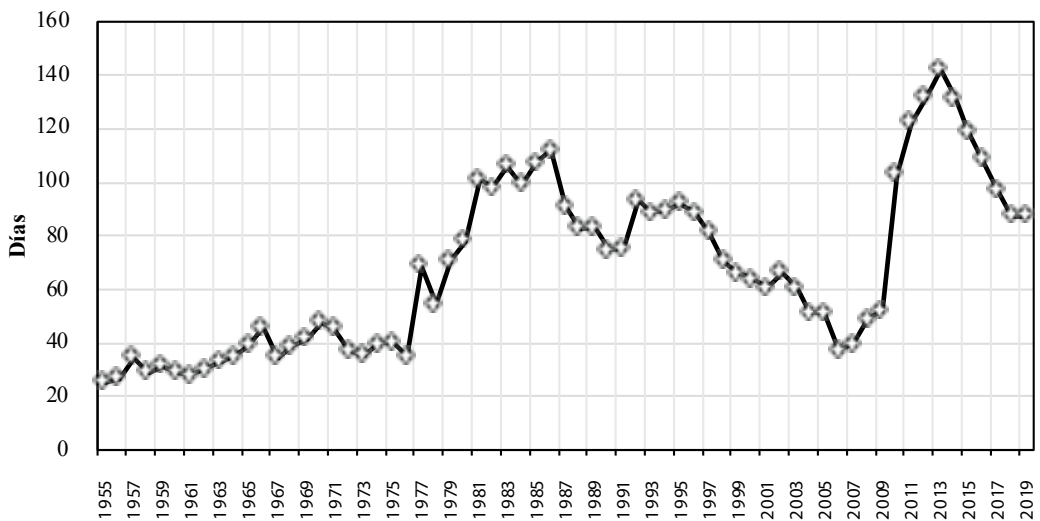
ción si se consideraba improcedente por un tribunal que fijaba una indemnización con un máximo de 12 mensualidades.

Esta división entre la causa objetiva e improcedente provenía de la anterior legislación laboral republicana, la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, que causalizaba el despido y generalmente implicaba la intervención de un magistrado. A partir de 1956, mediante el denominado «incidente de daños y perjuicios por la no readmisión», se elimina esa causalidad en las empresas de más de 50 trabajadores. En base a estas características, la interpretación más frecuente es que se trataba de un modelo de despido libre e indemnizado, aunque formalmente se sostuviera la causalidad del

mismo, por ejemplo, un «despido libre costoso» (Malo, 2005).

Analizando los datos de sentencias judiciales, como se observa en el gráfico 1, las indemnizaciones supusieron una cantidad moderada (no superaban los cuarenta días de salario medio). La tendencia creciente hasta el salto del año 1975 puede deberse tanto a la mayor antigüedad de los trabajadores despedidos como al abono de los reincidentes de no readmisión. Además, en estos mismos datos el porcentaje de sentencias a favor de los trabajadores entre 1960 y 1975 se situó en promedio en el 50 %, pero con una tendencia creciente, lo que ayudaría a explicar ese moderado incremento.

GRÁFICO 1. Indemnizaciones por despido en asuntos judiciales (1955-2019) en días de salario medio



Fuente: Véase Anexo.

Como primera conclusión, el contexto institucional del mercado laboral durante el período del desarrollismo no era en ninguno de sus aspectos favorable al trabajador. La regulación concedía la primacía de las relaciones laborales a las empresas, la política

salarial estaba claramente orientada a la restricción y se reprimían las actuaciones de representación y movilización obreras. Por su parte, el despido era libre en la práctica y las indemnizaciones suponían un coste moderado (en términos del salario medio).

El proceso de regulación laboral durante la Transición: movilizaciones y derechos laborales

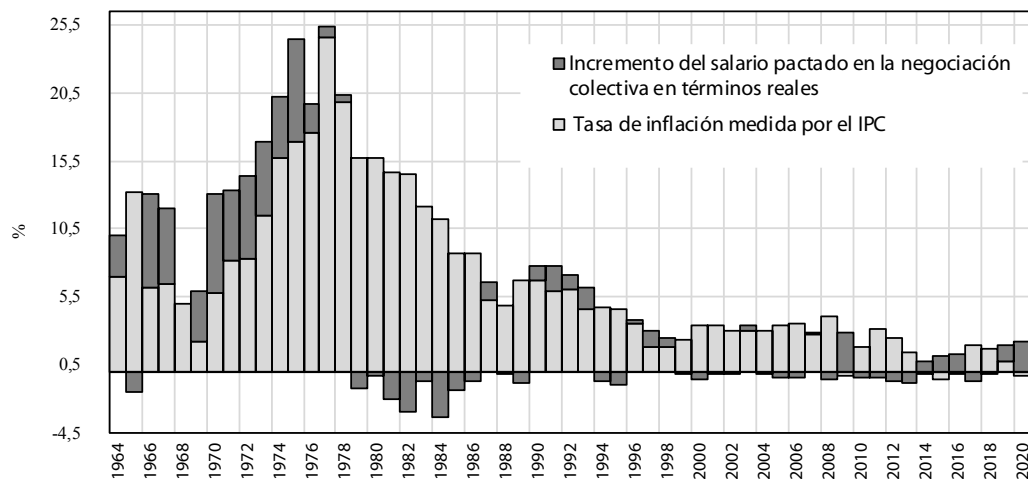
Es en el período de la transición política donde se produce el cambio institucional más relevante, puesto que se dan los factores para ser considerada una coyuntura crítica. Tras el fuerte ciclo reivindicativo que se produjo entre 1974 y 1977, se dio lugar a una coalición política del movimiento obrero que consiguió establecer un marco legal que restringía la discrecionalidad de las empresas.

En comparación con el período precedente, en el gráfico 1 se observa con claridad el salto en la cuantía de las indemnizaciones por despido, lo que apunta a que estas modificaciones legales fueron efectivas a la hora

de encarecer los mismos en la vía judicial. Si bien se produce un ligero descenso en el año 1978, la tendencia es ascendente y la indemnización media alcanzará los 112 días de salario medio en 1986, momento en el que comienza a reducirse significativamente.

El gráfico 2 refleja que, mientras que en la primera mitad de los años setenta el incremento del salario pactado nominal superó con claridad a la inflación, a partir de 1978 esta relación se invierte y la inflación supera al crecimiento del salario pactado nominal, lo que implica que el crecimiento del salario pactado en términos reales fue negativo entre 1979 y 1989 (con la excepción del año 1987). A partir de entonces se producen fluctuaciones en las que se intercalan variaciones positivas y negativas en el salario pactado real.

GRÁFICO 2. Incremento salarial pactado en términos nominales y reales (1964-2020)



Fuente: Véase Anexo.

Como segunda conclusión, el entramado institucional del sistema de relaciones laborales del desarrollismo se transformó profundamente durante los años setenta. Gracias a los cambios introducidos en esos años, se incrementó la protección del empleo, con la prioridad del contrato indefinido y el aumento de las indemnizaciones res-

pecto al período previo, así como el reconocimiento de los derechos sindicales. Como contrapartida, se moderó el incremento de los salarios pactados reales. Por ello, se trata de un proceso de regulación del mercado de trabajo en una coyuntura crítica que implicó una profunda transformación de las instituciones laborales.

LA LIBERALIZACIÓN EN EL MARGEN EN LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA: LA ETAPA DE DUALIZACIÓN

Durante los años ochenta y hasta mediados de los noventa, los sucesivos gobiernos participaron activamente en la concertación social, combinándose así los aspectos de la negociación colectiva con cuestiones de regulación del mercado de trabajo y protección social. El sistema de relaciones laborales quedaría consolidado con la Ley Orgánica de Libertad Sindical que favorece la representatividad de las organizaciones mayoritarias.

En este proceso se produce la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores (en 1984) que desreguló el uso de los contratos de duración determinada, introdujo una lista de dieciséis tipos de contratos no protegidos y flexibilizó el «principio de causalidad». Todo ello provocó un fuerte incremento de los contratos temporales durante los años ochenta, ya que tenían un menor coste y permitían mayor discrecionalidad a las empresas. Así, en 1986, el 43 % de las empresas sostenía que el uso de contratos temporales tenía como mayor ventaja la reducción de costes de seguridad social y el 29 % que se adecuaba mejor al ritmo o temporalidad del empleo (véase Anexo). Todo ello se encontraba alineado con los objetivos de las patronales de conseguir la «flexibilidad de las plantillas» y las reducciones de cuotas a la Seguridad Social (Sánchez-Mosquera, 2021).

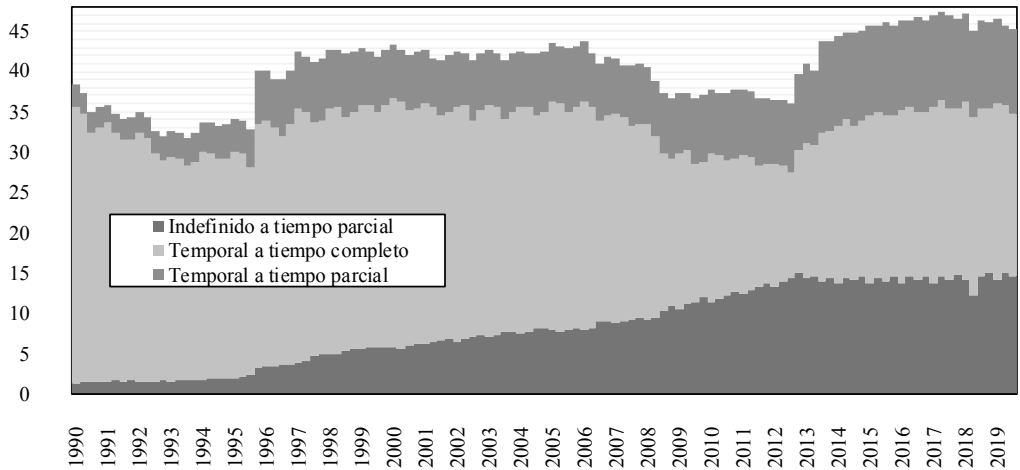
La siguiente gran reforma prevista era el Plan de Empleo Juvenil (de 1988), que pretendía introducir un uso mucho más laxo de los contratos de prácticas y aprendizaje, reduciendo los derechos y la protección de los jóvenes trabajadores. Sin embargo, no se aplicó como consecuencia de la huelga general del 14-D de 1988 (Recio y Roca, 1998). A pesar de algunas reformas del sistema de protección social (como las pen-

siones no contributivas), la capacidad de los sindicatos para afectar a la política económica se debilitó considerablemente en los primeros años noventa.

La reforma laboral de 1994, que supuso la legalización y autorización de las empresas de trabajo temporal, incluyó las propuestas del Plan de Empleo Juvenil que había fracasado en 1988. En las relaciones laborales, la reforma de 1994 trató de potenciar la negociación colectiva de nivel empresarial dándole un ámbito de competencia que antes quedaba restringido a la legislación. Sin embargo, la evidencia de la estructura de la negociación colectiva muestra que el impacto que tuvo esta reforma es reducido (véase gráfico 5), ya que el número de trabajadores cubiertos por convenio de empresa o grupo de empresas no aumentó significativamente y se mantuvo en los niveles previos.

El efecto de estas reformas sobre el empleo puede observarse en el gráfico 3, donde se presenta la evolución de la composición contractual del empleo, con la consolidación de un segmento de empleo con contratos atípicos (indefinido a tiempo parcial, temporal tiempo completo y temporal a tiempo parcial) que supera habitualmente el 40 % en los períodos de expansión y se reduce drásticamente en los períodos de crisis económica porque son esos puestos de trabajo los que desaparecen en mayor medida.

Como tercera conclusión, en los años ochenta y mediados de los noventa, se implementó una política de desregulación parcial, reflejada en una liberalización en el margen. Estas políticas se basaron en la creación de contratos temporales específicos, principalmente de duración determinada, para la promoción del empleo y los contratos de agencia, así como una flexibilización del tiempo parcial. Esta vía de liberalización puede entenderse como estratificación mediante contratos atípicos que configura una trayectoria de dualización institucional.

GRÁFICO 3. Estructura contractual del empleo (1990-2019) (%)

Fuente: Véase Anexo.

LA LIBERALIZACIÓN EN EL NÚCLEO EN EL SIGLO XXI: LA ETAPA DE DESREGULACIÓN

Durante esta etapa se puede distinguir dos fechas de inicio diferente en cada uno de los ámbitos institucionales del mercado de trabajo. En materia de condiciones de contratación es posible identificar un cambio en la orientación de las reformas laborales desde el año 1997 y se consolida en el año 2002 con la eliminación de los salarios de tramitación. Por su parte, en materia de negociación colectiva, el cambio se inicia en el año 2010 y se consolida en el año 2012.

La desregulación del empleo

Las reformas institucionales en esta etapa se centraron en la reducción de los costes de despido de los contratos indefinidos y en dotar de mayor capacidad a las empresas para despedir o modificar significativamente las condiciones de trabajo. Esto supone pasar de un cambio por estratificación a un cambio gradual de conversión, debido a la baja discrecionalidad de la institución y

al reducido poder de veto de la coalición de actores que se opone al mismo.

La reforma laboral de 1997 comenzó a afectar directamente a los contratos indefinidos, introduciendo una nueva modalidad que tenía una indemnización por despido improcedente inferior. En consecuencia, un importante número de trabajadores estuvieron expuestos a estos contratos con menor indemnización, segmentando así el propio contrato indefinido. En la reforma laboral del año 2002 se establece que el empleador ya no tiene que abonar los llamados salarios de tramitación (los salarios derivados del tiempo transcurrido hasta alcanzar una sentencia que declare el despido nulo o improcedente) si en las 48 horas posteriores al despido se reconoce que es improcedente y se abona la indemnización correspondiente («despido exprés»), permitiendo despedir de manera improcedente y a menor coste (monetario y de proceso) que antes. Esta modificación supuso un cambio drástico en la estructura de los despidos, ya que los despidos con avenencia en Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC) pasaron de 188 056 en 2002 a 95 408 en 2003. Hasta 2009, esta vía suponía el 30 % del acceso a la prestación por

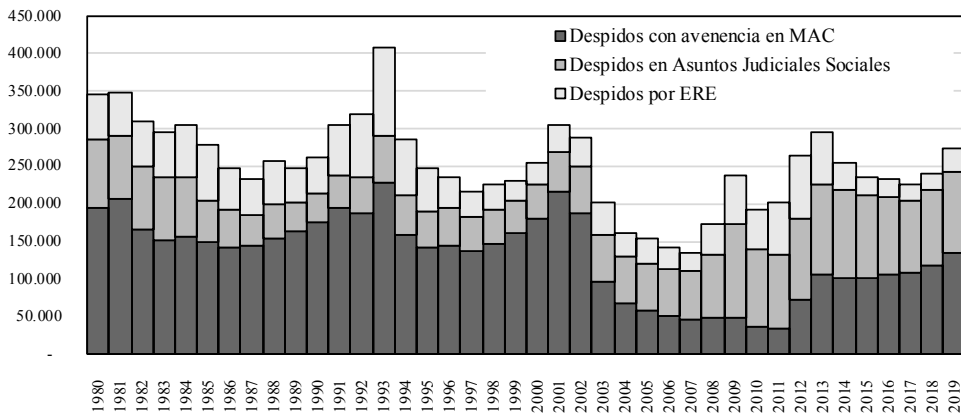
desempleo, mientras que el 60 % se debía a la extinción de contratos temporales.

El contenido de las reformas del mercado laboral en 2010 y 2012 es bien conocido. Se redujo la indemnización por despido improcedente, se relajaron significativamente los requisitos para el despido procedente, y aumentó la flexibilidad interna de las empresas para modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de forma unilateral (salarios, jornada laboral, tiempo de trabajo, movilidad geográfica, entre otros). Esta reforma, que estaba alineada con los objetivos tradicionales de la patronal (Martín y Alós, 2003; Sánchez-Mosquera, 2021), facilitó profundamente las

decisiones unilaterales de los empleadores en el despido, la organización del trabajo y las condiciones laborales.

En consecuencia, en el gráfico 4 se observa que todos los tipos de despido se incrementaron significativamente desde el año 2007 y, especialmente, los derivados de asuntos judiciales. Las flexibilidades introducidas favorecieron el despido de trabajadores que tenían una mayor antigüedad en el puesto de trabajo, como se deduce de que percibirían indemnizaciones muy superiores a las de años precedentes (véase gráfico 1); en consecuencia, se está erosionando el núcleo del empleo anteriormente protegido mientras se incrementan los contratos atípicos.

GRÁFICO 4. *Tipología de los despidos (1980-2019)*



Fuente: Véase Anexo.

Adicionalmente, se observa otro cambio fundamental, si se compara con la recesión del año 1993. Aunque el número de despidos fue mayor, en 1993 se debió a despidos con avenencia en MAC y por expedientes de regulación de empleo (los despidos en asuntos judiciales fueron el 15 % del total). Por el contrario, en 2013 los despidos en los tribunales fueron el principal tipo y supusieron el 40 % del total. Se ha producido un cambio desde vías con cierto peso de negociación entre las partes (con avenencia en MAC o ERE) hacia la resolución judicial, lo que im-

plica una mayor discrecionalidad por parte de los empleadores en la flexibilidad externa.

Como cuarta conclusión, en los años 2002 y 2012, los gobiernos del PP con mayoría absoluta aplicaron unilateralmente reformas que elevaron el poder discrecional de los empleadores, aumentando la flexibilidad externa, interna y salarial (Lasierra, 2007; López-Andreu, 2017) por medio de la conversión de las instituciones de regulación del empleo existentes. Por ello, puede considerarse que se trata de una desregulación en el núcleo (Cárdenas y Villanueva, 2021).

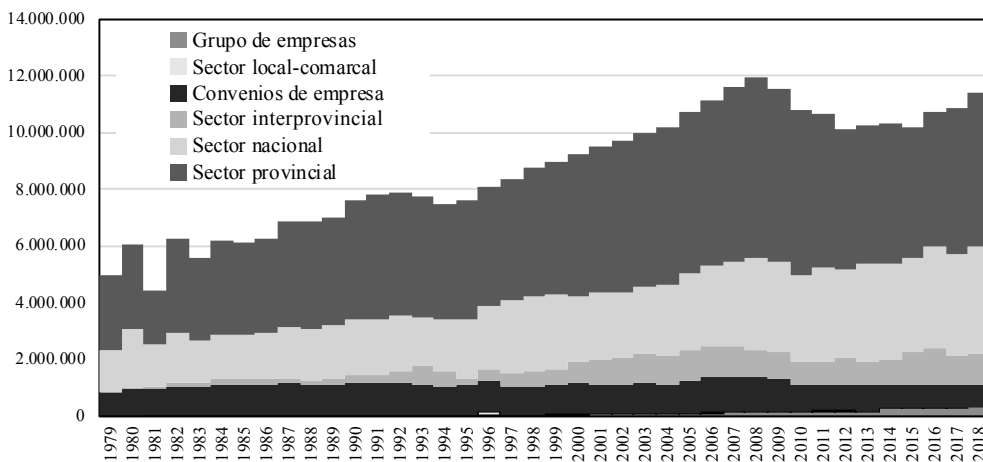
La erosión de la negociación colectiva

En el ámbito de las relaciones laborales, tras varios años sin acuerdos de concertación en la negociación colectiva, se firmó en 1997 el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo y, posteriormente, el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC). El ANC, iniciado en 2002, fue sucesivamente prorrogado o renovado hasta el año 2008. La fragilidad del modelo quedó de manifiesto al producirse la crisis financiera y económica de 2008 (Molina, 2014). Tras fracasar la negociación de 2009, a partir del año 2010, comienza una nueva ronda de acuerdos interconfederales con cierta revitalización de pactos sociales ante la creciente conflictividad. Los denominados Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con cobertura trianual, establecieron una importante moderación del crecimiento del salario nominal, ya que en los cuatro AENC firmados (que cubren todos los años excepto 2018) no se

han pactado crecimientos salariales nominales superiores al 2-3 % (véase Anexo).

Esta etapa ha estado marcada por una significativa descentralización de la negociación colectiva para adaptarla a las condiciones individuales de las empresas. Las reformas laborales transformaron la orientación de la negociación y los convenios colectivos comenzaron a ser exclusivamente funcionales al desempeño empresarial, mediante la introducción de cuatro medidas fundamentales: las facilidades de inaplicación temporal de los convenios colectivos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa, la posibilidad de renegociación del convenio antes del final de su vigencia y los límites a la ultraactividad de los convenios. Es por ello que, como han señalado García y Rigby (2016, 2019), los recursos de poder de tipo estructural en el mercado laboral se han debilitado. Por ello, se requiere de los recursos institucionales para compensar su efecto.

GRÁFICO 5. Estructura de la negociación colectiva (1979-2018)



Fuente: Véase Anexo.

En el gráfico 5 se observa tanto la reducción en el número de personas cubiertas por convenio colectivo como el profundo cambio derivado de la introducción

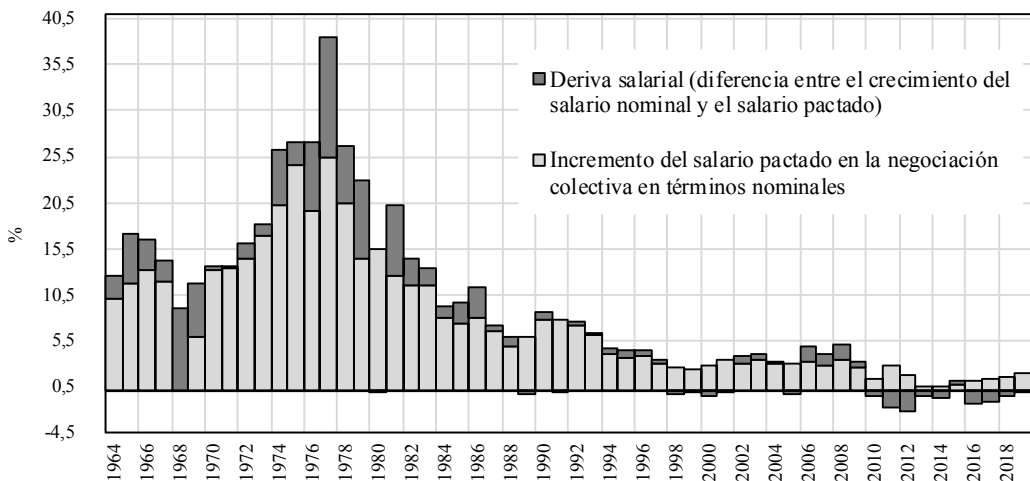
de esta reforma en la estructura de la negociación colectiva, con una caída significativa de los convenios sectoriales provinciales. Así, a pesar de la cláusula *erga omnes*

que garantiza la extensión automática de los convenios, las medidas de flexibilidad parecen haber reducido el ámbito de actuación de la negociación colectiva.

Estas modificaciones del marco institucional del sistema de relaciones laborales tuvieron como consecuencia una fuerte devaluación salarial (López-Andreu, 2017; Muñoz-de-Bustillo y Pinto, 2018), tanto en la reducción de los salarios nominales pactados como en los observados e incluso en caí-

das en el salario real. Solo cabe concluir que la posición de las rentas del trabajo en la distribución de la renta ha sufrido un fuerte retroceso en la medida en que el salario unitario real ha crecido año a año por debajo del ya de por sí lento crecimiento de la productividad laboral (Cárdenas y Herrero, 2021). En el gráfico 6 también se observa que la deriva salarial se vuelve negativa a partir de la etapa 2009-2013, cuando tradicionalmente había sido positiva en todos los años previos.

GRÁFICO 6. Deriva salarial (1964-2019)



Fuente: Véase Anexo.

Como quinta conclusión, a lo largo de todo el período 2010-2019, los sucesivos cambios han provocado el debilitamiento de los mecanismos de negociación de los convenios. La firma de acuerdos centralizados e interconfederales entre los sindicatos y las organizaciones patronales no ha sido un obstáculo para que, utilizando la laxitud de la normativa legal, un número creciente de empresas pudieran aplicar criterios discrecionales sobre salarios y condiciones laborales (Río y Fenger, 2019), lo que implica un cambio institucional por deriva, traduciéndose en una menor incidencia de la capacidad regu-

latoria de la negociación colectiva en la evolución del mercado de trabajo.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado la trayectoria histórica del cambio institucional en el mercado laboral en España durante las últimas seis décadas, centrándose en dos aspectos fundamentales: la regulación del empleo y la negociación colectiva. La conclusión obtenida es que responde a un patrón de cambio institucional que se divide en cuatro etapas, que se recogen en el cuadro 1.

CUADRO 1. *La evolución del cambio institucional en el mercado laboral español*

Período	Regulación del empleo	Relaciones laborales	Tipo de cambio
Desarrollismo franquista (1960s-1975)	Aparato represivo y discrecionalidad del empleador	OSE, sindicatos de clase ilegales, recuperación movimiento obrero	
Transición a la democracia (1976-1983)	Regulación del empleo, ET	Bases del sistema de relaciones laborales, LOLS, pactos sociales	Coyuntura crítica
Dualización laboral (1984-1996)	Fragmentación del empleo, nuevas modalidades de contratación	Consolidación sistema: convenios sectoriales, <i>erga omnes</i> , representatividad, comité y sección	Estratificación
Desregulación (hasta 2019)	1997-facilidad y abaratamiento del despido de empleados fijos	2012-descentralización, erosión interna de la negociación	Conversión/Deriva

Fuente: Elaboración propia.

En el primer período, el del desarrollismo franquista (1960-1975), se trataba de un mercado laboral adverso a los trabajadores con sindicatos de clase ilegales y un aparato represivo franquista que favorecía una gran flexibilidad salarial y el poder discrecional de los empresarios en la gestión de la mano de obra. Durante ese período se produce una revitalización del movimiento obrero que luchará tanto por mejoras salariales como por derechos políticos.

En el segundo período de transición a la democracia (1976-1983), se produce una coyuntura crítica que regulará las instituciones laborales. En el nuevo contexto de elevada conflictividad y sindicación libre, el intercambio político configurará las coaliciones a favor y en contra de la liberalización y consolidará al Gobierno como un actor central de los pactos sociales.

En el tercer período, de dualización del mercado laboral (1984-1996), se implementan nuevas figuras contractuales incentiadas (1984) que se empiezan a utilizar masivamente. Estas prácticas intensifican la segmentación del mercado laboral. La existencia de cierto poder de veto por parte de los actores sindicales, especialmente en la segunda mitad de los años ochenta, lleva a que se trate de un proceso de flexibilización en el margen por estratificación.

En el cuarto período, de desregulación (1997/2012-2019), se lleva a cabo una im-

portante liberalización en todas las dimensiones del mercado laboral, como son las condiciones de contratación, el despido, o la descentralización de la negociación colectiva. Se trata, por tanto, de un proceso de paulatina desregulación en el núcleo que alcanza sus máximas cotas con las reformas de 2002 y de 2012 (implementadas por gobiernos del PP en mayoría absoluta).

La combinación de políticas de flexibilidad en el margen (dualización) y posteriormente de flexibilidad en el núcleo (desregulación) han conducido en el caso de España a un mercado laboral simultáneamente segmentado (aproximadamente un 45 % de los puestos de trabajo son con un contrato atípico) y con reducida seguridad en el empleo (las indemnizaciones han descendido y los despidos judiciales cada vez suponen un porcentaje mayor). Por lo tanto, el tipo de trayectoria de liberalización característica es la desregulación y su consecuencia una elevada segmentación del mercado de trabajo.

Como corolario, es posible concluir que la liberalización reduce los recursos de poder y mina las bases institucionales que se requieren para una efectiva acción colectiva, generando así un proceso de retroalimentación en el que la flexibilidad en el margen (dualización) termina conduciendo a flexibilidad en el núcleo (desregulación). Todo ello incrementa la dependencia de los recursos de poder institucionales y otorga la iniciativa de los pactos

sociales al Gobierno. Una futura línea de investigación consistirá en darle mayor profundidad analítica a los mecanismos causales por los cuales se ha producido esta sucesión de trayectorias en la evolución histórica del cambio institucional en el mercado de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- Cárdenas, Luis y Herrero, Daniel (2021). «Distribución funcional de la renta y capacidad negociadora de los trabajadores en España». *Papers. Revista de Sociología*, 1(1): 1-26.
- Cárdenas, Luis y Villanueva, Paloma (2021). «Flexibilization at the Core to Reduce Labour Market Dualism: Evidence from the Spanish Case». *British Journal of Industrial Relations*, 59(1): 214-235.
- Cárdenas, Luis y Arribas, Javier (2022). «Flexibilización, desregulación y dualización: las trayectorias de liberalización en el cambio institucional del mercado de trabajo». *Revista Española de Sociología*, 31(2): a102.
- Doménech, Xavier (2002). «El problema de la conflictividad bajo el franquismo saliendo del paradigma». *Historia Social*, 42: 123-144.
- García, Miguel Á. y Rigby, Mike (2016). «Recursos de poder de los sindicatos en España. Su examen a través de la negociación colectiva». *Sociología del Trabajo*, 87: 7-24.
- García, Miguel Á. y Rigby, Mike (2019). «Las trayectorias de las instituciones laborales españolas ante las recientes presiones económicas: ¿Cómo quedan los recursos para los sindicatos?». *Revista Española de Sociología*, 28(2): 381-399.
- Köhler, Holm-Detlev (2018). «Industrial Relations in Spain-Strong Conflicts, Weak Actors and Fragmented Institutions». *Employee Relations*, 40(4): 725-743.
- Lasierra, José M. (2007). «Labour Flexibility and job Market Segmentation in Spain: a Perspective from the Labour Demand Side». *The International Journal of Human Resource Management*, 18(10): 1858-1880.
- López-Andreu, Martí (2017). «All Precarious? Institutional Change and Turning Points in Labor Market Trajectories in Spain». *Employee Relations*, 39(3): 408-422.
- Malo, Miguel Ángel (2005). «La evolución institucional del despido en España: una interpretación en términos de un accidente histórico». *Revista de Historia Económica*, 23(1): 83-115.
- Martín, Antonio y Alos, Ramón (2003). «Between Decentralisation and Centralisation of Collective Bargaining. The Spanish Case». *Industrielle Beziehungen*, 10(1): 64-96.
- Molina, Óscar (2014). «Beyond De-centralization: The Erosion of Collective Bargaining in Spain during the Great Recession». *Stato e Mercato*, 34(3): 397-422.
- Moliner, Carme e Ysàs, Pere (1998). *Productores disciplinados y minorías subversivas: clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*. Madrid: Siglo XXI.
- Muñoz-de-Bustillo, Rafael y Pinto, Fernando (2018). «Against the Wind: Industrial Relations in Spain during the Great Recession and Its Aftermath». *Economía y Lavoro*, 52(1): 87-104.
- Picot, Georg y Tassinari, Arianna (2017). «All of One Kind? Labor Market Reforms under Austerity in Italy and Spain». *Socio-Economic Review*, 15(2): 461-482.
- Recio, Albert y Roca, Jordi (1998). «The Spanish Socialists in Power: Thirteen Years of Economic Policy». *Oxford Review of Economic Policy*, 14(1): 139-158.
- Río, Pablo del y Fenger, Menno (2019). «Spanish Trade Unions against Labour Market Reforms: Strategic Choices and Outcomes». *Transfer: European Review of Labour and Research*, 25(4): 421-435.
- Ruiz, David (coord.) (1993). *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*. Madrid: Siglo XXI.
- Sánchez-Mosquera, Marcial (2021). «Por la “flexibilidad de plantillas”. La influencia de la patronal en el diseño del sistema de relaciones laborales español, 1979-1986». *Revista de Historia Industrial*, 30(82): 133-161.
- Sola, Jorge (2014). «El legado histórico franquista y el mercado de trabajo en España». *RES. Revista Española de Sociología*, 21: 99-128.
- Soto, Álvaro (2006). «No todo fue igual: cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de vida de los españoles, 1958-1975». *Pasado y Memoria*, 5: 15-43.
- Tébar, Javier (2020). «El sindicato en España del fordismo al capitalismo globalizado (1939-1999)». *Sociología del Trabajo*, 97: 1-12.

RECEPCIÓN: 15/12/2021

REVISIÓN: 20/04/2022

APROBACIÓN: 26/10/2022

ANEXO 1 REGULACIÓN DEL EMPLEO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En este anexo se presentan las fuentes de datos y la metodología de una serie de indicadores que reflejan la evolución histórica en los dos principales ámbitos del mercado laboral: la regulación del empleo y la negociación colectiva. Para identificar ambos aspectos se proponen seis indicadores:

1. Indemnizaciones por despido en asuntos judiciales (1954-2019).
2. Tipología de los despidos (1980-2019).
3. Estructura contractual del empleo (1990-2019).
4. Estructura de la negociación colectiva (1978-2019).
5. Incremento salarial pactado en términos nominales y reales (1964-2019).
6. Deriva salarial (1964-2019).

La principal limitación de esta metodología es que la longitud de las series difiere debido a la falta de disponibilidad de datos suficientes para todos los casos. En materia de regulación del empleo, no se dispone de series anteriores a 1980 para la tipología de los despidos ni de datos administrativos sobre las relaciones contractuales de empleo; los datos de la EPA permitirían ampliar en tres años la muestra, pero al coste de perder otra información valiosa (en el apartado 3 se desarrolla esta cuestión). En materia de negociación colectiva, existen serias dudas sobre los datos de la estructura de los convenios en el período anterior a 1978, por lo que no es posible ofrecer una serie homogénea desde entonces. En consecuencia, se ha decidido presentar el gráfico desde dicho año.

Otra opción habría consistido en eliminar los datos anteriores en aquellas series sobre las que sí hay disponibilidad. Finalmente, se ha optado por mantenerlas ya que pueden aportar información relevante

sobre la evolución histórica del indicador. Este criterio se adapta mejor a los objetivos del artículo que precisamente consisten en presentar una panorámica histórica del cambio institucional utilizando los indicadores cuantitativos más extensos posibles.

Regulación del empleo

Indemnizaciones por despido en asuntos judiciales (1954-2019)

Las indemnizaciones por despido se calculan enlazando las series en términos nominales desde 1954 hasta 2019 de las cantidades reconocidas en asuntos resueltos por las Magistraturas de Trabajo. Los datos provienen de los distintos anuarios estadísticos del INE, sección de la Administración de Justicia en materia social.

Para expresar las indemnizaciones como porcentaje del salario medio nominal de cada año, se convierten a euros los datos previos al año 1998 y se divide toda la serie por el salario medio (remuneración de los asalariados sobre número de personas asalariadas) que ofrece la Base de Datos Macroeconómicos de España 1954-2019 (BDMacro). Esta base es elaborada por la Subdirección General de Análisis y Programación Económica de la Dirección General de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Al ser una base de datos macroeconómicos, las remuneraciones del empleo asalariado son antes de impuestos e incluyen la totalidad de las cotizaciones sociales.

Hay que tener en cuenta que cada etapa institucional tiene asociadas unas indemnizaciones por despido diferentes, pero también que el número y tipología de los despidos son diferentes (puestos de trabajo afectados, antigüedad en la empresa, salarios y cotizaciones, etc.). Por lo que conviene mencionar brevemente los tipos principales en cada etapa histórica.

Durante el desarrollismo franquista, los tipos de contratación, de acuerdo a la Ley de

Contrato de Trabajo de 1944, eran: 1) por tiempo indefinido; 2) por tiempo cierto (contrato eventual o temporal de duración determinada); y por obra o servicio (contrato temporal de duración determinada o indeterminada, en función de la naturaleza de la obra o servicio). A lo cual se añade el contrato de aprendizaje, que tenía una regulación específica.

La extinción del contrato podía deberse o bien a la finalización del período determinado, o de la obra o servicio, o bien al despido, que tenía varias modalidades (que se consolidarán en los períodos siguientes):

1. Si el despido se producía por motivos disciplinarios, por causa imputable al trabajador o por un amplio abanico de despidos por causas políticas, no había derecho a indemnización.
2. Si el despido respondía a causa justificada pero no imputable al trabajador, la indemnización ascendería exclusivamente a los salarios correspondientes al plazo de preaviso (determinado por las reglamentaciones de trabajo o la costumbre) o salarios de tramitación.
3. Si el despido era sin causa justificada (despido improcedente), el trabajador podía optar entre la readmisión en la empresa (si era de más de 50 trabajadores) en idénticas condiciones o una indemnización en proporción a su salario fijada por la Magistratura de Trabajo con un máximo de 12 mensualidades.
4. Si el despido era colectivo, se aplicaban los expedientes de regulación de empleo (a partir de 1972 fueron denominados «expedientes de extinción, suspensión o modificación de relaciones o condiciones de trabajo»), que podían extinguir o suspender temporalmente los contratos por causa no prevista ni imputable a la empresa cuando existieran motivos fundamentados en una crisis laboral o económica a juicio de la Administración (generalmente la Delegación o la Dirección

General de Trabajo) y la indemnización la fijaba también la Magistratura de Trabajo.

En 1956 comienza un proceso de «descausalización del despido» al introducirse una modificación que, en la práctica, permitía a las empresas de más de 50 trabajadores elegir entre readmitir al trabajador despedido o abonarle una indemnización superior. En ese caso, un magistrado podía imponer una indemnización de entre seis meses a cuatro años de salario y siempre que fuera al menos igual a la indemnización original, en el caso que no se produjera la readmisión.

Durante la transición política se aprueban dos leyes que transformarán la regulación del empleo: la Ley de Relaciones Laborales de 1976, el RD-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo y el Estatuto de los Trabajadores de 1980.

La Ley de Relaciones Laborales se aprueba el 21 de abril de 1976 y, por tanto, se trata de una legislación previa a la Ley para la Reforma Política de 15 de diciembre de ese mismo año. Los aspectos regulatorios más relevantes que introdujo fueron: 1) el carácter prioritario de los contratos indefinidos; 2) en caso de despido improcedente, corresponden los salarios de tramitación y la readmisión; 3) en los casos que se sustituya la readmisión por una indemnización por despido improcedente, será como mínimo de 60 días de salario por año trabajado con un máximo de 60 mensualidades (artículo 35).

Sin embargo, su vigencia será muy breve, ya que el RD-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo en marzo de 1977 añade nuevas causas de despido a las enumeradas en la normativa precedente; por otra parte, se simplifican los procedimientos de despido y se abre la posibilidad a que el magistrado redujera los mínimos de la indemnización por despido en las empresas con menos de 25 trabajadores «fijos». A pesar de que la norma empieza mencionando que el despido tenga «carácter causal del mismo, con rechazo, por tanto, del despido libre». Como

recogen Serrano y Malo-de-Molina (1979: 71), este cambio normativo implicó «la facilitación del despido arbitrario, abaratando su coste y rebajando el nivel de los requisitos de fondo y de forma para llevarlo a cabo».

El Estatuto de los Trabajadores estableció los aspectos centrales de la regulación de empleo. Respecto a los costes de despido, se eliminó finalmente la tutela judicial en la cuantificación de las indemnizaciones del improcedente, quedando establecida una escala fija de 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, en el caso del improcedente. Cuando no hubiera readmisión en empresas con menos de veinticinco trabajadores, la indemnización se reducía en un veinte por ciento. De la cantidad resultante, el 40 % lo abonaba el Fondo de Garantía Salarial. Además, se incluyen otras dos formas de despido: por un lado, el procedente, cuando hubiera causa imputable al trabajador, que no tenía indemnización y, por otro lado, el nulo, cuando no se cumplieran los requisitos formales, y que suponía la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. Esto supuso una reducción de las cantidades en las indemnizaciones y una mayor facilidad para el despido, consolidando el modelo de despido libre con indemnización.

La reforma laboral de 1994 amplía el contrato de aprendizaje a los trabajadores de 25 años, se reduce el tiempo de formación teórica (del 25 al 15 % de la jornada laboral) y se amplía la duración de 6 meses a 3 años (aprendizaje) y 2 años (prácticas). El salario puede reducirse por debajo del SMI.

La reforma laboral de 1997 comenzó a afectar directamente a los contratos indefinidos, introduciendo un nuevo tipo de contrato «para el fomento de la contratación indefinida» dirigido a personas de 18 a 29 años, mayores de 45 años, parados de larga duración o personas con discapacidad y para contratos temporales convertidos en indefinidos. Este contrato tenía una indemnización

por despido improcedente de 33 días frente a 45 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Aunque inicialmente fue pactada con los actores sociales a cambio de que la existencia de estos contratos estuviera limitada a 4 años, en la reforma de 2001 (ya en mayoría absoluta) se elimina esta limitación. En consecuencia, un importante número de trabajadores estuvieron expuestos a estos contratos con menor indemnización, segmentando así el propio contrato indefinido.

En la reforma laboral del año 2002, se establece que el empleador ya no tiene que abonar los llamados salarios de tramitación (los salarios derivados del tiempo transcurrido hasta alcanzar una sentencia que declare el despido nulo o improcedente) si en las 48 horas posteriores al despido se reconoce que es improcedente y se abona la indemnización correspondiente («despido exprés»); permitiendo despedir de manera improcedente y a menor coste (monetario y de proceso) que antes. Esta modificación supuso un cambio drástico en la estructura de los despidos.

Las reformas de 2010 y de 2012 modificaron sustancialmente las indemnizaciones por despido, en los siguientes aspectos:

1. Facilidades al despido objetivo (individual y colectivo). La reforma de 2012 amplía la definición de dificultades económicas a toda aquella situación de las cuentas de la empresa de la que se pueda suponer un estado económico negativo: pérdidas actuales o previstas, y disminución del nivel de ventas o ingresos durante tres trimestres consecutivos. Además, se reducen los trámites administrativos para efectuar el despido, no siendo necesaria la justificación del empresario de la situación de la empresa ni que no haya otra opción de ajuste al margen del despido, y deja de ser necesaria la autorización de la Administración que se requería en los ERE (art. 18, RDL 3/2012).
2. Reducción del coste del despido improcedente: los contratos celebrados

- a partir de febrero de 2012 pasan a tener una indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades (antes 45 días y máximo de 42 mensualidades).
3. Se eleva la indemnización por finalización de contrato de los contratos temporales. Entre 2010 y 2015 se pasó de forma incremental de 8 a 12 días por año trabajado (DT13^a, RDL 10/2010).
 4. Se crea el Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida que abarata el despido por causas objetivas si se reconoce improcedente, la indemnización será de 33 días por año trabajado con el máximo de 24 mensualidades (art. 3, RDL 10/2010); y el Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores (para empresas de menos de 50 trabajadores, cuya particularidad es que el período de prueba (sin indemnización) es de un año, y no de 6 meses).
 5. Se establece la posibilidad de que el empresario pueda efectuar suspensiones de contratos y reducciones temporales de jornada sin autorización administrativa cuando existan causas económicas, organizativas o de producción (art. 16, RDL 3/2012).

Tipología de los despidos (1980-2019)

Las vías institucionales de los despidos, con la correspondiente extinción de la relación laboral, responden a tres grandes grupos (despidos individuales con acuerdo, despidos colectivos y despidos en los juzgados en materia social). Cada uno de ellos tiene una fuente distinta:

- Número de trabajadores despedidos en conciliaciones individuales con avenencia. Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC) elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- Número de trabajadores despedidos por procedimiento de expediente de regu-

lación empleo (ERE). Estadística de Regulación de Empleo elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

- Número de asuntos resueltos con despido en asuntos judiciales sociales. Estadística de Asuntos Judiciales Sociales (AJS) elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- Número total de despidos institucionales: es el resultado de sumar las tres variables anteriores.

La Estadística de Despidos y su Coste (EDC) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se inicia con datos desde el año 2015, aporta información sobre las bajas en el Fichero de Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social para cuatro tipos de despidos: 1) despido disciplinario; despido por causas objetivas legalmente procedentes; 2) despido por causas objetivas de la empresa; 3) despido por causas objetivas del trabajador; y 4) despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Los datos de esta estadística son sensiblemente mayores que la suma de los recopilados en cada fuente independiente (MAC, ERE y MAC), lo que apunta a un elevado número de despidos no institucionalizados. Los datos de la tabla A.1 muestran que más del 40 % de los despidos se producen fuera de estos canales institucionales. Incluso, si se comparan los despidos colectivos de la EDC con los de ERE de extinción, se observa que también son sensiblemente mayores. Esto último probablemente se deba a que un mismo asunto judicial incluye a diversos trabajadores (en promedio un 1,2), reflejando los despidos colectivos que acaban en asuntos judiciales sociales. En cualquier caso, todo ello apunta a que las series del gráfico 4 deben considerarse como el mínimo de despidos contabilizados en los canales institucionales, siendo el número total muy superior.

TABLA A.1. Evolución de los despidos en distintas bases de datos

Año	Total de despidos	Total de despidos institucionales	Diferencia (núm.)	Diferencia (%)	Despido colectivo	ERE extinción	Diferencia (núm.)	Diferencia (%)
	(1)	(2)	(3a) = (1)-(2)	(3b) = (3a)/(1)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(6b) = (6a)/(4)
2015	455.265	236.106	219.159	48,1	32.823	24.572	8.251	25,1
2016	437.572	232.603	204.969	46,8	33.217	24.348	8.869	26,7
2017	421.523	225.812	195.711	46,4	24.854	20.813	4.041	16,3
2018	426.664	239.251	187.413	43,9	25.839	19.957	5.882	22,8
2019	474.936	274.531	200.405	42,2	38.469	30.871	7.598	19,8

Fuente: Véase texto.

Estructura contractual del empleo (1990-2019)

La composición del empleo en función de las distintas modalidades contractuales se obtiene de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES). Los porcentajes se calculan como la ratio entre el número de puestos de trabajo (entendidos como relaciones laborales) en cada tipo de contrato y tipo de jornada sobre el número total de puestos de trabajo.

Estas series se han construido mediante el enlace de la Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL) que, con periodicidad trimestral, preguntaba a una muestra de empresas inscritas en el Fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social sobre las condiciones de sus efectivos laborales. Con ello permite distinguir cuatro tipos de puestos de trabajo en base a sus relaciones contractuales: tiempo completo, tiempo parcial contrato indefinido (incluye fijo-discontinuos) y con contrato temporal.

A partir del primer trimestre de 2013, la serie pasa de ser una encuesta a empresas seleccionadas a ser directamente una explotación estadística de los datos del Fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social. En consecuencia, se encuentran excluidas las relaciones laborales que estén afiliadas a mutualidades, al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios en situación de inactividad, al Sistema Especial de Empleados de Hogar y a

los de la actividad «Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria».

Existen algunas encuestas previas que también preguntaron a las empresas por sus políticas de contratación y la estructura contractual de los puestos de trabajo que ofertaban. En la tabla siguiente se muestra la evolución en cada una de las encuestas disponibles durante la década de los años ochenta.

En concreto, la Encuesta sobre política de contratación y formación de las empresas españolas de 1987 (datos de 1986) ofrece información muy relevante para entender la expansión de la temporalidad en los años ochenta. En concreto, el cuadro 14 señala la principal ventaja que declaran las empresas para optar por la contratación laboral. En el primer lugar se sitúa la reducción de costes de Seguridad Social, con un 43 % del total de empresas que declaran esta ventaja, porcentaje que se incrementa hasta el 52 % en el caso de las empresas de 6 a 10 trabajadores. En segundo lugar, se sitúan la mejora de la adecuación de la plantilla al ritmo de producción (15 %) y la satisfacción de necesidades temporales de mano de obra (14 %). Sin embargo, su distribución es la opuesta a la causa anterior. Estas dos opciones vinculadas al proceso organizativo suponen la principal causa para el 24 % y el 20 % de las empresas de más de 500 trabajadores; por el contrario, solo suponen la principal ventaja para el 7 % y el 10 % de las empresas de 6 a 10 trabajadores.

TABLA A.2. Evolución de la temporalidad y parcialidad durante los años ochenta en varias encuestas (%)

Fuente y objeto de investigación	Año	Indefinido		Temporal		Tasa empleo atípico	Tasa de temporalidad	Tasa de parcialidad
		Completo	Parcial	Completo	Parcial			
Documento interno del IELSS. Empresas	1981		93	7,0		—	7,0	—
Efectos de la contratación temporal en el mercado de trabajo. Empresas	1981		93,6	6,4		—	6,4	—
Efectos de la contratación temporal en el mercado de trabajo. Empresas	1984		93,1	6,9		—	6,9	—
Encuesta sobre duración y organización del tiempo de trabajo en las empresas.	1984	90,4	1,4	7,5	0,7	9,6	8,2	2,1
Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo. Personas	1985	81,5	8,7	7,5	2,2	18,5	9,7	11,0
Encuesta sobre política de contratación y formación de las empresas.	1986	80,0	2,0	15,0	3,0	20,0	18,0	5,0
Encuesta de Población Activa (media anual). Personas	1987	79,6	2,3	15,9	2,2	20,4	18,1	4,5
Encuesta de Población Activa (media anual). Personas	1990	67,7	1,8	28,1	2,4	32,3	30,5	4,2
Encuesta de Coyuntura Laboral (media anual). Empresas	1990	63,2	1,5	32,8	2,5	36,8	35,4	4,0

Fuentes: CIS (1982), Política de contratación de las empresas españolas. Estudio n.º 1604. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. CIS (1982), Efectos de la contratación temporal en el mercado de trabajo (I). Estudio n.º 1422. Ministerios de Economía y Trabajo y el Banco de España (1984). Encuesta sobre duración y organización del tiempo de trabajo en las empresas españolas. Publicado en *Relaciones Laborales*, 1985(2): 1041-1067. CIS (1985), Condiciones de Vida y Trabajo en España. Estudio n.º 1484, CIS (1987), Política de contratación de las empresas españolas. Estudio n.º 1604. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1987), Encuesta sobre política de contratación y formación de las empresas. *Boletín del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social*, n.º 25 (abril). Sáez, F. (1989), «Empresa y creación de empleo. Respuesta a las medidas de flexibilización y promoción». *Papeles de Economía*, (39-40): 185-198.

Como se puede observar en la tabla A.2, a pesar de las diferencias entre los objetivos y contenidos de cada una de las encuestas específicas que se realizaron durante los años ochenta para conocer la situación de la temporalidad en España, la conclusión es clara: el empleo atípico, especialmente el temporal, se multiplicó pa-

sando de una tasa de temporalidad del 6,5-7 % a una tasa superior al 30 %.

Aunque existen notables diferencias en la obtención de los datos, este resultado también puede encontrarse en la Central de Balances del Banco de España. Las principales características de esta estadística durante los años ochenta es que se trataba de una en-

cuesta voluntaria que rellenaban las empresas interesadas en participar y, debido a sus características, estaba principalmente orientada a las grandes empresas (públicas o privadas). En consecuencia, en términos de valor añadido, las empresas que participaban solían representar sobre el 20-25 % del total. Sin embargo, en términos de cobertura del empleo, el 70 % del mismo se solía encontrar en empresas de más de 500 trabajadores.

Sectorialmente, la estadística abarca a toda la economía empresarial no financiera y, por tanto, excluye al resto de entidades y a las empresas del sector financiero y de seguros. En este sentido, la cobertura de la central de balances se centraba en el empleo industrial (aproximadamente el 30-40 % del empleo estaba cubierto), mientras que en los servicios era muy inferior (en la hostelería nunca llegó a cubrir más del 8 % del empleo).

Por tanto, desde el punto de vista del empleo, se trataba principalmente de grandes empresas industriales donde el concepto de trabajadores «no fijos» implicaba exclusivamente a aquellos que tenían un contrato temporal ponderado por el tiempo medio por persona que estuvieron empleados. En conclusión, si bien se trata de la estadística más sistemática, presenta diversas limitaciones a la hora de calcular la tasa de temporalidad en términos equiparables a las encuestas presentadas anteriormente, por lo que lo más relevante es la evolución que muestra y no tanto su nivel.

En la tabla A.3 se observa que el incremento del empleo temporal fue muy relevante desde el año 1984, con tasas superiores al 20 % de crecimiento durante varios años (tanto en las empresas privadas como en el conjunto de empresas).

TABLA A.3. Evolución de la temporalidad durante los años ochenta en la Central de Balances

Año	Total de empresas (incluye públicas)					Empresas privadas				
	Estructura		Tasas de crecimiento			Estructura		Tasas de crecimiento		
	Fijos	No fijos	Total	Fijos	No fijos	Fijos	No fijos	Total	Fijos	No fijos
1981	94,4	5,6				92,9	7,1			
1982	93,8	6,2	-1,4	-2,0	9,2	92,2	7,8	-1,4	-2,1	7,3
1983	94,0	6,0	-0,7	-1,0	3,5	92,8	7,2	-1,3	-1,5	2,2
1984	94,2	5,8	-1,8	-2,3	7,9	92,9	7,1	-1,4	-2,0	6,7
1985	93,4	6,6	-1,2	-2,0	11,5	92,2	7,8	-1,0	-1,7	8,5
1986	92,0	8,0	0,8	-0,6	21,5	90,5	9,5	1,3	-0,6	24,6
1987	90,3	9,7	0,9	-0,7	18,2	88,5	11,5	2,4	0,4	20,0
1988	88,7	11,3	1,8	0,1	18,1	86,3	13,7	3,2	0,9	19,7
1989	86,5	13,5	3,2	0,5	24,4	83,9	16,2	4,4	1,3	23,7
1990	86,4	13,6	1,0	0,2	6,8	93,5	16,5	1,5	0,6	6,4

Fuente: Banco de España (varios años). Central de Balances y Banco de España (1991). Central de Balances. Resultados: 1981-1988, provisional 1989 y avance 1990.

Una vez descartada la posibilidad de construir series homogéneas de empleo atípico durante la década de los años ochenta, es necesario justificar la decisión metodológica de incluir las series del MITES en el presente estudio. Esta decisión se fundamenta

en las siguientes limitaciones que presenta la Encuesta de Población Activa (EPA) desde una perspectiva de largo plazo:

1. No existe una serie larga homogénea que permita identificar el empleo atípico, entendido como todos los puestos de tra-

bajo diferentes al contrato indefinido a tiempo completo. El empleo atípico es aquel que abarca las formas de contratación temporal, el tiempo parcial (en cualquiera de sus formulaciones) y otras formas de contratación no estándar (como los contratos de formación y prácticas); lo que incluye a todas las personas con contratos indefinido-parcial, temporal-completo y temporal-parcial. La serie actual comienza a principios de la década de los 2000 (primer trimestre de 2002) con lo que gran parte de la evolución histórica queda sin observar.

Por otra parte, existe una versión enlazada de las series principales de la EPA que permite evitar el solapamiento entre parciales y temporales con anterioridad al año 2002. Estos datos cubren el período que abarca desde el segundo trimestre de 1987 hasta el último trimestre del año 2013. No es posible obtener tasas de temporalidad o parcialidad anteriores (aunque la EPA se remonta hasta el año 1964) debido a que hasta la modificación del cuestionario de 1987 no era posible conocer con exactitud el tipo de contrato. Estas series enlazadas se basan en una metodología desactualizada (los criterios metodológicos de la EPA-2002) y un censo de población diferente (el del año 2001 que actualizó el del censo de 1991). Lamentablemente, estas series se dejaron de renovar, por lo que no se encuentra disponible una serie homogénea del empleo atípico que llegue hasta la actualidad en los datos oficiales. Por ello, la única solución es enlazar la serie antigua con la nueva versión siguiendo algún procedimiento estadístico, como el que se realiza en este anexo.

Otra posibilidad es utilizar exclusivamente las series actuales que comienzan en 2002. Sin embargo, esta solución no se adecúa al objeto de estudio en este trabajo, ya que precisamente se pretende comprobar la evolución his-

tórica del empleo atípico y, por tanto, se requiere de una visión de más largo plazo.

2. Una segunda dificultad es que la EPA ha sufrido cambios relevantes en sus definiciones por lo que la interpolación de series mediante las técnicas de enlace no ofrece resultados coherentes para cada una de las categorías. En concreto, hay que destacar un drástico cambio en las series de parcialidad entre el último trimestre de 2004 y el primer trimestre de 2005 como consecuencia de la aplicación de la metodología EPA-2005 (la anterior a la actual de EPA-2021).

Comparando ambos trimestres se obtiene que en el primero había un total de 1 600 000 personas en situación de parcialidad y en el siguiente eran de 2 427 000, lo que supone un incremento de 827 500 personas (una tasa de crecimiento del 51,7 %) en un único trimestre. Analizando la situación por sexo: los hombres incrementan desde 328 000 hasta 548 000 personas (un incremento de 220 600 y un 67,3 %) mientras que las mujeres pasan de 1 272 000 a 1 879 000 (un aumento de 606 700, el 47,7 %). Esto implica que las tasas de parcialidad se incrementaron de un trimestre a otro desde el 8,65 % al 12,96 % (4,3 puntos porcentuales adicionales), que se distribuyen por género entre la tasa de parcialidad masculina que asciende del 2,94 % al 4,87 % (1,93 pp) y la femenina que se incrementa desde el 17,34 % al 25,14 % (7,8 pp).

Si comparamos el empleo asalariado, vemos que los ocupados a tiempo completo descienden en -582 200 personas mientras que a tiempo parcial se incrementa en 827 500. Hay un cambio en la composición del empleo asalariado en el que el tiempo completo se reduce en -561 800 personas (y el parcial se incrementa en la misma cuantía). De tal forma, que el empleo indefinido a tiempo com-

pleto se reduce en -139 000 mientras que el parcial aumenta en 298,300, y el temporal se reduce en -422,800 mientras que el parcial se incrementa en 263,300 personas. Por todo ello, es inviable construir una serie histórica totalmente equiparable a la del MITES, ya que existe un cambio de criterio fundamental en la definición del empleo parcial.

3. Las series extendidas de la EPA que permiten desagregar por tipo de contrato (indefinido y temporal) y tipo de jornada (completa o parcial) no aportan otras variables adicionales (sexo, edad, nacionalidad, etc.). Por lo tanto, no existe una ventaja significativa de los datos de la EPA frente a los de la Seguridad Social cuando se identifican los cuatro tipos de contratos necesarios para poder analizar el empleo atípico (indefinido-completo, indefinido-parcial, temporal-completo, temporal-parcial).
4. Mientras que la EPA es una encuesta en la semana de referencia de la persona entrevistada, los datos de la Seguridad Social miden los registros de afiliación del período (en este caso, el último día del mes de referencia). Aunque existen una serie de preguntas de control, la EPA analiza principalmente la situación percibida por la propia persona entrevistada, mientras que los registros oficiales muestran la situación en la que efectivamente esas personas se están vinculando con la Seguridad Social.

Esto permite corregir el hecho de que un porcentaje no trivial de personas encuestadas en la EPA o desconocen su tipo de contrato o no saben identificarlo entre la tipología que le ofrece el cuestionario de la entrevista. Si se calcula el porcentaje de personas con contrato temporal que se encuentran en esas dos modalidades («verbal, no incluido en las opciones anteriores» y «no sabe»), se obtiene que durante el período 2002(T1)-2021(T1) el promedio es del 16,9 %.

5. Si a pesar de todas las limitaciones anteriores se desea utilizar la EPA, como se presenta en el gráfico A.1 de este anexo, la extensión máxima que se puede conseguir para el empleo atípico es desde el segundo trimestre de 1987 (ya que es imposible discernir la tipología de contratos con el cuestionario anterior a esa fecha). Esta serie arroja un tamaño muestral de 131 observaciones hasta el cuarto trimestre de 2019. Mientras, los datos de la Seguridad Social comienzan en el segundo trimestre de 1990, lo que supone un tamaño muestral de 119 observaciones, lo que implica una diferencia entre ambas series de 12 trimestres (3 años). Considerando los datos previamente mencionados de encuestas anteriores sobre la política de contratación de las empresas, es posible cubrir un período superior (aunque con discontinuidades). Por tanto, la pérdida de información que se deriva de utilizar la EPA frente a los datos del MITES es marginal.

Además, hay que considerar que esos tres años fueron los primeros en los que la EPA preguntaba por el tipo de contrato y existe un período de adaptación. En este sentido, una comparación de la EPA del año 1985 con la Encuesta de Condiciones de Vida y Trabajo de ese mismo año presenta resultados muy diferentes. Tal y como señalan Muro *et al.* (1991¹, cuadro 7, p. 130) el número de trabajadores sin empleo regular pero que habían trabajado ocasionalmente en la semana de referencia o en los últimos meses o de manera estacional en la EPA (4.º trimestre) era de 174 000 personas y en ECVT eran 516 000 personas.

¹ Muro, Juan; Raymond, José L.; Toharia, Luis y Uriel, Ezequiel (1991). «La encuesta de población activa y la encuesta de condiciones de vida y trabajo». En: L. Toharia y S. Bentolilla (comps.). *Estudios de economía del trabajo en España, Vol. 3: El problema del paro* (pp. 111-142). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, la ventaja principal para esta investigación de los datos del MITES es que tratan el punto de vista del empleador, lo que nos da información sobre la tipología de los puestos de trabajo que están ofreciendo y, en consecuencia, refleja en mayor medida las estrategias empresariales de gestión de la mano de obra. De esta forma, puede haber una persona que tenga distintos puestos de trabajo con empleo atípico simultáneamente que en la EPA solo figurarían como uno (el empleo principal identificado por la persona entrevistada) y que en la Estadística de Empresas aparecería dos veces (ya que son en realidad dos puestos de trabajo diferentes con dos relaciones laborales diferentes). Comparando el primer dato disponible en ambas bases, mientras que la EPA muestra una tasa de temporalidad de personas asalariadas en el 30,6 % en el segundo trimestre de 1990, en los datos del MITES eran el 36,9 % de los puestos de trabajo los que eran con un contrato temporal en ese mismo trimestre.

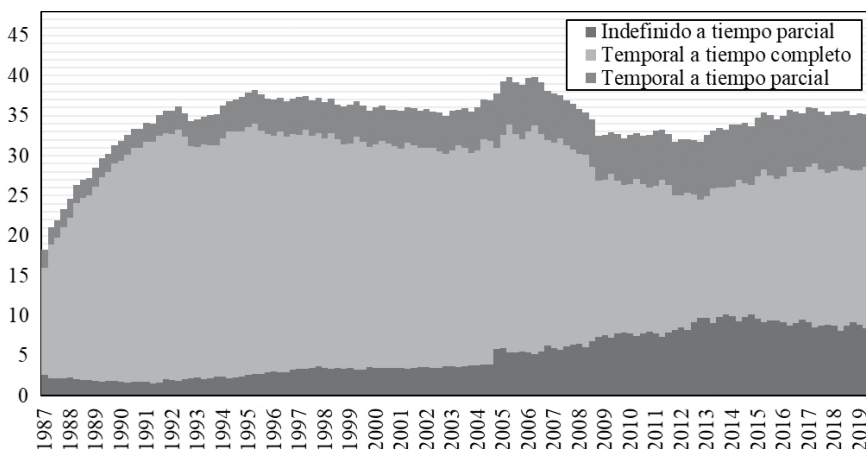
A efectos de poder comparar los datos del MITES con los de la EPA, se han utilizado las series del *Boletín Estadístico del Banco de España* (versión de diciembre de 2013) cuyos datos abarcan desde el segundo trimestre de 1987 hasta el último tri-

mestre de 2013. Para extender las series, se ha procedido a la retropolación de la versión actual de la EPA (metodología 2021) que cubre desde el primer trimestre de 2002 hasta el último trimestre de 2019; en este estudio se omite el período desde el primer trimestre de 2020 por motivo de la pandemia de la COVID-19. En consecuencia, se ha utilizado como variable de enlace la ratio de los datos del primer trimestre de 2002 en las dos versiones para las cuatro series analizadas:

- Personas asalariadas con contratos indefinidos a tiempo completo.
- Personas asalariadas con contratos indefinidos a tiempo parcial.
- Personas asalariadas con contratos temporales a tiempo completo (incluyendo personas con contratos no clasificables).
- Personas asalariadas con contratos temporales a tiempo parcial (incluyendo personas con contratos no clasificables).

El siguiente gráfico A.1 muestra la evolución del empleo atípico en la EPA y representa el punto de vista de las personas trabajadoras. Si se compara con el gráfico 3 del artículo, se puede observar una dinámica similar, aunque con algunas diferencias relevantes.

GRÁFICO A.1. Estructura contractual del empleo en la EPA (1987-2019) (%)



Fuente: Véase texto.

TABLA A.4. Evolución del empleo atípico en distintas bases de datos

Fuente	Variable	1990T2	2002T1	2005T1	2013T1	2019T4	Var. 2019-1990
MITES	N.º puestos de trabajo con contratos atípicos (miles)	2.462,7	4.560,2	5.095,0	4.492,3	6.430,8	3.968,1
	Tasa de empleo atípico (%)	38,3	42,1	42,5	39,7	45,3	6,9
	Tasa de empleo indefinido a tiempo parcial (%)	1,4	6,9	8,2	15,1	14,6	13,2
	Tasa de empleo temporal a tiempo completo (%)	34,3	28,1	26,8	15,0	20,1	-14,2
	Tasa de empleo temporal a tiempo parcial (%)	2,6	7,1	7,5	9,5	10,6	7,9
EPA	N.º de personas con contratos atípicos (miles)	2.989,5	4.742,3	5.749,8	4.433,7	5.877,7	2.888,2
	Tasa de empleo atípico (%)	31,3	35,6	37,8	31,7	34,9	3,6
	Tasa de empleo indefinido a tiempo parcial (%)	1,9	3,6	5,9	9,8	8,8	6,9
	Tasa de empleo temporal a tiempo completo (%)	27,1	27,3	25,1	14,7	19,0	-8,1
	Tasa de empleo temporal a tiempo parcial (%)	2,3	4,7	6,8	7,2	7,1	4,8
Diferencia	N.º de personas con contratos atípicos (miles)	-526,8	-182,1	-654,8	58,6	553,1	1.079,9
	Tasa de empleo atípico (%)	7,1	6,5	4,7	8,0	10,4	3,3
	Tasa de empleo indefinido a tiempo parcial (%)	-0,5	3,3	2,3	5,3	5,8	6,3
	Tasa de empleo temporal a tiempo completo (%)	7,2	0,8	1,7	0,3	1,1	-6,1
	Tasa de empleo temporal a tiempo parcial (%)	0,4	2,4	0,7	2,3	3,5	3,1

Fuente: Véase texto.

Realizando una comparación entre ambas bases de datos (véase tabla A.2) para los trimestres iniciales disponibles en cada caso (1990T2 en el caso del MITES, y 2002T1 y 2005T1 en el caso de la EPA) con los valores finales (2013T1 y 2019T4), se obtienen las siguientes conclusiones:

- El volumen de personas en situación de empleo atípico era originalmente mayor en la EPA, pero el número de puestos de trabajo con un contrato atípico se incrementa más en el MITES, por lo que al finalizar la serie tiene una presencia mayor.
- Las tasas de empleo atípico son persistentemente mayores en la fuente del

MITES que en la EPA. Este resultado se obtiene independientemente del trimestre considerado. Lo que apunta a que una misma persona tiene varios puestos de trabajo con contratos atípicos (probablemente a tiempo parcial).

- La tasa de temporalidad a tiempo completo es siempre mayor en la serie del MITES que en la de la EPA, pero la distancia se reduce significativamente con la entrada en vigor de los nuevos cuestionarios de la EPA (siendo aproximadamente de 1 pp).
- La tasa de parcialidad es originalmente mayor en la EPA, debido a que es mayor

en el contrato indefinido. Sin embargo, esta situación se revierte y será mayor en los datos del MITES desde entonces. Posiblemente, esto se deba a que en los primeros años los datos del MITES se obtenían de empresas de seis y más trabajadores.

- En términos de variación, desde el primer trimestre disponible y el último se observa que en ambos casos se incrementa el empleo atípico tanto en términos absolutos como en términos relativos de tasas respecto al empleo asalariado. En consecuencia, se obtiene la misma conclusión independientemente de la base de datos utilizada y de si la definición es en base a las personas (EPA) o a los puestos de trabajo (MITES).
- En la EPA el incremento es de menor intensidad, aunque igualmente significativo, principalmente porque las variaciones del temporal a tiempo completo y del indefinido a tiempo parcial son menos intensas. Aunque se puede observar con claridad el cambio de metodología en 2005, ya que la tasa de empleo atípico se incrementa 1,8 pp entre 2002 y 2005 de lo que lo hace esa misma tasa en los datos del MITES en ese período.

Negociación colectiva

Estructura de la negociación colectiva (1978-2019)

La información estadística sobre negociación colectiva presenta varias dificultades para la elaboración de una serie homogénea desde 1958. Esta información no fue recopilada de manera sistemática hasta que fue gestionada por la denominada Oficina Central de Convenios Colectivos de la Organización Sindical Española, entre 1966 y 1975. Esta oficina publicó un boletín trimestral (*Convenios Colectivos Sindicales. Información interna para los órganos sindicales destinatarios*). Sin embargo, los datos an-

teriores a 1968 se encuentran en una serie de libros recopilatorios, entre los que destacan la *Estadística de convenios colectivos de trabajo: 1958-1967* (1968)² y *Convenios colectivos sindicales de rama: estudio económico-jurídico de los interprovinciales vigentes* (1970). Estos libros no ofrecen una información detallada; por ejemplo, para el ámbito funcional del convenio solo se dispone del agregado 1958-1967, no del desglose anual.

De manera similar, el boletín combina dos informaciones distintas. Primero aporta las series anuales de número de convenios, empresas y trabajadores afectados por convenio año a año. Sin embargo, el desglose por ámbito se realiza por convenios y normas de obligado cumplimiento en vigor a 31 de diciembre de cada año. Este último dato es sensiblemente superior al primero porque incluye un mayor número de «revisiones», que incluyen todo tipo de extensiones de los convenios (en especial las normas de obligado cumplimiento o laudos). Adicionalmente, también se aporta información sobre los convenios homologados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; de nuevo este criterio es distinto a los dos anteriores, ya que la Comisión no autorizaba los convenios inmediatamente, ofreciendo así valores diferentes en todos los criterios considerados.

Tras la desaparición de la OSE, la competencia sobre la gestión de esta información recayó desde 1976 en el Ministerio de Trabajo, en concreto en la Dirección General de Trabajo, que asumió la elaboración de otro boletín periódico en el que ya se distinguen claramente los valores de registro y los de efectos económicos. Sin embargo, la información de varios años, en concreto la de 1976 y 1977, es bastante limitada ya que los archivos del Ministerio

² OSE (1968). *Estadísticas de convenios colectivos de trabajo: 1958-1967*. Madrid: Organización Sindical. Oficina Central de Convenios Colectivos.

comienzan en 1979 y los datos anteriores se presentan como resúmenes. Finalmente, desde 1981, la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo ofrece información más sistematizada, por lo que es posible identificar de acuerdo a criterios homogéneos los convenios vigentes y los trabajadores afectados en función de las mismas definiciones. Es por ello que en esta serie se ha optado por utilizar esta estadística que comienza en 1981 y llega a la actualidad, pero incluyendo también los datos disponibles desde 1978, si bien estos últimos deben tomarse con mayor precaución. Extender la serie incluso a años anteriores resulta aún más complejo por las limitaciones previamente señaladas.

Por último, se presenta el agregado del número de trabajadores cubiertos en vez de la tasa de cobertura por las dificultades a la hora de construir una serie homogénea de personas asalariadas del sector privado (los empleados públicos están excluidos de estas estadísticas), ya sea en base a los datos de afiliación a la Seguridad Social (el régimen general incluye a personas excluidas de la negociación colectiva) o en base a la Encuesta de Población Activa, en la cual es poco recomendable el enlace de series específicas debido a sus cambios metodológicos. Un análisis detallado de los problemas metodológicos que entraña el cálculo de la tasa de cobertura puede encontrarse en Pérez-Infante (2017)³.

Incremento salarial pactado en términos nominales y reales (1964-2019)

- El incremento salarial pactado en la negociación colectiva en términos nominales, expresado en tasa de crecimiento (%), es el resultado de ponderar el incremento salarial medio de cada convenio

por el número de trabajadores a los que cubre cada convenio. Para el período 1964-1980 la fuente es la recopilación de las estadísticas de la OSE y la DGT que se realiza en los cuadros 9 y 18 de Lorente, J. M. (1982). *Un análisis estructural de los convenios colectivos: 1980-1981*. Madrid: Ministerio de Economía y Comercio, Dirección General de Política Económica y Previsión. Para el período 1981-2019, la fuente es la Estadística de Convenios Colectivos elaborada anualmente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

- La inflación se mide como la tasa media de crecimiento interanual del índice de precios de consumo (IPC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y enlazada desde 1964 hasta 2019. La utilización de la tasa de crecimiento interanual del mes de diciembre de cada año arroja resultados similares, por lo que se omite en esta presentación.
- El incremento salarial pactado en términos reales es la diferencia entre el crecimiento del incremento salarial pactado en términos nominales y la tasa de inflación.

Deriva salarial (1964-2019)

La deriva salarial se calcula como la diferencia entre el salarial pactado en la negociación colectiva en términos nominales y el incremento de las remuneraciones salariales. La primera variable proviene de la misma fuente que en el punto anterior. La variación efectiva de los salarios nominales se ha calculado como el enlace de la serie de «pagos totales por persona en el total de sectores» de la Encuesta de Salarios elaborada por el Instituto Nacional de Estadística para el período 1964-2000 y de la serie «coste laboral total por trabajador y mes» de la Encuesta trimestral de coste laboral elaborada por el INE a partir del año 2000.

³ Pérez-Infante, José I. (2017). «La estadística de convenios colectivos y la medición de la cobertura de la negociación colectiva». *Temas laborales*, 136: 159-188.

ANEXO 2

LA CONCERTACIÓN SOCIAL ENTRE 1978 Y 2019

La tabla A.5 muestra todos los acuerdos derivados del diálogo social de ámbito nacional en materia de orientación salarial a efectos de poder compararlo con la variación salarial pactada que hubo en cada año de vigencia de estos acuerdos. Por tanto, el criterio metodológico fundamental que se ha seguido para su elaboración ha sido incluir solo los acuerdos del diálogo social que incluyan orientaciones sobre la variación salarial pactada en la negociación colectiva o similares. Esto excluye necesariamente todos los acuerdos de concertación social en materia de empleo (sa-

larios mínimos, conciliación y mediación, riesgos laborales, trabajadores por cuenta propia, entre otros), así como acuerdos en materia de protección social (prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, prestaciones por desempleo, atención a la dependencia, etc.).

Asimismo, esta decisión también excluye a todos los acuerdos del diálogo social que no sean de ámbito nacional, como por ejemplo los pactos sociales de ámbito autonómico. Estos pactos aportan muchos más matices en función de cada uno de los territorios; sin embargo, dado que el objeto de este estudio es la economía en su conjunto, se ha optado por excluir a los pactos de ámbito inferior al nacional.

TABLA A.5. *La concertación social entre 1978 y 2019*

Vigencia	Firmantes	Acuerdo	Rango salarial (%)	Incrementos pactados (%)
1978	PARTIDOS	Pactos de la Moncloa	20-22	20,6
1979	CEOE-UGT	Acuerdo Básico Interconfederal (ABI)	11-14	14,1
1980	CEOE-UGT	Acuerdo Marco Interconfederal (AMI)	13-16	15,3
1981	CEOE-UGT	Acuerdo Marco Interconfederal (AMI)	11-15	12,6
1982	TRIPARTISMO	Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)	9-11	11,5
1983	CEOE-UGT	Acuerdo Interconfederal (AI)	9,5-12,5	11,5
1984	Gobierno	Recomendación gubernamental	6,5	8,0
1985	GOB-CEOE-UGT	Acuerdo Económico y Social (AES)	5,5-7,5	7,3
1986	GOB-CEOE-UGT	Acuerdo Económico y Social (AES)	7,2-8,6	8,0
1987	Gobierno	Recomendación gubernamental	5	6,6
1997	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	No específica	3,1
2002	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflación	2,9
2003	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflación	3,4
2004	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflación	2,9
2005	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	2,9
2006	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	3,1
2007	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	2,9
2008	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	3,5
2009	Sin acuerdo	Sin acuerdo	—	2,6
2010	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	1,4
2011	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1-2	2,7

TABLA A.5. *La concertación social entre 1978 y 2019 (Continuación)*

Vigencia	Firmantes	Acuerdo	Rango salarial (%)	Incrementos pactados (%)
2012	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1,5-2,5	1,7
2013	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	0,6	0,6
2014	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	0,6
2015	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	0,7
2016	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1,5	1,1
2017	Sin acuerdo	Sin acuerdo	—	1,3
2018	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	2-3	1,6
2019	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	2-3	2,0

Fuente: Elaboración propia.

Trajectories of Labour Market Liberalisation in Spain: An Empirical Approach to the Historical Evolution of Institutional Change

Las trayectorias de liberalización laboral en España: una aproximación empírica a la evolución histórica del cambio institucional

Luis Cárdenas

Key words

Institutional Change

- Dualism
- Spain
- Labour Market
- Labour Market Segmentation

Palabras clave

Cambio institucional

- Dualismo
- España
- Mercado de trabajo
- Segmentación laboral

Abstract

The aim of this paper is to analyse institutional change in the Spanish labour market in from a historical perspective, particularly regarding two main areas: labour regulation and collective bargaining. The main thesis is that it is possible to identify four main stages. Firstly, there was an institutional structure unfavourable to workers, which was overcome by the agency of the labour movement in the period of the so-called *desarrollismo* (1960-1975). Secondly, the years of transition from dictatorship to democracy (1976-1983) were a period of labour market regulation. Thirdly, there was a period of labour market dualism (1984-1996) based on the application of flexibility at the margin in the face of veto power. This was followed by deregulation (1997-2019), which was a consequence of the weakening of power resources resulting from the previous labour market segmentation.

Resumen

El objetivo de la nota es analizar desde una perspectiva histórica el cambio institucional en el mercado laboral en España en sus dos principales ámbitos: la regulación del empleo y la negociación colectiva. La tesis principal es que es posible identificar cuatro grandes etapas. Primero, durante el desarrollismo (1960-1975), existió una estructura institucional adversa a los trabajadores que fue superada por la agencia del movimiento obrero. Segundo, el período de transición (1976-1983) se trató de una fase de regulación del mercado laboral. Tercero, un período de dualización del mercado laboral (1984-1996) con base en la aplicación de flexibilidad en el margen ante la existencia de poder de veto. Finalmente, la desregulación (1997-2019) es consecuencia del debilitamiento de los recursos de poder derivado de la segmentación laboral ocurrida previamente.

Citation

Cárdenas, Luis (2023). "Trajectories of Labour Market Liberalisation in Spain: An Empirical Approach to the Historical Evolution of Institutional Change". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 121-132. (doi: 10.5477/cis/reis.183.121)

Luis Cárdenas: Universidad Complutense de Madrid | luiscard@ucm.es

INTRODUCTION

The main objective of this research is to analyse the institutional change that has taken place in recent decades in Spain in the two main areas of the labour market from the perspective of historical institutionalism: labour market regulation and collective bargaining.

There is a body of literature that has addressed the historical change of labour market institutions in Spain. Thus, for example, Malo (2005) and Sola (2014) applied the idea of path dependence to the historical evolution of labour market regulation, while Picot and Tassinari (2017), López-Andreu (2017) and Cárdenas and Villanueva (2021) analysed labour market liberalisation in the last decade. Molina (2014), Köhler (2018), García and Rigby (2016, 2019), Tébar (2020) and Sánchez-Mosquera (2021) studied the institutional evolution of the labour relations system.

Based on this literature, the research question posed here is: How has labour market liberalisation evolved in Spain over time? A descriptive analysis of six indicators will be carried out to answer this question (see Annex for sources and methodology). First, a series of issues will be analysed regarding labour regulations, namely, severance payments in court cases (1954-2019), the types of dismissals (1980-2019) and the contractual structure of employment (1990-2019). Second, in order to assess industrial relations, the following will be examined: the structure of collective bargaining (1978-2019); collectively agreed wage increases in nominal and real terms (1964-2019); and the wage drift (1964-2019).

The theoretical contribution consists of four elements. Firstly, it presents for the first time an extensive historical analysis of labour market liberalisation in Spain, from its origins in the 1960s to the present day. Secondly, it combines within the

same analysis the evolution of the industrial relations system and the regulation of the labour market, since these two elements are inextricably linked. Thirdly, it provides an additional case study for the literature on historical institutionalism and comparative political economy, which has paid little attention to Spain to date. Fourthly, it contributes a theoretical innovation, since the historical institutionalism literature has so far argued that deregulation at the core and at the margin are mutually exclusive (Cárdenas and Arribas, 2022). However, this paper shows that one path can in fact lead to the other when power resources are taken into account. This makes a significant contribution to the debate by showing that these paths are not linear.

The main methodological contribution is that each of these purpose-built indicators has the highest number of years available in the statistics, provided that there is some degree of homogeneity. This allows for a systematic analysis of their evolution over longer historical periods, which contributes to a better understanding of the nature of institutional change. However, a limitation of the research is that the series differ due to the lack of sufficient data available and to the fact that the period analysed ends in 2019 as a result of the COVID-19 crisis in 2020. Given its individual nature, this requires a detailed analysis that goes beyond the scope of this paper.

This article is structured as follows. Section two studies the two areas of the labour market during the period when the labour market was institutionally structured (from the so-called *desarrollismo* in Franco's dictatorship to the political transition to democracy). Section three examines the changes from the 1980s to the mid-1990s. An analysis of the period from the mid-1990s to 2019 follows. The last section is devoted to the conclusions.

INDUSTRIAL RELATIONS DURING THE SO-CALLED *DESARROLLISMO* IN FRANCO'S TIMES TO THE POLITICAL TRANSITION TO DEMOCRACY: LABOUR MARKET REGULATION

The labour market during the *desarrollismo*: repression and workers' struggles

The central aspects of the labour market in this period are described below (Soto, 2006). The trade union model imposed by Francoism was based on compulsory membership of the Spanish Trade Union Organisation (known as the OSE) (albeit with little practical relevance), and the repression of workers' organisations. The OSE was established as an organisation under public law and was therefore part of the State; however, it had no power to exert pressure, since any measures to make demands for labour rights, such as strikes, rallies or demonstrations, were prohibited.

When the 1958 Collective Bargaining Agreements Act was passed, State intervention remained, as collective bargaining agreements were negotiated internally by members of the OSA and had to be ratified by the Ministry of Employment. The Ministry retained the power to issue binding regulations if there was a lack of agreement between the parties or if any agreement reached conflicted with the Ministry's aims. It progressively established the minimum wage and capped wage increases. As a result, bargaining processes took place predominantly at a provincial level (58.5 % of workers covered), followed by interprovincial (15.2 %), local (13.4 %) and company (7.2 %) levels between 1957 and 1968 (Annex).

The process of recovering collective action mechanisms continued despite the restrictions imposed through regulations and repressive practices, as reflected in the development of Comisiones Obreras (Ruiz, 1993). Institutional arrangements were clearly un-

favourable to workers, as they were essentially designed to control wage dynamics. A high degree of militancy was therefore necessary if workers were to benefit from economic growth and ultimately see improvements in their salary, working conditions and quality of life (Molinero and Ysàs, 1998). Wage policies were therefore contradictory, since the social conflict associated with the reconstruction of the workers' movement and the action of anti-Franco groups was a major source of instability and erosion of Franco's regime; especially considering that the regime considered labour conflicts —by their very nature— to be social and political (Doménech, 2002).

Sola (2014) and Malo (2005), among others, have carried out a detailed analysis and highlighted the main features of labour market regulation. The 1944 Employment Contract Act stipulated the types of contract available, which were either: open-ended or fixed-term (temporary) contracts; or work or service contracts (temporary, fixed-term or open-ended contracts, depending on the nature of the work or service). There was also an apprenticeship contract which was regulated separately. The termination of the contract could be either by the fixed term, or the work or service ending, or by dismissal. Compensation was only paid if termination was considered unfair by a court, and it was capped at 12 months' salary.

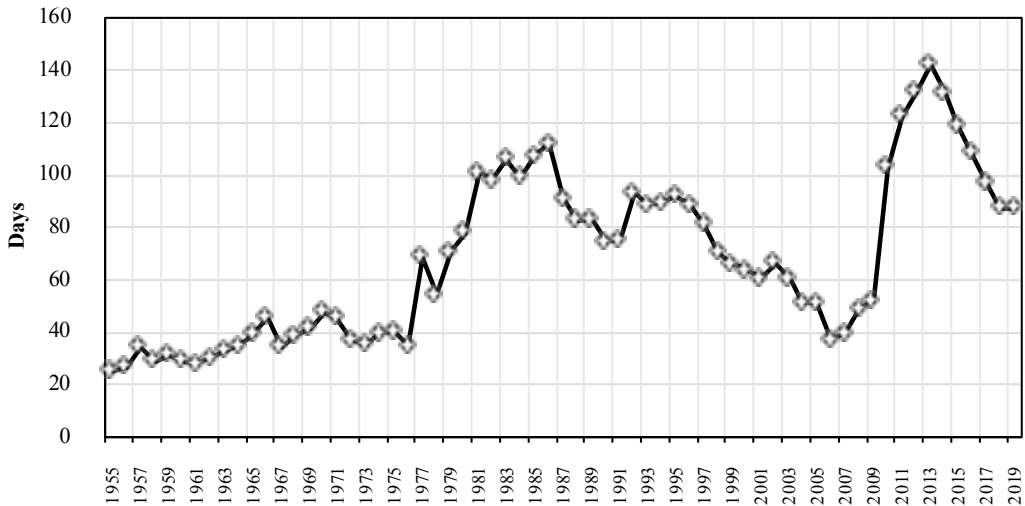
This division between fair and unfair dismissal stemmed from the previous republican labour legislation. The 1931 Employment Contract Act stipulated the grounds for dismissal and generally required the involvement of a judge. From 1956, through the so-called compensation "by way of damages for non-reinstatement", the requirement for grounds for discharge was eliminated in companies with more than 50 workers. Based on these characteristics, the most frequent interpretation is that it was a model where employers were free to terminate a worker's employment with severance pay, although fair grounds for termination were

formally maintained, in other words, it was a “costly free dismissal” (Malo, 2005).

Analysing the data on court judgements, as shown in Figure 1, severance payments awarded were for moderate amounts (no more than 40 days' average salary). The increasing trend that led to the leap in 1975

may have been caused both by the increased seniority of the terminated employees, and by compensations for non-reinstatement. Moreover, the percentage of judgments in favour of employees between 1960 and 1975 averaged 50 % but with an upward trend, which would help to explain this moderate increase.

FIGURE 1. Severance payments in court cases (1955-2019) in days of average salary



Source: See Annex.

An initial conclusion from the data suggests that the institutional context of the labour market during the *desarrollismo* was not favourable to workers. Regulations gave primacy to companies in industrial relations, wage policies were clearly aimed at curbing salaries, and workers' representation and mobilisation actions were repressed. In practice, there was free termination and the cost of severance payments was moderate (in terms of the average wage).

The process of labour regulation during the transition to democracy: mobilisations and labour rights

The most substantial institutional change took place during the political transition to

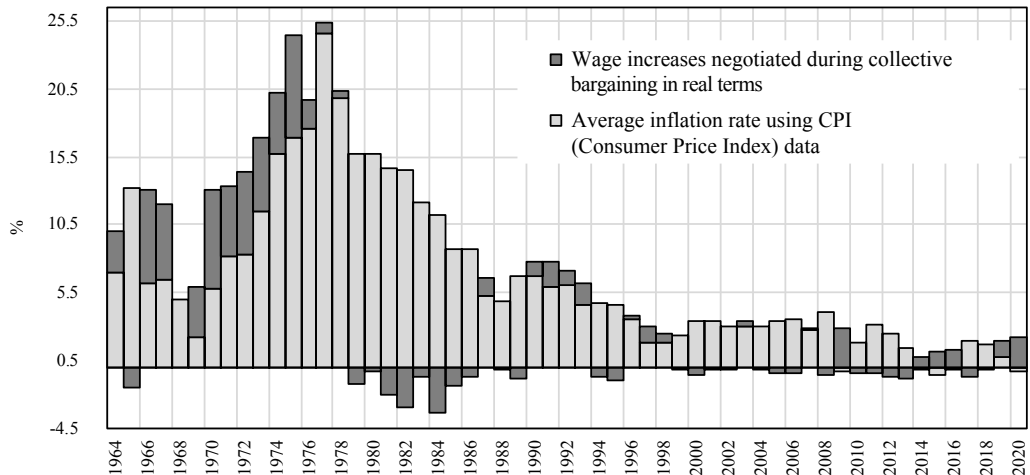
democracy in Spain. The country was at a critical juncture. After the strong series of demands made between 1974 and 1977, a political coalition of the labour movement succeeded in establishing a legal framework that restricted the discretionary power of companies.

Compared to the previous period, Figure 1 clearly shows the surge in the amount of severance payments, which suggests that these legal changes were effective, as the courts made it more expensive to terminate employment. Although there was a slight decrease in 1978, there was an upward trend and the average compensation amounted to 112 days of average salary in 1986, when it started to decline significantly.

Figure 2 shows that, while agreed nominal wage growth clearly outpaced inflation in the first half of the 1970s, from 1978 onwards this relationship was reversed and inflation was higher than agreed nominal wage growth,

which involved that agreed wage growth in real terms was negative between 1979 and 1989 (with the exception of 1987). This later fluctuated, interspersed with positive and negative changes in the real agreed wage.

FIGURE 2. *Agreed wage increases in nominal and real terms (1964-2020)*



Source: See Annex.

The institutional framework of the industrial relations system in the *desarrollismo* was profoundly transformed during the 1970s. The changes introduced in those years increased employment protection, with priority given to open-ended contracts and higher amounts awarded as severance payments than in the previous period, and recognised trade union rights. In contrast, there was a more moderate collectively agreed real wage growth. It was therefore a process of labour market regulation at a critical juncture that involved a profound transformation of labour institutions.

LIBERALISATION AT THE MARGIN IN THE 1980s AND 1990s: THE DUALISM PHASE

During the 1980s until the mid-1990s, successive governments were actively involved

in combining collective bargaining aspects with labour market regulation and social protection issues. The industrial relations system would be consolidated by the Organic Law on Trade Union Freedom, which fostered the representativeness of the majority organisations.

This process saw the first major reform of the Workers' Statute (in 1984), which deregulated the use of fixed-term contracts, introduced a list of sixteen types of non-protected contracts, and made the requirement of grounds for termination more flexible. This led to a sharp increase in temporary contracts during the 1980s, as they were cheaper and allowed employers more discretion. Thus, in 1986, 43 % of firms argued that the use of temporary contracts had the major advantage of reducing social security costs, and 29 % were of the view that it was better suited to the pace and seasonal needs of employment (Annex).

All of this was in line with employers' objectives to ensure "workforce flexibility" and reductions in social security contributions (Sánchez-Mosquera, 2021).

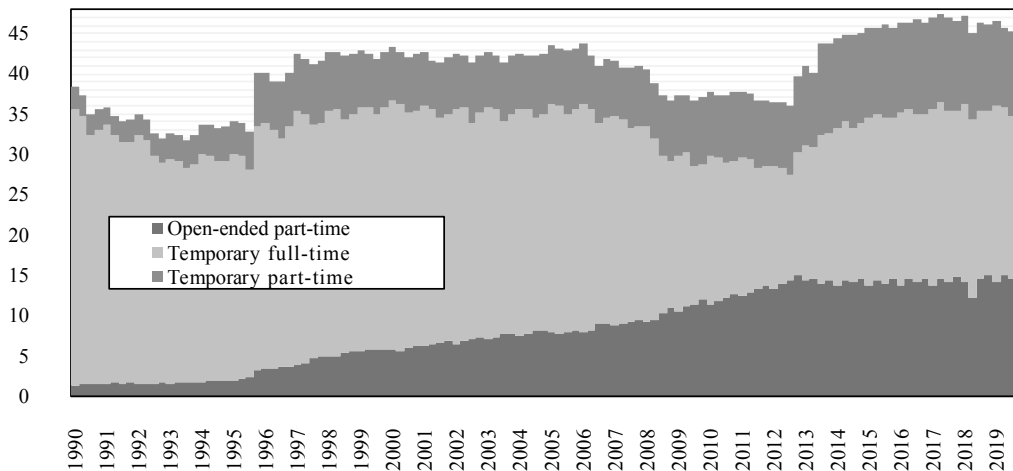
The next major reform was the youth employment scheme (of 1988), which sought to introduce a much looser use of apprenticeship and traineeship contracts, reducing the rights and protection of young workers. However, it was not implemented as a consequence of the general strike of 14 December 1988 (Recio and Roca, 1998). Despite some reforms of the social protection system (such as non-contributory pensions), the ability of trade unions to affect economic policy weakened considerably in the early 1990s.

The 1994 labour reform, which approved and endorsed temporary employment agencies, included the proposals from the youth employment plan that had failed in 1988. In

industrial relations, the 1994 reform sought to strengthen enterprise-level collective bargaining by granting powers that had been previously restricted to legislation. However, evidence from the collective bargaining structure shows that the impact of this reform was small (Figure 5), as the number of workers covered by enterprise or corporate group agreements largely remained, with no significant increases.

Figure 3 shows the effect of these reforms on employment. It reflects how the types of employment contracts evolved over time, including the consolidation of a segment of employment with atypical contracts (open-ended part-time, temporary full-time and temporary part-time) that usually exceeded 40 % in periods of expansion and was drastically reduced in periods of economic crisis because these types of jobs disappeared to a greater extent.

FIGURE 3. *Employment structure based on contract types (1990-2019) (%)*



Source: See Annex.

The third conclusion is that a policy of partial deregulation was implemented in the 1980s and mid-1990s, which was reflected in a liberalisation at the margin. These policies were based on the crea-

tion of specific temporary contracts, mainly fixed-term, for the promotion of employment and agency contracts, as well as to make part-time work more flexible. This path of liberalisation can be understood as

stratification, implemented through atypical contracts that shaped a process of institutional dualism.

LIBERALISATION AT THE CORE IN THE 21ST CENTURY: THE DEREGULATION PHASE

Two different starting dates can be identified for this stage in each of the institutional areas of the labour market. Working conditions began to shift in the direction of labour reforms in 1997, a process which became more established in 2002 with the removal of the back pay accrued from the time of dismissal to the time a final decision is issued. In terms of collective bargaining, the change began in 2010 and became firmly established in 2012.

Deregulation of employment

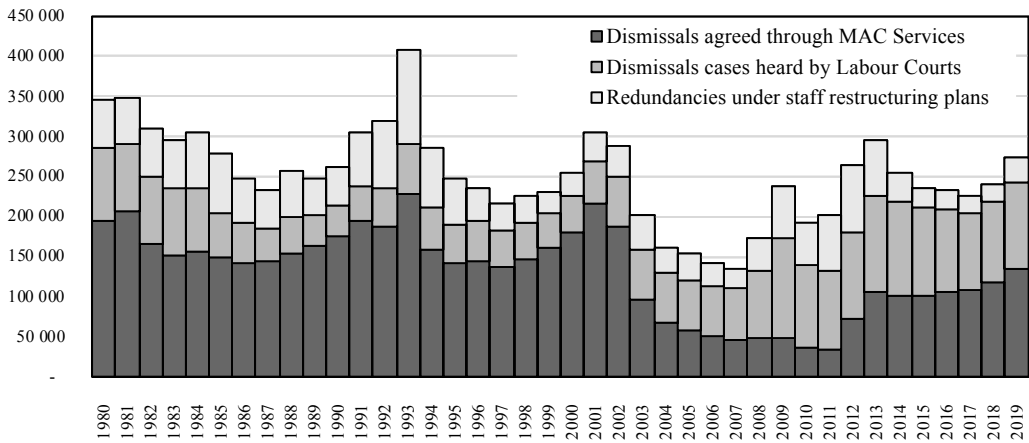
Institutional reforms at this stage focused on reducing dismissal costs for permanent contracts and giving employers greater discretion to terminate employment or significantly modify working conditions. This involved a shift from stratification to a gradual change of conversion outcomes, due to the low discretion of the institution and the reduced veto power of the coalition of actors opposing it.

The 1997 labour reform directly affected permanent contracts, as it introduced a new type of contract with lower severance pay for unfair dismissal. As a result, a significant number of workers were exposed to these contracts with smaller severance payments, and therefore the permanent contracts became segmented. The 2002 labour reform established that the employer was no longer obliged to pay the so-called wages ac-

crued for the time elapsed until the judgement declaring the dismissal null and void or unfair if the dismissal was deemed to be unfair within 48 hours and the corresponding compensation was paid ("express dismissal"). This made it possible for employers to unfairly dismiss at a lower (monetary and procedural) cost than before. This change brought about a drastic change in the structure of dismissals as the number of dismissals agreed through Mediation, Arbitration and Conciliation (MAC) services went from 188 056 in 2002 to 95 408 in 2003. Until 2009, this legal avenue accounted for 30 % of people who were awarded unemployment benefits, while 60 % of claimants was accounted for by the termination of temporary contracts.

The content of the labour market reforms implemented in 2010 and 2012 is well known. Severance pay for unfair dismissal was reduced, the requirements for fair dismissal were significantly relaxed, and companies' internal flexibility to substantially modify working conditions (wages, working hours, working time, geographical mobility, among others) unilaterally was increased. This reform was aligned with traditional employer objectives (Martín and Alós, 2003; Sánchez-Mosquera, 2021) and strongly enabled employers' unilateral decisions about dismissal, work organisation and working conditions.

Accordingly, Figure 4 shows that all types of dismissals increased significantly since 2007, especially those resulting from court proceedings. The flexibility that had been introduced made it possible to dismiss workers with more seniority in their job more easily; this can be seen from the fact that they received much higher severance payments than in previous years (Figure 1), thus eroding the core of previously protected employment while increasing atypical contracts.

FIGURE 4. *Types of dismissals (1980-2019)*

Source: See Annex.

There was another fundamental change compared to the recession of 1993. Although the number of dismissals was higher in 1993, this resulted from settlements through Mediation, Arbitration and Conciliation services and from redundancy plans (dismissal cases heard by the courts amounted to 15 % of the total). By contrast, in 2013, court dismissals were the main type, accounting for 40 % of the total. There had been a shift from legal avenues which entailed a certain amount of negotiation between the parties (with settlement in MACs or staff restructuring plans (*Expediente de Regulación de Empleo*, known as ERE) to resolution by the courts. This gave employers greater discretion in external flexibility.

In 2002 and 2012, when PP governments had absolute majorities, they unilaterally implemented reforms that increased employers' discretionary power, expanding external, internal and wage flexibility (Lasierra, 2007; López-Andreu, 2017) through the conversion of the existing employment regulation institutions. Therefore, it can be considered as deregulation at the core (Cárdenas and Villanueva, 2021).

The erosion of collective bargaining

Regarding industrial relations, after several years without collective bargaining agreements, the Interconfederal Agreement on Employment Stability was signed in 1997, followed by the Interconfederal Agreement on Collective Bargaining (ANC). The ANC was launched in 2002 and successively extended or renewed until 2008. The fragility of the model was exposed by the 2008 financial and economic crisis (Molina, 2014). After the failure of the 2009 negotiations, a new round of interconfederal agreements began in 2010, which revitalised the arrangements between social partners in the face of growing conflict. The so-called Employment and Collective Bargaining Agreements (*Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva* (known as AENCs)), which lasted for three years, established a significant moderation of nominal wage growth, as none of the four AENCs signed (covering all years except 2018) set out nominal wage growth above 2-3 % (see Annex).

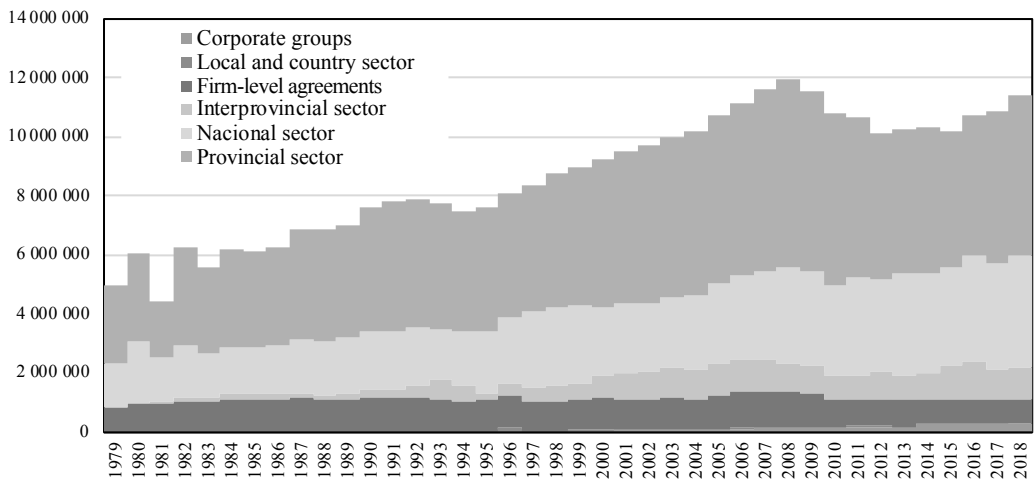
This phase was marked by a significant decentralisation of collective bargaining to adapt to individual company conditions.

The labour reforms changed the bargaining focus and collective agreements became merely intended for the purpose of operational performance, through the introduction of four key measures. These were: making it easier for companies not to implement collective agreements on a temporary basis; prioritising the application of firm-level collective agreements; making it possible to renegotiate the agreements before the end of their term; and setting limits to the application of the current bargaining agreement until a new one is approved. This is why, as García and Rigby (2016, 2019) have noted, structural power resources in the labour

market have been weakened. Institutional resources are therefore required to offset their effect.

Figure 5 shows both the reduction in the number of people covered by collective agreements and the profound change in the structure of collective bargaining resulting from the introduction of this reform, with a significant drop in the number of provincial sectoral agreements. Thus, despite the *erga omnes* clause guaranteeing the automatic extension of agreements, flexibility measures seem to have reduced the scope of collective bargaining.

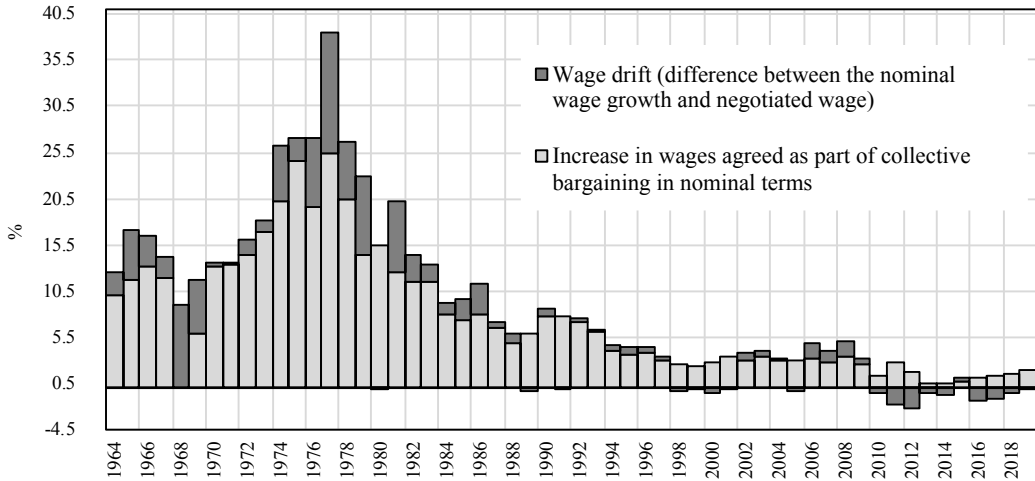
FIGURE 5. *Collective bargaining structure (1978-2019)*



Source: See Annex.

The changes in the institutional framework of the industrial relations system caused a sharp wage devaluation (López-Andreu, 2017; Muñoz and Pinto, 2018), both in terms of the reduction in nominal wages agreed and observed, and even of the decline in real wages. It can only be concluded that the position of

earned income in income distribution experienced a sharp decrease, as the real unit wage grew slower than labour productivity (Cárdenas and Herrero, 2021). Figure 6 also shows that the wage drift turned negative in 2009-2013, whereas it had traditionally been positive in all previous years.

FIGURE 6. Wage drift (1964-2019)

Source: See Annex.

Throughout the period 2010-2019, successive changes had led to a weakening of collective bargaining mechanisms. The centralised and interconfederal agreements entered into between trade unions and employers' organisations did not hinder an increasing number of companies (aware of lax laws and regulations) from applying discretionary criteria on wages and working conditions (Río and Fenger, 2019). This was an institutional change. As a result, the regulatory capacity of collective bargaining had less impact on labour market developments.

CONCLUSIONS

This paper has analysed the historical evolution of institutional change in the Spanish labour market over the last six decades, focusing on two major aspects: labour market regulation and collective bargaining. The conclusion is there has been a pattern of institutional change divided into four stages, as shown in Table 1.

The first period (*desarrollismo*), from the 1960s to 1975, saw a labour market that was

TABLE 1. The historical evolution of institutional change in the Spanish labour market

Period	Employment regulation	Industrial relations	Type of change
<i>Desarrollismo</i> during Franco's dictatorship (1960s-1975)	Repressive apparatus and employer discretion	Spanish Trade Union Organisation (OSE), horizontal, Communist-based trade unions regarded as illegal, resurgence of labour movement	
Transition to democracy (1976-1983)	Labour market regulation, Workers' Statute	Foundations of the industrial relations system, Organic Law on Freedom of Association (LOLS), social pacts	Critical juncture
Labour market dualism (1984-1996)	Fragmentation of labour, new types of contracts	System becomes established: sector agreements, <i>erga omnes</i> , representativeness, committee and section	Stratification
Deregulation (up to 2019)	1997-Becomes easier and cheaper to dismiss employees with permanent contracts	2012-decentralisation, negotiations undermined internally	Conversion/Drift

Source: By author.

adverse to workers, where unions were illegal and Franco's repressive apparatus promoted great wage flexibility and employers' discretionary power in workforce management. During this period there was a revitalisation of the labour movement, which fought for both better wages and political rights.

In the second period, which marked the transition to democracy (1976-1983), there was a critical juncture that regulated labour institutions. In the new context of high conflict and free unionisation, political exchange shaped coalitions for and against liberalisation and the government became a central actor in social pacts.

In the third period of dualism in the labour market (1984-1996), new incentivised contracts were implemented (1984) and began to be used on a mass scale. These practices intensified labour market segmentation. Trade unions had a power of veto which led to a process of flexibilisation at the margin by stratification, especially in the second half of the 1980s.

The fourth period was that of deregulation (1997/2012-2019) and entailed significant liberalisation in all dimensions of the labour market, such as employment conditions, dismissals and the decentralisation of collective bargaining. It was therefore a process of gradual deregulation at the core that reached its peak with the reforms of 2002 and 2012 (implemented by PP governments with absolute majorities).

The combination of a policy of flexibility at the margin (dualism) and later, flexibility at the core (deregulation) has led to a segmented labour market in Spain (around 45 % of jobs have an atypical contract) and decreased job security (severance pay has fallen and there has been an increasing proportion of dismissals decided upon by labour courts). Thus, the characteristic type of liberalisation path is deregulation and its consequence is high labour market segmentation.

As a corollary, it can be concluded that liberalisation has reduced the resources of power by undermining the institutional foundations required for effective collective action, thus creating a feedback process in which flexibility at the margin (dualism) ultimately leads to flexibility at the core (deregulation). This increases dependence on institutional power resources and gives the government the initiative for social pacts. A future avenue of research could involve furthering the analysis of the causal mechanisms that have resulted in these successive paths in the historical evolution of institutional change in the labour market.

BIBLIOGRAPHY

- Cárdenas, Luis and Herrero, Daniel (2021). "Distribución funcional de la renta y capacidad negociadora de los trabajadores en España". *Papers. Revista de Sociología*, 1(1): 1-26.
- Cárdenas, Luis and Villanueva, Paloma (2021). "Flexibilization at the Core to Reduce Labour Market Dualism: Evidence from the Spanish Case". *British Journal of Industrial Relations*, 59(1): 214-235.
- Cárdenas, Luis and Arribas, Javier (2022). "Flexibilización, desregulación y dualización: las trayectorias de liberalización en el cambio institucional del mercado de trabajo". *Revista Española de Sociología*, 31(2): a102.
- Doménech, Xavier (2002). "El problema de la conflictividad bajo el franquismo saliendo del paradigma". *Historia Social*, 42: 123-144.
- García, Miguel Á. and Rigby, Mike (2016). "Recursos de poder de los sindicatos en España. Su examen a través de la negociación colectiva". *Sociología del Trabajo*, 87: 7-24.
- García, Miguel Á. and Rigby, Mike (2019). "Las trayectorias de las instituciones laborales españolas ante las recientes presiones económicas: ¿Cómo quedan los recursos para los sindicatos?". *Revista Española de Sociología*, 28(2): 381-399.
- Köhler, Holm-Detlev (2018). "Industrial Relations in Spain-Strong Conflicts, Weak Actors and Fragmented Institutions". *Employee Relations*, 40(4): 725-743.
- Lasierra, José M. (2007). "Labour Flexibility and Job Market Segmentation in Spain: a Perspec-

- tive from The Labour Demand Side". *The International Journal of Human Resource Management*, 18(10): 1858-1880.
- López-Andreu, Martí (2017). "All Precarious? Institutional Change and Turning Points in Labor Market Trajectories in Spain". *Employee Relations*, 39(3): 408-422.
- Malo, Miguel Ángel (2005). "La evolución institucional del despido en España: una interpretación en términos de un accidente histórico". *Revista de Historia Económica*, 23(1): 83-115.
- Martín, Antonio and Alos, Ramón (2003). "Between Decentralisation and Centralisation of collective bargaining". *The Spanish Case. Industrielle Beziehungen*, 10(1): 64-96.
- Molina, Óscar (2014). "Beyond De-centralization: The Erosion of Collective Bargaining in Spain during the Great Recession". *Stato e Mercato*, 34(3): 397-422.
- Molinero, Carme and Ysàs, Pere (1998). *Productores disciplinados y minorías subversivas: clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*. Madrid: Siglo XXI.
- Muñoz de Bustillo, Rafael and Pinto, Fernando (2018). "Against the Wind: Industrial Relations in Spain during the Great Recession and Its Aftermath". *Economía y Lavoro*, 52(1): 87-104.
- Picot, Georg and Tassinari, Arianna (2017). "All of One Kind? Labor Market Reforms under Austerity in Italy and Spain". *Socio-Economic Review*, 15(2): 461-482.
- Recio, Albert and Roca, Jordi (1998). "The Spanish Socialists in Power: Thirteen Years of Economic Policy". *Oxford Review of Economic Policy*, 14(1): 139-158.
- Río, Pablo del and Fenger, Menno (2019). "Spanish Trade Unions against Labour Market Reforms: Strategic Choices and Outcomes". *Transfer: European Review of Labour and Research*, 25(4): 421-435.
- Ruiz, David (coord.) (1993). *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*. Madrid: Siglo XXI.
- Sánchez-Mosquera, Marcial (2021). "Por la 'flexibilidad de plantillas'. La influencia de la patronal en el diseño del sistema de relaciones laborales español, 1979-1986". *Revista de Historia Industrial*, 30(82): 133-161.
- Sola, Jorge (2014). "El legado histórico franquista y el mercado de trabajo en España". *RES. Revista Española de Sociología*, 21: 99-128.
- Soto, Álvaro (2006). "No todo fue igual: cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de vida de los españoles, 1958-1975". *Pasado y Memoria*, 5: 15-43.
- Tébar, Javier (2020). "El sindicato en España del fordismo al capitalismo globalizado (1939-1999)". *Sociología del Trabajo*, 97: 1-12.

RECEPTION: December 15, 2021

REVIEW: April 20, 2022

ACCEPTANCE: October 26, 2022

ANNEX 1

LABOUR MARKET REGULATION AND COLLECTIVE BARGAINING

This annex presents the data sources and methodology for a series of indicators reflecting the historical evolution of the labour market in Spain in the two main areas involved: labour market regulation and collective bargaining. Six indicators are proposed to identify both aspects:

1. Severance payments awarded by a court of competent jurisdiction (1954-2019).
2. Types of dismissal (1980-2019).
3. Employment structure based on contract types (1990-2019).
4. Collective bargaining structure (1978-2019).
5. Agreed wage increases in nominal and real terms (1964-2019).
6. Wage drift (1964-2019).

The main limitation of this methodology is that the length of the various series used differs due to the unavailability of sufficient data for all cases. In terms of labour market regulation, there are no pre-1980 series available for the types of dismissal or administrative data on contractual employment relationships; using the EAP (Economically Active Population) survey data would allow for a three-year extension of the sample, but at the cost of losing other valuable information (see section 3 below for more details). With regard to collective bargaining, there are serious doubts about the data on the structure of collective agreements in the period prior to 1978; consequently, it is not possible to provide a homogeneous series before that year. It was therefore decided to present the graph from that year onwards.

Another option could have been to remove the previous data in those series for which data are available. It was ultimately decided to maintain them, as they can pro-

vide relevant information on the historical evolution of the indicator. This criterion is best suited to the objectives of the article, which are precisely to present a historical overview of institutional change using the broadest possible quantitative indicators.

Labour market regulation

Severance payments awarded by a court of competent jurisdiction (1954-2019)

Severance payments were calculated by linking the series from 1954 to 2019 for the amounts (in nominal terms) awarded in cases heard by the Labour Courts from 1954 to 2019. The data came from the different statistical yearbooks of the INE, specifically, the Administration of Justice section on labour matters.

To express severance payments as a percentage of the nominal average salary for each year, the data prior to 1998 was converted into euros and the whole series was divided by the average salary (total wages over the number of wage earners) provided by the Spanish Macroeconomic Data Base 1954-2019 (BDMacro). This data base is prepared by the Sub-directorate General for Economic Analysis and Programming of the Directorate General for the Budget, which is part of the Spanish Ministry of Finance. As a macroeconomic database, employees' wages are pre-tax and include all social security contributions.

It should be borne in mind that each institutional stage is associated with different severance payments, but also that the number and type of dismissals are different (jobs affected, length of service in the company, salaries and contributions to the social security system, etc.). It is therefore useful to briefly mention the main types found in each historical stage.

According to the 1944 Employment Contract Law [Ley de Contrato de Trabajo de

1944], the types of employment contracts available during Franco's so-called *desarrollismo*, were: 1) open-ended; 2) fixed-term (temporary or temporary fixed-term contract); and for work or service (temporary contract for a fixed or an open-ended period of time, depending on the nature of the work or service). There was also an apprenticeship contract which was regulated separately.

The termination of the contract could be due either to the end of the fixed term, or of the work or service, or to dismissal, which could be of several types (which would be integrated over the following periods):

1. If the dismissal was for disciplinary reasons, attributable to the employee or based on (a wide range of) political reasons, there was no right to severance pay.
2. If the dismissal was deemed to be fair but not the employee's fault, the severance pay would only amount to the wages corresponding to the notice period (determined by labour regulations or custom) or the wages due for the time elapsed until a court found a dismissal null and void or unfair (called *salarios de tramitación*).
3. If the dismissal was without cause (unfair dismissal), the employee could choose between being reinstated in the company (if it had more than 50 workers) under the same conditions or severance pay proportional to their salary as established by the Labour Court, capped at 12 months' salary.
4. If there was a collective redundancy procedure, staff restructuring plans were implemented (from 1972 onwards they were called "procedures for termination, suspension or change of employment relationship or working conditions"). These could terminate or temporarily suspend contracts for reasons not foreseen or attributable to the company

when there were reasons based on a labour or economic crisis in the opinion of the Labour Administration (generally, the Delegation or the Directorate General). The compensation amount was also set by the Labour Court.

In 1956, a process of began whereby termination could be done without cause. An amendment was made which, in practice, allowed companies with more than 50 workers to choose between reinstating a dismissed worker or paying them a higher severance amount. In such a case, a judge could order the company to pay compensation ranging from an amount equal to six months to four years' salary, provided that it was at least equal to the original compensation if the employee was not reinstated.

During the transition to democracy, two laws were passed in Spain that would transform the regulation of the labour market: the 1976 Labour Relations Act, Royal Decree-Law 17/1977 on labour relations and the 1980 Workers' Statute.

The Labour Relations Act was passed on 21 April 1976 and therefore predated the Political Reform Act of 15 December 1976. Major regulatory developments included: 1) prioritising open-ended contracts; 2) awarding *salarios de tramitación* and reinstatement of employees in the event of an unfair dismissal; and 3) in cases where reinstatement was replaced by compensation for unfair dismissal, this would amount to at least 60 days' wages per year worked, capped at 60 months' salary (Article 35).

However, the 1976 Labour Relations Act was short-lived, in in March 1977, Royal Decree-Law 17/1977 on labour relations (hereinafter, Royal Decree-Law 17/1977) added new causes for termination to those listed in the preceding regulations; in addition, Royal Decree-Law 17/1977 simplified dismissal procedures and gave labour courts the opportunity to reduce the minimum severance pay in companies with

less than 25 “permanent” workers. This reduction was included in Royal Decree-Law 17/1977 even though it provided that a dismissal must be “for cause, and therefore, unwarranted dismissal is unacceptable”. As Serrano and Malo-de-Molina (1979: 71) noted, this regulatory change “facilitated arbitrary dismissals, reduced their cost and lowered the level of substantive and formal requirements to carry them out”.

The Workers’ Statute established the key labour regulation aspects. Regarding the costs of dismissal, judicial protection was removed in assessing the amount of compensation for unfair dismissal; instead, the Workers’ Statute establishing a fixed scale of 45 days’ salary per year worked, capped at 42 months’ salary for unfair dismissal. When there was no reinstatement to companies with less than 25 workers, compensation was reduced by 20 per cent. Of the resulting amount, 40 % was paid by the Wage Guarantee Fund (*Fondo de Garantía Salarial*). In addition, two other forms of dismissal were provided for: on the one hand, fair dismissal, with cause (attributable to the employee), in which case no severance pay was awarded; and on the other hand, dismissal considered to be null and void, when the formal requirements were not met, and which involved immediately reinstating the employee and paying any salary accrued. This resulted in the amount of severance pay being reduced and made dismissal easier, establishing a model that enabled dismissal without cause with severance pay being paid.

The 1994 labour reform extended eligibility for apprenticeship contracts by increasing the upper age limit to 25. Under this reform, the training time allocated to theory was reduced (from 25% to 15% of the working day) and its duration was extended from 6 months to 3 years (apprenticeship) and 2 years (traineeship), respectively. Salaries could be reduced below the National Minimum Wage.

The 1997 labour reform directly affected open-ended contracts, as it introduced a new type of contract “for the promotion of open-ended contracts” aimed at people aged 18 to 29, 45+, long-term unemployed and people with disabilities, and for temporary contracts turned into open-ended contracts. The severance pay for this contract in the event of an unfair dismissal was 33 days’ monthly salary as opposed to 45 days’ monthly salary per year worked, capped at 24 months’ salary. Although it was initially agreed with the social partners in exchange for having these contracts limited to 4 years, in the 2001 reform (when the incumbent party had an absolute majority) this limitation was removed. As a result, a significant number of workers would be exposed to these contracts with lower severance pay, thus segmenting the open-ended contract.

The 2002 labour reform established that the employer was no longer obliged to pay the *salarios de tramitación* if the dismissal was found unfair within 48 hours and the corresponding severance amount was paid (“express dismissal”); this allowed employers to dismiss employees unfairly at lower (monetary and procedural) costs than before. This modification brought about a drastic change in the structure of dismissals.

The 2010 and 2012 reforms substantially changed severance payments as follows:

1. Greater freedom for employers to terminate contracts on objective grounds (both individual and collective). The 2012 reform extended the scope of economic difficulties to include any situation in the company’s financial statements which could result in negative financial outcomes: current or expected losses, and a decrease in the level of sales or income for three consecutive quarters. Furthermore, administrative procedures for dismissal were made easier, as it was no longer necessary for the employer

- to justify the company's situation or for there to be no other adjustment option apart from dismissal; and the authorisation of the Labour Authorities that was required in the EREs (staff restructuring plans) was no longer necessary (Art. 18, RDL 3/2012).
2. Reduction in the cost of unfair dismissal: contracts entered into after February 2012 now had a severance payment of 33 days' salary per year worked, capped at 24 months' salary (previously it was 45 days, capped at 42 months' salary).
 3. The severance pay for terminating temporary contracts was increased. Between 2010 and 2015, the number of days per year worked increased from 8 to 12 (Transitional Provision 13, Royal Decree-Law 10/2010).
 4. The Contract for the Promotion of Open-ended Employment [*Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida*] was created, which reduced the cost of dismissal on objective grounds if it was found unfair; severance pay would be 33 days' salary per year worked, capped at 24 monthly payments (Art. 3, Royal Decree-Law 10/2010); and the Open-ended Contract for the Support of Entrepreneurs [*Contrato Indefinido de Apoyo a los Emprendedores*] for companies with fewer than 50 workers. Their specific feature was that the trial period (termination without severance) was one year rather than 6 months.
 5. Employers had the option to suspend contracts and temporarily reduce employees' working hours without obtaining an authorisation from the authorities when there were economic, organisational or production-based reasons (Art. 16, Royal Decree-Law 3/2012).
- tional decision, with the corresponding termination of the employment relationship (dismissals of individual employees with a settlement, collective redundancies and dismissals adjudicated by labour courts). Each of them had a different source:
- Number of workers dismissed in individual conciliation procedures. Statistics on Mediation, Arbitration and Conciliation (*Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación*, MAC) produced by the Ministry of Employment and Social Economy.
 - Number of workers dismissed as a result of the staff redundancy plan (ERE). Employment Regulation Statistics produced by the Ministry of Employment and Social Economy.
 - Number of dismissals in cases heard by labour courts. Labour Court Cases Statistics (AJS) produced by the Ministry of Employment and Social Economy.
 - Total number of terminations that were the outcome of an institutional decision: result obtained by adding the three previous variables.
- The Statistics on Dismissals and their Cost (*Estadística de Despidos y su Coste* (EDC)) of the Ministry of Employment and Social Economy, which date back to 2015, provides information on dismissals in the Registration File of the General Treasury of the Social Security for four types of dismissals: 1) dismissal for disciplinary reasons; dismissal on applicable objective grounds; 2) dismissal on (company-related) objective grounds; 3) dismissal for (employee-related) objective grounds; and 4) collective redundancy based on economic, technical, organisational or production-related causes.
- The data in this statistic are significantly higher than the sum of those collected in each separate source (MAC, ERE and MAC), which points to a high number of institutionally-unrelated terminations. The data in Table A.1 show that more than 40 %

Types of terminations (1980-2019)

There were three main groups of terminations that were the outcome of an institu-

of the terminations occurred outside institutional channels. In fact, if the EDC's collective redundancies are compared with those of the staff restructuring plans, it can be seen that they are also significantly higher. This is probably due to the fact that the same court case might have involved sev-

eral employees (on average, 1.2), thus reflecting collective redundancies that end up being heard by labour courts. All this suggests that the series in Figure 4 should be considered as the smallest number of terminations via institutional channels, the total number being much higher.

TABLE A.1. *Terminations over time using different databases*

Year	Total number of terminations	Total number of terminations via competent institutions	Difference (number)	Difference (%)	Collective redundancy	Staff restructuring plan (termination)	Difference (number)	Difference (%)
	(1)	(2)	(3a) = (1)-(2)	(3b) = (3a)/(1)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(6b) = (6a)/(4)
2015	455,265	236,106	219,159	48.1	32,823	24,572	8,251	25.1
2016	437,572	232,603	204,969	46.8	33,217	24,348	8,869	26.7
2017	421,523	225,812	195,711	46.4	24,854	20,813	4,041	16.3
2018	426,664	239,251	187,413	43.9	25,839	19,957	5,882	22.8
2019	474,936	274,531	200,405	42.2	38,469	30,871	7,598	19.8

Source: See text.

Employment structure based on contract types (1990-2019)

The composition of employment according to the different contractual types was obtained from the Statistics on Companies Registered with the Social Security prepared by the Ministry of Employment and Social Economy (MITES). The percentages were calculated as the ratio between the number of jobs (understood as employment relationships) for each type of contract and type of working day over the total number of jobs.

These series were constructed through a link to the Working Conditions Survey [*Encuesta de Coyuntura Laboral (ECL)*], which asks a sample of companies registered with the Social Security Contribution Accounts File about the conditions of their workforce on a quarterly basis. This made it possible to identify four types of jobs based on their contractual relationships: full-time, part-time, open-ended (including seasonal open-ended) and temporary contracts.

From the first quarter of 2013 onwards, the series changed from a survey of selected companies to the direct statistical use of the data from the Social Security File for Contribution Accounts. Consequently, employment relationships that involve membership of mutual societies, to the Special System for Agricultural Workers with inactive employment status, to the Special System for Household Employees and to those included in the activity "Public Administration and Defence; Compulsory Social Security" are excluded.

Some previous surveys have also asked companies about their recruitment policies and the contractual structure of the jobs they offer. Table A.2 below shows how each of the available surveys evolved during the 1980s.

In particular, the 1987 Survey on the hiring and training policy of Spanish companies (1986 data) provides highly relevant information to help understand the expansion

of temporary employment in the 1980s. In particular, Box 14 shows the main advantage reported by businesses for choosing to recruit employees. In first place was the reduction of social security costs, with 43% of all companies reporting this benefit, a percentage which rose to 52% for companies with 6 to 10 employees. In second place was improving the workforce to match the

pace of production (15 %) and meeting temporary work needs (14 %). However, its distribution was the opposite of the previous cause. These two options linked to the organisational process were the main cause for 24% and 20% of businesses with more than 500 employees; in contrast, they were the main advantage for only 7% and 10% of businesses with 6 to 10 employees.

TABLE A.2. *Evolution of seasonality and part-time work during the 1980s in several surveys*

Source and object of study	Year	Open-ended		Temporary		Atypical employment rate	Temporary employment rate	Part-time employment rate
		Full-time	Part-time	Full time	Part-time			
Internal IELSS document. Companies	1981		93		7.0	—	7.0	—
Effects of temporary employment on the labour market	1981		93.6		6.4	—	6.4	—
Effects of temporary employment on the labour market	1984		93.1		6.9	—	6.9	—
Survey on the duration and organisation of working time in Spanish companies	1984	90.4	1.4	7.5	0.7	9.6	8.2	2.1
Living and Working Conditions in Spain	1985	81.5	8.7	7.5	2.2	18.5	9.7	11.0
Recruitment policy of Spanish companies	1986	80.0	2.0	15.0	3.0	20.0	18.0	5.0
Survey about businesses recruitment and training policy	1987	79.6	2.3	15.9	2.2	20.4	18.1	4.5
Survey about businesses recruitment and training policy	1990	67.7	1.8	28.1	2.4	32.3	30.5	4.2
A response to the measures for job promotion and more flexible employment	1990	63.2	1.5	32.8	2.5	36.8	35.4	4.0

Sources: CIS (1982), [Recruitment policy of Spanish companies. Survey no. 1604]. [Effects of temporary employment on the labour market (I). Survey no. 1422]. [Ministries of Economy and Employment and the Bank of Spain (1984), Survey on the duration and organisation of working time in Spanish companies. Published in *Relaciones Laborales*, 1985(2): 1041-1067]. CIS (1985), [Living and Working Conditions in Spain. Survey no. 1484]. Recruitment policy of Spanish companies. Study no. 1604] CIS (1987), [Ministry of Employment and Social Economy (1987) Survey about businesses recruitment and training policy]. [Sáez, F. (1989), "Business and job creation. A response to the measures for job promotion and more flexible employment", *Papeles de Economía*, 39].

As can be seen in Table A.2, despite the differences between the objectives and contents of each of the specific surveys carried out during the 1980s to ascertain the situation of temporary employment in Spain, the conclusion is clear: atypical employment, especially temporary employment, multiplied from a rate of 6.5-7 % to over 30 %.

While there are notable differences in the way the data were obtained, this result can also be found in the Central Balance Sheet Data Office of the Bank of Spain [*Central de Balances del Banco de España*]. The main characteristics of this statistic during the 1980s is that it was a survey filled in by companies on a voluntary basis; and it was mainly oriented towards large organisations (both public and private). As a result, in terms of added value, participating companies typically accounted for around 20-25 % of the total. However, in terms of employment coverage, 70% of employment used to be in firms with more than 500 employees.

The statistics encompassed the entire non-financial business economy and therefore excluded all other institutions and busi-

nesses in the financial and insurance sector. In this respect, the coverage of the Central Balance Sheet Office was centred on industrial employment (approximately 30-40 % of employment was covered), while it was much lower in services (in the hotel and catering sector it never included more than 8 % of existing employment).

From an employment point of view, therefore, these were mainly large industrial businesses where the concept of 'non-regular' workers implied only those with a temporary contract weighted by the average time per person spent in employment. In conclusion, although this is the most systematic statistic, it has several limitations when it comes to calculating the temporary employment rate in terms comparable to the surveys presented above; the most relevant aspect is therefore the evolution it shows, rather than its level.

Table A.3 shows that the increase in temporary employment was highly significant from 1984, with growth rates of over 20 % for several years (both in private organisations and in organisations as a whole).

TABLE A.3. Evolution of seasonality during the 1980s in the Central Balance Sheet Data Office

Year	Total organisations (including public ones)					Private organisations				
	Structure		Growth rates			Structure		Growth rates		
	Open-ended contracts	Temporary contracts	Total	Open-ended contracts	Temporary contracts	Open-ended contracts	Temporary contracts	Total	Open-ended contracts	Temporary contracts
1981	94.4	5.6				92.9	7.1			
1982	93.8	6.2	-1.4	-2.0	9.2	92.2	7.8	-1.4	-2.1	7.3
1983	94.0	6.0	-0.7	-1.0	3.5	92.8	7.2	-1.3	-1.5	2.2
1984	94.2	5.8	-1.8	-2.3	7.9	92.9	7.1	-1.4	-2.0	6.7
1985	93.4	6.6	-1.2	-2.0	11.5	92.2	7.8	-1.0	-1.7	8.5
1986	92.0	8.0	0.8	-0.6	21.5	90.5	9.5	1.3	-0.6	24.6
1987	90.3	9.7	0.9	-0.7	18.2	88.5	11.5	2.4	0.4	20.0
1988	88.7	11.3	1.8	0.1	18.1	86.3	13.7	3.2	0.9	19.7
1989	86.5	13.5	3.2	0.5	24.4	83.9	16.2	4.4	1.3	23.7
1990	86.4	13.6	1.0	0.2	6.8	93.5	16.5	1.5	0.6	6.4

Source: Banco de España (several years), Central de Balances y Banco de España (1991), Central de Balances. Results: 1981-1988, provisional 1989 and advance 1990.

Having ruled out the possibility of constructing homogeneous series of atypical employment during the 1980s, it is necessary to justify the methodological decision to include the MITES series in this study. This decision was based on the following limitations of the Labour Force Survey (known as EPA) from a long-term perspective:

1. There is no homogeneous long series to identify atypical employment, understood as all jobs other than full-time open-ended contracts. Atypical employment is that which encompasses temporary, part-time (in any form) and other non-standard forms of employment (such as training and internship contracts); this includes all persons with open-ended part-time, temporary full-time and temporary part-time contracts. The current series starts in the early 2000s (first quarter of 2002), leaving much of the historical development unobserved.

Furthermore, there is a linked version of the main EPA series which avoids the overlap between part-time and temporary series prior to 2002. These data cover the period from the second quarter of 1987 to the last quarter of 2013. No earlier rates of temporary or part-time employment can be obtained (even though the EPA goes back as far as 1964) because the exact type of contract was not identified until the questionnaire was modified in 1987. These linked series are based on an outdated methodology (the methodological criteria of the EPA -2002) and a different population census (that of 2001, which updated that of the 1991 census). Unfortunately, these series were no longer renewed, so no homogeneous series of atypical employment is available up to the present day in official data. Therefore, the only solution is to link the old series to the new version using a statistical procedure, such as the one in this annex.

Another possibility is to use only the current series that started in 2002. However, this solution does not fit the object of study in this paper, since the aim is precisely to verify the historical evolution of atypical employment, which requires a longer-term overview.

2. The second difficulty is that there have been substantial changes in the definitions used in the EPA. This means that the interpolation of series using linking techniques does not provide consistent results for each of the categories. In particular, there has been a drastic change in the part-time employment series between the last quarter of 2004 and the first quarter of 2005 due to the application of the EPA-2005 methodology (the one prior to the current EPA-2021).

A comparison of the two quarters shows that in the first quarter there were 1 600 000 persons in part-time employment and in the following quarter there were 2 427 000, an increase of 827 500 people (a growth rate of 51.7%) in a single quarter. When analysing the situation by gender: part-time employment among men increased from 328 000 to 548 000 (an increase of 220 600 men, which accounts for 67.3 %), while part-time employment among women increased from 1 272 000 to 1 879 000 (an increase of 606 700 women, which accounts for 47.7 %). This involves that part-time employment rates increased quarter-on-quarter from 8.65 % to 12.96 % (an additional 4.3 percentage points), which was distributed by gender as follows: part-time employment rates among men rose from 2.94 % to 4.87 % (1.93%) and part-time employment rates among women increased from 17.34 % to 25.14 % (7.8%).

When comparing salaried employment, it can be seen that the number of full-time employees decreased by -582 200 people, while the number of part-time employ-

ees increased by 827 500 people. There was a change in the composition of salaried employment, with the number of full-time employees decreasing by -561 800 (and the number of part-time employees increasing by the same amount). Thus, the number of full-time permanent employees decreased by -139 000 while the number of part-time employees increased by 298 300, and the number of temporary employees decreased by -422 800 while the number of part-time employees increased by 263 300. For all these reasons, it is not feasible to construct a historical series fully comparable to that of the MITES, as there was a fundamental change of criteria in the definition of part-time employment.

3. The extended series of the EPA that allowed a breakdown by type of contract (open-ended and temporary) and type of working hours (full-time or part-time) did not provide other additional variables (sex, age, nationality, etc.). Therefore, there was no significant advantage in EPA data over Social Security data when identifying the four types of contracts necessary to be able to analyse atypical employment (open-ended full-time, open-ended part-time, temporary full-time, temporary part-time).
4. While the EPA is a survey that takes a given week as a reference for the person interviewed, the Social Security data measured the registration records for the period (in this case, the last day of the reference month). Although there are a number of control questions, the EPA mainly analyses the situation as perceived by the interviewee, while the official records show the actual status of these persons regarding the Social Security system.

This makes it possible to correct for the fact that a non-negligible percentage of EPA respondents either did not know their type of contract or did not know

how to identify it within the types offered by the interview questionnaire. Calculating the percentage of persons with a temporary contract who were in these two modes (“verbal, not included in the above options” and “don't know”) indicates that during the period 2002(Q1)-2021(Q1) the average was 16.9 %.

5. If, despite all the above limitations, one wishes to use the EPA, as noted in Figure A.1 of this annex, the longest period that can be measured for atypical employment is from the second quarter of 1987 (since the type of contracts cannot be discerned using the questionnaire prior to that year). This series yielded a sample size of 131 observations up to the fourth quarter of 2019. Meanwhile, the Social Security data started in the second quarter of 1990 and had a sample size of 119 observations; thus there was a difference of 12 quarters (3 years) between the two series. Considering the above-mentioned data from previous surveys on companies' recruitment policy, it is possible to cover a longer period (albeit with discontinuities). Therefore, the loss of information resulting from using the EPA versus the MITES data is marginal.

Moreover, it should be considered that these three years were the first ones in which the EPA asked about the type of contract and there was an adaptation period. In this sense, a comparison of the 1985 EPA with the Survey of Living and Working Conditions (known as ECVT) of the same year shows very different results. As pointed out by Muro *et al.* (1991¹, Table 7, p. 130), the number of workers without regular em-

1 Juan Muro, José Luis Raymond, Luis Toharia and Ezequiel Uriel (1991). “La encuesta de población activa y la encuesta de condiciones de vida y trabajo”. In: L. Toharia and S. Bentolila (eds.). *Estudios de economía del trabajo en España, Vol. 3: El problema del paro* (pp. 111-142). Madrid: Ministerio de Trabajo y Economía Social (1987).

ployment who had worked occasionally in the reference week or in recent months or seasonally in the EPA (Q4) was 174 000 people and in ECVT it was 516 000 people.

Finally, the main advantage for this research in using the MITES data is that it addresses the employer's point of view, which provides information on the typology of the jobs they are offering and, consequently, reflects the employer's workforce management strategies to a greater extent. In this way, there may be a person who has different jobs with atypical employment simultaneously and who would therefore only appear as one in the EPA (the main job identified by the person interviewed), and would appear twice in the Companies' Statistics (as they are in fact two different jobs with two different employment relationships). Comparing the first available data in both databases, while the EPA shows a temporary employment rate of 30.6 % in the second quarter of 1990, in the MITES data 36.9 % of the jobs were on a temporary contract basis in the same quarter.

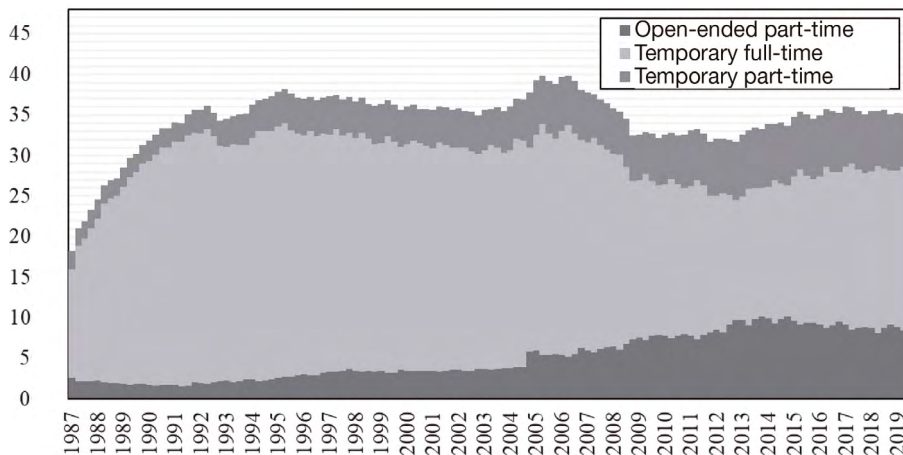
In order to compare the MITES data with the EPA data, the series from the *Boletín Estadístico del Banco de España* (December

2013 version) was used. These data ran from the second quarter of 1987 to the last quarter of 2013. To extend the series, the current version of the EPA (2021 methodology) was extrapolated backwards to cover the period from the first quarter of 2002 to the last quarter of 2019; in this study the period from the first quarter of 2020 was omitted due to the COVID-19 pandemic. Accordingly, the ratio of the data for the first quarter of 2002 in the two versions for the four series analysed was used as the link variable:

- Salaried employees with open-ended full-time contracts.
- Salaried employees with open-ended part-time contracts.
- Salaried employees with full-time temporary contracts (including persons with unclassifiable contracts).
- Salaried employees with part-time temporary contracts (including persons with unclassifiable contracts).

Figure A.1 below shows the evolution of atypical employment in the EPA and represents the point of view of working people. A comparison with Figure 3 of the article shows a similar dynamic, albeit with some important differences.

FIGURE A.1. *Employment structure based on contract types in the EPA(1987-2019) (%)*



Source: See text.

TABLE A.4. *Evolution of atypical employment in different databases*

Source	Variable	1990Q2	2002Q1	2005Q1	2013Q1	2019Q4	Var. 2019-1990
MITES	Number of jobs with atypical contracts (thousands)	2,462.7	4,560.2	5,095.0	4,492.3	6,430.8	3,968.1
	Atypical job rate (%)	38.3	42.1	42.5	39.7	45.3	6.9
	Part-time employment rate on an open-ended contract basis	1.4	6.9	8.2	15.1	14.6	13.2
	Full-time employment rate on a temporary contract basis	34.3	28.1	26.8	15.0	20.1	-14.2
	Part-time employment rate on a temporary contract basis	2.6	7.1	7.5	9.5	10.6	7.9
EPA	Number of people with atypical contracts (thousands)	2,989.5	4,742.3	5,749.8	4,433.7	5,877.7	2,888.2
	Atypical job rate (%)	31.3	35.6	37.8	31.7	34.9	3.6
	Part-time employment rate on an open-ended contract basis	1.9	3.6	5.9	9.8	8.8	6.9
	Full-time employment rate on a temporary contract basis	27.1	27.3	25.1	14.7	19.0	-8.1
	Part-time employment rate on a temporary contract basis	2.3	4.7	6.8	7.2	7.1	4.8
Difference	Number of people with atypical contracts (thousands)	-526.8	-182.1	-654.8	58.6	553.1	1,079.9
	Atypical job rate (%)	7.1	6.5	4.7	8.0	10.4	3.3
	Part-time employment rate on an open-ended contract basis	-0.5	3.3	2.3	5.3	5.8	6.3
	Full-time employment rate on a temporary contract basis	7.2	0.8	1.7	0.3	1.1	-6.1
	Part-time employment rate on a temporary contract basis	0.4	2.4	0.7	2.3	3.5	3.1

Source: See text.

The following conclusions were obtained by comparing both databases (see Table A.2) for the initial quarters available in each case (1990Q2 in the case of MITES, and 2002Q1 and 2005Q1 in the case of the EPA) with the final values (2013Q1 and 2019Q4):

- The volume of people in atypical employment was originally higher in the EPA, but the number of jobs with an atypical contract increased more in the MITES source, so by the end of the series it had a greater presence.
- Atypical employment rates were persistently higher in the MITES source than in

the EPA data. This result was obtained irrespective of the quarter under consideration. This suggests that the same person had several jobs with atypical (probably part-time) contracts.

- The full-time temporary employment rate was always higher in the MITES series than in the EPA series, but the gap narrowed significantly with the entry into force of the new EPA questionnaires (being about 1 percentage point).
- The part-time employment rate was originally higher in the EPA, due to the fact that it was higher in open-ended contracts. However, this situation was reversed and

would be higher in the MITES data since then. This is possibly due to the fact that in the early years MITES data were obtained from businesses with six and more employees.

- In terms of variation, from the first available quarter to the last one, atypical employment had increased in both cases, both in absolute terms and in relative terms of rates with respect to salaried employment. Consequently, the same conclusion was drawn irrespective of the database used and irrespective of whether the definition was based on persons (EPA) or jobs (MITES).
- In the EPA, the increase was less pronounced, although equally significant, mainly because the variations in full-time temporary and part-time employment on an open-ended contract basis were less severe. Although the change in methodology in 2005 can be clearly seen, as the atypical employment rate increased by 1.8 percent more between 2002 and 2005 than in the MITES data for that period.

Collective bargaining

Collective bargaining structure (1978-2019)

Statistical information on collective bargaining presented a number of difficulties in producing a homogeneous series from 1958. This information was not systematically collected until it was managed by the so-called Central Office of Collective Bargaining Agreements of the Spanish Trade Union Organisation [Oficina Central de Convenios Colectivos de la Organización Sindical Española] between 1966 and 1975. This Office published a quarterly bulletin (*Convenios Colectivos Sindicales. Información interna para los órganos sindicales destinatarios*). However, data prior to 1968 can be found in a number of compilation books, notably including *Estadística de convenios colectivos de trabajo: 1958-1967*

(1968)² and *Convenios colectivos sindicales de rama: estudio económico-jurídico de los interprovinciales vigentes* (1970). These books do not provide detailed information; for example, only the aggregate 1958-1967 (rather than the annual breakdown) is available for the operational provisions of the bargaining agreement.

Similarly, the bulletin combined two different pieces of information. First, it provided the annual series of the number of bargaining agreements, companies and workers affected by agreement year by year. However, the breakdown by area is by agreements and binding rules in force on 31 December of each year. The latter figure was significantly higher than the former because it included a larger number of “revisions”, which contained all types of extensions to agreements (in particular, binding rules or awards). In addition, information was also provided on agreements approved by the Government's Commission for Economic Affairs; again, this criterion was different from the previous two, as the Commission did not approve the agreements immediately, thus providing different values for all the criteria considered.

After the disappearance of the OSE, responsibility for managing this information fell to the Ministry of Employment from 1976 onwards, in particular, to the Directorate General of Employment, which took over the production of another periodical bulletin in which a clear distinction was then made between registration values and those with economic effects. However, information for several years, in particular, 1976 and 1977, was rather limited, as the Ministry's archives started in 1979 and earlier data were presented as summaries. Finally, the Collective Bargaining Agreement Statistics since 1981, which makes it possible to identify

² OSE (1968). *Estadísticas de convenios colectivos de trabajo: 1958-1967*. Madrid: Organización Sindical. Oficina Central de Convenios Colectivos.

the agreements in force and the workers affected according to consistent criteria and based on the same definitions. This is why it was decided to use this statistic from 1981 to the present day in this series, but also including the data available since 1978, although the latter should be taken with greater caution. Extending the series even to earlier years is even more complex because of the limitations outlined above.

Finally, the aggregate number of workers covered is provided, instead of the coverage rate. This is due to the difficulties in constructing a homogeneous series of private sector salaried employees (public employees are excluded from these statistics), either on the basis of Social Security registration data (the general scheme includes persons excluded from collective bargaining), or on the basis of the Labour Force Survey, where the linking of specific series is not advisable due to methodological changes. A detailed analysis of the methodological problems involved in calculating the coverage rate can be found in Pérez-Infante (2017)³.

Agreed salary increase in nominal and real terms (1964-2019)

- The salary increase agreed in collective bargaining in nominal terms, expressed as a growth rate (%), is the result of weighting the average salary increase of each bargaining agreement by the number of workers covered by each agreement. For the period 1964-1980 the source was the compilation of OSE and DGT statistics in Tables 9 and 18 by Lorente, J. M. (1982). *Un análisis estructural de los convenios colectivos: 1980-1981*. Madrid: Ministerio de Economía y Comercio, Dirección General de Política Económica y Previsión. For the period 1981-2019, the source was

the Collective Bargaining Agreements Statistics produced annually by the Ministry of Employment and Social Economy.

- Inflation was measured as the average annual growth rate of the consumer price index (known as IPC) compiled by the National Statistics Institute and linked from 1964 to 2019. The use of the year-on-year growth rate for the month of December of each year yielded similar results and was therefore omitted from this presentation.
- The agreed salary increase in real terms is the difference between the growth of the agreed salary increase in nominal terms and the inflation rate.

Wage drift (1964-2019)

Wage drift was calculated as the difference between the salary agreed in collective bargaining in nominal terms and the salary increase. The first variable comes from the same source as in the previous point. The actual variation in nominal salary was calculated as the link between the “total payments per person in all sectors” series from the Salary Survey compiled by the Spanish National Statistics Institute (INE) for the period 1964-2000 and the “total labour cost per worker per month” series from the Quarterly Labour Cost Survey compiled by the INE from 2000 onwards.

ANNEX 2 SOCIAL DIALOGUE BETWEEN 1978 AND 2019

Table A.5 shows all agreements resulting from the national-level social dialogue on salaries for the purpose of comparison with the agreed salary variation for each year of these agreements. Therefore, the basic methodological criterion used was to include only those agreements resulting from social dialogue that included guidelines on salary variation agreed in collective bargaining or simi-

³ Pérez-Infante, José I. (2017). “La estadística de convenios colectivos y la medición de la cobertura de la negociación colectiva”. *Temas laborales*, 136: 159-188.

lar agreements. This necessarily excluded all agreements among social partners on employment (minimum wages, conciliation and mediation, health and safety, self-employment, etc.), as well as agreements on social protection (contributory and non-contributory social security benefits, unemployment benefits, care for dependent persons, etc.).

Furthermore, this decision also excluded all social dialogue agreements that were not national in scope, such as regional social pacts. The content of these pacts differed depending on the region; however, given that the focus of this study is on the economy as a whole, it has been decided to exclude all sub-national pacts.

TABLE A.5. *Social concertation between 1978 and 2019*

Applicable year	Signatories	Agreement	Salary range (%)	Agreed increases (%)
1978	PARTIES	Pactos de la Moncloa	20-22	20.6
1979	CEOE-UGT	Acuerdo Básico Interconfederal (ABI)	11-14	14.1
1980	CEOE-UGT	Acuerdo Marco Interconfederal (AMI)	13-16	15.3
1981	CEOE-UGT	Acuerdo Marco Interconfederal (AMI)	11-15	12.6
1982	TRIPARTISM	Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)	9-11	11.5
1983	CEOE-UGT	Acuerdo Interconfederal (AI)	9.5-12.5	11.5
1984	Government	Recomendación gubernamental	6.5	8.0
1985	GOB-CEOE-UGT	Acuerdo Económico y Social (AES)	5.5-7.5	7.3
1986	GOB-CEOE-UGT	Acuerdo Económico y Social (AES)	7.2-8.6	8.0
1987	Government	Government recommendation	5	6.6
1997	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Not specified	3.1
2002	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflation	2.9
2003	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflation	3.4
2004	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	Inflation	2.9
2005	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	2.9
2006	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	3.1
2007	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	2.9
2008	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	Acuerdo para la Negociación Colectiva	2	3.5
2009	No agreement	No agreement	—	2.6
2010	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	1.4
2011	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1-2	2.7
2012	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1.5-2.5	1.7
2013	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	0.6	0.6
2014	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	0.6
2015	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1	0.7
2016	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	1.5	1.1
2017	No agreement	No agreement	—	1.3
2018	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	2-3	1.6
2019	CEOE-CEPYME/CC.OO./UGT	IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva	2-3	2.0

Source: By the author.

Sociología histórica y secularización: actualidad y renovación del estudio del pasado para el análisis de las transformaciones sociorreligiosas contemporáneas

Historical Sociology and Secularisation: Relevance and Renewal of the Study of the Past in the Analysis of Contemporary Socio-Religious Transformations

Rafael Ruiz Andrés

Palabras clave

Historia de las religiones

- Modernidad
- Secularización
- Sociología de las religiones
- Sociología histórica

Key words

History of Religions

- Modernity
- Secularisation
- Sociology of Religions
- Historical Sociology

Resumen

A inicios del siglo XXI, se evidencia el retorno de una renovada sociología histórica en el debate sobre la secularización a través de aportaciones como las de Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova o Hans Joas, entre otros autores. El objetivo del presente texto se centra en el análisis de la recuperación de la sociología histórica, tanto a través del potencial diálogo que plantea con los clásicos de la sociología de la religión, particularmente con Max Weber, como de sus aportaciones para la investigación sobre el proceso de secularización. Para ello, y tras presentar un estado de la cuestión sobre secularización y sociología histórica, abordaremos los precedentes de este retorno de la perspectiva sociohistórica y los desarrollos metodológicos y conceptuales que proporciona esta aproximación al debate sobre la secularización.

Abstract

Since the beginning of the 21st century, we have witnessed the return and the renewal of historical sociology in the debate on secularisation through the contributions of Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova and Hans Joas, among others. The aim of the present text is to analyse the recovery of historical sociology, both through the potential dialogue that it poses with the classics of the sociology of religion, particularly with Max Weber, and through its contributions to the research on the process of secularisation. To this end, and after presenting a state of the art on secularisation and historical sociology, we will address both the precedents of this return of the socio-historical perspective and the methodological and conceptual developments that this approach provides to the debate on secularisation.

Cómo citar

Ruiz Andrés, Rafael (2023). «Sociología histórica y secularización: actualidad y renovación del estudio del pasado para el análisis de las transformaciones sociorreligiosas contemporáneas». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 133-144. (doi: 10.5477/cis/reis.183.133)

La versión en inglés de esta nota de investigación puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Rafael Ruiz Andrés: Universidad Complutense de Madrid | rafaru01@ucm.es

INTRODUCCIÓN

SOCIOLOGÍA HISTÓRICA Y SECULARIZACIÓN

Los dilemas en torno a la secularización o, más ampliamente, en torno a las transformaciones sociorreligiosas desarrolladas en paralelo a la modernización, constituyen uno de los debates centrales en sociología de la religión. Presente desde los orígenes de la disciplina en las reflexiones de Weber, Durkheim, Simmel o Troeltsch, la pregunta sobre el qué y cómo de la secularización ha sido tratada a lo largo de la última centuria por parte de las voces más destacadas de la sociología, de manera más tangencial (Talcott Parsons o Bourdieu) o más central (Robert Bellah, Peter Berger o Hans Joas) (en Cipriani, 2011).

En las primeras etapas del pensamiento sociológico (Aron, 2004), esa indagación por el sentido y el rol de la religión en las sociedades en general —y particularmente en las sociedades industrializadas (Durkheim, 1993) o de creciente racionalización (Weber, 2012)— se abordó dotando de un peso destacado a la aproximación sociohistórica. Así, lo encontramos en la comparación weberiana entre contextos, planteada para descubrir por qué unos marcos concretos producen ciertas estructuras sociales, eje que subyace al clásico estudio *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, o en las distintas aproximaciones al núcleo de la experiencia religiosa y su evolución efectuadas desde la convergencia entre sociología, historia y antropología (Durkheim, 1993; Hervieu-Léger y Williame, 2001). Precisamente en estos orígenes de la sociología de la religión, destaca la comprensión histórica y sociológica del estudio de la secularización (Aron, 2004), analizada como un proceso sociohistórico conformado, entre otras explicaciones, a partir del «desencantamiento del mundo» (*Entzauberung der Welt*) (Weber, en Schluchter, 2017) o de las distintas dinámicas que condujeron a la primacía

de las funciones económicas frente a las religiosas, militares o administrativas en la sociedad industrial (Durkheim, 1967).

Esta conexión entre sociología histórica y el estudio de la secularización se reforzó durante la década de los años sesenta del siglo xx, en la que se efectuó una expansión de los estudios sobre el tema: Brian Wilson, Sabino Acquaviva, Thomas Luckmann y, de manera destacada, Peter Berger. En la reflexión *bergeriana*, por ejemplo, se recoge nuevamente la ambición por comprender el fenómeno de la secularización, atendiendo a diferentes contextos y a una cronología dilatada. En la célebre obra de Berger (1969) *El dosel sagrado*, los orígenes de la secularización son rastreados ya en la «historización» de la experiencia religiosa por parte del pueblo de Israel, continuando, así, con la idea de racionalización religiosa presente en la sociología weberiana (Weber, 2012).

Sin embargo, tras la década de los sesenta, se intensificó la crítica a esta perspectiva contextual y cronológicamente amplia sobre la secularización por la correlación necesaria que en parte de ellas se establecía entre «mayor modernización» y «menor religiosidad». A este respecto, cabe subrayar la temprana matización que David Martin (1978) efectuó sobre la dirección unilineal de la historia presente en estos estudios, en parte debida a la oposición necesaria que establecían entre la modernización secular y la tradición religiosa dentro de la más amplia popularidad en esta época, marcada por el influjo del pensamiento parsoniano (Joas, Knöbl y Skinner, 2009), del binomio tradición-modernidad. Olivier Tschannen (1992) culminaría la crítica diferenciando entre el «paradigma de la secularización», que englobaría a los distintos análisis sobre las transformaciones sociorreligiosas en la contemporaneidad, y la «teoría de la secularización», expresión con la que hace referencia particularmente a los estudios que establecen algún tipo de relación necesaria entre modernización y declive de la religiosidad.

De este modo, la perspectiva crítica en el análisis de las dinámicas socioreligiosas contemporáneas que sucedió a las reflexiones de la década de los sesenta del siglo xx se caracterizó por un cuestionamiento de la pretendida validez universal de la teoría de la secularización. En consecuencia, y frente a los estudios que, de una u otra manera, presentaban una vinculación necesaria entre secularización y declive religioso, a finales del siglo xx se expandió la investigación sobre casos particulares, que descubrían metamorfosis y permanencias religiosas en contextos seculares, es decir, las complejidades que la «teoría de la secularización» parecía velar (Osborne y Monferrer, 2005; Cipriani, 2011). No obstante, y a pesar de la necesaria matización que introducían estos análisis en el estudio de la secularización, la aproximación amplia a diferentes contextos y diacronías, la ambición abstracta y la concreción semihistórica weberianas, presentes en el inicio del debate sobre la secularización (Aron, 2004: 468), perdieron peso dentro de un más amplio rechazo a las tesis de la modernidad (Joas, Knöbl y Skinner, 2009), consolidando la denominada por Elias (1987) como retirada de los sociólogos al presente también en sociología de la religión.

Frente a este derrotero de finales del siglo xx, con el inicio del tercer milenio se evidencia un retorno a la aproximación sociohistórica en el debate de la secularización a través de aportaciones como las de Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova o Hans Joas, entre otros. Sin embargo, esta recuperación de la sociología histórica no se ha efectuado en los términos planteados durante la década de los sesenta del siglo xx, sino, más bien, desde las inquietudes de un contexto marcado por la consolidación de postsecularización como paradigma en sociología de las religiones. Lejos de todo planteamiento unidireccional, la postsecularización propugna una reevaluación crítica, una «conciencia reflexiva» —y, por tanto, sociohistórica— de la secularidad a partir de la constatación de

que, tras el proceso de secularización, las sociedades no son religiosas o irreligiosas, sino básicamente plurales (Habermas, 2006, 2008; Beaumont, Eder y Mendieta, 2020: 27; Ruiz-Andrés, 2022a). Entre la actual agenda postsecular de investigación y la sociología histórica se establece un vínculo estrecho, dado que, como señala Bryan S. Turner (2010): «More attention to the historical and comparative study of religion would greatly improve [...] our awareness of the complexity of secularization and postsecularization».

Tras este breve estado de la cuestión de la interrelación entre sociología histórica y secularización, el presente análisis abordará dos cuestiones a fin de explorar la contribución que la aproximación sociohistórica está efectuando y puede seguir realizando al actual debate en sociología de la religión desde las claves del citado paradigma de la postsecularización. En primer lugar, rastreamos los diferentes precedentes que han alumbrado el retorno de una renovada sociología histórica en el estudio de la secularización, que nos permitirán, en segundo lugar, explorar los desarrollos metodológicos y conceptuales de la sociología histórica para la continuación del análisis sobre el proceso de secularización.

HACIA LA RECUPERACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA HISTÓRICA EN EL DEBATE DE LA SECULARIZACIÓN

En paralelo al movimiento pendular entre la «teoría de la secularización» y su crítica, que caracterizó el estado de la cuestión durante la segunda mitad del siglo xx (Zazo, 2018), se ha ido igualmente trazando un horizonte de posibilidad para la expansión del análisis sociohistórico en sociología de la religión durante el inicio del siglo xxi. Esta renovada sociología histórica de la secularización se ha visto favorecida por: a) las contribuciones historiográficas al debate sobre la secularización, b) el desarrollo de

la sociología histórica y c) las aportaciones efectuadas por los estudios que sucedieron (y matizaron) a los análisis sobre la secularización de la década de los sesenta del siglo xx.

a) En primer lugar, tal y como recoge Cipriani (2011) en su célebre *Manual de sociología de la religión*, la creciente incorporación del debate sobre la secularización a la historiografía ha supuesto un enriquecimiento tanto de la disciplina histórica como de la sociológica. En este sentido, destacan, entre otros ejemplos, las perspectivas sociológicas e históricas abiertas en el contexto francés por las aportaciones del historiador Émile Poulat, que abarcan desde sus estudios iniciales sobre la historia del catolicismo en la contemporaneidad hasta sus posteriores investigaciones sobre poscristianismo y laicidad.

Historiadores como H. McLeod (2007) y Callum G. Brown (2009) se han adentrado en las transformaciones socioreligiosas experimentadas en contextos específicos, en ambos casos en la evolución de la secularización en el contexto británico durante la contemporaneidad, a partir de una aproximación sustentada por las fuentes históricas. Paralelamente, análisis como los realizados por estos investigadores han puesto de relieve realidades sociohistóricas igualmente críticas con la descripción homogeneizante y unilineal de la «teoría de la secularización». Así, en el industrializado y modernizado contexto británico, Callum G. Brown (2009) estudia a través del término *discursive Christianity* la fuerte implantación cultural del cristianismo en la sociedad británica hasta la década de los sesenta del siglo xx. Por su parte, y frente a la idea comúnmente aceptada de que Mayo del 68 constituyó una de las rupturas más intensas con la tradición religiosa anterior (Joas, 2014), McLeod analiza las importantes contribuciones efectuadas desde agrupaciones y plataformas religiosas, concretamente cristianas, al ambiente rupturista de los sesenta, un estudio también planteado para el con-

texto francés por el historiador Denis Pelletier (2002). En el caso español, la irrupción de los estudios de historia religiosa contemporánea en torno a la figura de Feliciano Montero o el interés de los sociólogos Díaz-Salazar (2006) y Pérez-Agote (2018) por la aproximación sociohistórica a la secularización han ido trazando un camino hacia las encrucijadas entre historia y sociología (Cueva, Hernando de Larramendi y Planet, 2018), que encuentran en la sociología histórica su punto de convergencia más destacado.

b) En segundo lugar, cabe subrayar el desarrollo y la renovación de la sociología histórica durante la última parte del siglo xx, a pesar de la pérdida de pulso de la perspectiva sociohistórica en el debate sobre la secularización en ese mismo periodo. Aunque las grandes aportaciones y autores adscritos a la sociología histórica (Wallernstein, Tilly, Abrams, entre otros) no han tenido un excesivo interés en la cuestión religiosa, los planteamientos derivados de esta renovación de la sociología histórica también han alcanzado al debate sobre la secularización. Así se observa en el influjo de las reflexiones de Shmuel Eisenstadt en Grace Davie (en Cipriani, 2011), cuyas contribuciones conceptuales —particularmente las ideas de *vicarious religion*, utilizada para hacer referencia al valor «vicario» que poseen las tradiciones religiosas mayoritarias en los distintos países europeos, o *belongs not believers*, término que designa a aquellos individuos que, no siendo particularmente religiosos, continúan vinculándose a una tradición— han marcado el debate sobre secularización durante el inicio del siglo XXI (Davie, 2000).

A este respecto, la reflexión sociológica posparsoniana ha estimulado la evolución de la sociología histórica para tratar de abordar dilemas comunes al conjunto de la disciplina, como la problemática entre agencia y estructura, para la que Archer propone el planteamiento morfogenético. La comprensión posweberiana que sostiene Archer, a través del análisis de las dinámicas socia-

les (tanto de cambio como de estabilidad) desde la continuada interacción entre agencia-estructura y con un peso fundamental de la variable histórica, ha sido, por ejemplo, aplicada para tratar de comprender las diferencias entre dos casos divergentes de interacción entre secularización y modernización: Costa Rica y Uruguay (Armet, 2017).

Este es igualmente el caso del planteamiento de los diferentes niveles de investigación sociohistórica en una sociedad globalizada, que abarcan desde las estructuras del individuo (Bourdieu, 1990; Hobson, Lawson y Rosenberg, 2010: 2) hasta el marco global (Barkey, 2009: 722), y que ha sido traducido al debate sobre la secularización por Karel Dobbelaere (1999). En la propuesta del investigador belga, el análisis de las transformaciones sociorreligiosas de la contemporaneidad debe ser efectuado a partir de la diferenciación entre el nivel *micro* (relativo a cambios individuales), *meso* (en el caso de la propuesta de Dobbelaere, los cambios en las organizaciones, instituciones, comunidades religiosas en las que participa el individuo) y *macro* (transformaciones en la relación entre sociedad y religión), abriendo un espectro analítico que abarca desde el estudio de la presencia de la «religiosidad en la vida cotidiana» (*Religion in Everyday Life*, Ammerman, 2007) a su influencia en las dinámicas globales (Steger y James, 2013).

c) Junto a la oportunidad que representan una historiografía que ha abordado crecientemente la secularización y una renovada sociología histórica, el planteamiento sociohistórico de la secularización en el siglo *xxi* se ha visto, además, favorecido por el desarrollo de los estudios sobre casos concretos en las últimas décadas. Frente a las citadas pretensiones globalizadoras de la «teoría de la secularización», estos análisis han descubierto y analizado la complejidad de las dinámicas sociorreligiosas en contextos seculares. Precisamente las investigaciones en sociología cualitativa de fenómenos como la espiritualidad desvinculada de la tradición religiosa

—como la dirigida por Heelas (2005) en el Proyecto Kendal, que trataba de rastrear las experiencias espirituales más allá de las religiones tradicionales— han posibilitado el descubrimiento de nuevas realidades religiosas y espirituales incluso en marcos profundamente secularizados. Así pues, si la aproximación sociohistórica a la secularización durante los sesenta se presentaba como un análisis *top-down*, en el que el tipo-ideal de la secularización buscaba ser concretado en diferentes realidades sociales e históricas, la crítica a la «teoría de la secularización» de las últimas décadas permite que la sociología histórica de la secularización se plantee también desde una perspectiva *bottom-up*, en la que los resultados de los estudios sobre casos particulares, como el citado Proyecto Kendal, puedan ser tenidos en cuenta a la hora de plantear una aproximación más amplia e integral.

La introducción del debate de la secularización en la historiografía, el desarrollo de la sociología histórica y la profundización de la crítica a la «teoría de la secularización» desde casos particulares de estudio han conformado el sustrato sobre el que, a principios del siglo *xxi*, emerge la renovación de la perspectiva sociohistórica para el estudio de la secularización, observable tanto en la aproximación metodológica del paradigma posweberiano de las *World Religions* (Cotter y Robertson, 2016), centrado en el estudio de las interacciones e implicaciones globales de las religiones cuantitativamente más importantes a nivel mundial, como en las aportaciones de Talal Asad (2003), Charles Taylor (2014), José Casanova (2012), Marcel Gauchet (2005), Robert Bellah (2011), Peter Berger o Hans Joas (2016, 2021). Aunque los autores citados plantean perspectivas y temáticas distintas en el amplio debate sobre la secularización, su común interés por la sociología histórica se convierte en muestra de la posibilidad y del afianzamiento de la aproximación sociohistórica en sociología de la religión durante el inicio del tercer milenio, tal y como analizaremos en el siguiente punto.

LA RENOVADA MIRADA SOCIOHISTÓRICA AL PROCESO DE SECULARIZACIÓN: APORTACIONES METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES

Tras haber recorrido parte de las claves que explican el actual horizonte de posibilidad de la sociología histórica en el debate de la secularización, abordaremos las contribuciones metodológicas y conceptuales que la renovación de la perspectiva sociohistórica está ya implicando para el planteamiento de la secularización a través de tres cuestiones: a) el énfasis histórico de los análisis sociológicos sobre la secularización, b) el esfuerzo comparativo, particularmente a la hora de plantear la relación entre secularización y modernidad, y c) la crítica conceptual.

a) En primer lugar, y desde el convencimiento de Abrams (1994: 2) de que toda explicación sociológica debe ser necesariamente histórica, la sociología histórica refuerza el planteamiento del presente sociológico desde la clave de la historicidad; es decir, desde los ejes de la sincronía de cada estrato histórico en sí y de la diacronía de estos con los demás, configurada por la sucesión de dinámicas de largo plazo (Mahoney, 2000) y las contingencias históricas particulares (Remaud, 2015: 62). Esta, por otra parte weberiana (Aron, 2004), complementariedad entre la causalidad histórica y la causalidad sociológica para la explicación de los procesos sociohistóricos queda evidenciada en el recorrido explorado por Charles Taylor (2014) en *La era secular*. En esta obra, el filósofo canadiense se adentra en las dinámicas de largo plazo y alcance (por ejemplo, lo que Taylor denomina «la impermeabilización» respecto a las fuerzas espirituales religiosas, que presenta como una de las transformaciones más destacadas de la secularización) a partir de acontecimientos sociales e históricos particulares.

El énfasis que la perspectiva sociohistórica introduce sobre la dialéctica pasado-presente, según la terminología de Gramsci (1977), se presenta como contrapunto a los excesos de la «teoría de la secularización». En palabras de Casanova (2012: 6), la construcción teórica de la secularización se ha estructurado en torno a una «función claramente normativa de identificar y legitimar la supuesta marcha progresiva de la historia». Ante esta premisa, los diferentes estratos históricos experimentan el riesgo de ser homogeneizados en periodos compactos y definibles, al servicio de la corroboración de la teoría. Así pues, en parte de las formulaciones de la «teoría de la secularización», el pasado queda convertido en «edad de oro de la fe» a fin de favorecer su encaje sin matización en el binomio «mayor modernización, menor religiosidad» (Lastett, 2000). Del mismo modo, los contraargumentos, como los surgidos a partir de la constatación del pluralismo y metamorfosis religiosos en la era secular, son infravalorados por parte de aquellos que siguen defendiendo la validez de la «teoría de la secularización» en su aproximación clásica (Bruce, 2002).

La sociología histórica debe responder a las tentaciones del evolucionismo y del historicismo que conlleva una comprensión estanca de la historia (Holton, 2003). Frente al historicismo, la tercera definición de secularidad de Charles Taylor (2014: 48), planteada como el desarrollo de «un nuevo contexto en el que debe encuadrarse toda búsqueda y todo cuestionamiento sobre lo moral y lo espiritual», constituye un marco particularmente apropiado para el abordaje de la secularización desde la citada perspectiva sociohistórica, en las que las tesis del declive o del revival de las religiones (Zazo, 2018) quedan suspendidas ante el análisis de las transformaciones entre contextos, es decir, de la plausibilidad (Berger, 2016). Por su parte, y frente al evolucionismo, Gorski (2003: 121) ha abogado por una comprensión sociohistórica de la se-

cularización a partir del *Sociopolitical Conflict Model* (SPCM) y el *Sociocultural Transformation Model* (SCTM), que nos adentran en una secularización dinámica, que tiene en cuenta la conflictividad que se establece entre los distintos actores sociohistóricos y, por tanto, alejada de todo planteamiento unívoco y unilineal.

b) Las transformaciones sociológicas e históricas siempre ocurren en un tiempo y lugar concretos (Abrams, 1994: 16), por lo que deviene imprescindible una aproximación comparativa entre contextos para lograr su comprensión, punto fundamental de la aproximación weberiana a las dinámicas sociohistóricas (Aron, 2004: 428-429).

Sin embargo, y a pesar de la presencia de la perspectiva comparada desde los orígenes de la disciplina, el desarrollo de la sociología histórica y la crítica a la tesis de la secularización han introducido importantes matices en la labor comparativa. A este respecto, uno de los contraargumentos a la «teoría de la secularización» se ha centrado en su carácter eurocéntrico, tanto por la particular atención prestada al caso europeo como, sobre todo, por la consideración de Europa occidental como el culmen del proceso de secularización, al que todos los contextos, antes o después, se aproximarían (Clark, 2012: 162-163). De nuevo, la convergencia entre los desarrollos de la sociología histórica y la crítica a la teoría de la secularización se han traducido en una revaloración del concepto «modernidad», alejado de aquel que subyacía a los estudios de la década de los sesenta.

La «era axial», cuya génesis el filósofo alemán Karl Jaspers ubica en diferentes contextos del mundo entre el 800 a. C. y el 200 a. C. y describe como un periodo de profunda creatividad religiosa a partir del cual el ser humano «está incierto de sí mismo y, por tanto, abierto para nuevas e ilimitadas posibilidades» (Jaspers, 1985: 21-22), se ha convertido crecientemente en un periodo esen-

cial para reevaluar la modernidad (Beriaín, 2000). En las obras de Eisenstadt (2003), Habermas (2008), Bellah (2011), Taylor (2014) o Hans Joas (2021), la «era axial» aparece como sustrato compartido desde el cual repensar no sólo lo común de las distintas religiosidades, sino también la modernidad potencial de todas las grandes civilizaciones. Esta «era axial» posibilita, en definitiva, el planteamiento de las «modernidades múltiples» de Eisenstadt (2003) —y, por tanto, la búsqueda de las «secularidades múltiples» (Hartney, 2014) desde una perspectiva sociohistórica—.

c) Por último, debemos mencionar la contribución conceptual y discursiva planteada por las dos ramas de conocimiento, la sociohistórica y la genealógica, que Pérez-Agote (2018: 2) destaca como particularmente apropiadas para estudiar el fenómeno de la secularización. En palabras de Margaret Somers (1995: 134), esta perspectiva conceptual se fundamenta en un enfoque reflexivo sobre los conceptos de las ciencias sociales y en la consideración de estas categorías analíticas como conceptos relacionales («perspectiva-red», en Barkey, 2009: 722), objetos históricos y culturales.

Siguiendo los tipos-ideales weberianos, tal y como los sintetiza Aron (2004: 427-428), la secularización durante el siglo xx había sido abordada como «tipo ideal de individuo histórico» («como reconstrucción inteligible de una realidad histórica global y singular»; por ejemplo, el estudio de la secularización en Europa como periodo concreto), como «tipo ideal que designa elementos abstractos de la realidad histórica» (por ejemplo, la diferencia entre sagrado y profano de la que deriva el término de «desacralización», una de las comprensiones más comunes de la secularización) y, por último, como «tipo ideal de reconstrucciones racionalizantes de forma de conducta que tienen un carácter particular» (por ejemplo, el estudio del *ethos* derivado de la asunción de la secularidad como meta so-

cial e individual). Las posibilidades del estudio del concepto secularización, que ha sido hasta finales del siglo xx planteado principalmente como un tipo-ideal, se han ampliado gracias a la incorporación de una mayor atención a la cuestión discursiva tras el giro lingüístico, que lejos de disolver la perspectiva sociohistórica, la enriquece.

Así pues, y siguiendo el planteamiento señalado por Somers (1995), la secularización en las últimas décadas no sólo ha sido considerada como un debate o un tipo-ideal, sino también como un objeto de estudio inserto en la historia, es decir, un concepto histórico y cultural. En esta perspectiva, el uso que el investigador hace del término debe tener en cuenta las significaciones distintas y cambiantes de los propios actores sociohistóricos. La labor del investigador se convierte, así, en observación de la autoobservación de los actores sociohistóricos y de sus comprensiones sobre un concepto como la secularización (Luhmann, 2007).

Esta es la aproximación que subyace a las reconstrucciones genealógicas de la secularización que han aparecido en las últimas décadas, destacando a este respecto los trabajos de Talal Asad (2003) y de J. W. Scott (2018), entre otros análisis que estudian la secularización como una «narrativa» que refleja y a la vez perfila las comprensiones de los actores sociohistóricos. A este respecto, Casanova (2012) rastrea el cúmulo de discursividades desarrolladas en paralelo al proceso de secularización y que han conformado «una experiencia fenomenológica estadal secularista de haber superado y dejado detrás un estadio religioso tradicional y premoderno», abriendo una perspectiva de estudio discursivo en paralelo al análisis procesual de la secularización (Ruiz-Andrés, 2022b). Desde una crítica sociohistórica conceptual y tras casi una centuria de planteamientos sobre la religión y la modernidad, la secularización no constituye únicamente un concepto de investigación o de debate académico, sino también una categoría cuya in-

tegración en el debate mediático y social abre una nueva perspectiva de análisis sociológico e histórico.

CONCLUSIONES. LA ACTUALIDAD DEL ESTUDIO DEL PASADO PARA EL ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIORRELIGIOSAS CONTEMPORÁNEAS

El peso de la sociología histórica en los primeros análisis sobre religiones y modernidad y en la expansión de la secularización en los estudios de los sesenta languideció tras la crítica a la «teoría de la secularización» y al concepto de modernidad que la subyacía. A inicios del siglo XXI, se constata un renovado y creciente interés investigador en esta perspectiva sociohistórica, que hemos analizado en el presente texto a través de la reflexión sobre sus precedentes y de las contribuciones que está ya efectuando al debate sobre la secularización. Tras la primacía de los estudios de caso sobre las metamorfosis religiosas en el análisis de la secularización a finales del siglo xx, la recuperación de la perspectiva sociohistórica abre una doble ventana, al pasado y al futuro.

Por una parte, la recuperación de la sociología histórica en el debate sobre la secularización proporciona la oportunidad de repensar la perspectiva sociohistórica de los autores «clásicos», particularmente Max Weber, sobre la relación entre religiones y modernidad desde la doble vocación sociológica e histórica. A este respecto, las tres contribuciones de la sociología histórica estudiadas en nuestro análisis (refuerzo de la perspectiva histórica, comparatividad y crítica conceptual) interactúan de manera evidente con los tres pilares que definen la comprensión weberiana de ciencia social: comprensión, historicidad y cultura (Aron, 2004: 412), revelando la actualidad de la

aproximación posweberiana para el debate sobre la secularización y posibilitando, a su vez, la recuperación de los temas de los clásicos de la sociología de la religión, tal y como observamos en los estudios de Schluchter (2017) o Joas (2021) sobre las narrativas de desencantamiento y encantamiento, o de Beriain (2000) sobre el politeísmo moderno de valores.

Por otra parte, la incorporación del debate en torno a la secularización en la historiografía, el desarrollo de la sociología histórica y la miríada de investigaciones críticas con la «teoría de la secularización» han favorecido que actualmente la sociología histórica pueda asumir y estimular la agenda de investigación (Gorski, 2003). Frente a una conceptualización rígida de modernidad, los estudios sociohistóricos sobre la secularización de inicios del siglo XXI prestan una mayor atención a la diferencia entre contextos gracias a las posibilidades descubiertas en las múltiples modernidades de la «era axial» (Habermas, 2008), plantean el análisis sobre la secularización como concepto sociohistórico y no sólo como tipo ideal (Casanova, 2012), e incorporan los diferentes niveles de comprensión histórica, incluido el individual. En definitiva, el retorno de la sociología histórica en el debate en torno a la secularización no constituye una continuación del paréntesis cerrado en la década de los sesenta del siglo XX, sino, más bien, la culminación postsecular de la crítica a la «teoría de la secularización», que en el umbral del tercer milenio retoma una perspectiva amplia sobre el pasado para seguir redescubriendo un presente que, más que religioso o irreligioso, es, ante todo, plural.

BIBLIOGRAFÍA

- Abrams, Philip (1994). *Historical Sociology*. New York: Cornell University Press.
- Ammerman, Nancy T. (2007). Introduction: Observing Religious Modern Lives. En: N. T. Ammerman (ed.). *Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives*. New York: Oxford University Press.

- Arat, Alp (2018). Postsecularism. In *Defence of a Fashionable Theory*. En: A. Arat y L. Doggett (eds.). *Foundations and Futures in the Sociology of Religion*. London: Routledge.
- Archer, Margaret S. (1982). «Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action». *The British Journal of Sociology*, 33(4): 455-483. doi: 10.2307/589357
- Armet, Stephen (2017). «Explaining Religion's Durability or Decline Based on Morphogenetic Generation». *Journal of Critical Realism*, 16(3): 315-338. doi: 10.1080/14767430.2017.1296745
- Aron, Raymond (2004). *Las etapas del pensamiento sociológico*. Madrid: Tecnos.
- Asad, Talal (2003). *Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Barkey, Karen (2009). Historical Sociology. En: P. Hedström y P. Bearman (eds.). *The Oxford Handbook of Analytical Sociology*. Oxford: Oxford University Press.
- Baumont, Justin; Eder, Klaus y Mendieta, Eduardo (2020). «Reflexive Secularization? Concepts, Processes, and Antagonisms of Postsecularity». *European Journal of Social Theory*, 23(3): 291-309. doi: 10.1177/1368431018813769
- Bellah, Robert N. (2011). *Religion in Human Evolution from the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Berger, Peter (1969). *El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Berger, Peter (2016). *Los numerosos altares de la modernidad. En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista*. Salamanca: Sígueme.
- Beriain, Josetxo (2000). *La lucha de los dioses en la modernidad. Del monoteísmo religioso al politeísmo cultural*. Barcelona: Anthropos.
- Bourdieu, Pierre (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Brown, Callum G. (2009). *The Death of Christian Britain. Understanding Secularization 1800-2000*. Oxford: Routledge.
- Bruce, Steve (2002). *God is Dead: Secularization in the West*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Casanova, José (2012). *Genealogías de la secularización*. Barcelona: Anthropos.
- Cipriani, Roberto (2011). *Manual de sociología de la religión*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

- Clark, Jonathan C. D. (2012). «Historiographical Reviews. Secularization and Modernization: The Failure of a Grand Narrative». *The Historical Journal*, 55(1): 161-194. doi: 10.1017/S0018246X11000586
- Cotter, Christopher R. y Robertson, David G. (2016). *After World Religions: Reconstructing Religious Studies*. London: Routledge.
- Cueva, Julio de la; Hernando de Larramendi, Miguel y Planet, Ana I. (eds.) (2018). *Encrucijadas del cambio religioso en España. Religión, cristianismo e islam*. Granada: Comares.
- Davie, Grace (2000). *Religion in Modern Europe. A Memory Mutates*. New York: Oxford University Press.
- Díaz-Salazar, Rafael (2006). *El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al laicismo*. Madrid: PPC.
- Dobbelaere, Karel (1999). «Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization». *Sociology of Religion*, 60(3): 229-247.
- Durkheim, Émile (1967). *De la división del trabajo social*. Buenos Aires: Schapire.
- Durkheim, Émile (1993). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza Editorial.
- Eisenstadt, Shmuel N. (2003). The Reconstruction of Religious Arenas in the Framework of "Multiple Modernities". En: S. N. Eisenstadt (ed.). *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*. Leiden: Brill.
- Elias, Norbert (1987). «The Retrat of Sociologists into the Present». *Theory, Culture & Society*, 4: 223-247. doi: 10.1177/026327687004002003
- Gauchet, Marcel (2005). *El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión*. Madrid: Trotta.
- Gorski, Philip S. (2003). Historicizing the Secularization Debate: An Agenda for Research. En: M. Dillon (ed.). *Handbook of the Sociology of Religion*. New York: Cambridge University Press.
- Gramsci, Antonio (1977). *Pasado y Presente*. Barcelona: Granica.
- Habermas, Jürgen (2006). *Entre naturalismo y religión*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Habermas, Jürgen (2008). «Apostillas sobre una sociedad postsecular». *Revista Colombiana de Sociología*, 31: 169-183.
- Hartney, Cristopher (2014). *Secularisation: New Historical Perspectives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Heelas, Paul (2005). *The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality*. Malden, Massachusetts: Blackwell Pub.
- Hervieu-Léger, Danièle y Williame, Jean-Paul (2001). *Sociologies et religion. Approches classiques*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Hobson, John; Lawson, George y Rosenberg, Justin (2010). Historical Sociology. En: R. Denemark (ed.). *The International Studies Encyclopaedia*. Wiley-Blackwell.
- Holton, Robert (2003). Max Weber and the Interpretative Tradition. En: G. Delanty y E.F. Isin (eds.). *Handbook of Historical Sociology*. London: SAGE publications.
- Jaspers, Karl (1985). *Origen y meta de la Historia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Joas, Hans (2014). *Faith as an Option. Possibles Futures for Christianity*. Stanford: Stanford University Press.
- Joas, Hans (2021). *The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment*. Oxford: Oxford University Press.
- Joas, Hans; Knöbl, Wolfgang y Skinner, Alex (2009). *Social Theory: Twenty Introductory Lectures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lastett, Peter (2000). *The World We Have Lost: Further Explored*. London: Routledge.
- Luhmann, Niklas (2007). *La religión de la sociedad*. Madrid: Trotta.
- Mahoney, James (2000). «Path Dependence in Historical Sociology». *Theory and Society*, 29(4): 507-548.
- Martin, David (1978). *A General Theory of Secularization*. New York: Harper & Row.
- McLeod, Hugh (2007). *The Religious Crisis of the 1960s*. Oxford: Oxford University Press.
- Osborne, Raquel y Monferrer, Jordi M. (dirs.) (2005). *Procesos en torno a la religión: presente y futuro. Selección de textos*. Madrid: UNED ediciones.
- Pelletier, Denis (2002). *La crise catholique. Religion, société, politique*. Paris: Payot.
- Pérez-Agote, Alfonso (2018). «New Frontiers and Relations between Religion, Culture and Politics in Western Europe». *Religions*, 9(114): 1-13. doi: 10.3390/rel9050144
- Remaud, Olivier (2015). Accelerating Change and Trigger Events. En: M. Tamm (ed.). *Afterlife of Events. Perspectives on Mnemohistory*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Ruiz-Andrés, Rafael (2022a). «La postsecularización. Un nuevo paradigma en sociología de

- la religión». *Política y Sociedad*, 59(1): 1-12. doi: 10.5209/poso.72876.
- Ruiz-Andrés, Rafael (2022b). *La secularización en España. Rupturas y cambios religiosos desde la sociología histórica*. Madrid: Cátedra.
- Schluchter, Wolfgang (2017). *El desencantamiento del mundo*. Ciudad de México: FCE-Fondo de Cultura Económica.
- Scott, Joan W. (2018). *Sex and Secularism*. Princeton: Princeton University Press.
- Somers, Margaret R. (1995). «What's Political or Cultural about Political Culture and the Public Sphere? Toward an Historical Sociology of Concept Formation». *Sociological Theory*, 13(2): 113-144.
- Steger, Manfred B. y James, Paul (2013). «Levels of Subjective Globalization: Ideologies, Imaginaries, Ontologies». *Perspectives on Global Development and Technology*, 12: 17-40. doi: 10.1163/15691497-12341240
- Taylor, Charles (2014). *La era secular* (Vol. I). Barcelona: Gedisa.
- Tschannen, Olivier (1992). *Les théories de la sécularisation*. Ginebra: Droz.
- Turner, Bryan S. (2010). Religion in a Post-secular Society. En: B. S. Turner (ed.). *The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Weber, Max (2012). *Sociología de la religión*. Madrid: Akal.
- Zazo, Eduardo (2018). «Dos conceptos de la modernidad: religión y secularización». *Bajo Palabra*, 19: 149-170. doi: 10.15366/bp2018.19.007

RECEPCIÓN: 13/07/2021

REVISIÓN: 22/12/2021

APROBACIÓN: 06/09/2022

Historical Sociology and Secularisation: Relevance and Renewal of the Study of the Past in the Analysis of Contemporary Socio-Religious Transformations

Sociología histórica y secularización: Actualidad y renovación del estudio del pasado para el análisis de las transformaciones sociorreligiosas contemporáneas

Rafael Ruiz Andrés

Key words

History of Religions

- Modernity
- Secularisation
- Sociology of Religions
- Historical Sociology

Palabras clave

Historia de las religiones

- Modernidad
- Secularización
- Sociología de las religiones
- Sociología histórica

Abstract

Since the beginning of the 21st century, we have witnessed the return and renewal of historical sociology in the debate on secularisation through the contributions, among others, of Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova and Hans Joas. The aim of the present text is to analyse the renewal of historical sociology, both through the potential dialogue that it raises with the classics of the sociology of religion, particularly with Max Weber, and through its contributions to research on the process of secularisation. To this end, and after considering the state of the question on secularisation and historical sociology, we address both the precedents of this return of a socio-historical perspective and the methodological and conceptual developments that this approach provides to the debate on secularisation.

Resumen

A inicios del siglo XXI, se evidencia el retorno de una renovada sociología histórica en el debate sobre la secularización a través de aportaciones como las de Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova o Hans Joas, entre otros. El objetivo del presente texto se centra en el análisis de la recuperación de la sociología histórica, tanto a través del potencial diálogo que plantea con los clásicos de la sociología de la religión, particularmente con Max Weber, como de sus aportaciones para la investigación sobre el proceso de secularización. Para ello, y tras presentar un estado de la cuestión sobre secularización y sociología histórica, abordaremos los precedentes de este retorno de la perspectiva sociohistórica y los desarrollos metodológicos y conceptuales que proporciona esta aproximación al debate sobre la secularización.

Citation

Ruiz Andrés, Rafael (2023). "Historical Sociology and Secularisation: Relevance and Renewal of the Study of the Past in the Analysis of Contemporary Socio-Religious Transformations". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 183: 133-144. (doi: 10.5477/cis/reis.183.133)

Rafael Ruiz Andrés: Universidad Complutense de Madrid | rafaru01@ucm.es

INTRODUCTION

HISTORICAL SOCIOLOGY AND SECULARISATION

The dilemmas around secularisation and, more broadly, the socio-religious transformations that occurred in parallel with modernisation, constitute a central debate in the sociology of religion. Present since the origins of the discipline in the reflections of Weber, Durkheim, Simmel and Troeltsch, the question of what secularisation is was addressed over the last century by some of the most important voices in sociology, either in a tangential (Parsons and Bourdieu) or more central manner (Robert Bellah, Peter Berger and Hans Joas) (in Cipriani, 2011).

In the early stages of sociological thought (Aron, 2004), this enquiry into the meaning and role of religion in societies in general — and particularly in industrialised societies (Durkheim, 1993) and those of increasing rationalisation (Weber, 2012)— was addressed through great emphasis on a socio-historical approach. We find this in the Weberian comparison of contexts, used to discover why specific *mindsets* produce certain social structures, the axis that underlies the classic study, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, as well as in different approaches analysing the foundations of the religious experience and its evolution through a convergence between sociology, history and anthropology (Durkheim, 1993; Hervieu-Léger and Williame, 2001). It is in the origin of the sociology of religion, where the historical and sociological understanding of the study of secularisation (Aron, 2004) analysed as a socio-historical process, stands out, shaped, among other explanations, by the “disenchantment of the world” (*Entzauberung der Welt*) (Weber, in Schluchter, 2017) or by other dynamics that led to the primacy of economic functions in industrial society, over religious, military and administrative ones (Durkheim, 1967).

This connection between historical sociology and the study of secularisation became even stronger in the 1960s with an expansion of studies on the issue: Brian Wilson, Sabino Acquaviva, Thomas Luckmann and, notably, Peter Berger. The latter, in his attempt to understand secularisation, looked at different contexts covering a long chronology. In his celebrated book, *The Sacred Canopy* (1969), he traced the origins of secularisation back to the efforts at historicisation by the people of Israel, following the idea of religious rationalisation present in Weberian sociology (Weber, 2012).

However, after the 1960s, criticisms of this contextual and chronologically broad perspective on secularisation intensified, in part because of the necessary correlation in some approaches between “more modernisation” and “less religion”. In this respect, David Martin's (1978) early qualification of the unilinear direction of history present in these studies should be noted, in part due to the necessary opposition that these studies established between secular modernisation and religious tradition with the broad influence in this period of Parsonian thought in sociology (Joas, Knöbl and Skinner, 2009), and the duality/opposition between tradition and modernity. These critiques culminated with Oliver Tschannen (1992), who differentiated between the “paradigm of secularisation”, which encompassed different analyses on contemporary socio-religious transformation, and the “theory of secularisation”, an expression that makes particular reference to studies that establish some type of necessary relationship between modernisation and the decline of religion.

As a result, the critical perspective in the analysis of contemporary socio-religious dynamics that followed the reflections of the 1960s can be characterised by its questioning of the assumed universal validity of the theory of secularisation. Consequently, and in contrast to the studies from the 1960s,

the study of specific cases increased at the end of the past century and revealed both religious transformations and religious persistence in secular contexts, in other words, complexities that the “theory of secularisation” seemed to hide (Osborne and Monferrer, 2005; Cipriani, 2011). However, despite the necessary nuance that these analyses introduced into the study of secularisation, the Weberian comparative approach to different contexts and times, abstract ambition and semi-historical concreteness that were present at the beginning of the debate on secularisation (Aron, 2004: 468), lost importance within a broader rejection of the thesis of modernisation (Joas, Knöbl and Skinner, 2009), consolidating what Elias (1987) referred to as the retreat of sociologists into the present also within the sociology of religion.

Against this background, at the beginning of this century we find a return to socio-historical approaches in the debate on secularisation through contributions such as those of Talal Asad, Charles Taylor, Jürgen Habermas, José Casanova and Hans Joas, among others. However, this revival of historical sociology did not take place on the terms raised during the decade of the 1960s, but rather, from concerns emerging from a context marked by the consolidation of a post-secularisation as a paradigm within the sociology of religion. Far from unidirectional approaches, post-secularisation proposes a critical re-evaluation, a *reflexive* and, therefore, socio-historical awareness of secularism based on the recognition that, behind the process of secularisation, societies are not religious or irreligious, but basically pluralist (Habermas, 2006, 2008; Beaumont, Eder and Mendieta, 2020: 27; Ruiz-Andrés, 2022a). A close link has been established between the current post-secular research agenda and historical sociology, given that, as pointed out by Turner (2010): “more attention to the historical

and comparative study of religion would greatly improve [...] our awareness of the complexity of secularization and post-secularization”.

Following this brief review of the current state of the question regarding the interrelationship between historical sociology and secularisation, we address two issues through the paradigm of post-secularisation as we explore the contribution that a socio-historical approach is making and can make in the current debate in the sociology of religion. First, we trace the different precedents that have led to the return of a renewed historical sociology in the study of secularisation. This, in turn, will permit us to explore the methodological and conceptual developments in historical sociology for the continuation of the analysis of the secularisation process.

TOWARD THE RENEWAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY IN THE SECULARISATION DEBATE

Parallel to the back and forth between “secularisation theory” and its critique, which characterised the state of the question during the second half of the 20th century (Zazo, 2018), new possibilities for expanding the perspective of historical sociology within the sociology of religion can be identified. This renewed socio-historical research on secularisation has been fostered by a) historiographic contributions to the secularisation debate, b) developments in historical sociology and c) contributions made by studies that followed (and deepened) the analyses of secularisation from the decade of the 1960s.

a) First, as stated in Cipriani’s (2011) celebrated *Manual de sociología de la religión*, the growing incorporation of the debate on secularisation in historiography has enriched the disciplines of both history

and sociology. In this sense, among other examples, the sociological and historical perspective of the French context by the historian Émile Poulat stands out; his contributions ranging from his initial studies on the contemporary history of Catholicism to his later research on post-Christianity and secularism.

Historians such as McLeod (2007) and Brown (2009) have examined socio-religious transformations in specific contexts through an approach grounded in historical sources, in both cases looking at the contemporary evolution of de-Christianisation in Britain. Their analyses also reveal socio-historical realities that contradict the homogenising and unilinear descriptions of “secularisation theory”. Thus, using the concept of “discursive Christianity”, Brown (2009) studied the strong cultural presence of Christianity in British society in industrialised and modernised Britain in the 1960s. McLeod, looking at the events of May 68, and in contrast to the commonly held idea that it constituted one of the most intense ruptures with prior religious tradition (Joas, 2014), analysed the important contributions that were made by Christian groups and platforms to the radical environment of the 1960s, a study also carried out in the French context by the historian Denis Pelletier (2002). In the Spanish case, the emergence of studies of contemporary religious history around the figure of Feliciano Montero and the interest of sociologists Díaz-Salazar (2006) and Pérez-Agote (2018) in a socio-historical approach to secularisation have traced a path toward the intersections between history and sociology (Cueva, Hernando-de-Larramendi and Planet, 2018), which finds its most salient point of convergence in historical sociology.

b) Secondly, the development and renewal of historical sociology during the end of the past century should be emphasised, despite the loss of the influence of the socio-historical perspective in the secularisation debate in this period. Although the

major contributions and authors in historical sociology (Wallenstein, Tilly, Abrams) did not show great interest in the religious question, the approaches derived from this renewal in the field has also reached the secularisation debate. This can be seen in the influence of Shmuel Eisenstadt's reflections on Grace Davie (in Cipriani, 2011), whose conceptual contributions – particularly the ideas of *vicarious religion*, used to refer to the “vicarious” value that the majoritarian religious traditions have in different European countries, and *belongs not believers*, a term that refers to those individuals that continue to be connected to a tradition without being particularly religious – impacted the debate on secularisation during the first part of this century (Davie, 2000).

In this respect, post-Parsonian sociological reflections stimulated historical sociology to address issues that are common to the overall discipline, such as the problematic between agency and structure, for which Archer has proposed a morphogenetic approach. Archer's post-Weberian understanding, based on an analysis of social dynamics (both in terms of change and stability) through the continued interaction between agency and structure, and with a fundamental weight given to historical factors, has, for example, been applied to understand the differences between two divergent cases for the interaction between secularisation and modernisation: Costa Rica and Uruguay (Armet, 2017).

This is also the case for approaches to different levels of socio-historical research in a globalised society, which range from what structures the individual (Bourdieu, 1990; Hobson, Lawson and Rosenberg, 2010: 2) to the global framework (Barkey, 2009: 722), and has been translated to the debate over secularisation by Karel Dobbelaere (1999). In the Belgian researcher's approach, the analysis of contemporary socio-religious transformations must recog-

nise a differentiation between the *micro* level (related to individual changes), the *meso* level (which, in the case of Dobbelaere's proposal, would refer to religious institutionalisation) and the *macro* level (transformations in the relationship between society and religion), opening an analytical spectrum that ranges from the study of the presence of "religion in everyday life" (Ammerman, 2007) to its influence in global dynamics (Steger and James, 2013).

c) Alongside the opportunity represented by a historiography that has increasingly addressed secularisation and a renewed historical sociology, the socio-historical approach to secularisation in the 21st century has also been favoured by the development in recent decades of concrete case studies. In contrast to the aforementioned globalising pretensions of "secularisation theory", these analyses have uncovered and analysed the complexity of socio-religious dynamics in secular contexts. Specifically, research in qualitative sociology of phenomena such as spirituality unconnected to religious tradition —such as that directed by Heelas (2005) in the Kendal Project, which has attempted to trace spiritual experiences beyond traditional religions— has made the discovery of new religious and spiritual realities possible, even within deeply secular frameworks. Thus, if the socio-historical approach to secularisation during the 1960s presented a top-down analysis, in which the ideal-type of secularisation was concretised in different social and historical realities, the critique of "secularisation theory" of recent decades permits the historical sociology of secularisation to also be approached from a bottom-up perspective, in which the results of studies of particular cases, such as the Kendal project, can be taken into account in the development of a broader and more comprehensive approach.

The introduction of debates over secularisation within historiography, the development of historical sociology and the deepening of the critique of secularisation theory through case studies, all formed the

terrain on which a renewed socio-historical perspective in the study of secularisation emerged at the beginning of this century. This can be seen in the methodological approach of a post-Weberian paradigm on *World Religions* (Cotter and Robertson, 2016), focused on the study of the global interactions and implications of the quantitatively most important religions on the global level, as well as in the contributions of Talal Asad (2003), Charles Taylor (2014), José Casanova (2012), Marcel Gauchet (2005), Robert Bellah (2011), Peter Berger (2016) and Hans Joas (2021). Although the authors cited follow distinct perspectives and examine different issues in the broad debate over secularisation, their common interest in historical sociology reveals the possibility and consolidation of the socio-historical approach within the sociology of religion, as we will analyse in the following section.

AN UPDATED SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE SECULARISATION PROCESS: METHODOLOGICAL AND CONCEPTUAL CONTRIBUTIONS

After having explored some of the issues that explain the current direction of historical sociology in the debate on secularisation, we will look at the methodological and conceptual contributions that the renewed socio-historical perspective has brought to the understanding of secularisation through three issues: a) the historical emphasis of sociological analyses on secularisation, b) comparative studies, particularly in terms of understanding the relationship between secularisation and modernity, and c) conceptual critique.

a) First, and from the understanding of Abrams (1994: 2) that all sociological explanations must by necessity be historical, historical sociology strengthens the pres-

ent sociological approach through the key of historicity, that is, from the axes of the synchrony of each historical stratum in itself and the diachrony of these with others, configured by a succession of long-term dynamics (Mahoney, 2000) and particular historical contingencies (Remaud, 2015: 62). This Weberian (Aron, 2004) complementarity between historical causality and sociological causality to explain socio-historical processes is found in the journey taken by Charles Taylor in his book, *A Secular Age* (2014). In it, the Canadian philosopher ventures into long-term and far-reaching dynamics through the analysis of specific social and historical developments (including what he refers to as *impermeability* with respect to spiritual and religious forces as one of the most striking dynamics of secularisation).

The emphasis that a socio-historical perspective introduces over the past-present dialectic, according to the terminology of Gramsci (1977), is presented as a counterpoint to the “excess” of secularisation theory. In the words of Casanova (2012: 6), the theoretical construction of secularisation has been structured around a “clearly normative function for identifying and legitimising the assumed progressive march of history”. Given this assumption, the different historical strata risk being homogenised into compact and definable periods at the service of corroborating the theory. Thus, in some of the formulations of secularisation theory, the past has been converted into “the golden age of faith” with the aim of favouring its place, without qualification, in the duality “more modernisation, less religiosity” (Lastett, 2000). At the same time, the counterarguments, such as those that emerged from the recognition of religious pluralism and metamorphoses in the secular age, are under-valued by those that continue defending the validity of “secularisation theory” in its classic formulation (Bruce, 2002).

Historical sociology must resist the temptations of evolutionism and histori-

cism that lead to a stagnant understanding of history (Holton, 2003). Against the tendency toward historicism, Taylor’s third definition of secularism (2014: 48), considered as the development of “a new context in which all search and questioning about the moral and spiritual must proceed”, constitutes a particularly appropriate framework for addressing secularisation from a socio-historical perspective, in which theses of the decline or revival of religions (Zazo, 2018) are suspended given the analysis of transformations between contexts and changes in the plausibility of religious frameworks (Berger, 2016). For his part, and in response to tendencies toward evolutionism, Gorski (2003: 121) has argued for a socio-historical understanding of secularisation based on a Sociopolitical Conflict Model (SPCM) and a Sociocultural Transformation Model (SCTM), which takes us into a dynamic secularisation based on conflict between different socio-historical actors and, therefore, is distant from any univocal and unilinear approach.

b) Sociological and historical transformations always take place in a concrete time and place (Abrams, 1994: 16), so that a comparative approach between contexts is essential to understand them, a fundamental aspect of a Weberian perspective on socio-historical dynamics (Aron, 2004: 428-429).

However, and despite the presence of a comparative perspective since the origins of the discipline, the development of historical sociology and the critique of the secularisation thesis introduced important nuances to the comparative process. In this respect, one of the counterarguments to secularisation theory has focused on its euro-centric character, both in terms of the attention given to the European case and, above all, to the consideration of Western Europe as the culmination of the secularisation process, to which all contexts, sooner or later, will approach (Clark, 2012: 162-163). In addition, the convergence between develop-

ments in historical sociology and the critique of secularisation theory has translated into a re-evaluation of the concept of “modernity”, now far from that which underlay the studies from the 1960s.

The “Axial Age”, which the German philosopher Karl Jaspers located in different contexts in the world between 800 and 200 BC, and described as a period of deep religious creativity in which the human being “becomes uncertain of himself and thereby open to new and boundless possibilities” (Jaspers, 1985: 21-22), has increasingly been seen as an essential period in the re-evaluation of modernity (Berlain, 2000). In the work of Eisenstadt (2003), Habermas (2008), Bellah (2011), Taylor (2014) and Joas (2021), the “axial age” appears as the shared background from which to rethink not only what is common among different religions, but also the potential modernity of all the major civilisations. This “axial age”, from a socio-historical perspective, made possible the “multiple modernities” of Eisenstadt (2003), and, therefore, the search for “multiple secularisms” (Hartney, 2014).

c) Lastly, we must mention the conceptual and discursive contribution from two branches of knowledge, the socio-historical and genealogical, which Pérez-Agote (2018: 2) stresses as particularly appropriate to study the phenomenon of secularisation. In the words of Margaret Somers (1995: 134), this conceptual perspective is grounded in a reflexive approach to the concepts of the social sciences and in the consideration of these analytical categories as relational concepts (a “network perspective”, in Barkey, 2009: 722) and historical and cultural objects.

Following Weberian ideal-types as synthesised in Aron (2004: 427-428), secularisation during the 20th century was addressed as “ideal types of historical particulars” (as “the intelligible reconstruction of a global and particular historical reality”; for example, the study of secularisation in Europe as a concrete period), as “ideal types which designate

abstract elements of historical reality” (for example, the difference between the sacred and the profane from which the term “desacralisation” is derived, one of the most common understandings of secularisation) and, lastly, ideal types “constitute rationalizing reconstructions of a particular kind of behavior” (for example, the study of secular society and the secular stage as a social and individual goal has this character of rationalizing *ethos*). The possibilities from the study of the concept of secularisation, which was, up the end of the 20th century, approached mainly as an ideal-type, have widened thanks to the incorporation of greater attention to the discursive question behind the linguistic turn, which far from dissolving the socio-historical perspective, has enriched it.

Thus, and following the approach outlined by Somers (1995), secularisation in recent decades has not only been a debate or an ideal-type, but also an object of study inserted in history, that is, an historical and cultural concept. In this perspective, the use that the researcher makes of the term becomes a fiduciary of the meanings advanced by socio-historical actors. The work of the researcher, thus, becomes the observation of the self-observation of socio-historical actors and their understandings of a concept such as secularisation (Luhmann, 2007).

This is the approach underlying the genealogical reconstructions of secularisation that have appeared in recent decades. The studies of Talal Asad (2003) and J.W. Scott (2018) stand out in this regard, as well as the analyses that have studied secularisation as a “narrative” that reflects and reveals the understandings of socio-historical actors. In this respect, Casanova (2012) traces the accumulation of discourses developed in parallel to the process of secularisation and which have shaped “a phenomenological experience of a secular stage, having overcome and left behind a traditional and pre-modern religious stage”, opening a discursive perspective in parallel to the proces-

sual analysis of secularisation (Ruiz-Andrés, 2022b). From a socio-historical conceptual critique and after almost a century of approaches to religion and modernity, secularisation is not only a concept for academic research and debate, but is also a category whose integration in the media and social debate opens a new perspective for sociological and historical analysis.

CONCLUSIONS: THE RELEVANCE OF THE STUDY OF THE PAST FOR THE ANALYSIS OF CONTEMPORARY SOCIO- RELIGIOUS TRANSFORMATIONS

The importance of historical sociology, found in the initial analyses of religion and modernity and the spread of secularisation in the studies of the 1960s, declined in the face of the criticisms of “secularisation theory” and the underlying concept of modernity. At the beginning of this century, we find a renewed and growing interest in this socio-historical perspective, which we have analysed in this article through an analysis of its precedents, as well as through the contributions that continue to impact the debate on secularisation. Following the primacy of case studies on religious transformations in the analysis of secularisation that appeared at the end of the past century, the recovery of a socio-historical perspective has opened a window on both the past and the future.

On the one hand, the re-emergence of historical sociology in the debate on secularisation provides the opportunity to rethink the socio-historical perspective of “classic” authors, particularly Max Weber, on the relationship between religion and modernity, and from the disciplines of both sociology and history. In this regard, the three contributions of historical sociology examined in our analysis (strengthening of a historical perspective, comparative studies and con-

ceptual critique) interact in a clear manner with the three pillars that define the Weberian understanding of social science: understanding (*verstehen*), historicity and culture (Aron, 2004: 412), revealing the importance of the post-Weberian approach to the debate over secularisation and making it possible, in turn, to recover the issues from the classics of the sociology of religion, such as we find in the studies of Schluchter (2007) and Joas (2021) on narratives of enchantment and disenchantment, and in Beriain (2000) on the modern polytheism of values.

On the other hand, the incorporation of the debate on secularisation in historiography, the development of historical sociology and the myriad studies critical of “secularisation theory” have stimulated the research agenda (Gorski, 2003). In contrast to a rigid conceptualisation of modernity, recent socio-historical studies on secularisation have given greater attention to different contexts thanks to the possibilities discovered in the multiple modernities of the “axial age” (Habermas, 2008). Secularisation is approached as a socio-historical concept, not just as an ideal-type (Casanova, 2012), and studies have incorporated different levels of historical understanding, including the individual. In short, the return of historical sociology in the debate on secularisation does not constitute a continuation of the parenthesis closed in the 1960s, but rather is a post-secular culmination of the critique of “secularisation theory”, which on the threshold of the third millennium has returned to a broad perspective on the past to continue rediscovering a present that, more than being religious or irreligious, is above all, plural.

BIBLIOGRAPHY

- Abrams, Philip (1994). *Historical Sociology*. New York: Cornell University Press.
- Ammerman, Nancy T. (2007). Introduction: Observing Religious Modern Lives. In: N. T. Ammerman (ed.).

- Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives*. New York: Oxford University Press.
- Arat, Alp (2018). Postsecularism. In Defence of a Fashionable Theory. In: A. Arat and L. Doggett (eds.), *Foundations and Futures in the Sociology of Religion*. London: Routledge.
- Archer, Margaret S. (1982). "Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action". *The British Journal of Sociology*, 33(4): 455-483. doi: 10.2307/589357
- Armet, Stephen (2017). "Explaining Religion's Durability or Decline Based on Morphogenetic Generation". *Journal of Critical Realism*, 16(3): 315-338. doi: 10.1080/14767430.2017.1296745
- Aron, Raymond (2004). *Las etapas del pensamiento sociológico*. Madrid: Tecnos.
- Asad, Talal (2003). *Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Barkey, Karen (2009). Historical Sociology. In: P. Hedström and P. Bearman (eds.). *The Oxford Handbook of Analytical Sociology*. Oxford: Oxford University Press.
- Beaumont, Justin; Eder, Klaus and Mendieta, Eduardo (2020). "Reflexive Secularization? Concepts, Processes, and Antagonisms of Postsecularity". *European Journal of Social Theory*, 23(3): 291-309. doi: 10.1177/1368431018813769
- Bellah, Robert N. (2011). *Religion in Human Evolution from the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Berger, Peter (1969). *El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Berger, Peter (2016). *Los numerosos altares de la modernidad. En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista*. Salamanca: Sígueme.
- Beriain, Josetxo (2000). *La lucha de los dioses en la modernidad. Del monoteísmo religioso al politeísmo cultural*. Barcelona: Anthropos.
- Bourdieu, Pierre (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Brown, Callum G. (2009). *The Death of Christian Britain. Understanding Secularization 1800-2000*. Oxford: Routledge.
- Bruce, Steve (2002). *God is Dead: Secularization in the West*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Casanova, José (2012). *Genealogías de la secularización*. Barcelona: Anthropos.
- Cipriani, Roberto (2011). *Manual de sociología de la religión*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Clark, Jonathan C. D. (2012). "Historiographical Reviews. Secularization and Modernization: The Failure of a Grand Narrative". *The Historical Journal*, 55(1): 161-194. doi: 10.1017/S0018246X11000586
- Cotter, Christopher R. and Robertson, David G. (2016). *After World Religions: Reconstructing Religious Studies*. London: Routledge.
- Cueva, Julio de la; Hernando de Larramendi, Miguel and Planet, Ana I. (eds.) (2018). *Encrucijadas del cambio religioso en España. Religión, cristianismo e islam*. Granada: Comares.
- Davie, Grace (2000). *Religion in Modern Europe. A Memory Mutates*. New York: Oxford University Press.
- Díaz-Salazar, Rafael (2006). *El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al laicismo*. Madrid: PPC.
- Dobbelaere, Karel (1999). "Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization". *Sociology of Religion*, 60(3): 229-247.
- Durkheim, Émile (1967). *De la división del trabajo social*. Buenos Aires: Schapire.
- Durkheim, Émile (1993). *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza Editorial.
- Eisenstadt, Shmuel N. (2003). The Reconstruction of Religious Arenas in the Framework of "Multiple Modernities". In: S. N. Eisenstadt (ed.). *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*. Leiden: Brill.
- Elias, Norbert (1987). "The Retrat of Sociologists into the Present". *Theory, Culture & Society*, 4: 223-247. doi: 10.1177/026327687004002003
- Gauchet, Marcel (2005). *El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión*. Madrid: Trotta.
- Gorski, Philip S. (2003). Historicizing the Secularization Debate: An Agenda for Research. In: M. Dillon (ed.). *Handbook of the Sociology of Religion*. New York: Cambridge University Press.
- Gramsci, Antonio (1977). *Pasado y Presente*. Barcelona: Granica.
- Habermas, Jürgen (2006). *Entre naturalismo y religión*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Habermas, Jürgen (2008). "Apostillas sobre una sociedad postsecular". *Revista Colombiana de Sociología*, 31: 169-183.

- Hartney, Christopher (2014). *Secularisation: New Historical Perspectives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Heelas, Paul (2005). *The Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality*. Malden, Massachusetts: Blackwell Pub.
- Hervieu-Léger, Danièle and Williame, Jean-Paul (2001). *Sociologies et religion. Approches classiques*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Hobson, John; Lawson, George and Rosenberg, Justin (2010). Historical Sociology. In: R. Denmark (ed.). *The International Studies Encyclopaedia*. Wiley-Blackwell.
- Holton, Robert (2003). Max Weber and the Interpretative Tradition. In: G. Delanty and E. F. Isin (eds.). *Handbook of Historical Sociology*. London: SAGE publications.
- Jaspers, Karl (1985). *Origen y meta de la Historia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Joas, Hans (2014). *Faith as an Option. Possible Futures for Christianity*. Stanford: Stanford University Press.
- Joas, Hans (2021). *The Power of the Sacred. An Alternative to the Narrative of Disenchantment*. Oxford: Oxford University Press.
- Joas, Hans; Knöbl, Wolfgang and Skinner, Alex (2009). *Social Theory: Twenty Introductory Lectures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lastett, Peter (2000). *The World We Have Lost: Further Explored*. London: Routledge.
- Luhmann, Niklas (2007). *La religión de la sociedad*. Madrid: Trotta.
- Mahoney, James (2000). "Path Dependence in Historical Sociology". *Theory and Society*, 29(4): 507-548.
- Martin, David (1978). *A General Theory of Secularization*. New York: Harper & Row.
- McLeod, Hugh (2007). *The Religious Crisis of the 1960s*. Oxford: Oxford University Press.
- Osborne, Raquel and Monferrer, Jordi M. (dirs.) (2005). *Procesos en torno a la religión: presente y futuro. Selección de textos*. Madrid: UNED ediciones.
- Pelletier, Denis (2002). *La crise catholique. Religion, société, politique*. Paris: Payot.
- Pérez-Agote, Alfonso (2018). "New Frontiers and Relations between Religion, Culture and Politics in Western Europe". *Religions*, 9(114): 1-13. doi: 10.3390/rel9050144
- Remaud, Olivier (2015). Accelerating Change and Trigger Events. In: M. Tamm (ed.). *Afterlife of Events. Perspectives on Mnemohistory*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Ruiz-Andrés, Rafael (2022a). "La postsecularización. Un nuevo paradigma en sociología de la religión". *Política y Sociedad*, 59(1): 1-12. doi: 10.5209/pos.72876
- Ruiz-Andrés, Rafael (2022b). *La secularización en España. Rupturas y cambios religiosos desde la sociología histórica*. Madrid: Cátedra.
- Schluchter, Wolfgang (2017). *El desencantamiento del mundo*. Ciudad de México: FCE-Fondo de Cultura Económica.
- Scott, Joan W. (2018). *Sex and Secularism*. Princeton: Princeton University Press.
- Somers, Margaret R. (1995). "What's Political or Cultural about Political Culture and the Public Sphere? Toward an Historical Sociology of Concept Formation". *Sociological Theory*, 13(2): 113-144.
- Steger, Manfred B. and James, Paul (2013). "Levels of Subjective Globalization: Ideologies, Imaginaries, Ontologies". *Perspectives on Global Development and Technology*, 12: 17-40. doi: 10.1163/15691497-12341240
- Taylor, Charles (2014). *La era secular* (Vol. I). Barcelona: Gedisa.
- Tschannen, Olivier (1992). *Les théories de la sécularisation*. Ginebra: Droz.
- Turner, Bryan S. (2010). Religion in a Post-secular Society. In: B. S. Turner (ed.). *The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Weber, Max (2012). *Sociología de la religión*. Tres Cantos: Akal.
- Zazo, Eduardo (2018). "Dos conceptos de la modernidad: religión y secularización". *Bajo Palabra*, 19: 149-170. doi: 10.15366/bp2018.19.007

RECEPTION: July 13, 2021

REVIEW: December 02, 2021

ACCEPTANCE: September 06, 2022

